

INSTITUCIONES
DE
DERECHO CANÓNICO

R-5999

INSTITUCIONES
DE
DERECHO CANÓNICO

POR EL ILMO. SEÑOR

DR. D. FRANCISCO GÓMEZ-SALAZAR,

OBISPO DE LEÓN.

TERCERA EDICIÓN
CORREGIDA Y AUMENTADA.



TOMO III.

— LEÓN: —
Imp. de Herederos de Miñón
1891.

Nm 4565

DERECHO CANONICO

DR. D. FRANCISCO GÓMEZ SALAZAR

*El Autor se reserva los derechos
concedidos por la Ley á la propie-
dad literaria.*

EDICIÓN DE LA BIBLIOTECA

TOMO III

CONTINUACIÓN DEL LIBRO TERCERO.

TÍTULO SEGUNDO

DIAS FESTIVOS.—AYUNOS.

CAPITULO I.

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS.

Etimología de la palabra feria, y sus distintos nombres.—El nombre *feria* procede de *hostiis feriendis*, porque se sacrificaban é inmolaban víctimas á los dioses, según Festo (1), en determinados dias, que por este motivo se llamaron *feria*.

Estos dias se conocían, también con los nombres de—

Dies feriati (dias feriados), á diferencia de los otros dias de la semana, que se denominan *communes* para distinguirlos de aquéllos.

Dies devotionum, porque muchas de las ferias se instituyeron con el fin de que el pueblo las empleara en la oración y en otras obras piadosas (2).

Dies nefasti, porque se prohíbe en tales dias proponer cosa alguna ó actuar en juicio, á diferencia de los demás dias que se

(1) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles univ.*, in lib. II Decret., tit. IX, pár. 1.º, número 1.º

(2) C. II, quest. 4.º, causa 15.

llamaban *fasti*, y en ellos podía el juez todo lo que se comprende en las palabras—*do, dico, ab dico*, lo cual se expresa por Ovidio en esta forma (1).

Ille nefastus erit per quem tria

Verba silentur:

*Fastus erit, per quem lege licebit
agi.....*

Significación dada por la Iglesia á la palabra feria.—La Iglesia llama *ferias* á todos los días de la semana, ménos el domingo, porque todos ellos deben ser ferias para los clérigos (2), distinguiéndose por el papa Honorio III el día festivo del feriado, llamando feria al día común de la semana, y festivo al dedicado á los divinos oficios.

Acepción en que se toma aquí.—La palabra feria se toma aquí por los días festivos, y todos aquellos en que están cerrados los tribunales, en cuyo sentido puede definirse: *Los días en que se cesa ó descansa de los negocios forenses y actuaciones judiciales.*

Sus especies.—Las ferias suelen dividirse en solemnes ú ordinarias—extraordinarias ó repentinas—sagradas—profanas—fijas—movibles—universales—particulares—de precepto—de devoción—de primero ó segundo orden.

Se entiende por fiestas solemnes, *las festividades establecidas por las leyes ó sagrados cánones que se guardan igualmente todos los años.*

Estas festividades se conocen también con el nombre de *statæ et anniversarie.*

Se llaman fiestas extraordinarias, *las festividades establecidas por circunstancias especiales y fuera del orden acostumbrado, como por la cesación de una peste, victoria alcanzada, coronación de un príncipe, etc.*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles.*, univ., in lib. II Decret. tit. IX, pár. 1.^o núm. 1.^o

(2) Cap. XI, tit. XLI, lib. III Decret.

Son fiestas sagradas, *las festividades establecidas para el culto de Dios y en honor de los Santos*, como los domingos y días de fiesta (1).

Se entiende por fiestas profanas, *las festividades establecidas en obsequio de los hombres y para su utilidad*, como las ferias de mieses y vendimias, de mercados y nupcias, etc.

Son fiestas fijas, *las festividades que se celebran todos los años en igual día*, como la Natividad del Señor, Circuncisión, Epifanía, las fiestas de la Virgen y de los Apóstoles.

Se llaman fiestas movibles, *las festividades que no se celebran en igual día de cada año*, siendo la más célebre entre éstas, y de la cual pende la movilidad de las demás, la festividad de la Pascua, que va precedida del ayuno cuadragesimal, debiendo celebrarse en el domingo que sigue inmediatamente á la luna 14 de Marzo después del equinoccio de la primavera (2).

Se entiende por fiestas universales, *las festividades que se celebran en todo el orbe cristiano*, como los domingos, Pascua, Pentecostés, etc.

Se llaman fiestas particulares *las festividades especiales á un reino ó nación, provincia, diócesis ó ciudad*, etc.

Son fiestas de precepto, *las festividades que llevan aneja la obligación de celebrarlas*.

Se entiende por fiestas de devoción, *las festividades que no llevan aneja la obligación de celebrarlas*.

Son fiestas de primer orden, *las festividades que llevan aneja la obligación de oír misa y abstenerse de obras serviles*.

Se llaman fiestas de segundo orden, *las festividades en que se puede trabajar y solo obligan á oír misa* (3).

Fin de su institución.—Todas las festividades han sido establecidas para traer á la memoria los divinos beneficios, dar culto á Dios y para nuestro consuelo.

(1) Ctp. V, tít. IX, lib. II *Decret.*

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. V, pár. 3.^o

(3) Breve de 2 de Mayo de 1867 sobre reducción de fiestas en España.

Además de este fin común, algunas de ellas, como las fiestas de los santos, se han establecido para tributar gloria á Dios por la victoria que estos alcanzaron con la gracia de nuestro divino Redentor, así como para que celebremos las alabanzas de los santos, promovamos el culto, nos protejan con su intercesión y nos movamos á imitar sus virtudes (1).

Existencia de los días festivos en todos los pueblos.—Todos los pueblos tuvieron sus días festivos, en los que tributaban homenaje y rendían culto á sus divinidades, como que la misma luz natural prescribe que se «dé culto externo y se den gracias, á quien piadosamente adoramos con interiores afectos, movidos de la fé y esperanza que tenemos depositada en él (2). Y como estas cosas no se pueden cumplir fácilmente por los que están metidos en las ocupaciones de negocios humanos; por esto se determinó cierto tiempo en que cómodamente puedan ejecutarse.»

Las Sagradas Escrituras hacen mención de la festividad del sábado y otras fiestas prescritas por el Señor al pueblo hebreo (3).

Días festivos entre los cristianos desde un principio.—Entre los cristianos se conocieron desde la edad apostólica muchos días festivos, como=

a) El domingo, primer día de la semana, en memoria de la Resurrección del Señor (4), á cuyo día se trasladó por los mismos Apóstoles la fiesta del sábado.

b) La Pascua de Resurrección.

c) La Ascensión y Pentecostés (5).

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special*, lib. II, tit. I, tract. 1.^o, dissert. 2.^a, cap. I, art. 3.^o

(2) *Catecismo Romano*, part. 3.^a, cap. IV, pár. 1.^o

(3) *Exod.*, cap. XVI, v. 23 y sig.—*Levitic.*, cap. XVI.—*Deuteron.*, cap. V, v. 12.—*Isaias*, cap. LVI, v. 2.^o.—*Jeremias*, cap. XVII, v. 22.—*Ezechiel*, capítulo XX, v. 12.

(4) *Catecismo Romano*, part. 3.^a, cap. IV.

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. V, pár. 1.^o

Otras festividades antiquísimas.—Se cuentan desde los primeros siglos otras festividades, como la Natividad del Señor, las de la Virgen, Apóstoles, mártires, confesores y otras muchas, que de continuo adoptaba la piedad y fervor de los fieles (1).

Autoridad que puede establecerlas.—Es indudable que la potestad temporal puede establecer fiestas profanas y mandar á sus súbditos que se abstengan en tales días del trabajo y obras serviles, imponiendo penas contra los trasgresores, porque estas festividades tienen un fin meramente político, que cae por lo mismo bajo la jurisdicción del poder civil.

Los protestantes sostienen esta misma potestad en el poder temporal, respecto á las fiestas sagradas, no faltando entre los católicos, quienes defiendan ser asunto propio de las dos potestades, ó en que debe intervenir el consentimiento del poder secular por el contacto que tienen las fiestas con el régimen civil (2).

La doctrina cierta y común entre los católicos niega al poder civil esta facultad, porque la institución de fiestas en honor de Dios y de los santos es cosa espiritual que pertenece á la religión y al culto divino; lo cual corresponde á los pastores de la Iglesia, y nó á los legos, que en estas materias son súbditos de aquella con obligación de cumplir sus mandatos (3); así que Inocencio X, en su Constitución *Cum nuper* de 1657, declaró nulo y de ningún valor el edicto del Senado y gobernador de Milán que prescribía la celebración de la fiesta de Santo Domingo (4).

Quién la ejerce en la Iglesia—Esta potestad de la Iglesia para establecer fiestas sagradas corresponde:

1.º Al Sumo Pontífice, supremo jerarca de ella, y él solo puede establecer fiestas universales que obliguen en toda la Igle-

(1) C. I, distinct. 3.ª *De Consecrat.*—Cap. V, tít. IX, lib. II *Decret.*

(2) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VII, cap. III, pár. 286.

(3) Cap. X, tít. II, lib. I *Decret.*—Cap. XII, tít. XIII, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus, Eccles. univ.*, in lib. II *Decret.*, tít. IX, párrafo 1.º, núm. 10 y sig.

sia; porque es el único que tiene jurisdicción espiritual en los cristianos de todo el orbe.

2.^o Los obispos tienen esta facultad (1) en cuanto á las fiestas particulares de sus respectivas diócesis (2); porque el obispo puede en su diócesis lo que el Papa en toda la Iglesia, á excepción de aquello que el Sumo Pontífice se haya reservado (3); debiendo advertirse en consecuencia de esto que=

a) El obispo habrá de tener á la vista la constitución de Urbano VIII, que amonesta á los obispos para que se abstengan de establecer nuevas fiestas (4).

b) La canonización y beatificación está reservada á la Santa Sede (5), y por esta razón los obispos no pueden instituir fiestas de santos que no estén canonizados (6).

c) Es necesario que el obispo proceda á este acto con el consejo y consentimiento del clero y asistencia del pueblo (7).

3.^o Esta misma facultad corresponde á los Concilios generales, nacionales y provinciales; pero el derecho de los concilios nacionales y provinciales está sujeto á las limitaciones que se dejan señaladas respecto á los obispos.

4.^o La mera costumbre de los legos no puede producir obligación de observar la fiesta de un santo, á menos que medie el consentimiento de quien puede establecer las fiestas, porque se trata de una ley, y como tal ha de reunir las circunstancias necesarias para que produzca obligación.

Tiempo en que empieza y termina la festividad.

—Las fiestas sagradas comprenden el espacio que media de

(1) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XII *De Regul.*

(2) C. I, dist. 3.^a *De Consecrat.*—Cap. V, tít. IX, lib. II *Decret.*

(3) Cap. IV, tít. VIII, lib. I *Decret.*—Cap. XIII, tít. I, lib. II *Decret.*

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. V, pár. 5.^o

(5) Cap. I, tít. XLV, lib. III *Decret.*

(6) HUGUENIN: *Exposit. Meth. Jur. Canon. pars special.*, lib. II, tít. I, tract. I, dissert. 2.^a, cap. I, art. 3.^a

(7) SCHMÄLZGRUBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. II *Decret.* tít. IX, pár. 1.^o número 14.

vísperas á vísperas del día siguiente (1), no sólo en cuanto á los divinos oficios, sinó en la cesación de obras serviles; pero la costumbre universal y la práctica de la Iglesia ha establecido, que la cesación de obras serviles sea desde la media noche hasta la del día siguiente, ó sea el día natural de veinticuatro horas (2).

Obligaciones que impone.—Los fieles tienen obligación, durante la festividad, de observar lo siguiente:

a) Oír misa entera, á ménos que medie impotencia física ó moral (3), y además habrán de emplear el día en las divinas alabanzas, preces y otros oficios religiosos (4).

b) Abstención de obras serviles (5), las cuales se llaman así, porque entre los romanos se ejercían principalmente por los siervos (6), y son las que ceden en utilidad y comodidad próxima é inmediata del cuerpo, á diferencia de las obras *liberales*, que se ejercen más bien con las potencias del alma que con las del cuerpo, y éstas no están prohibidas en los días festivos.

c) *Mercatus*, ó sea la compra, venta, etc., las ferias ó mercados (7); pero esto ha sido derogado en gran parte por costumbre contraria y consentimiento de la autoridad eclesiástica (8).

d) *Furamento* aun *extrajudicial* (9), á menos que excuse la necesidad, entendiéndose por tales palabras aquellos juramentos, que intervienen en los contratos y negocios prohibidos.

(1) Cap. I, tít. IX, lib. II *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. II *Decret.*, tít. IX, párrafo 1.º, núm. 16.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 2.º, núm. 22.

(4) *Catecismo Romano*, part. 3.º, cap. IV, pár. 25.

(5) Cap. III, tít. IX, lib. II *Decret.*

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. V, pár. 7.º

(7) Cap. I, tít. IX, lib. II *Decret.*

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 23.

(9) Cap. I, tít. IX, lib. II *Decret.*

e) *Placitum*, cuya palabra expresa la prohibición de entender en toda causa judicial ó forense (1), si no media una necesidad.

f) *Las causas criminales*, ya se trate de aquellas en que se impone la pena de muerte, ya de las que tienen por objeto otra pena corporal ó pecuniaria (2), y la sentencia que se pronuncie en tales días no sólo es ilícita, sinó nula (3), á ménos que medie una verdadera necesidad (4).

Si se podrá trabajar en los días festivos mediante necesidad.—Es lícito trabajar y ejecutar obras serviles ó trabajos corporales (5) en día festivo, siempre que medie verdadera necesidad, y por esto dice el Catecismo Romano: «Tampoco se ha de juzgar que estén vedadas por esta ley las obras de aquellas cosas que se perderían si se dejaran en el día de fiesta (6):» pero si esta causa de necesidad se halla prevista, entonces habrá de acudir al superior en solicitud de dispensa (7).

A quién compete la reducción ó supresión de fiestas sagradas.—La supresión ó reducción del número de fiestas universales y de observancia general en la Iglesia compete al Sumo Pontífice ó Concilio Ecuménico únicamente, porque se trata de una ley general.

En cuanto á las fiestas particulares, corresponde también esta facultad á los obispos diocesanos, concilios provinciales ó nacionales, según que se hayan establecido por aquéllos ó éstos con arreglo al principio, de que *cujus est tollere, ejus est condere* (8).

(1) Cap. I y V, tít. IX, lib. II *Decret.*

(2) Cap. I, tít. IX, lib. II *Decret.*

(3) Cap. V, tít. IX, lib. II *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. II *Decret.*, tít. IX, párrafo 2.º, núm. 51 y sig.

(5) Cap. I y V, tít. IX, lib. II *Decret.*

(6) Parte 3.ª, cap. IV, pár. 23.

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., número 22.

(8) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XIII, cap. XVIII, núm. 10 y siguientes.

Si los fieles tendrán también esta facultad.—Los fieles no pueden á su arbitrio renunciar á las festividades sagradas, porque han sido establecidas en honor de Dios, y en consideración al bien público, ya sean solemnes ú ordinarias, ya repentinas ó extraordinarias.

Respecto á las ferias rústicas, como la de vendimias y recolección de mieses, que han sido otorgadas en favor de los litigantes, pueden éstos renunciar á su derecho (1).

En cuanto á las fiestas meramente civiles, claro es que pueden reducirse ó suprimirse por las personas ó corporaciones que las han introducido.

Reducción de fiestas en España.—Su Santidad redujo las fiestas de primero y segundo orden á petición del gobierno de España en Breve de 2 de Mayo de 1867, al que siguió para su exacto cumplimiento la R. O. de 26 de Junio de 1867, debiéndose tener presente para las provincias de Ultramar el Real Decreto de 13 de Agosto de 1877. (2).

CAPÍTULO II

AYUNOS.

Significado de la palabra ayuno y su definición.—La palabra ayuno significa abstinencia, y en su sentido lato se toma por la abstinencia de la iniquidad y de todos los placeres ilícitos (3).

Se entiende por ayuno en su sentido propio, *La abstinencia de comidas, ó la tasa en la cantidad ó calidad de la comida.*

Origen del ayuno.—Los ayunos pertenecen á los oficios religiosos de los cristianos, como la celebración de las fiestas, y

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. II Decret., tit. IX, pár. 1.º, núm. 20 y sig.

(2) Vease el apéndice núm. 1.º

(3) C. XXV, distint. 5.ª *De Consecrat.*

traen su origen de los judíos, así como del ejemplo de Jesucristo y sus discípulos.

Se introdujeron en la Iglesia, como medio de excitar y sostener el espíritu de penitencia, devoción y abnegación (1), habiéndose convertido en obligación religiosa por la costumbre y ley escrita.

Sus especies.—El ayuno se divide en *natural—moral—libre—eclesiástico*.

Se entiende por ayuno natural, *La absoluta abstinencia de comida y bebida*.

Este ayuno es de necesidad desde las doce de la noche á los que hayan de celebrar ó comulgar al día siguiente.

Se llama ayuno moral, *La moderación en el uso de la comida y bebida, según las reglas de la prudencia*.

Este ayuno debe observarse siempre (2).

Se entiende por ayuno libre, *La abstinencia según la recta razón y por motivo de alguna virtud, sin que medie obligación de precepto*.

Este ayuno puede ser vario según la intención del que lo practica.

Es ayuno eclesiástico, *La abstinencia según la forma prescrita por la Iglesia*.

Ayuno eclesiástico, y en qué consiste.—El ayuno eclesiástico suele definirse: *La abstinencia de carne y abstención hasta el día siguiente de toda comida después de la cena ó comida única del día*.

De esta definición resulta que el ayuno eclesiástico, del que se trata en este capítulo, consiste en—la abstinencia de carnes—una comida—tiempo en que ha de tener lugar.

Su distinción de la abstinencia.—La abstinencia es una parte del ayuno, y consiste únicamente en no comer carnes y ser parco en los manjares; así que no se falta á ella por comer

(1) WALTER: *Derecho Ecles, univ.*, lib. VII, cap. III, pár. 284.

(2) C. XVIII, XIX y XX, distinct. 5.^a *De Consecrat.*

ó tomar alimento á cualquier hora del día; pero el ayuno requiere la abstinencia de carnes, una sola comida al día y hora determinada en que aquélla ha de tener lugar.

Fin del ayuno, y deberes que impone.—La Iglesia se propone por medio del ayuno, que demos gracias al Señor por los beneficios recibidos, imploremos sus divinos auxilios, expiemos nuestros pecados y alcancemos buenos ministros del altar (1).

Las obligaciones que se imponen en el ayuno eclesiástico pueden resumirse en lo siguiente:

1.º Abstinencia de carne (2), que se observa siempre en todos los días de ayuno, y bajo la palabra carnes se comprende todo lo que trae origen de la carne, como huevos, leche, queso (3).

Los fieles se abstenían también en los primeros tiempos de la Iglesia hasta del agua y del vino; pero en la actualidad no se quebranta el ayuno por las bebidas, á ménos que sean de aquellas nutritivas que pueden ser consideradas como comida, hallándose en este caso la leche, caldo, etc. (4).

2.º Única comida, cuya obligación trae origen de una costumbre universal, antiquísima y contemporánea á los mismos Apóstoles, porque habiéndose introducido el ayuno para mortificar el cuerpo, era preciso privarlo de la múltiple alimentación y consentir únicamente una sola comida para evitar su decaimiento y destrucción (5).

3.º Hora determinada. La única comida que se permite en los días de ayuno, tenía lugar en otros tiempos después de vísperas, ó á la puesta del sol, en la cuaresma (6), y fuera de ella á la hora de nona, que corresponde á las tres de la tarde; pero se

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VI, pár. 4.º

(2) C. IV, distinct. 4.ª—C. XI, distinct. 3.ª *De Consecrat.*

(3) Cap. VI, distinct. 4.ª

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. III Decret.*, tít. XLVI, número 4.º

(5) SANTO TOMÁS: *Summa Theolog. secunda secundæ*, quæst. 147, art. 6.º

(6) C. I., distinct. 1.ª *De Consecrat.*

introdujo, en tiempos posteriores, la costumbre legítima de que la comida se hiciera al medio día, sin que por esto se entienda que no puede dilatarse, y sí únicamente se prohíbe anticiparla notablemente, á ménos que medie causa honesta, porque en este caso puede hacerse lícitamente (1).

Colación, y hora en que ha de tomarse.—Como se introdujo la costumbre de anticipar la cena, ó sea lo que efecto de esta alteración pasó á denominarse comida, vino la práctica de tomar alguna cosa por la noche, porque mediando tantas horas desde la comida hasta el tiempo de acostarse, habría dificultad en conciliar el sueño, siendo consecuencia de esto alguna alteración en la salud.

A este ligero alimento se dá el nombre de colación, que ha de ser parca en la cantidad, y respecto á la calidad se requiere que consista en pan, frutas, verduras ó legumbres (2).

La colación se tomaba por la noche, poco ántes de acostarse; pero puede también tomarse al medio día, dejando la comida para la noche, si media causa justa y razonable; y en este sentido contestó la sagrada Penitenciaría en 19 de Enero de 1834 (3).

Días de ayuno.—Los ayunos se hallan prescritos por=
Ley general, como los de cuaresma, cuatro témporas, y vigiliias.

Ley especial, respecto á ciertos lugares ó personas, como los mandados por el obispo en su diócesis, y los que se hacen por voto ó se imponen á los penitentes en satisfacción de sus pecados, ó como medicina.

Ayunos prescritos por ley general.—Respecto á los ayunos generales y solemnes entre los cristianos, me limito á las indicaciones siguientes:

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XLVI, núm. 21 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid, núm. 25 y sig.

(3) *Acta ex iis decreta, quæ apud Sanctam Sedem geruntur*, tom. 1.^o, página 424.

I. El ayuno cuadregesimal, que fué establecido por los Apóstoles, á ejemplo de Jesucristo, Elías y Moisés, que ayunaron cuarenta días, y tiene lugar antes de la Pascua (1).

Este ayuno comprende cuarenta días, que empiezan el miércoles de ceniza y concluyen el sábado santo, porque los cristianos no ayunan el Domingo, en memoria de la Resurrección del Señor, y con arreglo á la antigua costumbre.

II. El ayuno de las ferias cuarta, sexta y sábado de las cuatro témporas, que tienen lugar—al principio de cuaresma—después de Pentecostés—en el mes de Septiembre—y en el mes de Diciembre.

Los Apóstoles instituyeron parte de estos ayunos, y los restantes son de institución antiquísima y de los tiempos apostólicos (2).

III. La Iglesia honra con ayunos las vigiliass de las principales festividades del año, como son:

- a) La Natividad del Señor y Pentecostés.
- b) Asunción de la Virgen y las de los Apóstoles (3).
- c) S. Juan Bautista y S. Lorenzo.
- d) La festividad de todos los Santos.

IV. El ayuno de las ferias cuarta y sexta de cada semana, que data desde los primeros siglos de la Iglesia (4) y se prescribió, porque los judíos determinaron en la primera dar muerte al Salvador, y en la segunda lo llevaron á ejecución (5).

El ayuno de la feria cuarta ha cesado por costumbre, y el de la feria sexta quedó reducido á la abstinencia de carnes.

V. El ayuno del sábado se practicó en la Iglesia romana y

(1) DEVOTI: *Instit. Canon.*, lib. II, tit. VI, pár. 2.º

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XLVI, número 32.

(3) Caps. I y II, tit. 46, lib. III *Decret.*

(4) C. XI, distinct. 3.ª *De Consecrat.*—Cap. III, tit. XLVI, lib. III *Decret.*

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VI, pár. 3.º

otras de occidente desde la más remota antigüedad en honor de la sepultura de Cristo y de la Santísima Virgen (1).

Este ayuno ha quedado reducido á mera abstinencia (2).

VI. El ayuno de adviento se observó en la Iglesia romana (3), y queda de él algún vestigio en el rito del Breviario Romano, y en la reglas de algunas órdenes religiosas (4).

Vigilias en su origen.—Las vigilias eran las reuniones nocturnas que tenían los cristianos en las iglesias las vísperas de las festividades principales, para la celebración de los divinos oficios, y duraban la mayor parte de la noche, por cuya razón se les dió el nombre de *pernoctationes* y *pervigiliæ*.

Estas reuniones han cesado por completo (5), y sólo queda de ellas el ayuno, que tiene lugar en algunas vigilias.

Reducción de ayunos en España.—Efecto de la reducción de fiestas en España por Breve de 2 de Mayo de 1867 quedaron suprimidos los ayunos en las vigilias de las fiestas abrogadas trasladándose á los viernes y sábados de adviento, según se previene en dicho Breve.

Obligación que impone el precepto del ayuno.—La obligación del ayuno es grave por su naturaleza; así que los cánones llamados de los Apóstoles imponen á los trasgresores la pena de excomunión, si son legos, y la de deposición si son clérigos (6), y el Concilio de Trento exhorta á los obispos para que recomienden y hagan que se observe este mandato (7).

A quiénes se extiende.—Este precepto comprende á todos los que no se hallen exentos de su observancia por alguna de las causas siguientes:

- (1) C. XIII, distinct. 3.^a *De Consecrat.*—C. XXXI, distinct. 5.^a *De Consecrat.*
- (2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VI, pár. 3.^o
- (3) Cap. II, tít. XLVI, lib. III *Decret.*
- (4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Ecclæs. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLVI, número 35.
- (5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VI, pár. 5.^o
- (6) Canon 68.
- (7) Sesión 25, *De Reformat. Decret. de delectu cibor., jejun. et diebus festis.*

Edad. Los que no hayan cumplido veintinueve años ó sean mayores de sesenta ó setenta; pero no se eximen del ayuno prescrito en la concesión del jubileo, si han de ganar las indulgencias concedidas por la Santa Sede (1).

Enfermedad corporal, en cuyo caso se hallan los convalecientes, las personas de complexión delicada, etc. (2).

Necesidad, proveniente de pobreza (3), en cuyo caso se hallan los mendigos.

Trabajo corporal, que no es compatible con el ayuno, hallándose comprendidos en esta exención los labradores, viajeros, albañiles, herreros, etc.

Piedad, y se comprende en esta exención los que se emplean en obras corporales ó espirituales de misericordia ó caridad, porque no conviene que el ayuno sea causa para impedir un bien mayor espiritual (4).

Costumbre, siempre que sea legítima (5).

Dispensa, que puede concederse por el Sumo Pontífice en toda la Iglesia y por los obispos en sus respectivas diócesis mediante causa, y sin que se extienda á todos sus súbditos; cuya facultad pasa al cabildo ó vicario capitular, *sede vacante*.

Entre estas dispensas es muy notable la bula de la Cruzada, cuyas gracias y privilegios son extraordinarios (6).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLVI, núm. 42.

(2) C. XVI, dist. 5.^a *De Consecrat.*—Cap. II, tít. XLVI, lib. III *Decret.*

(3) Cap. II, tít. XLVI, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 46.

(5) Cap. II, tít. XLVI, lib. III *Decret.*

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VI, párr. 8.^o

TÍTULO TERCERO.

COSAS SAGRADAS Y BENDITAS.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LAS IGLESIAS Y SU ERECCIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO.

DE LAS IGLESIAS EN GENERAL.

Iglesia, y sus distintos nombres.—La palabra iglesia tiene varias acepciones, según se deja consignado en otro lugar de esta obra (1); pero se toma aquí en su sentido material, y puede definirse: *El lugar ó edificio sagrado en donde se reúnen los fieles para celebrar las divinas alabanzas y recibir los santos sacramentos.*

La iglesia en la acepción expresada tenía los nombres siguientes:

Orarium, ó sea el lugar en que se dirigen las preces al Señor (2).

Dominicum, ó sea casa de Dios (3).

Basilica, ó sea las casas dadas por los emperadores á los cristianos para sus reuniones.

Templo, de cuyo nombre no usaron los cristianos al principio, porque era propio de las reuniones religiosas de los gentiles (4).

(1) Lib. II, tít. I, cap. I, art. 1.º

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VII, párrafo 2.º

(3) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, cap. II, pár. 210.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VII, pár. 2.º

Tituli, ó sean los lugares consagrados á Dios, que tenían sacerdotes y ministros adscritos á los mismos.

Propheteum — *apostoleum* — *martyrium*, según que se habían edificado á la memoria de algún profeta, apóstol ó mártir (1).

Ecclesia, ó sea el lugar en donde los fieles se reúnen para tributar á Dios el homenaje debido, y éste es el nombre que ha prevalecido sobre los demás.

Sus especies.—Las iglesias se distinguen en las especies siguientes:

I. Por razón de la dignidad y preeminencia en=

Basílicas, que son las iglesias principales, á las que acudían los príncipes para asistir á los divinos oficios.

Las basílicas se dividían en=

Mayores, que son las de Letrán, Vaticana, San Pablo y Santa María la Mayor en Roma, que representan las cuatro primeras iglesias patriarcales de Roma, Constantinopla, Alejandría y Antioquía (2).

Menores, y son las que han obtenido este título del Romano Pontífice: de estas hay muchas en Roma y en otros países, las cuales tienen varios privilegios (3).

II. Por razón de los rectores de ellas en=

Iglesias patriarcales — *primaciales* — *metropolitanas* y *catedrales*.

III. Por razón de las funciones propias de cada una en=

Colegiatas, que son *insignes* y *no insignes* (4) — *parroquiales* — *regulares* ó *conventuales* y de *cofradías* ó *hermandades*.

IV. Se dividen también en=

Matrices y *no matrices*, según que de ellas proceden ó no proceden otras.

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, ibid.

(2) *Praelect. Jur. Canon.*, in *seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 3.^a, art. 1.^a, pár. 4.^o, núm. 562.

(3) *Praelect. Jur. Canon.*, in *seminar. S. Sulpit.*, ibid., núm. 563.

(4) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XII y XV *De Reformat.*

Capillas públicas, entre las cuales sobresalen las de los reyes—y *capillas privadas* ú *oratorios*.

Las iglesias en un principio y en tiempos posteriores.—Era natural que las primeras iglesias entre los cristianos fuesen reducidas, pobres y sencillas, si se tiene en cuenta la situación del cristianismo con respecto á los poderes temporales en los tres primeros siglos.

Quando la Iglesia dejó de ser perseguida y los emperadores abrazaron el cristianismo, entónces se aumentó extraordinariamente el número de iglesias: porque los cristianos adquirieron facultad para construirlas.

Los emperadores á su vez construyeron muchas: mandaron que se convirtieran en iglesias los templos de los gentiles, y dotaron con magnificencia las iglesias del verdadero Dios (1).

Su forma en la antigüedad.—La antigua forma de las iglesias no era igual en todas ellas, así que unas eran largas y estrechas, á manera de nave, otras redondas ó de muchos lados, en forma de cruz.

El frontis de las mismas miraba á Occidente, y el santuario al Oriente, porque los cristianos acostumbraban á orar mirando al Oriente; pero era muy frecuente que no revistieran ninguna de estas formas, y se construyesen en cualquier sitio y forma (2).

Partes interiores de que se componían.—Las iglesias, principalmente las mayores, constaban de muchas partes interiores, que se hallaban incluídas dentro de sus paredes, y eran—el *vestíbulo* (narthex)—el *templo*—y el *santuario* (bema).

Forma del vestíbulo, y quiénes se colocaban allí.—El vestíbulo era un edificio largo y angosto, á manera de férula, colocado inmediatamente después de la puerta.

Allí se quedaban los infieles, herejes, catecúmenos y los penitentes llamados *oyentes*, miéntras las sagradas lecciones y pláticas.

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VII, pár 3.º

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. VII, pár. 4.º

Nave, y á quiénes se admitía en esta parte de la iglesia.—Seguía después aquella parte de la iglesia que se llamaba templo ó nave, y era generalmente cuadrada.

Se hallaba separada del vestíbulo por una verja de madera, que llamaban puertas *regias et speciosas*, porque se entraba por ellas al real palacio de Dios, ó sea á la iglesia, ó porque los reyes deponían allí sus coronas cuando entraban en el templo.

En la parte inferior de la nave, que era la más próxima al vestíbulo, se colocaban los penitentes sustractos (*substrati*) y en la parte superior de la misma nave, que era la más próxima al santuario, se colocaban los consistentes (*consistentes*) mientras la Misa, y delante de ellos los fieles, hallándose separados por una balaustrada de madera los hombres de las mujeres.

También se colocaban en distinto lugar las vírgenes y las casadas, los monjes y seglares (1).

En medio de la nave estaba la tribuna, á la cual se ascendía por unas gradas, y allí se colocaban los cantores y lectores que leían las Epístolas y el Evangelio, recitándose desde el mismo lugar, que también se llamaba púlpito y tribunal, (*ambo*) las dipticas (*diptycha*).

Santuario, y quiénes podían colocarse en este lugar.—La parte tercera, que era la más elevada y santa de la iglesia, la constituía el santuario, llamado por los griegos *bema*, y estaba separado de la nave por un enrejado, no siendo permitido á los legos penetrar en ella mientras los sagrados oficios.

La parte suprema del santuario se llamaba *apsis*, y tenía la forma de un semicírculo. Allí estaba colocado el trono del obispo y los asientos de los presbíteros (2).

Altar, y su materia.—El altar, llamado también *ara*, *mesa sagrada* y *sanctum-sanctorum*, se hallaba colocado en medio del santuario, y separado de la pared.

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, pár. 10.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II tit. VII, pár. 11.

Los altares eran en un principio de madera; después se construyeron de piedra, hallándose cubiertos en muchas partes de oro y plata.

Número de ellos en cada iglesia, y su ornato.—En las iglesias de los griegos solía colocarse un solo altar; pero entre los latinos se acostumbró desde la más remota antigüedad á poner muchos altares en una misma iglesia (1).

El altar se hallaba cubierto con una sabanilla; en medio de él había una cruz, y junto á la cruz por uno y otro lado los candelabros, que se hallaban encendidos mientras se celebraba el santo sacrificio.

Imágenes y pinturas en las iglesias.—La persecución de que fué objeto la Iglesia en los primeros siglos, fué causa de que no abundaran las imágenes en las iglesias (2), sin que por esto se entienda, que fué desconocido su uso entre los cristianos, porque se demuestra lo contrario por innumerables monumentos de la antigüedad (3); pero después que la Iglesia fué considerada como sociedad lícita en el estado, y que el culto de los ídolos y la idolatría desapareció en casi todas partes, creció extraordinariamente el número de imágenes, pinturas y estatuas en las iglesias, como el medio más á propósito para excitar la piedad de los fieles, y traerles á la memoria las grandes virtudes de aquellos, cuyas imágenes tienen á la vista para su imitación.

Partes exteriores de las iglesias.—Se llaman así aquellos edificios que no se encuentran incluidos dentro de las paredes de la iglesia, extrictamente dicha, pero que pertenecen á ella.

Estas partes exteriores eran: *exterior narthex*, que comprendía el *vestíbulo* y atrio ó *area*—y las *Exedras* (pórticos).

El vestíbulo era la primera entrada, y entre él y la primera

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, pár. 12.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, pár. 13.

(3) PERRONE: *Prælect. Theolog.*, *De cultu Sanct.*, cap. V.

parte interior (*narthex sive ferula*), se hallaba el atrio y era un edificio, cuyo centro estaba descubierto, uniéndose sus lados por cuatro pórticos.

Había en medio del atrio unas fuentes, pozos, conchas ú otros depósitos de agua, donde los cristianos se lavaban manos y cara al entrar en la iglesia, de lo cual trae su origen el uso del agua bendita (1).

Exedras (pórticos), con cuyo nombre se designaban los demás edificios que estaban alrededor de la iglesia (2), y eran lugares de quietud y descanso, como el—*baptisterium*—*secretarium* ó *diaconicon*—*pastophorium*—*schola*—*bibliotheca*.

El *baptisterium* era un edificio espacioso, que constaba de dos partes, ó sea del vestibulo en donde los catecúmenos hacían su profesión de fé, y el lugar interior en donde se hacía la ablución con los demás ritos prescritos para el bautismo (3).

El *secretarium* era el lugar en donde se guardaban los vasos, ornamentos sagrados y todo lo demás perteneciente al culto (4).

La palabra *pastophorium* tiene varias acepciones, pero significaba ordinariamente los edificios que se hallaban á uno y otro lado de la iglesia á su extremidad oriental, y eran las habitaciones de los guardas y ministros del templo.

La escuela y biblioteca era el lugar destinado á la enseñanza común.

Forma moderna de las iglesias.—La exposición hecha de la antigua forma de las iglesias y de sus partes, da desde luego á conocer la diferencia entre aquéllas y las de nuestra época. Las iglesias en general solo constan en la actualidad de dos partes, que son: la nave y el santuario, en el cual se halla colocado el altar mayor, y allí el presbiterio y el coro en muchas iglesias, de modo que están confundidos.

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, pár. 14.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. V, pár. 55.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, ibid., pár. 15.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, ibid.

La nave de la iglesia abunda ordinariamente en altares á uno y otro lado, y el púlpito, que también suele hallarse en la nave, solo puede servir para la predicación de la divina palabra. En la parte interior de la iglesia está el bautisterio, que es un pequeño receptáculo de agua, trasladado de las antiguas exedras á la iglesia.

Muy pocas iglesias tienen atrio; pero éste se halla cubierto, y no hay fuentes en él. Todas las iglesias tienen sacristía, en la que se guardan los ornamentos sagrados y otros objetos destinados al culto.

También se halla en las iglesias de nuestros tiempos una torre para las campanas (campanario), de las que se sirven para anunciar las festividades y celebración de los divinos oficios.

Por último, debo advertir que hoy no se observa una forma determinada en la construcción de los edificios para el culto, y que los existentes ofrecen una gran variedad en las partes componentes de los mismos, de manera que no es posible hacer una descripción exacta de ellos.

En todo caso se cuidará que tenga la forma de nave, según la práctica observada desde los primeros tiempos de la Iglesia, porque se expresa de este modo, que colocados en este mundo como en medio de un mar tempestuoso, fluctuamos entre los peligros de la vida en dirección al puerto de nuestra salvación eterna (1).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. III Decret.*, tit. XLVIII, párrafo 1.º, núm. 31.

ARTÍCULO II.

DE LA LICENCIA NECESARIA

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS.

Licencia necesaria para la erección de iglesias.—

Aunque la edificación de iglesias es un acto laudable y que recomienda desde luego la piedad del que le practica, no puede ejercitarse á su arbitrio por los fieles, porque esto traería no pocos inconvenientes; y de aquí que no pueda construirse una nueva iglesia sin licencia de la autoridad eclesiástica competente, según repetidas disposiciones legales (1).

Como son muchas las especies de iglesias, según se deja consignado, de aquí que sean distintas las autoridades eclesiásticas á quienes corresponde conceder su licencia para la construcción de aquéllas; y al efecto se pasa á tratar de este asunto en particular.

Erección de iglesias catedrales.—Bajo el nombre de iglesia catedral se comprende aquí no sólo las simples catedrales, sino también las iglesias metropolitanas, primaciales y patriarcales; porque una es la condición de todas ellas respecto á la autoridad que ha de conceder su erección, y cada una de ellas tiene aneja á sí la cátedra del propio prelado.

Sólo el Sumo Pontífice puede conceder la erección de iglesias catedrales, porque á él corresponde únicamente la erección de obispados, y estas dos ideas se hallan tan unidas y conexas entre sí, que no existe obispado sin iglesia catedral ú obispo sin cátedra; así que el Sumo Pontífice siempre que erige un obispado señala territorio, pueblo y la iglesia que ha de ser la principal ó cátedra del futuro obispo, con arreglo á las disposi-

(1) C. IV, V, VI y IX, *distinet.* 1.^a *De Consecrat.*—C. III, *quest.* 5.^a, *causo* 16.—Cap. IV, tit. VII, lib. V *sext. Decret.*

ciones canónicas (1), de lo cual ofrece muchos ejemplos la historia contemporánea.

Causas para su concesión.—El Sumo Pontífice no concede la erección de una iglesia catedral, sin que medie alguna de las causas que motivan la creación de una nueva diócesis, como —el aumento del culto divino y— la necesidad ó gran utilidad de las almas.

Como la erección de una catedral es causa mayor, requiere por lo mismo razones poderosas al efecto, y se halla dispuesto, que no tenga esto lugar sinó en las ciudades ó poblaciones de gran importancia, á fin de que la dignidad episcopal no se envilezca (2); lo cual no es regla inflexible, porque si la necesidad ó evidente utilidad de la Iglesia reclaman otra cosa, á juicio del Romano Pontífice, es indudable que procedería la erección de iglesia catedral en una pequeña población, y esto suele tener lugar en pueblos recién convertidos á la fé y países nuevamente descubiertos.

Si será necesaria la licencia pontificia para la erección de colegiatas.—Los canonistas se hallan divididos acerca de este punto, porque no existe texto alguno en el derecho, que expresamente resuelva esta cuestión; pero es preferible la opinión de los que sostienen como necesaria la autorización y licencia del Sumo Pontífice, puesto que se halla fundada en decisiones de la sagrada Rota Romana y en muchas declaraciones emanadas de la congregación de obispos (3).

Causas en que ha de fundarse.—La erección de una colegiata no debe concederse, sinó mediante causa justa, ó sea el aumento del culto divino y la utilidad de los fieles; así que el Papa suele acceder á su erección cuando concurren:

a) La dignidad del lugar, como si es ciudad ó población insigne.

(1) Cap. I, tit. IX, lib. III *Decret.*—Cap. IV, tit. XXX, lib. I *Decret.*

(2) Cap. III y IV, distinct. 80.

(3) *Inst. Jur. Canon.* por R. de M., part. 2.^a, lib. I, cap. II, art. 1.^o, pár. 1.^o

b) Docilidad, piedad y concurrencia del pueblo, principalmente de clérigos.

c) Estructura y amplitud de la iglesia que se desea erigir en colegiata.

d) Abundancia y preciosidad de ornamentos sagrados.

e) Dote para las prebendas de canónigos que se consideren necesarias, según la calidad del lugar y costumbre de las demás colegiatas de la misma provincia.

f) Si las condiciones de la fundación y erección no son exorbitantes *a jure*.

g) Si no se origina perjuicio a tercero.

h) Si el obispo de la diócesis aprueba y recomienda su erección.

Cuando median las causas indicadas, el Sumo Pontífice suele conceder dicha erección mediante voto favorable de la sagrada congregación del Concilio (1).

Quiénes pueden autorizar la erección de iglesias regulares—Una iglesia regular supone casa ó convento de religiosos, para cuyo uso sirva, y no puede erigirse aquella sin la competente licencia (2) del obispo ú ordinario del territorio (3) y de la Santa Sede, según se deja manifestado en otro lugar de esta obra (4).

Licencia del obispo para la erección de iglesias parroquiales.—Iglesia parroquial es: *La que tiene pueblo y territorio demarcado con un rector propio bajo la dependencia y autoridad del obispo.*

La erección de parroquias no puede hacerse sin consentimiento y licencia del obispo ó su vicario con licencia especial para ello (5).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. I, cap. II, art. 1.^o, párr. 1.^o

(2) Cap. IV, tít. VII, lib. V *sext. Decret.*

(3) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. III *De Regul. et Monial.*

(4) Lib. II, tít. VII, cap. III.

(5) C. XI, quest. 7.^a, causa 16.—*Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XIII, *De Reformat.*

Causas necesarias para ello en la erección por creación.—El obispo tiene el derecho y á la vez la obligación de erigir iglesias parroquiales, siempre que la necesidad ó utilidad de la Iglesia lo reclame, bastando al efecto—

a) Territorio competente.

b) Pueblo para formar parroquia con la debida dote, si se trata de la erección por creación (1).

Requisitos necesarios para erigirse por división.

—Cuando se haya de erigir parroquia dentro de los límites de otra, ó sea por división, no basta generalmente que haya crecido número de fieles (2); es necesario que además medie alguna causa ó necesidad á la que el párroco no pueda atender fácilmente por sí, ni por medio de sus auxiliares, y esto tiene lugar:

a) Si existe gran dificultad en los feligreses para acudir á la parroquia, ó al rector de ella por la distancia ó algún otro impedimento (3), como si hubiere un río ó torrente intermedio, que no admitiese puente y no pudiera vadearse en ciertas épocas del año (4).

b) Cuando muchas familias de la feligresía viviesen fuera de las murallas de la población, dentro de la cual está la parroquia.

c) La existencia de muchos leprosos en la feligresía, etc.

Oratorios públicos.—Se llama así: *La iglesia destinada perpetuamente por autoridad competente para el culto de Dios, y que tiene libre entrada y salida á la vía pública.*

Los oratorios que no tienen libre entrada ni salida á la vía pública, pero que sirven para utilidad de un colegio, cárcel ú

(1) *Inst. Jur. Canon*, por R. de M., part. 2.ª, lib. I, cap. II, art. 1.ª; párr. 4.ª

(2) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

(3) Cap. III, tít. XLVIII, lib. III *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLVIII, párrafo 1.ª, núm. 11.

hospital, se asimilan á los oratorios públicos, y como tales se reputan (1).

Quién puede autorizar su erección, y mediante qué causas.—Los oratorios públicos no pueden construirse sin licencia y autoridad del obispo (2).

El obispo podrá conceder su permiso:

1.^o Si tiene por objeto el aumento del culto divino y nó el interés material.

2.^o Si cuenta con la dotación necesaria para el sostenimiento de los ministros y con todos los objetos que se requieren para el culto divino (3).

3.^o És además necesario, que no resulte perjuicio á tercero ó á otra iglesia (4).

Oratorios privados, y quién puede erigirlos.—Se entiende por oratorios privados: *Los lugares, que sin tener comunicación á la vía pública, ni ser de libre acceso al público, están destinados al culto divino, á voluntad de los particulares, para satisfacer allí su piedad y devoción.*

Todos los fieles tienen facultad para erigir en sus casas estos oratorios, en donde puedan orar (5); pero si tratan de que allí se celebre el santo sacrificio de la Misa, necesitan licencia de la autoridad eclesiástica.

A quién corresponde dar su licencia para que pueda celebrarse en ellos el santo sacrificio.—El obispo podía, según la legislación antigua, conceder que se celebrase el santo sacrificio de la Misa en estos lugares privados (6), y los regulares dominicos y franciscanos podían, en virtud de sus privilegios, celebrar sobre altar portátil en cualquier lugar (7).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. I, cap. II, art. 1.^o, pár. 5.^o

(2) C. IX y X, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(3) C. IX, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(4) Cap. I, tít. XXXII, lib. V *Decret.*

(5) C. XXXIII, distinct. 1.^a *De Consecratione.*

(6) C. XII, distinct. 1.^a *De Consecratione.*

(7) Cap. XXX, tít. XXXIII, lib. V *Decret.*

Este privilegio de los regulares, lo mismo que el derecho de los obispos para conceder á sus diocesanos licencia de oratorio privado, en el que se celebrase el santo sacrificio de la Misa, fué abrogado por el Concilio de Trento (1), según el tenor de sus palabras, y la sagrada Congregación, intérprete del expresado Concilio, lo declaró así por mandato de Paulo V en 1615 (2), sin que haya lugar á duda alguna (3); así que los particulares tienen necesidad de impetrar de la Santa Sede licencia de oratorio privado, si quieren oír allí el santo sacrificio de la Misa.

Clemente XI, en su decreto *Quoniam sancta* de 15 de Diciembre de 1703 (4), reiteró respecto á los regulares la prohibición de usar altar portátil en cualquier lugar sin licencia de los ordinarios (5).

Derecho de los obispos á celebrar en sus oratorios, y á usar altar portátil.—Los obispos tienen derecho á celebrar en sus oratorios y á oír allí el santo sacrificio de la Misa (6), cuya facultad tiene un sólido fundamento en la antigüedad (7), y aún les está concedido usar altar portátil fuera de su diócesis (8), sin licencia del prelado local (9), siempre que se verifique sin faltar á las prescripciones del decreto dado por Clemente XI en 15 de Diciembre de 1703 (10) y declaraciones posteriores (11).

Dotación de las iglesias, y personas que tienen este deber.—Es ley general que no puede construirse iglesia

(1) Sesión 22, *Decret. de observ., et evit. in celebratione Missæ.*

(2) BENEDICTO XIV: *De sacrificio Missæ*, lib. III, cap. VI.

(3) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. I, cap. II, art. 1.^o, párr. 6.^o

(4) BENEDICTO XIV: *De sacrificio Missæ*, lib. III, cap. VI.

(5) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., id. ibid.

(6) BENEDICTO XIV: *De sacrificio Missæ*, lib. III, cap. VI, núm. 6.*

(7) BENEDICTO XIV: *Epist. encycl.* de 1750.

(8) Cap. XII, tít. VI, lib. V *sext. Decret.*

(9) BENEDICTO XIV: *De sacrificio Missæ*, lib. III, cap. 6.*

(10) BENEDICTO XIV: *Epist. encyclic.* de 1750.

(11) BENEDICTO XIV: *De sacrificio Missæ*, lib. III, cap. VI.

alguna, sin que se la dote de los medios necesarios para el sostenimiento del culto y sus ministros (1).

El obispo es llamado á exigir la dotación y juzgar de la suficiencia de ella respecto á las iglesias que se construyan en su diócesis (2), con obligación de dotarla él mismo en pena de su negligencia, si ha consentido en su erección sin el indicado requisito (3).

Esta dotación habrá de hacerse por las personas que se hallan comprendidas en alguna de las reglas siguientes:

a) Las personas que por su voluntad y piedad quieren edificar alguna iglesia, tienen obligación de proporcionarla dote suficiente para sostenerla, porque sin este requisito no se les concede la facultad de construirla (4).

b) Los que tienen obligación de construir una iglesia sin desmembración de otra, están en este mero hecho obligados á dotarla convenientemente (5).

c) La dotación de una iglesia, que es desmembración de la ya existente, habrá de hacerse con los frutos que de cualquier modo pertenezcan á la iglesia matriz, aun cuando medie oposición del rector y patrono (6), á ménos que aquella no cuente con los medios necesarios para atender á la Iglesia filial nuevamente construida, porque en este caso el pueblo será el obligado á ello (7).

Solemnidades en la erección de una iglesia.—El obispo procede á la designación del lugar y átrio (8), coloca por

(1) C. IX, distinct. 1.^a *De Consecrat.*—C. I, quæst. 2.^a, causa 1.^a

(2) C. I, quæst. 2.^a, causa 1.^a—*Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

(3) Cap. VIII, tít. XL, lib. III *Decret.*

(4) C. IX, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(5) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. I, cap. II, art. 2.^o, párrafo 2.^o

(6) Cap. V, tít. XI.VIII, lib. III *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

(7) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

(8) C. IX, distinct. 1.^a, *De Consecrat.*

sí mismo ó por sacerdote delegado al efecto una cruz en el sitio donde habrá de estar el altar mayor (1), cuidando de que se coloque hácia Oriente, según tradición apostólica, aunque esto no es necesario (2); pone después la primera piedra, que habrá de ser cuadrada y angular (3), procediendo en seguida á su bendición con arreglo á la forma designada en el Pontifical Romano.

ARTÍCULO III.

REPARACIÓN DE LAS IGLESIAS.

A quién corresponde la reparación de iglesias.—

Las iglesias y templos destinados al culto del Señor están sujetas, como todas las cosas humanas, á inutilizarse y destruirse por la acción del tiempo y otras contingencias. Cuando esto ocurre, es necesario proceder á una reparación que habrá de costearse con arreglo á las observaciones siguientes:

1.^a Es regla general que los gastos para la reparación de iglesias se harán por aquellos á quienes incumba este deber, según las costumbres particulares de cada localidad (4), y los estatutos ó convenciones especiales (5).

2.^a Es también regla general, que si la iglesia cuya reparación es necesaria, tiene rentas bastantes al efecto, se atenderá con ellas á esta obligación (6).

3.^a La iglesia catedral se reparará con sus rentas (7), y si no las tuviese, ó fuesen insuficientes, se agregarán las rentas supér-

(1) *Pontifical Romano*, part. II, *De Benedict. et imposit. prim. lap. pro Eccles. edific.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ. in lib. I Decret.* tit. XLVIII, párrafo 1.^o, núm. 32.

(3) *Pontifical Romano*, part. II, *ibid.*

(4) Cap. XI, II, tit. III, lib. V *Decret.*—C. X, quest. 1.^a, causa 10.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, *ibid.*, pár. 2.^o, núm. 33.

(6) C. I, II y III, quest. 3.^a, causa 10.

(7) C. XXVII, quest. 2.^a, causa 12.

fluas del obispo, ó en su defecto las de los canónigos (1), pudiendo el obispo con el cabildo decretar, en el caso de no existir las rentas indicadas, ó de no ser bastantes, que contribuyan los clérigos inferiores con los bienes superfluos, ó destinar á este objeto los frutos de los beneficios vacantes (2).

4.^a La reparación de las iglesias parroquiales se hará con la porción de rentas correspondientes á sus fábricas (3), y si éstas no existiesen, los rectores y todos los beneficiados de las mismas contribuirán á prorrata para sufragar los gastos necesarios (4), siendo obligación de los patronos y feligreses atender á esta necesidad en el último término (5).

5.^a Si el pueblo es pobre y no puede sufragar estos gastos, entónces podrá destruirse por completo aquella iglesia ruinosa, y convertirse en usos profanos no sórdidos, *erecta tamen ibi cruce* (6), trasladando sus derechos y fondos dotales á la iglesia matriz, si es filial, ó en otro caso á la iglesia más próxima, con autoridad del obispo (7).

En este caso, se trasladará también á la iglesia matriz más próxima el beneficio ó beneficios simples que radiquen en aquella, asignándose, á voluntad del obispo, á determinado altar, bajo igual advocación, con las cargas y emolumentos, etc. anejos á los mismos (8).

6.^a La reparación de iglesias no parroquiales, que carecen de fondos ó rentas suficientes al efecto, se hará por los que tienen beneficios en ellas (9), y si éstos no tienen recursos eclesiás-

(1) Cap. IV tít. XI, lib. III *Decret.*

(2) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. I, cap. IV, art. 5.^o

(3) C. X, quest. 1.^a, causa 10—C. I, II y III, quest. 3.^a, causa 10.—*Concil. Trid.*, sesión 21, cap. VII *De Reformat.*

(4) Cap. I y IV, tít. XLVIII, lib. III *Decret.*

(5) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. VII *De Reformat.*

(6) *Concil. Trid.*, id. ibid.

(7) *Concil. Trid.*, id. ibid.

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLVIII, párrafo 2.^o, num. 38 y sig.

(9) Cap. I, tít. XLVIII, lib. III *Decret.*

ticos para ello, se procederá á su destrucción, trasladándose sus derechos, etc., á la iglesia matriz ó más próxima, en la forma expresada respecto al caso anterior (1).

7.^a La doctrina que se deja consignada tiene completa aplicación á los casos en que sea preciso reedificar una iglesia ó reparar el palacio episcopal (2), la casa del párroco ó beneficiado.

Los obispos, párrocos ó simples beneficiados, no tienen obligación de atender á esta necesidad con sus bienes patrimoniales, y si únicamente con los bienes y rentas eclesiásticas (3).

Disciplina particular de España.—Como la Iglesia en España fué privada de sus bienes y rentas en virtud de disposiciones violentas del poder civil, se obligó este á cumplir tan sagrada obligación y á este efecto se han dictado muchas disposiciones (4) que no siempre se han cumplido, en las que se obliga el Estado á suministrar los fondos necesarios para atender á esta necesidad, dictándose las reglas necesarias al efecto respecto á la reparación de templos y edificios religiosos.

También el Estado se obligó á suministrar lo necesario para el culto, vasos y ornamentos (5) sagrados (6).

(1) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. VII *De Reformat.*

(2) *Inst. Jur. Canon*, por R. de M., part. 2.^a, lib. I, cap. IV, art. 5.^o

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., núm. 47 y sig.

(4) Artículo 36 y sig. del Concordato de 1851.—Art. 13 del convenio de 4 de Abril de 1860.—Real decreto de 4 de Octubre de 1861.—Real decreto de 13 de Agosto de 1876 é instrucción de 28 de Mayo de 1877 para cumplimiento del anterior decreto.

(5) Artículos 34 y 35 del Concordato de 1851 y art. 14 del convenio de 1859.—Real orden de 3 de Setiembre de 1862.

(6) Véase el apéndice núm. 2.

CAPITULO II

CONSAGRACIÓN Y BENDICIÓN DE IGLESIAS Y OTROS OBJETOS DEL CULTO.

ARTICULO PRIMERO

DE LA CONSAGRACIÓN Ó BENDICIÓN DE LAS IGLESIAS

Y SU PROFANACIÓN.

Consagración de iglesias y su origen.—Las palabras consagración y dedicación expresan una misma cosa; así que la iglesia que se consagra, se dedica en honor de Dios y memoria de los santos.

Se entiende por consagración: *La dedicación de una iglesia hecha por el legítimo ministro, mediante la materia y forma correspondiente; con la debida intención.*

La Iglesia tomó este rito del antiguo Testamento, en el que se habla—del aceite derramado por Jacob sobre la piedra que erigió en título ó altar, cuando se dirigía á la Mesopotamia (1)—de la especial y solemne dedicación del tabernáculo por Moisés en el desierto—de la solemnisíma dedicación del templo de Jerusalén por Salomón.

La Iglesia de Cristo, cuyos templos están destinados á mayores misterios y hostias más excelentes, no podía prescindir de aquella práctica (2) y puede asegurarse que el rito en la consagración de iglesias fué observado por aquella desde el tiempo de los Apóstoles (3).

(1) *Génesis*, cap. XXVIII, v. 18.

(2) Cap. II, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ., in lib. III Decret.*, tit. XI, párrafo 1.^o, núm. 5.^o

El papa S. Silvestre instituyó las ceremonias que habían de emplearse para la dedicación de las iglesias, después que Constantino dió la paz á la Iglesia y autorizó á los cristianos para construir templos al Señor.

Su necesidad.—La iglesia nuevamente construida no puede destinarse al culto sin que preceda la consagración ó bendición de ella (1) en la forma prescrita por el papa S. Silvestre (2) y sus sucesores, la cual se halla determinada en el Pontifical Romano (3).

Cuándo puede celebrarse fuera de la Iglesia.—La ley general de la Iglesia, que exige la celebración de los sagrados misterios de nuestra santa religión en iglesias consagradas ó benditas, tiene las excepciones siguientes:

I. En caso de necesidad podrá celebrarse el santo sacrificio de la Misa fuera del lugar sagrado (4) como se verificó en tiempo de las persecuciones, y esta necesidad existirá—

a) Si no hubiere iglesia en algun pueblo, ó si está inutilizada y hay necesidad de celebrar para que el pueblo oiga Misa (5).

b) Si la estrechez de la iglesia no permite la entrada en ella á la multitud del pueblo que acude al santo sacrificio (6).

c) Si se ha de celebrar para que el ejército oiga Misa en el campamento.

d) Podrá celebrarse á la orilla del mar para los navegantes, y en la misma nave con las debidas precauciones.

e) En el campo para los peregrinos, si no se puede acudir á la iglesia ó no existe.

II. Los cardenales, arzobispos y obispos pueden celebrar en

(1) Cap. I, II, XI, XII y XV, distinct. 1.^a De Consecrat.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 6.^o

(3) Part. 2.^a De Eccles. Dedicat. seu Consecrat.

(4) C. XI, distinct. 1.^a De Consecrat.

(5) C. XXX, distinct. 1.^a De Consecrat.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 8.

altar portátil, cuando van de camino (1), no sólo en caso de necesidad, sino por causa de comodidad ó devoción según repetidas declaraciones de la sagrada congregación del Concilio (2), hallándose en igual caso:

a) Todos los que tienen privilegio ó licencia pontificia de altar portátil.

b) Los que han obtenido esta misma licencia del obispo para usar altar portátil (3); pero debe advertirse que los obispos no pueden hoy conceder esta facultad, sino mediante justa causa, ó en caso de necesidad (4).

A quiénes compete la consagración de iglesias.

—Sólo los obispos tienen derecho á consagrar iglesias (5), sin que puedan delegar al efecto á un simple sacerdote, porque la consagración es acto del orden episcopal (6).

Ministro ordinario de la consagración ó bendición de ellas.—Sólo el obispo de la diócesis en que radica la iglesia nuevamente construida es el ministro ordinario de la consagración y bendición de ella (7); aun cuando la iglesia pertenezca á institutos ú órdenes exentas.

El obispo que sin licencia del ordinario de la diócesis se propasase á ejercer este acto, queda suspenso *ipso jure* por un año de celebrar Misa (8) porque ha ejercido pontificales en ajena diócesis (9); pero el acto llevado á efecto es válido aunque ilícito, y por lo mismo no ha de repetirse la consagración de aquella iglesia.

(1) Cap. XII, tít. VII, lib. V *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XI, párrafo 1.º, núm. 9.º

(3) Cap. XII y XIV, distinct. 1.ª, *De Consecrat.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. núm. 12.

(5) Cap. II, distinct. 1.ª *De Consecrat.*—C. X, quæst. 1.ª, causa 16.

(6) C. IV, distinct. 68.

(7) C. XXVI, quæst. 7.ª, causa 16.—Cap. I, tít. XXXVI, lib. III *Decret.*—Cap. II, tít. XI, lib. III *Decret.*

(8) C. XXVIII, quæst. 1.ª, causa 7.ª

(9) *Concil. Trid.*, sesión 6.ª, cap. V *De Reformat.*

Ministro extraordinario.—El simple presbítero delegado especialmente por el Sumo Pontífice puede consagrar una iglesia, porque es acto de orden episcopal procedente de derecho eclesiástico.

También los simples sacerdotes pueden bendecir las iglesias y habilitarlas de este modo para el culto, mediante licencia ó delegación del obispo ordinario de la diócesis (1).

Diferencia entre la consagración y bendición de una Iglesia.—La consagración afecta á las paredes de la iglesia, y la bendición al pavimento; así que la iglesia pierde su consagración por la destrucción de la paredes, y la bendición se conserva, siempre que el edificio no se haya destruido con autoridad del superior y sin esperanza de reedificarlo (2).

Ritualidades en la consagración de las iglesias.—No siempre se han observado los mismos ritos y ceremonias en la consagración de las iglesias. En la antigua disciplina se citaba á los obispos más próximos para que asistieran á este acto, y de este modo se daba mayor realce y solemnidad á la función religiosa con su presencia y sermones que predicaban.

Todos ellos dirigían preces al Altísimo, y la consagración se hacía y llevaba á efecto con los divinos sacrificios, místicas oblacones, himnos y otras obras de piedad en medio del gozo y satisfacción de todos (3).

El Pontifical Romano describe las ritualidades que han de observarse actualmente en la consagración de las iglesias (4), acerca de lo cual me limito á las indicaciones siguientes:

I. La consagración puede hacerse en cualquier día, pero será muy conveniente que tenga lugar en domingo ó en las solemnidades de los santos (5).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XL, párrafo 1.º, núm. 16.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, sect. 1.ª, pár. 16.

(4) Part. 2.ª *De Eccles. dedicat. seu Consecrat.*

(5) *Pontifical Romano*, part. 2.ª, ibid.—Cap. II, tit. XL, lib. III *Decret.*

II. El obispo consagrante y los patronos de la iglesia que se ha de consagrar, ayunarán la víspera y habrán de estar en ayunas en el acto de la consagración, debiendo amonestarse al pueblo y clero á lo mismo (1).

III. Las vísperas habrán de cantarse ante las reliquias que se hallen colocadas bajo el altar.

El día de la consagración por la mañana (2) el obispo consagrante dá tres vueltas al rededor de la iglesia por la parte exterior, asperjándola con agua bendita.

IV. Seguidamente penetra en la iglesia, y delineados sobre el mismo pavimento del templo los dos alfabetos griego y latino, forma una cruz en la puerta y doce en las paredes interiores del templo (3).

V. La consagración imita á la materia y forma de los sacramentos, siendo su materia remota el sagrado crisma, y la próxima la unción sobre doce cruces pintadas ó grabadas en las paredes de la iglesia.

La forma son las palabras que pronuncia el consagrante en el acto de la unción (4), y este acto debe tener lugar dentro de la solemnidad de la Misa (5), aunque no es de necesidad, sino de decencia (6).

Si la consagración de una iglesia puede reiterarse.—La consagración de una iglesia no se reitera (7), y únicamente tendrá esto lugar en los casos siguientes:

I. Si aquélla no se ha verificado con la materia y forma conveniente (8), ó no consta, ó hay duda, si está consagrada (9).

(1) *Pontifical Romano*, part. 2.^a, ibid.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon*, lib. II, tít. VII, sect. 1.^a, pár. 17.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon*, ibid.

(4) *Inst. Jur Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. I, cap. III, art. 1.^o, pár. 1.^o

(5) C. III, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XI, pár. 1.^o, núm. 18.

(7) C. XX y XXIV, distinct. 1.^a *De Consecrat.*—Cap. VI, tít. XI, lib. III *Decret.*

(8) C. XX, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(9) C. XVIII, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

II. Cuando la iglesia ha sido execrada, y esto tiene lugar—

a) Si las paredes de la iglesia se han destruido totalmente ó en su mayor parte.

b) Si se ha quemado ó abrasado la mayor parte de la superficie exterior de su parte interior, aún cuando las paredes se conserven.

En estos casos únicamente se puede y hay necesidad de consagrarla de nuevo (1).

Casos en que tiene lugar la violación de las iglesias. —La iglesia puede violarse:

a) Por copiosa é injuriosa efusión de sangre humana (2).

b) Por homicidio voluntario é injurioso cometido en la iglesia, aunque el herido muera fuera de ella (3).

c) *Voluntaria seminis humani effusio*, aún cuando sea lícita (4); pero es necesario que sea públicamente conocida.

d) Por sepultura del excomulgado nominalmente y del infiel (5).

Su reconciliación.—Cuando la iglesia está consagrada, ha de reconciliarse por el obispo, observando la forma prescrita en el Pontifical Romano (6), sin que pueda hacerse por un simple sacerdote, á ménos que tenga privilegio ó licencia especial de la Santa Sede (7).

Si la iglesia fué bendecida, puede reconciliarse por un simple sacerdote (8) en la forma que prescribe el Pontifical Romano (9); pero necesita al efecto comisión ó licencia del obispo,

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. XL, pár. 1.º, núm. 21 y sig.

(2) Cap. IV, tít. XL, lib. III Decret.

(3) Cap. IV, tít. XL, lib. III Decret.

(4) Cap. X, tít. XL, lib. III Decret.

(5) Cap. VII, tít. XL, lib. III Decret.—C. XXVII, distinct. 1.ª De Consecrat.

(6) Parte 2.ª, de Ecclesie reconciliatione.

(7) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit*, parte 3.ª, sect. 3.ª, art. 1.º, pár. 2.º, núm. 558.

(8) Cap. IX y X, tít. XL, lib. III Decret.

(9) Parte 2.ª, de Ecclesie reconciliatione.

aunque no faltan escritores que sostienen no ser necesaria la delegación de éste (1).

ARTÍCULO II.

DE LA CONSAGRACIÓN Ó BENDICIÓN DE LOS OBJETOS

DEL CULTO Y SU PROFANACIÓN.

Distintas clases de altares, y su materia.—Los altares pueden ser fijos ó portátiles, según que pueden ó nó trasladarse de un sitio á otro.

Es necesario que los altares sean de piedra, al ménos en cuanto á la parte superior, sobre la cual se pone el cuerpo y sangre de nuestro Señor (2).

La piedra habrá de ser cuadrangular, de una sola pieza, y de la magnitud necesaria para que pueda colocarse cómodamente el cáliz y patena. El altar, ó sea la piedra, ha de tener sepulcro ó cavidad en la que se coloquen las reliquias de los santos (3).

Su consagración, y quién la hace.—Todos los altares fijos ó portátiles han de ser consagrados, si se ha de celebrar en ellos el santo sacrificio de la Misa (4), y esta práctica se observó siempre en la ley natural, escrita y evangélica (5).

Su consagración se verifica ungiéndolos con aceite y el sagrado crisma en la forma señalada por el Pontifical Romano (6).

(1) *Praelect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, ibid.

(2) C. XXXI, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(3) C. XXIV y XXVI, distinct. 1.^a *De Consecrat.*

(4) C. XIX y XXX, distinct. 1.^a *De Consecrat.*—Cap. I, tit. XL, lib. III *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XI, pár. 2.^o, núm. 35.

(6) Parte 2.^a *De Altaris consecratione.*

Este acto corresponde al obispo (1), porque es acto del orden episcopal de derecho eclesiástico, y sólo el Romano Pontífice podrá autorizar á un simple sacerdote para hacer dicha consagración (2).

Si podrá reiterarse.—La consagración de altares no puede reiterarse sinó en los casos indicados al tratar de las iglesias, como=

- a) Si no se ha verificado con la debida materia y forma.
- b) Cuando hay duda ó se ignora, si fué consagrado.
- c) Si el altar ha sido execrado.

Execración de altares.—La execración de altares tiene lugar:

- a) Cuando se ha fracturado de manera que en ninguna de sus partes puede colocarse el cáliz con la patena (3).
- b) Cuando el sepulcro del altar ó el lugar de las reliquias se quita, abre, rompe ó disminuye (4).
- c) Si la mesa del altar fijo, ó la piedra superior, se remueve de la base á la cual está unida (5).

Observaciones.—I. Si la iglesia ha sido execrada y nó el altar, éste no se volverá á consagrar, debiendo decirse lo mismo respecto á la iglesia no execrada, aunque lo haya sido el altar, porque la consagración de éste no es dependiente de la consagración de aquélla, ni viceversa (6).

II. La violación (*pollutio*) del altar por la efusión de sangre *vel seminis humani* produce también la violación de la iglesia; y viceversa, la violación de la iglesia produce la violación de

(1) C. XXV, distinct. 1.^a *De Consecrat.*—C. IV, distinct. 68.—Cap. V, título XI, lib. III *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 37.

(3) Cap. I, III y VI, tit. XI, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 43.

(5) C. XIX, distinct. 1.^a, *De Consecrat.*—Cap. III y VI, tit. XI, lib. III *Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XI, párrafo 2.^o, núm. 46.

los altares fijos existentes en ella; porque la violación afecta á todo el cuerpo de la iglesia y á todo lo que dentro de ella existe, á diferencia de lo que sucede con la execración (1).

Materia empleada antiguamente en la construcción de cálices y patenas.—Los cálices y patenas eran en un principio de oro, plata, estaño, madera, vidrio ó piedra (2), porque se atendía más á la dignidad de la persona sacrificante, que á la materia del cáliz ó patena.

S. Bonifacio, obispo y mártir, alude á esto cuando preguntado si podría usarse de cálices de madera para el santo sacrificio, contestó: *Quondam sacerdotes aurei ligneis calicibus utebantur; nunc e contrario lignei sacerdotes aureis utuntur calicibus* (3).

Cuál ha de ser su materia en la actualidad.—La Iglesia prohibió por justas causas, que se usase de cálices y patenas de madera (4), vidrio ó cristal (5), bronce ó cobre, latón (6), ó piedra (7), ordenando que sean precisamente de oro ó plata (8) y en caso de necesidad de estaño (9), sin que pueda en manera alguna usarse de aluminio (*aluminium*) puro ó mezclado con otros metales, según declaró la Sagrada Congregación de Ritos en 1.º de Septiembre de 1866 (10).

Su consagración, y quién la hace.—Los calices y patenas han de estar consagrados para que puedan usarse en el santo sacrificio de la Misa.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 47.

(2) BENEDICTO XIV: *De sacrificio Missae*, lib. I, cap. IV.

(3) C. XLIV, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(4) C. XLIV, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(5) C. XLV, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(6) Cap. XLV, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 48.

(8) C. XLIV, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(9) C. XLV, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(10) *Acta ex iis decreta, quae apud Sanctam Sedem geruntur*, tom. II, página 238.

Este acto habrá de hacerse por el obispo con el santo crisma en la forma que prescribe la Iglesia (1).

El cáliz y patena podrán también ser consagrados por preladados inferiores en virtud de privilegio, y por simples sacerdotes con licencia especial de la Santa Sede (2).

Su execración.—Cuando el cáliz ó patena han perdido su forma, fracturándose notablemente, ó se dora de nuevo su parte interior, hay necesidad de consagrarlos nuevamente, según declaró la sagrada Congregación de Ritos en 14 de Junio de 1845 (3).

Campanas en la iglesia, y su objeto.—El uso de las campanas en la Iglesia es antiquísimo (4), y tiene por objeto convocar al pueblo fiel á los divinos oficios (5), lo cual se expresa en las siguientes palabras (6).

*Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum,
defunctos ploro, pestem fugo, festa decoro.*

Su consagración.—La consagración de las campanas corresponde al obispo (7), y habrá de hacerla en la forma prescrita por la Iglesia (8).

El Sumo Pontífice puede autorizar al efecto á un simple sacerdote, porque es acto del orden episcopal de derecho eclesiástico.

Si pueden colocarse en los oratorios privados.—Las campanas tienen por objeto llamar al pueblo á los divinos oficios y sagrados misterios que se celebran á determinadas horas en las iglesias, cuyo fin no existe en los oratorios privados,

(1) *Pontifical Romano*, part. 2.^a, de *patena et calicis consecrat.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 50.

(3) MACH: *Tesoro de Sacerdotes*, pág. 265 de la 5.^a edición.

(4) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, cap. III, art. 1.^o, pár. 3.^o

(5) C. L., distinct. 1.^a *De Consecrat.*—Cap. I y II, tit. XXVII, lib. 1.^o *Decret.*

(6) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., ibid.

(7) BENEDICTO XIV: *Inst.* 47, núm. 38.

(8) *Pontifical Romano*, part. 2.^a, *De benedictione signi vel campana.*

porque éstos se han instituido en provecho y utilidad de los particulares, y por esta razón está prohibido colocar campanas en ellos (1).

Tampoco puede colocarse más de una campana en las iglesias de los regulares mendicantes, según declaró Juan XXII, á ménos que medie licencia especial de la Santa Sede (2); pero esta disposición legal ha sido derogada por costumbre en contrario (3).

Bendición de vasos y ornamentos sagrados.—Todos los objetos que sirven para el santo sacrificio de la Misa han de bendecirse á fin de que se celebre aquél con mayor reverencia (4).

Quién la hace.—El obispo es el ministro á quien corresponde bendecir los manteles ó sabanillas (5)—corporales—pálea—velo del cáliz—bolsa de los corporales—amito—alba—cín-gulo—manípulo—estola—casulla—copón y tabernáculo.

Estos objetos pueden también bendecirse por simples sacerdotes, mediante licencia del obispo, que suele otorgarla en virtud de autorización de la Santa Sede (6).

Las cruces de los altares y de las procesiones, lo mismo que las imágenes, no necesitan bendición.

(1) Cap. X, tit. XXXIII, lib. V *Decret.*

(2) Cap. unic., tit. V, lib. I *Extravag. commun.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XI., párrafo 2.º, núm. 56.

(4) C. IX, dist. 23.—C. XXXIX, XI. y XLII, dist. 1.ª *De Consecrat.*

(5) *Rúbricas del Misal Romano*, pár. 20.

(6) BENEDICTO XIV: Inst. 21.—S. Alfonso Liguorio, *Theolog. mor.*, libro VI, núm. 377.

CAPITULO III.

CEMENTERIOS.

ARTÍCULO PRIMERO.

DE LOS CEMENTERIOS EN GENERAL.

Etimología de la palabra cementerio, y su definición.—La palabra *cæmeterium* (cementerio) procede de Κοιμητήριον, que significa el lugar, donde se duerme, porque el verbo κοιμᾶω su raíz, significa hacer dormir, sosegar, matar, dar la muerte.

La iglesia usó desde un principio la palabra cementerio para designar el lugar en que se daba sepultura á los cristianos, porque los cuerpos de los fieles duermen allí hasta que despiertan con la venida de Jesucristo en el día de la resurrección (1).

Se entiende por cementerio: *El lugar destinado para sepultura de los que han fallecido.*

Sus especies.—Los cementerios pueden ser *religiosos— profanos — profanados — públicos — particulares — urbanos — rurales.*

Se entiende por cementerio religioso, *el lugar destinado con arreglo á las prescripciones de la religión para sepultura de los que han fallecido en la fé de la iglesia.*

Se llama cementerio profano, *el lugar destinado para los que mueren fuera de la fé de la iglesia.*

Se entiende por cementerio profanado, *el lugar religioso destinado para sepultura de los que mueren en la comunión de*

(1) D. VOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. IX, pár. 1.°

la iglesia, que ha sido violada, mediante ruina ó por sepelio del que se hallaba fuera de la comunión de la iglesia.

Se llama cementerio público ó general, *el lugar destinado para sepultura de todos los fieles.*

Se entiende por cementerio particular, *el lugar destinado para sepultura de personas ó corporaciones determinadas.*

Es cementerio urbano, *el lugar destinado en una ciudad ó capital para sepultura de los fieles.*

Es cementerio rural, *el lugar destinado en las poblaciones ó aldeas para sepultura de los fieles.*

Especies de cementerio religioso.—Los cementerios religiosos pueden ser—católicos—protestantes y estos en sus varias clases—mahometanos—judáicos—paganos, etc.

Pero la palabra religioso ha de tomarse aquí por cementerio católico, porque únicamente este es propiamente religioso.

Especies de cementerio particular.—El cementerio particular puede ser—parroquial (1)—familiar—hereditario—mixto (2)—de los beneficiados de una iglesia (3)—de los regulares—cofradías, etc.

Se entiende por cementerio parroquial, *el lugar destinado para sepultura de los fieles de una parroquia.*

Se llama cementerio ó panteón familiar, *el lugar destinado para sepultura de las personas de una familia.*

Se llama hereditario, *el lugar destinado para sepelio de los herederos del que lo construyó ó destinó para este efecto.*

Se llama mixto, *el lugar destinado para sepultura de los herederos que son de la familia, del sujeto que lo adquirió.*

Se llama cementerio de los beneficiados de una iglesia, *el lugar destinado para sepultura del clero de una iglesia determinada.*

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., tomo II, part. 2.^a, lib. I, cap. IV, artículo 2.^o, núm. 2.^o

(2) CAMILLIS: *Inst. Jur. Canon.*, tom. II, sect. 2.^a, tit. I, dissert. 2.^a, capítulo III, art. 2.^o

(3) FERRARIS: *Prompta biblioth. palabra sepultura.*

Se entiende por cementerio de los regulares, *el lugar destinado para sepelio de los religiosos*.

Se entiende por cementerio de cofradías ó hermandades religiosas, *el lugar destinado para las personas adscritas á las mismas*.

Sitio en que se construían.—Como las leyes romanas prescribían que los cementerios se hallasen fuera de las ciudades (1), los cristianos sepultaron sus cadáveres fuera de las poblaciones, porque nada había en esto que se opusiera á su religión (2).

Enterramiento en las iglesias.—Las leyes sobre las sepulturas en despoblado se observaron en toda su extensión hasta que, con el trascurso del tiempo, se empezó por sepultar en la iglesia á los obispos, abades, presbíteros dignos y fieles distinguidos (3), concediéndose también el privilegio de ser enterrados en los atrios de las iglesias á algunos fieles (4), á los emperadores y reyes, según consta de muchos monumentos de la antigüedad (5).

Después se extendió á todos los fieles el enterramiento en los atrios de las iglesias, y entónces los emperadores y reyes, los abades y fieles que morían en olor de santidad fueron enterrados en las iglesias (6).

Finalmente, se concedió á todos los fieles el derecho de ser enterrados dentro de las iglesias.

Su causa ó motivo.—Los fieles desearon siempre descansar en las iglesias, porque creían piadosamente que evitarían más fácilmente las penas del infierno por medio de los méritos y patrocinio de los mártires y santos, hallándose sus restos mor-

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. V, pár. 57.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. IX, pár. 1.º

(3) C. XVIII, quest. 2.º, causa 13.

(4) C. XV, quest. 2.º, causa 13.

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. IX, pár. 2.º

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, ibid.

tales al lado de los de éstos, según decían San Máximo de Tours (1), S. Agustín y otros santos padres.

Este deseo vehemente de los fieles se fundaba también en que así se harían participantes de los sacrificios celebrados en las iglesias y de las preces de los fieles que entraban en ellas (2).

Estas fueron las causas de introducirse la costumbre del sepelio en sagrado, y de que esta costumbre prevaleciera sobre la ley escrita, llegando á ser en el siglo VI, ó poco después, una ley general, sin que pueda reconocerse otra causa en este cambio de disciplina (3).

En estos últimos tiempos se ha vuelto al enterramiento en cementerios construidos en despoblado (4) según el deseo de la Iglesia, expresado en el Ritual Romano con estas palabras: «*Ubi viget antiqua consuetudo sepeliendi mortuos in cœmeteriis. retineatur, et ubi fieri potest; restituatur* (5).»

El cementerio entre los romanos.—Los cuerpos humanos podían sepultarse entre los romanos en cualquier lugar honesto, y esto bastaba para que aquel sitio se hiciese religioso, quedando por lo mismo fuera del comercio humano, siempre que consintiera en el sepelio el dueño del predio (6).

Requisitos necesarios en el cementerio católico.

—La legislación romana quedó abrogada por el derecho canónico, según el cual un sitio goza del derecho y privilegio de lugar sagrado y religioso por la sepultura ó enterramiento de un cuerpo humano, siempre que sea destinado á esto por la autoridad

(1) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 3.^a, art. 2.^o, número 566.

(2) C. XVII, quest. 2.^a, causa 13.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. IX, par. 2.^o, nota 6.^o

(4) Véase el apéndice núm. 3.^o

(5) *De exequiis*.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XXVIII, párrafo 1.^o, núm. 1.^o

pública del obispo (1), según se deduce de las mismas disposiciones eclesiásticas (2).

El cementerio ha de cercarse de pared y signarse con una cruz colocada en lo alto del muro, y después se procede á su santificación, bendiciéndolo con rito solemne en la forma designada en el Ritual Romano (3) por sacerdote que el obispo delegue al efecto, porque este es el ministro de la bendición del cementerio (4), y cuando la hace por sí mismo procede al acto con la ritualidad prescrita en el Pontifical Romano.

Los cementerios se han bendecido siempre, porque son mirados como un apéndice de las iglesias, y porque las almas de los difuntos se consideran de este modo ménos expuestas á la influencia de los espíritus inmundos (5).

Ocurre también que los cementerios tienen sus capillas en las que se celebra el santo sacrificio de la Misa y otros actos del culto, lo cual es un motivo más para hallar justificada esta práctica universal y constante de la Iglesia.

Violación del cementerio.—El cementerio queda violado (*pollutus*) por las mismas causas que se dejan indicadas al tratar de la violación de las iglesias en el capítulo anterior; debiendo además advertir:

1.º Que si el cementerio está contiguo á la iglesia, queda violado en el mero hecho de serlo aquélla, y nó viceversa (6), porque es un apéndice de la Iglesia, y lo accesorio sigue á lo principal, y nó lo principal á lo accesorio; de aquí, que si el cementerio ha quedado profanado por violación de la iglesia, ha de considerarse reconciliado por la reconciliación de aquélla (7).

(1) Cap. IV, tít. XXXVI, lib. III *Decret.*

(2) Cap. IV, tít. XXXVI, lib. III *Decret.*

(3) *De ritu benedicenti novum cæmeterium.*

(4) *Pontifical Romano*, parte 2.ª, *De cæmeterii benedict.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XI, párrafo 2.º, núm. 62.

(6) Cap. únic., tít. XXI, lib. III *sext. Decret.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XI, párrafo 3.º, núm. 69.

2.^o Cuando el cementerio está separado y á larga distancia de la iglesia, no queda profanado por la violación de aquélla (1).

3.^o Si dos cementerios se hallan tan próximos entre sí, que sólo los divide una pared intermedia, la violación del uno no trasciende al otro, aun cuando se dé entrada al uno por la puerta del otro (2), según disposición terminante del derecho.

Cuando la violación se verifica en la puerta misma de la pared intermedia que los divide, entónces quedará violado aquél de los dos cementerios que se halla más próximo á la puerta, y en el caso de que la distancia sea igual, se considera violado aquél en cuya gracia se hizo la puerta y pared divisoria (3).

Sus efectos.—Una vez violado el cementerio no puede procederse á la inhumación de ningún cuerpo humano, hasta tanto que se verifique su reconciliación (4).

Puede ocurrir que haya necesidad de inhumar algún cuerpo, ántes de que se verifique la reconciliación del cementerio, en cuyo caso se colocará en él el difunto; pero el clero no entrará allí, y por lo mismo se abstendrá de los ritos acostumbrados en la inhumación de los fieles cristianos (5).

Reconciliación del cementerio violado.—Si el cementerio se hallase consagrado, lo cual no suele ocurrir, entónces la reconciliación se hace por el obispo en la forma que expresa el Pontifical Romano (6); pero si sólo estaba bendito, puede hacerse por un simple sacerdote delegado al efecto por el obispo, en la forma que prescribe el Ritual Romano (7).

(1) Cap. únic., tít. XXI, lib. III *sext. Decret.*

(2) Cap. únic., tít. XXI, lib. III *sext. Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 71.

(4) Cap. únic., tít. XXI, lib. III *sext. Decret.*

(5) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulp.*, part. 3.^a, sect. 3.^a, artículo 2.^o, núm. 567.

(6) Parte 2.^a *De Reconciliatione cimiterii.*

(7) *Ordo reconciliandi cemet. violat.*

No se procede á la reconciliación del cementerio violado por haberse dado sepultura á un excomulgado vitando (1) hasta la exhumación del cadáver (2), si puede distinguirse de los demás, pero si esto no es posible (3), se hará la reconciliación del lugar y podrá servir de sepultura á los cadáveres de los fieles; á ménos que pueda trasladarse fácilmente el cementerio á otro sitio (4).

Derecho en los fieles á elegir sepultura.—Todas las personas de uno y otro sexo (5) que han llegado á la pubertad y tienen uso de razón, pueden elegir sepultura aun fuera de su parroquia ó sepulcro de sus mayores (6), porque debe cumplirse en un todo y como ley suprema la voluntad del testador (7).

Quiénes no tienen este derecho.—Acerca de este punto habrá de tenerse presente que no tienen derecho á elegir sepultura:

a) Los dementes, porque la elección de sepultura es acto humano, del cual son incapaces los dementes (8).

b) Los impúberes por falta de edad y madurez de juicio para este acto; pudiendo sus padres elegir sepultura para ellos, si existe esta costumbre, y en caso contrario se les enterrará en el sepulcro de sus mayores ó en la parroquia (9).

c) Los religiosos, porque han renunciado á su propia voluntad, y únicamente podrán elegir sepultura, si se encuentran á

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XI, párrafo 3.º, núm. 72 y sig.

(2) C. XXVII y XXVIII, distinct. 1.ª *De Consecratione*.

(3) Cap. XII, tit. XXVIII, lib. III *Decret.*

(4) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, parte 3.ª, sect. 3.ª, artículo 2.º, núm. 567.

(5) Cap. VII, tit. XXVIII, lib. III *Decret.*

(6) Cap. I, tit. XXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. III y IV, tit. XII, lib. III *sext. Decret.*

(7) C. IV, quæst. 2.ª, causa 13.

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXVIII, pár. 2.º, núm. 11.

(9) Cap. VII, tit. XXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. IV, tit. XII, lib. III *sext. Decret.*

una distancia tan grande del monasterio, que no pueden ser trasladados á él cómodamente (1); pero si no eligen sepultura, se verificará el sepelio en el cementerio de la parroquia, donde han fallecido, á ménos que se halle próximo un monasterio de su orden (2).

d) Los religiosos exclaustrados se consideran para este efecto como los demás feligreses de la parroquia en que viven (3).

e) La facultad de elegir sepultura no es absoluta en las personas á quienes se concede este derecho: es necesario que no se oponga á las prescripciones del derecho; así que, si uno elige sepultura en un monasterio de religiosas, habrá de ser enterrado en el sepulcro de sus mayores ó en el cementerio de la iglesia parroquial, porque dicha elección es nula (4).

Enterramiento en panteón ó sepulcro de familia.

—La persona que fallece sin haber elegido sepultura, será enterrada en el sepulcro de sus mayores, si lo tiene la familia, según las disposiciones del derecho (5); porque se supone que esta es la voluntad del difunto, en cuanto que todos desean por instinto natural descansar más bien al lado de sus mayores que al de los extraños.

Se entiende en el caso presente por mayores el padre, abuelo y otros ascendientes (6).

Reglas que han de tenerse presentes.—Las muchas cuestiones canónicas, que surgen acerca de esta materia, pueden resumirse en lo siguiente:

a) Cuando el padre y abuelo de una persona se hallan enterrados en un lugar, y los demás ascendientes en otro, habrá

(1) Cap. V, tít. XII, lib. III *sent. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, id. *ibid.*

(3) *Acta ex his decreta, que apud Sanctam Sedem geruntur*, tomo I, pág. 168.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. III Decret.*, tít. XXVII, párrafo 2.^o, número 17 y sig.

(5) Cap. I, tít. XXVIII, lib. III; *Decret.*—C. II y VII, quæst. 2.^a, causa 13.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in *lib. III Decret.*, tít. XXVIII, párrafo 3.^o, núm. 27.

de ser enterrada en el sepulcro del padre y abuelo con preferencia al de los otros ascendientes; pero si el padre ha sido enterrado en un lugar y sus ascendientes en otro, muchos canonistas creen que el hijo será enterrado en el panteón de sus ascendientes con preferencia al del padre (1).

b) Los hijos naturales serán enterrados con el padre, á menos que éste se halle constituido en dignidad.

c) Los hijos espúreos, como indignos del nombre del padre, serán enterrados con la madre, si no es de condición ilustre.

d) Los hijos adoptivos, en el sepulcro del padre adoptivo, si aún vive, porque se hallaban bajo su potestad; pero si su muerte es posterior á la de dicho padre, serán enterrados con su padre natural, porque la adopción cesa por la muerte del adoptante.

e) La mujer casada será enterrada en el sepulcro de su marido ya difunto, si no eligió sepultura (2), y cuando haya sido casada sucesivamente con dos ó más, será enterrada en el sepulcro del último marido (3).

f) Cuando la mujer ha muerto ántes que su marido, éste será enterrado en el sepulcro de sus ascendientes ó en el cementerio parroquial, si no ha elegido sepultura, porque la mujer sigue la condición del marido, y nó viceversa.

g) Los fámulos y domésticos de las órdenes religiosas mendicantes serán enterrados en los cementerios de dichos institutos, si murieron dentro del monasterio (4).

Enterramiento en el cementerio de la parroquia.

—Las personas que no han elegido sepultura, ni tienen panteón de familia, serán sepultadas en el cementerio de la parroquia en que tienen su domicilio, y en donde recibieron los sacramentos

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 28 y sig.

(2) C. II y III, quæst. 2.^a, causa 13.

(3) Cap. III, pár. 1.^o, tít. XII, lib. III *sexto Decret.*

(4) BOUXX: *De Jure Regularium*, part. 5.^a

y demás auxilios espirituales (1); lo cual tiene aplicación al caso en que la muerte del sujeto se haya verificado fuera de su parroquia en una población, á donde había ido por causa de recreo, estudio, etc., siempre que pueda trasladarse cómodamente el cadáver á la sepultura parroquial (2), porque la traslación desde el lugar del domicilio á otro punto en el que la persona habita temporalmente, no priva del primer domicilio, á ménos que la costumbre ó convenio de los párrocos, aprobado por los respectivos ordinarios, haya establecido que el sepelio se verifique allí donde la persona haya fallecido.

Observaciones.—Acerca de esta materia habrá además de tenerse presente:

a) Las personas que se ausentan de la parroquia de su domicilio á un punto con ánimo de permanecer allí un año, ó la mayor parte del año, serán enterradas en este punto de su fallecimiento, porque han adquirido cuasi domicilio, y en su virtud el párroco del lugar les ha administrado los sacramentos (3).

b) Los peregrinos y extranjeros serán enterrados en el cementerio de la parroquia donde fallecen, si no pueden ser conducidos fácilmente á su parroquia ó panteón de familia, y esto mismo se observará con mayor razón respecto á los vagos (4).

c) El clérigo será enterrado en la parroquia donde tiene beneficio que exige residencia y servicio personal; á no ser que haya elegido sepultura ó tenga panteón de familia (5).

(1) Cap. I y V, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. I, tít. XII, lib. III *sext. Decret.*

(2) Cap. III, út. XII, lib. III *sect. Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXVIII, pár. 4.º, núm. 39.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ.*, ibid., número 41.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, ibid, núm. 45 y sig.

ARTÍCULO II.

DERECHOS PARROQUIALES CON MOTIVO DEL SEPELIO FUERA DE LA PARROQUIA.

Porción canónica parroquial.—Se llama así: *La parte que con motivo del funeral y sepultura verificada fuera de la parroquia, corresponde á ésta.*

Esta porción canónica es ordinariamente la cuarta parte de todas las obvenciones que resultaron á la iglesia en donde se hizo el funeral (1); pero esto no obsta para que sea la tercera parte ó la mitad (2) en virtud de costumbre en las respectivas localidades, y á ella habrá de atenderse en los casos que ocurran (3).

A quién corresponde.—Esta porción debe abonarse á la iglesia parroquial, en donde debía haberse hecho el sepelio y funeral del difunto, si éste no hubiese dispuesto otra cosa ó no hubiere tenido panteón de familia fuera de la parroquia, sin que influya en nada el que haya muerto en el distrito de su parroquia ó fuera de él (4).

Si el difunto tuvo en vida dos domicilios y en la parroquia de uno y otro recibió los sacramentos y otros auxilios espirituales, la porción canónica se dividirá entre los párrocos de ambas iglesias, según disposición terminante del derecho (5).

Cuando el difunto acostumbró á recibir los sacramentos en una de las parroquias, entonces la porción canónica corresponderá á ella exclusivamente, según se desprende de las disposiciones legales (6).

(1) Cap. VIII, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

(2) Cap. I y II, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

(3) Cap. IX, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

(4) Cap. I, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

(5) Cap. II, tít. XII, lib. III *sext. Decret.*

(6) Cap. I, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. II, tít. VII, lib. III *Clement.*

Su fundamento.—La amplia facultad que la Iglesia concede á todos para elegir sepultura, no debía perjudicar los sagrados derechos de los párrocos, que administraron el pasto espiritual á sus feligreses y los acompañaron asiduamente en todos los trabajos de la vida; así que se ha dispuesto por aquélla hermanando y conciliando los derechos de los particulares y los del párroco, que se abone á éste la porción parroquial, porque digno es el operario de su merced (1) ó del alimento y sustentación (2); y los que fueron socios en las tribulaciones, deben serlo igualmente en los consuelos (3).

De qué cosas se ha de abonar.—La cuarta funeral ó porción parroquial habrá de abonarse (4) de=

- a) Las cantidades dejadas para misas.
- b) Bienes dejados en herencia á la iglesia elegida para sepultura.
- c) Legados hechos á una iglesia en testamento.
- d) Cosas dejadas por donación *causa mortis*.
- e) Dinero que se deja á un religioso para que lo distribuya á su voluntad, en cuyo caso se deducirá la cuarta parte de lo que dé á los regulares de su monasterio.
- f) Armas, paños de seda, etc. que acompañen al féretro (5).

Otros derechos del párroco con este motivo.—Es igualmente derecho del párroco, cuando el cadáver ha de ser enterrado fuera de la parroquia=

- a) Asistir á la traslación del cadáver.
- b) Llevar la estola, asperjar el cadáver y entonar la antífona *Exultabunt Domino* (6).

(1) Epíst. 1.^a *ad Timoth.*, cap. V, v. 18.—LUC., cap. X, v. 7.

(2) MATTH.: cap. X, v. 10.

(3) Epíst. 2.^a *ad Corint.*, cap. I, v. 7.

(4) Cap. II, tít. VI, lib. III *Extravag. comm.*—Cap. II, tít. VII, libro III *Clementin.*

(5) BOUX: *De Párocho* parte 4.^a, cap. X, pár. 3.^o, quest. 4.^a

(6) Declaración de la Sagrada Congregación de Ritos en 12 de Octubre de 1619, 15 de Setiembre de 1668 y 20 de Diciembre de 1828.

- c) Absolución al pueblo (1).
- d) Señalar el camino por donde ha de ir el acompañamiento (2).

Quién ha de abonarla.—Es obligación de la iglesia en donde se ha elegido sepultura, pagar á la parroquia del difunto la cuarta funeral, según las disposiciones legales (3), y esto tiene lugar, aunque la iglesia tenga el privilegio de enterrar en su cementerio á los que elijan allí sepultura (4), ó sea exenta (5), ó el sepelio se haya verificado en la iglesia catedral, ó la persona se haya trasladado á un monasterio, cuando se hallaba enferma, y de cuyo padecimiento falleció (6), ó se haya enterrado en panteón de familia.

Cosas excluidas de la porción canónica.—La cuarta parroquial no se debe de=

1.^o Las cosas que el difunto dejó á otras iglesias distintas de aquella en que se verificó el sepelio.

2.^o De lo que dejó á la iglesia en donde se depositó el cadáver para ser trasladado perpetuamente á otro punto.

3.^o De lo dejado sin fraude á la iglesia de su enterramiento, para ornamentos, fábrica, aniversario y culto divino perpétuo.

4.^o De la donación ó legado dejado en testamento ántes de elegir sepultura é independientemente de ella.

Cuándo no hay derecho á ella.—El párroco del domicilio del difunto no tiene derecho á exigir la porción canónica en los casos siguientes:

1.^o Si el difunto no pudo recibir en vida los sacramentos y otros auxilios espirituales de la iglesia parroquial por hallarse mucho tiempo sin párroco ó rector.

(1) Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en 23 de Marzo de 1619.

(2) Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en 15 de Setiembre de 1634.

(3) Cap. I, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. II, tít. XII, lib. III *sext. Decret.*

(4) Cap. X, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

(5) Cap. II, tít. VII, lib. III *Clementin.*

(6) Cap. IV, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

2.º Si la parroquia se hallaba entredicha por culpa de su párroco.

3.º Si el difunto era novicio en un instituto religioso habiendo ingresado en él cuando se hallaba sano.

4.º Si dejó legado á la iglesia parroquial en cantidad bastante para cubrir la porción canónica y bajo condición de que no pueda exigirse cosa alguna en concepto de cuarta parroquial.

5.º Si la iglesia donde se ha verificado el sepelio está especialmente exenta de abonar la porción canónica, por privilegio apostólico.

6.º Si existe costumbre, que exime de abonar al párroco la expresada porción canónica (1).

Si la porción canónica pertenece en su totalidad á la parroquia.— La cuarta parte de la porción canónica ha de abonarse por el párroco al obispo como ordinario del lugar según se desprende de las disposiciones canónicas (2), resultando de esto=

a) Que si el difunto había elegido en vida sepultura fuera de la parroquia en lugar no exento, habrán de abonarse de los emolumentos recibidos por la iglesia, en donde se verificó la sepultura, dos porciones canónicas, una episcopal (3), y otra parroquial (4).

b) Que según el caso anterior resultan al obispo dos porciones, una de la iglesia en que se verificó el funeral, y otra de la parroquia en que debió hacerse el sepelio.

c) Que si la sepultura tuvo lugar en sitio exento, el obispo sólo percibe la cuarta de la porción canónica correspondiente al párroco de la iglesia en que debió hacerse el funeral, si el difunto no hubiese elegido sepultura (5).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret. tít. XXVIII, párrafo 7.º

(2) Cap. XVI, tít. XXXI, lib. I Decret.

(3) Cap. XIV y XV, tít. XXVI, lib. III Decret.

(4) Cap. I y VIII, tít. XXVIII, lib. III Decret.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. XXVIII, párrafo 7.º, núm. 91 y sig.

ARTÍCULO III.

PRIVACIÓN DE SEPULTURA ECLESIASTICA.

Fundamento de la privación de sepultura eclesiástica.—La sepultura eclesiástica es una continuación de la comunión cristiana (1) entre los fieles, y por esta razón se hallan privados de ella como indignos, los que en vida carecían de esta comunión y fallecieron separados de la Iglesia (2).

Los no bautizados están excluidos de sepultura eclesiástica.—Como ninguno de estos ha ingresado en la Iglesia, es natural que no participe de los bienes que pertenecen únicamente á los miembros de esta sociedad, hallándose en este caso las personas siguientes:

- a) Los paganos, judíos y demás infieles (3).
- b) Los párvulos que mueren sin haber recibido el bautismo (4).
- c) Los catecúmenos, porque aún cuando la Iglesia ora por ellos, no han ingresado en la misma por el bautismo (5).

Si se hallan en igual caso los herejes y cismáticos, etc.—Las personas que sostienen con pertinacia algún error contra la fé ó niegan la debida obediencia al sumo pontífice ó á otras autoridades eclesiásticas quedan sujetas á esta pena, hallándose por lo mismo en este caso los siguientes:

- a). Los herejes y los que incurren en el crimen de herejía, sus encubridores, favorecedores y defensores (6), hallándose en igual caso los cismáticos (7).

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. IX, pár. 9.º

(2) C. XII, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

(3) C. XXVII, y XXVIII, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(4) *Ritual Romano, de exequiis.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XXVIII, párrafo 5.º, núm. 49.

(6) Cap. VIII y XIII, tít. VII, lib. V *Decret.*—Cap. II, tít. II, lib. V, *sext. Decret.*

(7) C. III, quæst. 2.ª, causa 24.

b) Los excomulgados vitandos, aunque hayan dado señales de arrepentimiento (1).

c) Los entredichos notorios y denunciados, á ménos que conste ó se presuma racionalmente que dieron señales de penitencia (2).

Usureros, ladrones y los que faltan al voto de pobreza.—En este concepto quedan privados de sepultura eclesiástica los siguientes:

a) Los usureros manifiestos, á ménos que hayan restituido ó dado caución idónea al efecto (3).

b) Los ladrones manifiestos ó violadores de la iglesia, si ántes de restituir mueren sin dar señales de arrepentimiento (4), hallándose en igual caso los incendiarios de iglesias (5).

c) Los que retienen injustamente los diezmos debidos á la Iglesia (6).

d) Los religiosos propietarios sin licencia del superior (7).

e) Los ladrones (8) que mueren cometiendo el delito.

Blasfemos y los que faltan al precepto pascual.—También están privados de sepultura los maldicientes ó blasfemos contra Dios ó alguno de los santos, principalmente contra la Santísima Virgen (9) y los que faltan voluntariamente al precepto de la confesión anual y comunión pascual (10).

(1) C. XXXVII, quest. 3.^a, causa 11. —C. I, quest. 2.^a, causa 34. —Cap. XII y XIV, tít. XXVIII, lib. III *Decret.* —Cap. XX, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(2) Cap. XXVIII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.* —Cap. XX, tít. XI, lib. V *sext. Decret.* —Cap. I, tít. X, lib. V *Clementin.*

(3) Cap. III, tít. XIX, lib. V, *Decret.* —Cap. II, tít. V, lib. V *sext. Decret.*

(4) Cap. II, tít. XVII, lib. V *Decret.*

(5) Cap. V, tít. XVII, lib. V *Decret.*

(6) Cap. XIX, tít. XXX, lib. III *Decret.*

(7) Cap. II y IV, tít. XXXV, lib. III *Decret.*

(8) Cap. II, tít. XVIII, lib. V *Decret.*

(9) Cap. II, tít. XXVI, lib. V *Decret.*

(10) Cap. XII, tít. XXXVIII, lib. V *Decret.*

Pecadores públicos y los que mueren en torneos

Están excluidos de sepultura eclesiástica los concubinarios y todos los pecadores públicos, que mueren sin dar señales de penitencia ó arrepentimiento (1).

Se hallan en igual caso los que mueren en torneos (2) si media peligro probable de muerte (3).

Suicidas, duelistas y públicos percusores de clérigos.—Incurren en dicha pena los siguientes:

a) Los suicidas, ó sea los que se causan la muerte con hie-
rro, veneno, lazo, ó arrojándose á un precipicio, río ó pozo, et-
cétera (4), si no se arrepintiesen antes de morir (5).

b) Los que mueren en desafío, aunque den señales de pe-
nitencia (6), entendiéndose que incurren en esta pena aunque
no medie sentencia judicial, ya la muerte se verifique en el sitio
donde se recibió la herida, ó fuera de él, ya el duelo sea público
ó privado, sin que obste para ser privados de sepultura ecle-
siástica, que antes de la muerte hayan dado señales ciertas de
penitencia y hayan obtenido la absolución (7).

c) Los públicos percusores de clérigos ó regulares, á ménos
que den señales de arrepentimiento antes de la muerte (8).

**Legislación particular de España sobre cemen-
terios.**—La legislación eclesiástica de España acerca de los
cementerios es en un todo igual y guarda la más perfecta ar-
monía con las disposiciones generales de la Iglesia, que se dejan
consignadas; mas á pesar de esto, es preciso conocer las dispo-

(1) C. XVI, quæst. 2.^a, causa 13.

(2) Cap. I, tít. XIII, lib. V *Decret.*

(3) Cap. II, tít. XIII, lib. V *Decret.*

(4) C. XII, quæst. 5.^a, causa 23.

(5) *Ritual Romano, De exequiis.*

(6) *Ritual Romano, De exequiis.*—*Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIX, *De Reformat.*

(7) BENEDICTO XIV: Const. *Detestabilem*, de 10 de Noviembre de 1752, párrafo 9.^o

(8) Cap. XIV, tít. XXVIII, lib. III *Decret.*

siciones civiles relativas á esta materia para que en su vista se proceda con seguridad y se eviten conflictos entre la autoridad eclesiástica y civil. De ellas hacemos un resumen que puede verse en el apéndice número 3.º de este tomo.

CAPÍTULO IV.

INMUNIDAD DE LAS IGLESIAS Y CEMENTERIOS.

ARTÍCULO I.

DE LA INMUNIDAD LOCAL.

Inmunidad eclesiástica y sus especies.—Se deja ya manifestado, lo que se entiende por inmunidad eclesiástica, y que esta se divide en—personal—local—y real (1).

Inmunidad local y su fundamento.—Se entiende por inmunidad local, *la exención concerniente á las iglesias y otros lugares sagrados ó religiosos.*

Esta inmunidad se funda en la reverencia debida á los lugares sagrados y prohíbe ciertos actos ó acciones en los mismos (2) que se expresarán más adelante.

La inmunidad local en los antiguos pueblos.—Todos los pueblos tuvieron sus templos ó casas dedicadas ó consagradas á los dioses en el mayor honor y reverencia; así que á nadie le era lícito violar el templo ni hacer en él cosa que desdijese de su destino.

La veneración con que los hebreos miraban al templo del Señor, se halla descrita en la historia de aquel pueblo y en los sagrados libros del Antiguo Testamento (3).

(1) Lib. II, tít. VI, cap. VII.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.* in lib. III. *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 1.º, núm. 3.

(3) Génesis, Cap. XXVIII, v. 17.—Exod., cap. III, v. 5.—Reg. cap. VIII, v. 13 y sig.; cap. IX, v. 3.—Machab., lib. II, cap. III, v. 12.

La inmunidad de las iglesias entre los cristianos.

—Los cristianos sobresalieron, como era justo, en este respeto y veneración á la casa de Dios, porque en sus iglesias no se ofrece la sangre de las reses que el pueblo judío ofrecía á Dios omnipotente, ni su culto tiene nada que ver con el de los gentiles politeistas, que adoraban como dioses á las obras de sus **manos** y á otros seres semejantes á ellos, que habían sobresalido en la maldad é iniquidad.

El culto de los cristianos en sus iglesias se dirige á Dios **criador** de todo lo que existe, y allí se ofrece el santo sacrificio del Cordero inmaculado, ó sea de Jesucristo nuestro Dios y Redentor (1).

Fué tan grande la veneración de los cristianos hácia las iglesias, que no consintieron nunca en ellas acto alguno ajeno al culto, ó que no tendiese de algún modo á la piedad; de aquí que=

a) Los obispos prefirieron perder la vida antes que consentir la profanación de las iglesias por los herejes.

b) Los reyes deponían la diadema al ingresar en las iglesias.

c) Todos los fieles se lavaban las manos y la cara al penetrar en la casa de Dios, para significar por este medio la pureza é inocencia con que todos debían acudir á aquel lugar lleno de majestad y reverencia.

d) Se quitaban el calzado y se arrodillaban é inclinaban la cabeza en el mismo vestíbulo de la iglesia.

e) Besaban y se abrazaban á sus puertas y columnas, y consideraron á las iglesias como lugar **segurísimo** para guardar las cosas y ponerse á cubierto las personas desvalidas de la violencia y malas pasiones de los demás.

Procede de derecho natural.—De los hechos consignados resulta que la inmunidad local procede de derecho natural, ó sea de un sentimiento grabado por Dios en el corazón humano, y que su origen no se encuentra en las leyes positivas,

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, sect. 2.^a, pár. 21 y sig.

siendo en su virtud derecho exclusivo de la potestad eclesiástica dictar las reglas conducentes para conservar en todo su vigor aquello que es propio de esta inmunidad (1).

Partes que comprende.—La inmunidad de las iglesias ó cementerios y demás lugares sagrados comprende dos partes:

La una prohíbe que se ejerzan allí actos profanos que desdican de la santidad y reverencia debida á estos lugares.

La otra pone en seguridad y á salvo las personas que se refugian en las iglesias.

Especies de actos prohibidos en las iglesias.—Los actos prohibidos en las iglesias y cementerios son de dos especies:

Unos son pecaminosos, como el—homicidio—efusión de sangre—actos de sensualidad—sepultura de infieles ó fieles excomulgados.

Otros son en sí lícitos, pero se prohíben en las iglesias por la especial reverencia debida al lugar sagrado. A esta especie pertenecen los actos, de que se trata en los epígrafes siguientes:

Actos judiciales prohibidos en las iglesias.—Se prohíben los actos judiciales, ya sean criminales (2) ó civiles (3), seguidos ante jueces legos, porque las causas eclesiásticas pueden agitarse en las iglesias ó cementerios, aunque siempre será más conveniente que se discutan en otro sitio (4).

Esta prohibición se extiende á las casas de la iglesia (5), porque se trata de lugares exentos de la jurisdicción seglar; á ménos que el prelado consienta en ello, lo cual no puede conceder respecto á los juicios en la misma iglesia (6).

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, sect. 2.^a pár. 24.

(2) Cap. V, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(3) Cap. II, tít. XXIII, lib. III *sext Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XLIX, párrafo 2.^o, núm. 79.

(5) Cap. I, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 78.

Bajo el nombre de juicios se comprenden las sentencias dadas por árbitros de derecho ó compromisarios, porque estos actos incluyen al estrépito judicial, que está prohibido en las iglesias; pero no se hallan comprendidos=

a) Los arbitradores ó amigables componedores, en cuanto que sus sentencias son meras transacciones.

b) Tampoco se comprenden otros actos extrajudiciales, como—dar tutores ó curadores al pupilo ó menor—conferir los grados de doctor ó maestro—sostener conclusiones en la ciencia sagrada.

Se prohíben los mercados y contratos.—Los mercados, ferias, contratos y negociación (1) están prohibidos en la casa de Dios; pero se considera lícita la venta de velas, rosarios y otras cosas que sirven á la piedad de los fieles, siempre que se verifique sin estrépito en el cementerio ó á la puerta de la iglesia; porque cesa la razón de esta prohibición, y por otra parte se funda en una costumbre casi universal.

Reuniones profanas y otros actos de igual índole.—Las reuniones profanas y políticas de todas clases, como los parlamentos, sesiones de las diputaciones provinciales ó ayuntamientos, academias meramente seglares, etc., están prohibidas en las iglesias (2); pero no se comprenden los sínodos ó concilios, ni otras reuniones en las que se trata de cosas pertenecientes á la religión, piedad ó reforma de las costumbres (3).

Se prohíben también las representaciones teatrales y espectáculos ó conciertos, á ménos que tengan por objeto la piedad (4).

Se prohíben en las iglesias ó cementerios toda clase de

(1) Cap. II, tít. XXIII, lib. III *sext. Decret.*

(2) Cap. II, tít. XXIII, lib. III *sext. Decret.*

(3) SCHMALZGRUBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. , XLIX, pár. 2.^o, núm. 83.

(4) C. I, dist. 92.—Cap. XII, tít. I, lib. III *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 22, *Decret. de observ. et exil. in celebrat. Missæ.*

actos profanos, como celebrar convites, exprimir las uvas, trillar las mieses (1), etc.

Custodia de alhajas en las iglesias.—Se prohíbe admitir en depósito y para su custodia en las iglesias, alhajas ú otros objetos de clérigos ó legos, a no ser en los casos de invasión de enemigos, incendio ú otras necesidades urgentes (2).

Si las iglesias podrán destinarse para cuarteles.—Las iglesias y cementerios no pueden destinarse para cuarteles ni para ningún otro uso militar; pero en caso de necesidad y mediante licencia del obispo podrán ocuparse por los militares como sitio á propósito para defenderse del enemigo (3).

Las iglesias, cementerios y monasterios se hallan exentos de la carga de alojamiento (4).

Disciplina particular de España sobre este punto.—La doctrina que se deja consignada respecto á la veneración debida á las iglesias y que excluye de ellas todo acto menos decente, es de aplicación universal, sin que pueda ser modificada en nada por disposición alguna en contrario, así que la legislación eclesiástica de España es la misma que se deja consignada en este artículo.

ARTÍCULO II.

DEL ASILO ECLESIASTICO.

§ 1.º

Del asilo eclesiástico en general y su extensión.

Etimología de la palabra asilo, y su definicion.

—La palabra *asylus* (asilo) procede de la griega *ασυλον*, que significa inviolable.

Se entiende por asilo: *La inmunidad de toda violencia ex-*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 85.

(2) Cap. II, tít. XLIV, lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 86.

(4) Cap. I, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

terna, ó sea el privilegio que impide la extracción de las iglesias á los que se refugian en ellas.

En qué consiste el asilo.—El asilo es lo que constituye la otra parte de la inmunidad de las iglesias y lugares sagrados, y en su virtud los deudores y reos de crímenes ó delitos, que se ponen al abrigo ó bajo el amparo de estos lugares, no pueden ser extraídos violentamente de ellos, atendida la santidad del lugar y la reverencia debida á la casa de Dios, bajo cuya protección se han puesto.

Su antigüedad.—Este sentimiento íntimo de respeto y veneración hácia los templos consagrados á la Divinidad hizo que los griegos y romanos guardasen esta consideración á los templos, altares y simulacros de sus falsas deidades.

Los hebreos constituyeron seis ciudades de asilo por mandato divino, y el altar del templo servía de garantía á los que se acogían á él (1).

El asilo de las iglesias y cementerios entre los cristianos data desde la más remota antigüedad.

Si procede de derecho natural.—Parece probable que el asilo de las iglesias no procede de derecho divino natural, porque el acto de extraer al malhechor ó criminal de las iglesias ó lugares sagrados no es en sí malo, ni como tal ha sido nunca considerado, en el mero hecho de haber sido extraídos violentamente de dichos lugares los reos de crímenes exceptuados de esta gracia, lo cual no habría podido hacerse lícitamente, si esta inmunidad procediese del derecho natural.

Además, el derecho natural es siempre y en todas partes, uno y el mismo, y el asilo eclesiástico ofrece gran variedad en cuanto á su extensión y aplicación según los tiempos y países (2).

Si es de derecho divino-positivo.—Tampoco puede sostenerse (3) que sea de derecho divino en la ley evangélica,

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. V, pár. 71.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.* tit. XLIX, párrafo 2.º, núm. 93.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. V, pár. 71.

porque no existe en las sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, ni en la tradición divina, dato alguno en que pueda sólidamente fundarse.

El asilo procede de derecho eclesiástico y civil.—Esta inmunidad debe considerarse como de derecho humano eclesiástico y civil, fundado en un sentimiento general de los pueblos; así que las leyes de Teodosio sobre el asilo no lo establecen, lo dan como existente y lo regularizan (1).

Disposiciones de la Iglesia acerca del asilo eclesiástico.—La Iglesia dictó no pocas disposiciones sobre esta materia (2), fundadas en la reverencia debida á las iglesias que el derecho natural y divino-positivo aconsejan.

Gregorio XIV en su constitución *Cum alias*, de 24 de Mayo de 1590, redujo á determinada forma, lo que se hallaba establecido en disposiciones anteriores (3).

Después se han dictado otras muchas reglas canónicas sobre el asilo eclesiástico, como las constituciones *Ex quo* de Benedicto XIII, en 8 de Junio de 1725.—*In supremo*, de Clemente XII, en 1.º de Febrero de 1734.—*Cum alias*, de Benedicto XIV, en 24 de Enero de 1744 y *Officii nostri*, en 9 de Marzo de 1750.—Breves de Pio VI en 18 de Abril de 1776, 11 de Diciembre de 1779 y 9 de Abril de 1782; porque estando fundado el derecho de asilo en la santidad y reverencia de las iglesias, era consecuencia legítima, que se rigiese por la autoridad de aquél á quien está encomendado el régimen eclesiástico (4).

Su conveniencia—Todos se hallan de acuerdo en que el asilo eclesiástico era conveniente dentro de ciertos límites, y

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, sect. 2.ª, párr. 27.

(2) C. VI, dist. 87.—C. VI, VIII, IX, XIX, XX, y XXXVI, quest. 4.ª, causa 17.—Cap. VI y IX, tit. XLIX. lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XLIX, párr. 2.º, número 94.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, sect. 2.ª, párr. 28.

él fué desde luego salvaguardia útil contra una justicia bárbara y sin garantías, lo mismo que contra el uso dominante en ciertos tiempos de vengar la sangre derramada (1).

Si fué útil en la extensión que llegó á dársele.—Los doctores católicos disienten sobre la conveniencia ó inconveniencia del asilo en la extensión y amplitud que las leyes le dieron.

Algunos escritores creen que fué perjudicial á la sociedad, porque de este modo quedaban impunes graves delitos; dando ocasión y aliento á los criminales para continuar en el crimen.

Además, dicen, la santidad del lugar sagrado no puede en manera alguna quedar lastimada por la extracción de los criminales (2) que allí se refugiaron.

La opinión contraria parece más probable, porque este privilegio del asilo eclesiástico está concedido á los lugares sagrados y religiosos en consideración á la religión y fé cristiana y de ninguna manera como favor á los delincuentes.

No es exacto ni puede decirse que los criminales quedan impunes, etc., porque están sujetos, á pesar de esto, á durísimas penas y castigos, y aún á la misma muerte, si se trata de crímenes horrendos que siempre se excluyeron de esta gracia (3).

Si puede abolirse por la costumbre.—Muchos escritores sostienen que no puede abolirse, porque la constitución del papa Gregorio XIV dice: *Quod si quis quacumque dignitate, et auctoritate præditus præmissorum, aut quovis alio prætextu, quidquam præter aut contra hujus... constitutionis tenorem attentare præsumpserit, ipso facto censuras et pœnas easdem incurrat.*

(1) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VIII, pár. 339.

(2) C. XLIV, quest. 5.^ª, causa 23.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XLIX, párrafo 2.^º, núm. 89 y sig.

Se fundan también en que el Concilio de Trento enseña que las sanciones apostólicas dadas en favor de personas eclesiásticas y de la libertad de la Iglesia contra sus infractores *exacte ab omnibus observari debere* (1).

Se apoyan, por último, en la constitución *Romulus Pontifex* dada por Urbano VIII en 5 de Junio de 1641: allí se dice que anula y reprueba todas las costumbres *contra immunitatem ecclesiasticam militantes* (2).

Parece, á pesar de esto, más probable la opinión contraria, porque todas las leyes humanas pueden abrogarse por costumbre contraria en el mero hecho de poder ser anuladas por otra ley escrita, lo cual existe de hecho en el caso presente, sin que tengan valor alguno las consideraciones citadas en defensa de la otra opinión, porque se refieren á las costumbres existentes en la época que se dictaron dichas disposiciones, y nó á las que pueden introducirse en lo sucesivo (3).

Si este privilegio es de estricta interpretación.—Esta cuestión puede suscitarse únicamente en el caso de que haya duda acerca de si un reo goza del derecho de asilo, ó está excluido de este privilegio.

Notables canonistas, como Covarrubias y el Cardenal de Luca, creen, que ha de interpretarse estrictamente, porque se trata de una inmidad derogatoria del derecho común y hasta del natural, en el que se prescribe que los delitos no queden impunes, y además—

a) Porque los malvados se hacen más audaces con este privilegio para cometer crímenes.

b) Porque la misma proximidad de las iglesias en las ciudades les serviría de amparo para poner en ejecución sus instintos criminales

(1) Sesión 25, cap. XX, *De Reformat.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XI.IX, párrafo 1.º, núm. 99.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ.*, ibid., núm. 100 y sig.

c) Porque en concurrencia del bien público y privado debe preferirse el primero (1).

Razones en que se apoya la opinión contraria.—La generalidad de los canonistas sostiene que el derecho de asilo se ha de interpretar latamente, y esta opinión parece más probable—

a) Porque se trata de una causa piadosa y favorable á la Iglesia, puesto que esta inmunidad fué establecida en consideración á la reverencia debida á las iglesias, y nó en favor de los criminales.

b) Porque el derecho de asilo es un privilegio y beneficio concedido por el príncipe espiritual y temporal, y se halla incluido en el cuerpo del derecho, el cual exige una interpretación lata ó extensiva.

c) Porque esta interpretación no perjudica á ninguno en particular.

Lugares que gozan del derecho de asilo.—Este derecho y privilegio, concedido en consideración al respeto y reverencia debida á la casa del Señor, comprende—

a) Las iglesias que han sido erigidas con licencia del obispo, aún cuando no estén consagradas (2) ni benditas, siempre que tengan las condiciones necesarias para este efecto, sin que obste para ello que hayan sido entredichas ó estén profanadas (*pollutæ*).

b) Los pórticos y atrios de la iglesia (3); los lugares y habitaciones adheridas á la misma, como la sacristía, campanario, etc. (4): extendiéndose hasta cuarenta pasos de la iglesia

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 102.

(2) C. VIII y IX, quest. 4.^a, causa 17.—Cap. V y IX, tit. XXXIX, lib. III *Decret.*

(3) C. XX y XXXVI, quest. 4.^a, causa 17.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XLIX, párrafo 2.^o, núm. 122 y sig.

catedral y treinta de las demás iglesias (1) pero esto ha quedado abrogado (2).

c) Los cementerios, sin que influya para nada el que se hallen próximos y contiguos á la iglesia ó en sitio distante de ella (3).

d) Los hospitales erigidos con autoridad del obispo, siempre que haya en ellos altar para celebrar el santo sacrificio de la Misa (4).

e) Los monasterios, conventos y colegios de los regulares con sus huertas, hospederías, establos, etc. (5).

f) Los oratorios, erigidos con autoridad del obispo y destinados perpetuamente al culto divino; pero no se comprenden por lo mismo los oratorios de casas particulares, aunque se celebre el santo sacrificio de la Misa (6).

g) La casa ó palacio episcopal (7), aunque el obispo se halle ausente, ó la silla episcopal vacante.

h) La casa de la parroquia en que habita el párroco—las casas de los canónigos y hermandades ó cofradías que están unidas á sus iglesias (8).

i) El derecho de asilo compete, por último, á todos los demás lugares que son considerados como religiosos por el derecho canónico, aunque no sean sagrados (9).

Si se extiende á las cruces colocadas en los caminos y lugares donde se hallan reliquias de santos.—El papa Urbano II extendió el derecho de asilo á las cruces co-

(1) C. VI y XXXV, quest. 4.^a, causa 17.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, sect. 2.^a, párr. 29.

(3) Cap. X, tit. XLIX, lib. III *Decret.*

(4) Cap. IV, tit. XXXVI, lib. III *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XLIX, párrafo 3.^o, núm. 108 y 128.

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. VII, sect. 2.^a, párr. 29.

(7) C. XXXVI, quest. 4.^a, causa 17.

(8) DEVOTI: *Inst. Canon.*, ibid.

(9) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., número 111.

locadas en los caminos, pero esta disposición no se halla incluida en el cuerpo del derecho, ni fué admitida en la práctica.

Respecto al lugar en que se hallan reliquias de santos, habrá de atenerse á las costumbres de las respectivas localidades (1).

Personas á quienes se extiende—Es regla general que todos los cristianos legos de ambos sexos, sin distinción de edad, estado y condición, pueden utilizar esta inmunidad, refugiándose en alguno de los lugares señalados, siempre que no sean reos de crímenes excluidos de esta gracia (2); y no obsta al efecto que sean excomulgados ó entredichos, aún cuando estén privados de entrar en la iglesia.

Si comprende á los infieles y herejes.—Los judíos, mahometanos y demás infieles gozan del asilo eclesiástico, según la opinión más probable, si se refugian en lugar sagrado y desean sinceramente convertirse á la fé (3).

Los herejes están excluidos del asilo, y han de ser castigados por su herejía, en cuanto que este delito se halla exceptuado; pero si se trata de otros delitos cometidos por ellos, fuera del de herejía, es probable, que si se refugian en lugar sagrado, gozan del privilegio é inmunidad del asilo, porque la ley no los exceptúa (4).

Sentido en que los clérigos gozan del asilo.—Los clérigos y religiosos gozan de esta inmunidad respecto á los jueces seculares, en cuanto que no están sometidos á su jurisdicción; y aún cuando pueden ser extraídos de lugar sagrado por sus jueces eclesiásticos para sufrir el castigo por vía de disciplina y corrección eclesiástica, no pueden ser extraídos de allí para entregarlos al brazo seglar, si el delito no se halla exceptuado.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 150 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 4.º núm. 154 y siguientes.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. III Decret.*, tít. XLIX, párrafo 4.º, núm. 160 y sig.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 157 y sig.

Esta doctrina parece la más probable entre las diversas opiniones que existen con respecto á este punto (1).

Su extensión á los esclavos, deudores y fugitivos.

—Los esclavos gozan de esta inmunidad con respecto al juez ó magistrado, porque su condición es accidental y se reputa libre para él; pero como no tienen esta consideración para su dueño de aquí que si el delito cometido es leve, puede ser obligado á volver á poder de su señor, siempre que éste preste (2) juramento de no castigarlo; y cuando el delito cometido es grave, debe exigirse por la autoridad eclesiástica caución bastante para la seguridad del esclavo, á fin de que no se abuse de él inconsideradamente por su dueño (3).

Los deudores, que se acogen á sagrado para evitar que se les encarcele, á petición de sus acreedores, gozan del derecho de asilo según la opinión más probable (4).

Los fugitivos de las cárceles, gozan de la expresada inmunidad, si se acogen á sagrado, según la opinión más probable, porque este derecho se concede á todos los que se acogen á sagrado (5).

§ 2.º

Delitos excluidos del asilo y efectos de éste.

Delitos excluidos del derecho de asilo.—El asilo eclesiástico recibió una gran extensión entre los pueblos que se repartieron el imperio romano, con no pocas ventajas para aquella sociedad; pero variadas las circunstancias de aquella época en tiempos posteriores, vino á ser perjudicial lo que antes era útil y muy conveniente.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 164 y sig.

(2) Cap. VI, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 4.º, núm. 170 y sig.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 175 y sig.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 180 y sig.



Por esta razón las leyes eclesiásticas excluyeron del asilo los delitos siguientes:

a) Los ladrones públicos (1), llamándose así para este efecto los que se presentan en la vía pública ó penetran por asechanzas, ó violentamente, en las casas, despojando á las personas de sus bienes é hiriendo ó matando á los que se resisten (2).

b) Los salteadores de caminos (3), que se distinguen de los ladrones públicos, en que aquéllos acometen á los viajeros y los despojan sin mediar herida, mutilación ó muerte (4).

c) Los taladores nocturnos de campos (5), llamándose así los que de noche y á propósito ponen fuego á las mieses, árboles ú otros frutos de los campos, siendo indiferente para el caso que esto se haga con ánimo de reportar utilidad, ó por venganza ú otro fin (6).

d) Los que cometen en la iglesia ó cementerio homicidio ó mutilación de miembros (7); sin que esto se extienda á los reos de otros delitos graves ó más criminales que el homicidio ó mutilación, según la opinión más probable (8).

e) Los homicidas proditorios, según la constitución del papa Gregorio XIV, ya se entienda por esta palabra la muerte del prójimo producida por asechanzas ó maquinación clandestina ú oculta, ya se produzca bajo la forma de amistad, sin preceder motivo alguno de odio, cuyo crimen es uno de los más atroces, porque el inocente no puede siquiera sospechar nada malo del que tiene por amigo (9).

(1) C. VI, quest. 4.^a, causa 17.—Cap. VI, tít XLIX, lib. III *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 5.^o, núm. 187.

(3) Cap. VI, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 192 y sig.

(5) Cap. VI, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 5.^o, núm. 195 y sig.

(7) Cap. X, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 198 y sig.

(9) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 220 y sig.

f) Los asesinos, ó sea los que mediante dinero ú otra cosa estimable en precio, recibido ó prometido, matan á alguna persona ó la mandan matar, áun cuando no se siga la muerte (1), comprendiéndose bajo la palabra asesino á los que prestan su auxilio y consejo, reciben ú ocultan, ó de cualquier modo defienden al asesino (2).

g) Los reos del crimen de herejía, según la constitución del papa Gregorio XIV, hallándose en igual caso los apóstatas de la fé cristiana y los cismáticos, cuando el cisma va acompañado de herejía (3).

h) Los reos del crimen de lesa majestad, según la citada constitución de Gregorio XIV.

i) Los judíos, que habiendo recibido la fé cristiana, desertan de ella —los que extraen violentamente de la iglesia á los acogidos á ella,—los que fingiéndose ministros de justicia entran en las casas y roban en ellas, matan ó mutilan—los administradores de montes de piedad ú otros lugares semejantes, que son reos de muerte por desfalcos en sus cajas, etc. (4).

Efectos del asilo eclesiástico.—Los efectos de esta inmunidad local pueden resumirse en lo siguiente:

a) Los que se refugian á lugar sagrado no pueden ser repelidos, ni extraídos violentamente (5).

b) No pueden ser allí encarcelados ni castigados (6).

c) El juez seglar no puede impedir que se suministre al reo el alimento y demás cosas necesarias, porque de lo contrario resultaría inútil esta inmunidad (7).

(1) Cap. I, tít. IV, lib. V *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 241 y sig.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 186.

(4) DEVOTE *Inst. Canon*, lib. II, tít. VII, sect. 2.^a, párr. 30.

(5) C. VIII, IX, X y XXXV, quæst. 4.^a, causa 17.—Cap. VI, tít. XLIX, libro III *Decret.*

(6) C. XXXV, quæst. 4.^a, causa 17.

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párr. 6.^o, núm. 269.

d) No puede privarse al delincuente acogido á sagrado de los bienes propios, que lleva consigo (1), ni ser condenado á muerte ú otra pena corporal grave por sentencia del juez, mientras se halla dentro de la iglesia ó en lugar sagrado (2).

e) El reo y la iglesia tienen derecho á resistir al juez seglar que procede á la extracción de lugar sagrado fuera de los casos exceptuados, y si á pesar de esto se le extrae, todas las diligencias y actuaciones seguidas son nulas (3), siendo obligación de aquél restituírle ante todo al lugar sagrado (4).

f) El juez eclesiástico no puede autorizar al magistrado seglar para extraer del asilo al reo de crimen no exceptuado, á ménos que medie licencia del Sumo Pontífice ú otro delegado suyo al efecto (5).

g) El refugiado á lugar sagrado no puede ser extraído de allí por el poder civil sin licencia de la autoridad eclesiástica aún cuando se trate de crimen exceptuado, debiendo además en este caso, ser llevado á la cárcel en nombre del obispo, y permanecer allí hasta que la autoridad eclesiástica resuelva, si el delincuente es reo de crimen exceptuado (6) ó si el lugar goza del privilegio de asilo.

Penas contra los que los violan.—Las personas que infringen las leyes indicadas respecto del asilo, están sujetas á pena pecuniaria y á penitencia pública (7), incurriendo además en excomunión mayor (8) reservada al Sumo Pontífice (9).

(1) C. VI y XXXV, quæst. 4.^a, causa 17.

(2) C. IX, quæst. 4.^a, causa 17. —Cap. VI, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(3) SCHAMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 272 y sig.

(4) C. VIII, quæst. 4.^a, causa 17.

(5) SCHAMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 284.

(6) SCHAMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 6.^o, núm. 305 y sig.

(7) C. XX y XXI, quæst. 4.^a, causa 17.

(8) C. VI, VIII, X y XXXV, quæst. 4.^a, causa 17.

(9) *Bula Apostolicæ Sedis, de excommunicationibus latæ sententiæ summo Pontifici reservatis*, pár. 5.^o

Esta censura comprende á los que con audacia temeraria quebrantan el asilo eclesiástico ó mandan quebrantarlo (1).

Observaciones.—Todo lo que se deja manifestado en este capítulo sobre el asilo eclesiástico ha sufrido grandes modificaciones en cuanto á los lugares que gozan de esta inmunidad y respecto á los delitos que comprende; lo cual ha de tenerse presente para proceder con acierto en esta materia, de suyo espionosa y expuesta á conflictos entre la autoridad eclesiástica y civil.

Las modificaciones introducidas en los últimos tiempos no han sido las mismas en todos los países; así que cada cual habrá de atenerse á lo que se halle dispuesto para el país en que vive.

El asilo eclesiástico en España.—El asilo eclesiástico en España está sumamente reducido en cuanto á los delitos que gozan de esta inmunidad y respecto á los lugares ó iglesias destinadas al efecto, que son una ó á lo más dos en las ciudades muy populosas (2). Los delitos que llevan aneja la pena de muerte con arreglo al código penal se hallan excluidos del asilo, y por lo mismo no ocurre hoy caso alguno de esta índole, porque los delincuentes saben, que este medio no ha de proporcionarles ventaja alguna.

(1) *Bula Apostolicæ Sedis*, ibid.

(2) Concordato de 1737, artículos 2.º, 3.º y 4.º, tit. IV, lib. I de *la nevísima Recopilación*.

CAPITULO V.

VENERACIÓN DE LOS SANTOS Y DE SUS RELIQUIAS É IMÁGENES.

ARTÍCULO PRIMERO.

DEL CULTO DE LOS SANTOS.

Culto, y sus distintos nombres.—Se entiende por culto: *El honor que se tributa á Dios, ó á las criaturas con relación á Dios.*

El culto ú honor es, según Santo Tomás, *cierto signo y testimonio de la excelencia que existe en el objeto honrado* (1).

Este honor ó culto se designa con los nombres de adoración—respeto—veneración—reverencia, ó servidumbre, que tienen diversa significación según el objeto á que se refieren (2).

Sus especies.—La diversidad de excelencia produce diversidad en el honor ó culto que se tributa á alguno, y de aquí sus distintas especies que son las siguientes:

Latria, que es el culto supremo y absoluto dado á Dios como ente necesario, eterno é infinito y criador de todas las cosas.

Dulia, que es el culto dado á los santos con relación á Dios por su perfección sobrenatural y su excelencia de gracia y gloria.

Hyperdulia, que es el culto tributado á la Virgen María con relación á Dios, por su gran excelencia (3) sobre todas las demás criaturas y tiene un lugar intermedio entre el culto que se dá á Dios y el que se tributa á los santos.

El culto de *latria*, *dulia* é *hyperdulia*, puede ser=

(1) *Summa Theolog. prima secunda*, quest. 2.^a, art. 2.^o

(2) PERRONE: *Prælect. Theolog. De Cultu Sanctorum*, cap. I.

(3) CHARMES: *Theolog. univ. de Deo incarnato*, dissert. 7.^a, cap. VII.

Absoluto, que es el dado á la misma Divinidad ó á los mismos santos.

Relativo, que es el tributado á las imágenes de Dios ó de los santos.

Culto de los santos.—Este honor tributado á los santos está recomendado en las sagradas escrituras (1), y en esto se funda la institución y celebración de las fiestas en honor de ellos (2), que data desde el principio de la iglesia.

Esta doctrina guarda perfecta analogía con lo que se practica entre los hombres. Siempre se acostumbró á honrar con culto civil á los hombres, que merecieron bien de la patria: se recuerda su memoria, se condecoran sus sepulcros, se les erigen estatuas; sus cenizas son llevadas con gran pompa.

Los hombres que ocupan el primer puesto del Estado, como los emperadores y reyes, son honrados con culto supremo civil, tributándose honores á los próceres y personas más allegados á los príncipes en consideración á su amistad y privanza con éstos.

Utilidad de su invocación.—El culto é invocación de los santos es de gran utilidad á los mortales, porque los santos que reinan con Jesucristo, ofrecen á Dios sus oraciones en favor de los hombres, á fin de alcanzarnos de Aquél beneficios por Jesucristo su Hijo, nuestro Señor, que sólo él es nuestro Redentor y Salvador (3).

Ellos, apoyados en los méritos de Jesucristo nuestro único mediador, nos alcanzan del mismo lo que pedimos, en cuyo concepto y en este sentido impropio son nuestros mediadores secundarios para con Dios.

(1) *Génesis*, cap. XVIII, v. 2; cap. XIX, v. 1.—*Exodo*, cap. XXIII, v. 20 y sig.—*Josué*, cap. V, v. 15.—*Lib. IV Regum*, cap. I, v. 13; cap. II, v. 23 y sig.; cap. IV, v. 37.

(2) PERRONE: *Praelect. theolog., de cultu Sanctorum*, cap. II.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 25, de *invocatione Sanctorum*.

Este medio empleado por los mortales para obtener lo que pedimos, se halla fundado en las sagradas Escrituras (1), que nos recomiendan la invocación de los santos y manifiestan á la vez su poderoso valimiento para con Dios en favor de los hombres (2); no ménos que en la tradición universal y constante (3) de la Iglesia, como que arranca de un sentimiento natural y se halla apoyado en la razón y en la misma analogía de lo que se observa en la vida.

Nadie que desea conseguir una gracia del rey ú otras personas, deja de servirse de intermediarios, mediadores ó intercesores, que se hallen en condiciones favorables, como la amistad y otras circunstancias, para alcanzar lo que solicita; y esto cabalmente es lo que tiene lugar en nuestras súplicas al Señor por medio de los santos.

Quiénes llevan este título.—La Iglesia honra la memoria de los que merecieron bien de ella, no reconociendo otros méritos á este efecto, que la piedad y el ejercicio de las sublimes virtudes cristianas. En este principio, señalado por el mismo Jesucristo, se funda para creer que aquéllos cuya memoria celebra en este mundo, están particularmente glorificados en el reino celestial (4).

Nunca se ha prescindido de la práctica de diligencias exquisitas para averiguar con toda precisión las virtudes, martirio ó milagros de aquéllos cuya memoria trata de honrarse en los altares, presentándolos á la consideración de los fieles como amigos de Dios y modelos que hayan de imitar.

Autoridades que lo concedían en la antigüedad.—La Iglesia está evidentemente autorizada para dar este honor; pero nó siempre fueron unas mismas las autoridades que inter-

(1) *Epist. ad Roman.*, cap. XV, v. 30.—*Epist. ad Ephes.*, cap. VI, v. 18.—*Epist. 1.^a ad Thesal.*, cap. V, v. 25.

(2) ZACHAR., cap. I, v. 12 y sig.—DANIEL, cap. X.—Lib. II MACHAB., capítulo XV, v. 12 y sig.—*Epist. 2.^a PETRI*, cap. I, v. 15.—*Apocalipsis*, cap. V, v. 8.

(3) PERRONE: *Praelect. theolog.*, de cultu Sanctorum, cap. III.

(4) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VII, cap. III, pár. 285.

venían en esta materia. La declaración de santidad (canonización ó beatificación) se hacía en los primeros tiempos por los obispos en los sínodos con su clero (1), y aún tomaban parte los fieles; pero casi siempre se circunscribía á los mártires, aunque después se extendió á otros en quienes no mediaba este título (2).

El declarado santo por el obispo era venerado como tal en la diócesis, cuyo culto se extendía á otras diócesis ó provincias, mediante aceptación de las respectivas iglesias, no siendo raro el caso de que los obispos mandaran al Sumo Pontífice las actas de su declaración para que se dignara aprobarlas y que el culto del declarado santo se celebrase en toda la iglesia (3).

Su reserva á la santa Sede.—Esta facultad se reservó después del siglo XI á la Santa Sede, no sólo respecto al culto en todas las iglesias, sinó también en las diócesis particulares, y consta que en tiempo de Alejandro III ya estaba así declarado (4).

Los sumos Pontífices no procedieron á la declaración de santidad sinó mediante un detenido examen de las causas, que se hacía en sínodos reunidos al efecto, ó fuera del sínodo con audiencia y consejo de varones ilustres en dignidad y prudencia (5), hasta que Sixto V instituyó la Sagrada Congregación de Ritos, que es la encargada de examinar y seguir estos procesos, según se deja ya manifestado en otro lugar de esta obra (6).

Grados distintos entre los que mueren en opinión de santidad.—Los nombres correspondientes á cada uno de estos grados son los siguientes—

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 1.^a, disertación 3.^a, cap. III.

(2) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VII, cap. III, pár. 285.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 1.^a, disertación 3.^a, cap. III.

(4) Cap. I, tit. XLV, lib. III *Decret.*

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 1.^a, disertación 3.^a, cap. III.

(6) Lib. I, tit. II, cap. IV, art. 3.^o, pár. 2.^o

Siervos de Dios, y son los que han fallecido con pública fama de santidad.

Venerables, llamándose así aquéllos cuya fama de santidad ha sido probada judicialmente.

Beatos, que son aquéllos cuyo culto ha sido permitido y aprobado en una diócesis, ciudad ó instituto religioso, mediante simple decreto pontificio.

Santos, son los siervos de Dios, que se mandan venerar en toda la Iglesia por supremo juicio del Papa, que recae sobre los que han sido beatificados (1).

Beatificación y canonización.—Se entiende por beatificación, *un acto ó permiso del Papa por el que permite ó concede el culto de un siervo de Dios en determinado lugar, provincia, reino ó nación, etc.* (2).

Se entiende por canonización, *la sentencia definitiva del Sumo Pontífice, en la que declara, que las almas de ciertos justos reinan con Jesucristo, y han de ser veneradas en toda la Iglesia con el culto debido á los santos* (3).

Lo relativo á la práctica de diligencias en la beatificación (4), y canonización de los santos corresponde á los procedimientos eclesiásticos y por esta razón no trato aquí de este punto.

ARTÍCULO II.

DE LAS RELIQUIAS DE LOS SANTOS.

Reliquias de los santos, y sus especies.—Se entiende por esta palabra: *Los cuerpos de los santos ó cualquiera parte de ellos, como los huesos, cabellos, dientes, ceniza ó polvo, en que se han convertido* (5).

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 1.^a, disertación 3.^a, cap. III.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles., univ.*, in lib. III Decret. tit. XLV, parte 1.^a, núm. 1.^o.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, id. ibid.

(4) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, parte 3.^a, sect. 1.^a.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 2.^o, núm. 40.

Se comprenden también bajo el nombre de reliquias los vestidos de los santos, paños, velos, etc. de que se sirvieron en vida, ó en que se envolvieron sus cuerpos, ó alguna parte de ellos, después de la muerte.

Las reliquias pueden ser—

Insignes, como la cabeza, brazo ú otra parte del cuerpo en la que el mártir padeció, siempre que se halle íntegra y no sea pequeña.

Notables, como el dedo, costilla, ó una parte no pequeña de un miembro principal.

Pequeñas, como las partículas incluidas en círculos pequeños ó concavidades del cuerpo, y que las personas piadosas llevan al cuello ó se conservan en oratorio (1).

Su veneración, y clase de culto que se les tributa.—Las sagradas Escrituras nos hacen mención de este culto tributado á las reliquias (2) de los santos y de los beneficios conseguidos por este medio; así que desde los primeros tiempos de la Iglesia se tributó culto á las mismas, según consta de innumerables monumentos de la antigüedad (3), y el Concilio de Trento, fundado en estas consideraciones, aprobó y recomendó el culto de las reliquias de los santos, porque fueron miembros vivos de Cristo y templos del Espíritu Santo (4).

Las reliquias de los santos pueden honrarse con culto de *dulia*, y éste puede ser público ó privado, de igual suerte que el culto de las personas á quienes se refieren.

Las reliquias de los siervos de Dios son dignas de solo culto privado.

Las de los beatificados obtienen culto público limitado.

(1) BOUVIER: *Inst. Theolog. De præceptis Eccles.*, cap. I, art. 2.^o, pár. 3.^o núm. 6.^o

(2) *Exodus*, cap. XIII, v. 19.—*Lib. IV Regum.*, cap. XIII, v. 21; capítulo XXIII, v. 17 y sig.—*Ecclesiasticus*, cap. XI.VIII, v. 14; cap. XLIX, v. 16 y sig. *MATTH.*, cap. IX, v. 20 y sig.—*Act. Apost.*, cap. V, v. 15; cap. XIX, v. 12.

(3) PERRONE: *Prælect. Theolog. De cultu Sanct.*, cap. IV.

(4) Sesión 25, *De invocat. venerat. et reliquiis Sanctor.*

Las reliquias de los santos canonizados reciben culto público en la Iglesia universal (1).

Condiciones necesarias al efecto.—Acerca de este punto habrá de tenerse presente:

I. Que basta para dar culto privado á dichas reliquias la autoridad de una persona proba y religiosa (2), sobre su legitimidad ó autenticidad.

II. Las reliquias de santos descubiertos en las catacumbas pueden exponerse á la pública veneración de los fieles, si han sido reconocidas por el obispo, con licencia de exponerlas (3).

III. Las reliquias de todo punto nuevas no pueden exponerse á la veneración pública sin autoridad de la Santa Sede (4), cuyo decreto ó licencia ha de ser presentado á la Sagrada Congregación de Indulgencias y Sagradas Reliquias para que pueda llevarse á efecto según se deja manifestado en otro lugar de esta obra (5).

IV. Cuando las reliquias antiguas de algún santo nuevamente descubiertas se hallan comprobadas por escritura ó instrumento público encontrado con ellas, bastará el reconocimiento y aprobación del obispo, para que se expongan á la veneración de los fieles (6).

Si queda duda acerca de su legitimidad ó verdad, entonces es necesario obtener la licencia pontificia para exponerlas á la pública veneración (7).

V. Si basta la aprobación del obispo, según el caso anterior, éste deberá ante todo consultar á teólogos y otros varones

(1) BOUVIER: *Inst. Theolog.* De *præceptis Eccles.*, cap. I, art. 2.^o, pár. 3.^o, núm. 2.^o

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLV, párrafo 2.^o, núm. 44.

(3) BOUVIER: *Inst. Theolog.*, id. *ibid.*

(4) Cap. II, tít. XLV, lib. III *Decret.*

(5) Lib. I, tít. II, cap. IV, art. 3.^o, pár. 8.^o

(6) *Concil. Trid.*, sesión 25, De *invocat., venerat., et reliq. Sanct.*

(7) *Concil. Trid.*, *ibid.*—Cap. II, tít. XLV, lib. III *Decret.*

probos y doctos. resolviendo después con arreglo á la verdad y piedad (1).

VI. Si surgiera alguna grave cuestión, entonces habrá de resolverse en el Concilio provincial (2) á pluralidad de votos (3).

VII. El obispo puede dar la aprobación, aun cuando se halle fuera de su diócesis, porque es acto de jurisdicción voluntaria.

Las reliquias, una vez aprobadas por decreto pontificio ó testimonio del obispo según los casos, no necesitan nueva aprobación, cuando se trasladan á otra diócesis, bastando que el obispo de ésta vea si son las mismas que están aprobadas por las autoridades expresadas (4).

VIII. Si las reliquias aprobadas se unen á otras no aprobadas, y no pueden distinguirse unas de otras, entonces ninguna de ellas puede proponerse al culto público, y habrán de colocarse en lugar decente, separándolas de aquellas otras que son verdaderas (5).

Exposición de reliquias, y si pueden venderse.

—Las reliquias que han obtenido la competente aprobación, pueden exponerse al culto público, según se deja manifestado; pero debe advertirse, que las reliquias antiguas se expondrán al pueblo sin extraerse de la caja en que se hallan colocadas ó encerradas (6), porque de no hacerlo así, podría ser motivo de retraer al pueblo del culto y veneración á las mismas, si observa que los huesos del santo ó santos se hallan completamente desnudos de carne y piel.

Se debe evitar toda especie de avaricia en la exposición de las mismas: de modo que todo pacto de precio por enseñarlas

(1) *Concil. Trid.*, sesión 25, *De invocat., venerat. et reliq. Sanct.*

(2) *Concil. Trid.*, sesión 25, *ibid.*

(3) C. XII, *distinct.* 56.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in *lib. III Decret.*, tit. XLV, párrafo 2.º, núm. 49 y sig.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.*, núm. 52 y sig.

(6) Cap. II, tit. XLV, *lib. III Decret.*

envuelve el gravísimo pecado de simonía, sin que por esto sea ilícito recibir las oblações ú obsequios hechos por los fieles voluntariamente y sin mediar pacto alguno (1).

Respecto á la venta de reliquias es preciso distinguir entre el precio pecuniario pedido=

- a) Por razón de la santidad del difunto.
- b) Por razón de la bendición ó fruto espiritual que haya de percibirse de ellas.
- c) Por razón del oro, plata ó piedras preciosas con que se hallan adornadas.
- d) En compensación de los gastos hechos para trasladarlas, traerlas ó adornarlas.

Únicamente puede venderse y exigirse precio por razón del oro, plata, etc. y de los gastos hechos en las mismas, porque todo esto es temporal y estimable en precio (2).

Su traslación y sustracción.—Los cuerpos y reliquias de los santos pueden ser trasladados de una á otra iglesia con permiso del obispo, porque este acto no puede ser considerado como *causa mayor*, y por lo mismo no se halla reservado al Papa; pero el obispo no está autorizado para ello á no mediar justa causa y el consentimiento del cabildo (3), porque es una especie de enajenación.

La sustracción furtiva de reliquias es un sacrilegio, á ménos que se hallen en países infieles; sin que obste al efecto, ni excuse la consideración de que se haga por causa de devoción, porque esta no puede ejercerse con perjuicio de otro (4), debiendo, por último, advertir, que incurren en excomunión *latæ sententiæ* reservada á la Santa Sede los que extraen, sin legi-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 56.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ., in lib. III Decret.*, tít. XLV, párrafo 2.º, núm. 58.

(3) C. XXXVII, distinct. 1.ª *De Consecrat.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. III Decret.*, tít. XLV, pár. 2.º núm. 65.

timo permiso, reliquias de los sagrados cementerios ó catacumbas de la ciudad de Roma y de su territorio, y los que les prestan auxilio ó favor (1).

ARTÍCULO III

DE LAS SAGRADAS IMÁGENES, LUGARES SANTOS

Y ROMERÍAS.

Sagradas imágenes, y culto debido á las mismas.—Se entiende por imágenes: *Toda pintura ó escultura que representa á los santos ó los misterios de la religión.*

La Sagrada Escritura recomienda el uso y veneración debida á las sagradas imágenes (2), y la Iglesia usó ya en los tres primeros siglos de las imágenes, según consta de muchos monumentos de la antigüedad (3), si bien su número fué exíguo en un principio (4), atendida la pobreza de la Iglesia; las circunstancias de aquella época, en que podían ser objeto de escarnio por parte de los gentiles (5), no ménos que peligro de idolatría en otros (6).

El uso de las imágenes es el medio de conservar y robustecer el recuerdo de los santos (7) y el de sus virtudes, y por eso S. Gregorio I decía que las imágenes eran los libros de los que no sabían leer (8).

Los Concilios VII y VIII generales sostienen la licitud del culto de las imágenes (9), y el Concilio de Trento declara que

(1) Bula *Apostolica Sedis*, pár. 15.

(2) *Exodus*, cap. XXV, v. 18 y sig.—Núm. cap. XXI, v. 8.—JOANN. cap. III, v. 14.—JOSUÉ, cap. VII, v. 6.—Lib. II *Regum*, cap. VI, v. 6 y siguientes.

(3) PERRONE: *Prælect. theol. de cultu Sanct.*, cap. V.

(4) BOUVIER: *Inst. theol. de Eucharistia*, parte 2.^a, cap. VI, art. 4.^o, pár. 8.^o

(5) DEVOTI: *Inst. Canon*, lib. II, tít. VII, pár. 13.

(6) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VII, cap. III, pár. 285.

(7) C. XXVIII, distinct. 3.^a *De Consecratione*.

(8) C. XXVII, distinct. 3.^a *De Consecratione*.

(9) BOUVIER: *Inst. theol. de Incarnat.*, cap. X, art. 3.^o

se deben tener y conservar principalmente en los templos las imágenes de Cristo, de la Virgen Madre de Dios y de otros santos, y que se las debe dar el correspondiente honor y veneración; nó porque se crea que haya en ellas divinidad ó virtud alguna por la que merezcan culto, ó que se las debe pedir alguna cosa, ó que se haya de poner confianza en ellas, como hacían los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos; sinó porque el honor dado á las imágenes se refiere á los originales representados en ellas (1).

Lugares santos, y su veneración.—Se dá el nombre de lugares santos, á los sitios en què nacieron ó habitaron aquéllos, ó en los que se conservan sus reliquias

El interés y veneración de la Iglesia para con las personas ilustres en la historia del cristianismo, se extiende hasta los sitios en donde se conservan sus reliquias. Los primeros cristianos visitaban la tierra consagrada por la pasión y muerte de nuestro Redentor; lo mismo que los sepulcros de los mártires sobre los cuales oraban.

Romerías, y su origen.—Se dá el nombre de romerías á las visitas hechas colectivamente á los sitios ó lugares santos.

De las visitas hechas en particular por los cristianos á los lugares santos surgieron las romerías, siendo las principales entre todas—las de Jerusalén—Roma—y Santiago de Compostela (2), que no excluyen otras infinitas conocidas en el orbe católico ó en distintos puntos y países.

Su forma y especies.—Estas visitas ó romerías á los lugares santos se llevan á efecto=

Por medio de procesiones á los puntos más próximos.

Por medio de peregrinaciones á lugares remotos.

Las romerías son—ordinarias—extraordinarias—generales—particulares—eclesiásticas—seculares ó mixtas (3).

(1) Sesión 25, *De invocat., venerat. et reliq. Sanct. et sacr. imag.*

(2) WALTER: *Derecho Eccl. univ.*, lib. VII, cap. III, pár. 287.

(3) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, título I, tract. 1.º, dissert. 2.ª, cap. II, art. 1.º, pár. 3.º

TÍTULO CUARTO.

EDIFICIOS DESTINADOS Á LA ENSEÑANZA Y BENEFICENCIA.

CAPÍTULO PRIMERO.

ESCUELAS DESTINADAS Á LA ENSEÑANZA.

ARTÍCULO I.

DE LAS ESCUELAS EN GENERAL Y DE LAS ELEMENTALES, SECUNDARIAS Y TEOLÓGICAS DE LAS IGLESIAS EN PARTICULAR.

Escuelas, y sus especies.—La Iglesia, como maestra de la verdad, profesó siempre el principio de que la doctrina opuesta á la verdad divina es falsa, porque la verdadera ciencia humana no puede repugnar á la fé divina (1) Bajo esta base procedió desde un principio á la predicación de las verdades reveladas con arreglo al mandato divino, é impugnó directa ó indirectamente las falsas doctrinas del politeísmo, sin que omitiera aquellas instrucciones particulares necesarias á los que habían de ingresar en el clero, á cuyo efecto tuvo sus escuelas, entre las que se distinguió la célebre escuela catequista de Alejandría, regida por Panteno Sículo, y después de él por Clemente Alejandrino y Orígenes (2).

Cuando la religión católica echó hondas raíces y llegó á concluir con el politeísmo é idolatría, sus escuelas florecieron dando sazonados frutos.

(1) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. V, cap. IV, pár. 294.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus eccles. univ.*, tomo II, disert. 2.^a, observ. 1.^a

Las escuelas creadas por la Iglesia se dividen en—primarias—secundarias—superiores.

Las escuelas superiores se dividen en—teológicas—seminarios—universidades.

Escuelas primarias ó elementales.—Estas escuelas las más humildes entre todas por su condición, son de grande y universal utilidad. La iglesia se propuso extender á todas las clases de la sociedad la doctrina y educación cristiana, acomodándola á la capacidad de todos; y á este efecto creó escuelas hasta en las poblaciones rurales de menor importancia en virtud del precepto divino: *Data est mihi omnis potestas in cælo et in terra. Eunt ergo docete omnes gentes* (1).

El Concilio Lugdunense, apoyado en las citadas palabras del Evangelio dice que la educación de la juventud cristiana corresponde á la Iglesia, como madre y maestra de los cristianos, sin exclusión de sexo ó edad (2).

La iglesia, usando del derecho que la compete, y cumpliendo con el mandato impuesto á la misma por su divino Fundador, procuró inculcar á los niños los primeros rudimentos de la ciencia en sus escuelas monacales (3) y parroquiales (4), creando además un maestro en todas las iglesias catedrales para que enseñase gratuitamente á los pobres (5), porque consideró propio de su misión hasta la enseñanza de la ciencia más sublime (6).

Esta solicitud de la Iglesia por la instrucción y enseñanza de los niños aumentó en proporción que crecía la ignorancia en el pueblo y la corrupción de costumbres; así que ha puesto siempre el mayor cuidado en la fundación y vigilancia de las escuelas populares de instrucción primaria, no descuidando la creación

(1) MATTH.: cap. XXVIII, v. 18 y 19.

(2) *Inst. Jur Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. II, cap. IV.

(3) THOMASSINO: *Vet et nov. Eccles. Discip.*, part. 2.^a, lib. I, capítulo XXIII, n.º 12.

(4) Cap. III, tít. I, lib. III *Decret.*

(5) Cap. I, tít. V, lib. V *Decret.*

(6) Cap. I, tít. I, lib. V *Clementin.*

de escuelas dominicales en beneficio de las personas entregadas á los trabajos corporales.

Muchos institutos é innumerables congregaciones religiosas de uno y otro sexo han sido creadas con este objeto, redoblando la Iglesia de este modo su licitud por la instrucción y educación religiosa de los párvulos de ambos sexos (1).

En estos últimos tiempos se ha excluido á la Iglesia de la dirección de estas escuelas, y hasta se la ha negado el derecho de intervenir en ellas respecto á la parte religiosa. Esta tendencia á emancipar por completo las escuelas primarias de la intervención del clero, ha dado ya sus perniciosos frutos (2).

La Iglesia, por medio del Sumo Pontífice, ha condenado la doctrina que justifica estos abusos del poder civil, en las proposiciones 45, 47 y 48 del *Syllabus*; cuya condenación se funda en los principios ya indicados y en la naturaleza misma de la sociedad cristiana (3).

Escuelas secundarias ó de segunda enseñanza.—

Se enseñaba en el Imperio Romano la gramática, retórica y filosofía en las escuelas municipales, cuyos maestros tenían su asignación y muchos privilegios (4).

Estos establecimientos, que desaparecieron con el tiempo, fueron reemplazados por las escuelas episcopales y de los monasterios (5), á las que concurrían clérigos, y legos (6); pero también estas desaparecieron con el tiempo, y los concilios del siglo XVI prescribieron su restablecimiento bajo la omnimoda inspección y gobierno de personas eclesiásticas.

Los enemigos de la religión han proclamado en los últimos tiempos la exclusión del clero en la dirección de estas escuelas, y su doctrina ha sido condenada por la Santa Sede con arreglo

(1) Véase el lib. II, tít. V y sig. de esta obra.

(2) WALTER: *Derecho Ecles. univ.*, lib. VII, cap. VI, pár. 330.

(3) FLORIAN RIESS: *El Estado moderno y la Escuela cristiana*.

(4) WALTER: *Derecho Ecles. univ.*, lib. VII, cap. VI, pár. 331.

(5) WALTER: *Derecho Ecles. univ.*, lib. V, cap. I, pár. 197.

(6) THOMASSINO: *Vet et nov. Eccles. discip.*, parte 2.^a, lib. I, cap. XCIII.

á los principios que se dejan consignados (1), sin que tales doctrinas tengan otro objeto que minar por su base la verdadera instrucción bajo la especiosa palabra de libertad (2).

Escuelas teológicas en las catedrales.—La escolartería es: *La escuela eclesiástica civitatense, establecida por la autoridad competente para la instrucción del clero de la ciudad.*

El Papa Alejandro III prescribió en el tercer Concilio de Letrán que en todas las iglesias catedrales se proveyera de un beneficio á un hombre sabio, que enseñase, sin estipendio alguno, á los clérigos de la misma iglesia y á otros eclesiásticos pobres *sacras litteras ac disciplinas* (3).

Esta disposición no se llevó á efecto, y por ese motivo Inocencio III confirmó en el Concilio IV de Letrán el decreto de Alejandro III, ordenando además que se designe un teólogo en todas las iglesias metropolitanas para que enseñe las sagradas letras y todo lo que concierne á la cura de almas, señalando al efecto la renta que debía percibir (4).

El Concilio de Basilea extendió la disposición de Inocencio III á todas las iglesias catedrales, y el Concilio Tridentino amplió este decreto á las colegiatas situadas en algún lugar insignie, ordenando que se proveyese en dicho maestro la prebenda que primero vacase (5).

Dispuso asimismo que se enseñasen públicamente las sagradas letras en los monasterios, si pudiese hacerse cómodamente.

Por último, el papa Benedicto XIII dictó nuevas disposiciones acerca de esta prebenda de Lectoral (6).

El oficio propio del lectoral consiste en enseñar y explicar públicamente en la catedral la sagrada Escritura (7).

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. I, tit. III, capítulo II.

(2) FLORIAN RIESS: *El Estado moderno y la escuela cristiana.*

(3) BENEDICTO XIV: *Inst.* 57, núm. 2.^o

(4) BENEDICTO XIV: *Inst.* 57, núm. 2.^o

(5) Sesión 5.^a, cap. I *De Reformat.*

(6) BENEDICTO XIV: *Inst.* 57, núm. 3.^o

(7) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. II, cap. III, art. 3.^o

El papa Paulo V prescribió, que además de la Sagrada Escritura (1), se enseñase en los monasterios la lengua hebrea, caldea y árabe.

ARTÍCULO II.

DE LOS SEMINARIOS.

Significado de la palabra seminario, y su definición.—La palabra *seminarium* (seminario) que significa semillero ó plantel, ha sido usada desde muy antiguo; pero el Concilio de Trento, la empleó para designar los colegios destinados á la educación de los jóvenes aspirantes al ministerio sagrado y á la recepción de los órdenes, porque, en expresión de dicho Concilio, *hoc collegium Dei ministrorum perpetuum seminarium sit* (2).

Se entiende por seminario: *La escuela eclesiástica diocesana, creada por la autoridad competente para la recta educación é instrucción de la juventud en las sagradas letras y santas costumbres* (3).

Sus especies.—Los seminarios se dividen en—*episcopales—monásticos—conciliares—mayores—menores—diocesanos—centrales*, etc.

Se entiende por seminarios episcopales, *las escuelas creadas en la antigüedad por los obispos para la recta educación ó instrucción de la juventud en las sagradas letras y santas costumbres*.

Se llaman seminarios monásticos, *las escuelas creadas en los monasterios para la recta educación*, etc.

Se entiende por seminarios conciliares, *las escuelas creadas en virtud de lo mandado por el santo Concilio de Trento para etc.*

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., *ibid.* art. 4.º

(2) Sesión 23, cap. XVIII *De Reformat.*

(3) *Inst. Jur Canon*, por R. de M., *part.* 2.ª, lib. II, cap. II, art. 1.ª, párr 1.º

Se llaman seminarios mayores, *las escuelas en que se dá la enseñanza de la teología y derecho canónico con la conveniente extensión.*

Se entiende por seminarios menores, *las escuelas episcopales en que se dá la segunda enseñanza.*

Se entiende por seminarios diocesanos, *las escuelas episcopales en que se enseñan las ciencias eclesiásticas y se confiere el grado de Bachiller en teología y derecho canónico.*

Se llaman seminarios centrales, *las escuelas episcopales en que se enseñan las ciencias eclesiásticas y se confieren los grados mayores en teología y derecho canónico.*

Origen de los seminarios.— Los seminarios, considerados en su esencia, datan en la Iglesia desde la más remota antigüedad, porque siempre hubo necesidad de instruir á los que aspiraban al sacerdocio, y de prepararlos convenientemente para el ejercicio de las sagradas funciones.

Benedicto XIV dice á este propósito, que nuestros mayores instituyeron los seminarios episcopales desde el momento que cesaron las persecuciones contra la Iglesia (1).

Los cánones nicenos, traducidos del árabe, presentan vestigios de esta institución, puesto que allí se prescribe á los co-repiscopos instruir á los ministros, distribuirlos por las iglesias y monasterios y que cuiden de que aprendan y se hagan idóneos para prestar los servicios necesarios.

Otro vestigio de los seminarios se encuentra en el Concilio II de Toledo, celebrado el año 527, en cuyo canon I se dice: *De his quos voluntas parentum à primis infantie annis clericatus officio manciparit. statuimus observandum, ut mox cum detonsi vel ministerio electorum contraditi fuerint, IN DOMO ECCLESIE SUB EPISCOPALI PRESENTIA, A PREPOSITO SIBI DEBEANT ERUDIRI* (2).

El Concilio IV de Toledo, celebrado el año 633, dispone

(1) *De Synodo diocesana*, lib. V, cap. XI, núm. 1.º

(2) VILLANUÑO: *Summa Conciliorum Hispanicæ*.

en el canon 24 lo siguiente: *Nilul enim incertius, quam vita adolescentium. Ob hoc constituendum oportuit, ut si qui in clero puberes, aut adolescentes existunt, omnes in uno conclavi atrii commorentur, ut lubricæ ætatis annos non in luxuria, sed in disciplinis ecclesiasticis agant, deputati probatissimo seniori, quem magistrum doctrinæ et vitæ testem habeant* (1), cuya disposición se halla consignada en el decreto de Graciano (2).

Otros concilios de la misma época hablan con igual claridad de los seminarios, y si apenas se hace mención de ellos en los siglos siguientes, fué debido á la erección de colegios de clérigos en los monasterios (3).

Obligación de erigirlos, y en qué iglesias.—El Concilio de Trento prescribe, que todas las iglesias catedrales y metropolitanas tendrán obligación de fundar un colegio junto á las mismas iglesias, ó en otro lugar conveniente, elegido al efecto por el obispo, y *alere ac religiosè educare et ecclesiasticis disciplinis instituere* á un número mayor ó menor de jóvenes de la misma ciudad y diócesis, ó de la provincia, si no fuera posible de la diócesis, en proporción á las necesidades de cada iglesia y á los medios con que cuente para atender á su subsistencia (4).

El papa Benedicto XIII inculca la obligación de crear estos establecimientos de educación y enseñanza en su constitución *Credite nobis* (5).

Benedicto XIV se expresa en igual sentido y previene que no pueda (6) eludirse este precepto en consideración á la existencia de universidades en donde los jóvenes pueden proporcio-

(1) VILLANUÑO: *Summa Conciliorum Hispania*.

(2) C. I, quest. 1.^a, causa 12.

(3) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. V, cap. XI, núm. 2.^o

(4) Sesión 23, cap. XVIII *De Reformat.*

(5) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. II, cap. II, art. 2.^o, pár. 1.^o

(6) *Epist. commonit. ad univ. episcopos*, pár. 2.^a

narse la enseñanza (1). Advierte, que únicamente podrá permitirse la erección de un solo seminario para dos iglesias ó diócesis, cuando la penuria de ellas no permita atender á esta necesidad (2) de otro modo, según lo dispuesto por el Concilio de Trento.

Fondos que habrán de utilizarse al efecto.—El Concilio de Trento dispone acerca de esta materia lo siguiente:

I. Los fondos que están destinados en algunas iglesias y lugares para instruir ó mantener jóvenes serán aplicados á levantar la fábrica del colegio, pagar su estipendio á los maestros y criados, alimentar la juventud, y otros gastos, bajo la dirección del obispo (3).

II. Los mismos obispos con el consejo de dos canónigos de su cabildo, de los cuales el uno será elegido por él y el otro por el mismo cabildo, y de dos clérigos de la ciudad, uno de ellos elegido por el mismo obispo y el otro por el clero, tomarán para el objeto expresado en el caso anterior=

a) Alguna parte de bienes concernientes á la mesa episcopal y capitular.

b) Alguna porción de rentas de cualesquiera dignidades, personados, oficios, prebendas, porciones, abadías y prioratos de cualquiera orden, aunque sea regular, ó de cualquiera calidad ó condición.

c) De bienes de los hospitales, que se dan en titulo ó administración, según la constitución del Concilio de Viena *Quia contingit*; y de cualesquiera beneficios aún de regulares, aunque sean de derecho de patronato, sea el que fuere.

d) De las rentas pertenecientes á las fábricas de las iglesias y otros lugares, lo mismo que cualesquiera otras rentas ó productos eclesiásticos, aún de otros colegios en los que no haya

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. II, cap. II, artículo 2.^o, párrafo 1.^o

(2) *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. XVIII *De Reformat.*

(3) Sesión 23, cap. XVIII, *ibid.*

seminarios de discípulos ó maestros para promover el bien común de la Iglesia, etc.

A quiénes se recibirá en los seminarios para su educación.—El mismo Concilio de Trento ordena acerca de este punto:

I. Que se recibirá el número necesario de alumnos de la ciudad y diócesis, ó de la misma provincia en su defecto, debiendo aquéllos ser=

- a) De doce años al ménos y de legítimo matrimonio.
- b) Que sepan leer y escribir.
- c) Que tengan voluntad de ingresar en el estado eclesiástico, y que su índole así lo manifieste (1).

d) Que sean principalmente elegidos para su educación en el seminario los hijos de padres pobres, sin que por esto se excluya á los ricos que reúnan las demás condiciones y paguen los gastos que ocasionen (2).

II. Que el obispo dividirá en distintas clases los alumnos, según su número, edad é instrucción, y es deber suyo=

a) Sacar de allí para ejercer el sagrado ministerio los que se hallen en condiciones al efecto.

b) Admitir otros en lugar de los que han salido, á fin de que el seminario sea un perpetuo plantel de ministros de Dios (3).

Disposiciones relativas á los que poseen beneficios con obligación de enseñar.—El citado Concilio de Trento dice en cuarto á esto: que los sujetos poseedores de beneficios ó pensiones con obligación de enseñar, hayan de hacerlo en estas escuelas por sí mismos, si fueren idóneos; y si no lo fueren, por sustitutos idóneos, que han de ser elegidos por los mismos propietarios y aprobados por los ordinarios (4).

(1) Sesión 23, cap. XVIII, *De Reformat.*

(2) Sesión 23, cap. XVIII, *ibid.*

(3) Sesión 23, cap. XVIII, *ibid.*

(4) Sesión 23, cap. XVIII, *ibid.*

Instrucción y educación que ha de darse en el seminario.—El fin de la erección de seminarios es =

I. La instrucción de los jóvenes, que ingresan allí, en las ciencias eclesiásticas.

II. La práctica de las buenas costumbres por parte de los mismos.

En cuanto á lo primero, se ordena que aprendan la gramática, canto, cómputo eclesiástico y *aliarum bonarum artium disciplinam*, aprendiendo de memoria la sagrada Escritura, los libros eclesiásticos, homilias de los santos y las fórmulas de administrar los sacramentos, en especial lo que conduce á oír las confesiones y las de los demás ritos y ceremonias (1).

Los concilios provinciales celebrados después del Concilio de Trento, fundados en lo dispuesto por el mismo, desarrollaron su pensamiento, prescribiendo=

- a) La enseñanza del catecismo en toda su extensión.
- b) La retórica y filosofía.
- c) Las lenguas.
- d) La historia y ciencias físicas.
- e) Teología dogmática y moral.
- f) Sagrada Escritura.
- g) Santos Padres.
- h) Oratoria y derecho canónico, etc. (2).

El mismo Concilio dice respecto al punto segundo, ó sea en cuanto á la práctica de las virtudes=

- a) Que asistan todos los días al santo sacrificio de la Misa.
- b) Que confiesen sus pecados á lo ménos una vez al mes, y reciban á juicio del confesor el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
- c) Que sirvan en la catedral y otras iglesias del pueblo en los días festivos.

(1) Sesión 23, cap. XVIII, *De Reformat.*

(2) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.ª, lib. II, cap. II, art. 3.º, pár. 1.º

Otras disposiciones del Concilio de Trento sobre los Seminarios.—Ordena igualmente que el obispo, con el consejo de dos canónigos de los más ancianos y graves, elegidos por él mismo, arreglará éstas y otras cosas que sean oportunas y necesarias, cuidando en sus frecuentes visitas, de que se observe lo mandado, y al efecto castigará gravemente á los díscolos é incorregibles, lo mismo que á los que dieren mal ejemplo, expeliéndolos del seminario, si fuere necesario (1).

Cuentas de su administración temporal.—Esta corresponde también al obispo por medio de las personas que al efecto designe, á las que recibirá cuentas todos los años en unión con dos individuos del cabildo y otros dos del clero de la ciudad, nombrados al efecto por el cabildo y el clero respectivamente (2), no pudiendo sin su consejo disponer cosa alguna en la administración temporal de las rentas ó bienes del seminario.

También el obispo necesita del consejo de los dos canónigos nombrados por él mismo, para la administración espiritual del Seminario y en este concepto habrá de pedirle para dictar los reglamentos, elección, admisión y expulsión de alumnos, designación de maestros, libros de enseñanza; así como de los consiliarios para lo temporal, dos de ellos del cabildo nombrados uno por el obispo y el otro por el Capítulo y otros dos del clero de la ciudad nombrados uno por el obispo y el otro por todo el clero de la diócesis para todo lo referente á la administración de las cosas temporales (3).

Régimen del seminario por religiosos regulares.

—Los institutos religiosos no quieren generalmente encargarse del gobierno de los seminarios, sinó bajo la condición de que el prelado de la Orden tenga facultad de nombrar rector al religioso que le parezca, con otras varias cláusulas que están en

(1) Sesión 23, cap. XVIII *De Reformat.*

(2) BOUJX: *De Episcopo*, tomo II, pág. 67 y sig.

(3) *Acta sanct. sedis*, tom. 9.º, pág. 201 y sig.—*Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.ª, lib. II, cap. II, art. 3.º pár. 3.º

oposición con lo mandado por el Concilio de Trento, y en su virtud el obispo no puede ponerlos al frente del seminario, sin que medie dispensa pontificia (1), de las leyes tridentinas sobre la materia (2).

Legislación particular de España acerca de los Seminarios.—El origen de los seminarios en España es antiquísimo y de ello nos ofrecen pruebas muchos documentos de la antigüedad. Los concilios II, IV y VI de Toledo contienen disposiciones muy importantes sobre la educación literaria y moral de estos establecimientos.

El poder temporal ha intervenido en muchos asuntos de los seminarios, y de ello tenemos pruebas inequívocas en las leyes recopiladas (3), pero el concordato de 1851 y el Real decreto de 21 de Mayo de 1852 determinan todo lo concerniente á esta materia.

Verdad es, que dichas disposiciones han sido quebrantadas algunas veces, efecto de las vicisitudes políticas y prueba de ello se encuentra en el decreto 22 de Octubre de 1868; pero en todo caso las disposiciones concordadas son la ley vigente en lo relativo á seminarios en España (4).

ARTÍCULO III.

DE LAS UNIVERSIDADES.

Significado de la palabra Universidad, y sus distintos nombres.—La palabra universidad expresa universalidad de estudios ó ciencias que en ella se enseñan á todos los que quieren concurrir á la misma; de modo que estas escuelas

(1) BENEDICTO XIV; *De Synodo diocesana*, lib. V, cap. XI, núm. 9.^o

(2) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., *ibid.*, art. 4.^o

(3) Ley 4.^a y 6.^a, tít. V, lib. IV de la *novísima Recopilación*.—Ley 1.^a y sus notas, tít. XI, lib. I, de la *novísima Recopilación*.

(4) Véase el apéndice, núm. 4.^o

no se han erigido en obsequio á los habitantes de un distrito ó provincia, sinó en beneficio de los fieles de todo el orbe católico.

Estos establecimientos de enseñanza se conocen también con los nombres de=

Estudios generales, porque se enseñan en ellos todas las ciencias en obsequio de todos los que quieren concurrir allí.

Academias, cuyo nombre procede de Ecademo ó Academo, quien tenia su escuela fuera de la ciudad de Atenas, en un lugar ameno, á donde concurrían muchos alumnos.

Su definición, y origen.—Se entiende por universidad: *Una escuela suprema en su orden, instituida por autoridad pública con ciertos privilegios para enseñar en ella todas las ciencias* (1).

La escuela de Academo y otras de la antigüedad, en las que se cultivaban las ciencias entonces conocidas, son una imagen de las universidades, y en ellas puede encontrarse el origen, aunque imperfecto, de estos establecimientos.

Fin y utilidad de las mismas.—El fin de las universidades es, enseñar las ciencias en toda su extensión, formar hombres doctos, conferirlos el título de doctores, y servirse de ellos utilizando sus conocimientos en provecho de la sociedad.

Las bulas de erección de estos establecimientos y los rescriptos dirigidos por los papas á las universidades ya existentes, prueban concluyentemente la utilidad de ellas en la época que estaban bajo la tutela de los sumos pontífices.

La fé católica y la Iglesia contaban con un cuerpo de doctores, que con la pureza de su doctrina y sus grandes conocimientos, pulverizaban las argucias y razonamientos contrarios á la verdad, se oponían al desarrollo y progresos de las herejías, reduciendo á la impotencia á sus autores. é impidiendo que sus errores se difundieran entre los fieles.

Ellos ilustraban al mundo con sus escritos, y contribuían

(1) *Inst. Jur. Ecclcs.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. II, cap. I, art. 1.^o, párrafo 2.^o

con sus consejos y luminosos dictámenes á que se pronunciasen sentencias justas, y diesen leyes sabias y cánones arreglados á las necesidades de los pueblos, con no poco provecho de la Iglesia y de los Estados.

Estas academias produjeron varones insignes en sabiduría, que llegaron por sus méritos y virtudes á ocupar la silla pontificia, honrar la púrpura cardenalicia y sillas episcopales, no ménos que otros elevadísimos puestos eclesiásticos y civiles.

Su erección y régimen.—Las universidades han de ser creadas por autoridad pública, que será el príncipe ó supremo poder temporal, si se trata de universidades civiles, y el Sumo Pontífice, si la universidad es eclesiástica; debiendo intervenir ambas supremas potestades cuando dichas escuelas revisten un carácter mixto (1).

Como las universidades constituyen un cuerpo moral, compuesto de muchos individuos, hay necesidad de una cabeza que lo rija con el nombre de rector, prefecto ú otro.

Había en las universidades, además del rector, otros jueces y oficiales, cuyos oficios y autoridad no puede determinarse de un modo general y común á todas ellas, porque cada una ofrecía en cuanto á esto una variedad especial; pero en casi todas había=

Un cancelario que ejercía funciones importantes, como conferir los grados literarios y expedir sus títulos á los graduados.

Un síndico que ocupaba un lugar importantísimo entre los oficiales de la universidad, pudiendo considerársele como promotor general que vigilaba sobre la disciplina del establecimiento y doctrina de cada uno de los profesores, entendiendo con otros diputados de las causas que surgían.

Existían además un crecido número de oficiales, de los

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. II, cap. I, art. 3.^o

que habla Benedicto XIV en su constitución *In supereminenti* (1).

Número de facultades.—Bajo la palabra facultades se comprenden los diversos estudios y ciencias que se enseñaban en las universidades. Las más antiguas de estas, que eran mixtas, ó sea eclesiásticas y civiles, comprendían las facultades siguientes:

Facultades de artes, y su número.—Estas son el preámbulo ó preparación necesaria para ingresar en las otras, y comprendían lo que en aquel tiempo se llamaba artes liberales.

Las facultades de artes ascendían al número de siete á saber:—gramática—retórica—dialéctica—aritmética—música—geometría y astronomía, y se hallan expresadas en estas palabras:

Lingua, tropus, ratio, numerus, tonus, angulus, astra.

Las tres primeras artes liberales se llaman *trivium*, y las cuatro restantes *quadrivium*.

Reglamentos especiales para los estudiantes de Bolonia y París.—Como estos estudios de artes eran requisito indispensable para emprender los de las otras facultades, de aquí que el número de alumnos en la facultad de artes fuese numerosísimo, y esta es la razón que hubo para que se diesen reglamentos especiales sobre jurisdicción en los estudiantes extranjeros, acerca de lo cual existe una ordenanza, dada por el emperador Federico I en 1158 respecto á la universidad de Bolonia, y un decreto dado por Felipe Augusto en 1200 respecto á la Universidad de París.

Los estudiantes extranjeros se clasificaron por naciones en Bolonia, y las naciones se reunían en dos cuerpos, de cismontanos el uno y de ultramontanos el otro, eligiendo cada uno su rector (2).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. II, cap. I, art. 3.^o

(2) WALTER: *Derecho Ecles. univ.*, lib. VII, cap. VI, par. 332.

También se reunieron por naciones en la universidad de París, y cada una de ellas comprendía á maestros y discípulos, pero sólo los primeros concurrían á las juntas y votaban.

En 1206 se contaban en la universidad de París cuatro naciones, á saber:—franceses—picardos—normandos—ingleses, y en lugar de éstos, que dejaron de asistir con motivo de las guerras entre franceses é ingleses, se contaron los alemanes (1).

Había un procurador al frente de cada nación, y los cuatro procuradores elegían rector, que era el jefe común de la universidad (2).

Facultad de Teología.—Esta era la más esclarecida por su objeto, y porque contaba con mayor número de alumnos. Tenía dos cátedras de prima y dos de vísperas para la teología escolástica—Cátedra de Sagrada Escritura—cátedra de Durando—cátedra de Santo Tomás—cátedra de Escoto (3).

Facultad de Derecho, que comprendía el estudio de los sagrados cánones, el cual se hizo primero por el decreto de Graciano, y después por las colecciones de Decretales que sucesivamente se fueron publicando.

Se hacía también el estudio del derecho civil por su íntima afinidad con el Derecho Canónico, y de aquí que esta facultad llevara el nombre de *facultas juris* (4).

Facultad de Medicina.—Nada se debe consignar aquí respecto á esta facultad, como meramente civil.

Como complemento de dichas facultades y principalmente de la Teología, debe hacerse mención del estudio de los idiomas hebreo, árabe y caldeo, que se prescribía como obligatorio en las universidades de la curia Romana, París, Osma, Bolonia y Salamanca, ordenándose que hubiera dos profesores para cada uno de estos idiomas (5).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. II, cap. I, art. 5.^o

(2) WALTER: *Derecho Ecles. univ.*, ibid.

(3) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., ibid.

(4) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., ibid.

(5) Cap. I, tit. I, lib. V *Clementin.*

Grados canónicos en las universidades.—Los grados canónicos, que se conferían en las universidades, eran los honores ó promociones hechas en favor de los escolares, que los merecían, como justo premio debido á la aplicación y talento.

Estos grados se conocían con los nombres de Bachiller, Licenciado y Doctor ó Maestro.

Requisitos para obtenerlos.—Los escolares que aspiraban á los grados académicos habían de reunir en sí las circunstancias siguientes:

a) Sexo masculino, porque se prohíbe á las mujeres enseñar(1).

b) Se exigía en algunas universidades la edad de 17 años con arreglo á las prescripciones del derecho romano; pero esto dependía de las costumbres particulares de cada universidad. Era de absoluta necesidad la circunstancia de ser hijo legítimo, hasta el punto de que los legitimados no podían obtener este honor (2).

c) Fé católica, cuya condición sobresale entre todas las demás, porque se trata de ciencias sagradas.

d) Buenas costumbres, porque la ciencia que no va acompañada de costumbres sin tacha, puede ser de funestas consecuencias en los maestros.

e) Examen científico, que se hacía con el mayor rigor, juramento y profesión de fé católica.

f) Los regulares necesitan además licencia de su prelado.

Privilegios de los doctores.—Los que eran condecorados con el grado de doctor en Teología, Derecho y Medicina se consideraban constituidos en dignidad (3), y por este solo hecho:

a) Eran contados entre los nobles y conseguían verdadera nobleza.

(1) C. XVII, quæst. 5.^a, causa 33.

(2) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. II, cap. I, art. 6.^a, párr. 2.^o

(3) Cap. III, tít. V, lib. V *Decret.*—Cap. II, tít. I, lib. V *Clementin.*

b) Existía en su favor la presunción de virtud, integridad é inocencia, debiendo ser promovidos á los oficios y dignidades eclesiásticas ó seculares con preferencia á los que no tenían este requisito.

c) Debía seguirse la interpretación dada por ellos á una ley dudosa, á ménos que fuese errónea, y su opinión debía seguirse á falta de ley.

d) Se daba fé al doctor versado en la práctica y anciano, que atestaba sobre la costumbre del lugar, estilo ú opinión común en el tribunal á que pertenecía, mientras no se probase lo contrario.

e) Se les debía especial honor y reverencia.

f) Se les eximía de dar alojamiento y de tributos y alcabalas.

g) Se castigaba sus delitos con más humanidad que á los plebeyos (1).

h) Disfrutaban además de privilegios especiales, según la respectiva facultad á que pertenecían (2).

CAPITULO II.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA.

Significado de la palabra hospital y su definición.—La palabra hospital (*hospitale*) designa el hospedaje que se dá gratuitamente en algún lugar; así que dicha palabra es general y común á toda especie de caridad.

Se entiende por hospital: *Todo lugar destinado para socorrer gratuitamente á las personas indigentes y desvalidas.*

Sus distintos nombres.—Los hospitales tienen diversos nombres según las distintas especies de necesidades corporales á que atienden, llamándose=

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. V, pár. 1.^o

(2) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VII, cap. VI, pár. 334.—SCHMALZGRUEBER: *Id.*, *ibid.*

Ξενοδοχεῖα (*xenodochia*), los lugares destinados propia y especialmente para recibir á los peregrinos (1).

Νοσοκομεῖα (*nosocomia*), los que tienen por objeto curar á los enfermos.

Πτωχοτροφεῖα (*ptochotrophia*), los destinados para los pobres.

Γερωντοκομεῖα (*gerontocomia*), que son los hospicios para los ancianos.

Βρεφτροφεῖα (*brephotrophia*), los establecidos para alimentar á los párvulos.

Ορφανοτροφεῖα (*orphanotrophia*), para educar á los huérfanos.

Παιδοτροφεῖα (*pædotrophia*), para la educación é instrucción de los niños.

Existen además otros muchos establecimientos para atender á las diversas necesidades de la humanidad (2).

Sus especies.—Los hospitales se dividen en—*eclesiásticos*—*profanos* ó *laicales*.

Se entiende por hospitales eclesiásticos, *los lugares contruidos con autoridad de la Iglesia* (3).

Por esta razón son considerados como lugares religiosos.

Se entiende por hospitales laicales, *los lugares erigidos por la piedad de los fieles sin intervención de la autoridad eclesiástica*.

Por lo mismo no son lugares propiamente religiosos, pero se cuentan entre los lugares piadosos (4) por el fin á que se destinan.

Especies de hospitales eclesiásticos.—Los hospitales eclesiásticos se dividen en—*seculares*—*regulares*—*erigidos en beneficio*—*encomendados en mera administración*—*exentos*—*no exentos*.

(1) Cap. III, tít. XXXVI, lib. III *Decret.*—Cap. II, tít. XI, lib. III *Clementin.*

(2) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. III, cap. I, art. 1.^o

(3) Cap. IV, tít. XXXVI, lib. III *Decret.*

(4) Cap. VIII, tít. XXIV, lib. III *Decret.*

Se entiende por hospitales seculares, *los lugares piadosos erigidos y gobernados por personas seculares.*

Se entiende por hospitales regulares, *los lugares piadosos dirigidos por los religiosos* (1).

Se entiende por hospitales erigidos en beneficio, *los lugares piadosos que se confieren en título á un determinado clérigo como verdadero beneficio eclesiástico, bajo la carga de emplear sus frutos, á excepción de su congrua sustentación, en uso de los pobres y personas miserables, según los estatutos de la fundación* (2).

Se entiende por hospitales encomendados en mera administración, *los lugares piadosos encomendados á un clérigo sin título.*

Por esta razón el clérigo que se halla al frente de esta clase de hospitales no puede ser considerado como beneficiado en su sentido propio, sinó como mero administrador.

Se entiende por hospitales exentos, *los lugares piadosos que no dependen del obispo en su administración temporal ó en nada.*

Tales son los hospitales de las órdenes militares (3) y los que se hallan bajo la inmediata protección de los reyes (4).

Se entiende por hospitales no exentos, *los lugares piadosos que están bajo la dependencia del obispo* (5) *ó ordinario de la diócesis.*

Origen de los hospitales.—Los hospitales datan desde el principio de la Iglesia (6), puesto que los mismos Apóstoles cuidaron de socorrer á las viudas y personas desvalidas con las

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. III, cap. I, art. 2.^o, párrafo 2.^o

(2) Cap. II, tít. XI, lib. III *Clementin.*

(3) Cap. II, pár. 2.^o, tít. XI, lib. III *Clementin.*

(4) *Concil. Trid.*, sesión 22, cap. VIII *De Reformat.*

(5) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., *ibid.*

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XII, pár. 1.^o

limosnas que recibían de los fieles (1), y de aquí el motivo de la creación de los diáconos (2), ya que los Apóstoles no podían atender por sí mismos al desempeño de esta parte del ministerio, sin desatender la predicación de la divina palabra.

La Iglesia fué tan solícita desde su principio en socorrer las necesidades de las personas desvalidas, que llamó desde luego bienes de los pobres á los que ella poseía (3), y cuando fué creciendo el patrimonio de las iglesias, se destinó á los pobres la cuarta parte de todas las rentas.

Los diáconos tenían el encargo de distribuirla (4) y repartirla por las casas de los necesitados.

Su propagación.—Cuando se dió la paz á la Iglesia, los obispos, como curadores de los pobres, emplearon sus economías y muchas donaciones y legados píos en la fundación de casas para pobres, enfermos, huérfanos, expósitos, ancianos y peregrinos necesitados (5), como medio más á propósito que la distribución por cada una de las casas, para socorrer á los pobres (6) y afianzar la tutela de los desvalidos (7).

Una vez construidas estas casas, y notada su utilidad, se extendió por las diversas iglesias la erección de hospitales; de lo cual da testimonio S. Gregorio Nacianceno cuando dice que Juliano el apóstata proponía á los infieles la construcción de hospitales y los exhortaba á esto poniendo á su vista el ejemplo de los cristianos (8).

Autoridad del obispo en los hospitales.—Muchos hospitales se fundaron por los particulares, sin que mediara la aprobación de los obispos, y los fundadores los reglamentaban

(1) *Act. Apostol.*, cap. IV, v. 34 y sig.

(2) *Act. Apostol.*, cap. VI, v. 1.º y sig.

(3) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. V, cap. IV, pár. 295.

(4) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VII, cap. VI, pár. 322.

(5) DEYOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XII, pár. 1.º

(6) *Inst. Jur. Canon.* por R. de M., part. 2.ª, lib. III, cap. I, art. 2.º, pár. 1.º

(7) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VII, cap. VI, pár. 323.

(8) SELVAGIO: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XV, pár. 6.º

á su idea, nombrando personas que cuidaran de su administración.

Justiniano sujetó toda esta clase de fundaciones á la suprema intervención de los obispos.

Como consecuencia de esta disposición, todos los hospitales estuvieron bajo la autoridad de los obispos hasta el siglo XIII; pero desde el siglo XIV, muchos de estos establecimientos se emanciparon de ella con grave daño del fin de su institución, como nota el Concilio de Viena (1), y al efecto dictó varias disposiciones con el objeto de remediar estos males, siguiendo el mismo camino el Concilio de Trento (2).

Disposiciones vigentes sobre esta materia.—La doctrina canónica vigente sobre esta materia puede resumirse en lo siguiente:

a) Los hospitales eclesiásticos no exentos ni bajo la inmediata protección de los reyes, están en todo sujetos á la jurisdicción ordinaria del obispo (3).

b) El obispo, como delegado de la Santa Sede, puede restablecer en toda su integridad la recta administración en los hospitales exentos (4).

c) El obispo puede visitar los hospitales que están bajo la protección inmediata de los reyes en lo relativo al culto divino solamente (5).

d) La administración temporal de los hospitales corresponde ordinariamente al obispo; pero como ellos no pueden desempeñarla por sí mismos, atendidas sus muchas obligaciones, de aquí la creación de oficiales y ministros para este cargo, que se ejer-

(1) Cap. II, tít. XI, lib. III *Clementin.*

(2) SELVAGIO: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XV, pár. 10 y sig.

(3) C. X, quest. 2.^a, causa 18.—Cap. III, tít. XXXVI, lib. III *Decret.—Concil. Trid.*, sesión 22, cap. VIII y IX *De Reformat.*—Sesión 25, capítulo VIII *De Reformat.*

(4) Cap. II, tít. XI, lib. III *Clement.—Concil. Trid.*, sesión 7, capítulo XV *De Reformat.*

(5) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. III, cap. II, art. 3.^o

ció en un principio por los diáconos (1), debiendo en todo caso ser personas probas é idóneas (2) que empleen las rentas del establecimiento en los usos á que se hallan destinadas.

e) El obispo puede exigir la rendición de cuentas de los administradores de hospitales y otros lugares pios (3) aún cuando sean erigidos sin intervención de la autoridad eclesiástica (4) á ménos que se disponga otra cosa en la fundación (5).

f) La administración del pasto espiritual á los acogidos en estos asilos corresponde sin duda alguna á la autoridad eclesiástica (6).

Establecimientos de beneficencia en España.—España siguió la legislación general de la Iglesia en lo relativo á establecimientos de beneficencia, según aparece en las leyes de Partida (7) y recopiladas (8).

Casi todos los establecimientos de beneficencia están sujetos en España á la autoridad eclesiástica ordinaria en cuanto á lo espiritual (9); y respecto á la parte económica y administrativa dependen de la autoridad civil (10).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. III, cap. III, art. 1.^o

(2) Cap. II, tít. XI, lib. III *Clementin.*

(3) Cap. II, tít. XI, lib. III *Clementin.*

(4) *Concil. Trid.*, sesión 22, cap. IX *De Reformat.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XXXVI, número 21.

(6) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. III, cap. III, art. 2.^o

(7) Ley 40, tít. V, partida 1.^a

(8) Títulos XXXVIII y XXXIX, lib. VII de la *novísima Recopilación*.

(9) Concordato de 1851, art. 25 etc.

(10) Leyes de 1837, 1849 y 1852.—Decretos de 22 de abril de 1873 y de 27 de Abril de 1875.—Real orden de 15 de Marzo de 1876—R. D. de 8 de Abril de 1876—R. D. de 28 de Enero de 1885—R. O. de 29 de Mayo y 9 de Diciembre de 1886—R. O. de 26 de Marzo de 1887 y Circular de 27 de Agosto de 1886—Resolución de 26 de Marzo y R. O. de 25 de Abril de 1889.

TÍTULO QUINTO.

BIENES TEMPORALES DE LA IGLESIA.

CAPÍTULO PRIMERO.

BIENES DE LA IGLESIA EN GENERAL.

ARTÍCULO I.

DERECHO DE LA IGLESIA PARA ADQUIRIR

BIENES TEMPORALES.

Bienes temporales, y facultad en la Iglesia para adquirirlos según el derecho natural.—Se entiende por bienes temporales de la Iglesia: *Las cosas muebles ó inmuebles y rentas destinadas á usos eclesiásticos.*

La Iglesia, reino visible de Dios en la tierra, necesita de bienes temporales para la consecución del fin á que está destinada (1) por su divino Fundador.

La Iglesia tiene facultad para adquirir y poseer bienes por derecho natural, en cuanto que es inherente á toda sociedad visible, en la cual hay necesidad de hacer gastos como medio para conseguir el fin de su institución.

La Iglesia es sociedad visible y perfecta, según se deja probado en otro lugar de esta obra (2); va anejo á ella la celebración del culto divino, la sustentación de sus ministros y el socorro de los pobres y personas desvalidas, para lo cual necesita bienes temporales (3).

(1) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 3.^a, cap. I, pár. 201.

(2) Lib. I, tít. I, cap. VII.

(3) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIII, pár. 1.^o

Su atribución en cuanto á esto por derecho divino positivo.—Este derecho de la Iglesia se halla además apoyado en la voluntad de su divino Fundador, en cuanto que la dotó de todo lo necesario para la consecución de su fin, y así consta, por otra parte, del ejemplo de Jesucristo (1), puesto que tenía lo necesario para alimentar á los Apóstoles, discípulos y pobres.

Este mismo ejemplo siguieron los Apóstoles (2). S. Pablo apoya este derecho de la Iglesia con las palabras siguientes: *Mea defensio apud eos, qui me interrogant, hæc est: Numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi?... quis militat suis stipendiis unquam? quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit? quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat?... si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus?... nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quæ de sacrario sunt, edunt; et qui altari deserviunt, cum altari participant? Ita et Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere* (3).

Esta doctrina se profesó siempre en la Iglesia, según consta por los santos padres (4), disposiciones canónicas (5), condenación de los errores de Wiclef en el Concilio de Constanza, y práctica universal y constante de la Iglesia; así que el sumo pontífice Pío IX condenó justamente la proposición siguiente: *Ecclesia non habet nativum ac legitimum jus acquirendi ac possidendi* (6).

Leyes civiles que limitan este derecho de la Iglesia.—Los poderes civiles de los distintos reinos cristianos se

(1) MARC., cap. VI, v. 37.—LUC., cap. IX, v. 13.—JOAN., cap. IV, v. 8; cap. XII, v. 6; cap. XIII, v. 29.

(2) *Act. Apost.*, cap. II, v. 44; cap. IV, v. 34.

(3) *Epist. 1.^a ad Corinth.*, cap. IX, v. 3 y sig.

(4) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. IV, cap. I, art. 1.^o

(5) C. XIII y XVI, quest. 1.^a, causa 12.—*Concil. Lugd.*, c. 12.—*Concil. Trid.*, sesión 22, cap. XIV *De Reformat.*

(6) *Prop. 26 del Syllabus.*

abstuvieron en los tiempos antiguos de ordenar cosa alguna contra la libre adquisición de bienes temporales por la Iglesia. Después prohibieron trasferir á la Iglesia el dominio de las cosas temporales inmuebles sin consentimiento ó licencia del príncipe ó potestad laical.

Estas disposiciones del poder civil se conocen con el nombre de *amortización*, y han estado vigentes en casi todos los países hasta estos últimos tiempos.

Si pueden justificarse. —Las disposiciones dictadas por los poderes temporales contra la libre adquisición de bienes por la Iglesia, no pueden en manera alguna justificarse —

1.^o Porque el derecho de adquirir y poseer bienes por la Iglesia para atender á sus necesidades es divino, según se deja probado, y en este supuesto, solo la Iglesia tiene el derecho de juzgar y conocer sobre esta materia, en lo relativo á la extensión y recta inteligencia del precepto divino, no ménos que sobre los bienes que la son necesarios para su congrua sustentación (1).

2.^o Porque la Iglesia es sociedad superior á las sociedades civiles, y en este concepto no pueden éstas determinar, ni juzgar sobre los medios que aquélla considere necesarios para la consecución de su fin, según se deja probado en otro lugar de esta obra (2).

3.^o Porque cohibe la libre voluntad de los fieles respecto á la disposición de sus bienes, sin que medie justo motivo para ello (3).

Su condenación. —La Iglesia, fundada en las razones que se dejan indicadas, ha condenado dichas leyes de amortización, é impuesto censuras contra sus autores (4).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. IV, cap. I, artículo 2.^o, prop. 2.^a

(2) Lib. I, tit. I, cap. VII y VIII.

(3) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 2.^a, lib. IV, cap. I, artículo 2.^o, prop. 2.^a

(4) Cap. I y V, tit. XXIII, lib. III *sext. Decret.* — *Bula de la Cua*, cap. XV.

Disciplina particular de España sobre esta materia.—La Iglesia de España adquirió cuantiosos bienes muebles é inmuebles desde la conversión de Recaredo hasta la invasión de los mahometanos, que los perdió casi por completo para volverlos á adquirir en cantidad mucho mayor en la época de la reconquista.

El rey D. Juan II en su ley de 1452 impuso á favor del Estado el quinto de los bienes raíces que se enajenasen á la iglesia (1).

La reina D.^a Juana y su hijo D. Carlos, prohibieron enajenar bienes raíces á las iglesias y monasterios.

Aparte de otras disposiciones remotas sobre este punto, se dictaron en tiempos posteriores no pocas disposiciones que limitan ó prohíben á la Iglesia adquirir bienes raíces (2).

Por el concordato de 1851 se reconoce á la Iglesia el omnímodo derecho de adquirir por cualquier título legítimo (3) y lo mismo se dispone (4) en el convenio de 4 de Abril de 1860.

ARTÍCULO II.

DE LA INVIOLABILIDAD DE LOS BIENES ECLESIASTICOS.

Inviolabilidad de los bienes eclesiásticos.—La Iglesia, como sociedad perfecta, distinta é independiente del Estado, tiene perfecto derecho para adquirir ó poseer bienes, y mediante esta facultad adquirió bienes con justos y legítimos títulos, teniendo en su consecuencia dominio propiamente dicho en ellos.

Ninguno, por otra parte, puede por autoridad propia y privada hacer que las cosas cuyo dominio corresponde á un in-

(1) Ley 12, tit. V, lib. I de la *novísima Recop.*

(2) Tit. V, lib. I de la *novísima Recop.*—Ley de 27 de Septiembre de 1820, restablecida en 30 de Agosto de 1836.

(3) Art. 41.

(4) Art. 3.^o

dividuo, pasen á manos de un tercero contra su voluntad, sin una manifiesta injusticia, que durará mientras dichos bienes no vuelvan á poder de su legítimo dueño.

En su consecuencia, todo el que usurpe ó atente de cualquier modo contra los bienes de la Iglesia, comete una injusticia y está obligado á la restitución de ellos, hallándose comprendidos en esto los mismos poderes civiles, porque se trata de una sociedad independiente y superior á todas las sociedades temporales (1).

La propiedad de la Iglesia en los bienes eclesiásticos es además sagrada, y por lo mismo incurren en un gravísimo sacrilegio los que atentan contra ella; puesto que se trata de bienes ofrecidos á Dios, destinados á un fin sagrado y puestos en manos de la sociedad espiritual para la dotación del culto divino é iglesias y para el sustento de los clérigos y pobres (2). Por esto Martino V dispuso que se preguntara á los sospechosos de la herejía de Wiclef: *Utrum credat, quod auferentes, tollentes et invadentes bona ipsa ecclesiastica sint tamquam sacrilegi puniendi, etiamsi male viverent persone ecclesiastice bona hujusmodi possidentes.*

Penas contra sus trasgresores.— El papa Gregorio IX impone la pena de excomunión á los invasores de los bienes eclesiásticos, como reos de sacrilegio (3).

El Concilio II Lugdunense impone esta misma censura *universos et singulos qui... bona ecclesiarum, monasteriorum aut locorum ipsorum vacantium occupare præsumunt, quancumque dignitatis honore præfulgeant* (4).

(1) *Inst. Jur. Canon.* por R. de M., part. 2.^a, lib. IV, cap. III, artículo 1.^o, prop. 1.^a

(2) C. 1, III, V y X, quæst. 2.^a, causa 12.—*Concil. Trid.*, sesión XXV, cap. I *De Reformat.*

(3) Cap. XVI, tit. II, lib. II *Décet.*

(4) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. IV, cap. III, artículo 1.^o, prop. 3.^a

El Concilio de Trento dispone que la excomunión impuesta á los detentadores de los bienes eclesiásticos sea *la'æ sententie*, y reservada al Sumo Pontífice (1).

La bula *Apostolicæ Sedis* impone la censura de excomunión *latæ sententie*, reservada de un modo especial al Sumo Pontífice, á los que usurpan la jurisdicción, ó secuestran bienes ó rentas que pertenecen á personas eclesiásticas por razón de sus iglesias ó beneficios (2).

A quiénes comprende. — Las censuras expresadas comprenden á los que se hallan en algunos de los casos siguientes:

a) Todos los que usurpan la jurisdicción eclesiástica, como si fuera propia de ellos (3).

b) Los secuestradores ó usurpadores de los bienes de algún beneficio eclesiástico, lo mismo que los secuestradores de las distribuciones cotidianas.

c) Todos los que usurpan los frutos, rentas ó productos de la Iglesia ó beneficio vacante.

d) Los que impiden la recepción de las rentas ó frutos de las iglesias ó lugares píos á aquellos á quienes pertenecen.

e) Los que usurpan los bienes ó derechos eclesiásticos por autoridad pública ó privada, ya sean clérigos ó legos.

Disciplina particular de España. — La iglesia de España ha sido privada en el presente siglo de sus bienes, que el Estado vendió como propiedad suya. Los ministros del culto quedaron en su consecuencia sin lo necesario para su sustentación y sin lo indispensable para el culto (4) y en su virtud se

(1) Sesión 22, cap. XI *De Reformat.*

(2) Art. 11.

(3) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., *ibid.*

(4) Leyes de 8 de Marzo de 1836—29 de Julio de 1837—30 de Junio, 21 de Julio y 5 de Septiembre de 1838—14 de Agosto y 2 de Septiembre de 1841—decreto de 26 de Julio de 1844—ley de 3 de Abril de 1845—ley de 6 de Junio de 1849.

dictaron varias disposiciones para atender á esta necesidad, hasta que se celebró el concordato de 1851, en el que se provee lo conveniente sobre este punto.

La revolución de 1868 desatendió esta sagrada obligación y el Real decreto de 15 de Enero de 1875 restableció lo dispuesto en el concordato (1).

ARTÍCULO III.

DE LA INMUNIDAD DE LOS BIENES ECLESIASTICOS.

Inmunidad real y sus especies.—Se entiende por inmunidad real, *la exención correspondiente á las cosas, que pertenecen á las personas ó lugares eclesiásticos.*

Puede también definirse, *la exención de las cosas y bienes temporales de las cargas comunes.*

Esta inmunidad exime las cosas eclesiásticas de los tributos, alcabalas y otras cargas que pesan sobre los bienes de los demás ciudadanos (2).

Los bienes pertenecientes á las personas ó lugares eclesiásticos pueden ser—*patrimoniales—cuasi patrimoniales—parsimoniales—y eclesiásticos.*

Se entiende por bienes patrimoniales, *las cosas que poseen los clérigos por otro título que el de beneficio, oficio ó ministerio eclesiástico*, como herencia, legado, donación, contrato ó su trabajo é industria.

Se llaman cuasi patrimoniales, *los bienes adquiridos por los clérigos como tales. en consideración á su trabajo*, como la predicación, enseñanza, funerales, distribuciones cotidianas, etc.

Entre los bienes cuasi patrimoniales se cuentan los parsimoniales, que son; *los bienes que los clérigos economizan de los*

(1) Puede verse también la circular de 2 y 28 de Enero de 1875.—Véase el apéndice núm. 5.^o

(2) Todo lo relativo á la inmunidad personal y local puede verse en el lib. II, tit. VI, cap. VII—lib. III, tit. III, cap. IV de esta obra.

frutos de sus beneficios correspondientes á su cóngrua sustentación.

Bienes eclesiásticos y sus especies.—Se entiende por bienes eclesiásticos, *las cosas que pertenecen á los clérigos ó á las mismas iglesias.*

Los bienes eclesiásticos pueden ser—*beneficiales y simplemente eclesiásticos.*

Se llaman *beneficiales, las rentas anuales que los clérigos perciben por razón de alguna dignidad ó beneficio eclesiástico conferido en título á los mismos.*

Se entiende por bienes simplemente eclesiásticos, *las cosas que pertenecen á las mismas iglesias, monasterios ú otros lugares píos por haberlos donado á ellos la liberalidad de los fieles.*

Estos bienes simplemente eclesiásticos muebles ó inmuebles, deben emplearse en la fábrica de dichas iglesias, pago de los ministros, limosnas á los pobres, curación de enfermos, etc.

Su exención.—Toda clase de bienes eclesiásticos se hallan generalmente exentos de las cargas civiles que pesan sobre los demás bienes, y de esta inmunidad se encuentran precedentes en la ley antigua (1) recomendándose en la nueva (2) no ménos que en muchas disposiciones canónicas, las cuales prescriben de un modo expreso la inmunidad de los bienes eclesiásticos (3).

Inmunidad de los bienes que pertenecen á la fundación y dotación de las iglesias.—Los bienes muebles ó inmuebles que corresponden á la fundación y dotación de las iglesias, se hallan exentos por derecho común de tributos y cargas civiles, si pasaron al dominio de la Iglesia con consentimiento de los señores de quienes eran tributarios (4).

(1) *Génesis*, cap. XLVII, v. 26.—Lib. I *Esdra*, cap. VII, v. 24.

(2) *MATTH.*, cap. XVII, v. 24.

(3) Cap. IV y VII, tít. XLIX, lib. III *Decret.*—Cap. I y III, tít. XXIII, libro III *sext. Decret.*—Cap. único, tít. XVII, lib. III *Clementin.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 1.º, núm. 20.

Esta exención se extiende á las cargas ó tributos públicos y privados (1), sin que esto obste para que haya obligación de pagar algún módico tributo, si el fundador de la Iglesia puso esta condición con consentimiento del obispo.

Inmunidad de los bienes que pasaron al dominio de las iglesias por otros títulos.—Los bienes que pasaron á poder de la iglesia por otros títulos se hallan exentos de nuevos tributos ó cargas civiles (2), porque el poder civil dejó de tener jurisdicción en ellos desde aquel momento (3).

Respecto á las cargas con que estaban gravados perpétuamente en virtud de dominio y pacto precedente á su trasmisión á la Iglesia, es indudable que no se hallan exentos de los tributos á que venían sujetos (4), porque las cosas se transmiten con las cargas afectas á las mismas, y por otra parte la donación pía y religiosa no es motivo para faltar ó invertir el orden de la justicia (5).

Si esta inmunidad se extiende á los bienes que antes de pasar al dominio de las iglesias se hallaban gravados con cargas impuestas por el Estado.—Los bienes que ántes de pasar al dominio de la Iglesia se hallaban gravados con cargas impuestas por la autoridad pública en virtud de su jurisdicción, quedan exentos de tales cargas desde el momento que pasan á poder de aquella; porque la jurisdicción se ejerce en las personas y en las cosas por la persona; y los tributos de que se trata no son cargas meramente reales, sino mixtas, no teniendo en su consecuencia la autoridad civil poder para imponer gravámen alguno á dichos bienes, puesto que se

(1) C. XXIV y XXV, quest. 8.^a, causa 23.

(2) Cap. IV, tit. XLIX, lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 21.

(4) C. XXII, quest. 8.^a, causa 23.

(5) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. IV, cap. III, art. 2.^o, párrafo 2.^o, prop. 4.^a

hallan en poder de la Iglesia, sobre la cual no ejerce jurisdicción (1).

Esta es la doctrina canónica sobre los bienes pertenecientes á las mismas iglesias, la cual se halla contrariada por no pocas disposiciones civiles de la época moderna (2).

Inmunidad en general de los bienes de los clérigos.—Los clérigos no tienen obligación á contribuir con sus bienes ni aún en los casos de necesidad ó utilidad de toda la nación, á no mediar consentimiento del Sumo Pontífice ó del Obispo, si no hay facilidad de acudir al Papa (3).

Si se extiende á los bienes procedentes de diezmos ó predios eclesiásticos.—Los bienes de los clérigos que proceden de diezmos ó predios eclesiásticos, se hallan exentos de todas las cargas ó tributos civiles, toda vez que el título de su posesión es sagrado y espiritual, y la persona á quien pertenecen está exenta de la jurisdicción civil (4).

Si dicha inmunidad tiene lugar en los bienes patrimoniales.—Los bienes *patrimoniales* de los clérigos están sujetos á las cargas impuestas á los mismos en virtud de pacto ó contrato anterior al acto de pasar á su poder, según se deja consignado respecto á los bienes de las iglesias en un caso igual (5).

Tampoco los bienes patrimoniales de los clérigos se hallan exentos de las contribuciones civiles en las grandes y extraordinarias necesidades del reino (6).

Los expresados bienes patrimoniales se hallan exentos en

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 1.º, núm. 22.

(2) Véase el apéndice núm. 5.º

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. núm. 33.

(4) Cap. X, tít. II, lib. I *Decret.*—Cap. XLIX, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. IV, tít. XX, lib. III *sext. Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XX *De Reformat.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 25.

(6) Cap. IV, y VII, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

los demás casos de pagar tributos y otras cargas impuestas por el poder civil, según las disposiciones del derecho (1), y así se ha decidido en repetidas declaraciones de la sagrada Congregación del Concilio (2).

Si los clérigos habrán de contribuir á las necesidades municipales.—Los clérigos tienen obligación de contribuir á prorrata con sus bienes para la reparación de puentes, muros, caminos y otras necesidades particulares del municipio; pero las autoridades seculares no pueden obligarlos á ello sino por medio de las autoridades eclesiásticas que ejercen jurisdicción en dichos clérigos (3).

Condiciones necesarias para gravar los bienes de los clérigos en los casos citados.—Para que los clérigos hayan de contribuir con sus bienes en los casos citados es necesario—

- a) Que la necesidad ó utilidad sea común á los clérigos y legos (4).
- b) Que sea la necesidad extraordinaria ó la utilidad evidente.
- c) Que no basten al efecto las facultades de los legos.
- d) Que medie el consentimiento del obispo con el del clero, sin que baste el del obispo con el del cabildo catedral.
- e) Que se cuente con el beneplácito del Papa (5).

Es de necesidad que medien todas las condiciones indicadas para que los clérigos puedan lícitamente y en conciencia pagar dichos tributos (6).

(1) Cap. IV y VII, tít. XLIX, lib. III *Decret.*—Cap. IV, tít. XX, lib. II *sext. Decret.*—Cap. I, tít. XXIII, lib. III *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. núm. 28.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XLIX, párrafo 1.º, núm. 32.

(4) Cap. IV y VII, tít. XLIX, lib. III *Decret.*

(5) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.º, lib. IV, cap. III, art. 2.º, párrafo 2.º, prop. 5.ª

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 44.

Quiénes se hallan comprendidos en la inmunidad real.—Esta inmunidad corresponde de derecho=

a) A las iglesias, monasterios y demás lugares sagrados y religiosos.

b) A los regulares de ambos sexos, comprendiéndose entre ellos los novicios, oblatos, etc.

c) A los clérigos sin excluir á los tonsurados, si no han contraído matrimonio, ni ejercen negociación prohibida á los mismos (1).

Si la inmunidad real procede de derecho divino.

—Los canonistas que sostienen ser de derecho divino esta inmunidad se apoyan en las razones siguientes:

a) Se fundan en (2) las palabras de Bonifacio VIII: *Cum igitur Ecclesie, ecclesiasticæque personæ, ac res ipsarum non solum jure humano, quinimo et divino, a secularium personarum exactionibus sint immunes* (3).

b) En el texto del Concilio de Trento, que dice: *Ecclesie, et personarum ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione, et canonicis sanctionibus constitutam* (4).

c) En las palabras de Jesucristo: *Ergo liberi sunt filii* (5), refiriéndose al pago de tributos por parte de los hijos de los reyes y muy especialmente al Hijo de Dios, hallándose también en este caso los clérigos, según aquellas palabras: *Dii estis, et filii excelsi omnes* (6).

d) En que si la inmunidad de que se trata, fuese de derecho humano, podría cesar por ley ó costumbre en contrario; lo cual no se admite por la generalidad de los teólogos y canonistas (7).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. XLIX, párrafo 1.º, núm. 51.

(2) THOMASSINO: *Vet. et nov. Eccles. discip.*, parte 3.ª, lib. I, cap. XXXIII.

(3) Cap. IV, tít. XX, lib. III, *sext. Decret.*

(4) Sesión 25, cap. XX, *De Reformat.*

(5) MATH., sap. XVII, v. 25.

(6) Salmo IXXXI, v. 6.º

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid, num. 56.

Si es de derecho natural.—Muchos canonistas dicen que dicha inmunidad es de derecho natural, en el sentido de que la equidad natural dicta que los bienes eclesiásticos deben gozar de alguna inmunidad y favor (1).

La inmunidad de los bienes patrimoniales de los clérigos se considera de este modo por algunos de los que defienden ser de derecho divino en cuanto á los demás bienes (2).

Si es de derecho de gentes.—Esta opinión coincide con la anterior; y dicen que es de derecho de gentes, en cuanto que todos los pueblos siguiendo el dictamen de la razón la establecieron, sin que pueda tener valor alguno en contra de esta opinión la práctica moderna de la mayor parte de los pueblos y estados, que han suprimido esta inmunidad y hasta se han apoderado de los bienes eclesiásticos, porque á ellos es aplicable lo que dice el Apóstol de aquéllos que despreciando la religión, sirvieron á las cosas temporales y criadas *dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt.... qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium: et coluerunt, et servierunt creature potius quam Creatori, qui est benedictus in sæcula* (3).

Si la expresada inmunidad será de derecho civil.—Muchos políticos sostienen que procede de derecho civil, y partiendo de este principio dicen, que la potestad civil concedió esta inmunidad, y puede por lo mismo revocar este privilegio.

Algunos canonistas sostienen también esta opinión, pero niegan que los príncipes se hallen en libertad para revocar lo que concedieron libremente una vez aceptado por la Iglesia, como sucede en la inmunidad de los bienes eclesiásticos (4).

(1) *Inst. Fur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. IV, cap. 3.^o, art. 2.^o, número 2.^o

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XX, par. 2.^o

(3) *Epist. ad Roman.*, cap. I, vv. 22 y 25.

(4) *Inst. Fur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. IV, cap. III, art. 2.^o, número 2.^o

En todo caso habrá de tenerse presente la proposición 30 del *Syllabus*, que dice: *Ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitas a jure civili ortum habuit.*

Origen de la inmunidad real según otros.—Sostienen muchos escritores que esta inmunidad es de derecho divino fundamentalmente en cuanto á su esencia, y de derecho eclesiástico en cuanto á su determinación y aplicación específica. Esta opinión se apoya en las razones alegadas por los defensores de las dos opiniones primeras, y es la más aceptable.

Penas contra los que quebrantan la inmunidad de dichos bienes.—Como la inmunidad de los bienes eclesiásticos es justa y legítima en cuanto que es de institución divina y eclesiástica, y tiene un fin honesto y útil, ó sea la decencia y honor de la religión; de aquí que los trasgresores de ella incurren en excomunión mayor *late sententiae* (1); pero habrá de tenerse presente que la bula *Apostolicae Sedis* no hace expresa mención de esta censura; lo cual es debido sin duda á que, efecto de las mayores necesidades de las naciones (2), y otras circunstancias, haya cesado esta inmunidad en casi todos los países (3).

(1) Cap. IV y VII, tít. XLIX, lib. III *Decret.*—Cap. II, tít. XX, lib. III *sext. Decret.*—Cap. únic., tít. XVII, lib. III *Clementin.*—Cap. únic., tít. XIII, lib. III *Extravag. commun.*

(2) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 3.^a, cap. I, pár. 205.

(3) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VI, cap. II, pár. 251.

CAPITULO II

DOMINIO, ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE LOS BIENES ECLESIAÍSTICOS.

ARTICULO PRIMERO

DEL DOMINIO DE LOS BIENES ECLESIAÍSTICOS.

Los clérigos son dueños de los bienes patrimoniales, y cuasi patrimoniales.—Los clérigos son dueños y tienen el dominio de los bienes patrimoniales y cuasi patrimoniales, pudiendo disponer libremente de ellos *inter vivos* y por última voluntad (1), porque el orden ó clericato no los hace incapaces de dominio, y porque las cosas recibidas como merced de su trabajo se les dan sin gravámen ó carga alguna (2).

Si tienen perfecto dominio en los frutos de sus beneficios.—Los clérigos tienen perfecto dominio, según la opinión más probable, en los frutos de sus beneficios, no sólo en la parte correspondiente á su cóngrua sustentación y necesaria para conservar la decencia propia de su estado, sinó también respecto á la parte supérflua de los mismos, según se desprende de muchas disposiciones del derecho (3).

Por otra parte, no consta que los fundadores y otros fieles hayan querido, ni quieran, que los clérigos reciban dichos fru-

(1) C. XIX y sig, quæst. 1.^a, causa 12.—C. II, quæst. 3.^a, causa 12.—Cap. I y IX, tit. XXVI, lib. III *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ., in lib. III Decret.* tit. XXV, párrafo 1.^o, núm. 6.^o

(3) *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. I *De Reformat.*—Sesión 24, cap. XII *De Reformat.*, C. XXVII, quæst. 2.^a, causa 12.—Cap. II, tit. XXII, lib. III *Decret.*

tos sólo como administradores, en cuyo caso está la presunción en su favor, porque *melior est conditio possidentium* (1).

En quién radica el dominio de los bienes eclesiásticos.—La gran cuestión entre los canonistas versa principalmente respecto á los bienes simplemente eclesiásticos, y dejando á un lado lo que se dice por algunos de que la potestad civil tiene el dominio de estos bienes, bajo cuyo pretexto se ha incautado de ellos, porque esta doctrina no es de canonistas, sino de depredadores sacrílegos (2), paso á consignar las distintas opiniones sobre esta materia.

I. Sostienen unos, que los fieles tienen el dominio de estos bienes, entendiéndose por la palabra *fieles* en los tiempos primitivos la iglesia episcopal, que según la organización de aquella época formaba con todos sus fieles un cuerpo único, con respecto á la vida espiritual, y en cuanto á los medios temporales.

Después que varió esta forma primitiva se considera á cada parroquia como un individuo, y á sus bienes como propios de una persona moral (3).

II. Considera á los pobres como sujeto en que reside el dominio de los bienes eclesiásticos (4).

III. Sostiene que el Sumo Pontífice tiene el dominio de estos bienes.

IV. Que pertenece este dominio á los santos, á quienes se han dedicado ú ofrecido.

V. Las corporaciones religiosas ó eclesiásticas que los poseen.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ., in lib. III Decret.,* tít. XXV, párrafo 1.^o, núm. 9.^o

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.,* lib. II, tít. I, tract. 2.^o, dissert. 1.^a, cap. I, art. 2.^o

(3) WALTER: *Derecho Eccles. univ.,* lib. VI, cap. II, pár. 246.

(4) C. LIX, quest. 1.^a, causa 16.

VI. La Iglesia universal (1).

VII. Que dicho dominio corresponde al mismo Jnsucristo, y se funda en los textos del derecho que llaman á los indicados bienes, *pecunia Christi* (2), *patrimonium Christi* (3), *res Dei* (4).

VIII. Que el dominio particular de los bienes simplemente eclesiásticos corresponde á las mismas iglesias, corporaciones ó cabildos de clérigos seculares ó regulares, y esta opinión, que es la comunmente seguida, se funda en varios textos del derecho (5), y en que estos bienes fueron cedidos y donados por los fieles á las mismas iglesias; monasterios ó corporaciones eclesiásticas, aunque con la obligación de emplear sus frutos ó rentas en provecho de las mismas iglesias, culto divino, salvación de las almas ó socorro de los pobres (6).

Este dominio particular de las mismas iglesias no excluye el dominio eminente del Sumo Pontífice en los bienes eclesiásticos de la Iglesia universal; ni la inspección de los obispos en los bienes eclesiásticos de las iglesias de sus respectivas diócesis (7).

ARTÍCULO II.

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES ECLESIÁSTICOS.

A quién pertenece la administración de los bienes eclesiásticos.—La administración de los bienes corresponde naturalmente á sus legítimos dueños, como pertenece á la integridad del dominio y es una consecuencia del mismo.

(1) Véase á PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 3.^a, capítulo I, párrafo 207.

(2) C. I y VI, quest. 2.^a, causa 12.

(3) Cap. XVI, tít. V, lib. III *Decret.*—Cap. XXXIV, tít. VI, lib. I *sent. Decret.*

(4) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. I, *De Reformat.*

(5) C. XI, quest. 1.^a, causa 12.—C. LXVIII, quest. 1.^a, causa 16.—*Concil. Trid.*, sesión 25, cap. III *De Regular.*—Cap. I, tít. XXVI, lib. III *Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles., univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XXV, párrafo 1.^o, núm. 4.

(7) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 3.^a, cap. I, pár. 207 y siguientes.

La iglesia en su virtud tiene perfecto derecho para administrar sus bienes por medio de clérigos ú otras personas designadas por ella, y el Estado no tiene facultad para intervenir en esto sin una manifiesta violación de la libertad é inmunidad eclesiástica (1); así que los Apóstoles recibían los bienes cedidos por los fieles y hacían la distribución de ellos en un principio, encomendando después este cargo á los siete diáconos, cuyo ejemplo siguió constantemente la Iglesia.

Los Sumos Pontífices y los concilios consideraron siempre como cosa santa la recta administración de estos bienes por la misma Iglesia con exclusión omnimoda de toda ingerencia de los legos en el patrimonio eclesiástico (2).

Quiénes son los administradores de ellos.—La Iglesia como cuerpo moral no puede administrar sus bienes, y necesita de personas ó individuos para este objeto.

Toda la doctrina relativa á este punto se resume en lo siguiente:

I. El romano Pontífice es el supremo administrador de los bienes de la Iglesia.

II. Los obispos administraban en los primeros tiempos los bienes eclesiásticos de sus respectivas diócesis, y á fin de que hubiese testigos de su administración, encomendaban toda esta parte al ecónomo ó arcediano con obligación de rendir cuentas al mismo (3).

Estos bienes formaban una masa común, y el obispo atendía con ella á sus necesidades, á las del clero, pobres y culto.

Después se dividió este cúmulo de bienes en cuatro partes (4).

Una para el obispo.

Otra para el clero.

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.^a, lib. IV, cap. IV, art. 2.^o

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, título I, tract. 2.^o, dissert. 1.^a, cap. III, art. 1.^o

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XIII, pár. 6.^a

(4) C. XXIII, XXV, XXVI y XXVII, quest. 2.^a, causa 12.

Otra para los pobres.

Otra para el culto.

En algunos puntos, como España, se hacían tres porciones (1), porque quedaba excluida la de los pobres, en cuanto que eran atendidos por el obispo (2), ó se suponía que el obispo y sus clérigos darían á los pobres cuanto pudiesen (3).

III. La división en cuatro partes no fué bastante para atender á las nuevas exigencias de los tiempos, y de aquí que los presbíteros se apropiaran las oblações hechas en sus iglesias y se dividiesen los frutos de los bienes inmuebles pertenecientes á las mismas: lo cual dió por resultado que ellos fuesen los administradores natos de estos bienes, si bien bajo la dependencia del obispo: pero como estas rentas se daban á los clérigos *jure beneficiario* durante su vida, volvian al obispo á la muerte de aquéllos (4).

IV. Los párrocos adquirieron con el tiempo el derecho de percibir las rentas provenientes de sus iglesias, y entónces este derecho quedó vinculado á las mismas iglesias ó títulos de modo que la persona agraciada con el beneficio ó título tenía por este mero hecho el derecho á percibir los frutos anejos á él, siendo, en su consecuencia, ellos los administradores de los bienes correspondientes al beneficio y de los que pertenecían á la fábrica de la iglesia ó al culto (5).

Esta nueva forma en la división y administración de los bienes eclesiásticos se hizo de disciplina general en la Iglesia; no sólo en cuanto á los párrocos, sinó también respecto á los demás clérigos, cabildos seculares y regulares ó monacales (6).

(1) C. VII del Concilio I Bracar., celebrado en 561.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIII, pár. 6.º.

(3) WALTER: *Derecho Ecclís. univ.*, lib. VI, cap. I, pár. 240.

(4) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 2.ª, lib. IV, cap. IV, art. 1.º

(5) HUGUENIS: *Exposit. meth. Jur. Canon. pars specialis.*, lib. II, título I, tract. 2.º; dissert. 2.ª, cap. IV.

(6) *Inst. Jur. Canon.* por R. de M., part. 2.ª, lib. IV, cap. IV, art. 1.º

Resulta de la doctrina consignada, que la administración de los bienes eclesiásticos corresponde en primer término al Sumo Pontífice respecto á la Iglesia universal, y á los beneficiados é iglesias particulares bajo la inspección (1) de sus respectivos obispos, sin que esto obste para que se encargue de ella á los regulares (2).

Clasificación de las distintas cosas de la Iglesia.

—Las cosas pertenecientes á la Iglesia pueden ser—*corporales é incorpóras*.

Se entiende por cosas corporales, *las cosas sujetas á los sentidos externos, como casas, campos, viñas, etc.*

Se llaman incorpóras, *las cosas no sujetas á los sentidos externos, aunque suministren la facultad de hacer alguna cosa sensible, como la servidumbre, acciones, obligaciones, derechos, etc.*

Especies de cosas corporales.—Las cosas corporales se dividen en—*inmuebles y muebles*.

Se entiende por cosas inmuebles, *las que no pueden trasladarse íntegras y sin deteriorarse ó destruirse de un punto á otro.*

Se llaman cosas muebles, *las que pueden moverse por sí mismas de un lugar á otro, como las cosas animadas; ó mediante un tercero, sin deteriorarse ni dividirse, como las cosas inanimadas.*

Sobre unas y otras pueden constituirse acciones y derechos, etc.

Clases de cosas inmuebles.—Las cosas inmuebles pueden ser tales—

Naturalmente, como una tierra ó casa.

Civilmente, porque se hallan destinadas perpetuamente al ornato ó utilidad de una cosa inmueble.

(1) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VI, cap. IV, pár. 266.

(2) *Praelect. Jur. Canon., in seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 3.^a, párrafo 2.^o

Entre los inmuebles de la primera clase hay unos de gran importancia y otros de exiguuo interés sobre cuya apreciación no puede darse regla fija.

Especies de cosas muebles.—Entre estas—unas pueden conservarse sin que se destruyan ó pierdan su mérito,—otras no se hallan en este caso.

Respecto á las primeras, unas se llaman *preciosas* por su especial esplendor, arte, antigüedad ó precio, como las alhajas de oro ó plata, imágenes, etc.,—otras no *preciosas*, como los ornamentos comunes y ordinarios para el culto.

Se ha dado una idea general de la palabra *cosas*, y resta hacer lo mismo respecto á la palabra *iglesia*.

Significado que tiene en este lugar la palabra Iglesia.—Cuando la palabra iglesia va precedida de estas otras—*cosas de*—se toma en un sentido latísimo, é incluye, no sólo los templos, capillas, oratorios y otros lugares destinados por las ceremonias sagradas al culto de Dios, veneración y memoria de los santos, por la celebración del santo sacrificio y los oficios divinos, sinó también cualesquiera otros lugares píos destinados por el obispo ú otra autoridad eclesiástica para ejercer en ellos obras de religión, piedad ó misericordia, como los monasterios, conventos, colegios, congregaciones, casas de los regulares de uno y otro sexo, hospitales, hospicios, etc. (1).

ARTÍCULO III.

ENAJENACIÓN DE LOS BIENES ECLESIASTICOS.

Enajenación en su sentido extricto y lato.—La palabra enajenación en su sentido extricto, es: *el acto de transferir á otro el dominio directo de una cosa, como la venta, donación, permuta, etc.*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XIII, párrafo 1.º

Tomada en un sentido latísimo es: *El acto de transmitir á otro el dominio directo y útil, ó uno de ellos, así como cualquier derecho in re.*

Sentido en que aquí se toma.—La palabra enajenación se toma aquí en este último sentido, según aparece de varios textos legales (1), porque la enajenación de las cosas eclesiásticas se prohíbe en cuanto que el bien y utilidad de la Iglesia así lo exige; lo cual tiene aplicación no sólo á la traslación de dominio, sino á cualquier otro derecho (2).

Cosas que no pueden enajenarse libremente.—Los obispos ó prelados y rectores de las iglesias no pueden enajenar libremente las cosas que se expresan á continuación (3):

- a) Cosas inmuebles de las iglesias (4).
- b) Cosas muebles preciosas (5).
- c) Usufructos por largo tiempo, censos ó rentas y pensiones anuales de las cosas inmuebles (6).
- d) Las acciones de cosas inmuebles ó muebles preciosas (7).
- e) Reliquias insignes de los santos (8).
- f) Las bibliotecas (9).
- g) Los siervos (10), á ménos que fuesen fugitivos ó benemé-

(1) Cap. V, tit. XIII, lib. III *Decret.*—Cap. I, tit. IV, lib. III *Clementin.*—Cap. único, tit. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(2) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VI, cap. II, pár. 248.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 9.^o

(4) C. XIX, XXXIV, LI y LII, quest. 2.^a, causa 12.—Cap. I, V y VI, título XIII, lib. III *Decret.*—Cap. I, VII y VIII, tit. X, lib. III *Decret.*—Cap. I y II, título IX, lib. III *sext. Decret.*—Cap. I y II, tit. IV lib. III *Clementin.*—Cap. único, tit. IV, lib. III *Extravag. commun.*—*Concil. Trid.*, sesión 22, cap. XI *De Reformat.*

(5) Cap. único, tit. IV, lib. III *Extravag. commun.*—C. XIII, quest. 2.^a, causa 12.

(6) Cap. I, tit. IV, lib. III *Clementin.*

(7) SCHWALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.* in lib. III *Decret.*, tit. XIII, párrafo 2.^o, número 29.

(8) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 3.^a, cap. III, pár. 221.

(9) SCHWALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.*, núm. 31.

(10) Cap. IV, tit. XIX, lib. III *Decret.*—Cap. IV, tit. XIII, lib. III *Decret.*

ritos de la Iglesia, ó el prelado compensase á ésta en su valor (1).

h) Los rebaños de ovejas, los bueyes y los jumentos (2).

i) Los árboles necesarios ó útiles á la finca; lo cual no tiene aplicación á los árboles que no son frutales y sirven de obstáculo á la finca para el aumento de frutos (3).

Actos y contratos á que se extiende la prohibición de enagenar los bienes eclesiásticos.—La palabra enajenación prohíbe á los clérigos los actos y contratos siguientes:

a) La donación, venta y permuta de las cosas eclesiásticas (4).

b) La constitución especial sobre ellos de prenda ó hipoteca (5).

c) La concesión en feudo ó enfiteusis (6).

d) La locación ó arrendamiento por más de un trienio (7) si produce frutos anualmente, porque si esto tiene lugar cada bienio ó trienio, entónces podrá arrendarse por seis ó nueve años respectivamente, según la opinión común de los canonistas (8).

e) No puede hacerse arriendo de un predio eclesiástico á un mismo tiempo, por tres años á uno y por otros tres años á otro, etc. (9); pero los frutos del beneficio pueden arrendarse

(1) C. LIV y LVII, quest. 2.^a, causa 12.—Cap. IV tít. XIII, lib. III *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 34 y sig.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 36.

(4) Cap. V, tít. XIII, lib. III *Decret.*—Cap. I, tít. X, lib. III *Decret.*

(5) Cap. V, tít. XIII, lib. III *Decret.*—Cap. únic., tít. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(6) Cap. V, tít. XIII, lib. III *Decret.*—Cap. únic., tít. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(7) Cap. I, tít. IV, lib. III *Clementin.*—Cap. únic., tít. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(8) DEVOTI: *Iust. Canon.*, lib. II, tít. XIX, pár. 2.^o, nota 2.^a

(9) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XVIII, párrafo 1.^o, núm. 30.

ultra triennium por el beneficiado, aunque el sucesor en el beneficio no tiene obligación de someterse á este contrato, ni aun en el caso de que el arriendo sea por ménos de un trienio (1).

f) La cesión en el pleito promovido sobre una cosa de la Iglesia, que se prohíbe enajenar (2).

g) La transacción mediante la cual se transfiera á otro una cosa de la Iglesia ó su posesión.

h) El compromiso, cuando de él pueda seguirse traslación de la cosa ó su posesión á un extraño; porque el que no puede disponer libremente de una cosa ni enajenarla, tiene incapacidad para comprometerla.

i) La unión perpetua de una Iglesia ó beneficio á otra iglesia ó beneficio, y el obispo necesita para hacer esta unión del consentimiento del cabildo (3).

j) La condición, ó sea todo pacto ó convenio por el cual puede originarse algún perjuicio á las cosas inmuebles ó muebles preciosas de la Iglesia (4).

Si el prelado ó rector de una iglesia podrá renunciar la herencia dejada á la misma.—Se cuestiona entre los canonistas, si se prohíbe ó nó al prelado ó rector de una iglesia la renuncia de la herencia ó legado á la misma; pero la opinión más común cree que puede hacerse esta renuncia, porque dicho acto no es propiamente enajenación de una cosa de la Iglesia, debiendo, ántes bien, considerarse como una no adquisición (5).

Si los bienes de una iglesia podrán hipotecarse, trasladarse á otra iglesia ó sujetarse á servidumbre.—Las cosas eclesiásticas pueden obligarse con hipoteca general, pero nó con hipoteca especial (6).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 36 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *De ret.*, tit. XIII, párrafo 1.º, núm. 9.

(3) Cap. II, tit. IV, lib. III *Clementin.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 10 y sig.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 13 y sig.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 20 y sig.

No pueden trasladarse los bienes ó rentas de una iglesia á otra, á ménos que se observen las solemnidades de la ley (1), porque dicho acto es una especie de enajenación; pero el obispo ú otro prelado con jurisdicción cuasi episcopal, tendrá facultad para ello en los casos siguientes:

a) Si media justa causa.

b) Si se provee de lo necesario al rector y ministros de la Iglesia cuyos bienes se transfieren á otra.

c) Si media el consentimiento del cabildo (2).

No puede constituirse servidumbre real ó personal sobre cosas que no pueden enajenarse.

Cosas que pueden enajenarse sin las solemnidades de Derecho.—Las cosas que pueden enajenarse libremente, ó sea sin observar las solemnidades del derecho, son las que se expresan á continuación:

I. Las cosas muebles no preciosas y que no pueden conservarse, como son las que se consumen con el uso ó se deterioran en breve tiempo, hallándose en este caso las frutas, el trigo, vino, aceite, etc. (3).

II. Las cosas inútiles á la Iglesia ó que la perjudican, como los siervos fugitivos (4), las casas cuyos reparos producen más gastos que productos ó utilidad (5), las tierras y otras cosas inmuebles de exiguo ó ningún producto (6).

III. Las cosas inmuebles, donadas á una iglesia ó monasterio, que no pueden retenerlas con arreglo á sus constituciones (7).

IV. Los bienes que desde tiempos antiguos se hallaban da-

(1) C. XLIII, quest. 1.^a, causa 16.—Cap. I, tít. XIII, lib. III *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, ibid., número 22 y sig.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. núm. 38.

(4) Cap. IV, tít. XIX, lib. III *Decret.*—C. LIV, quest. 2.^a, causa 12.

(5) C. XX y LII, quest. 2.^a, causa 12.

(6) Cap. VII y VIII, tít. XIII, lib. III *Decret.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 40.

dos en feudo ó enfiteusis, si vuelven á la iglesia pueden enajenarse libremente ó darse de nuevo en feudo ó enfiteusis (1).

V. Todas las cosas y bienes en los casos de una gran necesidad urgente, que no dá tiempo para acudir á la Santa Sede sin grave perjuicio ó daño de la Iglesia, porque entónces es lícito lo que ordinariamente no lo es (2); pero la enajenación hecha de este modo habrá de ratificarse después con las debidas solemnidades (3).

Observaciones. 1.^a Las cosas que se dejan indicadas, pueden enajenarse por los prelados, no obstante el juramento prestado de no proceder á este acto sin consultar al Papa, porque este juramento se refiere á la enajenación prohibida por el derecho (4).

2.^a El dinero percibido de rentas, frutos vendidos, arriendos, etc., puede desde luego gastarse: pero lo que procede de donación ó manda (5), de venta de una cosa inmueble ó mueble preciosa con el fin de comprar otras de la misma especie, no puede distraerse á otro fin sin las solemnidades canónicas (6).

Causas necesarias para la enajenación de los bienes eclesiásticos.—La enajenación de los bienes eclesiásticos inmuebles ó muebles preciosos está prohibida; pero esta prohibición no es absoluta, y en su virtud hay casos en que es lícito enajenarlos. De ellos se pasa á tratar brevemente:

Necesidad urgente de la Iglesia, como si se hallase gravada con una deuda que no pudiera satisfacer por otro medio (7), ó fuese indispensable para su reparación, ornamentos necesarios del culto y sustentación de sus ministros.

(1) Cap. II, tít. II, lib. III *Decret.*—Cap. únic. tít. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(2) Cap. IV, tít. IV, lib. I *Decret.*—Cap. IV *D. Regulis Jur.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 42.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 47 y sig.

(5) *Prælect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, parte 3.^a, sect. 4.^a, art. 3.^o, párrafo 1.^o

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 50 y sig.

(7) Cap. I, tít. IX, lib. III *sent. Decret.*—Cap. I, tít. IV, lib. III *Clementin.*

Utilidad evidente de la Iglesia (1), porque la enajenación está prohibida para evitar daños á la Iglesia, y en este caso la resulta un bien.

Piedad, como la redención de cautivos entre infieles (2), socorro de pobres, construcción de cementerio (3), edificación de templo ó necesidades de la nación (4).

Inutilidad de la cosa, como si el campo, viña, casa, etc., exigen reparos superiores á sus productos, ó se hallan á gran distancia de otras fincas de la Iglesia, pudiendo comprarse con su producto otra más próxima y útil (5).

Solemnidades que habrán de observarse.—La enajenación de las cosas eclesiásticas inmuebles ó muebles preciosas, se permite, si media alguna causa justa, según se deja indicado; pero es además necesario que se observen las solemnidades prescritas para la validez del acto, y son las siguientes:

I. El prelado habrá ante todo de tratar con su cabildo sobre la necesidad ó utilidad de la enajenación (6), cuyo acto precede al consentimiento del mismo, y se distingue de él como el principio del término.

Este acto preliminar es necesario cuando se trata de iglesias que tienen cabildo, bastando con las demás que su rector cuente con la licencia y consentimiento del obispo (7) ó vicario capitular, *Sede vacante* (8).

(1) C. LII, quæst. 2.^a, causa 12.—Cap. I, tít. IX, lib. III *sext. Decret.*—Capítulo I, tít. IV, lib. III *Clementin.*

(2) C. XV, XVI y LXX, quæst. 2.^a, causa 12.

(3) C. LXX, quæst. 2.^a, causa 12.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIII, párrafo 3.^o, núm. 57.

(5) C. XX, LII y LIII, quæst. 2.^a, causa 12.

(6) C. LII, quæst. 2.^a, causa 12.—Cap. I, tít. IX, lib. III *sext. Decret.*—Capítulo I, tít. IV, lib. III *Clementin.*

(7) C. LI, quæst. 2.^a, causa 12.

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIII, párrafo 4.^o, núm. 73 y sig.

II. Consentimiento de la mayor parte del cabildo ó corporación (1), porque el obispo y el cabildo constituyen un cuerpo para el gobierno y administración de las cosas eclesiásticas.

III El obispo necesita el consentimiento del cabildo catedral para enajenar cosas pertenecientes á iglesias inferiores á la catedral; pero si dichas iglesias son colegiadas ó conventuales, la enajenación puede hacerse por su propio prelado con consentimiento de su cabildo y del obispo, al cual se halla sujeta, sin necesidad de que intervenga el consentimiento del cabildo catedral, porque esta solemnidad no se expresa en el derecho.

IV. El rector de una iglesia que no tiene cabildo puede enajenar las cosas de aquélla con autorización del obispo (2), porque el consentimiento del cabildo sólo es necesario para el caso en que la enajenación se haga por el prelado (3).

V. Si la iglesia, cuyos bienes tratan de enajenarse, se halla vacante, necesita nombrarse un curador ó defensor por el Papa, si es iglesia catedral, ó por el obispo, si es iglesia inferior (4).

VI. Consentimiento del Sumo Pontífice (5) á ménos que se trate de cosa legada ó dada á iglesia ó monasterio, que no puede adquirir bienes inmuebles según sus constituciones, ó del caso de una grave ó urgente necesidad, que no da tiempo para acudir á la Santa Sede (6), lo mismo que si existe (7) legítima costumbre en contrario (8).

(1) C. LII, quest. 2.^a, causa 12.—Cap. I, III y VIII, tít. X, lib. II, *Decret.*

(2) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 3.^a, cap. III pár. 223.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIII, párrafo 4.^o, núm. 82 y sig.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 88.

(5) Cap. II, tít. IX, lib. III *sex. Decret.*—Cap. úníc., tít. IV, lib. III, *Extravag. commun.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIII, párrafo 3.^o, núm. 61 y sig.; par. IV, núm. 112 y sig.

(7) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 3.^a, cap. III, pár. 223.

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., párrafo 4.^o, núm. 122 y sig.

Efectos de la enajenación de cosas eclesiásticas.

—Cuando las cosas eclesiásticas han sido enajenadas con arreglo á las disposiciones de derecho, el dominio de ellas pasa naturalmente al que las compró, pero si faltaron los requisitos legales, ó alguno de ellos, entónces ha lugar á la anulación del contrato y á las penas fulminadas por el derecho contra los que enajenan los bienes de la Iglesia.

Toda la doctrina relativa á este punto puede resumirse en lo siguiente:

I. La enajenación de cosa inmueble ó mueble preciosa hecha mediante causa justa, sin las solemnidades de derecho, es nula en el fuero externo *ipso facto*, porque las solemnidades prescritas por la ley pertenecen á la forma de la enajenación de las cosas de la Iglesia, y el acto es nulo sinó se observa la forma que da el ser á la cosa (1).

Cuando se duda si se han ó nó observado las solemnidades de ley en la enajenación de las cosas eclesiásticas, y este defecto se alega en juicio por la parte contraria, habrá necesidad de probar el cumplimiento de este requisito, puesto que se trata de un hecho que no se presume si no se prueba; á ménos que haya mediado decreto judicial ó conste del consentimiento previo del cabildo, ó si ha transcurrido mucho tiempo desde que se hizo la enajenación, sin que nadie hasta entónces la haya impugnado, porque en estos casos se presume que se observaron todas las solemnidades legales (2).

II. Cuando la enajenación se hubiere hecho sin justa causa ó sin las solemnidades de la ley, ha lugar á la *acción personal* contra el prelado ó administrador que enajenó malamente la cosa, para que resarza de su propio patrimonio el daño causado (3); y á la *acción real* contra el poseedor de la cosa enajenada para que la restituya, porque se trata de un acto nulo é írrito (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 5.^a, núm. 129 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 146 y sig.

(3) C. XVIII, quest. 2.^a, causa 12.—Cap. III, tít. XXI, lib. III *Decret.*

(4) C. XXXIX, quest. 2.^a, causa 12.—Cap. IV, tít. XIII, lib. III *Decret.*

III. La nulidad de la enajenación mal hecha puede acordarse por el mismo que la hizo (1), por su superior, y en defecto de éste por el sucesor (2), por el cabildo, aún en sede plena (3), y en su defecto por cualquier individuo del clero de la Iglesia lesionada, pudiendo á falta de todos pedirse por los legos, feligreses de la Iglesia, ó patronos, etc. (4).

IV. La petición de nulidad puede hacerse en cualquier tiempo, sin que pueda alegarse de contrario á la prescripción, si es poseedor de mala fé (5), y aunque las disposiciones del derecho parecen absolutas (6), es indudable que la posesión de buena fé prescribe á los cuarenta años (7), á menos que se trate de la Iglesia romana y otras, especialmente privilegiadas.

V. La Iglesia goza del beneficio de restitución *in integrum*, cuando la enajenación se ha hecho con las debidas condiciones (8), si ha sido perjudicada gravemente, pudiendo en su consecuencia pedir que se la compense del daño sufrido, ó la restitución de las cosas al estado que ántes tenían (9); porque si la enajenación se ha hecho sin aquellas, deberá pedirse la nulidad, no siendo en su consecuencia necesario emplear este otro recurso.

VI. El beneficio de restitución *in integrum* debe utilizarse dentro de los cuatro años siguientes al acto de la enajenación, á menos que la lesión sea enorme (10).

(1) Cap. VI, tít. XIII, lib. III *Decret.*

(2) Cap. IV, y IX, tít. XIII, lib. III *Decret.*

(3) Cap. VI, tít. XIII, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIII párrafo 5.º, número 155.

(5) Cap. V y XX, tít. XXVI, lib. II *Decret.*—*Regula 2.ª Jur.*, tít. XII, libro V *sext. Decret.*

(6) Cap. II, tít. IX, lib. III *sext. Decret.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.*, núm. 159.

(8) Cap. XI, tít. XIII, lib. III *Decret.*—Cap. I, tít. XLI, lib. I *Decret.*

(9) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VI, cap. II, par. 248.

(10) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIII, párrafo 5.º, núm. 167.

Penas antiguas contra los que enajenan indebidamente las cosas eclesiásticas.—La enajenación hecha contra las prescripciones canónicas llevaba anejas en el derecho antiguo las penas siguientes:

La persona que había hecho la enajenación, y aquél en cuyo favor había tenido lugar, incurrían en excomunión (1), lo mismo que los que prestaron su consentimiento (2), quedando depuesto el que enajenó (3), y los clérigos que no denunciaron este hecho al superior, suspensos por tres años de la percepción de los frutos y rentas de sus beneficios (4).

Si el que enajenó fuese religioso, incurriría *ipso facto* en la pena de suspensión (5).

Legislación vigente sobre esta materia.—Los que enajenan cosas de la Iglesia, incurren actualmente en las penas siguientes:

a) Si el que hace la enajenación es inferior á obispo ó abad, incurre en excomunión *late sententiæ*, reservada al Sumo Pontífice (6), lo mismo que la persona en cuyo favor se hizo.

b) Los obispos y abades quedan *ipso jure* entredichos de la entrada en la iglesia, y si perseverasen por espacio de seis meses en este estado, quedan suspensos *ipso facto* de la administración y gobierno de sus iglesias y monasterios (7).

c) Los prelados inferiores, comendatarios y rectores de iglesias; los beneficiados y otros administradores incurren en dicha excomunión, y quedan además privados *ipso facto* de los oficios y beneficios cuyos bienes enajenaron (8), con inhabilidad para el ejercicio de los órdenes y para obtener beneficios (9).

(1) C. XIII, quæst. 2.^a, causa 12.

(2) Cap. VI, tít. XIII, lib. III *Decret.*

(3) C. XIX, quæst. 2.^a, causa 12.—Cap. II, tít. IX, lib. III *sext. Decret.*

(4) Cap. II, tít. IX, lib. III *sext. Decret.*

(5) Cap. I, tít. IV, lib. III *Clementin.*

(6) *Concil. Trid.*, sesión 22, cap. XI *De Reformat.*

(7) Cap. únic., tít. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(8) Cap. unic., tít. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(9) *Concil. Trid.*, sesión 22, cap. XI *De Reformat.*

Causas que excusan de incurrir en dichas penas.

--Los que han enajenado los bienes eclesiásticos no incurrir en las censuras fulminadas contra ellos en los casos siguientes==

a) Si las constituciones que las imponen se hallan abrogadas en sus respectivos países por costumbre en contrario (1).

b) Si el acto de la enajenación no se ha consumado por medio de la tradición real y pacífica de los bienes eclesiásticos (2).

c) La buena fé del que enajena ó del que recibe dichos bienes, como si ignorasen que pertenecían á la iglesia ó monasterio (3).

d) La ignorancia probable de que estaba prohibida la enajenación de dichos bienes, y también cualquiera otra causa que los exima ó excuse de pecado grave.

Disciplina particular de España.—La iglesia española siguió en todo la legislación general de la Iglesia en esta materia. Las leyes de partida prescriben lo mismo que consignan las decretales de Gregorio IX (4).

Las leyes recopiladas dicen lo mismo (5); pero se prescribe además como requisito indispensable la necesidad de obtener la Real licencia para enajenar los bienes eclesiásticos (6).

En un pleito seguido por todos sus trámites sobre pago de un censo impuesto sobre una casa parroquial sin licencia de la santa sede ni de S. M. se sostuvo por el supremo tribunal de la Rota española la validez de aquel contrato en el que se prescindía de estos dos requisitos, y aquél fallo dictado por los años de 1865 á 1867 pasó en autoridad de cosa juzgada.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIII, párrafo 5.º, núm. 165.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid.

(4) Tít. XIV de la partida 1.ª

(5) Tít. V, lib. I de la novísima Recop.

(6) Notas 1.ª y 2.ª á la ley 2.ª, tít. V, lib. I de la novísima Recop.

Ya se deja manifestado en el artículo 2.º, capítulo 1.º de este título, que el gobierno español enajenó todos los bienes eclesiásticos sin contar para nada con la santa sede y que por el concordato de 1851 y convenio de 1860 se dictaron medidas reparadoras de aquel agravio, reproducido en disposiciones dictadas por la revolución de Setiembre de 1868 y subsanado por el gobierno de la restauración, que puso en vigor el concordato (1).

CAPITULO III.

OBLACIONES, PRIMICIAS Y DIEZMOS.

ARTÍCULO I.

DE LAS OBLACIONES.

Acepciones de la palabra oblación.—La palabra oblación tomada en un sentido lato y general expresa todas las cosas muebles ó inmuebles que se ofrecen voluntariamente (2) para el culto, y comprende los diezmos, primicias y el mismo sacrificio.

Significa en un sentido menos lato, cualquiera cosa temporal, que en consideración á la religión se ofrece inmediatamente á Dios para uso de la Iglesia y sustentación de sus ministros.

Se toma la palabra oblación en un sentido extricto por la cosa ofrecida inmediatamente al altar.

Su definición en este último sentido.—La palabra oblación en su sentido extricto es; *La cosa ó don ofrecido por*

(1) Decretos de 4 y 19 de Enero de 1867, y 9 de Enero de 1875.—Véase el apéndice, núm. 6.º

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 2.º

los fieles al altar inmediatamente por sí ó por medio del diácono para que llegue á manos del sacerdote (1).

Su distinción de los diezmos, primicias y del sacrificio.—La oblación se distingue=

De los diezmos, porque éstos se deben de justicia.

De las primicias, porque éstas son únicamente los primeros frutos.

Del sacrificio, porque la cosa que se sacrifica se consagra primeramente (2)

Sentido en que aquí se toma.—La palabra oblación se toma aquí por las cosas muebles, y comprende=

a) Las que se ofrecen al altar en el acto de proceder á la celebración del Santo Sacrificio, como el pan, vino, aceite, incienso, nuevas espigas y otras ofrendas que servían en el altar ó para el sostenimiento del clero.

b) Las que se ofrecían fuera del sacrificio se llevaban á la casa habitación del obispo ó se depositaban en una arca, que se llamaba *Corbona* ó *Gazophilacium*, colocada dentro de la iglesia ó fuera de la misma en el lugar llamado *Exedras* (3).

c) Las que se ofrecían por los cristianos en las exequias de los difuntos, al recibir los sacramentos y en otros oficios sagrados (4).

Su origen.—Las oblaciones datan desde el tiempo de los Apóstoles, y de ellas nos hablan innumerables monumentos de la antigüedad (5).

Los Apóstoles instituyeron las ágapas ó convites sagrados, como consecuencia de las oblaciones ofrecidas al altar por los fieles, porque tomada la parte de pan y vino para el sacrificio,

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XXX, párrafo 5.º, núm. 80.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVII, pár. 5.º

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 2.º

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVII, part. 3.º

lo restante de ellas se consumía en las ágapas ó convites comunes de los fieles, y á ellos alude el Apóstol cuando dice: *Convenientibus ergo vobis in unum, jam non est dominicam cœnam manducare. Unusquisque enim suam cœnam præsumat ad manducandum. Et alius quidem esurit, alius autem ebrius est* (1).

Carácter de las oblaciones.—La misma palabra oblaciones expresa que eran voluntarias, sin que mediase mandato alguno que obligara á los fieles á hacer estas ofrendas; pero eran mal vistos aquellos que, teniendo medios, prescindían de ellas; y por esto S. Cipriano reprendía la conducta de una mujer rica, que nada ofrecía.

San Agustín excita la piedad de los fieles en este sentido; y como iba decayendo aquella ferviente caridad de los primeros siglos, se prescribió á los cristianos que hicieran estas oblaciones en ciertos días al menos (2).

El mismo S. Cipriano dice que se citaban públicamente en la iglesia los nombres de las personas cuyas oblaciones eran especiales.

Si se recibían de todos los cristianos.—La Iglesia no admitía las oblaciones de todos, porque éstas, y sobre todo las eucarísticas, significaban la comunión eclesiástica; y por esta razón rechazaba—

a) Las que provenían de los penitentes, antes de haber obtenido la reconciliación.

b) Las de los que habían caído en herejía.

c) Las de los excomulgados y de los que oprimían á los pobres (3).

d) Las de los públicos pecadores, no siendo tampoco raro que la Iglesia devolviese las oblaciones hechas por aquellos que habían incurrido después en herejía (4).

(1) *Epist. 1.^a ad Corinth.*, cap. XI, v. 20 y 21.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVII, pár. 3.^o

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 2.^o

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVII, pár. 3.^o

- e) Las de los usureros manifiestos.
- f) Las del deudor, si por estas oblacones se imposibilitaba para pagar.
- g) Las de los hijos, si se hacían inhábiles por este medio para sustentar á sus padres (1).

A quién correspondía la administración de las oblacones.—El obispo era el llamado á administrar y distribuir convenientemente las oblacones hechas en la iglesia ó fuera de ella. Después de extraer la parte necesaria para el culto divino, repartía lo demás diariamente, por semanas ó meses, entre los clérigos y pobres (2), sirviéndose al efecto del arcediano, según se deja manifestado en otro lugar (3).

Especies de éstas.—Las oblacones por razón del lugar en donde se hacían, eran de las tres clases siguientes:

- a) Unas se ofrecían en el altar.
- b) Otras en la iglesia.
- c) Otras fuera de la iglesia.

Estas mismas oblacones se dividen en — *expontáneas* y *obligatorias*, según que se hacían por mera liberalidad, ó en cumplimiento de una ley, que las preceptuaba, llamándose en este último caso *obvenciones*.

Por razón de su causa motiva.—Unas tenían lugar en las exequias de los difuntos.—Otras en la recepción de los sacramentos, ó en otras sagradas funciones.

Oblacones que han sucedido á las antiguas.—Las oblacones y obvenciones que han sucedido á las antiguas son las siguientes=

1.º La limosna ó estipendio por la celebración de la Misa, que ha sucedido en lugar de la oblación de pan y vino, que se hacía en un principio al altar para las especies eucarísticas (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles., univ., in lib. III Decret.*, tít. XXX, párrafo 5.º, núm. 92 y sig.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 2.º

(3) Cap. II de este título.

(4) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVII, pár. 4.º

Esta limosna se daba á la iglesia y clérigos en común, y después pasó el derecho de percibirla al sacerdote que aplicaba la Misa por la intención de quien daba la limosna (1).

Debe tenerse presente sobre este punto, que está prohibido todo pacto simoníaco, ó que tenga por objeto un torpe lucro (2).

2.^o El dinero y otras ofrendas que se hacen por los fieles en las iglesias, capillas y altares en donde descansan reliquias de santos, ó se hallan colocadas imágenes célebres por la fama de milagros (3).

3.^o Derechos de estola, que son los honorarios que suelen darse con motivo de la administración del bautismo, matrimonio, exequias y otras sagradas funciones.

Si son obligatorias.—Las oblaciones expresadas en el caso segundo son en un todo voluntarias y libres.

Las del caso primero y tercero son propiamente *obvenciones*, que se deben á los ministros del culto por título de sustentación y como trabajo extrínseco á las funciones sagradas (4).

El Concilio IV de Letrán prohíbe las injustas exacciones de parte de los clérigos, y condena la conducta de los legos, que tratan de abolir, bajo el pretexto de piedad, la costumbre laudable para con la Iglesia, introducida por la piadosa devoción de los fieles (5) de ofrecer alguna cosa á los ministros del culto en ciertos actos religiosos.

Oblaciones u obvenciones que pertenecen á la iglesia parroquial.—Pertenecen á la iglesia parroquial=

a) Las oblaciones propiamente tales que los fieles depositan voluntariamente en las arcas (cepillos) para el culto.

(1) BENEDICTO XIV: *De Synodo dioces.*, lib. V, cap. VIII, pár. 5.^o

(2) *Concil. Trid.*, ses. 22, *Decret. de observ. et evit. in celebr. Missae*.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 2.^o

(4) *Prælect. Jur. Canon. in semin. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, artículo 2.^o, pár. 2.^o, núm. 581.

(5) Cap. IX y XLII, tit. III, lib. V *Decret.*

b) Las que se dan por el uso de sillas en las iglesias.

c) Las que se hacen á la parroquia con motivo de la celebración de las nupcias ó funerales, por las luces, asientos, catafalcos y ornato, que suministra la fábrica de la iglesia.

d) Todo lo que se ofrece en la iglesia sin designación de un fin especial (1).

Cuáles corresponden al párroco —El párroco tiene derecho=

a) A las oblacones de cera ó dinero que se hacen al altar en el acto del ofertorio.

b) A las que por costumbre ó estatuto diocesano se hacen con motivo de las nupcias, funerales y otros derechos de estola.

c) A los estipendios para Misas y otros oficios que él haya celebrado.

d) A las que tienen lugar por las amonestaciones y partidas sacramentales (2).

Oblaciones ú obvenciones propias de los demás clérigos.—Pertenecen á estos=

Las oblacones hechas con motivo del ministerio personal de cada uno de ellos, como en las —exequias—celebración de la Misa—predicación de la divina palabra, etc.

A quién corresponden las oblacones hechas á ciertas imágenes ó determinados santuarios.—Las

oblacones hechas á ciertas imágenes milagrosas, ó en determinados santuarios deben emplearse con arreglo á la intencion de los oferentes, y si ésta no consta, en la fábrica del edificio, ornamentos, conservación y aumento del culto divino en dichos santuarios (3).

(1) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, pár. 2.^o, núm. 583.

(2) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, pár. 2.^o, núm. 583.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXX, pár. 5.^o, núm. 95.

Si no hay necesidad de las indicadas oblaciones para los objetos expresados podrán emplearse por la autoridad competente en otros usos, y principalmente en provecho común de la Iglesia (1).

Autoridad del obispo con respecto á esta materia.—Los obispos, como autoridades superiores y *ordinarias* en sus respectivas diócesis, tienen el deber de aprobar y establecer el modo de hacer las oblaciones. El Concilio de Letrán los autoriza para conocer en estas materias y distinguir entre las costumbres laudables y las injustas exacciones (2), sobre cuyo punto dicta sabias instrucciones el Concilio de Trento (3), pudiendo resumirse toda la doctrina canónica acerca de este punto en lo siguiente—

a) Que no se comprometa á los fieles en gastos superfluos para la celebración de funerales y matrimonios, porque esto sería una exacción prohibida por el Concilio de Trento.

b) Que no se exija sino lo que se halla determinado por ley ó legítima costumbre; porque lo contrario sería un torpe lucro prohibido por el mismo Concilio.

c) Que se observen con puntualidad los ritos y ceremonias, y se cumpla lo estipulado en cuanto al número de presbíteros y clérigos inferiores que hayan de asistir al acto religioso (4).

Si podrá disponer de las oblaciones hechas á una iglesia en favor de otra.—El obispo no debe disponer de las oblaciones hechas á una iglesia para emplearlas en otras; pero habrá casos en que le sea lícito dividir dichas oblaciones para atender á las necesidades de parroquias pobres que carecen de lo absolutamente necesario, si no tienen otro medio para sacarlas de esta angustiosa situación (5).

(1) Cap. II, tít. XI, lib. III *Clementin.*—*Concil. Trid.*, sesión 22, cap. VI *De Reformat.*

(2) Cap. IX y XLII, tít. III, lib. V *Decret.*

(3) Sesión 22, *De observ. et evitand. in celebrat. Missae.*

(4) *Praelect. Jur. Canon. in semin. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, pár. 2.^o, núm. 582.

(5) *Praelect. Jur. Canon. in semin. S. Sulpit.*, *ibid.*, núm. 586 y sigs.

ARTÍCULO II.

DE LAS PRIMICIAS.

Primicias, y su origen.—Se entiende por primicias: *Los primeros frutos de los campos, viñas, huertos, árboles, y de los animales que se debían abonar en la ley antigua por precepto divino* (1).

El origen de las primicias se halla en la ley mosaica, que prescribía al pueblo hebreo ofrecer los primeros frutos inmediatamente á Dios en acción de gracias por los nuevos frutos recibidos de la divina Providencia, y servían para la sustentación de los sacerdotes y levitas, según el mandato divino.

La ley evangélica nada dispone sobre este punto; pero los fieles acostumbraron á ofrecer espontáneamente las primicias de los frutos desde el principio de la Iglesia, cuya piadosa devoción recomendaron los santos padres (2).

Si los cristianos vienen obligados á satisfacerlas.
—Las leyes mosaicas fueron abrogadas por la ley evangélica, y de aquí que no pueda fundarse en ellas el precepto de las primicias ú oblações de los primeros frutos respecto á los cristianos.

Los cánones apostólicos (3), las constituciones apostólicas (4) y los cánones nicenos arábigos hacen mención de las primicias, como ley obligatoria á los cristianos (5); pero su autoridad es muy dudosa y solo es una prueba más de la costumbre

(1) *Exod.*, cap. XXIII, v. 19.—*Numer.*, cap. XVIII, v. 12 y sig.—*Deuteronom.*, cap. XV, v. 19.

(2) *Praelect. Jur. Canon. in semin. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, pár. 1.^o, núm. 579.

(3) Cánones 3.^o y 4.^o

(4) *DEVOTI: Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVII, pár. 1.^o

(5) *VECCHIOTTI: Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 1.^o

entre los cristianos de ofrecer á Dios los primeros frutos en testimonio de su gratitud y reconocimiento.

Esta piadosa y general costumbre entre los fieles fué elevada á ley por las sanciones canónicas (1), que con el tiempo cayeron en desuso por costumbre contraria en casi todas partes; de modo que los fieles no están en la obligación de satisfacerlas en la actualidad, y solo afectará este deber á los que vivan en países en donde dicha ley siga vigente (2).

Disciplina particular de España.—La Iglesia de España siguió en un todo la legislación general de la Iglesia sobre esta materia según aparece de los monumentos de la antigüedad y de las leyes de partida (3).

Este precepto de la Iglesia de Dios ha quedado suprimido sustituyéndole como medio de sustentación del culto y sus ministros la dotación por parte del Estado con arreglo al concordato de 1851 y convenio de 4 de Abril de 1860.

ARTÍCULO III.

DE LOS DIEZMOS.

Diezmos, y su origen.—La palabra *decimæ* (diezmos) significa la décima parte de cualquier cosa, y pueden definirse: *La parte de frutos ó productos que se pagan á la Iglesia para el sostenimiento del culto y sus ministros.*

Se dice que son la parte de frutos, etc., porque no siempre es la décima parte, sinó que es mayor ó menor de aquélla, según las diversas costumbres de los lugares ó países (4).

(1) C. VI, dist. 32.—C. LXV, quest. 1.^a, causa 16.—C. I, quest. 7.^a, causa 16.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. XXX, párrafo 5.^o, núm. 82.

(3) Tít. XIX, partida 1.^a

(4) VECCHIOTTE: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 3.^o

El texto bíblico hace por primera vez mención del diezmo, cuando Abraham ofreció al sacerdote Melquisedech la décima parte del botín en la victoria alcanzada sobre cuatro reyes (1), y Jacob hizo voto de ofrecer al Señor la décima parte de los frutos ó bienes que adquiriese en Mesopotamia (2).

Esta práctica religiosa de los citados patriarcas fué después ley prescrita por el Señor á sus descendientes, como se vé en las palabras siguientes: *Omnes decimæ terræ, sive de frugibus, sive de pomis arborum, Domini sunt... Omnium decimarum bovum, et ovium, et caprarum... sanctificabitur Domino* (3).

La ley evangélica prescribe á los fieles que suministren lo necesario para la vida á los ministros del culto, pero no manda en concreto los diezmos (4).

Sus especies.—Los diezmos se dividen en—*eclesiásticos* y *profanos*.

Se entiende por diezmos *eclesiásticos*, la parte de productos que se pagan á las iglesias y al clero.

Se llaman diezmos *profanos*, los tributos impuestos en otros tiempos por los señores temporales á los predios de sus súbditos.

Especies de diezmos eclesiásticos.—Los diezmos eclesiásticos pueden ser—*ordinarios*—*extraordinarios*—*espirituales*—y *temporales*.

Se entiende por diezmos *ordinarios* los productos que se pagan en tiempos ó épocas determinadas, y de un modo estable, de los frutos de la tierra y utilidades ó lucro de las personas.

Se entiende por diezmos *extraordinarios*, la parte de productos impuestos por el Sumo Pontífice en ciertos casos (5).

(1) Génesis, cap. XIV, v. 20.

(2) Génesis, cap. XXVIII, v. 20 y sig.

(3) Levítico, cap. XXVII, v. 30 y sig.

(4) DEVOTI: Inst. Canon., lib. II, tit. XVI, pár. 2.º

(5) Cap. II, tit. VIII, lib. III Clement.—Cap. único, tit VII, libro III, Extravag. commun,

Se llaman diezmos espirituales ó meramente eclesiásticos, *la parte de frutos que conservando su naturaleza y estado primitivo, se abonan á los ministros de la Iglesia como estipendio por las funciones espirituales que ejercen en provecho de los fieles.*

Se llaman diezmos temporales, *la parte de frutos que habiendo sido establecidos primeramente para el sostenimiento de los ministros del culto, fueron separados del título del oficio espiritual por autoridad del Sumo Pontífice, y se aplicaron á los legos en feudo ú otro título.*

Estos diezmos se conocen comunmente con el nombre de *diezmos laicales.*

Quando hay duda acerca de la clase á que los diezmos pertenecen, habrá de considerárseles como meramente eclesiásticos, porque este es su título primitivo, cuya mutación como odiosa es necesario probar (1).

Especies de diezmos espirituales.—Los diezmos espirituales ó meramente eclesiásticos pueden ser—*prediales—personales—mixtos.*

Se entiende por diezmos prediales, *la parte que procede de los frutos de la tierra, ó productos de las fincas urbanas* (2).

Se entiende por diezmos personales, *los productos que provienen de la persona y de su industria, como de la milicia, negociación, caza, etc.* (3).

Se entiende por diezmos mixtos, *los productos que proceden á la vez de los predios y de las personas, como los frutos de los animales, la lana, queso, leche.*

Especies de diezmos prediales.—Los diezmos prediales se dividen en—*mayores—menores—y novales.*

Se llaman diezmos mayores, *los frutos que se pagan del trigo, vino, etc.*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XXX, párrafo 1.º, número 3.º

(2) VECCHIOTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 3.º

(3) Cap. XX, tít. XXX, lib. III, *Decret.*

Se llaman diezmos menores, *los productos que provienen de los frutos de huertos, etc.*

Se llaman diezmos novalles, *los frutos que se pagan de la tierra ó predio reducido de nuevo á cultivo* (1).

Si la obligación de pagar los diezmos procede de derecho divino ó eclesiástico.—Es opinión general, que el derecho divino prescribe á los cristianos, suministren á los ministros de la religión lo necesario para su cóngrua y decente sustentación; sin que determine la forma y modo en que ha de verificarse, lo cual quedó al arbitrio de la Iglesia (2).

Muchos canonistas creen que el diezmo es de derecho divino en la ley evangélica en cuanto á los prediales, y de derecho eclesiástico respecto á los personales, fundándose al efecto en varios textos del derecho (3), y aún del Evangelio (4).

Para resolver con acierto esta cuestión habrá de tenerse presente que los diezmos debidos á los clérigos, pueden considerarse=

Materialmente, ó en cuanto á su sustancia, según que son la sustentación necesaria de los clérigos (5).

Formalmente en cuanto á su determinación ó cierta cuota, como lo es la décima parte de los frutos.

En el primer sentido son de derecho natural y divino positivo, y en el segundo de derecho eclesiástico (6).

La prueba de esto se halla en que los primeros fieles no pagaban diezmos, ni la Iglesia los prescribió, porque el clero vivía de las oblaciones que los fieles ofrecían espontáneamente

(1) SCMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. XXX, pár. 1.º, núm. 31.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVI, pár. 2.º

(3) Cap. XIV, XXV y XXXIII, tít. XXX, lib. III Decret.—C. LXVIII, quæst. 1.º, causa 16.

(4) MATTH.: cap. XXIII, v. 23.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. XXX, párrafo 1.º, núm. 7.º

(6) STO. TOMÁS: *Summa Theolog. secunda secund.*, quæst. 87, art. 1.º

á la Iglesia para el sostenimiento del culto y sus ministros, bastando aquéllas para cubrir éstas atenciones.

Cuando decreció entre los fieles el fervor de los primeros cristianos, las oblaciones voluntarias no bastaban para atender á las necesidades del culto y sus ministros, y entónces los padres de la Iglesia exhortaban á los cristianos á contribuir con la décima parte de los frutos para estas atenciones.

La doctrina sobre los diezmos se afianzaba en el principio de que todos están obligados en conciencia á contribuir con la décima parte de sus rentas al culto de Dios, que bendice el sudor del hombre; al alivio de sus semejantes y á la prosperidad de los establecimientos de utilidad pública; objetos todos nobles y más dignos de esta prestación que ningún otro (1).

Las exhortaciones y razonamientos con que los Santos Padres excitaban la piedad de los fieles para pagar los diezmos, no revistieron carácter obligatorio; pero en el siglo VI y siguientes se dieron disposiciones en este sentido por varios concilios particulares, como el II de Macon celebrado en 585, Cabilonense II (Chalón) y Moguntino en 813 (2), que llegaron á ser leyes generales de la Iglesia, y como tales obligatorias á todos los fieles.

De qué cosas se han de abonar, y cómo.—Sobre este punto habrá necesidad de atenerse á las costumbres de cada país; pero según el derecho común se debían los diezmos de todos los frutos y productos anuales de la tierra ó industria del hombre (3).

Los diezmos prediales debían abonarse íntegros (4), y los personales, deducidas las expensas ó gastos hechos (5), porque los diezmos personales se deben del lucro obtenido, y no se considera lucro sinó lo que queda después de deducidos los gastos;

(1) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VI, cap. I, pár. 242.

(2) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VI, cap. I, pár. 242.

(3) Cap. VI y XXI, tít. XXX, lib. III *Decret.*

(4) Cap. VII, XXI, XXII, XXVI y XXXIII, tít. XXX, libro III *Decret.*

(5) Cap. XXVIII, tít. XXX, lib. III *Decret.*

á diferencia de los prediales, en los que se llama fruto todo lo que nace de la tierra.

A quiénes compete el derecho de percibir los diezmos.—Este derecho compete á los párrocos, pero puede adquirirse por=

Colación ó unión de un beneficio curado, porque éste tiene siempre anejo el derecho de percibir diezmos.

Privilegio apostólico, en cuya virtud podrá competir este derecho á las iglesias, monasterios, santuarios, personas eclesiásticas y seglares.

Donación á los legos, mediante consentimiento del obispo.

Venta, porque este derecho, separado del título espiritual, puede trasladarse de una iglesia á otra, mediante justa causa y las solemnidades de derecho.

Permuta de los diezmos de una iglesia con los de otra.

Transacción ó amigable composición.

Infeudación y prescripción (1).

Modo de eximirse de esta obligación.—Como los diezmos son de derecho eclesiástico en el sentido que se deja explicado, de aquí que los particulares puedan quedar exentos de este gravámen, ó sea del cumplimiento de la ley, en los casos siguientes: — privilegio — costumbre — prescripción — amigable composición — transacción (2).

Penas contra los defraudadores de los diezmos.—Los que faltan al precepto de pagar diezmos, ó los usurpan, incurren en un gravísimo pecado de injusticia (3)—debe excomulgárselos (4)—se los priva de sepultura eclesiástica (5)—sus-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. XXX, párrafo 2.º

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., pár. 3.º

(3) Cap. XVII, tít. XXX, lib. III Decret.

(4) Cap. V, XXI y XXVI, tít. XXX, lib. III Decret.—Cap. II, tít. I, lib. II Clementin.—*Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XII De Reformat.

(5) Cap. XIX, tít. XXX, lib. III Decret.

pensión de oficio y beneficios respecto á los religiosos que faltan á esta obligación, debiendo además excomulgárselos (1).

Advertencia.—Los diezmos y los demás bienes eclesiásticos pasaron á manos de los legos en gran parte, merced á los ruegos, poderosas mediaciones, decretos reales ó imperiales y enfeudamientos por parte de los mismos obispos (2), quedando el clero, y sobre todo los párrocos, sin los medios indispensables para su sostenimiento y el del culto (3).

La iglesia reclamó contra estas escandalosas usurpaciones (4), procuró volver los diezmos á su primitivo destino excluyéndolos del comercio de los hombres por la naturaleza espiritual de su institución (5). Muchos legos continuaron á pesar de esto disponiendo á su arbitrio de los diezmos.

El Concilio III de Letrán prohíbe á los legos adquirir nuevos diezmos, transmitir los que poseían á otros legos, y les hace entender que no pueden retener los diezmos sin peligro de sus almas.

Por fin, se toleró á los legos que poseyeran en feudo los diezmos adquiridos con anterioridad al Concilio III de Letrán, y se consideró que podían conservarlos lícitamente (6).

Los diezmos han desaparecido en todas partes, bien por costumbre en contrario, ó bien por medidas violentas del poder civil que la Iglesia ha legitimado, atendiendo al bien espiritual de las almas, y por esta razón no he descendido en el exámen de esta materia á sus últimos detalles; pero se dejan señaladas las fuentes en donde pueden verse.

Disciplina particular de España.—En la Iglesia Española se observó la legislación general eclesiástica sobre diez-

(1) Cap. I, tít. VIII, lib. III *Clementin.*

(2) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. VI, cap. I, párr. 243.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVI, párr. 8.º

(4) C. III, quest. 2.ª, causa 16.—C. I. y III, quest. 7.ª, causa 16.

(5) Cap. XVII, tít. XXX, lib. III *Decret.*—Cap. VII, tít. XXVI, lib. II *Decret.*—Cap. IX, tít. XIX, lib. III *Decret.*

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVI, párr. 8.º

mos, según aparece de los monumentos de la antigüedad y leyes de las partidas (1).

La Santa Sede concedió á los reyes de España parte de los frutos de los diezmos en los conceptos siguientes:

1.º Bonifacio VIII concedió á D. Fernando IV rey de Castilla y León por un trienio la tercera parte (*tercias reales*) de los frutos, rentas y obvenciones (2) de los bienes eclesiásticos ó sea la porción correspondiente al culto.

2.º Clemente V concedió al expresado rey por otro trienio dos partes de la tercera porción de los diezmos (3).

3.º Alejandro VI perpetuó las anteriores concesiones, á petición de los reyes católicos.

4.º Gregorio XIII concedió á Felipe II y sus sucesores el aumento que produjesen las tierras por el riego (4) y el diezmo de los *novales*.

5.º Pío VII otorgó á Carlos IV el *noveno* de todos (5) los diezmos y el *escusado* ó sea el diezmo de la casa mayor diezmera de cada parroquia (6).

Los diezmos quedaron suprimidos en España por una ley de 29 de Julio de 1837 y á este medio de sustentación del clero substituyó la dotación por parte del Estado con arreglo al concordato de 1851 y convenio de 1860 que pueden verse en los apéndices del tomo I.

(1) Tít. XX de la partida 1.ª

(2) Ley 1.ª, nota 1.ª, tít. VII, lib. I de la *novis. Recop.*

(3) Ley 1.ª, nota 2.ª tít. VII, lib. I de la *novis. Recop.*

(4) Ley 13, nota 5.ª, tít. VI, lib. I de la *novis. Recop.*

(5) Ley 17, nota 14, tít. 6.º, *ibid.*

(6) Ley 1.ª, nota 1.ª, tít. XII, lib. II, *ibid.*

CAPITULO IV.

OTROS BIENES Y RENTAS DE LA IGLESIA.

Bienes poseidos por la Iglesia en los tres primeros siglos.—Los bienes que poseyó la Iglesia en los tres primeros siglos y durante la horrible persecución de que fué objeto, fueron principalmente cosas muebles, que podían ocultarse, distribuirse y trasladarse fácilmente de un punto á otro (1).

Es también indudable que no careció en aquél tiempo de bienes inmuebles, siquiera fuesen escasos, lo cual consta por datos irrecusables de la antigüedad, y entre ellos solo haré mención de los siguientes:

El decreto dado por Alejandro Severo en favor de los cristianos que habían ocupado cierto predio, reclamado después por unos hosteleros (2).

El mandato del emperador Aureliano con motivo de la resistencia de Paulo de Samosata al decreto del Concilio de Antioquía, que le ordenaba salir de la casa de la Iglesia, disponiéndose por dicho Emperador que la casa se entregara á quien ordenasen los obispos italianos y el obispo romano de la religión cristiana (3).

La ley dada por Constantino y Licinio en 313 que dice: *Omnia ergo quæ ad ecclesias rectè visa fuerint pertinere, sive domus ac possessio sit, sive agri, sive horti, seu quæcumque alia nullo jure quod ad Dominum pertinet imminuto, sed salvis omnibus atque integris manentibus, restitui jubemus* (4).

Estos hechos son una prueba concluyente de que la Iglesia poseyó en los tres primeros siglos, casas, predios, huertos y otras clases de bienes inmuebles.

(1) SELVAGIO: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVI.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 7.º

(3) THOMASSINO: *Vet. et nov. Eccles. discipl.*, parte 3.ª, lib. I, cap. III, núm. 4.

(4) THOMASSINO: *Vetus et nov. Eccles. discipl.*, ibid., núm. 3.

Adquisición de bienes inmuebles por la Iglesia desde la paz de Constantino.—La Iglesia adquirió considerables bienes inmuebles después que Constantino dió la paz á los cristianos, y de ello dá testimonio una ley del mismo, en la que se prescribe: *Ut eorum hæreditates, qui pro Christo martyrium, mortem, exilia, bonorum proscriptionem passi fuerant, vel ipsis redintegrarentur, vel eorum proximis, aut si proximi essent nulli, Ecclesiae.*

Otra ley de Constantino permite y da omnímoda libertad para hacer donativos á la Iglesia. *Habeat, dice, unusquisque licentiam sanctissimo catholice Ecclesie concilio decedens, bonorum quod optaverit, relinquere* (1).

Medios legítimos utilizados en su adquisición.—La Iglesia, como sociedad perfecta, distinta é independiente del Estado, tenía perfecto derecho para adquirir toda clase de bienes por los medios lícitos que se reconocen entre los hombres; y desde el momento que se la hizo justicia por los poderes civiles, no poniendo obstáculos en su marcha, aumentó sus bienes extraordinariamente por distintos conceptos, de los que paso á tratar brevemente.

Disposiciones dictadas por los emperadores en este sentido.—Los emperadores cristianos dispusieron que se diera á la Iglesia cierta cantidad de dinero del erario público, y si bien Juliano el apóstata anuló esta ley, Marciano la restableció en todo su vigor (2).

La Iglesia adquirió también algunos templos de los gentiles y sus rentas por la liberalidad de los emperadores, y de ello hace mención el emperador Marciano (3), el cual mandó igualmente que las iglesias poseidas por los herejes, y sus rentas se entregaran á la Iglesia católica.

(1) SELVAGIO: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XVI.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XIII, párr. 4.º

(3) SELVAGIO: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XVI.

El emperador Justiniano ordenó, que todos los bienes de los clérigos ó monjes que habían vuelto á la vida privada, se entregarán á las iglesias ó monasterios abandonados por ellos (1).

Donaciones *inter vivos*.—Las leyes civiles reconocieron á la Iglesia su perfecto derecho para adquirir toda clase de bienes, y desde aquel momento empezó á obtener donaciones de los fieles; pero los obispos no aceptaban las donaciones indiscretas, ó sea aquellas en que pudiera perjudicarse á hijos ó descendientes legítimos de los donantes (2).

Donaciones *causa mortis* y con motivo del clericato y monacato.—Las donaciones hechas por última voluntad á las iglesias ó causas pías son válidas, aun cuando el testamento carezca de las debidas solemnidades (3).

Tiene el derecho de sucesión en los bienes del clérigo ó monje que muera intestado y sin herederos, debiendo adjudicarse sus bienes á la iglesia ó monasterio en que sirvieron por la presunción de que eran mirados con especial afecto por dichos clérigos ó monjes (4).

La Iglesia aumentó considerablemente sus bienes con las donaciones que hacían á las iglesias y monasterios las personas ricas que ingresaban en el clericato y monacato, no ménos que con las herencias de los monjes, las cuales pasaban á sus respectivos monasterios, por el principio de que todo lo que adquiere el monje es para su convento ó monasterio.

Adquisiciones debidas á su economía é industria.—Las principales adquisiciones de la Iglesia fueron debidas á la economía con que se vivía por el clero, á su buena administración y á la cultura de terrenos improductivos, convertidos con su trabajo é industria en fértiles campiñas (5).

(1) SELVAGIO: *Inst. Canon*, lib. II, tit. XVI.

(2) SELVAGIO: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XVI.

(3) Cap. IV y XX, tit. XXVI, lib. III *Decret.*

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. 1.º pár. 7.º

(5) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. I, pár. 7.º

Significado de la palabra precaria, y su definición.—La palabra precaria procede de la latina *precaria* ó *precatoria*, porque era la súplica ó ruego de una persona que solicitaba el uso de las cosas eclesiásticas (1).

Se entiende por precaria: *Un contrato real, por el que accediendo á las preces de una persona, se la concede el uso de una cosa eclesiástica ó inmueble, bajo la condición de que la cosa vuelva á la Iglesia con sus mejoras después de haber transcurrido el tiempo estipulado.*

Origen de las precarias.—Las precarias traen su origen de la famosa victoria alcanzada por Clodoveo, rey de los francos, en la llanura de Tolbiac (Zulpich), contra los alemanes. Los fieles, en prueba de su gratitud y reconocimiento por tan insigne triunfo, debido á Jesucristo más que á las armas, ofrecieron todos sus bienes á la Iglesia; pero ésta concedió á los oferentes el usufructo de ellos por toda su vida para que pudiesen atender á sus necesidades (2).

Su materia, sujeto y causa eficiente.—Sólo las cosas inmuebles y fructíferas (3) que se hallan en poder y propiedad de la Iglesia, ó que se han ofrecido á ella bajo condición de que el oferente puede tener su uso por cierto ó indeterminado tiempo, son objeto ó materia de este contrato.

Las precarias pueden concederse á clérigos, monjes y legos (4).

Sólo los rectores de las iglesias, que administran las cosas de las propias iglesias, como los obispos, abades, etc., pueden conceder precarias (5).

(1) *Concil. VI de Toledo*, canon 5.^o

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles., univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XIV, párrafo 2.^o, núm. 25.

(3) C. IV, quest. 2.^a, causo 10.—C. LXI, quest. 1.^a, causa 16.

(4) *Concil. VI de Toledo*, canon 5.^o—C. LXXII, quest. 2.^a, causa 12.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 28.

Tiempo y motivo para concederlas.—Las precarias podían concederse por toda la vida ó por el tiempo que se estipulase, debiendo en todo caso renovarse cada cinco años.

La concesión de las precarias tenía lugar, cuando se esperaba algún servicio de aquél que las solicitaba, otorgándose gratuitamente ó con reserva de una pensión en favor de la iglesia que las concedía.

Causa y solemnidades necesarias.—Como las precarias envuelven una especie de enajenación, no pueden concederse sinó mediante causa justa y las solemnidades de derecho, con arreglo á la doctrina consignada en este título; pero en todo caso resulta que fué uno de los medios utilizados por la Iglesia para el aumento de sus bienes inmuebles.

Feudos y regalías.—Se entiende por feudo: *La concesión libre y perpetua de una cosa inmueble ó equivalente á ella, por la que se trasfiere á otro el dominio útil, bajo la obligación de fidelidad y servicio, ó de prestar algún obsequio personal.*

Se hace caso omiso de las muchas cuestiones propias de este punto (1), puesto que se trata aquí de esta materia con el único objeto de manifestar que la Iglesia adquirió también feudos, y en este concepto jurisdicción temporal ó civil, como inherente á aquéllos.

Fundaciones, y cosas que las constituyen.—Las fundaciones ó causas pías son: *Ciertas disposiciones en las que se hace donación de una cosa temporal á un instituto eclesiástico, con la obligación de cumplir ó prestar anualmente ciertas funciones sagradas.*

Los elementos constitutivos de una fundación son los siguientes:

Peculio y su asignación estable á cierto fin eclesiástico.

Persona jurídica, ó sea la Iglesia, en la cual existe el dominio y con obligación de cumplir el fin del legado pío.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. tít. XX.

Persona ó personas que perciben las utilidades de la fundación y satisfacen ó cumplen sus cargas (1).

Su aceptación, y por quién.—La erección de una fundación requiere de necesidad el consentimiento ó aceptación de los administradores, porque reviste la naturaleza de un contrato, y éste se perfecciona por el mútuo consentimiento de las partes interesadas; de aquí resulta, que si la donación se hace por acto *inter vivos*, puede revocarse por el donante ántes de su aceptación, y se rescinde si muere cuando ána no se ha aceptado (2).

Es además necesario que intervenga el consentimiento del obispo, si se trata de una iglesia ó corporación eclesiástica, ó del prelado *regular*, si la fundación se hace en gracia de una comunidad religiosa, porque el buen orden y las sanciones canónicas prohíben que se acepten las fundaciones sin consentimiento de las autoridades eclesiásticas encargadas de vigilar, á fin de que las iglesias ó corporaciones no se graven con fundaciones que no pueden cumplir (3).

Requisitos necesarios al efecto.—Cuando se trata de la aceptación de estas fundaciones, es preciso tener ante todo presente=

a) Si la iglesia ú oratorio objeto de la donación ó legado pío puede cumplir las cargas de la nueva fundación, habida consideración al número de presbíteros adscritos á la misma iglesia y al cumplimiento de las demás obligaciones que sobre ella pesan.

b) Si se asignan rentas suficientes para asegurar el estipendio debido según la costumbre local ó estatutos de la diócesis, y para que la fábrica de la iglesia suministre lo necesario para la conveniente celebración de lo que se halle dispuesto en la fundación.

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon, pars special.*, lib. II, título I, tract. 2.º, dissert. 2.ª, cap. II.

(2) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, parte 3.ª, sect. 4.ª, art. 2.º, párrafo 3.º, núm. 589.

(3) *Praelect. Jur. Canon., in seminar. S. Sulpit.*, ibid.

c) Cuando el obispo ó prelado observa que la donación ó legado pío no proporciona lo necesario para cubrir los gastos indispensables de lo que en aquélla se ordena, no la acepta, á ménos que los herederos del fundador se comprometan á suplir lo que falta.

d) El obispo tiene facultad para disponer por estatuto general, que en lo sucesivo no se aceptarán estas fundaciones sinó bajo determinadas reglas (1).

Cumplimiento de las cargas impuestas en la fundación.—Las leyes canónicas sobre el cumplimiento de las cargas impuestas en las fundaciones se hallan resumidas en la constitución *Cum sæpe contingat* de Urbano VIII (2), y en otra de Inocencio XII, cuyo contenido puede resumirse en lo siguiente=

a) Que se celebren todas las misas prescritas por el que dió la limosna, con arreglo á lo estipulado en la fundación (3).

b) Que el dinero y bienes muebles adquiridos por las iglesias seculares ó regulares con la carga perpetua de celebrar cierto número de misas, se coloquen por aquéllos á quienes corresponde, en bienes inmuebles, fructíferos, con expresa mención de las cargas anejas á los mismos, bajo la pena de entredicho *ipso facto incurriendo ab ingressu Ecclesie* (4).

c) Que los rectores de las iglesias no puedan recibir limosnas mensuales y cotidianas para la celebración de misas, á ménos que se hayan cumplido las prescriptas en las fundaciones, ó puedan cumplirse dentro de un breve espacio de tiempo, debiendo advertirse, que si el que dá la limosna, conviene después de oír el impedimento, en que se dilate el cumplimiento de las mi-

(1) *Prælect. Jur. Canon., in seminar. S. Sulpit.*, ibid.

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon. pars special.*, lib. II, título I, dissert. 2.ª, cap. II, art. 2.º

(3) *Constit. Nuper a Congregatione*, par. 3.º, dada por Inocencio XII en 21 de Diciembre de 1697.

(4) *Constit. Nuper a Congregatione*, par. 6.º

sas encargadas para cuando se pueda, entónces puede recibirse la limosna (1).

d) Los rectores de las iglesias tienen obligación de formar la tabla de las fundaciones perpetuas y temporales y colocarla en punto que esté á la vista de todos, debiendo conservar en el archivo un libro de todas y cada una de las cargas perpétuas y temporales, y otro de las misas manuales, en donde se especifiquen las limosnas recibidas y las misas celebradas por la intención de los que las han dado (2).

e) Se impone la pena de suspensión á los rectores de las iglesias que no cumplan lo mandado en el caso anterior, y á los superiores seculares y regulares que no exijan su cumplimiento (3).

f) Los obispos son los encargados de vigilar por el cumplimiento de las fundaciones, en cuanto que ellos son los ejecutores de todas las disposiciones piadosas *inter vivos* ó *causa mortis* (4).

Cuándo cesan aquéllas.—Si los bienes ó rentas de la fundación han desaparecido por completo, sin culpa alguna por parte de los rectores de las iglesias, cesan en un todo las obligaciones ó el cumplimiento de las cargas impuestas en aquélla.

Si esto ha provenido de negligencia del párroco ó rector de la iglesia, tiene estrecha obligación de conciencia á cumplir todas las cargas y á sustituir, si puede, otros bienes ó rentas en lugar de los que se perdieron por culpa suya (5).

Su reducción.—Cuando el obispo ó superior aceptó una fundación, cuyas cargas son superiores á las rentas, de modo

(1) Constit. *Nuper a Congregatione*, pár. 10.

(2) Constit. *Nuper a Congregatione*, párrafos 26 y 27.

(3) Constit. *Nuper a Congregatione*, párrafos 29 y 30.

(4) *Concil. Trid.*, sesión 22, cap. VIII *De Reformat.*

(5) *Praelect. Jur. Canon.*, in *Seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o pár. 3.^o, núm. 591.

que no haya facilidad de encontrar quien se encargue de su cumplimiento, habrá necesidad de pedir su reducción.

Esto mismo tendrá lugar si las rentas de la fundación han disminuido considerablemente, de manera que no son suficientes para atender al cumplimiento de las cargas impuestas en aquélla.

Quién la hace.—El Concilio de Trento dispuso que los obispos en el sínodo diocesano, y los abades y generales de las órdenes en sus capítulos generales, estableciesen sobre esto *quidquid magis ad Dei honorem, et cultum, atque ecclesiarum utilitatem viderint expedire* (1).

La Sagrada Congregación del expresado Concilio declaró que dicho decreto se entienda respecto á las fundaciones aceptadas ántes del citado Concilio, y nó de las que se hubieren constituido después, porque en este caso es necesario obtener licencia del Sumo Pontífice; y así se halla igualmente sancionado por el Papa Urbano VIII (2).

Formalidades en su ejecución.—Una vez obtenido el indulto apostólico de reducción de cargas, el obispo procederá á su cumplimiento en la forma siguiente:

a) No reducirá las cargas estipuladas por los primeros fundadores en la misma fundación, á ménos que haya una gravísima necesidad (3).

b) No se procede á la reducción de misas sinó en el caso de que no baste la reducción de otras cargas, bajo el supuesto de que el indulto apostólico comprenda todos los legados y disposiciones piadosas.

c) Que si el indulto apostólico se concreta á la reducción de cargas de misas, el obispo se limitará á cumplimentarlo, sin extenderse á las demás disposiciones de la fundación (4).

(1) Sesión 25, cap. IV *De Reformat.*

(2) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XIII, cap. últ., núm. 18 y siguientes.

(3) *Prælect. Jur. Canon in Seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, pár. 3.^o, núm. 593.

(4) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XIII, cap. últ., núm. 22.

d) Que procede reducir el rito y solemnidad de las misas antes que su número (1).

Disciplina particular de España.—La Iglesia de España poseyó también bienes muebles y algunos inmuebles en la época de las persecuciones (Concilio de Iliberis), que aumentaron extraordinariamente desde la conversión de Recaredo; pero los perdió durante la dominación de los sarracenos para volverlos adquirir con creces durante la reconquista y después, por todos los medios legítimos señalados en este capítulo con arreglo á la legislación general de la Iglesia.

TÍTULO SEXTO.

BENEFICIOS ECLESIASTICOS.

CAPÍTULO PRIMERO.

BENEFICIOS, Y SU ERECCIÓN.

ARTÍCULO I.

DE LOS BENEFICIOS EN GENERAL.

Origen de la palabra beneficio y su definición.—La palabra beneficio no se usó en los primeros siglos de la Iglesia en el sentido que tiene hoy, porque los clérigos eran adscritos al servicio de la Iglesia, y de ella percibían lo necesario para la vida, siendo lo principal el oficio que habían de cumplir, y lo accesorio y secundario el alimento que la Iglesia les suministraba; así que San Jerónimo condena la conducta de los prelados que, prescindiendo de esta doctrina ante-

(1) *Prælect. Jur. Canon in Seminar. S. Sulpit.*, ibid.

ponían el beneficio de los particulares al servicio ó utilidad de la Iglesia (1).

Verdad es que el Concilio de Calcedonia usa esta palabra (2); pero aun en el supuesto de que no sea apócrifa (3), basta la simple lectura del decreto citado para comprender su mente: trata de los ministerios sagrados, y condena su concesión mediante dinero, ó en consideración á los derechos ó emolumentos que producen (4).

La palabra beneficio, en el sentido que tiene actualmente, se usó ya en el siglo VIII, según consta del Concilio de Francofurt de 794 y del Concilio de Macón de 813 (5), y parece que se trasladó del derecho feudal, porque los campos del fisco dados á los soldados por el servicio militar se llamaban beneficios (6).

Se entiende por beneficio: *El derecho perpetuo á percibir las rentas de los bienes eclesiásticos por algún servicio espiritual constituido por la autoridad eclesiástica.*

Sus requisitos esenciales.—Los requisitos esenciales en los beneficios eclesiásticos se hallan expresados en la definición, y son los siguientes:

I. *Un derecho perpetuo*, por razón del mismo beneficio, que debe durar perpetuamente, de modo que no concluya por la remoción ó muerte del beneficiado, sino que en este caso quede vacante y se confiera á otro (7), sin que esto obste para que el beneficio cese ó quede extinguido mediante justa causa aprobada por la Iglesia.

El beneficio es igualmente un derecho perpetuo por razón del beneficiado, de manera que no se le confiera por tiempo li-

(1) C. VI, quæst. 1.^a, causa 8.^a

(2) C. IX, quæst. 3.^a, causa 1.^a

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, dissert. 1.^a, cap. I.

(4) C. IX, quæst. 3.^a, causa 1.^a

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, id. ibid.

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, pár. 1.^o

(7) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, disert. 1.^a, cap. III.

mitado, ni pueda ser privado de él, sinó mediante causa justa, aprobada y reconocida por la Iglesia (1).

II. El beneficiado ha de tener derecho á percibir las rentas de los bienes eclesiásticos, aunque esto sea una cosa accesoria al oficio, porque es lo que constituye formalmente el beneficio (2).

III. Que este derecho del beneficiado proceda de un servicio espiritual, porque en el beneficio se distinguen dos derechos, que son el oficio espiritual y el derecho á percibir los frutos anejos al oficio.

El oficio espiritual afecta á la naturaleza del beneficio, como su fundamento y causa principal (3).

IV. Que este derecho sea constituido por autoridad eclesiástica: de modo que las rentas eclesiásticas no constituirán beneficio propiamente dicho, si no ha mediado un acto de la autoridad espiritual que las agregue al oficio (4).

En qué se distingue de las prebendas y capellanías.—La prebenda comprende solamente los frutos ó emolumentos que perciben los clérigos por razón de los oficios ó beneficios eclesiásticos, y de aquí que se llame prebenda á la dote del beneficio, ya consista en predios rústicos ó urbanos, ya en censos ó en otras cosas inmuebles; pero el beneficio tiene una significación más amplia, y comprende además de los frutos ó rentas, el oficio ó ministerio eclesiástico y espiritual (5).

Las capellanías, cuyo objeto es la celebración del mayor ó menor número de misas en épocas determinadas, son colativas ó electivas, según se dirá más adelante (6).

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid., cap. II.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, pár. 1.º, núm. 3.º

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 5.º

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 11.

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XIV, pár. 3.º

(6) Cap. VIII de este título.

Se distinguen del beneficio, cuando son electivas, en que no se hallan erigidas con autoridad del Obispo ú otro superior eclesiástico, que tenga jurisdicción episcopal ó cuasi episcopal.

En el caso de ser colativas ó erigidas con autoridad episcopal ó cuasi episcopal, se distinguen del beneficio, si no se confieren en título perpetuo (1).

Su diferencia de los legados pios y pensiones.—

Los legados piadosos, que tienen por objeto la celebración de misas ú otro oficio sagrado con asignación de rentas perpetuas, no son beneficios, porque les falta la erección con autoridad del obispo (2).

Las pensiones, que son cierta porción de frutos ó renta anual extraída de los bienes eclesiásticos, no son beneficios, y pueden concederse indistintamente á los clérigos ó legos sin que lleguen anejo un servicio espiritual (3).

Origen de los beneficios en las catedrales y colegiatas.—Los diáconos administraban los bienes de la Iglesia, y ellos eran los encargados de distribuirlos convenientemente entre sus partícipes, según se deja consignado en el título anterior.

Esta disciplina se observó hasta después de la conversión de Constantino á la fé católica (4); pero esta manera de atender á las necesidades de los ministros del culto se prestaba á no pocos abusos por parte de los encargados de hacer la distribución y era, por otra parte, sumamente embarazosa é incómoda para los administradores y para los clérigos; y de aquí que San Eusebio Bercelense estableciese la vida común con su clero como medio de obviar estas y otras dificultades, cuya conducta

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ. in lib. III Decret.*, tít. V, pár. 1.^o, núm. 8.^o

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, pár. 5.^o

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. III Decret.* tít. V, pár. 1.^o, núm. 9.^o

(4) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 1.^a, cap. I.

siguieron otros obispos inmediatos, é imitó San Agustín como obispo de Hipona (1).

La vida común de los obispos con su clero no fué de observancia universal en la Iglesia, y fué de corta duración entre los que la habían adoptado, siendo muy varias las costumbres de las iglesias desde el siglo VI hasta el XI; pero los obispos, en vista de la repugnancia de su respectivo clero á la vida común, consintieron en que cada uno viviera en su casa, y al efecto les concedieron la administración de ciertos predios para atender á su subsistencia (2), lo cual es el más antiguo precedente de los beneficios en las iglesias catedrales tal como existen en la actualidad.

Como de este nuevo orden de cosas resultáran no pocos males, se trató de volver á la vida común, y los beneficios singulares volvieron á la masa común de bienes eclesiásticos en el siglo XI; pero este estado de cosas no fué tampoco de larga duración, y en su consecuencia se procedió de nuevo á la división de bienes, y de aquí los beneficios que se conocen con el nombre de prebendas en las catedrales y colegiatas (3).

Las iglesias rurales, que contaban con numeroso clero, siguieron el ejemplo del clero catedral respecto á la vida común y á su secularización, y de aquí muchas de las iglesias colegiatas.

Desde cuándo data en las demás iglesias.—El origen de los beneficios en las iglesias no catedrales tiene cierta semejanza con el señalado respecto á éstas. Los presbíteros y diáconos mandados por sus respectivos obispos á diversos puntos de las diócesis para atender á ciertas necesidades de los fieles, regresaban después de cumplir su misión á la iglesia catedral, á la cual se hallaban adscritos, porque no había otra iglesia en

(1) C. X, XI y XVIII, quest. 1.^a, causa 12.

(2) C. XXXII, quest. 2.^a, causa 12.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 1.^a, cap. I.

la diócesis durante los tres primeros siglos. Todo el clero recibía en esta época la parte correspondiente del acervo común, administrado por los diáconos, bajo la vigilancia é inspección del obispo.

Las iglesias parroquiales se erigieron fuera de la ciudad episcopal en el siglo IV, porque así lo exigía la necesidad espiritual del gran número de fieles que vivían en ciudades, villas y aldeas situadas fuera de la capital de la diócesis, y entonces se mandaron presbíteros y ministros ordenados á título de estas iglesias para que ejercieran y desempeñasen el oficio sagrado por derecho ordinario, y tenían facultad de recibir las oblacones de los fieles con arreglo á la antigua costumbre en cuanto fuera posible; así que los párrocos y ministros de estas iglesias, ponían á disposición del obispo las oblacones hechas por los fieles, y principalmente las que consistían en cosas inmuebles, recibiendo ellos del obispo lo necesario para su subsistencia y la del culto, etc.

Se dispuso á fines del siglo V por Genadio, patriarca de Constantinopla, que los clérigos de cada iglesia recibieran para sí las oblacones hechas á la misma, y esta legislación se extendió poco después á las iglesias parroquiales y otras inferiores de Occidente, si bien reservándose la mitad de las oblacones ó una porción inferior para los obispos (1).

Una vez adquirido este derecho, los párrocos rurales, y después los civitatenses, lo mismo que todos los clérigos, fueron adscritos al servicio de las iglesias á título de beneficio, con la porción correspondiente de bienes que ellos administraban (2).

Clases de beneficios.—Los beneficios eclesiásticos se distinguen entre sí por razón—del oficio espiritual—de las personas que los proveen—de aquellos á quienes se confieren—y diverso motivo de su concesión ó perpetuidad.

(1) C. VII, VIII y X, quest. 1.^a, causa 10.—C. IV, quest. 3.^a, causa 12.—C. I.X, quest. 1.^a, causa 16.—Cap. XVI, tít. XXXI, lib. I *Decret.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus. Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 1.^a, cap. I.

Sus especies por razón del oficio espiritual.— Se dividen en—*mayores*—y *menores* (1).

Beneficios mayores y cuáles se hallan en este caso.—Se llaman mayores: *Los oficios que llevan anejos los principales ó primeros grados en la Iglesia con cura de almas y jurisdicción.*

Tales son el pontificado (2), patriarcado, arzobispado, episcopado, abadía con jurisdicción cuasi episcopal y el cardenalato por razón del título (3); pero el uso común de hablar los excluye de esta denominación á menos que se trate de cosas favorables (4); y se los dá el nombre de *beneficios consistoriales*, en cuanto se proveen por el Sumo Pontífice en el consistorio (5).

Beneficios menores y sus especies.—Se llaman beneficios menores: *Todos los demás oficios, aún cuando lleven en sí algo de excelencia y dignidad.*

Los beneficios menores se dividen en—*simples*—y *dobles*.

Beneficios simples y sus especies.—Se entiende por beneficios simples: *Aquellos oficios destituidos de jurisdicción y cura de almas* (6), *cuya obligación se reduce al rezo del oficio divino en el coro ó privadamente, con cargo de servir al altar ó sin él.*

Los beneficios simples pueden ser *residenciales* ó *nó residenciales*, según que exigen ó nó residencia (7).

Entre estos beneficios simples se cuentan las capellanías y canonicatos de iglesias colegiales y catedrales, por más que éstos se aproximan á las dignidades, y no se los comprende entre los beneficios simples en las cosas odiosas.

(1) Cap. VIII, tít. V, lib. III *Decret.*

(2) Cap. I, tít. XXVI, lib. V *Decret.*

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár 13.

(4) Cap. XXXII, tít. XL, lib. V *Decret.*

(5) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. II, cap. V, pár. 72.

(6) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 2.ª

(7) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 13.

Beneficios dobles.—Los beneficios dobles son: *Los oficios que tienen aneja jurisdicción ó cura de almas* (1).

A esta clase pertenecen las dignidades, oficios, personados y curatos (2).

Especies de beneficios por razón de las personas que los confieren.—Se dividen en—*reservados*—y *no reservados*.

Se llaman reservados: *Los oficios cuya colación pertenece al Sumo Pontífice*.

Se dá el nombre de *no reservados*, á los oficios cuya colación corresponde á los prelados inferiores (3).

Sus clases por razón de las personas á quienes se confieren.—Se dividen en—*regulares*—y *seculares*, según que ha de recaer su nombramiento en religiosos ó clérigos seculares.

Los beneficios se consideran seculares en caso de duda, debiendo probarse que es regular por la fundación, privilegio ó prescripción (4).

Sus especies por el modo de conferirlos.—Se dividen en—*electivos*—*colativos*—de *patronato* ó *mixtos*.

Se entiende por beneficios electivos: *Los oficios que se adquieren por elección hecha según las reglas del derecho y mediante la confirmación del superior* (5).

Se llaman colativos: *Los que se adquieren por libre voluntad del prelado eclesiástico ú otro colator, sin necesidad de que medie elección ó presentación* (6).

Son de patronato ó mixtos, *los beneficios que se obtienen*

(1) BERARDE: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 2.^a

(2) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, univ., lib. II, cap. V, pár. 72.

(3) VECCHIOTTI: *Iust. Canon.*, lib. II, cap. II, pár. 13.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. V, párrafo 2.^o, núm. 14.

(5) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^a, párrafo 4.^o, núm. 595.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. V, párrafo 2.^o, núm. 38.

por previa presentación del patrono y subsiguiente institución del obispo u otro prelado eclesiástico (1).

Cuando se duda si un beneficio es colativo, electivo ó mixto, se presume que es libre ó meramente colativo, porque la elección ó presentación son cualidades accidentales y extrínsecas á los beneficios, y por ellas se perjudica á la libre provisión de los ordinarios, á quienes pertenece la colación según el derecho común.

Sus especies por razón de su duración.—Se dividen en—*titulares ó perpetuos—y manuales.*

Son perpetuos: *Los beneficios que se confieren en título perpetuo, de manera que sus poseedores no pueden ser privados de ellos sin causa expresa en el derecho.*

Se llaman manuales: *Los que se confieren en título revocable, de manera que pueden quitarse á su poseedor á voluntad del que los confiere.*

En caso de duda los beneficios seculares se consideran perpetuos ó titulares, y los beneficios regulares como manuales, á ménos que sean curados ó electivos; porque los beneficios seculares por su naturaleza y con arreglo al derecho comun son titulares é irrevocables (2), á diferencia de los beneficios regulares, que son manuales según el derecho ordinario, y por su naturaleza en virtud del voto de obediencia (3).

Los beneficios se dividen también en—*compatibles é incompatibles.*

Los beneficios incompatibles se dividen en incompatibles *in primo vel secundo genere.*

Sub eodem vel diverso tecto.

Uniformes ó diformes.

En título y en encomienda.

(1) *Prælect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, párrafo 4.^o, núm. 595.

(2) C. XII, distinct. 55.—C. VII, distinct. 56.—C. II, distinct. 70.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Ecclæ. univ.*, in lib. III Decret., tit. V, párrafo 2.^o, núm. 34 y sig.

ARTÍCULO II.

DE LA ERECCIÓN DE BENEFICIOS.

Creación ó erección de beneficios, y requisitos necesarios al efecto.—Se entiende por erección de un beneficio: *El acto legítimo por el cual se constituye un oficio ó ministerio sagrado, que ha de ejercerse por un clérigo en determinada iglesia ó altar, mediante una renta perpetua que percibirá con pleno derecho.*

Es, pues, indispensable en la erección de todo beneficio, que medien los requisitos siguientes:

- a) Autoridad legítima del superior eclesiástico (1).
- b) Título canónico, ó sea la iglesia ó ara dedicada al Señor, bajo la veneración de algún misterio ó patrocinio de un santo (2).
- c) Oficio espiritual, que el titular haya de cumplir en la misma iglesia, porque la erección de beneficios tiene por fin el culto divino (3).
- d) Dote competente, ó sea bienes ciertos, estables y productivos, por cuyo medio se provea al sostenimiento del clérigo titular y al cumplimiento de las cargas del beneficio (4).
- e) Leyes de la fundación, ó sea determinación de las obligaciones anejas al oficio, porque el fundador puede señalar las condiciones que tenga por conveniente, y una vez aprobadas por la autoridad legítima, habrán de observarse religiosamente (5).

Si la creación de obispados corresponde al poder civil.—El derecho de erigir obispados ó diócesis no compete

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 14.

(2) *Prælect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, párrafo 4.^o, núm. 596.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 14.

(4) BERARDI: *Comment. in Jus. Eccles. univ.*, tom. II, dissert. 3.^a, cap. I.

(5) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 14.

al poder civil, porque se trata de una cosa espiritual, que tiene por objeto señalar el territorio dentro del cual cada obispo ha de ejercer su cargo en provecho de las almas que se ponen bajo su dirección, siendo á la vez un medio de conservar el órden y la unidad entre los distintos rectores de las iglesias (1); así que los apóstoles y después los sumos pontífices y los concilios usaron de este derecho, que es de la exclusiva competencia de la Iglesia.

Autoridad á quien compete la creación de beneficios mayores.—La creación de beneficios mayores (2) corresponde de derecho al Sumo Pontífice, y ninguna otra autoridad puede ejercer esta facultad, á ménos que medie el consentimiento expreso ó tácito de la suprema cabeza de la Iglesia, por más que de hecho se verificase otra cosa en tiempos antiguos (3), según se deja consignado en otro lugar de esta obra (4); así que la erección de diócesis ó sedes episcopales (5), cabildos de iglesias catedrales y colegiadas (6), nuevas dignidades (7) y mutación de una iglesia regular en secular, es de la exclusiva competencia del Sumo Pontífice.

A quién corresponde la erección de beneficios menores.—La erección de beneficios simples é iglesias parroquiales corresponde á los obispos en sus respectivas diócesis (8), y es de su competencia crear nuevos canonicatos y prebendas en las iglesias catedrales y colegiadas, extendiéndose este derecho á la erección de dignidades que ya existieron y fueron suprimidas,

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. I, tít. I, tract. 2.º, disert. 1.ª, cap. I, art. 1.º, pár. 1.º, quest. 2.ª.

(2) C. I, dist. 22.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus. Eccles., univ.*, tom. II, disert. 3.ª, cap. I.

(4) Lib. II, tít. II, cap. II.

(5) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. II, cap. V, pár. 75.

(6) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 14.

(7) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, disert. 3.ª, cap. I.

(8) Cap. III, tít. XLVIII, lib. III *D. cret.*—*Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XIII *De Reformat.*

siempre que medie el consentimiento de los respectivos cabildos (1).

Cuando el cabildo es enumerado, de modo que el Sumo Pontífice ha fijado el número de canonicatos y prebendas, entonces el obispo no puede aumentarlo (2); debiendo igualmente advertir que no se extiende tampoco su facultad á la erección de dignidades no reconocidas en la iglesia (3).

Los obispos tienen también derecho á la erección del oficio de penitenciario en las iglesias catedrales y del de lectoral en las catedrales y colegiatas (4).

Solemnidades con que ha de hacerse.—Los requisitos que se dejan indicados en este capítulo respecto á la erección de beneficios, son comunes á todos éstos, pero además es de necesidad en la erección de beneficios episcopales, parroquiales y conventuales, que se observe lo siguiente:

I. Se ha de procurar que no se perjudique á tercera persona en sus legítimos derechos (5), y al efecto habrá de citarse á todos los que pueden hallarse en este caso.

Como consecuencia de esta doctrina:

a) Se necesita el consentimiento del cabildo en la erección de dignidades ó canonicatos en las iglesias catedrales ó colegiatas.

b) Se habrá de oír en la erección de parroquias á los párrocos próximos, y si son de patronato, á los patronos, á fin de que las partes interesadas aleguen lo que á su derecho convenga (6), y en su vista se resuelve lo que sea justo (7).

(1) VECCHIOTTI: *Last. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 14.

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. I, tit. I, tract. 2.^o, disert. 2.^a, cap. II, art. 2.^o, pár. 1.^o

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, disert. 3.^a, cap. I.

(4) *Concil. Trid.*, sesión 5.^a, cap. I, *De Reformat.*—Sesión 24, cap. VIII *De Reformat.*

(5) Cap. XXXVI, tit. V, lib. III *Decret.*

(6) C. XLIV, quæst. 1.^a, causa 16.—Cap. XVII, tit. XXXIII, lib. I *Decret.*—Cap. III, tit. XLVIII, lib. III *Decret.*

(7) Cap. XXVIII, tit. IV, lib. III *sext. Decret.*

II. La erección ha de hacerse en lugar conveniente, hallándose dispuesto respecto á las iglesias catedrales, que se establezcan únicamente en ciudades ó poblaciones muy concurridas y de importancia (1).

Esta disposición legal se dictó con el objeto de que la dignidad episcopal no se envileciese, y de que los obispos pudiesen más fácilmente resolver con acierto las muchas cuestiones sometidas á su fallo, porque en estas poblaciones viven personas entendidas y eruditas, de quienes pueden asesorarse en caso necesario (2).

El Concilio de Trento dispone respecto á las iglesias parroquiales que se establezcan ó erijan en todas las poblaciones que no existan, determinando á la vez que se señalen los límites de cada parroquia, á fin de evitar la consiguiente confusión con no poco daño de las almas (3).

La erección de parroquias nuevas en un lugar tendrá efecto, según una tradición vulgar, si en él hubiera diez familias por lo ménos.

Esto se funda en una disposición del derecho (4) mal interpretada, á juicio de sabios escritores (5).

En cuanto á los demás beneficios nada se establece en el derecho acerca de este punto.

III. Los beneficios no pueden erigirse sin que medie justa causa, como la necesidad ó utilidad de la Iglesia, aumento del culto divino, piedad y religión.

Como consecuencia de esta doctrina habrá de evitarse la erección que sea efecto de emulación respecto á las iglesias próximas, ó que tenga por objeto la avaricia ó torpe lucro (6).

(1) C. II, III y IV, distinct. 80.—C. LIII, quest. 1.^a, causa 16.—Cap. I, título XXXIII, lib. V *Decret.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, disert. 3.^a, cap. I.

(3) Sesión 24, cap. XIII *De Reformat.*

(4) C. III, quest. 3.^a, causa 10.

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, disert. 3.^a, cap. I.

(6) C. X, distinct. 1.^a, de *Consecrat.*

La apreciación de la causa que motiva la erección de un beneficio, corresponde al obispo; y él en su prudencia ha de resolver lo que considere más útil á la Iglesia (1).

CAPITULO II

INNOVACIÓN DE LOS BENEFICIOS.

Innovación, y cuándo tiene lugar.—Se entiende por innovación de beneficios, *cualquiera alteración que mude el estado de los beneficios.*

Es un principio universal en la Iglesia que no se haga mutación alguna en los beneficios eclesiásticos una vez erigidos canónicamente, debiendo por lo mismo conservarse en su integridad sin mutación alguna (2).

Este principio deja de observarse siempre que medie una urgente necesidad ó evidente utilidad de la Iglesia (3).

Diversos modos de verificarse.—La innovación de los beneficios puede verificarse por—unión—división—desmembración—y supresión.

ARTÍCULO PRIMERO.

DE LA UNIÓN DE BENEFICIOS.

Unión de beneficios, y sus especies.—Se entiende por unión de beneficios: *Un acto por el cual dos ó más iglesias ó beneficios se unen entre sí, mediante justa causa, por el legítimo superior* (4).

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, disert. 3.^a, cap. I.

(2) Cap. VIII, tít. V, lib. III *Decret.*

(3) Cap. XXXIII, tít. V, lib. III *Decret.*

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 2.^a, par. 18.

La unión de beneficios puede ser—*personal ó temporal—real ó perpetua*.

La primera se conoció en otros tiempos, y tenía por objeto favorecer á una persona con dos beneficios durante su vida por medio de esta unión, ya que no era permitido poseer á la vez dos beneficios distintos; pero esto era un medio de eludir la ley, y de aquí que el Concilio de Trento condenó esta especie de unión de beneficios (1); porque más bien que unión es una paliada dispensa de la ley, que prohíbe la pluralidad de beneficios (2).

La unión real y perpetua tiene por objeto el bien público ó utilidad de la Iglesia; así que cuando consta la unión de dos beneficios y se duda de su cualidad, se considerará real y no personal (3).

La unión real ó perpetua de beneficios puede ser—*æque principalis —per confusionem —per sujectionem ó accesionem*.

La unión *æque principalis* tiene lugar, cuando dos iglesias ó beneficios se unen de modo que se confieren á una y la misma persona ó rector, salvo los derechos, estado y nombre de uno y otro beneficio ó iglesia.

En este supuesto, ninguna de las dos iglesias ó beneficios queda sometido ó unido al otro, sinó que cada uno de ellos conserva íntegro é incólume su propio título, su especial fin, rentas y todos sus primitivos derechos ó privilegios (4).

La unión *per confusionem* se verifica, si los dos beneficios se unen de tal modo entre sí, que de ellos resulta un tercero, porque cada uno de los dos ha dejado de existir, y sus respectivos derechos se han trasferido al nuevo beneficio; de manera que es una extinción y supresión de beneficios más bien que unión,

(1) Sesión 7.^a, cap. IV *De Reformat.*

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 15.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus eccl'es. univ.*, tomo II, disert. 3.^a, cap. III.

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 15.

porque se suprimen los títulos de dos ó más iglesias y beneficios, creándose en su lugar otro nuevo (1).

La unión *per subjectionem* ó *accessionem* consiste en que una iglesia ó beneficio se une á otro, quedando sometido á él y bajo su dependencia.

Esta unión se llama también *sujetiva*, *servil*, *desigual* y *accesoria*, porque una iglesia ó beneficio se une á otra iglesia ó beneficio, al cual queda sometida y sujeta, como lo accesorio á lo principal; de suerte que la iglesia, á la cual se hace la unión de otra, se llama *madre* ó *matris*, y la iglesia unida tiene el concepto de *hija*, y este es el motivo de llamársela *filial*.

La iglesia unida *per subjectionem* pierde el título y nombre propio, reviste la naturaleza del beneficio, al que se une, y se hace miembro ó parte de aquel, de modo que pasan y se transfieren á la iglesia principal las cargas y derechos de aquélla (2).

Debe advertirse en cuanto á la traslación de cargas y derechos, que según algunos escritores el oficio unido conserva todos los derechos propios, compatibles con su dependencia (3), sin que pasen á la iglesia principal, y goza á la vez de los derechos y prerrogativas de ésta (4).

Incorporación de beneficios, y sus clases.—La incorporación de iglesias y beneficios se conoció en la Edad media con los nombres de *anexión*, *sujeción* ó *unión* (5), y consiste en que un beneficio se una á determinado monasterio, colegio ó capítulo, lo cual tuvo por objeto restablecer la vida monástica ó canónica.

La incorporación se verificaba (6) de alguno de los modos siguientes—

Non pleno jure, ó sea en cuanto á las cosas temporales

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 15.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 15.

(3) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. V, cap. III, pár. 214.

(4) BERARDI: *Coment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, disert. 3.^a, cap. III.

(5) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. II, cap. V, pár. 76.

(6) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 15.

únicamente, lo cual tiene lugar cuando las rentas de una parroquia se asignan á un monasterio, colegio ó cabildo; pero la cura de almas se ejerce por el rector del beneficio instituido canónicamente por el obispo, mediante presentación del monasterio, etc.

De esto resultó la distinción entre iglesia y altar, entendiéndose por iglesia todos los bienes temporales ó rentas, y por altar la administración de sacramentos y la cura espiritual.

Esta distinción debe tenerse presente al leer en documentos del siglo VIII principalmente, que los legos se hallaban al frente de las iglesias, lo cual solo indica que recibían de ellas los diezmos y rentas temporales (1).

Pleno jure ó sea cuando la unión ó incorporación se hacía al monasterio ó corporación eclesiástica en cuanto á lo espiritual y temporal, de suerte que la cura de almas radicaba (*habitualmente*) en el cabildo ó monasterio, y se ejercía (*actualiter*) por un vicario designado al efecto (2).

Plenissimo jure, ó sea cuando el prelado del monasterio, cabildo ó corporación obtiene los derechos espirituales y temporales, así como la jurisdicción cuasi episcopal en el clero y pueblo de la iglesia ó beneficio, que se ha unido (3).

Autoridad á quien compete la unión de beneficios.—Toda la doctrina relativa á este punto puede resumirse en lo siguiente:

I. El Romano Pontífice, como suprema cabeza de la Iglesia, puede en virtud de su autoridad plena y amplísima en la administración de los beneficios y bienes eclesiásticos, unir toda clase de iglesias y beneficios mayores y menores (4), como las iglesias catedrales y metropolitanas (5)—las dignidades *post pon-*

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon*, lib. III, cap. II, pár. 15.

(2) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. II, cap. V, pár. 76.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 15.

(4) Cap. II, tít. IV, lib. III *sext. Decret.*

(5) Cap. VIII, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

tificalem en las catedrales, y las que son principales en las colegiatas (1), lo mismo que todas las demás iglesias y beneficios.

II. El obispo tiene por derecho común facultad para unir perpetuamente las iglesias y beneficios de su diócesis, no exentos de su jurisdicción, siempre que no sean consistoriales ni primeras dignidades de los capítulos.

Esta facultad del obispo se extiende aún á los beneficios reservados, si la reserva no es perpetua—á los beneficios que provee el Papa por devolución, en virtud de negligencia de sus predecesores—la Iglesia secular á otra secular ó regular ú otro lugar religioso aún exento, siempre que la iglesia que se une á otra esté sujeta al obispo y dentro de su diócesis (2).

III. El cabildo catedral puede, *sede vacante*, unir los beneficios de igual modo que el obispo, siempre que no se perjudiquen los derechos episcopales, ni la unión se haga al capítulo ó mesa capitular (3).

IV. Los legados natos pueden unir los beneficios de la diócesis de que son obispos; y los legados *a latere* tienen igual facultad en el territorio que les está encomendado (4); pero esta unión ha de ser perpetua y no temporal, según se deja consignado respecto á esta facultad de los obispos.

V. El arzobispo puede unir los beneficios de su diócesis en la forma expresada respecto á los obispos, sin que esta facultad se extienda á las diócesis sufragáneas (5), porque no tiene jurisdicción en éstas, sinó en los casos señalados por el derecho.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 5.^o, núm. 170.

(2) Cap. II, tít. IV, lib. III *Clementin.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid, núm. 176.

(4) Cap. I, tít. XV, lib. I *sext. Decret.*—Cap. XXXI, tít. IV, lib. III *sext. Decret.*

(5) Cap. VIII, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

VI. Los prelados inferiores con jurisdicción cuasi episcopal pueden unir las iglesias y beneficios sometidos á ellos; pero esta facultad no se extiende á los demás prelados inferiores, á ménos que les competa por concesión especial privilegio ó prescripción (1).

Causas legítimas para ello.—Las uniones de iglesias y beneficios son odiosas, y han de restringirse con arreglo al derecho común, porque tienden á disminuir el culto divino y se oponen á las prescripciones legales, toda vez que, segun éstas, cada iglesia y beneficio ha de tener su propio rector (2), siendo esto motivo de que toda unión ha de considerarse *æque principalis* en caso de duda, porque es ménos perjudicial que los demás.

El Sumo Pontífice puede unir toda clase de iglesias y beneficios sin mediar causa alguna canónica, porque todas las leyes eclesiásticas no tienen para él otra consideración que la de meramente directivas.

Esto no obsta para que sean nulas las uniones hechas mediante *obrepción* ó *subrepción*, porque esta es su voluntad.

Las demás autoridades eclesiásticas, á quienes compete la facultad de unir beneficios ó iglesias, no pueden verificarlo lícita ni válidamente, si no media alguna de las causas siguientes:

I. Necesidad evidente de la Iglesia (3), y esta causa existe—

a) Si las rentas de las prebendas son tan cortas, que nadie quiere aceptarlas, resultando de esto un grave daño para el culto y el servicio de las iglesias (4).

b) Si la iglesia que se ha de unir, ha sido robada ó destruida (5).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, pár. 5.^o, núm. 180.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 160.

(3) Cap. XXXIII, tít. V, lib. III *Decret.*

(4) C. III, quæst 3.^a, causa 10.—Cap. I, pár. 6.^a, tít. X, lib. III *Clementin.*—*Council. Trid.*, sesión 21, cap. V *De Reformat.*

(5) Cap. II, tít. XXXVI, lib. III *Decret.*

c) Si se halla próxima á otra iglesia, habiendo quedado muy pocos feligreses (1).

II. Utilidad manifiesta de la iglesia, lo cual tiene lugar=

a) Si no se hallan clérigos útiles é idóneos, que sirvan una iglesia ó beneficio, ó resulta de la unión aumento del culto divino (2).

b) Si el seminario no cuenta con las rentas necesarias para el sostenimiento de los jóvenes que reciben allí su educación (3), ó el beneficio ó iglesia carece de lo necesario para el culto divino (4).

En todo caso habrá de tenerse presente como regla general, que se requieren causas más graves y poderosas para la unión de beneficios curados, que respecto á los beneficios simples (5).

Solemnidades que han de observarse.—Para que la unión de beneficios tenga lugar, es además necesario que se verifique con las debidas solemnidades, y á este efecto habrá de tenerse presente, que se necesita=

a) El consentimiento del cabildo catedral, si se hace aquélla por el obispo, y aún en el caso de hacerse por un legado *à la-tere*, cuando obra por derecho ordinario y nó como legado de la Santa Sede (6).

b) Consentimiento del abad ú otro prelado inferior á quien corresponda la administración ó colación de la iglesia ó beneficio.

c) Consentimiento del patrono, si el beneficio es de patronato.

d) Han de ser oídos todos aquellos que se hallan interesados en este asunto, como el rector del beneficio que ha de

(1) C. XLVIII, quæst. 1.^a, causa 16.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, pár. 5.^o, núm. 186.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. XVIII *De Réformat.*

(4) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XV *De Reformat.*

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 1.^a, pár. 19.

(6) Cap. VII, tít. XXIV, lib. III *Decret.*—Cap. II, tít. IV, lib. III *Clementin.*

unirse, el defensor del beneficio vacante, el pueblo ó señor del lugar, en el solo caso de que se opongan á dicha unión (1).

Casos en que procede la separación de los beneficios que se han unido.—Esta tiene lugar cuando los beneficios que se han unido legítimamente, se restituyen á su estado primitivo, por haber cesado las causas que motivaron su unión, y entónces ha de hacerse por la autoridad competente con las mismas solemnidades empleadas en aquélla (2).

Autoridad á quien compete.—El Sumo Pontífice es el único que puede separar ó disolver la unión de las iglesias catedrales, y el obispo tiene esta facultad respecto á los beneficios á él sujetos, aún cuando se hayan unido por el Papa ó su legado, á ménos que haya hecho la unión *ex plenitudine potestatis pontificiæ* (3).

Sus efectos.—La iglesia unida recobra por su separación todos los derechos de que gozaba ántes de su unión, porque vuelve á su primitivo estado (4).

Beneficios que no pueden unirse.—Se deja manifestado que el Papa puede hacer toda clase de uniones de iglesias y beneficios, sin que tenga obligación de observar las reglas dictadas por la Iglesia sobre esta materia; pero las demás autoridades eclesiásticas no tienen este derecho, según se deja consignado, existiendo casos en los cuales se las prohíbe en absoluto esta unión; así que los obispos no pueden proceder á este acto en las iglesias ó beneficios siguientes:

1. Los beneficios de libre colación no pueden unirse á los de patronato, porque entonces se harían aquéllos de patronato (5).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. V, pár. 5.^o, número 190.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 16.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. V, pár. 5.^o, número 199.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid, núm. 200.

(5) *Concil. Trid.*, ses. 25, cap. IX De Reformat.

2. Los beneficios curados no podrán unirse á monasterios, abadías, dignidades, prebendas ú otros beneficios simples, sin excluir los hospitales, seminarios, colegios ó lugares piadosos (1), porque conviene al bien espiritual de las almas que el párroco disfrute de todas las rentas de la iglesia á cuyo frente se halla, para atender á las muchas necesidades de su cargo (2).

3. La unión de diócesis, ó los beneficios de una diócesis á los de otra (3), ni el beneficio de un reino con el de otra nación.

4. No puede unir beneficio alguno á su mesa (la episcopal) ni á la del cabildo, aunque sea muy pobre, para evitar toda sospecha de torpe lucro (4), y porque en este caso el obispo y cabildo serían jueces en causa propia (5).

5. Tampoco puede unir á otros beneficios los beneficios reservados á la Santa Sede, á excepción de los casos siguientes=

a) Pueden unir perpetuamente las iglesias parroquiales y otros beneficios curados; los no curados con los curados por causa de pobreza ú otra de las señaladas en el derecho, aún cuando dichas iglesias ó beneficios sean general ó especialmente reservados, ó de cualquier modo afectos (6).

b) Pueden unir en caso de necesidad á los seminarios los beneficios simples de cualquier clase ó dignidad, aún cuando sean reservados (7) á la Santa Sede de un modo fijo ó inmutable (*afecta*) (8).

c) Tienen igualmente facultad para reducir con las formalidades debidas el número de prebendas en las iglesias catedrales y

(1) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XIII *De Reformat.*—Sesión 23, cap. XVIII *De Reformat.*

(2) VECCHIOTTE: *Inst. Canon*, lib. III, cap. II, párr. 16.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 14, cap. IX, *De Reformat.*

(4) Cap. II. tít. IV, lib. III *Clementin.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 5.º, número 169.

(6) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. V *De Reformat.*

(7) *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. XVIII *De Reformat.*

(8) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. IX, cap. VII, párr. 7.º

colegiatas insignes, si sus rentas no alcanzan á cubrir las atenciones necesarias de cada prebendado, sin que obste reserva alguna general ó especial (1).

6. Es regla general que un beneficio no debe unirse sinó á otro beneficio, á excepción de los beneficios unidos á hospitales, seminarios y otros establecimientos piadosos (2); ni los beneficios seculares con los regulares (3).

ARTÍCULO II.

DE LA DIVISIÓN DE BENEFICIOS.

División de beneficios, y causas en que ha de fundarse.—Se entiende por división de un beneficio: *El repartimiento del beneficio en dos ó más partes con separación de rentas, derechos y cargas ú obligaciones que afectan á dos ó más beneficiados.*

De modo, que según la anterior definición, de un beneficio se hacen dos ó más beneficios; de una parroquia dos ó más parroquias, etc. (4).

Los obispos procedieron en tiempos antiguos á la erección y división de parroquias sin otra regla que su prudente arbitrio (5); pero según la disciplina actual, no puede hacerse esta división sinó en el único caso de que no pueda atenderse de otro modo á las obligaciones anejas al beneficio, lo cual tiene lugar en los casos siguientes:

1. Cuando la distancia de los lugares ó dificultades de los caminos impidan á los feligreses acudir á la Iglesia para asistir á los oficios divinos, y recibir los sacramentos en tiempo oportuno.

(1) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XV *De Reformat.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, pár. 5.º, núm. 165.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XV *De Reformat.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 204.

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 3.ª, cap. III.

no, de manera que esta grave molestia para concurrir á la iglesia es causa de que gran número de fieles carezcan de los auxilios espirituales (1).

2. Cuando el párroco no puede atender al cumplimiento de sus obligaciones, ni aún por medio de vicarios ó sacerdotes auxiliares, por el excesivo número de feligreses (2).

No puede alegarse como causa bastante para la división de un beneficio=

a) El aumento del culto divino.

b) La extinción de un litigio y restablecimiento de la paz y concordia entre los litigantes.

c) La multitud de feligreses de una parroquia, porque entonces procede el nombramiento de mayor número de sacerdotes, que bajo la dependencia del párroco administren el pasto espiritual á los fieles (3).

Autoridad á quien compete hacerla, y reglas que han de tenerse presentes.—La división de iglesias catedrales compete únicamente al Sumo Pontífice (4), que puede llevarla á efecto sin las solemnidades de derecho eclesiástico.

La división de parroquias y otros beneficios inferiores corresponde al obispo, que la llevará á efecto observando las reglas siguientes=

a) La porción de rentas ó frutos señalados á cada beneficiado por la división, habrá de ser suficiente para su cóngrua sustentación (5).

(1) Cap. III, tit. XLVIII, lib. III *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

(2) *Praelect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, art. 2.^a pár. 4.^o, núm. 599.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 17.

(5) Cap. XXVI, tit. V lib. III *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV *De Reformat.*

b) Es obligación suya nombrar un beneficiado para cada uno de los beneficios que han resultado de la división (1).

c) Ha de citarse al rector del beneficio que se trata de dividir y á los feligreses para que aleguen lo que á su derecho convenga, pudiendo el obispo hacer la división contra la voluntad de aquéllos (2) que á su vez pueden apelar al metropolitano ó superior eclesiástico inmediato, si se consideran agraviados (3).

d) Si el beneficio ó iglesia está vacante, puede procederse igualmente á la división, nombrando un defensor para que sostenga sus derechos, puesto que se trata de un acto que envuelve cierta especie de enajenación (4).

e) Se observarán, además, todas las solemnidades que tienen lugar, cuando se procede á la desmembración de un beneficio.

ARTÍCULO III.

DE LA DESMEMBRACIÓN DE BENEFICIOS.

§ 1.º

Desmembración de beneficios en general.

Desmembración de beneficios. — Se entiende por desmembración de un beneficio: *La parte de rentas ó frutos que se segregan de un beneficio, salvo su unidad, para aplicarlos á otra iglesia ó beneficios de escasos rendimientos, ó á un fin piadoso.*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 5.º, núm. 207.

(2) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. IV, *De Reformat.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 5.º, núm. 208.

(4) Cap. I, tít. IX, lib. III *Decret.*

Casos en que tiene lugar.—La desmembración de una iglesia tiene lugar—

- a) Cuando una parte del pueblo se agrega á otra parroquia.
- b) Cuando parte de sus rentas se destinan á otra iglesia.
- c) Cuando se impone alguna carga, como la de abonar una pensión.

En todos estos casos hay desmembración de una iglesia ó beneficio, y como es una regla general del derecho *Ut beneficia sine diminutione conferantur* (1), no puede procederse á este acto sinó en determinados casos.

Causas justas para ello.—La desmembración de beneficios en el sentido de que parte de sus rentas se destinen á otra iglesia ó beneficio, puede hacerse siempre que la necesidad ó utilidad de la iglesia lo reclame, y no haya otro medio de proveer oportunamente á aquélla (2).

Creen algunos escritores, que las considerables rentas de un beneficio y las tenues é insuficientes de otro, son causa bastante para proceder á la desmembración (3).

Autoridad competente y solemnidades necesarias.—El Sumo Pontífice puede hacer esta desmembración sin necesidad de observar las reglas canónicas: basta que á su juicio exista justa causa para la validez y licitud del acto.

Los obispos tienen también esta facultad, respecto á los beneficios de su diócesis (4), siempre que no reserve para sí ó los suyos, ó para su mesa ó la del cabildo, parte de los frutos del beneficio (5), y llene por otra parte las formalidades siguientes=

(1) Tit. XII, lib. III *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, párrafo 5.º, núm. 201.

(3) VECCHIOTTE: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 17.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, párrafo 5.º, núm. 201.

(5) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon.*, pars special., lib. II, título I, tract. 2.º, dissert. 2.ª, cap. III, art. 1.º

a) Citación del rector de la iglesia ó beneficio que se vá á desmembrar.

b) Consentimiento de la iglesia ó cabildo, cuyo canonicato ó beneficio se trata de desmembrar.

c) Si la iglesia ó beneficio está vacante, ha de pedirse el consentimiento del defensor.

d) Se ha de citar á los patronos ó feligreses, según que el beneficio sea de patronato ó parroquial.

e) Consentimiento del cabildo catedral, aun cuando el beneficio no sea catedral ni dependa del cabildo.

f) El obispo debe antes tratar con el cabildo catedral sobre la desmembración proyectada, según la opinión más probable (1).

§ 2.º

De las pensiones sobre los frutos de un beneficio.

Pensión, y sus especies.—La palabra *pensio* (pensión) procede de *pendendo*, y es: *El derecho concedido á alguno por el superior legítimo para percibir, temporal ó perpétuamente, una porción de los frutos de un beneficio ajeno, mediante justa causa.*

La pensión puede ser—laical ó clerical—temporal ó perpétua—real ó personal.

Pensión laical, y á quién puede concederse.—Se llama pensión laical: *La porción de frutos de un beneficio que se dá por un servicio temporal.*

Puede concederse aun a los legos, como la que se otorga al patrono de la iglesia en reconocimiento de la fundación, al defensor de la misma, ecónomo, procurador, cantor y otros ministros en remuneración de los servicios prestados á la iglesia.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccl'es. univ.*, in lib. III Decret. tit. V, pár. 5.º, número 202.

Pensión eclesiástica, y sus especies.—La pensión eclesiástica exige el clericalto en la persona á quien se concede, y ésta es—

Simplemente espiritual, cuando se concede al clérigo por un servicio de esta clase, como la otorgada al coadjutor del obispo, predicador, vicario ó sirviente del párroco.

Mixta, porque se funda en el estado clerical, y sólo puede conferirse á clérigos, aun cuando no tiene por objeto el servicio espiritual, sinó otra causa, como la concedida al párroco anciano ú otro clérigo pobre para su necesaria sustentación, ó al que permutó un beneficio pingüe por otro pobre, etc. (1).

Si es beneficio.—La pensión laical no puede comprenderse bajo el nombre de beneficio, toda vez que no exige estado clerical ni oficio espiritual; y únicamente se cuestiona, si la pensión eclesiástica tiene ó nó el concepto de beneficio, pero parece más probable, que no es beneficio, ni puede comprenderse bajo dicho nombre, porque el beneficio es por su naturaleza perpétuo, y se funda en un oficio espiritual, aparte de que las disposiciones del derecho distinguen los beneficios de las pensiones (2).

Quiénes pueden imponerlas.—El Sumo Pontífice puede imponer pensiones temporales y perpétuas en virtud de su autoridad suprema (3) y plena en todos los beneficios.

Esta facultad corresponde también á los obispos y otros prelados, respecto á la pensión temporal que se extiende á toda la vida del beneficiado gravado, si se interesa la paz y concordia entre dos litigantes sobre un beneficio (4); pero se cuestiona en

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., tit. XII, núm. 2.

(2) Cap. IV, tit. IV, lib. III *sext. Decret.* — *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. II *De Reformat.*

(3) Cap. II, tit. IV, lib. III *sext. Decret.* — Cap. I, tit. V, lib. II *Clementin.*

(4) Cap. XXI, tit. V, lib. III *Decret.*

tre los canonistas, si podrá imponerla durante la vida del sujeto, en cuyo favor se constituye la pensión (1).

Los obispos y otros prelados inferiores al Papa no pueden imponer pensiones perpétuas (2), porque es una dispensa de las leyes generales de la Iglesia que prescriben *ut beneficia sine diminutione conferantur*, y solo el Sumo Pontífice tiene esta facultad (3).

Tampoco pueden imponer pensiones por causa de resignación *in favorem*, ni para aplicarlas á su mesa ó la capitular.

Causas para ello.—El Sumo Pontífice puede imponer pensiones temporales ó perpétuas, laicales ó eclesiásticas, en cualquiera clase de beneficios y en la cantidad que tenga por conveniente, sin que sea necesario para la validez del acto que medie justa causa, puesto que es la suprema cabeza de la Iglesia, y las leyes eclesiásticas no son obligatorias al mismo, ni tienen para él otro concepto que el de meramente directivas (4).

Los obispos y otros prelados no pueden imponer pensiones, sinó mediante justa causa; cuyo requisito es de absoluta necesidad para la validez de aquéllas.

Se considera causa justa para este efecto todo lo que ceda en utilidad de la iglesia, hallándose en este caso—

a) El restablecimiento de la paz y concordia entre los que se consideran con derecho á un beneficio.

b) Servicios prestados ó que han de hacerse á la Iglesia.

c) Socorro de párrocos ó clérigos que han renunciado sus beneficios por ancianidad ó enfermedad.

d) Auxilio de escolares pobres.

(1) *Prælect. Jur. Canon. in semin. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, pár. 4.^o, núm. 604.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XII, número 6.^o

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. III, pár. 39

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XII, número 10.

e) Socorro de los pobres ú otra causa piadosa (1).

f) Compensación equitativa en la permuta de beneficios (2).

Reglas que han de tenerse presentes.—Todas las autoridades eclesiásticas inferiores al Papa, que tienen facultad de imponer pensiones, habrán de observar además los requisitos siguientes:

I. La pensión que se imponga á un beneficiado, ha de ser moderada; de modo que le quede la renta suficiente para su cómoda sustentación, socorro de los pobres, pago de los derechos episcopales y otras cargas anejas á su ministerio (3), porque no debe desnudarse á un santo para vestir á otro según se desprende de las mismas disposiciones del derecho (4) arregladas, por otra parte, á lo que la misma razón aconseja.

Esto tiene aplicación á los beneficios parroquiales, que necesitan personas doctas é idóneas de un modo especial para su buen desempeño; no siendo fácil encontrarlas con estas condiciones, si se impusiesen pensiones excesivas sobre estos beneficios, lo cual cedería en detrimento y grave daño de la Iglesia y de las almas (5).

El Concilio de Trento, partiendo de esta doctrina, prescribe que las iglesias catedrales, cuyas rentas anuales no exceden de mil ducados y las parroquiales de ciento, no podrán gravarse con pensiones (6).

II. Es necesario que cuente con el consentimiento del beneficiado ó clérigo poseedor del beneficio, que trata de gravar con una pensión, y si el beneficio está vacante, habrá necesidad de nombrar un defensor al efecto, porque se trata de un acto que imita la naturaleza y envuelve cierta especie de enajenación (7).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 12.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. III, pár. 39.

(3) Cap. XII, tit. V, lib. III *Decret.*

(4) Cap. XXXVI, tit. V, lib. III *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XII, núm. 13.

(6) Sesión 24, cap. XIII *De Reformat.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 14.

III. Es necesario el consentimiento del patrono, si el beneficio es de patronato, cuando la pensión es por vida del pensionado, y aún en el caso de que sea durante la vida del beneficiado, si la pensión es grandemente onerosa.

Beneficios sobre los que pueden imponerse pensiones, y sobre qué frutos.—Es regla general que el obispo puede imponer pensiones mediante causa justa, en todos los beneficios de sus diócesis, á ménos que sean de tan escasos rendimientos, que apenas basten para cubrir las atenciones del beneficiado.

Las pensiones no suelen imponerse sobre rentas ó productos inciertos, ni sobre las distribuciones cotidianas; así que hay necesidad de expresarlo en términos claros y precisos, cuando recaen sobre dichos frutos.

Es indiferente para la validez del acto que la pensión se imponga en el momento de conferirse el beneficio, antes ó después de haber tenido esto lugar, siempre que por otra parte se observen las demás formalidades de derecho (1).

Si pueden concederse á los legos—La pensión temporal puede concederse aún á los legos, que han prestado ó prestan servicios á la Iglesia, en cuyo caso la concesión solo puede hacerse por el Sumo Pontífice, porque se trata de hacer profano lo que va anejo al título de un oficio espiritual.

A quiénes puede concederse pensión eclesiástica.—La pensión eclesiástica solo puede concederse á las personas que reúnan las condiciones siguientes:

a) Que sea por lo ménos clérigo tonsurado, porque la concesión hecha á un lego es nula, á ménos que se haga por el Papa (2).

b) Que no sea casado, porque los clérigos casados solo gozan del privilegio del cánón y del fuero en lo criminal, siendo considerados en todo lo demás como legos.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XII, número 17 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 21.

- c) Que no sea bígamo.
- d) Que no esté excomulgado ó suspenso, y por esta razón la curia romana en las letras que se expiden en favor del pensionado, pone la cláusula de que se le absuelva de cualquiera censura, lo cual sería inútil, sinó envolviera una incapacidad para obtener esta gracia apostólica.
- e) Que no sea religioso, si el beneficio sobre el que se impone la pensión es secular, porque los religiosos tienen incapacidad para obtener pensiones sobre los beneficios seculares.
- f) Que tenga la edad legítima, ó sea mayor de siete años, sin que obste la disposición Tridentina, que exige catorce años para obtener un beneficio simple (1), porque la pensión no se considera beneficio en las cosas odiosas.
- g) Que no sea irregular (2).

Obligaciones de los agraciados con pensión eclesiástica.—Los clérigos que han obtenido pensión eclesiástica, están obligados á lo siguiente=

- a) A rezar el oficio parvo de la Virgen, á ménos que tenga obligación por otro concepto de rezar el oficio divino.
- b) A llevar el hábito y tonsura clerical.
- c) A levantar las cargas anejas al beneficio del que percibe la pensión, en la parte correspondiente, con arreglo á la porción de frutos que recibe; á excepción del caso en que se le conceda la pensión libre de toda carga por especial gracia de la Santa Sede (3).

Si pueden venderse.—Las pensiones temporales pueden, según muchos canonistas, redimirse y aún venderse sin el vicio de simonía, á diferencia de las pensiones eclesiásticas ó espirituales, en las que nada de esto puede hacerse sin incurrir en el crimen de simonía, debiendo decirse lo mismo de las pen-

(1) Sesión 23, cap. VI *De Reformat.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XII, número 24.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 27 y sig.

siones mixtas según el derecho vigente, á ménos que se haga con licencia de la Santa Sede (1).

Modo de extinguirse las pensiones.—Las pensiones pueden extinguirse de los modos siguientes:

a) Por muerte del que la disfruta, porque la pensión impuesta al beneficio, solo dura mientras viva el agraciado. Si la pensión va impuesta al beneficio, entonces habrá obligación de satisfacerse por el sucesor, á diferencia del caso en que se imponga al beneficiado, porque como carga meramente personal, cesa con su muerte, sin que el agraciado pueda exigirla al sucesor en el beneficio (2).

b) Por matrimonio del pensionario, porque la pensión se concede por razón del clericato, y los privilegios de los clérigos cesan desde el momento que contraen matrimonio, ménos el del canon y el del fuero en lo criminal, sin más excepción que el privilegio concedido por el Sumo Pontífice de que pueda disfrutar dicha pensión, aunque contraiga matrimonio.

c) Por promoción al episcopado, exceptuándose de esta regla los obispos titulares, porque no reciben los frutos de sus episcopados y los obispados cardenalicios de Ostia, etc.

d) Por profesión religiosa, aun cuando sea en las órdenes militares, siempre que sean verdaderos religiosos.

e) Si el pensionario abraza la carrera militar, y no la deja después de amonestado al efecto.

f) Si el pensionario perdona para siempre la pensión.

g) Si obtiene el beneficio gravado con pensión en favor suyo, siempre que lo haya obtenido con arreglo á derecho; porque si lo posee de hecho solamente, revive la pensión desde el momento en que lo pierde mediante sentencia judicial, que declara á otro legítimo poseedor del beneficio.

h) Si el pensionario deja la tonsura y hábito clerical, no

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. III, par. 39.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 41.

obedeciendo el mandato del superior que le recuerda este deber.

i) Por los delitos de herejía (1), lesa majestad (2) eclesiástica, ó percusión de obispos de las diócesis en que tiene la pensión (3).

ARTÍCULO V.

DE LA SUPRESIÓN DE BENEFICIOS.

Supresión de beneficios, y modos de verificarse.

—Se entiende por supresión de beneficios: *La cesación ó extinción de los mismos.*

Esta puede tener lugar—

a) Cuando la iglesia se destruye juntamente con sus rentas, ó cae en poder de infieles, herejes ó cismáticos.

b) Cuando la autoridad eclesiástica competente lo suprime, destinando sus rentas á otros usos piadosos ó eclesiásticos (4)

La traslación de un beneficio no puede en manera alguna confundirse con la supresión del mismo, porque sus rentas, derechos y obligaciones subsisten, si bien mudando de localidad (5).

Causas para ello, y si podrá hacerse por el obispo.—Como la supresión de beneficios disminuye el culto divino, de aquí que no pueda verificarse sinó en los casos de—

a) Escasez de feligresía ó pueblo.

b) Vindicta de un gravísimo delito.

c) Penuria de rentas hasta el punto de carecer de lo absolutamente necesario para el sostenimiento del beneficiado (6).

(1) Cap. IX, tít. VII, lib. V *Decret.*

(2) Cap. V, tít. IX, lib. V *sext. Decret.*

(3) Cap. I, tít. VIII, lib. V *Clementin.*

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon*, lib. III, cap. II, pár. 17.

(5) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. VII *De Reformat.*

(6) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, tít. I, tract. 2.^o, dissert. 2.^a, cap. I, art. 1.^o, pár. 2.^o

El obispo puede reducir el número de beneficios de su diócesis, mediante las causas indicadas, cuya facultad se extiende á las prebendas y canonicatos (1), contando al efecto con el consentimiento del cabildo, á menos que se trate de una dignidad que debe existir en las catedrales por derecho común, porque en este caso se necesita licencia de la Santa Sede (2), lo mismo que en el caso de ceder en beneficio del obispo ó cabildo la reducción de prebendas.

Cuando el beneficio, que se trata de suprimir, es de patronato, entonces es necesario el consentimiento del patrono, sin que obste su negativa para llevar á efecto la supresión.

CAPITULO III.

PLURALIDAD DE BENEFICIOS.

ARTÍCULO I.

DE LA PLURALIDAD DE BENEFICIOS EN GENERAL.

Pluralidad de beneficios, y leyes de la Iglesia que la prohíben.—Se entiende por pluralidad de beneficios: *La posesión actual de dos ó más beneficios por una misma persona.*

Las leyes eclesiásticas más antiguas prohibieron á los clérigos su adscripción en el catálogo de dos más iglesias (3) fundándose para ello en que—

a) Los beneficios eclesiásticos obligan á la residencia del beneficiado.

b) Cada uno de ellos lleva anejos deberes y obligaciones para ocupar constantemente á una persona (4).

(1) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XV *De Reformat.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccl. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XII, num. 54.

(3) C. II, quæst. 1.^a, causa 21.—C. III, pár. 1.^o, quæst. 3.^a, causa 10.—C. I, quæst. 1.^a, causa 21.—C. I, dist. 89.—C. II, art. 1.^o, dist. 70.

(4) Cap. únic., tít. III, lib. III *Extravag. commun.*

c) Se priva por este medio á clérigos beneméritos del sustento necesario.

d) Se dá lugar á la vagancia.

e) Se disminuye el culto divino.

f) Se descuida la hospitalidad, la defensa y solicitud que se requiere en las iglesias.

g) Se abandona la cura de almas.

h) Se abre el camino á la corrupción de costumbres, según dice el papa Juan XXII (1).

Estos males, que resultan de la pluralidad de beneficios en una misma persona, ha sido la causa de que la Iglesia haya dictado nuevas disposiciones con arreglo al espíritu de los antiguos cánones (2), sosteniendo el principio de que cada beneficio requiere una persona dedicada al cumplimiento de los deberes que impone.

Causas justas para que una persona posea dos ó más beneficios.—La iglesia ha prohibido la pluralidad de beneficios por las razones que se dejan indicadas, y algunas otras que pueden deducirse fácilmente de aquellas (3); pero es indudable que pueden ocurrir casos en que resulten grandes ventajas sin ninguno de los inconvenientes citados, de la pluralidad de beneficios; como se verifica siempre que medie alguna de las causas siguientes:

Necesidad de la iglesia, y esto tiene lugar cuando no se hallan personas idóneas para cada uno de los beneficios, como suele ocurrir en los puntos donde los herejes tratan de apoderarse de las iglesias ó beneficios (4).

(1) Cap. único, tít. III *Extravag.*

(2) Cap. III, tít. IV, lib. III *Decret.*—Cap. IV, tít. XIV, lib. I *Decret.*—Capítulo V, XIII y XXVIII, tít. V, lib. III *Decret.*—Cap. XXXII, tít. IV, lib. III *sext. Decret.*—Cap. III, tít. II, lib. III *Clementin*—Cap. IV, tít. II, lib. III *Extravag. commun.*—*Concil. Trid.*, sesión 7.^a, cap. II, IV y V *De Reformat.*—Sesión 24, cap. XVII *De Reformat.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, pár. 4.^o, núm. 104.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 138.

Utilidad de la iglesia, como si uno ausente de la Iglesia ha de prestar mayores servicios á la misma que cualquier otro hallándose presente, á causa de su autoridad, poder é influencia, prudencia ó doctrina, de lo cual hay un ejemplo en Agnelo, obispo fuldense (Fulda), á quien S. Gregorio Magno dió el obispado de Tarracina para que lo rigiera juntamente con el que poseía (1).

Esto mismo se observa en otros puntos donde los hijos de los principes obtienen varias iglesias catedrales, aún cuando no hayan llegado á la edad prescrita, á fin de que aquellas iglesias puedan defenderse más fácilmente de los herejes (2).

Excelencia de méritos, como se indica en las mismas disposiciones legales que prohíben la pluralidad de beneficios (3).

Título de sustentación, como si el beneficio no cuenta con los recursos indispensables para el culto y sostenimiento del beneficiado (4).

Autoridad del Papa para conceder muchos beneficios á una persona.—El Sumo Pontífice, en virtud de su autoridad suprema en la Iglesia universal, puede conceder á una persona dos ó más beneficios (5), y esta potestad del Papa es tan amplia, que la concesión hecha sin mediar justa causa es válida aunque ilícita (6), siendo atribución exclusivamente suya conceder á una persona=

- a) Muchas dignidades, personados y beneficios curados.
- b) Dos ó más beneficios uniformes bajo el mismo techo.
- c) Dos ó más beneficios no uniformes y cualesquiera otros beneficios, aún simples *sub diverso tecto*, aunque el primero baste para la honesta sustentación.

(1) C. V y VI, quest. 1.^a, causa 21.

(2) BENEDICTO XIV: *De Synodo dioces.*, lib. XIII, cap. VIII, núm. 9.

(3) Cap. XXVIII, tit. V, lib. III *Decret.*—Cap. únic., tit. III *Extravag.*

(4) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XIV, sect. 1.^a, párr. 17.

(5) Cap. XXVIII, tit. V, lib. III *Decret.*—Cap. II, tit. IV, lib. III *sext. Decret.*—Cap. I, tit. V, lib. II *Clementin.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, párrafo 4.^o, núm. 142 y sig.

Si se extiende á los obispos y otros prelados.— Los obispos pueden también dispensar en esta materia, concediendo un segundo beneficio compatible, y aún más de dos beneficios de dicha clase, si existe costumbre legítima en este sentido, siempre que el beneficiado necesite de ellos para su honesta sustentación (1), según el prudente arbitrio del mismo obispo, habida consideración á la costumbre local y circunstancias del beneficiado (2).

Esta facultad de los obispos se extiende á los beneficios incompatibles por las sinodales de la diócesis y también respecto á los de derecho común en los casos de una gran necesidad ó evidente utilidad pública, siempre que no pueda recurrirse al Sumo Pontífice y haya peligro en la dilación (3).

Compete igualmente dispensar en esta materia á los legados *a latere* en la provincia, que representan al Sumo Pontífice, siempre que medie justa causa y se trate de beneficios en que el obispo tiene esta facultad respecto á su diócesis, ó sea en igual forma que los obispos.

El vicario general no tiene esta facultad, á menos que medie comisión especial del obispo.

El cabildo catedral *sede vacante*, lo mismo que los reyes y príncipes (4) no pueden conceder á una persona muchos beneficios.

Casos en que pueden obtenerse muchos beneficios sin necesidad de dispensa.—La regla general que prohíbe obtener más de un beneficio á una misma persona, deja de ser obligatoria, cuando mediante justas causas, dispensa de ella la autoridad competente en la forma que se deja indicada.

También puede obtenerse más de un beneficio sin necesidad de dispensa en los casos siguientes:

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., núm. 102, 144 y sig.

(2) DEVOTI: *Iust. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 1.ª, párr. 17.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 4.º, núm. 145.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 147.

a) Cuando el primero no tiene las rentas necesarias para la honesta sustentación del beneficiado, en cuyo caso puede obtener otro que no obligue á la residencia (1).

b) Si la iglesia catedral, parroquial ó dignidad son excesivamente pobres, ó se hallan gravadas con deudas, entonces puede conferirse á sus poseedores un beneficio simple y compatible (2).

c) Cuando un beneficio se halla anejo accesoriamente al otro.

d) Cuando se dá á una persona un beneficio en título y otro en encomienda (3).

Beneficios compatibles é incompatibles, y su origen.—Se llaman compatibles: *Los beneficios que por no exigir continua residencia, pueden obtenerse por un mismo beneficiado.*

Esto tiene lugar en dos canonicatos, si cada uno de ellos sólo obliga á residir tres ó seis meses, en virtud de estatuto ó costumbre legítima.

Se entiende por beneficios incompatibles: *Aquellos oficios que obligando á la constante residencia personal por derecho natural ó común eclesiástico, costumbre, fundación ó estatuto, no pueden obtenerse á la vez por una persona, sino mediante dispensa* (4).

Se deja consignado en este capítulo que la pluralidad de beneficios en una persona no se opone á las prescripciones legales, cuando esto tiene lugar mediante alguna de las causas señaladas y se hace con las debidas solemnidades.

Por esta razón se observa ya en tiempos antiquísimos, que se concedieron muchos, ó más de un beneficio, á una misma per-

(1) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XVII *De Reformat.*

(2) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XVII *De Reformat.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. núm. 137.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 4.^o, núm. 84.

sona (1); pero del recto uso de esta excepción á la regla general, que prohíbe á una persona obtener más de un beneficio, se abusó mucho principalmente en la Edad Media, efecto de la insuficiencia de las rentas de los beneficios (2), no ménos que de la ambición y avaricia de no pocos (3).

Entónces fué cuando los intérpretes distinguieron entre beneficios residenciales y no residenciales, llamando á éstos *compatibles* y á los primeros *incompatibles*, cuya distinción fué admitida según varios canonistas en las disposiciones legales (4).

División de los beneficios incompatibles.—Los beneficios incompatibles se dividen en=

Incompatibles in primo genere, que son: *Los que se oponen entre sí de tal modo en una misma persona ó sujeto, que basta obtener el segundo para que en el acto quede vacante el primero.*

Incompatibles in secundo genere, que son: *Los que á pesar de no poderse obtener lícitamente por una misma persona, no se oponen entre sí de tal modo, que una vez obtenido el segundo, vacue por el mismo hecho el primero.*

Esta distinción no existe en la legislación vigente, puesto que en todos los beneficios incompatibles por razón de la residencia, queda vacante el primero absolutamente é *ipso jure* (5).

Beneficios SUB EODEM VEL DIVERSO TECTO, UNIFORMES VEL DIFORMES.—Se llaman *sub eodem tecto*, los beneficios poseídos en una misma Iglesia.

Beneficios sub diverso tecto, los que una persona posea en distintas iglesias.

Se dá el nombre de uniformes, á los beneficios cuyas fun-

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tit. XIV, sect. 1.^a, pár. 12.

(2) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles. univ.*, lib. II, cap. V, pár. 84.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 1.^a, cap. V.

(4) Cap. VII, tit. III, lib. I *sex. Decret.*—Cap. IV, tit. II, lib. I *Clementin.*—*Concil. Trid.*, sesión 7.^a, cap. IV *De Reformat.*

(5) *Concil. Trid.*, sesión 7.^a, cap. IV *De Reformat.*

ciones son de la misma especie, á diferencia de los diformes, que llevan anejas funciones de diversa especie (1).

Razón de estas distinciones.—Estas distinciones se hicieron rectamente por los canonistas, como consecuencia de la división de beneficios en compatibles é incompatibles, así que una persona no puede poseer *sub eodem tecto* dos beneficios uniformes, como dos canonicatos, porque cede en detrimento del culto divino, y por otra parte se dá cumplimiento á los deberes de uno solo de ellos; pero podrá obtener en la misma iglesia dos beneficios diformes, si cada uno de ellos es incongruo y el servicio de uno no es incompatible con el del otro beneficio (2).

Breve reseña de los beneficios incompatibles.—Los beneficios incompatibles, que no pueden obtenerse á la vez por una misma persona, á no mediar dispensa pontificia, son los siguientes:

a) Dos obispados ó abadias—dos vicarias perpetuas ó dos beneficios curados (3).

b) Dos dignidades ó personados (4) en una ó diversas iglesias.

c) Tampoco los religiosos pueden obtener dos ó más beneficios regulares (5) en uno ó distintos monasterios.

d) Dos ó más beneficios simples y uniformes *sub eodem tecto* (6), sin que tenga valor alguno la costumbre en contrario.

e) Dos ó más beneficios diformes en distintas iglesias, que exigen residencia personal é incompatible (7).

(1) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. II, cap. V, pár. 84.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.* tit. V, pár. 4.^o, núm. 89 y sig.

(3) C. III, pár. 1.^o, quæst. 3.^a, causa 10.—C. I y V, quæst. 1.^a, causa 21.—Cap. VII y LIV, tit. VI, lib. I *Decret.*—Cap. XXVIII, tit. V, lib. III *Decret.*

(4) Cap. LIV, tit. VI, lib. I *Decret.*—Cap. XIII y XXVIII, tit. V, lib. III *Decret.*—Cap. únic., tit. III *Extravag.*

(5) Cap. XXXII, tit. IV, lib. III *sext. Decret.*

(6) Cap. VI, tit. II, lib. III *Clem. univ.*—Cap. I, tit. IV, lib. I *sext. Decret.*

(7) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XVII *De Reformat.*

f) Dos ó más beneficios en distintas iglesias que no requieren residencia personal, si cada uno de ellos basta para la congrua sustentación del beneficiado (1); pero está admitido por la costumbre, que una sola persona pueda obtener muchos beneficios simples, aún cuando uno de ellos baste para la congrua sustentación del beneficiado (2).

Disciplina antigua sobre la vacante de uno de los beneficios obtenidos por una misma persona.—

Se trata aquí de una persona que ha obtenido un segundo beneficio incompatible con el que ya posee, y acerca de esto habrá de tenerse presente; que las disposiciones canónicas anteriores al Concilio III de Letrán no privaban *ipso jure* del primero ni segundo beneficio, al que obtenía dos parroquias ó dos dignidades ú otros beneficios incompatibles, sinó que se le permitía que optara por uno de ellos (3).

Disposiciones lateranenses sobre esta materia.—

El Concilio III de Letrán quitó al beneficiado el derecho de optar entre el primero y segundo beneficio, y dispuso, que si uno habiendo obtenido un segundo beneficio no renunciaba al primero, habría de ser privado de éste por sentencia judicial (4).

El Concilio IV de Letrán estableció, que si uno después de poseer un beneficio curado, obtiene otro de la misma clase, queda privado *ipso jure* del primero; y si intenta conservarlo, perderá también el segundo; concediendo al *colator* facultad para conferir el primer curato, y si deja transcurrir seis meses sin hacerlo, pasará por devolución este derecho al superior inmediato con obligación de entregar á la misma iglesia curada la renta percibida desde el mismo día de la vacante (5).

(1) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XVII *De Reformat.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, pár 4.º, núm. 97 y sig.

(3) Cap. VII y XIV, tit. V, lib. III *Decret.*

(4) Cap. III, tit. IV, lib. III *Decret.*

(5) Cap. XXVIII, tit. V, lib. III *Decret.*

Decreto de Juan XXII acerca de este punto.—El papa Juan XXII prescribe, que si uno obtiene un curato, dignidad ó personado, hallándose ya en posesión de otro de igual clase, queda privado *ipso facto* del primero desde el momento en que posee ó pudo poseer pacíficamente el segundo, á cuyo efecto hará renuncia de él en manos del ordinario; y si no lo hace, quedará privado *ipso jure* del segundo con inhabilidad para recibir los sagrados órdenes y obtener cualquier beneficio eclesiástico.

Ordena asimismo que los beneficios vacantes de este modo, quedan reservados al Sumo Pontífice (1).

Legislación tridentina.—El Concilio de Trento confirmó en todas sus partes la decretal de Juan XXII (2), sin que se oponga á ello la facultad que concede para optar por uno de los dos ó más beneficios incompatibles (3), porque esto se refiere á los que entónces, ó sea en la época de la celebración del Concilio, se hallasen en posesión de dichos beneficios (4).

ARTÍCULO II.

DE LAS ENCOMIENDAS DE BENEFICIOS.

Etimología de la palabra encomienda, y su definición.—La palabra *commenda* (encomienda) procede del verbo *commendare*, que significa dar en custodia, encargar, pedir ó dar orden á otro que tome á su cuidado alguna persona ó cosa.

Se entiende por encomienda de beneficios: *el encargo dado á un clérigo de regir una iglesia ó levantar las cargas anejas á un beneficio con derecho á las rentas ó frutos del mismo.*

(1) Cap. únic., tít. III *Extravag.*

(2) Sesión 7.ª, cap. IV *De Reformat.*

(3) Sesión 24, cap. XVII *De Reformat.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccl. univ.*, in lib. III *Decret.* tít. V, pár. 4.º, núm. 108.

Origen de las encomiendas de beneficios.—El uso de las encomiendas en la Iglesia es antiquísimo; así que las mismas iglesias catedrales se encomendaban en los primeros tiempos, á fin de que uno rigiese la diócesis, mientras se hacía la elección de obispo.

Esto mismo tenía lugar cuando los obispos huían de sus iglesias con motivo de ser perseguidos ó en virtud de irrupción de enemigos.

Los mismos monasterios se dieron muchas veces en encomienda á los obispos ú otros clérigos con objeto de restablecer la disciplina en toda su pureza (1).

Estas encomiendas, lo mismo que las de las parroquias, eran temporales ó perpetuas según la naturaleza de la causa que motivaba su concesión (2).

Causas de su institución.—Las encomiendas de beneficios mayores ó menores pueden concederse, siempre que así lo exija la necesidad ó utilidad de la iglesia; lo cual tiene lugar en los casos siguientes:

a) Cuando una iglesia carecía de pastor que la rigiese ó gobernase, entonces (3) se daba en encomienda para su custodia y administración hasta que tuviese rector propio (4).

b) Cuando los obispos se veían obligados á ausentarse de sus iglesias devastadas por los enemigos, los Sumos Pontífices les daban en encomienda otras iglesias catedrales ó abadías (5).

c) Cuando un clérigo posee un beneficio sin las rentas necesarias para su sostenimiento (6).

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. III, pár. 37.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 3.^a, pár. 23 y sigs.

(3) C. III, V y VI, quæst. 1.^a, causa 21.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 3.^a, pár. 23.

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, disert. 1.^a, cap. V.

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 3.^a, pár. 24.

d) Cuando la defensa de los monasterios y el restablecimiento de la disciplina monástica exigen que aquéllos se den en encomienda á obispos ó clérigos seculares (1).

Si las encomiendas son beneficios —Las encomiendas pueden ser temporales ó perpetuas, según se conceden por tiempo limitado ó por toda la vida. En el primer caso no son beneficios, porque no se adquiere título ó derecho alguno *in re*, por más que dé facultad para ejercer derechos y percibir la porción señalada de los frutos, mientras se posee.

Las encomiendas perpetuas son, sin duda alguna, verdaderos beneficios ó se equiparan á ellos, porque su concesión es un verdadero título, y el poseedor de ella, como verdadero rector, tiene completo derecho para percibir sus frutos, arrendar las posesiones y bienes del beneficio con todas las demás atribuciones de los beneficiados (2).

Sus vicisitudes hasta Clemente V.—Las encomiendas concedidas mediante causa justa, fueron útiles á la Iglesia; pero con el trascurso del tiempo se abusó de ellas, siendo un medio de que se sirvió la avaricia y ambición de muchos para sostener la pluralidad de beneficios en una misma persona (3).

Los mismos legos se apoderaron de los bienes eclesiásticos bajo este pretexto, y los príncipes concedieron los bienes eclesiásticos en encomienda á los militares como medio de proporcionar recursos para la guerra (4).

Los Sumos Pontífices y los Concilios dictaron no pocas disposiciones para sacar de manos de los legos los bienes eclesiásticos, y una vez conseguido dieron en encomienda á los clérigos muchos de aquellos bienes, á fin de que no salieran de manos de la Iglesia (5).

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, ibid, pár. 26

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, pár. 4.^o, núm. 7.^o

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, dissert. 1.^a, cap. V.

(4) THOMASSINO: *Vet. et nov. Eccles. discipl.*, parte 2.^a, lib. III, cap. XII.

(5) THOMASSINO: *Vetus et nov. Eccles. discipl.*, part. 2.^a, lib. III, cap. X y sig.

Estas encomiendas concedidas por los papas y concilios, como fundadas en justas causas, fueron útiles y hasta necesarias, atendidas las circunstancias de aquellos tiempos; pero después creció extraordinariamente el número de encomiendas sin causa justificada, y de aquí no pocos males que era necesario remediar.

Disposiciones legales acerca de las encomiendas.

—Clemente V revocó todas las encomiendas concedidas por él mismo, porque observó que léjos de ser provechosas á la Iglesia, cedían en daño de ella (1).

Benedicto XII y León X abrogaron las encomiendas, que cedían en detrimento de los monasterios y de la disciplina eclesiástica (2).

El Concilio de Trento dió muchas disposiciones acerca de este punto, las cuales pueden resumirse en lo siguiente:

1. Que ninguna persona podrá poseer á la vez muchas iglesias metropolitanas ó catedrales en título ó encomienda, ni bajo cualquier otro nombre, disponiendo respecto á los que se halláran entonces en posesión de muchas iglesias, que las renuncien todas, menos una elegida á su voluntad, dentro de seis meses, si pertenecen á la libre disposición de la Santa Sede, y si no pertenecen, dentro de un año, con la cláusula de que si no lo hicieren, quedarán *ipso jure* vacantes, á excepción de la que han obtenido últimamente (3).

2. Que si una persona admite y retiene en adelante á un mismo tiempo muchos beneficios curados ó incompatibles por vía de unión, encomienda ú otro cualquier título, quedará privado *ipso jure* de los mismos beneficios (4).

3. Que nadie puede obtener en lo sucesivo más que un beneficio eclesiástico, á menos que no proporcione lo necesario

(1) Cap. II. tít. II, lib. III *Extravag. commun.*

(2) DEYORI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 3.ª, pár. 27

(3) Sesión 7.ª, cap. II *De Reformat.*

(4) Sesión 7.ª, cap. IV *De Reformat.*

para su honesta sustentación, en cuyo caso podrá obtener otro beneficio simple, siempre que no exija residencia personal.

Dice asimismo que lo expresado es aplicable á las iglesias catedrales y á todos los beneficios regulares y seculares, sin excluir los dados en encomiendas, disponiendo respecto á los que entonces se hallaban en posesión de muchas iglesias parroquiales, ó una catedral y otra parroquial, que las renuncien quedándose con una sola de ellas, á cuyo efecto se les señala el término de seis meses, pasado el cual sin hacerlo, quedarán vacantes todas ellas (1).

4. Que respecto á los monasterios dados en encomienda no se confiera ninguno de los que vacaren en adelante, sino á regulares de conocida virtud y santidad, ordenando en cuanto á los monasterios que son cabezas ó casas primeras de la Orden, lo mismo que respecto á las abadías ó prioratos que se llaman hijos de aquellas primeras casas, que no puedan darse en encomienda, con obligación en los que entonces los poseían en tal concepto, á profesar solemnemente dentro de seis meses en la misma religión de aquellos institutos, ó á renunciar dichas encomiendas.

En cuanto á los demás monasterios que tienen comunidad y se hallan en encomienda, deja á la prudencia y sabiduría del Sumo Pontífice el cuidado de hacer que se pongan al frente de ellos personas regulares, que hayan profesado expresamente en la misma orden y puedan gobernar á su rebaño y llevarlo adelante con su ejemplo. (2).

Quién puede concederlas.—Las encomiendas de beneficios están prohibidas por las leyes generales de la Iglesia, que se dejan citadas, y sólo el Sumo Pontífice puede dispensar de ellas, cuando á su juicio existen causas justas.

Dichas encomiendas suelen concederse *in perpetuum*, y sirven de título para recibir los órdenes, como si fuese beneficios,

(1) Sesión 24, cap. XVII *De Reformat.*

(2) Sesión 25, cap. XXI *De Regular.*

cuya naturaleza revisten; puesto que los clérigos comendatarios gozan de las mismas prerrogativas y derechos que los beneficiados, teniendo la libre administración de las rentas y el derecho de presentar, elegir ó conferir (1).

CAPITULO IV.

PROVISIÓN DE BENEFICIOS EN GENERAL.

Introducción.

Provisión de beneficios y actos que comprende.

—Se entiende por provisión de beneficios: *La concesión del beneficio vacante hecha por la autoridad competente.*

La provisión de un beneficio comprende tres actos=

Designación de una persona idónea, mediante elección, presentación ó la voluntad del *colator*.

Colación de título ó derecho al beneficio por la confirmación del Sumo Pontífice respecto á los obispados, ó por la colación ó institución del obispo en cuanto á los beneficios menores.

Introducción en la posesión del beneficio, ó institución corporal.

El acto primero, ó sea la designación de la persona por medio de la elección, presentación ó nombramiento no aceptado, sólo dá derecho *ad rem*.

El acto segundo, ó sea la confirmación de la elección, la institución del presentado y la colación aceptada, confieren un derecho *in re* (2).

Colación de beneficios y sus especies.—Se entiende por colación: *La concesión del beneficio vacante por la autoridad á quien corresponde.*

(1) DEVOTI: *Instit. Canon.*, lib. II, tit. XIV, sect. 3.^a, párr. 28.

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon. pars special.*, lib. II, título I, fract. 2.^o, dissert. 2.^a, cap. III, art. 2.^o

La colación (*collatio*) de beneficios puede ser: — ordinaria— y extraordinaria— libre— y necesaria.

La colación ordinaria es: *La concesión del beneficio hecha por la autoridad eclesiástica á quien corresponde este derecho por razón de su cargo, como el Papa y los obispos.*

La colación extraordinaria es: *La concesión del beneficio hecha en favor de alguno, mediante un título especial, que le da este derecho, como la devolución y reserva.*

La colación libre es: *La concesión de un beneficio á la persona que se tiene por conveniente, siempre que reúna las circunstancias necesarias.*

La colación necesaria es: *La concesión del beneficio á la persona que se propone, mediante presentación ó nombramiento de otro, siempre que sea idónea.*

A esta concesión ó colación se dá el nombre de *institución*.

ARTÍCULO I.

DE LA ELECCIÓN Y MANERAS DE VERIFICARSE

Elección, y sus especies.—Se entiende por elección en general: *El llamamiento canónico de persona idónea para una dignidad eclesiástica.*

Esta definición comprende en un sentido propio y estricto la elección, libre colación del superior y el nombramiento.

La elección propiamente dicha es: *El llamamiento hecho canónicamente por sufragios y confirmación del legítimo superior, de persona idónea para una prelatura vacante* (1).

La elección puede hacerse por —escrutinio— compromiso— y cuasi inspiración (2).

Elección por escrutinio, y sus condiciones.—La elección por escrutinio consiste en nombrar tres escrutadores que

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tit. VI, pár. 1.º, núm. 1.º.

(2) Cap. XLII, tit. VI, lib. I *Decret.*

recojan los votos de los electores *secretó, singulatim, jussu ordine, diligenter* (1), ó sea observando las condiciones siguientes:

a) Los escrutadores han de ser tres (2), nombrados por los electores reunidos legítimamente y por medio de escrutinio ó por compromiso (3), los cuales deben ser individuos del cabildo, ó por lo ménos clérigos dignos de fé que presten juramento de cumplir fielmente con su cargo.

b) Recogerán secretamente el voto de los electores, quienes entregarán su voto escrito en una cédula cerrada, ó lo darán de viva voz á los escrutadores sin ser oídos de ninguno de los capitulares, en cuyo caso uno de los escrutadores lo consignará por escrito (4).

c) Que los votos han de recogerse de cada uno de los electores separadamente, y nó de todos ó muchos á la vez.

d) Que habrá de observarse en este acto el debido orden, empezando por el Presidente del cabildo, y en seguida se recibirán mutuamente sus votos, sin son individuos del cabildo y electores, continuando después por los demás capitulares presentes, según su dignidad y orden de antigüedad. Después de esto pasarán á recoger los votos de los capitulares enfermos que residan en la población, si no han nombrado procurador.

e) Que procedan con la mayor diligencia en el cumplimiento de su cargo, y á este efecto cuidarán de que los votos sean ciertos y exentos de condición ó ambigüedad (5).

f) Una vez hecho el escrutinio, se publicará acto seguido el resultado, y con esto los electores han terminado en su cargo, de modo que ya no pueden modificar ni dar su voto á otra persona, salvo algunas excepciones (6).

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, pár. 18.

(2) Cap. XI II, tít. VI, lib. I *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.* tít. VI, pár. 5.^o, número 45.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 46.

(5) Cap. II, tít. VI, lib. I *sext. Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 47.

g) Acto seguido se procederá á contar los votos, á fin de ver quién reúne la mayoría de votos, y si ésta existe en favor de uno, entónces se dicta el decreto capitular que se promulgará para mayor solemnidad.

Esta es la forma ordinaria y modo de hacer las elecciones.

Elección por compromiso, y sus reglas.— El modo de elegir por compromiso consiste en dar los electores de común acuerdo, facultad á personas idóneas para que en su nombre hagan la elección (1), debiendo observarse acerca de esta forma de elección lo siguiente:

a) Que los electores han de expresar unánimemente su sentimiento, de manera que si uno se opone, no puede llevarse á efecto este modo de elección, según se desprende de las palabras de Inocencio III *et à singulis de capítulo statutum est, et concessum* (2).

b) Que los compromisarios, ó sea los nombrados por los electores, sean personas idóneas y clérigos, porque los legos no pueden entender en estos asuntos puramente eclesiásticos (3).

c) Que los nombrados pueden ser en número par ó impar, muchos ó pocos, hasta el punto de autorizar al efecto á una sola persona.

d) Que las facultades concedidas á los compromisarios pueden ser *absolutas*, para que nombren á su arbitrio á cualquier sujeto idóneo; ó *limitadas*, para que elijan á uno del cabildo, ó contando con el parecer de ciertas personas, etc.

e) Que el compromiso ha terminado desde el momento que ha trascurrido el tiempo concedido para hacer la elección, lo mismo que en el caso de que la elección no haya surtido efecto por cualquiera causa, ó si se ha revocado el compromiso por la

(1) Cap. XLII, tít. VI, lib. I *Decret.*

(2) Cap. XXX, tít. VI, lib. I *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. I Decret.*, tít. VI, pár. 6.^o número 53.

mayor parte de los capitulares, cuando los compromisarios no han procedido á lo esencial de la elección (1).

Elección por inspiración ó cuasi inspiración.— La inspiración existe, cuando se designa la persona por verdadera revelación de Dios, lo cual tuvo lugar en la elección de San Matías (2), en la de San Nicolás, San Severo y San Ambrosio (3).

Esta es verdadera inspiración; pero existe otra, que se cree emana de Dios y se llama cuasi inspiración, la cual tiene lugar cuando los electores, sin ponerse de acuerdo, consienten y aclaman por unanimidad á una persona, porque se presume que este común consentimiento es por inspiración del Espíritu Santo, autor de la unidad y concordia (4).

Postulación, y sus especies.— Cuando una persona puede ser muy útil á la Iglesia y tiene impedimento canónico para ser elegida, los electores pueden utilizar el medio extraordinario de acudir al superior en súplica de que dispense el impedimento, lo cual se conoce con el nombre de postulación.

La postulación puede ser simple y solemne.

La primera es: *La petición hecha al superior para que consienta en la elección de un súbdito suyo.*

Puede servir de ejemplo la licencia del abad para la elección de un monje súbdito suyo; pero esta no es propiamente postulación en cuanto que la persona de que se trata, está exenta de impedimento canónico para ser elegida, por más que no puede aceptar sin la venia del superior.

Sólo la segunda es postulación en su sentido propio, y puede definirse: *La petición hecha al Sumo Pontífice para que, me-*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 62.

(2) *Act. Apostol.*, cap. I, v. 26.

(3) C. VII, part. 2.º, pár. 1.º, distinct. 61.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret*, tit. VI, pár. 5.º, núm. 43.

diante dispensa eleva al episcopado á un sujeto que no puede ele- girse con arreglo á las disposiciones canónicas (1).

En qué se distingue de la elección.—Se distingue de la elección, en que=

a) La postulación es un medio extraordinario de obtener una prelatura, y la elección es el camino ordinario.

b) La primera se refiere á una persona inhábil para la prela- tura ó dignidad, y la segunda recae sobre persona idónea y sin impedimento.

c) El electo puede desde luego consentir absolutamente en la elección, y el postulado sólo bajo la condición de obtener la dispensa.

d) La elección se confirma, pero la postulación se admite.

e) La elección se funda en un derecho, y la postulación en una gracia (2).

f) La elección se verifica por mayoría de votos, y la postu- lación no puede hacerse sinó mediante los sufragios de dos ter- ceras partes de los electores (3).

Sus requisitos.—Es de necesidad en la postulación, para que pueda llevarse á efecto, que la acompañen las circunstancias siguientes:

I. Que se haga por los que tienen derecho á elegir, y que recaiga en personas que tienen algún impedimento, que puede ser dispensado por el superior, como la falta de edad, órden, profesión religiosa, legitimidad (4).

II. Que la postulación *simple* se haga al superior de quien el postulado depende inmediatamente; y la *solemne* al superior á quien compete la confirmación del prelado, si hubiera habido elección (5).

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. II, cap. X, pár. 101.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tit. V, párra- fo 1.º, núm. 1.º

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 2.ª, pár. 26.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, pár. 3.º, nú- mero 12.—Párrafo 2.º, núm. 6.º y 7.º

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 3.º, núm. 13.

III. La postulación simple puede hacerse en igual forma que la elección; pero la solemne ha de hacerse necesariamente, según la opinión más probable, en la forma prescrita para la elección (1).

ARTÍCULO II.

DE LA ELECCIÓN DE OBISPOS

HASTA EL DERECHO DE DECRETALES.

Elección del Sumo Pontífice.—De este punto se trató en otro lugar (2).

Elección de obispos en los tiempos antiguos.—La Iglesia, ó sea el Sumo Pontífice, tiene el derecho de nombrar obispos sin la intervención del pueblo (3) ni del clero (4) según se deja consignado en otro lugar de esta obra (5); pero esta facultad ha radicado de hecho en otras autoridades, mediante ley ó consentimiento del supremo jefe de la Iglesia.

Es un hecho que los Apóstoles nombraron obispos sin intervención del pueblo (6), y que el príncipe de ellos constituyó pastores, de los que traen origen las iglesias occidentales (7). La autoridad de los Apóstoles para crear diócesis é instituir obispos concluyó con ellos; pero la potestad de Pedro, cabeza del colegio apostólico y primado de la Iglesia, se transmitió á sus sucesores, y por esto se observa que los primeros Sumos Pontífices nombraban los obispos (8).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., párrafo 4.º núm. 17.

(2) Véase el lib. II, tit. II, cap IV de esta obra.

(3) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 1.ª, sect. 4.ª, art. 2.º, núm. 144.

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. II, cap. X, pár. 97.

(5) Lib. II, tit. II, cap. II, art. 2.º, sección 4.ª

(6) C. VI, distinct. 68.

(7) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 1.ª, pár. 5.º

(8) C. I, distinct. 22.

Elección de obispos por el metropolitano y obispos comprovinciales.—Cuando aumentó considerablemente el número de fieles y se hizo la división de diócesis y provincias eclesiásticas, se encomendó la elección de obispos á los metropolitanos y sus sufragáneos en los concilios provinciales, como medio más expedito y cómodo para atender desde luego á las necesidades de las iglesias, á cuyo acto concurría el clero y pueblo para dar testimonio de la vida y costumbres de los candidatos ó electos (1).

Este modo de elección fué general en todas las iglesias (2) lo cual ofrecía grandes ventajas; porque así se daban á conocer sus cualidades, y era el medio de que no se nombraran obispos de las diócesis á personas que no fuesen del agrado de sus diocesanos (3).

En toda elección de obispos concurrían la autoridad del metropolitano y obispos comprovinciales, los votos del clero y testimonio del pueblo; prevaleciendo desde luego los primeros sobre los segundos y éstos sobre los últimos (4); así que sólo el metropolitano con los obispos de la provincia, hacía una prueba ó exámen severo y minucioso de las cualidades del electo (5), correspondiendo á los exarcas ó patriarcas la confirmación de los metropolitanos electos, y al Sumo Pontífice la de los patriarcas (6).

Cuándo se nombraba por el metropolitano un obispo visitador.—Cuando el metropolitano preveía que habían de resultar graves disturbios, si se procedía desde luego á la elección de obispo, porque el clero y el pueblo se hallaban di-

(1) THOMASSINO: *Vet. et nov. Eccles. discipl.*, part. 2.^a, lib. II, cap. 1, núm. 2.^o

(2) C. V, pár. 1.^a, distinct. 51.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. 1, tit. V, sect. 1.^a, pár. 7.^o

(4) C. XIII, distinct. 61.—C. I y II, distinct. 62.—C. VI, XI, XIX, XXVI y XXVII, distinct. 63.

(5) C. VIII, dist. 64.—C. III y V, distinct. 65.—C. VI, distinct. 61.—C. II, distinct. 63.

(6) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. V, cap. IV, pár. 218.

vididos, entonces mandaba á la Iglesia vacante un obispo visitador para que gobernase la diócesis y preparara convenientemente al pueblo, dándole á conocer las cualidades necesarias en los obispos, según las disposiciones canónicas (1).

El mismo obispo visitador trabajaba por tranquilizar los ánimos de todos, y daba á conocer, en unión con los clérigos, monjes y legos, las prendas relevantes de un determinado sujeto, en quien recaía después de esto la elección.

El metropolitano con los obispos comprovinciales, veía si era digno de ascender al episcopado, en cuyo caso lo consagraba, y si no lo consideraba apto para dicho cargo, elegía otro en su lugar.

Exclusión del pueblo é intervención de los próceres en las elecciones de obispos.—Los tumultos y graves perturbaciones promovidas por el pueblo con este motivo, fueron causa de que se le excluyera y privase de la intervención que hasta entonces venía teniendo en la elección de obispos.

Los próceres y magistrados intervinieron en la elección de obispos, desde que se privó al pueblo de aquel derecho que venía ejerciendo por consentimiento ó tolerancia de la Iglesia.

Disposiciones del Concilio VIII general acerca de este punto.—Los próceres y magistrados abusaron también de esta gracia ó prerrogativa, haciendo muchas veces que se eligiesen personas menos dignas; así que el Concilio VIII general mandó que ningún príncipe ó magnate pudiese tomar parte en la elección ó promoción de patriarcas metropolitanos ú obispos (2).

Males que resultaron en Occidente de la intervención de los príncipes en la elección de obispos.—Los príncipes y magnates continuaron en Occidente interviniendo en las elecciones de obispos, y llegó el caso de que no permitiesen se llevase á efecto elección alguna que no fuese

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 1.^a, pár. 8.^o

(2) C. I, dist. 63.

aprobada por ellos, lo cual dió por resultado que se introdujese la simonía y se apoderasen en concepto de administradores de los bienes correspondientes á la mitra vacante (1).

A mediados del siglo IX se introdujo el uso de las investiduras, en cuya virtud los príncipes concedían los obispados (2) por medio de la entrega solemne del báculo y anillo pastoral, y esto produjo grandes discordias entre la Iglesia y el Estado, hasta que por fin se dejó á la Iglesia en libertad para hacer las elecciones de obispos (3).

ARTÍCULO III.

DEL DERECHO DE LAS DECRETALES SOBRE

LA ELECCIÓN DE OBISPOS.

Elección de obispos por los cabildos según el derecho de las Decretales. — Los abusos de autoridad por parte de los poderes civiles, las asonadas del pueblo y la negligencia de los obispos comprovinciales, fueron motivos poderosísimos para que la elección de obispos quedara reservada á los cabildos catedrales.

Como éstos son el senado y consejo del obispo, con quien forman un cuerpo, se consideró que ningún otro podía proceder, á una acertada elección de obispo como el cabildo de la misma iglesia vacante, que conoce las necesidades de la diócesis, así como las personas más apropiadas para remediarlas (4), así que desde el siglo XII quedó reservada la elección de obispos á los cabildos de las respectivas iglesias catedrales, con exclusión de todos los demás clérigos de la diócesis, á menos que medie

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. I, tít. I, tract. 2.º, disert. 1.ª, cap. II, art. 1.º, pár. 1.º

(2) THOMASSINO: *Vet. et nova Eccles. discip.*, part. 2.ª, lib. II, cap. XXXII.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. II, cap. X, pár. 97.

(4) C. XLIII, quæst. 7.ª, causa 16. — C. III y IV, quæst. 2.ª, causa 18. — C. I y L, tít. VI, lib. I *Decret.* — Cap. III, tít. XII, lib. II *Decret.*

privilegio, costumbre ó pacto en contrario (1), y esta disciplina estuvo vigente en las iglesias occidentales por espacio de dos siglos (2).

Requisitos en el que haya de elegirse, y penas contra los electores que eligen á un indigno.—Es de necesidad para ascender al episcopado —*atatis maturitas — gravitas morum — et litterarum scientia* (3), y por lo mismo no pueden elegirse los—furiosos—dementes—párvulos—los que no han llegado á la edad prescrita (4)—irregulares (5)—ilegítimos (6)—descendientes de herejes (7)—sacrílegos, falsarios etc. (8)—excomulgados, suspensos ó entredichos.

Es nula la elección del indigno (9) y los electores quedan privados *ipso facto* por aquella vez del derecho de elegir, así como suspensos por tres años de sus beneficios, si obraron con conocimiento y se verificó la elección común.

El derecho de elección pasa al inmediato superior, que es el Papa respecto á las iglesias catedrales, siempre que todos los capitulares hubieran delinquido, porque en otro caso corresponderá á los electores que no consintieron en la elección.

Solemidades en la elección de obispos.—Los cabildos tenían necesidad de observar en la elección de obispos las prescripciones de derecho, que pueden resumirse en lo siguiente:

a) Ha de convocarse á todos los electores, y es nula *ipso*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. I Decret.*, tít. VI, pár. 1.º, núm. 7.º y sig.

(2) *Prælect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 1.ª, sect. 4.ª, art. 2.º, número 144.

(3) Cap. VII, tít. VI, lib. I *Decret.*

(4) Cap. III, tít. XIV, lib. I *Decret.*

(5) Cap. I, dist. 49, tít. XX, lib. I *Decret.*

(6) Cap. XX, tít. VI, lib. I *Decret.*

(7) Cap. II, pár. 2.º y cap. IX, tít. II, lib. V *sext Decret.*

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. I Decret.*, tít. 6.º, párrafo 2.º, núm. 17.

(9) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., ibid.*, núm. 19 y sig.

jure la elección, si se ha prescindido de este requisito con más de la tercera parte de ellos (1).

b) Ha de hacerse por los electores reunidos (2) en la iglesia vacante (3) ó en otro lugar, mediante justa causa (4).

c) Ha de procederse á este acto después de haber trascurrido tres días desde el entierro ó sepultura del prelado difunto, no pudiendo dilatarse más allá de tres meses en las iglesias catedrales y regulares (5) y seis meses en las demás dignidades y beneficios (6), cuyo término empieza á correr desde el día que se tuvo noticia de la vacante; y si hubiera mediado impedimento, desde que este cesó (7).

d) La elección se hará de alguno de los modos que se dejan señalados en este capítulo, debiendo dar conocimiento á la brevedad posible al electo.

Aceptación del electo, y su confirmación.— El electo habrá de manifestar su aceptación dentro del término de un mes, bajo pena de perder *ipso facto* todo derecho (8), á menos que sea religioso ó persona que no pueda aceptar sin licencia de su superior, en cuyo caso habrá de contarse el mes desde que obtuvo dicha licencia (9).

El examen y confirmación de los obispos se hacía por los metropolitanos, la de éstos por su primado ó patriarca, y la de éste por el Papa (10) y unos y otros debían solicitarla dentro de tres meses contados desde su elección (11).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 3.º, núm. 23.

(2) Cap. XIV, tít. VI, lib. I *Decret.*

(3) Cap. XXVIII, tít. VI, lib. I *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 4.º, núm. 30 y siguientes.

(5) Cap. XLI, tít. VI, lib. I *Decret.*

(6) Cap. II, tít. VIII, lib. III *Decret.*

(7) Cap. XLI, tít. VI, lib. I *Decret.*

(8) Cap. VI y XVI, tít. VI lib. I *sext. Decret.*

(9) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. I Decret.*, tít. VI, pár. 7.º, núm. 70.

(10) C. II, dist. 23.—C. VIII, dist. 64.—Cap. XIX, XXII, XXXII y XLIV, tít. VI, lib. I *Decret.*

(11) Cap. VI, tít. VI, lib. I *sext. Decret.*

Tiempo dentro del cual habrá de consagrarse.—El electo ha de consagrarse dentro de tres meses, contados desde el día de su confirmación (1); cuyo acto correspondía á los obispos comprovinciales (2) respecto al metropolitano y á éste con dos ó tres obispos de la provincia respecto al sufragáneo; aunque muchas veces acudían á Roma para consagrarse allí (3).

ARTÍCULO IV.

DE LA ELECCIÓN DE OBISPOS DESDE EL SIGLO CATORCE.

Elección de obispos reservada al Sumo Pontífice.

—La elección de obispos quedó reservada al Papa desde el siglo XIV; de modo que cesaron las elecciones de obispos, verificándose su nombramiento (*collatio*) por el Sumo Pontífice, porque este derecho volvió á la fuente de donde procedía.

El papa Clemente V se reservó las iglesias cuyos obispos fallecían en la curia romana (4).

Benedicto XII extendió estas reservas (5) y por la regla segunda de cancelaría quedó reservada á la Santa Sede la provisión de todas las iglesias patriarcales, primaciales, metropolitanas y episcopales (6).

Motivos de esta reserva.—La Santa Sede usó de este derecho, á fin de remediar los abusos introducidos en las elecciones de los obispos (7) por los cabildos, como—

a) La inobservancia de las leyes eclesiásticas sobre esta materia.

(1) C. I, dist. 100.—*Concil. Trid.*, sesión 23, cap. II *De Reformat.*

(2) C. V, dist. 51.—C. I, dist. 64.—C. I, dist. 66.—Cap. VI, tít. XI, libro I *Decret.*

(3) WALTER: *Derecho Eccl'es. univ.*, lib. V, cap. IV, pár. 220.

(4) Cap. III, tít. II, lib. III *Extravag. commun.*

(5) Cap. XIII, tít. II, lib. III *Extravag.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccl'es. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, pár. 6.^o, núm. 227.

(7) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, sect. 1.^a, par. 9.^o

b) La ambición, simonía y el favor, sin tener para nada en cuenta los intereses de la Iglesia.

c) Las graves discordias entre los electores.

d) La orfandad en que quedaban las iglesias por muchos años.

e) Los tumultos y escándalos frecuentes que se promovían con este motivo (1).

f) Las intrigas de los magnates para alcanzar este puesto (2).

g) Los conflictos con el poder civil á que daban lugar (3).

Por otra parte; era necesario estrechar los vínculos de unidad en el gobierno de la Iglesia, como medio de atender á las necesidades espirituales de los fieles, lo cual no podía ménos de tenerse presente en aquella época, en que los reyes iban centralizando el poder, cuya circunstancia ha de tenerse en cuenta para formar un juicio exacto de las reservas pontificias.

ARTÍCULO V.

DE LA ELECCIÓN DE OBISPOS EN LA ACTUALIDAD.

Derecho vigente.—Las reservas pontificias produjeron no pocas quejas por parte de los cabildos y de los reyes. Los Sumos Pontífices no habían tenido otro norte al avocar á sí el nombramiento de los obispos, que el bien de la sociedad cristiana encomendada á ellos por el mismo Jesucristo, y atendieron á estas reclamaciones en bien de la paz, sin desatender su misión ni abdicar sus derechos; así que la designación de las personas que han de ser promovidas al episcopado se hace hoy por distintas autoridades en las diversas naciones ó países, según aparece de la breve reseña siguiente:

(1) THOMASSINO: *Vetus et nova Eccles. discipl.*, part. 2.^a, lib. II, c. pñulo XXXIII.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. II, cap. X, pár. 97.

(3) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. V, cap. IV, pár. 221.

Estados Pontificios.—El Sumo Pontífice elige y nombra directamente para las sillas episcopales comprendidas dentro de los Estados Pontificios (1).

Esta es la causa de los conflictos presentes entre el llamado reino de Italia y la Santa Sede.

Países infieles.—El Papa nombra libremente para los obispados creados en países infieles y para los vicariatos apostólicos.

América.—El Sumo Pontífice elige comunmente entre los candidatos recomendados por los obispos para las iglesias de las provincias federales de la América Septentrional, lo cual se verifica también en otros países, siendo indiferente que la presentación se haga por los obispos ó por el clero de la iglesia vacante.

Inglaterra.—Los candidatos para sillas episcopales se eligen en Inglaterra por el cabildo, y la Santa Sede nombra á alguno de los designados, ó á otro si lo tiene por conveniente.

Prusia.—Los cabildos de las catedrales de Prusia eligen sus obispos con arreglo á las disposiciones canónicas, mediante esta concesión otorgada por Pío VII, en sus letras *De salute animarum*, de 1821.

Otras disposiciones se han dictado sobre este punto, mediante mútuo acuerdo entre la Santa Sede y el poder civil de varios países (2), pero la confirmación de los electos pertenece a la Santa Sede (3).

Oriente.—La elección de patriarcas en Oriente se hacía por los obispos de la nación, y la de obispos por el patriarca del territorio.

(1) *Prælect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 1.^a, sect. 4.^a, art. 2.^a, núm. 145.

(2) *Prælect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 1.^a, sect. 4.^a, art. 2.^a, núm. 145.

(3) *DEVOTI: Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 1.^a pár. 24.

Como esto traía graves inconvenientes, Pio VIII en su Const. *Quo tandem* de 1830 se reservó disponer en lo sucesivo lo más acertado sobre esta materia respecto á los armenios; pero ni él ni su sucesor Gregorio XVI decretaron cosa alguna acerca de este punto.

Pio IX en sus letras *Reversurus* de 1867 mandó que el patriarca armenio reuniera sínodo de todos los obispos del patriarcado, siempre que se tratase de nombrar obispos, y que en él propusiesen al Sumo Pontífice personas dignas, á fin de que eligiese de entre ellas la más digna é idónea para la silla vacante; habiendo dispuesto lo mismo para el patriarcado de los Caldeos en su constitución *Ecclesiastica* de 1869 (1).

Otras naciones de Europa.—Los príncipes ó los gobiernos seculares de muchos países, como Francia, Austria, Baviera, etc. (2) presentan al Papa las personas que consideran dignas para los obispados vacantes de sus respectivas naciones, en virtud de privilegios ó pactos con la Santa Sede, y no en nombre del pueblo ni efecto de su soberanía; pero la confirmación está reservada á la Santa Sede, cuyo acto tiene lugar en el consistorio secreto (3); y es el medio de que el derecho de elegir ó presentar concedido por la Santa Sede á los cabildos ó príncipes, no ceda en daño de la Iglesia (4).

Juramento de fidelidad.—El obispo viene obligado á prestar juramento de fidelidad al Sumo Pontífice, cuyo acto precede á su consagración, según se deja manifestado en el título I, capítulo VI, art. 1.^o de este libro, y además se le exige el juramento de fidelidad al príncipe reinante (5).

Provisión de obispados en España.—Los reyes de España tienen el derecho de proponer ó presentar á Su Santidad

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. II, cap. X, pár. 97.

(2) WALTER: *Derecho Ecles. univ.*, lib. V, cap. IV, pár. 221.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. II, cap. X, pár. 103.

(4) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon. pars special.*, lib. I, tit. I, trat. 2.^o, disert. 1.^a, cap. II, art. 1.^o, pár. 1.^o

(5) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. II, cap. X, pár. 106.

las personas idóneas que hayan de ser elevadas á las sillas episcopales del reino, según concesión y gracia pontificia, otorgada por el papa Adriano VI al emperador Carlos V en 1523.

Este derecho fué confirmado en el concordato de 1753, celebrado entre el papa Benedicto XIV y Fernando VI rey de España.

Bulas que se expiden al electo.—Los presentados para obispos por la corona, que han sido confirmados, reciben diversas bulas y otras varias letras pontificias hasta el número de 25 ó 26 según he tenido ocasión de ver en algún caso, y se retiene por el gobierno después de oír al Consejo de Estado en pleno la bula de vasallos.

Se ponen algunas notas en la bula de confirmación, juramento, etc.

Juramento de fidelidad.—Se halla prevenido, que los obispos electos hagan ántes ó después de la consagración y ante notario público juramento de fidelidad al rey en los términos siguientes: *Hæc omnia et singula co inviolabilius observabo, quod certior sum nihil in illis contineri quod juramento fidelitatis meæ erga catholicum nostrum hispaniarum regem N. ejusque legibus regni, regaliis, legitimis consuetudinibus, concordii et aliis quibuscumque juribus ipsi legitimè quæsitis adversari possit. Sic me Deus adjuvet, et hæc sancta Dei Evangelia.*

La expresada fórmula se remite por el ministro de gracia y justicia á los que van á ser consagrados.

CAPITULO V.

PROVISIÓN DE BENEFICIOS MENORES.

A quiénes compete la colación de beneficios.—La concesión de beneficios es acto de potestad espiritual, que corresponde por lo tanto á los prelados eclesiásticos, y del cual son incapaces los legos, á ménos que se les conceda esta facultad por especial privilegio apostólico.

Las autoridades eclesiásticas pueden tener esta facultad por derecho—*plenario—ordinario* ó *delegado* (1).

ARTÍCULO PRIMERO.

DE LA PROVISIÓN DE BENEFICIOS *Jure plenario.*

Derecho del Papa á conferir los beneficios *jure plenario.*—El Sumo Pontífice es el Vicario de Jesucristo, pastor universal de todas las iglesias, y en este concepto es el *colator* supremo y universal de todos los beneficios (2).

De este principio general resulta naturalmente que el Sumo Pontífice puede conferir beneficios en las respectivas diócesis del orbe católico, siempre que la necesidad ó utilidad de la Iglesia lo reclame; lo cual tiene lugar—

a) En el caso de ser preciso premiar á clérigos sobresalientes en ciencia y virtud, ó atender á las necesidades de aquellos otros mandados á las misiones con el fin de evangelizar.

b) Cuando los *colatores* inferiores no proveen los beneficios vacantes ú ordenan sin título á personas que por esta misma causa se hallan en la indigencia.

Este mismo derecho le compete en el concepto de patriarca de Occidente, á la manera que usaban de esta facultad en conferir órdenes el primado de Cartago én todas las iglesias africanas, y el patriarca de Constantinopla en las iglesias del patriarcado, sin que por esto se considerasen agraviados los obispos de las respectivas diócesis (3).

Diversas formas en que usó de este derecho.—Los Papas proveyeron los beneficios en las distintas diócesis, siempre que el bien de la Iglesia así lo requiriera, y de ello exis-

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon, pars special*, lib. II, tit. I, trat. 2.º, disert. 2.º, cap. III, art. 2.º, pár. 1.º

(2) Cap. II, tit. IV, lib. III *secundum Decret.*—Cap. I, tit. V, lib. II *Clementin.*

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, disert. 5.ª, part. 1.ª, capítulo V.

ten ejemplos en los monumentos de la antigüedad (1), y señaladamente en el pontificado de S. Gregorio Magno, según se deja notado en otro lugar de esta obra (2); pero estos casos fueron ménos frecuentes hasta el siglo XII, en que separada la colación de beneficios de la ordenación, se faltó á las disposiciones canónicas por muchos *colatores* ordinarios con grave daño de la Iglesia; y entónces fué necesario á la cabeza visible de la misma emplear los medios más adecuados para cortar los abusos en esta materia, y al efecto empleó en la provisión de beneficios los medios y formas de que paso á tratar.

Mandatos de providendo, y gracias expectativas.

—Se entiende por mandatos de providendo: *Las letras apostólicas en que se manda á los obispos ú ordinarios que provean un beneficio en las personas que aquéllas designan.*

Estos mandatos reciben el nombre de *gracias expectativas* cuando dichas letras apostólicas prescriben al *colator* ordinario, que confiera á determinado clérigo un beneficio tan pronto como quede vacante.

Lo mismo los mandatos de providendo, que se refieren á beneficios vacantes; como las gracias expectativas, que tienen por objeto beneficios no vacantes, pueden ser—generales á cualquier beneficio—ó concretarse á un beneficio determinado.

Sus especies.—Los mandatos de providendo, ó de prevención, pueden ser—

Nuevas letras comendaticias, porque tenían por objeto recomendar un clérigo al *ordinario* para que le confiriese un beneficio vacante, debiendo el ordinario, en caso de no ser aquél atendido, manifestar al Sumo Pontífice la causa que le impidió atender á su recomendado (3).

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, sect. 3.^a, pár. 30.

(2) Lib. II, tít. II, cap. II, art. 2.^o, sec. 4.^a

(3) Cap. V, tít. III, lib. I *Decret.*—Cap. XIII, pár. 2.^a, tít. XIV, lib. I *Decret.*—Cap. VI, tít. V, lib. III *Decret.*

Letras monitorias, que se expedían por el Sumo Pontífice, cuando el *ordinario* había desatendido las primeras sin causa, y eran verdaderas amonestaciones para que el *colator* confiriese un beneficio vacante al clérigo expresado en ellas (1).

Letras preceptivas, que eran mandatos en toda regla, cuando las anteriores letras no habían sido atendidas (2).

Letras ejecutorias, las cuales nombraban un ejecutor para que obligase al *colator* rebelde y contumaz á obedecer el mandato apostólico, ó se le autorizaba para que él mismo confiriese el beneficio en nombre de la Santa Sede.

Si se seguía un orden gradual en su expedición.

—No siempre se seguía este orden en la expedición de los mandatos de providendo, sino que á veces se expedían las letras ejecutoriales desde luego (3), y esta práctica prevaleció después para evitar y castigar á la vez la contumacia y rebeldía de los *colatores* ordinarios (4).

Esta misma forma que se deja indicada sobre los mandatos de providendo, se aplicó á las gracias expectativas (5).

Su abolición.—De la expedición de los mandatos de providendo y gracias expectativas resultaron no pocos males, atendida la malicia de los hombres, y por esta razón quedaron aquéllos y éstas abrogadas (6).

Derecho de concurso.—El Sumo Pontífice concurre con los obispos y otros *colatores* inferiores en la provisión de los beneficios vacantes; y se prefiere la colación ó nombramiento primero al que tuvo lugar después, bien provenga del Papa ó

(1) BERARDE: *Comment. in Jus. Eccl'es. univ.*, tomo II, dissert. 5.^a, parte 1.^a, cap. V.

(2) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 3.^a, pár. 3.^o

(3) Cap. XIX, XXX, XXXVII y XXXIX, tit. III, lib. I *Decret.*—Cap. XII y XIV, tit. III, lib. I *sext. Decret.*—Cap. IV, tit. VIII, lib. III *Decret.*

(4) VECCHIOTTE: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 19.

(5) BERARDE: *Comment. in Jus. Eccl'es. univ.*, id. ibid.

(6) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XIX *De Reformat.*

del *colator* inferior, y esto es lo que se llama derecho de concurso, porque concurren varios á la provisión de beneficios (1).

Si el nombramiento se verifica en un mismo día, ó existe duda sobre quién nombró primero, ha de sostenerse el nombramiento de aquél que entró en la posesión del beneficio; y cuando ninguno ha tomado posesión, prevalece la provisión pontificia (2), porque ésta tenía lugar en virtud de causas especiales que obligaron á los Sumos Pontífices á emplear este medio extraordinario, al cual debía ceder el derecho ordinario de los obispos ú otros *colatores* inferiores (3).

Afección y cuándo tiene lugar.—El beneficio se llama afecto por la imposición de manos del Papa.

Este acto tiene lugar cuando el Sumo Pontífice se interpone en la provisión de un beneficio (4), como si ordena á los electores que se abstengan de hacer la elección ó da el beneficio en encomienda.

Devolución y su origen —La devolución es: *El derecho del Sumo Pontífice á conferir el beneficio no provisto en tiempo hábil, ó mal provisto por el colator ordinario.*

La devolución por negligencia del ordinario fué introducida primeramente por Alejandro III, quién decretó que si los *colatores* ordinarios dejan trascurrir seis meses sin proveer las dignidades y beneficios inferiores, su provisión se devuelve al superior (5).

El papa Inocencio III fijó á los *colatores* ordinarios el término de tres meses para los beneficios electivos, ó sea para las iglesias catedrales y regulares, dejando el de seis meses para

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 3.^o, núm. 45.

(2) Cap. XXXI, tít. IV, lib. III *sext. Decret.*

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tòm. II, disert. 5.^a, part. 1.^a, cap. V.

(4) VICCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, par. 21.

(5) Cap. II, tít. VIII, lib. III *Decret.*

los beneficios menores, habida consideración á los mayores daños que resultan de la larga vacante de los primeros.

Este espacio de tiempo corre desde el día que se tuvo noticia de la vacante, ó desde que cesó el impedimento que impidió su provisión (1).

La devolución por culpa tiene lugar cuando el *colator* inferior provee el beneficio en persona indigna, ó lo hace sin observar la forma prescrita en las disposiciones canónicas.

A quién corresponde la provisión de beneficios en este caso.—Los beneficios no conferidos en tiempo por negligencia ó culpa, se proveen desde luego en virtud de devolución por el Sumo Pontífice, si son iglesias catedrales ú otros beneficios mayores, ó exentos de la jurisdicción ordinaria.

Los demás beneficios se proveen en estos casos por el inmediato superior, y si éste deja trascurrir los expresados términos, pasa este derecho al superior inmediato hasta llegar al Sumo Pontífice (2).

Reservas apostólicas y beneficios reservados. — Se entiende por reservas: *La avocación á sí de algún beneficio que haya de quedar vacante, hecha por el que tiene potestad para ello.*

Se llaman beneficios reservados: *Aquéllos cuya provisión se reserva al superior, y principalmente el Sumo Pontífice, atando, por decirlo así, las manos del colator inferior, á fin de que no pueda conferirlos lícita ni válidamente* (3).

En qué convienen con los beneficios afectos, y su distinción.—La reserva de beneficios conviene con los beneficios afectos en que unos y otros tienen por objeto privar al *colator* inferior de la provisión de ellos.

(1) Cap. XLI, tít. VI, lib. I *Decret.*

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár 21.

(3) Cap. XLV, tít. VI, lib. I *sext. Decret.*—Cap. IV, tít. III *Extravag. commun.*

Se distinguen entre sí, en que=

a) La reserva se hace por un acto expresado de palabra, mediante el cual el Papa declara, que se reserva la provisión de un beneficio, y la afección se da á conocer por el mismo hecho, como si el Papa pone la mano en el beneficio al efecto de conferirlo.

b) El colator inferior no puede ya en lo sucesivo proveer el beneficio reservado, á diferencia del beneficio afecto, que puede conferirse por él, si queda vacante después de una vez provisto por el Papa.

c) La afección tiene lugar no solo en los beneficios, como la reserva; sinó también en otras cosas, como los órdenes (1) y el conocimiento de causas (2).

Sus especies.—Las reservas apostólicas se dividen en=

Generales, llamándose así las que no se concretan á determinados beneficios ó personas, sinó á los beneficios en común, ó sea todos los beneficios de una clase ó determinado territorio, como todas las iglesias patriarcales, metropolitanas, catedrales: ó todos los beneficios de un reino ó diócesis, todas las dignidades, etc.

Especiales, que son las reservas de beneficios determinados.

Las reservas especiales pueden verificarse=

Por razón del lugar, como si se reservan los beneficios de cierta iglesia.

Por razón de cierta cualidad, como la dignidad de prior.

Por razón de la persona, como si se ordena dar á Pedro el primer beneficio que vaque en cierta iglesia.

Lo mismo las reservas generales que las especiales pueden dividirse en=

Temporales y perpetuas, según que es por tiempo determinado ó indefinido.

(1) Cap. XII, tít. XI, lib. I *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, pár. 6.º, núm. 210.

Fijas ó continuas, como las primeras dignidades ó los beneficios poseidos por los colatores, subcolatores ú oficiales de la Santa Sede.

Inciertas, discontinuas ó eventuales, como por razón del mes ó lugar en que ocurra la vacante.

Comprendidas en el cuerpo del derecho común, como en las Decretales ó Clementinas.

Fuera del cuerpo del derecho, como en las Extravagantes, reglas de cancelaría ú otros decretos apostólicos ó concordatos (1).

Reservas comprendidas en el cuerpo del derecho.—Es una solamente (2), y en ella se reserva á la provisión pontificia los beneficios vacantes en la curia romana, debiendo conferirse por la Santa Sede dentro de un mes, contado desde el día de la vacante, porque trascurrido éste sin proveerlo, puede conferirlo el ordinario inferior, como si no estuviera reservado (3).

Beneficios reservados en las extravagantes.—Las constituciones extravagantes contienen las antiguas reservas y las nuevamente introducidas.

Bonifacio VIII reservó á la Santa Sede la provisión de las dignidades, personados, iglesias y otros beneficios eclesiásticos que vacasen ante la Santa Sede (4).

Se reserva igualmente á la provisión de la Santa Sede los beneficios vacantes por haber obtenido un segundo incompatible, y aún éste, si el interesado no hace renuncia del primero en manos del ordinario (5).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, párrafo 6.^o, núm. 217 y sig.

(2) Cap. II, III y XXXIV, tit. IV, lib. III *sext. Decret.*—Cap. I, tit. V, libro II *Clementin.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 219.

(4) Cap. I, tit. II, lib. III *Extravag. commun.*

(5) Cap. IV, tit. II, lib. III *Extravag. commun.*

Benedicto XII reservó á la Santa Sede=

- a) Las iglesias patriarcales, metropolitanas y episcopales.
- b) Los monasterios, prioratos, dignidades, oficios y beneficios, sin excluir los que se proveen por elección ó de otro modo, si vacan ante la Santa Sede.
- c) Los beneficios vacantes por deposición, privación, traslación, consagración, elección ó postulación y renuncia ante la Santa Sede.
- d) Los vacantes por muerte de los cardenales, legados ú otros oficiales de la Santa Sede.
- e) Los vacantes por promoción á dignidades mayores hecha por autoridad apostólica (1).

Paulo II decretó que todos los beneficios hasta entonces reservados al Papa y los que se reservasen en lo sucesivo, lo mismo que los vacantes ó que vacaren de cualquier modo, quedaban siempre afectos, no pudiendo proveerlos ó disponer de ellos por aquella vez más que el Sumo Pontífice (2).

Reservas contenidas en las reglas de cancelaría.

—Las reservas contenidas en las reglas de cancelaría (3) son muchísimas, y de ellas se ha tratado en otro lugar de esta obra (4).

Modificaciones introducidas en esta materia por los concordatos.—Toda esta materia de reservas ha quedado considerablemente modificada por los concordatos celebrados entre la Santa Sede y las distintas naciones, debiendo por lo mismo tenerse esto presente en la práctica.

Las reservas benéficiales han quedado reducidas en España casi á la nulidad, según se ha dicho en otro lugar de esta obra (5).

Annatas, y sus clases.—Se entiende por annatas: *Las pensiones ó ciertas cantidades de dinero, que se pagan á la Cá-*

(1) Cap. XIII, tít. II, lib. III *Extravag. commun.*

(2) Cap. XIV, tít. II, lib. III *Extravag. commun.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, pár. 7.^o

(4) Lib. I, tít. II, cap. V, art. 1.^o

(5) Lib. I, tít. II, cap. IX, art. 4.^o

mara Apostólica de los frutos del primer año de los obispados y otras dignidades y beneficios eclesiásticos vacantes.

Se enumeran cuatro clases de annatas, y son las siguientes:

Annatas. —La primera clase, á la que se dá propiamente el nombre de annata, es la mitad de los frutos del primer año, y se abona á la Cámara apostólica de los beneficios inferiores y regulares, que no se confieren por el Papa en el Consistorio, si su valor y renta anual no excede de 24 florines de cámara, según la tasa de la misma.

Servicios comunes. —Así se denominan las annatas, cuya mitad de su importe se dá á la Cámara Apostólica y la otra mitad cede en provecho de los cardenales que se hallan presentes.

Esta parte de frutos del primer año se abona únicamente de las prelaturas ó beneficios consistoriales.

Servitia minuta. —Se llaman así las porciones que se distribuyen entre ciertos ministros y oficiales del Papa, según la proporción ó cantidad de la tasa de frutos episcopales ó abaciales.

Se los llama *minuta*, porque son partes pequeñas de la annata, y porque se dividen entre los ministros inferiores.

Quíndennia, ó sea la mitad de los frutos de un año, que han de abonarse á la Cámara Apostólica cada quince años de los beneficios unidos perpetuamente, por cuyo motivo no vacaban nunca; así como de otros beneficios exentos de la reserva por especial privilegio (1).

Motivos de su institucion.—Algunos escritores han impugnado las annatas con la mayor virulencia y como una novedad introducida por Juan XXII ó Bonifacio IX; pero es indudable que se conocieron en tiempos más antiguos, toda vez que se hallan aprobadas en el Concilio de Viena.

Esta exacción fué razonable, honesta y aún necesaria—

a) Porque se conservaba por este medio en los prelados in-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccl. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, pár. 6.^o, núm. 246 y sig.

feriores la memoria del origen de sus iglesias y dignidades, lo mismo que su dependencia de la Iglesia romana.

b) Porque el Sumo Pontífice necesita para el gobierno de la Iglesia universal del auxilio de los cardenales, oficiales y empleados de la curia apostólica, en cuyo beneficio ceden las annatas.

c) El Papa, como padre de todos los fieles, debe remunerar y premiar á las personas beneméritas de la Iglesia, y socorrer las necesidades de los desvalidos, á cuyo efecto necesita allegar recursos de las iglesias inferiores (1).

d) Le corresponde la propagación del Evangelio entre los infieles y su conservación en los países heréticos, lo cual ocasiona gastos de gran consideración.

e) Las annatas son en manos del Papa un medio poderoso para atender á las necesidades públicas de la Iglesia (2).

Diversas letras pontificias en la provision de beneficios.—El Sumo Pontífice expide las letras de estos nombramientos (3)=

In forma gratiosa, cuando se dice por el Papa en ellas que confiere el beneficio en vista de los méritos que se hallan en el agraciado.

In forma dignum, porque las letras de provision empiezan: *Dignum arbitramur*; y el Sumo Pontífice ordena en ellas al ordinario, que confiera determinado beneficio á un clérigo, si mediante exámen, lo considera idóneo.

Estas letras reciben también el nombre de *in forma commissoria*, y se asimilan á los mandatos *de providendo*, porque el Papa no confiere propiamente el beneficio, sinó que manda al ordinario su colación (4).

(1) DEYOTT: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, sect. 3.^a, pár. 42.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret*, tít. V, pár. 6.^o, núm. 251.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 25.

(4) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon. pars special.*, lib. II, tít. I, tract. 2.^o, disert. 2.^a, cap. III, art. 2.^o, pár. 1.^o

ARTÍCULO II.

DE LA PROVISIÓN DE BENEFICIOS *jure ordinario*.

Derecho de los obispos á proveer los beneficios *jure ordinario*.—Los patriarcas, primados, arzobispos y obispos confieren por derecho ordinario los beneficios de sus respectivas diócesis, bastando, para que puedan usar de él, que hayan obtenido las bulas de confirmación apostólica, aunque no estén consagrados; porque se trata de un acto de jurisdicción y nó de orden (1).

Esta facultad del obispo á conferir los beneficios de su diócesis se halla fundada en el derecho común, y cualquier otro que se atribuya esta prerrogativa tendrá necesidad de presentar el título especial en que se funde (2), á ménos que se trate de la Santa Sede, á quien compete esta facultad *pleno jure* en todas las diócesis, según se deja indicado.

Este derecho de los obispos se halla limitado por las reservas apostólicas, leyes, costumbres y fundaciones (3).

§ 1.º

De la provisión de prebendas en las Catedrales y Colegiatas

Provisión de dignidades, canonicatos y prebendas de las catedrales y colegiatas.—La provisión de estos cargos en las catedrales corresponde por derecho general á los obispos y cabildos de común acuerdo, porque el obispo, lo mismo que su cabildo, tienen interés en que se nombre para

(1) C. IV, quest. 1.ª, causa 10.—C. X y XI, quest. 7.ª, causa 16.—Cap. I, título XXXVII, lib. III *Decret.*—Cap. XII, tít. VII, lib. V *Decret.*—Cap. XV, tít. VI, lib. I *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccl. univ.*, ibid., pár. 3.º, núm. 46.

(3) DEVOT: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, sect. 3.ª, pár. 29.

estos cargos personas aceptables á unos y otros; pero esta materia se halla considerablemente modificada por privilegios, estatutos, costumbres, fundaciones de las respectivas iglesias y concordatos; así que unas veces corresponde la provisión al obispo y cabildo (1), siendo vario el modo de ejercer sus respectivos derechos, porque el voto del obispo vale á veces tanto como el de todo el cabildo, ó su mayor parte, para la provisión de estos cargos, ó su voto no tiene esta importancia.

Otras veces ocurre que el obispo y cabildo proveen las dignidades ó prebendas alternativamente por turno.

Igual variedad se observa en la manera de conferir estos cargos cuando su provisión corresponde á solo el cabildo, porque unas veces es necesario el consejo del obispo (2) y otras no lo necesita (3).

En otros casos se hace la provisión por el cabildo capitularmente ó por cada uno de sus individuos, turnando en el ejercicio de este derecho (4).

Los demás beneficios inferiores de las iglesias catedrales, como los porcionarios ó medio porcionarios, se proveen entre el obispo y cabildo de común acuerdo según el derecho común, si son del gremio del cabildo por costumbre ó derecho especial en cuanto á la participación de la mesa común al ménos; pero si son extraños al cabildo aún en esto, entonces se proveen por el obispo únicamente.

Esto mismo tiene aplicación á las capellanías de la misma iglesia catedral (5).

El derecho de presentar ó elegir para los canonicatos y prebendas de las iglesias colegiadas corresponde al cabildo de

(1) Cap. únic., tít. VIII, lib. III *sext. Decret.*—Cap. XV, tít. VIII, libro III *Decret.*

(2) Cap. únic. par. 2.º, tít. VIII, lib. III. *sext. Decret.*

(3) Cap. XXXI, tít. VI, lib. I *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. III Decret.,* tít. V, párrafo 3.º, núm. 48 y sig.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., ibid.,* núm. 51.

ellas y á su prelado inmediato, si lo tienen, y el derecho de instituir ó confirmar á los presentados ó electos pertenece al obispo de la diócesis con arreglo al derecho común, que puede hallarse modificado por leyes, estatutos ó privilegios especiales, según se deja consignado respecto á las prebendas de las iglesias catedrales.

Provisión de las prebendas de oficio.—Todo lo relativo al origen de los canónigos de oficio, sus cualidades, deberes y derechos, se deja tratado en otro lugar de esta obra (1), así que corresponde examinar únicamente en este lugar lo concerniente á la provisión de estos oficios.

Las disposiciones dictadas en el Concilio IV de Letrán y en el de Trento respecto á la creación de los oficios de lectoral y penitenciario, nada prescriben acerca de la forma en que han de proveerse, limitándose únicamente á disponer respecto á la lectoral, que se confiera á persona idónea (2), examinada y aprobada por el obispo; y en cuanto á la penitenciaria, que se confiera á persona dotada de ciertas cualidades (3); así que la provisión de estos oficios corresponde exclusivamente al obispo (4), debiendo hacerse aquí las mismas observaciones que se dejan indicadas en cuanto á las dignidades y canonicatos, porque en casi todas partes se proveen por concurso, mediante costumbre ó ley especial.

Legislación particular de España —Respecto á las dignidades, canonicatos y demás prebendas de las iglesias catedrales y colegiatas se halla dispuesto, que su provisión recaiga como requisito indispensable, en presbíteros ó que por lo ménos los clérigos nombrados para estos cargos puedan recibir el orden del presbiterado dentro del año contado desde que tomaron posesión de la prebenda (5).

(1) Lib. II, tit. IV, cap. III, art. 1.º, pár. 4.º

(2) *Concil. Trid.*, ses. 5.ª, cap. I *De Reformat.*

(3) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VIII *De Reformat.*

(4) BOUIX: *De Capitulis*, part. 1.ª, sect. 2.ª, cap. IX, pár. 4.º, cap. X, pár. 4.º

(5) Artículo 16 del Concordato de 1851.

El concilio de Trento desea (1) que las dignidades de las iglesias catedrales y colegiatas insignes se confieran á maestros, doctores ó licenciados en Teología ó Derecho Canónico y el Real decreto de 25 de Julio de 1851 exige grado mayor para las dignidades de Dean, Arcediano, Maestrescuela y esto mismo se ordena para las demás dignidades aunque con algún lenitivo.

El expresado concordato de 1851 reserva á la libre provisión de Su Santidad la dignidad de Chantre en todas las iglesias metropolitanas y muchas sufragáneas (2) disponiéndose en cuanto á las demás que Su Santidad proveerá una canongía de las de gracia, la cual quedará determinada por la primera provisión (3).

La dignidad de Dean se provee siempre por S. M. en todas las iglesias, lo mismo que la de abad en las colegiatas (4).

Las canongías de oficio se proveen, prévia oposición por los prelados y cabildos.

Las demás dignidades y canongías se confieren en rigurosa alternativa por S. M. y los arzobispos y obispos (5).

Los beneficiados ó capellanes asistentes se nombran alternativamente, por S. M. y los prelados y cabildos.

Las expresadas prebendas se confieren por S. M. si resultan vacantes por resigna ó promoción del poseedor á otro beneficio, á excepción de los reservados á Su Santidad.

Sobre el número de beneficios anejos á oficio en las iglesias metropolitanas y sufragáneas habrá de tenerse á la vista la Real orden de 16 de Mayo de 1852.

Sobre posesión de prebendas el Real decreto de 14 de Mayo y 5 de Noviembre de 1852 y acerca del término concedido

(1) Cap. XII *De Reformat.* Sesión 24.

(2) Artículo 18.

(3) Véase el Apéndice núm. 1.º

(4) Real orden de 30 de Junio de 1863 y Real decreto de 27 de Junio de 1867.

(5) Real orden de 21 de Julio de 1852.

para sacar la Real Cédula á los nombrados por la Corona y tomar posesión de la prebenda la R. O. de 6 de Noviembre de 1861.

También corresponde á S. M. la provisión de las prebendas que vaquen, sede vacante, ó las que hayan dejado sin proveer los prelados á quienes correspondía proveerlos al tiempo de su muerte, traslación ó renuncia (1).

En la provisión de prebendas y beneficios habrá asimismo de tenerse presente el Real decreto de 6 de Diciembre de 1888 —R. O. de 19 de Febrero de 1889 respecto á los nombrados para prebendas de Ultramar—R. O. de 2 de Octubre de 1889 sobre la publicación en la Gaceta de las provisiones eclesiásticas que sean objeto de Real Decreto.

Acerca de la expedición de Reales despachos y títulos de prebendas y beneficios se habrán de tener presentes la Circular del ministerio de Gracia y Justicia de 18 de Agosto de 1889 y la de la Cancillería de dicho Ministerio de 19 de Setiembre del mismo año (2).

§ 2.º

De la provisión de parroquias.

Provisión de parroquias con arreglo al Concilio de Trento.—Este Concilio dispone que mientras se procede al nombramiento de párrocos por concurso, el obispo proveerá á la Iglesia vacante de un vicario idóneo con la congrua asignación de frutos ó renta á su arbitrio (3).

Dice asimismo que el obispo y otras personas designarán dentro de diez días contados desde la vacante del curato u otro término á voluntad del obispo, las circunstancias ó cualidades

(1) Artículo 18 del Concordato de 1851.

(2) Véase el apéndice núm. 7.º

(3) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XVIII *De Reformat.*

de sujetos idóneos para regir las parroquias, á fin de que puedan ser llamados para probar su aptitud ante los examinadores, ordenando además=

I. Que trascurrido el término señalado, el obispo ó su vicario general, si aquél se hallase impedido, proceda juntamente con tres al ménos de los examinadores nombrados en el sínodo diocesano, á probar la aptitud de dichos sujetos.

II. Que dichos examinadores, después de terminado el examen, propongan los que consideren más idóneos *ætate, moribus doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis*.

Cuando los examinadores sinodales no estén de acuerdo y sus votos son pares ó singulares, el obispo, ó su vicario, podrá adherirse á quien más bien le pareciere.

III. Que el obispo nombrará de entre los propuestos al que considere más idóneo, teniendo obligación de nombrar al que se le proponga por el patrono de entre los aprobados por los examinadores, si el beneficio es de patronato, y le corresponde su institución.

Cuando la institución corresponde á otro, entónces el obispo de la diócesis designará el más digno de los dignos presentados por el patrono, á aquél á quien corresponde la institución canónica.

Disposicion de S. Pío V acerca de este punto.—

Este Papa, en su constitución *In conferendis* de 16 de Mayo de 1567, siguiendo el espíritu del Concilio Tridentino, dice=

a) Que son nulas las provisiones de parroquias hechas sin el examen ó contra la forma prescrita por el Concilio, quedando reservada su provisión á la Santa Sede.

b) Que si los *colatores* ordinarios no proveen la parroquia vacante dentro del término de seis meses contados desde el día en que vacó, su provisión queda reservada á la Santa Sede.

c) Que si la parroquia es de patronato eclesiástico ó mixto, y los patronos no hacen la presentación dentro del término legal, ó no se dá la institución dentro de dos meses contados des-

de el día de la presentación, su provisión queda reservada al Sumo Pontífice.

d) Que las parroquias cuya provisión corresponde á la Santa Sede, y que se han de proveer por concurso con arreglo á la disposición Tridentina, quedan reservadas en absoluto al Sumo Pontífice, si el ordinario no designa á la Santa Sede, dentro del término de cuatro meses, al más digno de los aprobados.

e) Que las palabras del Concilio de Trento *intra decem dies, ved aliud tempus ab episcopo præscribendum*, no pueden extenderse más allá de veinte días.

f) Que si el obispo nombrare al ménos idóneo entre los aprobados, há lugar á la apelación en un solo efecto ante el metropolitano ó la Santa Sede, y si la elección se ha hecho por el metropolitano, ante el ordinario más próximo como delegado de la Santa Sede (1).

Decreto de la Sagrada Congregacion del Concilio de Trento acerca de la provisión de parroquias.— El papa Clemente XI confirmó el decreto dado por la sagrada Congregación del Concilio en 10 de Enero de 1721, y en él se ordena (2).

a) Que habrán de señalarse á todos los opositores las mismas cuestiones y casos; así como los mismos textos del Evangelio para la plática que han de componer.

b) Que se dicten al mismo tiempo á los opositores, los casos y cuestiones que hayan de resolver, y los textos del Evangelio.

c) Que á todos se concederá igual tiempo para hacer los trabajos.

d) Que todos los opositores quedarán encerrados en un mismo aposento, sin que nadie pueda entrar ni salir hasta haber terminado su trabajo por escrito, á cuyo efecto se dará á todos recado para escribir.

(1) BOUX: *De Parocho*, part. 3.^a, secc. 3.^a, cap. 1, pár. 2.^o

(2) BENEDICTO XIV: Const. *Cum illud* de 1742.

c) Que cada uno de los opositores escribirá y firmará por sí mismo las respuestas y la plática.

f) Que las respuestas se escribirán en latín, y la plática en idioma vulgar.

g) Que los trabajos hechos por los opositores se suscribirán por ellos mismos, cancelario del concurso, examinadores y por el ordinario ó su vicario.

h) Una vez verificado el concurso en la expresada forma el obispo nombrará al mas digno entre los aprobados.

Qué se dispone para el caso de apelación interpuesta por el que se considera agraviado.—Dispone el citado decreto respecto á este punto, que no se admita la apelación, á ménos que se interponga dentro de diez días, contados desde aquél en que se hizo la provisión, en cuyo caso se remitirán al juez de la apelación las actas originales cerradas y selladas, ó un testimonio auténtico de ellas sacado por el secretario del concurso y otro notario designado por el obispo ú ordinario, que habrá de cotejarse ante el vicario general ú otra persona constituida en dignidad eclesiástica designada por el mismo ordinario.

Este documento irá también suscrito por los examinadores sinodales, que fueron jueces del concurso.

El apelante habrá de probar ante el juez de apelación, por las mismas actas del concurso, ó por atestados de gran peso, aunque sean extrajudiciales (1) que ha sido injustamente pospuesto en cuanto á la ciencia y demás circunstancias.

Recomendación á los ordinarios de la expresada forma de concurso, en la provisión de parroquias.—La Sagrada Congregación del Concilio recomendó á los *ordinarios* en su decreto de 16 de Noviembre de 1720, aprobado por el papa Clemente XI en 10 de Enero de 1721, la forma de concurso dispuesta por el expresado Papa, advirtiéndoles que en el caso de continuar haciendo los concursos á parroquias en la

(1) BENEDICTO XIV: Const. *Cum illud* de 1742.

forma seguida hasta entonces, no podrá ménos de atender á los que apelen de sus providencias y sujetar de nuevo á examen á los demandantes y demandados (1).

Constitución CUM ILLUD de Benedicto XIV sobre esta materia.—Benedicto XIV dió, por decirlo así, la última mano sobre los concursos á curatos, y dispuso en su constitución *Cum illud* de 1742 lo siguiente:

I. Que se haga convocatoria pública por edictos, en los que se fijará el término para presentar las solicitudes con los documentos relativos á los méritos y servicios de los aspirantes al concurso, que habrán de remitirse por éstos al secretario ó persona designada al efecto.

II. Que el secretario del concurso hará un extracto fiel de los méritos, servicios y demás circunstancias de cada uno de los opositores, entregando un ejemplar al obispo ó su vicario, si éste hace las veces de aquél, y otro á cada uno de los jueces sinodales.

III. Que los ejercicios empezarán en el día señalado, y habrán de hacerse del modo prescrito por Clemente XI, debiendo los examinadores proceder con el mayor cuidado para formar un juicio exacto de los ejercicios de los opositores, no ménos que para escudriñar su vida y costumbres, etc., á fin de negar su aprobación á los inhábiles y proponer al obispo los que consideren idóneos.

IV. El obispo ó su vicario general y los examinadores sinodales devolverán al secretario del concurso, después de terminado éste, el extracto recibido del mismo al empezar los ejercicios de oposición, para que lo inutilice ó lo una á las actas secretas, que no podrán manifestarse á nadie, á ménos que medie mandato del obispo ó su vicario.

V. El *ordinario* nombrará á los más dignos entre los aprobados, sin que obste para ponerlos en posesión la apelación que se interponga por cualquier persona.

(1) BENEDICTO XIV: Const. *Cum illud* de 1742.

Este recurso de alzada ha de utilizarse por el que se considere agraviado, dentro de diez días, contados desde el nombramiento, debiendo interponerle por escrito ante el ordinario de quien se apela, y acudir en tiempo hábil ante el superior para probar que se le ha pospuesto injustamente, por mala relación de los sinodales, ó juicio indiscreto del obispo, apoyándose al efecto en las actas del concurso, sin que le sea permitido presentar otras pruebas que las que resulten de dichas actas, lo mismo en cuanto á la ciencia, que respecto á las costumbres y demás circunstancias.

Ordena, en su consecuencia, al juez superior, que no reciba ningún documento extraño á las mismas actas.

VI. Que en el caso de haberse conferido la parroquia á determinada persona, mediante una causa sabida únicamente por el ordinario, éste podrá ponerla en conocimiento del superior, valiéndose de carta privada y bajo sigilo.

Si el juez ante quien se sigue la apelación no ofreciera fianza al ordinario para hacerle la expresada manifestación, podrá éste acudir al cardenal prefecto de la Sagrada Congregación del Concilio, y éste manifestará lo conveniente al juez de apelación para que en todo caso haga justicia.

VII. Que si la sentencia dada por el inmediato superior es conforme de toda conformidad con la del obispo ú ordinario dicho fallo pasará en autoridad de cosa juzgada; pero en otro caso el nombrado por el obispo puede apelar de dicha sentencia, y permanecer en posesión de la parroquia hasta la resolución definitiva del tercer juez, cuya sentencia, sea cual fuere, habrá de ejecutarse sin ulterior recurso.

VIII. Que si la provisión del curato corresponde á la Santa Sede, *ratione mensium apostolicorum*, el concurso se hará por el ordinario, sin necesidad de pedir autorización al Sumo Pontífice, y una vez verificado, nombrará al más idóneo, poniéndole en conocimiento del tribunal apostólico de la Dataría (1).

(1) BENEDICTO XIV: Const. *Cum illud* de 1742.

Disciplina particular de España.—La iglesia española ha seguido en todo la legislación general de la iglesia en la provisión de curatos y solo se advierte alguna discrepancia en cuanto á la forma respecto al arzobispado de Toledo, en el que se sigue un método especial que se ajusta al espíritu del señalado por Benedicto XIV.

D. Carlos I y D.^a Juana encargaron á los prelados que proveyesen los curatos en personas de ciencia, de buena vida y costumbres (1).

D. Fernando VI dispuso, que las parroquias y beneficios curados se confriesen por oposición y concurso en todo caso (2).

D. Carlos III recomendó que se hiciesen las oposiciones á curatos del modo y forma que se hace en el arzobispado de Toledo (3).

Los prelados proponen en terna á los opositores aprobados para que S. M. nombre libremente de entre ellos, cuyo derecho se sanciona de nuevo en el concordato de 1851 (4). En esta materia habrán de tenerse presentes la Real cédula de 3 de Enero de 1854—Real orden de 10 de Agosto de 1866—Real decreto de 15 de Febrero de 1867—Real orden de 18 de Octubre de 1852 (5).

ARTÍCULO III.

DE LA PROVISIÓN DE BENEFICIOS POR DERECHO DELEGADO.

Derecho de otras personas á proveer los beneficios.—El derecho del Sumo Pontífice á conferir beneficios ó todos los beneficios del orbe católico, y la facultad que compete á los obispos para proveer *jure ordinario* los beneficios de sus

(1) Ley 1.^a, tít. XX, lib. I de la *novis. Recop.*

(2) Ley 2.^a, 3.^a y 4.^a, tít. XX, *ibid.*

(3) Ley 7.^a, tít. II, lib. I de la *novis. Recop.*

(4) Artículo 26.

(5) Véase el apéndice núm. 8.^o

respectivas diócesis, no excluye á otras autoridades en quienes radique este mismo derecho; así que pueden proveer también los beneficios eclesiásticos==

a) Los legados *à latere*, quienes concurren con los obispos y otros *colatores* ordinarios en la provisión de beneficios por derecho común (1).

b) Los prelados *vere nullius*; á ménos que la provisión de beneficios corresponda á otra persona por derecho especial (2).

c) Los cardenales de la santa Iglesia romana en virtud de privilegio pontificio, que les concede, áun cuando no sean obispos, la facultad de proveer todos los beneficios de las iglesias que poseen por razón de título ó encomienda (3).

d) Otros prelados que sin tener jurisdicción ordinaria gozan de este derecho en virtud de privilegio ó prescripción.

e) El cabildo *sede vacante*, y el vicario capitular con las limitaciones que se dejan señaladas (4).

Si los canónigos pueden proveer beneficios.—Los canónigos pueden tener este derecho=

Por *título singular*, como en el caso de ir unido á una prebenda ó dignidad.

Por *turno*, como si cada uno de los canónigos, guardando el orden de antigüedad, proveen en nombre del cabildo los beneficios vacantes en ciertos meses.

Capitulariter, si la provisión se hace por el cabildo, en cuyo caso recaerá el nombramiento en la persona designada por mayoría de votos.

(1) Cap. XXXI, tít. IV, lib. III *sext. Decret.*—Cap. V, tít. XV, lib. I, *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. V, párrafo 3.º, núm. 42º

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.*

(4) Lib. II, tít. VI, cap. II, art. 2.º y 3.º de esta obra.

ARTÍCULO IV.

DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN OBTENER BENEFICIOS

Y FORMA DE PROVISIÓN.

Quiénes pueden obtener beneficios.—Ya se indicaron en el libro II de esta obra las cualidades necesarias en los que hayan de ingresar en cada uno de los distintos grados de la jerarquía eclesiástica, y por lo mismo me limito á las indicaciones siguientes:

Edad conveniente, porque los beneficios no pueden conferirse á los párvulos (1); así que se necesita tener—treinta años para el episcopado (2)—veinticinco años para beneficio con cura de almas,—veintidós años iniciados para las dignidades, personados, ó canonicatos sin cura de almas (3)—catorce para los beneficios simples (4).

Hijo de legítimo matrimonio (5).

Clericato (6) porque el beneficio lleva anejo un oficio espiritual, del cual son incapaces los legos.

Ciencia competente, que es diversa, según los distintos beneficios.

Vida honesta y probidad de costumbres, quedando en su consecuencia excluidos los infames, irregulares ó ligados con censuras.

(1) Cap. XXXV, tit. V, lib. III *Decret.*

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. VI, pár. 6.º

(3) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XII *De Reformat.*

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 24.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, pár. 3.º núm. 61.

(6) Cap. XI, tit. XIV, lib. I *Decret.*—Cap. VI, tit. XXXVI, lib. I *Decret.*—Cap. II, tit. VII, lib. III *Decret.*

Célibe, de manera que si contrae matrimonio después de haber obtenido un beneficio, lo pierde *ipso facto* (1).

Disposiciones relativas á España.—Para obtener beneficios eclesiásticos en España, es de necesidad, que el sujeto se halle adornado de las cualidades indicadas, y que además sea español y á este efecto se han dado muchas disposiciones que excluyen á los extranjeros y los inhabilitan para obtener beneficios eclesiásticos en España (2).

Esto mismo se dispone en el artículo 26 del R. decreto de 17 de Noviembre de 1852.

Forma que ha de observarse en su provisión.—Respecto á la forma en la provisión de beneficios, habrá de tenerse presente:

a) Que el beneficio ha de hallarse vacante, porque el Concilio de Trento prohibió las *expectativas* (3).

b) Que ha de hacerse gratuitamente sin intervenir precio: ni cosa estimable en precio, porque habría simonía (4).

c) Que se confiera libremente, sin intervenir fuerza ó miedo (5), porque es una donación y por lo mismo excluye toda obrepción ó subrepción (6).

d) Que se confiera absolutamente sin mediar condición alguna (7).

e) Que se haga en público, ó sea en presencia de dos testigos al ménos, que puedan deponer en caso necesario de haberse hecho la provisión del beneficio.

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon*, lib. III, cap. II, pár. 24.

(2) Ley 1.^a y 2.^a, tit. XIII, lib. I de la *novis. Recop.*—Ley 1.^a y sig., tit. XIV, lib. I de la *novis. Recop.*

(3) Sesión 24, cap. XIX *De Reformat.*—Sesión 25, cap. IX *De Reformat.*

(4) C. III, VII y VIII, pár. 1.^o, quest. 3.^a, causa 1.^a

(5) Cap. II, tit. XI, lib. I *Decret.*

(6) Cap. XXIII, tit. IV, lib. III *sex. Decret.*—Cap. VIII y XIX, tit. III, libro I *Decret.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. V, párrafo 3.^o, núm. 76.

f) Que la provisión se verifique en el tiempo señalado, ó sea dentro de los seis meses desde la vacante, trascurridos los cuales pasa este derecho al superior, porque ha habido negligencia por parte del *colator* ordinario.

g) Que se haga por escrito, porque esta es la práctica observada generalmente; así que no se admite á la posesión sin la presentación del nombramiento (*collatio*) escrito, por más que no es necesario para su validez (1).

h) Si la provisión se hace por el Sumo Pontífice, es de necesidad que se presenten por el agraciado las letras de su nombramiento para ponerle en posesión del beneficio (2).

CAPITULO VI.

DERECHO DE PATRONATO.

Acepciones de la palabra institucion.—La palabra *institución*, en un sentido latísimo, incluye el nombramiento y presentación.

En su sentido específico, significa la sola colación del beneficio, que excluye la presentación y nombramiento.

En este sentido la institución puede ser—

Libre en cuanto que se confiere libremente el beneficio al clérigo, sin que en él haya derecho alguno para reclamarlo.

Necesaria, porque hay obligación de conceder el beneficio al presentado por el patrono, siempre que el beneficio esté vacante—sea de patronato y el patrono se halle en pacífica posesión de este derecho—se haga la presentación en tiempo hábil—y el presentado sea idóneo (3).

Su definición y especies.—La institución se toma aquí en este último sentido, y puede definirse: *La concesión de una*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 75.

(2) Cap. I, tit. III, lib. I *Extravag. commun.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. VII, pár. 1.º número 1 y 2.

iglesia ó beneficio vacante, hecha por la autoridad del obispo ú ordinario en la persona presentada ó nombrada por el patrono.

Es una regla de derecho, que el beneficio eclesiástico no puede obtenerse sin la institución canónica (1), y ésta puede ser=

Colativa, en cuya virtud se confiere el título benefical.

Autorizable, porque se concede al clérigo promovido á un beneficio parroquial la cura de almas, que se ha de ejercer por la administración de sacramentos.

Investidura, por la que se dá la posesión corporal y actual al clérigo que, mediante título, ha adquirido un derecho *in re*.

Antigüedad de la palabra patronato, y á quién se llamaba patrono.—La palabra patronato se usaba ya en tiempo de S. Gregorio VII en la acepción que tiene en la actualidad.

Se llamaba patrono al que tenía el derecho de patronato, porque debe patrocinar á la Iglesia, ó porque era dueño y señor de aquellas cosas con las que se edificó una iglesia (2).

Su definición.—Se entiende por patronato: *El derecho de presentar á un clérigo para que se le conceda por el ordinario la institución de un beneficio vacante.*

En todo beneficio de patronato es necesario, según esta definición, que haya=

Presentación, la cual corresponde al patrono, siendo en su consecuencia derecho suyo designar persona para el beneficio vacante (3).

Institución, que pertenece al obispo, el cual tiene obligación de dar el beneficio al clérigo designado, si reúne las condiciones necesarias (4).

(1) Regla 2.^a, tit. XII, lib. V *sext. Decret.*

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, sect. 4.^a, pár. 48.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, sect. 4.^a, pár. 47.

(4) Cap. II, tít. VI, lib. III *sext. Decret.—Concil. Trid.*—sesión 7.^a, cap. í-tulo XIII, *De Reformat.*—Idem, sesión 25, cap. IX *De Reformat.*

Fundamento del derecho de patronato.—La causa formal ó fundamento del derecho de patronato es la concesión de la iglesia, porque la colación de beneficios es de su exclusiva competencia, y por otra parte los legos son incapaces de derechos espirituales, á no mediar indulto ó concesión apostólica.

La Iglesia agradeció siempre los obsequios hechos á ella, y de aquí que concediera ciertas prerrogativas á las personas que fundaban una iglesia ó dotaban un cargo eclesiástico; pero estas consideraciones hácia el bienhechor no se extendieron en los primeros siglos al derecho de presentar las personas que habían de servir su fundación (1).

Su origen.—El primer precedente sobre este punto se halla en el Concilio Arausicano del año 441; allí se otorga á los obispos de las Galias la prerrogativa de que si alguno de ellos fundaba una iglesia en ajena diócesis, pudiese elegir el clero que había de servirla (2) y esta misma disposición se dió después por el papa Nicolao

Las fundaciones hechas por los legos no obtuvieron este privilegio: y los obispos ordenaban respecto á este punto lo que consideraban más conveniente (3); pero no trascurrió mucho tiempo en Oriente sin que se les concedieran ciertas prerrogativas, que versaron primero sobre la administración de los bienes, extendiéndose después al derecho de presentar persona digna para el oficio de la fundación.

Esto mismo tuvo lugar en Occidente, sin más diferencia que el derecho de presentar se limitaba primitivamente al fundador (4), si bien después se hizo hereditario (5).

(1) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. V, cap. IV, pár. 229.

(2) C. I, quæst. 5.^a, causa 16.

(3) C. XXVI y XXVII, quæst. 7.^a, causa 16.—C. VI, quæst. 1.^a, causa 10.

(4) C. XXXI, quæst. 1.^a, causa 16.—C. IV, quæst. 2.^a, causa 18.—C. XXXII, quæst. 7.^a, causa 16.

(5) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. V, cap. IV, pár. 229.

Causas de su concesion. —La iglesia concedió muchas prerrogativas á los fundadores de iglesias, altares y beneficios con derecho de trasmitirlas á sus herederos; á fin de manifestar su gratitud ó reconocimiento, y de excitar á los demás fieles por este medio para que siguiesen el ejemplo de aquellos (1), y de aquí los nombres y elogios de los fundadores, recitados en las iglesias, é inscritos en las sagradas dipticas, siendo muy frecuente que las iglesias llevaran el nombre de los fundadores.

Especies de patronato, y manera de distinguirlas. —El patronato se divide en—

Eclesiástico, que es el que compete á una corporación ó persona eclesiástica por razón de una iglesia, dignidad ó beneficio eclesiástico; así que se consideran de derecho eclesiástico los patronatos que competen—

a) Al obispo ó abad por razón del dominio temporal, perteneciente á una iglesia ó monasterio.

b) A los legos de ambos sexos que viven religiosamente y llevan hábitos religiosos.

c) A los maestros y caballeros de las órdenes militares.

d) A los presidentes ó ecónomos de las iglesias.

e) A los rectores de hospitales erigidos con autoridad del obispo.

f) A las hermandades de legos anejas á una iglesia (2).

Laical ó secular, que es el que compete á una corporación no sagrada, ó á un lego ó clérigo por razón del propio patrimonio; porque con él fundó ó dotó una iglesia ó beneficio, ó porque ha sucedido á los fundadores.

De modo, que para saber si un patronato es eclesiástico ó laical, habrá necesidad de fijarse, no en la persona á quien compete, sinó en los bienes ó título de donde procede (3).

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 4.^a, pár. 49.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXXVIII, pár. 1.^o, núm. 6.^o y 7.^o

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 4.^a, pár. 50.

Mixto, y se dá este nombre al patronato, que compete á uno por razón de la iglesia y del patrimonio, en cuanto que se compone de bienes eclesiásticos y laicales; lo cual puede tener lugar=

a) Cuando compete simultáneamente al clérigo por razón de la iglesia ó beneficio, y al lego por razón de la dotación, fundación, erección ó privilegio.

b) Cuando compete á una misma persona por los dos títulos, porque el clérigo fundó el beneficio con las rentas beneficios y patrimoniales; de manera que en este último concepto puede transmitirse el título de patrono á los herederos del clérigo.

Hereditario, ó sea cuando el derecho de patronato pasa á los herederos, áun cuando sean personas extrañas.

Familiar ó gentilicio, cuando dicho derecho sólo se transmite á los que son de la familia del fundador ó de la persona nombrada por él.

Personal ó principal, cuando compete este derecho independientemente de una cosa temporal, ó de toda clase de cosas ó derechos.

Real ó accesorio, cuando va anejo á una cosa ó derecho temporal.

Pasivo y activo, según que se tiene el derecho de ser presentado ó de presentar para un beneficio.

Diferencias entre el patronato eclesiástico, y laical.—Se cuentan hasta cuarenta y ocho diferencias entre uno y otro patronato; pero las principales son las siguientes (1).

a) El patronato eclesiástico compete á una persona ó corporación por razón de la iglesia ó beneficio; y el laical por razón del patrimonio con que se hizo la fundación ó dotación de la Iglesia, etc.

(1) SCHMALZGUEBERG: *Jus Eccl. univ.*, in lib. III Decret., tit. XXXVIII, pár. 1.º, número 17.

b) El patrono lego tiene cuatro meses para hacer la presentación, y el eclesiástico seis meses (1).

c) Si el beneficio con cura de almas es de patronato eclesiástico, ha de observarse la forma prescrita por el Concilio de Trento; y en su consecuencia, el patrono presentará al que considere más digno entre los aprobados por los examinadores del concurso (2), no siendo dicha forma necesaria en los beneficios de patronato laical.

Modos de adquirirse.—El derecho de patronato se adquiere por alguna de las causas siguientes==

1.^a *Fundación—construcción—dotación* de la iglesia ó beneficio, según las palabras de la glosa (3): *Patronum faciunt dos, ædificatio, fundus.*

2.^a *Privilegio—Prescripción.*

3.^a *Sucesión, donación ó permuta*, que son modos derivativos.

En qué consiste la fundación, construcción y dotación.—La fundación en su sentido estricto consiste en ceder ó dar fundo ó suelo para la construcción de una iglesia (4).

Se dice que construye la persona á cuyo nombre y expensas se edifica una iglesia ó se construye.

Se entiende que dota, la persona que asigna una renta anual, suficiente para el culto y ministros de una iglesia ya construida, ó que se trata de construir.

Cómo se adquiere por privilegio.—El patronato se adquiere también por privilegio del Sumo Pontífice (5), única autoridad que puede concederlo.

Requisitos necesarios para adquirir el patronato por prescripción.—Otra de las causas en cuya virtud se

(1) Cap. único, pár. 1.º, tit. XIX, lib. III, *sext. Decret.*

(2) Sesión 24, cap. VIII, pár. *Si vero, de Reformat.*

(3) C. XXVI, quest. 7.^a, causa 16.

(4) C. XXXII, quest. 7.^a, causa 16.—C. IV, quest. 2.^a, causa 18.

(5) Cap. II, tit. IX, lib. III, *sext. Decret.*

adquiere el derecho de patronato, es la prescripción, siendo necesario para ésta=

- a) Que sea inmemorial.
- b) Que medien muchas presentaciones aceptadas, si es contra una iglesia libre.
- c) Que además ha de probarse este derecho por medio de título y presentaciones que hayan surtido efecto por espacio de cincuenta años atrás, cuando media sospecha de que se haya usurpado este derecho por personas (1) ó corporaciones poderosas (2).

Reglas que han de tenerse presentes.—El patronato se adquiere de alguno de los modos indicados; pero ha de tenerse presente=

- a) Que no se adquiere por fundación, construcción ó dotación, si consta que se hizo por el bienhechor sin ánimo de adquirir dicho derecho (3).
- b) Es necesario para adquirir este derecho que las rentas asignadas á una iglesia por medio de la dotación, sean suficientes para el sostenimiento del culto y sus ministros.
- c) Que hay necesidad de la intervención del ordinario en la fundación, erección ó dotación de la iglesia ó beneficio porque no puede construirse una iglesia, ni erigirse un beneficio eclesiástico sin licencia del ordinario, ó sea el obispo ó cualquier prelado con jurisdicción cuasi episcopal en el lugar que haya de construirse la iglesia ó erigirse el beneficio.
- d) Que el indicado derecho se adquiere por los fieles, mediante alguno de los tres primeros títulos, aun cuando no se lo hayan reservado expresamente, siempre que no conste haberlo renunciado por acto contrario.

e) Que este derecho es pleno en cuanto á todos sus efectos en las iglesias menores; pero en las colegiadas é iglesias

(1) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. IX *De Reformat.*

(2) *Devot. Inst. Canon.*, lib. I, tit. V, sect. 4.^a, pár. 54.

(3) *SCHMALZGRUBER: Jus Eccl. univ.*, in lib. III *Doctr.*, tit. XXXVIII, pár. 2.^a, núm. 34.

conventuales se limita al honor y otros efectos de la misma índole.

f) Que no basta para adquirir este derecho la simple donación del fundo, si el donante ú otra persona no edifica la iglesia; porque no existe iglesia en la que haya de ejercer sus derechos; debiendo decirse lo mismo de la mera construcción, si no hay quien dote, y de la sola dotación, si no se construye. Es, pues, indispensable, que concurren al efecto los tres requisitos, aún cuando no provengan de una sola persona.

g) Que en el caso de concurrir muchos á la construcción, fundación y dotación en una iglesia, entonces todos ellos tienen el derecho de patronato en proporción á la forma con que han contribuido; de modo, que si uno funda, otro construye y un tercero dota, los tres tienen igual derecho; pero si uno dota, dos fundan y tres construyen, habrá tres votos, uno para el primero, otro para los segundos y otro para los últimos (1).

h) Que si una iglesia de patronato se ha arruinado ó ha perdido la dote, el derecho corresponde al que la construye de nuevo ó la dota; porque el primer patrono perdió todo su derecho por la extinción de la cosa á que iba anejo.

i) Que si una iglesia se ha construido en terreno ajeno contra la voluntad de su dueño, ó sin autorización suya, entonces el patronato corresponde al que la ha edificado, quedando al dueño del fundo ó suelo el derecho de destruir ú ocupar la iglesia edificada, si no se ha consagrado (2).

Cómo se trasmite á otras personas.—El derecho de patronato se trasmite de distintos modos, que son los siguientes:

Sucesión hereditaria (3), acerca de la cual ha de tenerse presente:—

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret. título XXXVIII, pár. 2.^o, núm 53 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 63.

(3) C. XXXV, quest. 7.^a, causa 16.—Cap. I y III, tit. XXXVIII, lib. III Decret.

a) Que se trasmite á los herederos de los fundadores, sean quienes fueren, á ménos que el patronato sea familiar ó uno de los herederos lo sea de cosa determinada, porque el expresado derecho se trasfiere con la herencia.

b) Que este derecho no puede dividirse entre los herederos, porque es incorporeal, simple é indivisible en cuanto á su esencia. Esto no obsta para que puedan convenir entre sí sobre el tiempo y lugar en que cada uno haya de hacer la presentación *in solidum* (1).

c) Que una vez hecha la división de la herencia, el patronato corresponde al que adquiere el dominio de la cosa á que va anejo (2).

Donación ó legado (3), debiendo advertir—

I. Que si el patronato compete á una iglesia ó monasterio, es necesario que intervengan las solemnidades prescritas para la enajenación de una cosa eclesiástica inmueble, aun cuando la donación se haga á otra iglesia ó monasterio, porque este derecho incorporeal va unido á una cosa inmueble (4).

II. Que si compete á un lego ó persona privada, entonces el derecho de patronato *real* se trasmite con la cosa al donatario ó legatario, aún cuando no intervenga el consentimiento del obispo.

III. Que el patronato personal se trasmite por donación ó legado á una iglesia, monasterio ó clérigo por razón de la dignidad ó iglesia que obtiene, aún cuando no medie el consentimiento del obispo (5).

(1) Cap. II, tit. XII, lib. III *Clementin.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, cap. XXXVIII, pár. 5.^o, núm. 127.

(3) Cap. VIII, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. únic., tit. XIX, lib. III *sext. Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.*, núm. 146.

(5) Cap. VIII, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. únic., tit. XIX, libro III *sext. Decret.*

Esto tiene también aplicación al caso en que un patrono cede ó dona su derecho á otro compatrono; pero es necesario el consentimiento del obispo, cuando la donación ó legado se hace á uno ó muchos extraños, porque el obispo tiene á su cuidado todas las iglesias de la diócesis, y en este concepto le interesa saber la calidad de la persona á quien se concede el derecho de patronato (1).

Venta de la cosa que va anejo el derecho de patronato (2), sobre lo cual ha de advertirse:

a) Que el derecho de patronato, como cosa espiritual en sí, no puede venderse independientemente de la cosa temporal, sin la mancha de simonía, siendo en su consecuencia nula la venta hecha de este modo.

b) Que puede venderse la finca ó propiedad á que va anejo, en cuyo caso este derecho se trasmite al comprador de ella, debiendo advertir que la finca no puede venderse en cantidad mayor por razón de este derecho (3).

Permuta (4).—Acerca de la cual ha de tenerse presente:

a) Que el derecho de patronato *real*, anejo á una finca, puede permutarse accesoriamente con cualquiera cosa temporal, siempre que no se dé á la finca mayor valor por este concepto.

b) Que el patronato *personal* puede también permutarse por cosa espiritual ú otro derecho de patronato, con licencia del obispo, si se trasmite á un lego (5) por la permuta (6).

Enfeudación y enfiteusis (7). El derecho de patronato no puede enfeudarse ó darse en enfiteusis, sinó por el Papa, sin que

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., núm. 147 y sig.

(2) Cap. VII y XIII, tít. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. núm. 159.

(4) C. XL, quest. 7.^a, causa 16.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 161.

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. V, sect. 4.^a pár. 55.

(7) Cap. VII y XIII, tít. XXXVIII, lib. III *Decret.*

pueda prevalecer costumbre en contrario, aun cuando sea inmemorial (1).

Arrendamiento (locatio).—No puede tener lugar el arrendamiento respecto al derecho de patronato aisladamente considerado; pero sí en cuanto á los frutos ó rentas unidas al expresado derecho.

Cuando los frutos ú obras anejas al patronato no son prestaciones reales en absoluto, sino personales, como los alimentos debidos al patrono, etc., entónces no pueden arrendarse (2).

Privilegio apostólico.—Este es otro de los medios de transmisión del derecho de patronato, porque el Papa tiene omnínoda facultad para disponer de los beneficios eclesiásticos y derechos anejos á ellos (3).

Costumbre ó prescripción.—Acerca de ésta ha de tenerse presente:

a) Que si la Iglesia es libre, no puede adquirirse el derecho de patronato, sino por la prescripción de cuarenta años con título, ó la de tiempo inmemorial sin título; siendo necesario en los legos la prescripción inmemorial (4).

b) Que si la Iglesia era ya de derecho de patronato, entónces es necesaria la prescripción de diez años contra el patronato laical entre presentes: veinte contra el ausente con título y treinta sin título; pero si el patronato era eclesiástico, es necesario de parte de los legos la prescripción inmemorial (5).

Manera de probarse este derecho.—El Concilio de Trento (6) señala distintas reglas, según que se trata de los particulares ó corporaciones y personas poderosas, en quienes puede presumirse que lo hayan usurpado.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 163.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 164.

(3) Cap. II, tít. IV, lib. III *sext. Decret.*—Cap. I, tít. V, lib. II *Clementin.*

(4) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. IX *De Reformat.*

(5) Sesión 25, cap. IX *De Reformat.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 166.

Los particulares pueden probar su derecho por alguno de los medios siguientes:

Documentos públicos.

Multiplicadas presentaciones sin interrupción.

Prescripción de cuarenta años con título colorado, ó tiempo inmemorial sin título.

Fama pública.

Letras del ordinario que reconocen este derecho.

Libros de visita que hacen mención de él.

Sentencia judicial en su favor.

Monumentos antiguos.

Los magnates y corporaciones (1) necesitan documento público y solemne, ó en otro caso=

Presentaciones repetidas sin interrupción por tiempo inmemorial.

Presentaciones que hayan tenido efecto de cincuenta años atrás hasta el día de iniciarse el litigio contra este derecho.

Que dichas presentaciones por el expresado tiempo hayan de probarse con escrituras auténticas.

Personas que pueden adquirirlo.—El derecho de patronato puede adquirirse indistintamente por toda clase de personas, ménos los infieles, judíos y herejes; así que tienen dicha capacidad:

a) Los legos (2), aún cuando sean ilegítimos ó espúreos, porque el derecho no los excluye (3).

b) Los pupilos y menores, porque son capaces de obtener legados ó herencias, á las que va anejo dicho derecho, debiendo advertir que su ejercicio corresponde al tutor cuando no han llegado á los siete años de edad ó son dementes (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., pár. 7.^o, núm. 238 y sig.

(2) Cap. XVI, tít. VIII, lib. III *Decret.*—Cap. VII, tít. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., pár. 3.^o, núm. 72.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 74.

c) Las hembras, porque las leyes eclesiásticas conceden capacidad para adquirir este derecho á todos los fieles cristianos sin distinción de sexo (1), debiendo advertir que conservan el ejercicio de este derecho aun cuando contraigan matrimonio, si el patronato es personal.

d) Que este derecho, ó su ejercicio, pasa al arrendatario de la finca á quien va anejo el patronato, pero nó al acreedor, aun cuando se haya hipotecado ó dado en prenda por el deudor (2).

Derechos y obligaciones de los patronos.—El principal derecho del patrono es la facultad de presentar, y los demás pueden clasificarse en==

Honoríficos, como asiento preferente, precedencia, honor de agua bendita, incienso y sepultura.

Útiles, como pensión moderada que se haya reservado en la fundación y alimentos en caso de diligencia.

Onerosos, como la defensa y vigilancia en la recta administración de los bienes pertenecientes á la iglesia de que son patronos.

Todos estos derechos y obligaciones se resúmen en los versículos siguientes:

Patrono debetur honos, onus, utilitasque.

Præsentet, præsit, defendat, alatur genus.

Honor, y sus atribuciones en este concepto.—En este concepto ocupa un lugar más digno en las procesiones; se le dá la paz, incienso, palma y vela en las respectivas festividades (3).

Se le recibe en la iglesia por el clero procesionalmente si su estado lo requiere.

(1) C. XXVI, XXVII y XXX, quæst. 7.^a, causa 16.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., núm. 89 y sig.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret. tit. XXXVIII. párrafo 4.^o, núm. 94.

Puede poner en la iglesia de que es patrono, sus armas é insignias de su familia, á fin de excitar las mismas obras de piedad en los demás, y de que se muevan á orar por él.

Tiene asiento en el lugar más distinguido fuera del coro; pero nó bajo dosel.

Se hace mención de su nombre en los rezos públicos (1), tiene enterramiento en la iglesia y luto de la misma, cuando fallece.

Onus, y obligaciones que comprende.—Consiste en que tiene el cuidado y defensa de la iglesia, debiendo por lo mismo impedir que se la oprima por las personas poderosas (2), que sus bienes se enajenen, dilapiden ó empleen en usos ajenos á la voluntad de los fundadores (3), y por esta razón se le llama abogado de la iglesia (4).

Tiene facultad para proteger y velar en favor de la iglesia y sus bienes, denunciando al obispo las faltas de administración que observe en aquélla y éstos (5).

El patrono laico no tiene, como tal defensor de la iglesia, jurisdicción alguna en ella, ni la administración de sus bienes. Tampoco puede pedir cuentas al beneficiado de la administración de los bienes estables y rentas del beneficio, oblações de los fieles, etc.: á diferencia del patrono eclesiástico, que tiene omnimoda facultad para que se le dé cuenta por el beneficiado y demás administradores de los bienes eclesiásticos (6).

Utilitas, y hasta dónde se extiende.—La utilidad, que resulta en favor del patrono, consiste en recibir los alimentos de la

(1) WALTER: *Derecho Eccles. univ.*, lib. V, cap. IV, pár. 230.

(2) C. LX, quest. 1.^a, causa 16.

(3) C. XXXI y XXXII, quest. 7.^a, causa 16.

(4) Cap. XXIII y XXIV, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(5) C. LX, quest. 1.^a, causa 16.—C. XXXI, quest. 7.^a, causa 16.

(6) C. VI, quest. 2.^a, causa 16.—Cap. VII, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*—Cap. III, tit. XXXIII, lib. V *Decret.*

iglesia, según las facultades de ésta y condición del mismo patrono, si llega á la indigencia (1), debiendo advertirse—

a) Es necesario que la iglesia, de la cual se piden alimentos, tenga bienes supérfluos; de modo que no tiene obligación de suministrar alimentos al patrono, si no cuenta más que con lo preciso para el sostenimiento del culto y sus ministros.

b) El patrono ha de probar que él ó sus mayores fundaron, dotaron ó construyeron la iglesia, de la cual pide alimentos.

c) Ha de probar su indigencia, ó que no puede atender al sustento de su mujer, hijos y familia con los bienes propios ó lo que le proporciona su cargo ó destino.

d) Ha de probar que no tiene pariente inmediato, como hermano, etc., ú otras personas ricas con obligación de suministrarle alimentos (2).

Presentación y forma de hacerla cuando corresponde á varias personas.—Es el más distinguido derecho del patrono, y puede definirse: *El nombramiento ó designación hecha al obispo, ó á quien pertenezca la institución, de una persona idónea para el beneficio* (3) *ó iglesia vacante.*

Los patronos no tuvieron siempre este derecho, ni después de adquirirlo por concesión de la Iglesia lo ejercitaron en igual forma (4); pero según la legislación vigente pueden usar de esta facultad.

Si el derecho de presentar corresponde individualmente á muchas personas, cada una de ellas puede ejercitarlo separadamente.

Si estas personas han de hacer la presentación de común acuerdo, entónces habrán de ser convocadas, y se tendrá por presentado el que reuna mayoría de votos.

(1) C. XXX, quest. 7.^a, causa 16.—Cap. XXV, tit. XXXVIII, lib. III Decret.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XXXVIII, párrafo 4.^o, núm. 105 y sig.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. III, pár. 34.

(4) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, disert. 4.^a, cap. VII.

En el caso de paridad de votos, el obispo podrá nombrar el que tenga por conveniente de entre ellos (1).

Obligación del patrono á presentar persona idónea.—El patrono ha de presentar para el beneficio eclesiástico vacante una persona idónea, adornada de las cualidades necesarias con arreglo á la naturaleza del beneficio y á las reglas de la fundación; así que no pueden ser presentados los —ilegítimos— neófitos—esclavos—excomulgados—irregulares—legos (2), ni los que no son llamados al efecto por el fundador.

Tiempo y forma en que el patrono eclesiástico ha de utilizar este derecho.—El patrono eclesiástico tiene derecho á presentar una ó más personas para el beneficio vacante dentro del término de seis meses (3).

Este término corre desde el día que tuvo conocimiento de la vacante (4), y si transcurre sin hacer uso de su derecho, el obispo confiere libremente el beneficio por aquella vez (5).

El patrono eclesiástico puede presentar simultáneamente una ó muchas personas para el beneficio vacante; pero una vez hecha la presentación no puede variarla (6), ni presentar más personas; de modo que si ha designado una ó más personas indignas, pierde por aquella vez el derecho de presentar.

Tiempo y forma en que el patrono lego ha de usar de su derecho.—El patrono lego puede hacer la presentación para el beneficio vacante (7) dentro del término de cuatro meses, que empiezan á correr desde que tuvo conoci-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXXVIII, párrafo 4.º, núm. 121 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. pár. 6.º, núm. 167 y sig.

(3) Cap. XXII, tit. XXXVIII, libro III *Decret.*—Cap. únic., pár. 1.º, tit. XIX, lib. III *sext. Decret.*

(4) BERARDE *Comment. in Jus. Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 4.ª, cap. VII.

(5) Cap. III, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(6) Cap. V, XXIV y XXIX, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(7) Cap. III y XXVII, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*

miento de la vacante (1), y si lo deja trascurrir sin utilizar su derecho, el ordinario provee libremente el beneficio por aquella vez (2).

El patrono lego puede presentar á la vez ó sucesivamente una ó muchas personas para el beneficio vacante (3) dentro de los cuatro meses, y si las personas presentadas son indignas, podrá hacer nueva presentación dentro del expresado término (4).

El patrono lego no puede hacer repetidas presentaciones dentro de los cuatro meses, si el patronato es mixto, ó sea cuando en unión con el patrono eclesiástico ha presentado una sola persona (5).

Razón de las diferencias que median entre una y otra presentación.—La razón de estas diferencias consiste en que fué opinión común entre los antiguos, que la presentación hecha por los legos era una especie de recomendación, y la presentación del patrono eclesiástico daba cierto derecho al beneficio, á manera de las elecciones hechas por los cabildos catedrales y colegiales (6); siendo consecuencia de esta doctrina que el patrono eclesiástico pierde el derecho de presentar por aquella vez, si su resignación ha recaído en persona indigna; pero el patrono lego podrá usar de este derecho en el caso expresado, haciendo nueva presentación dentro del término que tiene señalado.

Cuándo el trascurso de tiempo no inhabilita al patrono para presentar.—El trascurso de los expresados términos no inhabilita aún por aquella vez á los patronos para hacer la presentación en los casos de=

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, disert. 4.^a, cap. VII.

(2) Cap. III, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(3) Cap. V, XXIV y XXIX, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(4) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXXVIII, pár. 2.^o, núm. 198 y sig.

(6) Cap. XXIV, tit. XXXVIII, lib. III *Decret.*

- a) Ignorancia de la vacante (1).
- b) Ausencia legítima del patrono, ó impedimento de hecho ó de derecho.
- c) Admisión de la presentación hecha fuera del término por gracia del obispo.
- d) El pleito pendiente entre los patronos les excluye del derecho de presentar por aquella vez si dejan trascurrir el término (2), á ménos que se pongan de acuerdo para hacer la presentación en tiempo debido, ó el litigio sea entre el patrono y el obispo (3).
- e) Si el pleito es entre los presentados sobre su mejor derecho.

Obligación del ordinario á nombrar al presentado.—El obispo tiene obligación de nombrar al más digno de los presentados por el patrono; pero si la presentación se hace por muchos patronos, habrá de preferir al que tenga mayor número de votos (4).

Cesación en el patronato por delito.—Este derecho puede perderse mediante delito por —

Muerte ó mutilación del rector ú otro clérigo de la iglesia de patronato, hecha por el patrono, siendo indiferente que la ejecute por sí ó por medio de otra persona (5).

Venta ó traslación simoniaca del derecho de patronato (6).

Percepción ilícita de los frutos del beneficio, ó usurpación temeraria de sus bienes (7).

(1) Cap. V, tít. VIII, lib. III *Decret.*

(2) Cap. III, XII, XXII y XXVII, tít. XXXVIII, lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ., in lib. III Decret., tít. XXXVIII, pár. 6.º, núm. 226.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., ibid., núm. 209.*

(5) Cap. XI, tít. XXXVII, lib. V *Decret.*

(6) Cap. VI, tít. XXXVIII, lib. III *Decret.*—*Concil. Trid., sesión 25, capítulo IX De Reformat.*

(7) *Concil. Trid., sesión 25, cap. IX De Reformat.*

Heresía, apostasía y cisma, comprendiéndose también á los fautores de los herejes.

Crimen de lesa majestad ú otro delito enorme, que lleve aneja la confiscación de los bienes á que vá unido accesoriamen- te el derecho de patronato (1).

Cesación en el patronato por otras causas.—Tam- bién se pierde el derecho de patronato sin mediar delito; lo cual tiene lugar en los casos siguientes:

a) Voluntaria cesión hecha al obispo ó iglesia, á fin de que quede libre (2), porque se halla principalmente establecido en favor del patrono y cada cual es libre de renunciar á este be- neficio.

b) Unión de la iglesia ó beneficio de patronato con otra igle- sia, beneficio ó monasterio, si lo consiente el patrono sin hacer reserva del derecho de patronato (3).

c) No uso; lo cual tiene lugar cuando el patrono dejó de presentar por tiempo de cuarenta años para la iglesia vacante, sin mediar impedimento legítimo para ello, y entre tanto el or- dinario proveyó dicha iglesia ó beneficio por dos veces al ménos como de libre colación (4).

d) Destrucción total de la iglesia ó pérdida de su dote (5), en cuyos casos queda extinguido el derecho de patronato, siempre que procediese de construcción ó dotación, ó sea de la cosa que ha dejado de existir; porque si la iglesia se destruye y el patro- nato procede de fundación ó dotación, entónces este derecho se conserva, y como consecuencia el patronato corresponderá á és- te y al que reconstruya la iglesia (6).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXXVIII, párrafo 7.º, núm. 262.

(2) Cap. únic., tit. XIX, lib. III *sext. Decret.*

(3) Cap. VII, tit. XXIV, lib. III *Decret.*

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. III, pár. 36.

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 4.ª, cap. VIII.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXXVIII, párrafo 2.º, núm. 61 y sig.

e) Extinción de la familia que era exclusivamente llamada por la fundación á ejercer este derecho (1).

f) Supresión de este derecho por el Sumo Pontífice.

Institución autorizable, y á quién corresponde.

—Se entiende por institución autorizable: *La autoridad ó comisión dada por quien corresponde, para regir los fieles de una parroquia.*

Esta corresponde al obispo por derecho común, y si la provisión pertenece al obispo *pleno jure*, entónces la institución colativa del título, y la autorizable, ó sea la cura de almas, única en que tiene lugar, se confiere en un solo acto.

La institución autorizable corresponde también —

a) Al capítulo ó cabildo, *sede vacante*, porque es acto de jurisdicción.

b) Al vicario capitular por la misma razón.

c) A los preladados con jurisdicción cuasi episcopal *vere nullius*.

d) A otros preladados, que no tienen jurisdicción cuasi episcopal, mediante privilegio apostólico.

Examen que ha de preceder.—Antes de concederse dicha institución por quien corresponda, ha de preceder el examen del presentado, que se hará por el ordinario (2); á ménos que se trate de los presentados por las universidades ó colegios de estudios generales (3).

Si la jurisdicción autorizable podrá adquirirse por costumbre.—La jurisdicción autorizable en los beneficios curados no exentos de la jurisdicción ordinaria, no puede adquirirse por costumbre ó prescripción inmemorial con arreglo al derecho vigente (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XXXVIII, pár. 7.º, núm. 261.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. VII, párrafo 2.º, núm. 46.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 7.ª, cap. XIII *De Reformat.*

(4) *Concil. Trid.*, sesión 7.ª, cap. XIII *De Reformat.*

Institución corporal, y si podrá tomarse por propia autoridad.—Se llama así: *La toma de posesión de la Iglesia ó beneficio*.

El clérigo que ha obtenido un beneficio por la institución canónica, sin signo que denote investidura como la entrega de birrete, anillo, llaves, etc., no puede tomar la posesión del expresado beneficio por propia autoridad, y si lo hace con violencia, como arrojando de la Iglesia ó beneficio al que lo posee pierde *ipso jure* el título del beneficio (1).

En el caso de tomar posesión del beneficio por autoridad propia, sin que medie violencia, entónces no pierde el beneficio, pero quedará sujeto á la pena que se considere justa, según el prudente arbitrio del juez (2).

Quién ha de darla, y en qué forma.—Es necesario que dicha posesión ó investidura se dé por la autoridad eclesiástica (3) competente, como el obispo.

Los legos no pueden en nombre propio dar la posesión del beneficio, porque la institución corporal es un derecho espiritual (4), y los clérigos que reciban la investidura de manos de aquellos incurrn en excomunión y otras penas expresadas en el derecho (5).

Para proceder al acto de la posesión, habrá de citarse al que se halla desempeñando el beneficio, y se observarán las ritualidades admitidas según el uso ó costumbre de cada iglesia (6).

Observaciones.—Respecto á la posesión del beneficio habrá de tenerse presente:

a) Que el clérigo puede tomar posesión del beneficio por medio de procurador con poder especial.

(1) Cap. XVIII, tít. IV lib. III *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. VII, párrafo 3.^o, núm. 65.

(3) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 5.^a, pár. 36.

(4) Cap. IX, tít. XXIII, lib. I *Decret.*

(5) C. XII, XIV, XVI, XVII, XX y XXIII, quæst. 7.^a, causa 16.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibíd., núm. 49 y sig.

b) Que una vez tomada posesión del beneficio, se adquieren todos los derechos correspondientes al mismo (1).

c) La posesión del beneficio produce casi los mismos efectos que la posesión de otras cosas ó derechos; así que la posesión de buena fe, aun con título colorado (2) y sin simonía por tres años, constituye verdadero título en el fuero externo é interno, según la regla 36 de cancelaría (3).

d) La persona que posee pacíficamente y de buena fe un beneficio por espacio de un año, no puede ser removida sino mediante sentencia en el juicio correspondiente á ménos que se alegue causa determinada y evidente de la nulidad (4).

Disciplina particular de España.—El Concilio II de Braga (5) hace ya mención de este derecho y el Concilio IV de Toledo habla de las atribuciones de los patronos (6).

Las leyes de partida (7) tratan extensamente del derecho de patronato y consignan la doctrina de las Decretales sobre esta materia.

La iglesia española ha seguido constantemente lo prescripto por el derecho general eclesiástico acerca de este punto desde un principio hasta el presente según aparece de los documentos citados, y de lo mandado por el santo Concilio de Trento, que fué admitido en España como ley del reino. Deben así mismo tenerse á la vista, las leyes 1.^a 2.^a y 3.^a tít. 20, lib. 1.^o de la novis. Recopilación—Artículos 26 y 27 del concordato de 1851—R. O. de 21 de junio de 1852—25 de noviembre de 1858—24 de octubre de 1861—15 de octubre de 1862—28 de mayo y 23 de octubre de 1864—artículo 17 del R. D. de 15 de febrero de 1867 (8).

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 26.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XIV, sect. 5.^a, pár. 39.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 59 y sig.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 61.

(5) *Canon* 6.^o

(6) *Cánones* 33 y 38.

(7) Título 15 de la partida 1.^a

(8) Véase el apéndice n.^o 9.^o

CAPITULO VII.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIADOS, Y CESACIÓN EN LOS BENEFICIOS.

ARTÍCULO I.

DEL PECULIO DE LOS CLÉRIGOS.

Significado de la palabra peculio.—Como se ha tratado ya en otros lugares de esta obra de los derechos que van anejos á cada uno de los oficios eclesiásticos, me limito en este capítulo á señalar lo relativo á los bienes clericales, que las Decretales designan con el nombre de peculio de los clérigos, cuya palabra procede del derecho civil, y significa un pequeño patrimonio (*pusillam pecuniam vel patrimonium pusillum*). porque el siervo lo poseía en virtud de licencia de su señor (1).

Esta palabra se aplicó después á las cosas eclesiásticas, puesto que el clérigo no es señor de los bienes de donde procede el peculio.

Usos á que ha de destinarse el peculio de los clérigos.—Los bienes poseídos por los clérigos pueden ser: —*patrimoniales*—cuasi *patrimoniales*—y *beneficiales*; según se deja consignado en otro lugar de esta obra (2).

El clérigo tiene dominio en todos ellos; pero esto no obsta para que tenga obligación de emplear las rentas superfluas de los beneficios en cosas piadosas, sin que sobre este punto haya divergencia alguna entre los canonistas.

De dónde procede esta obligación.—Muchos escritores, principalmente antiguos (3) creen que esta obligación de los clérigos es de estricta justicia, quedando en su consecuencia

(1) DEVOT: *Inst. Canon.*, lib. II, tít. XVIII, pár. 1.º

(2) Lib. III, tít. V, cap. I, art. 3.º

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Ecdes. univ.*, tomo II, disert. 6.ª, cap. III.

obligados á la restitución, si emplean dichos bienes en usos profanos.

Otros muchos canonistas sostienen que este deber procede únicamente de la virtud de religión ó ley de misericordia y caridad (1), cuya opinión creo preferible, y por esto he manifestado que los clérigos tienen dominio en los expresados bienes (2), no quedando en su consecuencia obligados á la restitución de las rentas superfluas de los beneficios, si las disipan ó emplean en usos profanos (3), porque nadie está obligado á la restitución de una cosa, si no consta que es ajena. No podrá citarse dato alguno, del cual aparezca, que la voluntad de los fieles que dieron estos bienes, ó la de la Iglesia (4), ha sido, que los clérigos no adquieran el dominio de los expresados bienes.

Reglas que han de tenerse presentes.—El clérigo en el uso de los bienes beneficiosales podrá atenerse á las reglas siguientes:

a) Deducirá los bienes patrimoniales y cuasi patrimoniales, pudiendo por este procedimiento llegar á conocer casi exactamente los frutos líquidos del beneficio, después de deducidos los gastos y daños sufridos (5).

b) Deducirá de estos bienes líquidos del beneficio la cantidad necesaria para su honesta sustentación, según la costumbre del país y práctica de personas timoratas, puesto que no puede señalarse una regla fija é invariable (6).

c) Lo que sobre de los frutos beneficiosales después de dedu-

(1) *Praelect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 3.^a, sect. 4.^a, párr. 4.^o, núm. 614.

(2) Lib. III, tit. V, cap. II, art. 1.^o de esta obra.

(3) BENEDICTO XIV: *De Synodo dioces.*, lib. VII, cap. II.

(4) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon.*, lib. II, tit. I, tract. 2.^o, disert. 2.^a, cap. III, art. 3.^o, párr. 1.^o

(5) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon.*, ibid.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XXV, párrafo 2.^o, núm. 19 y sig.

cidos los expresados gastos, se llama supérfluo, y habrá de em-
plarlo en socorrer á los pobres, bajo cuya palabra se compren-
den también las personas, que no tienen lo necesario para vivir
con arreglo á su estado.

d) Como consecuencia de la doctrina indicada en el caso
anterior, puede pagar con dichos bienes sus deudas y las de sus
parientes, aún cuando se hayan contraído por un fin profano, si
no tienen bienes propios para atender á esta necesidad (1).

e) Puede suministrar á sus parientes ó familias lo necesario
para vivir con decencia—dar carrera ú oficio á sus hermanos ó
consanguíneos—dotar doncellas para que puedan contraer ma-
trimonio con arreglo á su clase.

Si el clérigo podrá disponer por testamento de los bienes beneficiales.—Los antiguos cánones prohibían á los clérigos testar del peculio eclesiástico, y estos bienes se llamaron espolios, porque los clérigos, á ejemplo de los mon-
jes, se despojaban de ellos en los últimos momentos de su vida, á fin de que la iglesia no sufriera detrimento (2); pero se intro-
dujo insensiblemente la costumbre de que pudiesen disponer por testamento de estos bienes, con el objeto de evitar las cues-
tiones y pleitos que surgían al tratar de discernir los bienes be-
neficiales de los patrimoniales, etc.

Disciplina particular de España.—El concilio cele-
brado en Tarragona el año 516 (3), el concilio celebrado en
Lérida el año 548 (4), el concilio IX (5) y el XVII de Tole-
do (6) disponen lo mismo que dejamos consignado con arreglo
á la legislación general de la Iglesia acerca del peculio de los
clérigos.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, ibid., núm. 24.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon*, lib. II, tit. XVIII, párr. 4.º y 5.º

(3) Canon 12.

(4) Canon 16.

(5) Canon 6.º y 7.º

(6) Canon 16.

Esto mismo se halla consignado en varias disposiciones civiles (1), y aunque se introdujo la costumbre de que los clérigos pudieran disponer libremente de los bienes beneficios, sucediéndoles en ellos por testamento ó *ab intestato* sus herederos, se conservó la antigua disciplina respecto á los obispos, hasta que por el concordato de 1851 se les deja en libertad para disponer libremente de estos bienes, sucediéndoles *ab intestato* sus herederos legítimos (2), á excepción de los ornamentos y pontificales, que se considerarán como propiedad de la mitra (3) haciéndose acerca de este punto algunas aclaraciones en la R. O. de 28 de mayo de 1864 dada de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad.

ARTÍCULO II.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIADOS Y MODOS

DE PERDERSE LOS BENEFICIOS.

Obligaciones de los beneficiados.—Se ha tratado en sus respectivos lugares (4) de las obligaciones anejas á cada uno de los oficios.

Modos de perderse los beneficios.— Los beneficios eclesiásticos pueden perderse por=

Voluntad de sus poseedores mediante renuncia, permuta ó traslación.

Contra su voluntad, como en los casos de muerte ó delito (5).

(1) Fuero Juzgo, ley 12, tít. II, lib. IV—ley 18, tít. V, partida 1.ª—ley 12, tít. XX, lib. X de la *novis. Recop.*—Art. 22 del concordato de 1737—concordato de 1753—Título XIII, lib. II de la *novis. Recop.*

(2) Artículo 31.

(3) SCAVINI: *Theolog. mor.* edit. 13, lib. IV, apend. 56.

(4) Libro II de esta obra.

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. VIII, párr. 2.º

§ 1.º

Renuncia de los beneficios.

Renuncia y sus especies.—La renuncia en un sentido lato es: *La espontánea ó libre abdicación de un derecho propio.*

En su sentido específico y con relación á los beneficios puede definirse: *La dimisión espontánea y libre del propio beneficio, hecha ante el legítimo superior, mediante justa causa aceptada por éste* (1).

La renuncia puede ser=*tácita y expresa.*

Se entiende por renuncia tácita, *la dimisión del beneficio, que se hace mediante algún hecho del cual se desprende por disposición del derecho* (2), como si el beneficiado contrae matrimonio (3) ingresa en religión (4), milicia (5) ó recibe otro beneficio incompatible (6).

Se entiende por renuncia expresa, *la dimisión libre del beneficio, hecha de palabra ó por escrito en la forma prevenida por la ley.*

Clases de renuncia expresa.—La renuncia expresa puede ser—*pura ó simple—y condicional.*

Se llama renuncia pura, *la renuncia expresa del beneficio, hecha sin pacto ni condición alguna.*

Esta renuncia deja en libertad al superior para conferir el beneficio, á quien tenga por conveniente.

Se llama renuncia condicional, *la renuncia expresa del beneficio, hecha bajo pacto ó condición.*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I Decret., tít. IX, pár. 1.º

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 28.

(3) Cap. I y III, tít. III, lib. III Decret.

(4) Cap. IV, tít. XIV, lib. III sext. Decret.

(5) Cap. XVII, tít. V, lib. III Decret.

(6) Cap. XXVIII, tít. V, lib. III Decret.—Cap. IV, tít. II, lib. III Extravag.

Diferentes nombres de la renuncia condicional y modos de verificarse.—La renuncia condicional se conoce con el nombre de renuncia *sub modo*, cuando aquella se verifica con pacto de reservarse una pensión.

Se conoce con el nombre de *resignación*, si se hace en favor de una persona determinada (1).

La renuncia condicional puede también verificarse de alguno de los modos siguientes—

Reservato regressu, ó sea de volver á la posesión del beneficio en el caso de que fallezca ántes de tomar posesión aquél en cuyo favor se hace la resignación.

Ingressu, cuando uno que no ha tomado posesión del beneficio para el cual fué nombrado, lo resigna en favor de un tercero con la condición de que, muerto éste, pueda por autoridad propia tomar posesión del beneficio resignado.

Accessu, cuando el beneficio destinado á un joven incapaz de obtenerlo por falta de edad, se confiere á otro con la condición de que aquel joven pueda ocuparlo por autoridad propia cuando cumpla la edad necesaria para obtenerlo.

La renuncia condicional hecha de alguno de los modos indicados es nula (2).

La renuncia condicional puede también tener lugar *ex causa permutationis*, ó sea cuando uno renuncia el beneficio bajo la condición de que se le confiera otro beneficio (3).

Si los beneficiados pueden renunciar sus beneficios.—Todos los beneficios son renunciabiles según se dijo en otro lugar de esta obra (4), porque todos pueden renunciar á su derecho aún en las cosas espirituales; pero debe advertirse que las renunciaciones de beneficios simples se admiten más fácilmente que las de iglesias parroquiales: habiendo aún mayor dificultad

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 28.

(2) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. VII *De Reformat.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tít. IX, pár. 1.^o

(4) Lib. II, tít. II, cap. IV, art. 1.^o

respecto á los beneficios que llevan aneja jurisdicción ordinaria y general; como los abades y prelados regulares.

Las renunciaciones de obispados ofrecen mayores dificultades para su admisión, que las abadías y prelaturas regulares (1)

Beneficios que no pueden renunciarse.—La regla general de que todos los beneficios pueden renunciarse, tiene las excepciones siguientes—

a) No puede renunciarse el beneficio que ha servido de título de ordenación, mientras no se sustituya con otro congruo (2).

b) Los beneficios unidos á monasterios, cabildos ó seminarios no pueden renunciarse, hallándose en igual caso los beneficios litigiosos respecto á otra persona que no sea el colitigante (3).

c) Tampoco pueden renunciarse los beneficios obtenidos por intrusión sin título canónico, así como los que se hayan dejado de poseer *ipso jure* ó por sentencia judicial, porque sería lo mismo que renunciar á un derecho que no se tiene (4).

Personas que no pueden renunciar sus beneficios.—Es regla general que todos los clérigos pueden renunciar sus oficios ó beneficios eclesiásticos, á ménos que exista una disposición especial del derecho, que se lo prohíba, hallándose en este caso—

a) Los furiosos y dementes, porque se hallan privados del juicio y consentimiento necesarios para todo acto legítimo.

b) Los clérigos ordenados *in sacris*, si no tienen otro título de sustentación.

c) Los criminales que por razón del delito han perdido el beneficio *ipso jure*.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tit. IX, pár. 2.º núm. 6.º

(2) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. II *De Reformat.*

(3) Cap. II, tit. VIII, lib. II *sext. Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.*

d) Los menores de catorce años no pueden renunciar el beneficio obtenido mediante dispensa, sin intervención del tutor, conocimiento de causa y licencia del superior (1).

e) Los novicios ántes de los dos últimos meses del noviciado, no surtiendo tampoco efecto la renuncia del beneficio hecha durante estos dos meses, hasta que se verifique la profesión.

f) Es nula la renuncia hecha por los enfermos, si no viven veinte días después de ser aceptada por el superior (2).

Causas justas para la renuncia de obispados.—

Los beneficios eclesiásticos son oficios ó cargos públicos, que el clérigo no puede dimitir á su arbitrio, porque esto cedería en daño de la Iglesia: es necesario al efecto, que medie una justa causa, proporcionada á la importancia del beneficio.

Las causas para la renuncia de obispados se hallan comprendidas en estos versículos:

Debilis, ignarus, malè conscius, irregularis, quem mala plebs odit, dans scandala sedere possit (3).

Conscientia criminis.—Se indica con estas palabras el delito que impide el desempeño del cargo aun después de haber hecho penitencia, como simonía en la elección, herejía, asesinato, falsificación de letras apostólicas, ú otro delito que cause infamia (4).

Debilitas corporis.—Débilidad corporal procedente de enfermedad ó senectud, que inhabilita para desempeñar el oficio pastoral (5); la cual es motivo bastante para renunciar en manos del Papa, pero no se le obliga por ella á hacer esta renuncia; así que puede conservar el obispado y pedir un coadjutor, á quien se asignará cierta porción de frutos de las rentas episcopales (6).

(1) Cap. III, tít. I, lib. II *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGÖRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tít. IX, pár. 3.^o

(3) Cap. X, tít. IX, lib. I *Decret.*

(4) Cap. X, pár. 2.^o tít. IX, lib. I *Decret.*

(5) Cap. X, pár. 3.^o, tít. IX, lib. I *Decret.*

(6) Cap. V, tít. VI, lib. III *Decret.*

Defectus scientiæ.—Es de desear en el obispo una ciencia eminente; pero basta un regular conocimiento de ella para desempeñar su cargo, porque lo imperfecto de la ciencia puede suplirlo la perfección de la caridad; así que el defecto de ciencia, como causa de renuncia, consiste en que el obispo ignore aquellas cosas que son necesarias para regir convenientemente su iglesia (1).

Malitia plebis.—Esta causa existe cuando los fieles de la diócesis desatienden por completo la voz de su pastor, hasta el punto de bastar al efecto que prescriba una cosa en cumplimiento de sus deberes episcopales, para que aquéllos la rechacen irrevocablemente sin otro motivo que el de ser mandato del obispo, á quien desprecian ó detestan sin causa ó razón alguna (2).

Irregularitas personæ.—Esto no tiene lugar en las irregularidades que se dispensan fácilmente, como el caso de ilegitimidad oculta, sinó en aquellas otras que el Papa no dispensa de ordinario, como si el promovido al episcopado es bigamo, reo de homicidio voluntario cometido en público, ó hijo *ex damnato coitu* (3).

Grave scandalum.—El obispo no puede renunciar por motivo de un escándalo farisaico ó que proceda de malicia por parte de sus diocesanos; es causa legítima de renuncia cuando el escándalo procede de ignorancia ó flaqueza, como si el pueblo se escandaliza de los gestos ó mera presencia de su obispo (4).

Si tienen lugar en la renuncia de otros beneficios.—La renuncia de otras dignidades eclesiásticas, curatos y beneficios simples puede hacerse, mediante alguna de las causas señaladas para la renuncia del episcopado.

(1) Cap. X, pár. 4.º, tít. IX, lib. 1 *Decret.*

(2) Cap. X, pár. 5.º, tít. IX, lib. 1 *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. 1 *Decret.*, tít. IX, pár. 5.º, núm. 34.

(4) Cap. X, pár. 6.º, tít. IX, lib. 1 *Decret.*

Otras causas para la renuncia de los demás beneficios.—Los demás beneficios eclesiásticos podrán también renunciarse, mediante alguna de las causas siguientes=

a) Una grave enfermedad, como lepra, parálisis ú otra enfermedad contagiosa.

b) Vicio corporal, como si es ciego, cojo, mudo, sordo, deforme.

c) Si es reo de un crimen, por el cual puede ser privado del beneficio, como simonía, homicidio, adulterio, concubinato, sodomía, perjurio.

d) Si ha incurrido en censura eclesiástica ó no puede servir el beneficio, como en el caso de destierro.

e) Si tiene dos beneficios incompatibles y basta uno de ellos para su cógrua sustentación.

f) Si va á ingresar en religión ó contraer matrimonio (1).

Forma en que ha de hacerse la renuncia.—La renuncia de beneficios ha de hacerse con los requisitos prescritos para su legitimidad, y al efecto es necesario=

I. Libertad ó que se haga libremente, sin fuerza, miedo grave ó dolo.

II. Que sea pura y absoluta, sin que medie dinero ó precio, condición ó pacto simoniaco.

III. Que medie consentimiento del patrono ó electores según los casos.

IV. Consentimiento del superior.

V. Que se haga con palabras claras, expresivas y por escrito.

VI. Si se admite por el superior, habrá de publicarse en la iglesia que radica el beneficio (2).

VII. Si la renuncia se hace por medio de procurador, es necesario que otorgue poder especial en su favor (3).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I Decret., tít. IX, pár. 5.º, número 37.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I Decret., tít. IX, pár. 6.º, núm. 40.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 41 y sig.

Consentimiento del superior.—La renuncia de beneficios eclesiásticos no puede llevarse á efecto, sinó mediante consentimiento y aceptación del obispo ú ordinario (1), porque *omnis res per quascumque causas nascitur per easdem dissolvitur* (2); debiendo tenerse presente—

I. El Sumo Pontífice, como suprema autoridad eclesiástica puede admitir la renuncia de cualquiera clase de beneficios (3).

II. Los legados *a latere* pueden admitir la renuncia en la provincia de su jurisdicción, con arreglo al derecho comun, si se trata de renuncia simple.

III. Los obispos respecto á las renunciaciones absolutas ó simples de los beneficios de sus respectivas diócesis, siempre que no sean reservados ó se hallen exentos de su jurisdicción.

La renuncia hecha ante el obispo con todas las formalidades de ley y mediante causa justa, habrá de admitirse dentro de un mes, y acto seguido se proveerá el beneficio, porque en otro caso pasa este derecho al Sumo Pontífice, según declaró Gregorio XIII en su constitución *Humano vix iudicio* (4).

Debe también advertirse que el obispo no puede conferir el beneficio vacante por renuncia á sus parientes ó familiares, ni á los parientes del que ha hecho la renuncia, según la constitución *Quanta Ecclesie Dei* de S. Pío V (5).

IV. El cabildo, *sede vacante*, puede admitir las renunciaciones simples de los beneficios, cuya provisión corresponde al obispo (6).

Esta misma facultad pasa al vicario capitular.

(1) C. XIX, XXIII y XXIV, quæst. 1.^a, causa 7.^a—Cap. IV, tít. IX, lib. I *Decret.*

(2) *Regula* 1.^a, tit. XLI, lib. V. *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ.*, ibid., pár. 4.^o, núm. 22.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tít. VIII, sect. 1.^a, pár. 8.^o

(5) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 28.—BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XIII, c. p. XXIV, núm. 3.^o

(6) Cap. XIV, tít. XXXIII, lib. I *Decret.*

Ante quién hañ de hacerse las renunciias de beneficios mayores y las condicionales con reserva ó en favor.—La renuncia de obispados y otros beneficios mayores ha de hacerse ante el Papa (1), lo mismo que las renunciias en favor de tercera persona ó con reserva de pensión en cualquiera clase de beneficios eclesiásticos (2).

La renuncia con reserva de *regressus*, *ingressus* y *accessus* sólo puede admitirse por el Sumo Pontífice en virtud de su plenitud de potestad, porque se hallan prohibidas por el Concilio de Trento (3).

Efectos de la renuncia.—La persona que ha renunciado el beneficio pura y simplemente pierde en el acto de ser admitida por el superior, todo derecho en el beneficio (4), no pudiendo en su consecuencia percibir los frutos; ni ejercer ningún otro derecho de los que iban anejos al título benefical; pero si la renuncia fué condicional, entónces conserva el título y posesión del beneficio hasta que se cumplan las condiciones bajo las cuales se hizo la renuncia (5).

Disciplina particular de España.—Las disposiciones generales acerca de las renunciias de beneficios, que se dejan señaladas, tienen completa aplicación á la iglesia de España y solo debe advertirse, que ha de contarse con el consentimiento de la corona en la renuncia de beneficios mayores y menores, cuya provisión ó presentación corresponde al rey en virtud del patronato. A este efecto habrán de tenerse presentes *la ley 1.^a, tit. XXII, lib. I de la novis. Recopil.*

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 28.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tit. IX, pár. 4.^o, núm. 23 y sig.

(3) Sesión 25, cap. VII *De Reformat.*

(4) Cap. III y VI, tit. IX, lib. I *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.*, pár. 7.^o, núm. 48.

§ II.

Permuta de beneficios.

Permuta de beneficios, y causas en que ha de fundarse.—La permuta de beneficios es una especie de renuncia condicional, y puede definirse: *La mútua renuncia de beneficios bajo la condición de que cada uno de los renunciantes obtenga el beneficio del otro* (1).

Es regla general que todos los beneficios pueden permutarse (2); pero es necesario que medie justa causa de necesidad ó utilidad (3), de la Iglesia, no bastando la utilidad y aun necesidad de los que tratan de permutar; porque se requiere siempre y en todo caso que redunde, al ménos indirectamente, en bien ó provecho de la Iglesia, como en el caso de un párroco ú otro beneficiado á quien perjudica el clima del país en donde radica su beneficio ó parroquia.

La permuta tiene también lugar cuando el beneficiado es odiado del pueblo sin esperanza de reconciliación, ó ignora el idioma vulgar del país (4).

Necesidad de que la autoridad eclesiástica intervenga en este acto.—Es de necesidad la intervención de la autoridad en esta materia, porque los beneficios eclesiásticos no pueden obtenerse lícitamente sin la institución canónica (5), ni los clérigos pueden disponer libremente de ellos.

Además, la Iglesia detesta toda clase de pacto sobre los

(1) DEVOTI: *Inst. Canon*, lib. I, tit. VIII, sect. 3.^a, pár. 16.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XIX, pár. 3.^o, núm. 44 y sig.

(3) Cap. V, tit. XIX, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tit. XIX, párrafo 3.^o, núm. 76.

(5) Reg. 1.^a, tit. XII, lib. V *sext. Decret.*

beneficios (1); y la permuta de éstos sin autoridad del superior es un verdadero pacto, y por consiguiente nula (2).

Los clérigos que desean permutar, pueden desde luego tratar entre sí sobre este asunto, ántes de acudir al superior, puesto que es el medio indispensable para solicitar de aquél la permuta.

En quién radica.—Las autoridades que pueden entender y conceder la permuta de beneficios son—

a) El Sumo Pontifice como autoridad suprema de la Iglesia en todos los beneficios.

b) El obispo propio del territorio en que radica el beneficio (3); de manera que si los beneficios, que tratan de permutarse, se hallan en dos diócesis diversas, habrán de intervenir los dos obispos, en cuyo caso uno de ellos puede autorizar al otro para que entienda en el asunto, á fin de que se lleve á efecto más fácilmente (4).

c) El cabildo, *sede vacante*, respecto á los beneficios de su provisión ó de colación suya y del obispo.

d) Los prelados *vere nullius*, en los beneficios de su jurisdicción.

Observaciones.—El obispo ú otro prelado á quien corresponda admitir las permutas de beneficios, no puede llevarla á efecto ni entender en ella, si el beneficio no se halla en su diócesis, áun cuando le corresponda la provisión del mismo (5), siendo necesario de su parte en los casos de corresponder á él la concesión de la permuta—

a) Que después de conocer la existencia de causa justa, ha de obtener el consentimiento de aquellos á quienes pertenece

(1) Cap. V y VIII, tít. XXXV, lib. I *Decret.*

(2) Cap. VII, tít. XIX, lib. III *Decret.*

(3) Cap. V, tít. XIX, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III *Decret.*, tít. XIX, pár. 3.º, núm. 65.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 70.

la presentación ó nombramiento de los beneficios que se tratan de permutar.

b) Si los obispos quieren permutar los beneficios, que poseen en sus diócesis por concesión apostólica, habrán de acudir al metropolitano para ello, como superior inmediato.

c) El obispo puede entender únicamente en las permutas que tratan de hacerse entre dos, porque si son triangulares ó cuadrangulares, sólo el Papa puede concederlas (1).

d) Los beneficios unidos á otra iglesia ó beneficio, monasterio ó reservados, litigiosos, ó en los que hay sólo derecho *ad rem* ó personal, mediante presentación, no pueden permutarse (2).

e) Los beneficios no pueden permutarse con una pensión temporal ni aun con licencia del Papa, porque es simonía; pero si la pensión es eclesiástica, podrá admitirse aun por el obispo la permuta de ella por un beneficio (3).

f) Los beneficios desiguales entre sí en lo temporal, como si uno tiene rentas superiores al otro, ó en lo espiritual, como si uno es dignidad ó curato y el otro es beneficio simple ó de inferior categoría, pueden desde luego permutarse.

g) Los beneficios desiguales en lo espiritual no pueden compensarse en la permuta con dinero ni otra cosa temporal; pero si la desigualdad entre ellos es en lo temporal, podrá tener lugar dicha compensación con autorización y licencia del Sumo Pontífice (4).

h) Es nula la permuta hecha en enfermedad ó sana salud; si se verifica la muerte de uno de los permutantes antes de los

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I Decret., tit. IX, pár. 4.º, núm. 26 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XIX, párrafo 3.º, núm. 46 y sig.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 49 y sig.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tit. XIX, párrafo 3.º, núm. 56 y sig.

veinte días contados desde que se llevó á efecto (1), hallándose en igual caso la permuta hecha por un anciano de un beneficio pingüe por otro de cortas rentas, que posee un consanguíneo suyo ó del obispo (2).

Disciplina particular de España.—Las disposiciones generales de la iglesia sobre permutas de beneficios son en un todo aplicables á España; pero además se necesita la Real licencia en los beneficios de Real patronato; á cuyo efecto habrá de tenerse á la vista la *nota 17, tit. XVIII, lib. I de la novis. Recopilación.*

§ 5.º

Traslación de los beneficiados.

Traslación y beneficios en que puede tener lugar.—La traslación es otro modo de perder los beneficios, ó de quedar éstos vacantes, y puede definirse: *El tránsito de una iglesia ó beneficio á otra iglesia ó beneficio, mediante causa justa aprobada por la autoridad competente.*

Los obispos y todos los demás beneficiados pueden trasladarse de una iglesia ó beneficio á otra iglesia ó beneficio (3), siempre que medie justa causa conocida y aprobada por el superior; así que esta traslación puede hacerse á otras iglesias mayores, iguales ó inferiores, por más que se hallen pocos que deseen trasladarse de un arzobispado á un obispado, y haya en esta concesión mayor dificultad, porque se presume en quien lo solicita avaricia ú otro fin no bueno, y de ningún modo mayor fruto ó utilidad espiritual (4).

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon*, lib. III, cap. II, pár. 29.

(2) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XIII, cap. XXIV, núm. 10.

(3) Cap. III y IV, tit. V, lib. I *Decret.*—Cap. VII, tit. IV, lib. I *Decret.*—Cap. XXII, tit. VI, lib. I *Decret.*—Cap. V, tit. XIX, lib. III *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tit. VII, núm. 1.º

Causas justas para la traslación.—La * unión del obispo con su iglesia se considera como matrimonio espiritual que existe entre aquél y ésta (1); así que los cánones antiguos reprueban las traslaciones de los obispos, como un adulterio espiritual, si se verifican sin causa justa (2). Esta existe=

a) Cuando media necesidad ó utilidad de la iglesia (3), como si el obispo ú otro beneficiado sufren persecución (4), ó son odia dos del pueblo ó diócesis respectiva.

b) Si el clima ú otra circunstancia de localidad perjudica notablemente su salud.

c) Si pueden prestar mayores servicios en otra iglesia ó be neficio (5).

Autoridad que ha de concederla.—Los obispos no pueden trasladarse á otras iglesias sin licencia y consentimiento del Sumo Pontífice (6), debiendo intervenir en España la corona para llevar á efecto la traslación con arreglo á la ley 11, tit. XVII, núm. 15 de la ley 12, tit. XVIII, lib. 1 de la novis. Recop.

El obispo que se traslada á otra iglesia por autoridad ó temeridad propia pierde las dos (7); y si el Sumo Pontífice autoriza á un obispo para trasladarse á otra iglesia mayor, no puede éste hacerlo á iglesia igual ó menor en virtud de aquel permiso (8).

La licencia de la Santa Sede no es necesaria en el caso de que uno sea tan solo electo y no confirmado para determinada iglesia, porque entonces no media aún vínculo alguno entre él y su iglesia (9).

(1) Cap. IV, tit. VII, lib. I *Decret.*

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. I, tit. VIII, sect. 2.^a, pár. 13.

(3) C. XXXIV y sig., quæst. 1.^a, causa 7.^a

(4) C. XLII y XLIV, quæst. 1.^a, causa 7.^a

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tit. VII, núm. 1.^o

(6) Cap. I y II, tit. VII, lib. I *Decret.*

(7) Cap. III, tit. VII, lib. I *Decret.*

(8) Cap. IV, tit. VII, lib. I *Decret.*

(9) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. II, cap. V, pár. 87.

Los prelados inferiores, que son exentos de la jurisdicción del obispo, necesitan también licencia de la Santa Sede para trasladarse á otra iglesia; la cual no es necesaria en los no exentos (1), ni en los demás beneficios; bastando para ello la autoridad y licencia del propio obispo (2), ó del cabildo *sede vacante*.

Consentimiento de los interesados.—La traslación de los beneficiados se hace ordinariamente por el superior, mediante consentimiento de los interesados; pero debe tenerse presente:

I. Que el Sumo Pontífice puede, mediante causa de necesidad ó utilidad, romper el vínculo espiritual entre el obispo y su iglesia, aún contra la voluntad de éste, á la manera que puede disolver el matrimonio *rato* y no consumado con causa justa, aunque se oponga uno de los cónyuges (3).

II. Que el Sumo Pontífice no puede llevar á efecto la traslación del obispo á otra diócesis sin su consentimiento, porque este es necesario para el valor del matrimonio espiritual y carnal (4); pero si el bien público de la Iglesia lo exige, entonces podrá obligarle á prestar su consentimiento aún por medio de penas, para que *ex nolente fiat volens* (5).

En la actualidad no se obliga á los obispos á trasladarse á otra iglesia contra su voluntad (6).

III. Que el obispo puede trasladar y disponer de los beneficiados, que desempeñan el cargo sin título perpetuo, y que pueden considerarse como meros administradores; pero no tiene esta facultad respecto á los párrocos con título inamovible; así que no puede trasladarlos contra su voluntad, á ménos que haya razones poderosas al efecto.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tit. VII, núm. 4.^o

(2) Cap. V, tit. XIX, lib. III *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 6.^o

(4) Cap. XXI, tit. VI, lib. I *Decret.*

(5) C. XXXV, quæst. 1.^a, causa 7.^a

(6) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocæs.*, lib. XIII, cap. XVI, núm. 13.

La traslación de los beneficiados no se verifica en la actualidad, sinó mediante su libre consentimiento, ó sin él por modo de pena impuesta judicialmente (1).

Efecto de la traslación de obispos.—La traslación de los obispos produce los efectos siguientes:

a) Rompe el vínculo espiritual que los unía á la primera iglesia (2).

b) Los une á la iglesia á que han sido trasladados, con igual vínculo que en la primera antes de su traslación.

c) La primera iglesia vaca *ipso jure* en el momento de ser confirmado en la segunda (3), siempre que haya consentido en la traslación y la haya aceptado.

d) El obispo trasladado no puede ejercer jurisdicción en la primera iglesia desde el momento en que tiene noticia cierta, siquiera sea privada, de haberse roto por la Santa Sede el vínculo que le unía con ella (4).

Disciplina particular de España acerca de este punto.—La Iglesia de España siguió constantemente la legislación general de la Iglesia en la materia, de que se trata y la bula citada de Urbano VIII ha estado generalmente en observancia hasta estos últimos tiempos.

En Diciembre de 1875 se acordó entre la Santa Sede y el Gobierno de S. M. C., que el obispo trasladado de una silla á otra no quedara desligado del vínculo que le unía á la primera iglesia y que por lo mismo continuase ejerciendo en ella la jurisdicción sin limitación alguna ó sea en igual forma que antes de ser preconizado para otra iglesia ú obispado, hasta tanto que el Nuncio de Su Santidad de acuerdo con el Ministro de Gracia y Justicia le comunicase el decreto consistorial de su promoción para la nueva silla y obispado.

(1) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. II, cap. V, pár. 87.

(2) Cap. II, tít. VII, lib. I *Decret.*—Cap. IV, tít. V, lib. I *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. I *Decret.*, tít. VIII, número 8.º

(4) *Const. Nobis nuper* dada por Urbano VIII en 29 de Marzo de 1625.

Esta disposición que pudo considerarse como transitoria y efecto de las circunstancias especiales propias de la época en que se dió, es de carácter permanente y aplicable á todos los casos de esta índole que ocurran en España, según declaró el Nuncio de Su Santidad en 8 de Abril de 1884, contestando á una consulta del cabildo catedral de Santander con motivo de un caso que allí tuvo lugar (1).

Efectos de la traslación en los demás beneficios.

—La traslación en los demás beneficios eclesiásticos surte los mismos efectos que se dejan indicados respecto á la traslación de obispos; pero no quedan *ipso jure* vacantes por traslación hasta que el beneficiado haya tomado quieta y pacífica posesión del nuevo beneficio.

§ 4.º

Cesación en los beneficios.

Diferentes modos de cesar en los beneficios.—

Los beneficios eclesiásticos tienen por su naturaleza el carácter de perpetuidad con relación al beneficiado y respecto á la autoridad superior eclesiástica de la Diócesis ó territorio.

Este principio general se modifica mediante causas legítimas para la pérdida de los beneficios, así que el beneficiado puede cesar en el beneficio—á *petición suya*—por *disposición del derecho*:

Cesa á petición suya por—*renuncia*—*permuta*—*traslación*—*jubilación*.

Cesa por disposición del derecho—*ipso jure*—ó por *sentencia judicial*.

Cesación en los Beneficios «ipso jure» por causa necesaria.—Los beneficios quedan *ipso jure* vacantes:

a) Por muerte del beneficiado, porque no ha lugar á la sucesión hereditaria (2).

(1) Véase el diario católico de Santander titulado *La Verdad* en su número de 16 de Abril de 1884.

(2) Cap. V, tít. XXXV, lib. I *Decret.*

b) Por delito enorme que lleva aneja dicha privación, como herejía (1), apostasía de la fé (2), simonía según las constituciones *Romanum Pontificem* de Pio IV, é *Intolerabilis* de San Pio V (3).

c) Percusión de cardenales y obispos (4).

d) Asesinato cometido por mandato de otro, ó ejecutado por medio de otro.

e) Homicidio ó mutilación del rector ú otro clérigo de la iglesia en que el homicida tiene beneficio (5).

f) Procuración de aborto *effectu subsecuto* (6).

g) Falsificación de letras apostólicas (7).

h) Duelo (8).

i) Injusta ocupación de los bienes de cualquiera iglesia ó lugar piadoso (9).

Cesación en los beneficios por sentencia judicial.

—Los beneficios se pierden también por delitos menos enormes, mediante sentencia judicial, como el delito de reincidencia después de las moniciones previas (10)—la no recepción dentro del año de los órdenes anejos á los beneficios (11), cuya pena se extiende á los canónigos de las iglesias catedrales y colegiadas (12)

(1) C. IX, tit. VII, lib. V *Decret.*—C. XXXVII, quest. 1.^a, causa 24.

(2) Cap. XIII, tit. II, lib. V *sext. Decret.*

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 30.

(4) Cap. V, tit. IX, lib. V *sext. Decret.*—Cap. I, tit. VIII, lib. V *Clementin.*

(5) Cap. I, pár. 2.^a, tit. IV, lib. V *sext. Decret.*—Cap. XII, título XXXVII, lib. V *Decret.*

(6) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 30.

(7) Cap. VII, tit. XX, lib. V *Decret.*

(8) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIX *De Reformat.*—Bulas *Ea que* de Pio IV é *Illius vices* de Clemente VIII.

(9) *Concil. Trid.*, sesión 22, cap. XI *De Reformat.*

(10) *Concil. Trid.*, ses. 6.^a, cap. I *De Reformat.*—Sesión 23, cap. I *De Reformat.*

(11) HUGUENIN: *Expositio meth Jur. Canon.*, pars special., lib. II, tit. I, tract. 2.^o, disert. 2.^a, cap. III, art. 4.^o, pár. 1.^o

(12) *Concil. Trid.*, sesión 22, cap. IV *De Reformat.*

--el no uso del traje clerical (1)—*concubinarií—fæneratores ebrietati, ludisve alearum dediti—satores rixarum, negotiatores—arma gestantes—incertis sedibus vacantes* (2), y otros muchos delitos que, á juicio prudente del obispo, deban ser castigados con la privación de beneficios (3).

Efectos distintos de la privación de beneficios ipso facto ó por sentencia judicial.—La privación *ipso jure* no necesita de la autoridad del juez ni sentencia condenatoria para perder el beneficio, que vaca desde el momento mismo de cometer el delito; así que la sentencia declaratoria del crimen que ordinariamente se exige en estos casos por equidad, se retrotrae al día en que se cometió el delito, porque el juez no impone propiamente la pena de privación sinó que se limita á declarar que el beneficiado, reo convicto ó confeso de tal crimen, perdió por aquel mismo hecho el beneficio.

La privación judicial no produce la vacante ó pérdida del beneficio, sinó mediante sentencia condenatoria, que haya pasado en autoridad de cosa juzgada (4).

Reglas que han de observarse en los beneficios vacantes.—Acerca de la administración espiritual y temporal de los beneficios, que han quedado vacantes, habrá de tenerse presente:

a) Que la administración de la diócesis *sede vacante* pasa al cabildo, según se deja manifestado en otro lugar de esta obra (5).

b) Que el obispo procede desde luego al nombramiento de administrador de la parroquia vacante con asignación de cierta porción de frutos (6).

(1) *Concil. Trid.*, sesión 14, cap. VI *De Reformat.*

(2) *VECCHIOTTE: Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 3.º

(3) *BERARDE: Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, dissert. 7.ª, cap. II.

(4) *VECCHIOTTE: Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 30.

(5) *Lib. II, tit. VI, cap. II, art. 2.º*

(6) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XVIII *De Reformat.*

c) Que el obispo trasladado percibe los frutos ó rentas de la primera iglesia hasta que se le dé conocimiento de su traslación.

d) Que los beneficiados menores perciben los frutos del primer título hasta que toman quieta y pacífica posesión del nuevo beneficio.

e) Que los frutos de los beneficios vacantes pertenecen á la Cámara Apostólica; pero esta regla general se halla anulada por los concordatos en casi todos los países, y sus rentas se emplean en utilidad de la iglesia.

Disciplina particular de España.—Está en un todo conforme con la disciplina general de la Iglesia y únicamente debe advertirse, que en los beneficios mayores y menores vacantes habrá de tenerse presente lo dispuesto en el concordato (1) de 1851 y demás disposiciones concordadas como el artículo 10 del Real decreto de 21 de Noviembre de 1851 que puede verse en el apéndice núm. 8.

CAPITULO VIII.

BENEFICIOS IMPROPIOS.

ARTICULO PRIMERO

DE LOS BENEFICIOS IMPROPIOS EN GENERAL.

Beneficios impropios, y sus diversas clases.—Se llaman así: *Los cargos eclesiásticos que no tienen la naturaleza y cualidades de los beneficios, aunque se asimilan á ellos.*

Estos beneficios ofrecen suma variedad, y son de tantas clases, cuantas son las formas que pueden modificar la simple naturaleza de los beneficios; así que unos son más impropios que

(1) Artículo 37.

otros, según que se conforman más ó ménos con las reglas ordinarias de los beneficios (1).

En este supuesto son beneficios impropios los siguientes:—*præstimonía*—*beneficios manuales*—*legados píos*—*patrimonios clericales*—*coadjutorías de beneficios*—*capellanías laicales*.

Se entiende por *præstimonía*, *ciertas porciones que se conceden á alguno, mediante una causa temporal y no perpétua, como por causa de estudios, pobreza ó milicia* (2).

Se entiende por *beneficios manuales*, *el derecho temporal á percibir ciertos bienes por el servicio ó cumplimiento de una carga espiritual*.

Se llaman *beneficios manuales*, porque se hallan *in alterius manu*, de tal modo que su poseedor puede ser privado de ellos á voluntad del que los concede.

Se entiende por *legados píos*, *cierta porción de bienes para una obra buena ó piadosa*.

Se entiende por *patrimonios clericales* *los bienes que se constituyen para título de ordenación á falta de otro título ordinario*.

Este título no se conoció en los primeros siglos (3); pero como ya se trató de él en otro lugar de esta obra (4), me remito á lo que se deja consignado.

Se entiende por *coadjutorías de beneficios*, *el derecho y la obligación de suplir las cargas de otro* (5).

Se entiende por *capellanías laicales*, *el derecho á percibir los frutos y la obligación de levantar las cargas impuestas por el fundador sin que haya intervenido la autoridad ordinaria en su erección, ni en la colación é institución*.

Todas estas clases se comprenden bajo el nombre de bene-

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, apéndice *De Benef. improp.*

(2) Cap. VIII, tit. VII, lib. III *sext. Decret.*

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, apend. *De Benef. improp.*

(4) Libro III, tit. I, cap. VI, art. 13.

(5) SCAVINI: *Theolog. moral. univ.*, tract. II, apéndice.

ficios impropios, porque carecen de perpetuidad é institución eclesiástica; cuyos requisitos son esenciales en los beneficios eclesiásticos, además del oficio ó cargo eclesiástico.

ARTÍCULO II.

DE LAS CAPELLANÍAS.

Capellanías, y razón de este nombre.—Se entiende por capellanía: *El derecho á percibir ciertos frutos con la obligación de levantar ó cumplir determinadas cargas espirituales.*

Se las dió este nombre, porque llevan aneja la obligación de celebrar el santo sacrificio de la Misa, ó de ejercer en días determinados, ciertos misterios en la capilla ó altar designado en la fundación (1).

Su origen.—Las corporaciones eclesiásticas, lo mismo que los particulares sin excluir á los legos, destinaron ciertos bienes bajo determinadas condiciones, para que se percibieran por un clérigo, con la obligación de levantar las cargas señaladas al efecto, tomando por tipo los beneficios; así que, el origen de las capellanías es posterior á la institución de los beneficios en la forma que tienen actualmente.

Sus especies.—Como las capellanías no revisten la misma forma, sino que todo depende en ellas de la voluntad, piedad y religión de sus fundadores, manifestada en las tablas de la fundación, de aquí que se asimilen más ó menos á los beneficios, toda vez que las disposiciones canónicas conceden á los fundadores una amplísima facultad para poner las cláusulas ó condiciones que les sugiera su piedad (2).

Esta variedad en las capellanías puede resumirse en las especies siguientes—*eclesiásticas*—*laicales*—*colativas*—*electivo-*

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, apend. *De Benef. improp.*

(2) C. XXX, quaest. 2.^a, causa 18.

colativas—familiares—de libre colación—de patronato activo—de patronato pasivo—residenciales—y no residenciales.

Las capellanías eclesiásticas se distinguen sólo en el nombre de los beneficios (1) simples y son: *Un título eclesiástico erigido por autoridad del obispo, de quien el clérigo nombrado recibe la colación é institución canónica.*

Se entiende por capellanías laicales: *Aquellas en que el fundador dispone todo lo concerniente á ellas, sin que se requiera la autoridad episcopal ú ordinaria en la creación ni en la colación é institución canónica de los capellanes, aun cuando se prescriba que éstos hayan de ser clérigos (2).*

Estas capellanías laicales se conocen también con el nombre de estipendios ó salarios de clérigos, memorias pías ó de difuntos, y se equiparan á los fideicomisos: así que los legos varones ó hembras y los párvulos pueden obtenerlas, si no se ordena otra cosa en la fundación, debiendo en todo caso cumplirse las cargas sagradas por medio de clérigos idóneos.

Se entiende por capellanías colativas, *las que reuniendo en sí las circunstancias necesarias en las capellanías eclesiásticas, se confieren libremente por el prelado ó persona idónea.*

Se llaman capellanías electivo-colativas, *las que el ordinario provee en personas idóneas presentadas por el patrono.*

Se llaman capellanías familiares, *las que han de conferirse con arreglo á las cláusulas de la fundación á personas de una familia determinada.*

Se llaman capellanías de libre colación, *las que se proveen libremente por quien tiene esta facultad, sin otra limitación que la prescrita por el derecho común.*

Se llaman capellanías de patronato activo, *aquellas en que el nombramiento de capellán pertenece á una persona ó familia determinada.*

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon*, lib. III, cap. II, pár. 11.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, apénd. *De Benef. improp.*

Se llaman capellanías de patronato pasivo, *aquellas en que uno tiene derecho á ser nombrado para determinada capellanía.*

Se llaman capellanías residenciales, *aquellas que obligan á su poseedor á la residencia.*

Se llaman capellanías no residenciales, *aquellas, que no obligan á su poseedor á la residencia en el lugar que están fundadas ó donde han de levantarse las cargas en ellas impuestas.*

Si se distinguen de los aniversarios ó legados píos.—Las capellanías convienen con los aniversarios y legados píos, en que unas y otros tienen por objeto el culto divino, remisión de pecados, sufragios por las almas de los difuntos ú otras obras piadosas; pero se distinguen aquéllas de éstos, en que las capellanías se constituyen con determinadas fincas ó rentas, segregadas del patrimonio ó herencia del fundador como dote de la misma capellanía asignada al capellán; lo cual no es de necesidad en los aniversarios, etc.; puesto que son una obligación personal impuesta á los herederos, aún con designación de rentas ó fincas determinadas.

Por esta razón, las capellanías se extinguen por la destrucción de las fincas ó cesación de las rentas vinculadas á ellas, lo cual no se verifica en los legados píos, aún cuando desaparezcan las rentas asignadas para su cumplimiento, porque se trata de una obligación personal impuesta por el testador, y la designación de rentas ó fincas en particular no lleva otro objeto que dar á conocer á los herederos su obligación personal, y que los predios señalados quedan obligados con hipoteca; así que éstos nunca se consideran separados de la herencia, y por esta razón pueden enajenarse sin solemnidad alguna (1).

Reglas para distinguir las capellanías eclesiásticas de las laicales.—Es de suma importancia práctica conocer las reglas por las cuales se distinguen unas y otras capellanías, y al efecto habrá de tenerse presente:

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, apéndice *De Benef. improp.*

a) Las capellanías que se erigen por decreto canónico y para cuya posesión se requiere colación é institución canónica, son eclesiásticas (1).

b) Es capellanía eclesiástica la que se erige con licencia y consentimiento del obispo, aun cuando el fundador disponga que su provisión, en caso de vacante, se haga por el patrono, sin que sea necesaria la institución canónica (2).

c) La capellanía concedida por el fundador á una iglesia ó rector de ella, corporación de clérigos regulares ó seculares, es considerada como eclesiástica (3).

d) La capellanía que el fundador concede á un hospital será eclesiástica ó laical, según la naturaleza de aquél.

e) Es capellanía laical la que se concede por el fundador á una corporación de legos (4).

f) Cuando ha desaparecido el testamento del fundador, y no existe documento alguno por el que pueda conocerse la naturaleza de una capellanía (5), entónces habrá de atenderse á su último estado; así que se considerará como eclesiástica, si el ordinario ha dado la colación é institución canónica por espacio de cuarenta años, y laical en el caso de que por igual tiempo se haya provisto por los patronos sin intervención del obispo (6).

g) Si el fundador se expresó con palabras ambiguas; de manera que es difícil conocer la naturaleza de la capellanía y por otra parte faltan documentos que aclaren esta duda, entónces habrá de considerarse como capellanía eclesiástica (7).

(1) *Acta ex iis decreta que apud S. Sedem geruntur*, tom. I, página 634.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo II, apéndice, *De Benef. improp.*

(3) C. VI, quæst. 1.^a, causa 10.—Cap. únic., pár. 1.^o, tít. XIX, lib. III *sext. Decret.*

(4) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

(5) *Acta ex iis decreta*, etc., tomo I, pág. 613 y sig.

(6) Cap. V, tít. IV, lib. III *sext. Decret.*—Cap. I, tít. XIII, lib. II *sext. Decret.*

(7) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 12.

Efectos distintos según la diversa naturaleza de las capellanías.—Las capellanías eclesiásticas son verdaderos beneficios, y por lo mismo se rigen por iguales reglas que aquéllos en lo relativo á la enajenación de sus bienes, presentaciones, instituciones, tiempo en que han de tener lugar y devoluciones, extinción del derecho de patronato, título de ordenación, edad y obligaciones personales del capellán, como rezo de las horas canónicas y residencia, aún cuando sus rentas sean ténues y el capellán pueda ser removido *ad nutum*, según las tablas de la fundación (1).

Las capellanías laicales se adquieren por el mero nombramiento y toma de posesión, sin que haya lugar á la devolución por trascurso de tiempo, en cuanto que no se halla éste determinado respecto al nombramiento, por más que pueda obligarse á que se cumplan las obras pías prescritas en la fundación, y que al efecto se nombre capellán dentro de cierto tiempo, según el prudente arbitrio del juez (2).

Los bienes y rentas de las capellanías laicales pueden poseerse y administrarse por los herederos del fundador; con facultad de celebrar pactos sobre los mismos y de trasmitir á otros el derecho de presentar sin necesidad del consentimiento pontificio ó del obispo; lo cual no puede tener lugar en las capellanías eclesiásticas (3).

Rara vez ocurre en las capellanías eclesiásticas, y es muy frecuente en las laicales, que el capellán pueda ser removido *ad nutum*, del que tiene el derecho de conferir las.

Las capellanías laicales no pagan el sinodático ó catedrático, ni quedan sujetas á los espolios y reservas.

Disciplina particular de España.—La bula *Apostolici ministerii* dictó disposiciones (4) muy oportunas acerca de las capellanías y beneficios incóngruos.

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. II, apénd. *De Benef. improp.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. III, cap. II, pár. 12.

(4) Número 8.^o

Antes de esta época (1) y en tiempos posteriores (2) se han dictado no pocas disposiciones sobre capellanías etc.; pero la legislación vigente en esta materia se halla consignada en el convenio-ley dado con acuerdo de la Santa Sede, en 24 de junio de 1867 (3) y en la instrucción de 25 de junio de dicho año, debiéndose atener á sus disposiciones en toda esta complicada materia (4).

(1) Ley 1.^a, 2.^a y 6.^a, tít. XII—ley 1.^a, 2.^a, 4.^a, 5.^a y 12, tít. XVI, lib. I de la *novis. Recop.*

(2) Ley de 11 de octubre de 1820—ley de 6 de junio de 1835—ley de 19 de agosto de 1841—Real decreto de 30 de abril de 1852—Real decreto de 6 de febrero de 1855—Real decreto de 28 de noviembre de 1856.

(3) Esta disposición legal fué anulada ó modificada por los decretos de 1.^o de marzo y 8 de diciembre de 1869—29 de marzo de 1870—20 de abril y 12 de agosto de 1871—8 de octubre de 1873, que se restableció en toda su fuerza y valor por el decreto de 24 de julio de 1874.

(4) Véase el apéndice núm. 10.

LIBRO CUARTO.

PENAS Y DELITOS.

TÍTULO PRIMERO

PENAS ECLESIASTICAS.

CAPITULO 1.

DE LAS PENAS ECLESIASTICAS EN GENERAL.

Pena en su sentido lato y extricto.—La pena en sentido lato es: *Todo lo que causa al hombre alguna molestia y trabajo, ó le priva de ciertos bienes.*

La pena en su sentido extricto es: *La privación de un bien impuesta por la ley al que abusa de otro bien.*

Sus requisitos esenciales.—Es de esencia en toda pena, que sea un mal físico ó moral ó la privación de un bien corporal ó espiritual, á que el delincuente tenía derecho ántes de ser privado de él.

Causa motiva de la privación del bien.—La privación del bien espiritual ó temporal tiene lugar, cuando el sujeto que es objeto de aquélla, no se abstiene de ejecutar el mal moral por su malicia, y se hace preciso contenerlo por medio de otro mal, que es la pena (1).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 3.^a, lib. III, cap. 1.^o, art. 1.^o

Pena eclesiástica, y en qué se distingue de la restitución.—La pena eclesiástica puede definirse con arreglo á la doctrina expuesta: *La represión de los delitos para enmienda del delincuente y sostenimiento del orden público* (1).

La pena se distingue de la restitución ó reparación de la injuria, porque ésta tiene lugar en la lesión de un derecho privado, y aquélla en la infracción de la ley: así que sólo se atiende á la cantidad de la lesión en la restitución; y en la pena á la cantidad de la moralidad, que es la razón de la pena.

Fin de la pena eclesiástica.—Toda pena eclesiástica tiene por fin la enmienda del delincuente y el bien de los demás, ó sea de la misma sociedad (2); porque se encuentra un doble delito ó mal en el fuero externo, que necesita un doble remedio.

El primer mal que resulta del delito, es el daño espiritual del mismo delincuente, en cuanto que mancha su alma, la desnuda de la gracia, la priva del derecho á su eterna salvación y la pone en condiciones de condenación eterna. Por esto la pena es como un estímulo para sacarle, por decirlo así, de su letargo; le retrae del camino del crimen, y lo mueve á penitencia contra su voluntad en cierto modo.

El segundo mal del delito, es el daño de la misma sociedad ó de los socios del delincuente: porque si bien los delitos son personales y afectan por lo mismo á la conciencia de sólo el delincuente, es preciso reconocer que nadie obrando bien ó mal en la sociedad, es útil ó perjudicial á sí sólo, sinó que su acción trasciende á los demás miembros de aquélla. Contribuye, si obra bien, al mantenimiento del orden y á la consecución del fin social; pero en el caso contrario perturba el orden social, retrae á los demás del recto camino con su mal ejemplo, é impide ó retarda la consecución del fin propio de la sociedad.

(1) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 1.^o, núm. 749.

(2) *Vecchiotti Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 49.

La pena tiende por lo mismo á remediar este mal, impidiendo que se propague é inficione á todo el cuerpo social (1).

Este doble fin de la pena eclesiástica y su efecto saludable se halla comprendido en estas palabras del Apóstol: *Ego... jam judicavi... tradere hujusmodi Satanae in interitum carnis, ut spiritus saluus sit in die Domini..* (2) *Peccantes coram omnibus argue: ut et ceteri timorem habeant* (3).

Sus distintos grados.—Es indudable que la Iglesia acostumbró siempre á corregir los delitos de los fieles siguiendo este orden gradual—*penitencias*—*censuras*—*penas*.

Las primeras se aplican á los delincuentes, que arrepentidos sinceramente, confiesan espontáneamente su delito y se hallan dispuestos á expiarlo.

Las segundas se imponen á los delincuentes contumaces, en quienes hay fundada esperanza de arrepentimiento.

Las penas se imponen á los criminales contumaces, que perseveran en el crimen con la mayor pertinacia sin esperanza de su reconocimiento.

Si se designaron siempre con unas mismas palabras.—Parece indudable que estos distintos grados, empleados siempre por la Iglesia en la corrección de sus hijos, no se expresaron con unos mismos nombres: así que—

a) La *penitencia* no se conoció siempre con esta palabra, sino que se la dió á conocer por estas otras—*satisfacción* (4)—*redención de pecados* (5)—*vindicta* (6)—*reconciliación* (7)—*expiación*, *segundo bautismo*, *segunda tabla post naufragium*, *conversión*, *confesión de los pecados*, *espíritu de mansedumbre* (8).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., parte 3.^a, lib. III, cap. I, art. 2.^o

(2) *Epist. i.^a ad Corint.*, cap. V.

(3) *Epist. i.^a ad Timoth.*, cap. V, v. 20.

(4) C. III *De penit.*, dist. 3.^a, causa 33.

(5) C. ¹ XXVI, *De penit.*, dist. 1.^a, causa 33.

(6) C. IV, *De penit.*, dist. 3.^a, causa 33.

(7) C. X, *De penit.*, dist. 3.^a, causa 33.

(8) C. XXXIV, XLI, XLVI, LVIII y LXXII, *De penit.*, dist. 1.^a, causa 33.
—C. XII, dist. 3.^a, *De penit.*, causa 33.

b) La censura no se llamó siempre así, sinó que se la dió también á conocer con las palabras—*canonicam districtionem—canonicam ultionem—nervum ecclesiasticæ disciplinæ—felicem mucronem, medicinam* etc. (1).

c) La pena se conoció también con las palabras—*districtam ultionem—gladium spirituale—ferrum putridas carnes secans* (2).

Uso indistinto de las palabras penitencia, censura y pena en los textos legales, y su motivo.—Las palabras penitencia, censura y pena se usan indistintamente para expresar una misma cosa; así que se llama penitencia á lo que es censura ó pena: censura á lo que es penitencia ó pena, y pena á lo que es penitencia ó censura, según se nota en el decreto de Graciano y otros monumentos de la antigüedad.

El motivo de que estas palabras se confundiesen, procede sin duda alguna de su distinción más bien en grado que en especie (3).

Si convienen entre sí.—Las citadas palabras convienen entre sí en que=

- a) Todas suponen un delito.
- b) Su absolución, remisión ó dispensa puede hallarse reservada ó no reservada al prelado superior.
- c) Todas ellas pueden recaer en los individuos ó en las corporaciones.

En qué se distinguen.—Se distinguen unas de otras, en que=

- a) Unos ministros de la Iglesia sólo pueden imponer penitencia.
- b) Otros sólo censuras.
- c) Otros penas y censuras.
- d) La penitencia impuesta termina por la satisfacción del penitente ó indulgencia del juez.

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, parte 2.^a, disert. 1.^a

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

e) La censura solo termina por la absolución ó restitución al primer estado.

f) La pena se abroga mediante dispensa.

Esto procede de que en la iglesia existe diversidad de ministros, teniendo unos facultad para reconciliar á los penitentes: otros que pueden absolver de las censuras, y otros que pueden dispensar de las penas (1).

Conveniencia entre sí de la penitencia y censura, y su distinción de la pena.—La penitencia y la censura convienen entre sí, distinguiéndose de la pena en que aquéllas tienen por fin inmediato la corrección y enmienda del delincuente, y la pena se aplica aún cuando haya poca ó ninguna esperanza de arrepentimiento, como medio de sostener el orden público é impedir que otros sigan el ejemplo del delincuente.

En qué convienen la censura y la pena, y su distinción de la penitencia.—La censura y la pena convienen entre sí, y se distinguen de la penitencia, en que—

a) Aquéllas se aplican ordinariamente á los contumaces, y ésta se impone *volenti et ad obtemperandum parato*.

b) En que la censura y la pena pueden aplicarse á los que se hallan excluidos de la Iglesia; á diferencia de la penitencia, que sólo se impone á los que son miembros de la Iglesia ó próximos á ingresar en ella, como los catecúmenos.

c) La penitencia se aplica aún por los delitos internos, y la censura ó pena sólo tiene aplicación á los delitos externos.

Conveniencia entre sí de la penitencia y pena, y su diferencia de la censura.—La penitencia y la pena expían el delito en el reo, dando satisfacción á la sociedad del mal ejemplo, y la censura se propone principalmente su corrección.

La pena y penitencia se imponen por tiempo determinado ó perpetuo, á diferencia de la censura, cuya naturaleza pide que se imponga por tiempo indeterminado.

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 1.^a

Especies de penas en general —Las penas eclesiásticas fueron conocidas antiguamente con la palabra común de *censuras*, ú otras equivalentes, á pesar de su gran variedad; pero el orden y buen método exigía, que se dieran á conocer con términos precisos para su más fácil inteligencia (1), y de aquí sus varias divisiones por razón de—las personas—objeto—fin—modo de establecerlas ó de incurrir en ellas: lo cual motiva las especies siguientes—*comunes*—*propias de los clérigos*—*espirituales*—*temporales*—*ordinarias*—*extraordinarias*—*vindicativas*—*medicinales*.

Se entiende por penas comunes, *aquellas en que pueden incurrir los clérigos y legos*, como la excomunión, entredicho, privación de sepultura eclesiástica.

Se entiende por penas propias de los clérigos, *aquellas en que solo pueden incurrir los clérigos*, como la suspensión de posición, privación de beneficios.

Se entiende por penas espirituales, *la privación de un derecho ó bien espiritual*, como la privación de sacramentos, de participación en los divinos oficios, sufragios de la Iglesia, ejercicio de los órdenes.

Se entiende por penas temporales, *la privación de un derecho ó bien temporal que se ordena á la aflicción del cuerpo*, como la privación de los frutos de un beneficio, infamia, prohibición de las nupcias, multas pecuniarias, ayunos y otras aflicciones del cuerpo, deposición, degradación.

Se entiende por penas ordinarias, *la privación de un bien que se halla determinada por la ley ó costumbre*.

Se entiende por penas extraordinarias, *la privación de un bien, impuesta por el juez, según su prudente arbitrio, atendida la cualidad y circunstancias del delito; puesto que no se halla determinada por la ley* (2).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 3.^a, lib. III, cap. I, art. 3.^o

(2) *Prælect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a art. 1.^o número 753.

Se entiende por penas vindicativas, la *privación de un bien que consiste en el castigo del delincuente*.

Se las dá el nombre de penas en su sentido propio, porque no hay esperanza alguna de la enmienda del delincuente, y tienen por fin la expiación y el sostenimiento del orden público.

Se llaman penas medicinales, la *privación de un bien como medio de evitar la repetición de actos contrarios á la ley*, como las penitencias y censuras (1).

Clases de penas vindicativas.—Las penas vindicativas se dividen en las clases siguientes:

Personales, como la encarcelación, azotes, relegación, deposición.

Reales, como la privación del beneficio, multa pecuniaria, confiscación de bienes; todo lo cual es en odio al delincuente.

Mixtas, como el entredicho, destierro.

Ordinarias y extraordinarias, según que se hallan ó no determinadas por la ley, etc.

Positivas y negativas, según que exigen acción ú omisión de parte del delincuente, como flagelación, destierro, privación de oficio, beneficios, frutos, uso del orden.

Capitales y nó capitales, como muerte ó privación de libertad, etc. (2).

Penas latæ sententiæ, ó sean aquéllas en que se incurre por el mero hecho de cometer el delito al que van anejas.

Penas ferendæ sententiæ, ó sean aquéllas que necesitan sentencia judicial para incurrir en ellas.

Penas á jure, ó sean las contenidas en el derecho.

Penas ab homine, que son las impuestas por el juez.

En qué se distinguen las penas á jure de las penas ab homine.—Las penas á jure se establecen para un tiempo fu-

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 1.^a

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XXXVII, párrafo 1.^o, núm. 10.

turo, y las *ab homine* son de presente, como el castigo del delincuente por delitos que ha cometido.

Las penas *a jure* afectan á todos los que sean súbditos del legislador y sus sucesores, y las *ab homine* sólo afectan á los que están sometidos á la autoridad del superior en el acto de imponerse.

La facultad delegada para absolver ó dispensar sobre las penas canónicas no comprende las penas *ab homine*, á ménos que el superior haga mención expresa de ellas (1).

Autoridad de la Iglesia para imponer penas.—

Como esta materia se deja tratada en otros lugares de esta obra (2), me limito á las indicaciones siguientes—

I. La Iglesia en su calidad de sociedad perfecta y en virtud de la autoridad que la compete por derecho divino, aplicó desde muy antiguo en el castigo de los delitos las penas corporales (3) como los azotes, encarcelación ó reclusión en un monasterio, destierro, confiscación de bienes (4), multa pecuniaria (5), la cual no debe aplicarse en el caso de que el delito exija una pena espiritual (6), ni cuando se impone, habrá de ceder en utilidad del obispo ó juez eclesiástico, á fin de evitar que se atribuya á torpe lucro ó avaricia (7).

II. Que las citadas penas corporales se imponen por la Iglesia, usando de su derecho propio (8).

(1) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 1.^o, número 751.

(2) Lib. I, tít. I, cap. VII y VIII —Lib. II, tít. I, cap. III.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XVII.

(4) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIX *De Reformat.*

(5) *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. I, *De Reformat.*—Id., sesión 25, cap. III *De Reformat.*

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XVII, pár. 3.^o

(7) Cap. XIII, pár. 2.^o, tít. XXXI, lib. I *Decret.*—Cap. III, tít. XXXVII, lib. V *Decret.*

(8) SOGLIA: *Inst. Jur. pub. Eccles.* lib. I, cap. I, pár. 8.

III. La Iglesia no impuso nunca la pena capital, y se limitó en este punto á aprobar, al ménos de un modo tácito, las disposiciones civiles que la prescriben (1).

IV. Siempre aplicó las penas espirituales en sus distintos grados, según la gravedad de los delitos.

Personas á quiénes compete este derecho.—El derecho de imponer penas eclesiásticas compete al supremo legislador y á los jueces subordinados al mismo, según la jerarquía de jurisdicción, de manera que se requiere jurisdicción externa, y que el juez se halle dentro de su territorio (2), cuyo último requisito es de necesidad (3) á ménos que el ordinario de la diócesis en que aquél se halle consienta en ello, ó su ausencia del propio territorio sea efecto de una expulsión injusta (4).

En este supuesto compete la expresada facultad á los siguientes=

- a) El Papa y los Concilios generales en toda la Iglesia.
- b) Los Concilios provinciales y sínodos diócesanos en sus respectivas provincias y diócesis.
- c) Los cardenales en las iglesias de sus títulos, y los patriarcas, primados, nuncios apostólicos ó legados en sus respectivos territorios.
- d) Los metropolitanos en sus diócesis y también en las sufragáneas durante la visita, ó cuando se interpone apelación ante él de la sentencia del sufragáneo, etc.
- e) Los obispos en sus respectivas diócesis, lo mismo que sus vicarios generales; hallándose en igual caso el cabildo ó vicario capitular, *sede vacante*.
- f) Los generales, provinciales y superiores locales de los institutos religiosos, etc.

(1) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 1.^o, número 754 y sig.

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, tít. II, trat. 2.^o, disert. 2.^a, cap. I, art. 2.^o

(3) Cap. únic., tít. II, lib. II *Clementin.*

(4) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, *ibid.*, núm. 756.

Sujeto capaz de incurrir en penas eclesiásticas.

—Las penas eclesiásticas se imponen generalmente al hombre viviente y que ha delinquido.

Se dice que el hombre, porque los brutos son incapaces de derecho, obligación y culpa por falta de razón.

Es además necesario que sea viviente ó viador, porque los delitos se extinguen con la muerte de los criminales (1), á menos que se hubiere impuesto pena pecuniaria al delincuente, cuando aún vivía, sin que se hubiere alzado de ella por medio de la apelación, porque entonces puede exigirse el pago de ella á sus herederos (2); lo mismo que si se trata de un delito de lesa majestad ó de Estado, porque en estos casos ha lugar á la confiscación de bienes—ó si el delincuente es hereje, excomulgado, etc., porque entonces queda excluido de sepultura eclesiástica.

El hombre viador está sujeto á pena si ha delinquido, porque la pena supone culpa en el sujeto á quien se aplica (3), sin que haya lugar á castigar á uno por otro, sinó mediante causa justa, como en el caso de muerte violenta del obispo propio, porque entonces los hijos del criminal hasta el cuarto grado quedan separados de sus beneficios (4) y de ingresar entre el clero.

Esto mismo tiene aplicación respecto á los hijos de herejes y reos de lesa majestad (5), porque la especial gravedad de estos delitos exige para terror de otros que la pena se extienda á los descendientes de tales criminales, siendo por otra parte de temer que los hijos imiten la malicia de sus padres (6).

(1) C. XIV, dist. 23.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret. tit. XXXVII, párr. 1.º, núm. 15.

(3) *Reg. Jur.* 23, tit. XII, lib. V sext. Decret.

(4) Cap. X y XII, tit. XXXVII, lib. V Decret.

(5) Cap. X, tit. VII, libro V Decret.—Cap. XV, tit. II, lib. V sext. Decret.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret. tit. XXXVII, párrafo 1.º, núm. 19.

Objeto de la pena, y proporción entre ella y el delito.—Las penas eclesiásticas se imponen por delito *grave*, *externo*, *completo* en su línea.

Se requiere que el delito sea grave, porque las penas establecidas en los sagrados cánones son graves, á excepción de la excomunión menor, y por lo mismo es de necesidad que el delito sea grave, á fin de que haya proporción entre la pena y el delito con arreglo al derecho natural (1).

Es además necesario que el delito sea externo, porque la Iglesia *non judicat de internis* en el fuero externo.

Se requiere, por último, que el delito sea completo en su línea ó consumado, porque las leyes penales son de estricta interpretación.

Deberes del juez en su aplicación.—El juez no puede aplicar justamente la pena, sinó observa la debida proporción entre ella y el delito. Para que exista esta proporción habrá de tener presente=

- a) La cualidad del delito, como si es público ó privado.
- b) Tiempo en que se comete, como si el hurto es nocturno.
- c) Lugar, como si el hurto es en lugar sagrado, en cuyo caso tiene la cualidad de sacrilegio (2).
- d) Si se llevó á efecto.
- e) Cualidad del delincuente.
- f) Cantidad del daño causado y deliberación con que se cometió el delito, porque la pena se aplica únicamente cuando el delito se ha cometido voluntariamente (3).
- g) Grado de certeza sobre la comisión del delito por una persona ó acerca de la pena que debe aplicarse, debiendo en estos casos interpretar la ley penal en el sentido más favorable al delincuente (4).

(1) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 1.^o, núm. 758.

(2) C. XXI, quæst. 4.^a, causa 17.

(3) C. IV, quæst. 1.^a, causa 15.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.* título XXXVII, pár. 1.^o, núm 26 y sig.

Obligación del delincuente al cumplimiento de las penas.—Como las penas son *latæ* ó *ferendæ sententiæ*, positivas ó privativas, etc., de aquí la diversidad de tiempo en que el criminal se hallará obligado en conciencia al cumplimiento de las penas.

Todo lo relativo á este punto puede resumirse en lo siguiente:

I. Las penas *ferendæ sententiæ* no obligan antes de la sentencia del juez, porque la ley pone antes la pena que ha de designarse por el juez que la designada, y esto tiene aplicación en toda pena legal de esta especie.

II. Las penas *latæ sententiæ*, como medicinales que son, obligan desde el momento en que se comete el delito á que van anejas, si son censuras eclesiásticas; y en su virtud la pena de excomunión, suspensión y entredicho obliga al que ha incurrido en ellas á abstenerse de la comunión de los fieles, administración de beneficio ú oficio y participación de las cosas divinas (1).

III. Todos los canonistas están de acuerdo en que las irregularidades é inhabilidades para recibir ó ejercer los sagrados órdenes, obtener beneficios eclesiásticos, contraer matrimonio, dar su voto ó sufragio en las elecciones, etc., se han de observar ántes de toda sentencia, porque esta es la práctica constante sobre este punto, y es además conveniente para retraer á los fieles de los delitos aun ocultos, puesto que la iglesia se propone por medio de estas penas el provecho espiritual de sus súbditos.

IV. Parece indudable que el legislador puede obligar á sus súbditos al cumplimiento de otras penas positivas ó privativas ántes de toda sentencia, si son moderadas; pero no existe pena alguna positiva en el derecho canónico, que obligue al delincuente ántes de la sentencia judicial.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. V Decret., tit. XXXVII* párr. 1.º, número 46.

V. La pena privativa de un derecho no plenamente adquirido obliga ántes de toda sentencia, si se halla consignada en el derecho; así que el clérigo tendrá obligación de dejar ántes de que medie sentencia judicial, el beneficio parroquial si no se ordena de sacerdote *intra annum* por culpa suya (1), debiendo decirse lo mismo del obispo que no se consagra dentro de los seis meses, contados desde el día de su confirmación (2).

VI. La pena privativa de un derecho perfecto ó plenamente adquirido, no obliga ántes de la sentencia judicial, á excepción de las censuras, irregularidades y privación *petendi debitum* al cónyuge *incestuoso*, porque *in pœnis benignior interpretatio est facienda* (3).

VII. El delincuente pierde desde luego el dominio de sus bienes por la comisión de un delito que le priva *ipso jure* de ellos (4).

Disciplina particular de España.—Los puntos que se dejan tratados en este capítulo, son doctrinales y afectan á la naturaleza y constitución de la Iglesia. Por lo mismo no cabe en este punto modificación alguna, ni la legislación particular de los distintos países habrá de ser distinta; pero respecto á la aplicación de algunas de las penas personales, reales y mixtas, es de necesidad tener presentes las relaciones de la Iglesia con el Estado.

Ya desde tiempos antiguos se dispuso en España, que los jueces eclesiásticos no pudieran hacer ejecución en los bienes de los legos, ni prender ó encarcelar sus personas, sinó impetrando la ayuda del brazo seglar (5), y esto es lo que se observa en la actualidad, cuando se opone resistencia á los mandatos de la autoridad eclesiástica.

(1) Cap. XIV, tít. VI, lib. I *sext. Decret.*

(2) *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. II *De Reformat.*

(3) *Reg. jur.* 49.—Tít. XII, lib. V *sext. Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXVII, párrafo 1.º, núm. 54 y sig.

(5) Ley 4.ª y 12, tít. I, lib. II, de I. *novis. Recop.*

CAPITULO II

PENITENCIAS.

Penitencia, y sus especies.—De la penitencia considerada como virtud ó parte del sacramento de la penitencia, se ha tratado en otro lugar, lo mismo que de sus especies (1). En este capítulo se trata únicamente lo concerniente á la penitencia ordenada al bien público de la Iglesia é impuesta por los que ejercen jurisdicción eclesiástica en el fuero externo (2).

La penitencia de que se trata, puede ser=

General y singular, según que se cumple por todos en común ó por cada uno en particular.

Ordinaria, que es la establecida en días fijos ó para determinados delitos por la Iglesia.

Extraordinaria, que es la mandada en casos especiales con ocasión de algún grave mal, como epidemia, peste, etc.

Pública y privada, según que haya de cumplirse á la vista de los demás y ante el pueblo fiel reunido, ó en secreto.

Si puede imponerse penitencia solemne ó pública.—La penitencia pública tenía varios grados (3), y como de esto se trató en otro lugar de esta obra (4), lo mismo que de la penitencia *solemne*, que se imponía al principio de cuaresma y otras solemnidades (5) me limito en este lugar á manifestar=

I. Que la penitencia solemne se imponía una vez (6); de

(1) Lib. III. tít. I, cap. IV, art. 1.º

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 2.ª, dissert. 2.ª, cap. II.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 2.ª, dissert. 2.ª, cap. II.

(4) Lib. III, tít. I, cap. IV, art. 1.º

(5) C. LXIV, dist. 50.

(6) C. LXII, distinct. 50.—Cap. II *De punit.*, distinct. 3.ª

biendo tenerse presente, que no podía imponerse á los clérigos (1), porque se consideró que bastaba su deposición (2), y que tampoco puede aplicarse en la actualidad á los legos (3).

II. Que la penitencia pública puede imponerse repetidamente en la actualidad por los pecados públicos (4) para ejemplo de los demás, siempre que se haga por la autoridad competente fuera de la confesión sacramental (5).

III. Que los legos á quienes se haya sometido á penitencias públicas, no pueden ser promovidos á dignidades y oficios eclesiásticos á menos que la necesidad ó utilidad de la Iglesia lo exija (6).

Diferencia entre la penitencia pública solemne y no solemne.—La penitencia pública solemne se distingue de la no solemne en que=

a) La primera se imponía únicamente por los delitos más graves y perniciosos que causaban escándalo á todo un pueblo ó país (7), á diferencia de la no solemne, que se aplica por pecados de igual índole, aunque no haya resultado escándalo grave (8).

b) La penitencia solemne podía imponerse únicamente por el obispo, y la otra por el simple presbítero.

c) La primera se hacía sólo al principio de cuaresma, y la segunda en cualquier tiempo.

d) La solemne se hacía sólo una vez en la vida, y la no solemne siempre que tienen lugar delitos públicos.

(1) C. LXV y LXVI, distinct. 50.

(2) C. V, distinct. 82.—C. II *De Penit.*, distinct. 6.^a

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. V Decret.*, tit. XXXVIII, párrafo 2.^o, núm. 92.

(4) C. XVII, distinct. 45.—C. XIX, quæst. 1.^a, causa 2.^a—Cap. I, título XXXVIII, lib. V. *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VIII *De Reformat.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid. núm. 96.

(6) C. XXV, LV, LVI, LVIII y sig., distinct. 50.

(7) C. LXVIII, distinct. 50.

(8) C. XVII *De Consecrat.*, distinct. 3.^a

e) La primera no se imponía á los clérigos, ni á los legos casados sin consentimiento del otro cónyuge (1), y la segunda se aplicaba indistintamente á todos los legos.

f) Los penitentes quedaban considerados como infames por la penitencia solemne, y esto no tenía lugar en la otra penitencia (2).

A quién compete imponer penitencia pública.—La penitencia pública sólo puede imponerse por aquellos que ejercen jurisdicción eclesiástica en el fuero externo, como los obispos, prelados inferiores con jurisdicción cuasi episcopal, etc., y tienen facultad para conmutarla en penitencia privada ó secreta, según su prudente arbitrio (3), ménos en el caso de la dispensa obtenida por la Dataría con imposición de penitencia pública (4).

CAPITULO III

DE LAS CENSURAS ECLESIÁSTICAS EN GENERAL.

ARTÍCULO PRIMERO.

DE LAS CENSURAS Y SUS DISTINTAS ESPECIES.

Etimología de la palabra censura y su significación.—La palabra censura procede de *censendo*. Entre los Romanos significaba el oficio y dignidad de los censores.

El censor corregía las costumbres de los ciudadanos, no incluyéndolos en el censo ó inscripción de los senadores, caballeros, etc., quedando por este hecho privados de ciertos derechos y dignidades.

(1) C. XIII, quæst. 4.^a, causa 33.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V. *Decret.*, tit. XXXVIII, párrafo 2.^o, núm. 93.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VIII *De Reformat.*

(4) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 2.^a, cap. III.

Así, por ejemplo, el Senador era arrojado del Senado; el caballero perdía el caballo público y el plebeyo era inscripto en las tablas de los *cerites*, quedando por este mero acto infamado.

Era tan grande la importancia del censor que Plinio al hablar de este cargo dice: *Catonum ille primus triumpho et censura super cætera insignis*.

Sus distintas acepciones.—La palabra *censura* se toma en las acepciones siguientes:

a) Por el juicio, que se ha formado de una cosa, como la censura de un libro.

b) El destino ú oficio que tiene por objeto corregir, llamándose *censor* el que lo desempeña.

c) El castigo que se impone á alguno y en este sentido decía Juvenal de un juez: *Dat veniam corvis, vexat censura columbas*.

d) La pena aplicada al delincuente.

En esta última acepción se toma aquí la palabra *censura*.

Su definición.—La censura puede definirse: *La pena espiritual y medicinal, que la autoridad eclesiástica impone á los fieles súbditos suyos, por su delito y contumacia, privándolos del uso de ciertos bienes espirituales para su corrección y enmienda*.

La censura es *una pena*, porque priva de ciertos bienes, cuya participación corresponde al fiel no gravado con la censura; así que es necesario haber cometido culpa para incurrir en ella, porque la pena supone culpa. En su consecuencia la censura impuesta por el superior al inocente y sin guardar las formalidades de derecho es nula, hallándose en el mismo caso, la que se impone al inocente convencido de delito jurídicamente; pero entónces necesita someterse al fallo del superior hasta que se revoque la sentencia de aquél por la autoridad competente.

Se dice *espiritual* para designar su fin primario: que es la privación de los bienes espirituales, aún cuando produzca algunas veces efectos temporales, como v. g. la privación de frutos del beneficio.

Se dice *medicinal* porque tiene por objeto la corrección y enmienda del delincuente; así que su duración no se extiende

mas allá del tiempo en que el pecador se arrepiente y cesa en su contumacia; sin que por esto pueda deducirse que no haya de aplicarse á los incorregibles, porque tiene además otro fin secundario que es el castigo del criminal (1).

Se dice *que la autoridad eclesiástica impone etc.*, porque es acto de potestad que solo puede imponerse á los bautizados súbditos suyos.

Se dice *por su delito y contumacia*, porque la pena solo puede imponerse al que ha cometido culpa, siendo además preciso que no quieran obedecer: de modo que si el delincuente se somete y presta obediencia después de haber sido amonestado, la Iglesia, como madre tierna y amorosa, no usa contra él de las censuras.

Se dice *privándolos de ciertos bienes etc.*, porque la censura solo priva de ciertos bienes espirituales, externos y comunes, como los sacramentos, sacrificios, beneficios eclesiásticos, públicos sufragios, etc.

Clases de bienes espirituales y de cuáles priva la censura.—Los bienes espirituales en que los fieles comunican entre sí, son de las tres clases siguientes:—

Bienes internos, como la fé, caridad y gracia, por la cual comunican místicamente entre sí y con Cristo (2).

Bienes externos ó civiles y políticos, que consisten en celebrar contratos, juicios, ó en convites, reuniones, salutación, comercio, etc.

Bienes mixtos, que consisten en las acciones y ceremonias exteriores, las cuales producen por su institución un fruto interior y espiritual, como los sacrificios, sacramentos, oficios divinos, sufragios de la Iglesia, satisfacción de Cristo y de los

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 5.º

(2) *Epist. 1.ª ad Corinth.*, cap. XII, v. 11.—*Id. ad Ephes.*, cap. IV, v. 2 y siguientes.

santos, que se aplican á los fieles justos del tesoro común de la Iglesia por las indulgencias.

Los bienes de la primera clase no están bajo la jurisdicción de la Iglesia, y por lo mismo no puede privar á nadie de ellos (1).

La censura priva primariamente de los bienes mixtos, y secundariamente y de un modo indirecto de los bienes externos; así que la excomunión priva del contrato político y civil, y la suspensión del beneficio, priva de sus frutos.

Distinción entre la censura y el pecado.—El pecado se distingue de la censura en que aquel priva al sujeto de bienes espirituales internos, y ésta de los bienes espirituales externos. Además; aunque la censura supone culpa y depende de ella *in fieri*, ó sea para imponerse é incurrir en ella, no es necesario que el sujeto permanezca en el pecado, mientras subsiste en él la censura.

Así, pues, si uno ha incurrido en excomunión mayor, es indudable que se hallaba en pecado, cuando contrajo la censura; pero si después ha hecho un acto de contrición perfecta, el pecado ha desaparecido y se ha perdonado, aunque esté sujeto y ligado con la excomunión, que continúa en él, hasta que la Iglesia le absuelva de ella, (2) porque el excomulgado debe ser tenido como tal, mientras no pruebe que fué absuelto, según declaró Inocencio III en su contestación á la consulta de un obispo (3).

Por último, se puede incurrir en pecado por un acto meramente interno y para incurrir en censura se requiere que el acto sea externo, etc.

Diferencia entre la censura y la irregularidad.

—La censura se distingue de la irregularidad, en que esta es

(1) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 4.º

(2) Por esta razón condenó Alejandro VII la proposición siguiente: *Quoad forum conscientiae, reo correcto ejusque contumacia cessante, cessant censurae.* (S)

(3) Cap. XXXVIII y XXXIX, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

un impedimento establecido por la Iglesia, que impide recibir los órdenes ó ejercer los ya recibidos; de manera que puede existir, sin que haya delito ó culpa en el sujeto y en esto se diferencia de la censura, no ménos que en otras cosas fáciles de comprender por el que se fije en la definición de una y otra.

Sus especies.—Las censuras se dividen en=

Excomunión, suspensión y entredicho (1).

Válida, justa é injusta, según que tiene ó no defecto esencial ó accidental.

A jure y ab homine, según que se halla sancionada por los sagrados cánones, constituciones y estatutos eclesiásticos, ó la impone el legítimo superior por mandato especial ó sentencia judicial, en virtud de un hecho ó causa particular.

Latæ y ferendæ sententiæ, según que se contrae en el mero hecho de delinquir ó por sentencia judicial.

General ó particular, según que se impone de un modo general é indeterminado, como á todos los clérigos, ó de una manera especial y concreta, como á Pedro ó Andrés.

Reservada y no reservada.

Distinción entre la censura *à jure* y la censura *ab homine*.—La primera está consignada en el derecho, y obliga mientras subsista y esté vigente la ley, canon, constitución ó estatuto eclesiástico; de modo que es general y perpétua, porque comprende á todos los súbditos delincuentes y contumaces, y dura después de la muerte del legislador.

La censura *ab homine* emana, como la primera, del legítimo superior; pero la impone por un mandato especial ó sentencia judicial, en virtud de un hecho ó causa particular, de manera que ordinariamente afecta á personas determinadas. También esta censura puede ser general ó particular, según que se impone de un modo general é indeterminado, como v. gr. á to-

(1) Cap. XX, tit. XI, lib. V *Decret.*—Cap. I, XIII y XX, tit. XI, lib. V *ext. Decret.*

dos los clérigos, ó de una manera especial y concreta, como por ejemplo á Pedro ó Juan.

Por lo dicho se comprenderán fácilmente las diferencias que median entre la censura *à jure* y la censura *ab homine*. La primera es general y permanente y la segunda es particular y transitoria.

La primera se impone para precaver y evitar un pecado, y la segunda recae sobre un pecado ya cometido, á fin de obtener la enmienda y de que se dé satisfacción por él.

De la primera puede absolver cualquier confesor, si no es reservada, pero de la segunda sólo compete esta facultad á su autor ó superior, al sucesor ó su delegado (1).

Finalmente, la censura *ab homine* se impone por cualquier superior que tenga jurisdicción *in foro spirituali contentioso*, y concluye por muerte del que la impuso, á menos que se incurriere en ella ántes de faltar aquél, porque en este caso dura, y liga al sujeto hasta que obtenga la absolución.

La censura *à jure* como impuesta por los sagrados cánones, constituciones ó estatutos eclesiásticos permanece en todo su vigor aunque falte el legislador, y dura mientras esté vigente la ley que la impone.

Diferencia entre la censura *late* y *ferendæ sententiæ*.

—La primera va de tal modo unida á la transgresión de la ley ó mandato, que se incurre en ella en el acto mismo sin necesidad de que medie declaración alguna, porque así lo ha establecido la ley ó el superior. La segunda no se contrae por el acto de traspasar la ley ó cometer el crimen, sinó que además es necesario para incurrir en la declaración ó sentencia del juez.

Así pues, la censura *late sententiæ* se diferencia de la censura *ferendæ sententiæ*, en que para incurrir en la primera sólo se requiere haber cometido el delito al que va aneja; y en la segunda es además necesaria la sentencia ó declaración del juez.

(1) Cap. XXIX, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

La razón de esta diferencia está en la voluntad del legislador ó superior, que ha establecido que se incurra en la primera en el acto mismo de cometer el delito, y que en la segunda sea además precisa la sentencia judicial; de manera que esta censura es propiamente conminatoria.

La censura *latæ sententiæ* se impone generalmente por delitos enormes que se consuman en un solo acto, en el que no cabe interrupción por la amonestación.

Casos en que la censura será *latæ sententiæ*.—Para conocer cuándo la censura es *latæ*, ó *ferendæ sententiæ*, deberá tenerse presente que si las palabras empleadas por el legislador excluyen cualquiera otra acción ó ministerio para incurrir en ella, es indudable que la censura es *latæ sententiæ*, lo cual tiene lugar en los casos siguientes:

1.º Si en el texto de la ley se emplean estas voces: *ipso jure*, *eo ipso*, *sine alia sententiâ*, *confestim*, *illico*, *incontinenti*, *statim*, *prorsus*, *ipso facto*.

2.º Si se usan palabras de tiempo presente ó pasado, v. gr. *excommunico*, *excommunicatur*, *excommunicavimus*, *excommunicationis sententiâ innodandum duximus*, *noverit se esse excommunicatum*.

3.º Si las palabras son imperativas, v. gr., *incadat in excommunicationem*, *maneât suspensus*, *interdictus*.

4.º Si en la censura contra una herejía se dice *excommunicatus sit*, *anathema sit*.

Cuando estas palabras se emplean por el legislador contra otro crimen ó delito, creen algunos autores que no contienen censura *latæ sententiæ*, mientras que otros no menos respetables opinan que sí.

Cuándo será *ferendæ sententiæ*.—Las censuras serán *ferendæ sententiæ*, cuando las palabras usadas por el legislador incluyen además del delito la acción ó ministerio de otra persona, lo cual tiene lugar en los casos siguientes:

1.º Si las palabras son conminatorias, v. gr. *præcipimus sub pœna excommunicationis*, *sub interminatione anathematis*; á me-

nos que estas voces vayan acompañadas de otras que modifiquen ó alteren su sentido.

2.^o Si las palabras expresan tiempo futuro ó exigen la acción del juez, v. gr. *excommunicabitur, excommunicandus erit, excommunicetur, suspendetur per episcopum*.

Si á pesar de las reglas expuestas, queda aún la duda de si la censura es *late aut ferende sententie*, porque las palabras son ambiguas, es opinión comun de los teólogos y canonistas, que en este caso debe considerarse dicha censura como *ferende sententie*, y así se deduce de las siguientes reglas del derecho: *In obscuris* (1) *minimum est sequendum*, *In penis* (2) *benignior est interpretatio facienda*.

Distinción entre las censuras reservadas y las censuras no reservadas.—De las primeras, sólo puede absolver el que las impuso, su delegado ó sucesor, y el superior de aquél. De las segundas, puede absolver todo el que está aprobado ó tiene licencias de confesar.

La diferencia que existe entre unas y otras censuras proviene de que el superior se reservó su absolución en las primeras, dejando esta facultad á los ministros del sacramento de la penitencia respecto á las segundas.

ARTÍCULO II.

AUTORIDADES QUE PUEDEN IMPONER CENSURAS.

Autoridad de la Iglesia para imponer censuras.

—Los Wiclefitas y Hussitas negaban al Papa y á los obispos la potestad de imponer censuras, y como consecuencia de esto afirmaban que no debía temerse la excomunión fulminada por el Papa ó por cualquier otro prelado, porque no pasaba de ser

(1) Reg. 30, tít. XII, lib. V *sexti decret.*

(2) Reg. 49, tít. XII, lib. V *sexti decret.*

una censura del *anticristo*, cuya doctrina condenó el concilio de (1) Constanza.

Lutero sostenía que la excomunión es una pena meramente externa, útil y conveniente para sostener la disciplina de la Iglesia, pero que no produce efecto alguno espiritual, cuyo error fué condenado por el papa León X.

Ningún católico puede negar que Jesucristo concedió á su Iglesia la facultad de imponer censuras, puesto que es una verdad de fé, definida por el concilio de Constanza y por León X. Son por otra parte tan claros y terminantes los testimonios bíblicos de esta verdad, que nadie puede ponerla en duda á no negar la autoridad de la Sagrada Escritura.

En efecto, Jesucristo dirigiéndose á S. Pedro, le dice estas significativas palabras: «Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y á tí daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares sobre la tierra, ligado será en los cielos; y todo lo que desatares sobre la tierra, será también desatado en los cielos (2).

»Si tu hermano (3) pecara contra tí, vé y corrígele entre tí y él solo. Si te oyere, ganado habrás á tu hermano. Y si no te oyere, toma aun contigo uno ó dos, para que por boca de dos ó de tres testigos conste toda la palabra. Y si no los oyere, dilo á la Iglesia. Y si no oyere á la Iglesia, tenlo como un gentil y un publicano.

»En verdad os digo que todo aquello que ligáreis sobre la tierra, ligado será también en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra, desatado será también en el cielo.»

Las palabras que se dejan consignadas prueban evidentemente que la Iglesia tiene potestad para imponer censuras, porque después de concedérsela la infalibilidad y perpetuidad, dá á

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 12.

(2) S. Math., cap. XVI, vv. 18 y 19.

(3) S. Math., cap. XVIII, vv. 15, 16, 17 y 18.

Pedro su cabeza visible, y en él á sus sucesores los romanos Pontífices, autoridad para atar y desatar, cuya facultad se extiende á los apóstoles y á los obispos sus sucesores, previniendo además que se tenga por gentil y publicano, ó sea excluido de la Iglesia, al que no obedezca y se someta á lo que esta disponga; todo lo cual es una demostración de que la Iglesia y sus pastores tienen autoridad para imponer censuras ó penas que privan al hombre de ciertos bienes espirituales.

De esta potestad usó S. Pablo contra el incestuoso de Corinto á quien entregó á Satanás para mortificación de la carne á fin (1) de que se salvara su alma; y lo mismo hizo con Hymeneo y Alejandro que habían naufragado (2) en la fé, para que aprendieran á no blasfemar, dogmatizando contra la doctrina de Jesucristo.

El Apóstol los excomulgó, que esto significan las palabras *entregar á Satanás* para su enmienda y corrección, haciendo uso de la potestad recibida de nuestro Señor Jesucristo como él mismo dice (3).

De este mismo derecho hizo mención en su carta segunda á los Tesalonicenses, manifestándoles entre otras cosas «que si alguno (4) no obediere á lo que ordenamos por nuestra carta, notadle á este tal, y no tengáis comunicación con él para que se avergüence.»

Otros muchos textos bíblicos (5) prueban esto mismo; así

(1) Carta 1.^a á los Corintios, cap. V, v. 5.

(2) Carta 1.^a á Timoteo, cap. I, v. 19 y 20.

(3) Carta 1.^a á los Corintios, cap. V, v. 4.

(4) Cap. III, v. 14.

(5) En la carta primera á los Corintios, cap. IV, v. 21, se leen estas palabras: «¿Qué queréis?» ¿Iré á vosotros con vara, ó caridad y con espíritu de mansedumbre? Y en el cap. X, v. 6 y siguientes de la segunda carta á los mismos Corintios, dice: «Y teniendo á la mano el poder para castigar toda desobediencia cuando fuere cumplida vuestra obediencia,» y enseguida les advierte que no es su objeto aterrarles por escrito, porque «cuales somos en la palabra por cartas estando ausentes, tales seremos en el hecho cuando estemos presentes.»

es que los sucesores de los Apóstoles nunca dudaron de esta facultad, y la pusieron en ejercicio siempre que lo conceptuaron necesario para la conservación de la fé, sostenimiento de las buenas costumbres y defensa de la disciplina eclesiástica, como lo demuestran las actas de los concilios generales y particulares, y los escritos de los (1) Santos Padres.

Además la Iglesia es una sociedad establecida y fundada por Jesucristo, y en este concepto no puede ménos de hallarse autorizada para expeler y arrojar de su seno á los individuos ó miembros corrompidos que la sean perjudiciales; puesto que toda sociedad bien organizada tiene esta potestad como medio indispensable para llenar su objeto y obtener el fin de su institución (2).

Si el poder civil tiene también este derecho.—La privación de bienes espirituales, que procede de las censuras en el sentido expresado, sólo puede imponerse por la autoridad eclesiástica, sin que el poder civil tenga facultad alguna en esta materia, á ménos que el Sumo Pontífice se la conceda (3).

Personas en quienes existe esta facultad por derecho ordinario.—Acerca de este punto me limito á las indicaciones siguientes:

a) El Sumo Pontífice tiene facultad de imponer censuras respecto á toda la Iglesia (4), lo mismo que los Concilios generales.

b) Los arzobispos y obispos en sus respectivas diócesis á sus súbditos (5).

(1) Véase á DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XVIII, pár. 3.^o, nota 2.^a

(2) Véase el lib. I, tít. I, cap. VII y VIII de esta obra.

(3) C. VI, dist. 96.—Cap. X, tít. II, lib. I *Decret.*—Cap. VI, tít. XXXIII, lib. I *Decret.*

(4) Cap. I, tít. VIII, lib. I *Extravag. commun.*

(5) Cap. I y XVI, tít. XXXI, lib. I *Decret.*—Cap. VII, tít. XVI, lib. I *sext. Decret.*—Cap. XXI, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

c) Los cardenales en las iglesias de sus respectivos títulos (1), y los legados *à latere* en las provincias de su legación (2).

d) El cabildo ó vicario capitular, *sede vacante*, y el Vicario general del obispo (3).

e) Los prelados ó presidentes de las colegiadas, y todos los que ejercen jurisdicción eclesiástica en el fuero externo (4).

f) Los generales, provinciales y superiores locales de los institutos religiosos, en virtud de privilegio anejo perpetuamente á su oficio (5).

g) Los concilios nacionales y provinciales, los capítulos generales y provinciales de algunos institutos religiosos (6).

Si los párrocos pueden imponer censuras.—Los párrocos podían en otro tiempo imponer censuras á sus feligreses en virtud de la potestad y jurisdicción externa de que (7) estaban adornados; pero hace ya muchos siglos que su jurisdicción ordinaria está limitada al fuero interno ó de la conciencia.

Otros creen, que los párrocos nunca tuvieron jurisdicción en el fuero externo por derecho común y que si algunos la

(1) Cap. XI, tit. XXXIII, lib. I *Decret.*

(2) Cap. VII, tit. XXX, lib. I *Decret.*—Cap. II, tit. XV, lib. I *sext. Decret.*

(3) Cap. únic., tit. XVII, lib. I *sext. Decret.*—Cap. VII, tit. XI, lib. V, *sext. Decret.*—Cap. II, tit. IV, lib. I *sext. Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XVI *De Reformat.*

(4) Cap. X, tit. XXXIII, lib. I *Decret.*—Cap. VIII, tit. XXXV, lib. III *Decret.*

(5) Cap. XX, tit. XL, lib. V *Decret.*—Cap. I, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXIX, pár. 1.^o, núm. 13.

(7) Así consta de una decretal de Alejandro III del año 1170, en la que dice al obispo de Florencia lo siguiente: «Cum ab ecclesiarum praelatis ecclesiastica sententia in malefactores aliquos promulgatur, rata debet et firma consistere, et usque ad dignam satisfactionem inviolabiliter observari. Quapropter mandamus, quatenus, si quando plebanus sancti P. in clericos vel laicos parrochianos suos interdicti vel excommunicationis sententiam rationabiliter tulerit, ipsam facies inviolabiliter observari, et eam sine congrua satisfactione, et absque ejusdem plebani conscientia non relaxes.» Cap. III tit. XXXI, lib. I *Decret.*

ejercieron, fué por privilegio especial, como en el caso citado (1).

Casos en que los obispos pueden imponer censuras á sus súbditos hallándose fuera de la diócesis.—

El obispo, y lo mismo las demás autoridades á excepción del romano Pontífice, no pueden ordinariamente imponer censuras sinó en su diócesis, porque es acto de jurisdicción contenciosa, y en estas materias sólo pueden conocer dentro del territorio que les está sábiamente designado.

Sin embargo, el obispo que se halla fuera de su obispado podrá imponer censuras á sus súbditos en los casos siguientes:

1.º Cuando la contumacia del delincuente es tan pública y manifiesta, que no hay necesidad de formar expediente, lo mismo que cuando ya ha conocido del delito dentro de su propio territorio.

2.º Si la censura se impone por precepto ó estatuto sinodal, porque en este caso y en el anterior no hay necesidad de estrépito forense, que es la razón y fundamento de prohibírsele ejercer estos actos fuera de su obispado.

3.º También puede imponer censuras hallándose fuera de la diócesis, cuando se le ha expulsado injustamente de ella; porque no puede privársele sin culpa de su derecho.

En este caso ha de pedir permiso al *ordinario* de la diócesis ó territorio donde se halle; pero llenando este requisito, puede obrar aunque se le haya negado la licencia, según declaró Clemente V en el concilio de Viena (2).

Si podrán imponer censuras á súbditos ajenos.

— Como el ejercicio de la potestad episcopal no puede extenderse á otras personas ó lugares que los comprendidos en sus diócesis, es regla general que los obispos no pueden ejercer actos de jurisdicción en diócesis ajena sobre súbditos propios, ni sobre súbditos ajenos en la propia diócesis.

(1) FAGNANO: *In lib. I Decret. De officio ordinarii*, cap. *Cum ab Ecclesiarum*, número 4.º

(2) Cap. único, tít. II, lib. II, *Clementin.*

Esto no obstante, podrá usar de su jurisdicción y por lo mismo imponer censuras dentro de su diócesis á súbditos ajenos en los casos siguientes:

1.º El obispo puede imponer censuras á súbditos ajenos cuando delinquen en su diócesis, porque quedan sujetos á él por razón del delito, y por la misma razón puede usar de este derecho con los súbditos propios que consumaron en otra diócesis el delito á que dieron principio en la propia.

2.º Puede por último imponer censuras al clérigo que faltando á la *residencia* (1) se hálle fuera de la diócesis, porque entonces se atiende no al lugar donde se halle, sinó al del beneficio que posee y donde está obligado á vivir, mientras conserve el oficio ó beneficio, porque éste le liga y sujeta al obispo ú *ordinario* del territorio en que radica.

Si los que tienen jurisdicción ordinaria pueden delegarla.—Todos los que tienen jurisdicción *ordinaria* pueden delegarla, porque así lo exige la naturaleza misma (2) de la potestad con que están investidos.

Cualidades necesarias en el sujeto á quien se delegue.—Las autoridades que tienen jurisdicción ordinaria, pueden delegarla según se ha dicho; pero no es arbitrario en ellos conceder esta potestad á todos indistintamente, y por esta razón ha de tenerse presente:

(1) «Clericos in ecclesiis tuæ jurisdictionis beneficia quæ residentiam exigunt, assecutos, si ad alterius diocesim absque licentia tua morandi causa transierint, liceat tibi, si moniti non redierint, dictis beneficiis (nisi excusationem rationabilem ostenderint) spoliare. *Cap. XVII, tit. IV, lib. III decret.*

(2) A propósito de la doctrina expuesta en el texto y en su confirmación, conviene advertir que Bonifacio VIII dió en el año 1299 la decretal siguiente: «Cum episcopus in sua tota diocesi jurisdictionem ordinariam noscatur habere, dubium non existit, quin in quolibet loco ipsius diocesis non exempto, per se vel alium possit pro tribunali sedere: causas ad ecclesiasticum forum spectantes audire: personas ecclesiásticas (cum earum excessus exegerint) capere, ac carceri deputare: necnon et cætera, quæ ad ipsius spectant officium, libere exercere.» *Cap. VII, tit. XVI, lib. I sexti decret.*

a) Es condición indispensable en las personas para que puedan imponer censuras con jurisdicción delegada que tengan uso de razón en el acto de recibir esta facultad, porque de otro modo faltaría la aceptación indispensable al efecto (1).

b) Que esté bautizado y haya recibido la primera tonsura, siempre que no haya contraído matrimonio.

c) El Sumo Pontífice puede delegar esta facultad á los seglares ó clérigos casados y aun á las mujeres según la opinión más probable.

Personas á quienes no puede delegarse.—No pueden imponer censuras con jurisdicción delegada los siguientes:

a) Los herejes ó cismáticos, suspensos ó excomulgados *nominatim*, porque estos delitos les privan del ejercicio de toda jurisdicción eclesiástica, y en igual caso se encuentran los públicos percusores de clérigos (2).

b) Los religiosos no tonsurados, aun cuando sean profesos, son incapaces de obtener dicha facultad, á no mediar delegación especial de Su Santidad.

c) El casado aun cuando sea tonsurado ó haya recibido los órdenes menores, y lleve hábito clerical, sirva en alguna iglesia, goce del privilegio del canon y del fuero, á no mediar dispensa pontificia (3).

d) Las mujeres no pueden imponer censuras con potestad ordinaria ni delegada, porque son incapaces de obtener jurisdicción eclesiástica por derecho común, sea cual fuere la dignidad en que se hallen constituidas.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret. tit. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 14.

(2) Se dice en el texto que los herejes, cismáticos, excomulgados y suspensos no pueden imponer censuras si se les ha declarado como tales *nominatim*; porque si están tolerados podrán válida aunque ilícitamente imponer censuras; puesto que la Iglesia les conserva la jurisdicción por el bien público y general de los fieles. Pero el percusor público de un clérigo queda por el mismo acto privado de toda jurisdicción, de modo que en este caso no es preciso que sea declarado *nominatim*, como en los anteriores.

(3). SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid.

A este propósito decía Inocencio III, que «aunque la beatísima Virgen María era más digna y excelente que todos los Apóstoles, sin embargo, el Señor no la encomendó las llaves del reino de los cielos (1).

Dicho Papa expidió esta decretal el año 1214, con motivo de haber llegado á sus oídos que las abadesas bendecían á sus propias religiosas, las oían en confesión y se creían autorizadas para predicar en público, y por esto prohíbe semejante práctica como absurda y opuesta al derecho divino.

Suele citarse en oposición á la doctrina que dejó consignada el real monasterio de las *Huelgas* de Búrgos, y se afirma como un hecho indudable que la abadesa de este convento impone censuras y ejerce otros actos de jurisdicción; pero ha de tenerse presente, que el R. P. Fr. Antonio de S. José, de la Orden de Carmelitas descalzos, desempeñó por muchos años el cargo de confesor en dicho monasterio, cuya circunstancia era motivo bastante para hallarse enterado del régimen y gobierno de aquel convento. Pues bien, este docto religioso dice que la expresada abadesa impone censuras, absuelve de ellas, concede dimisorias y expide licencias para oír en confesión en el territorio á ella sujeto, pero que todos estos actos los ejerce por medio de un clérigo asesor.

Reglas que han de tenerse presentes.—Acerca de las personas que pueden imponer censuras por autoridad delegada habrá de tenerse presente:

1.º Que la autoridad delegada termina en este caso por muerte del delegante, á no ser que el delegado hubiere empezado á conocer de la causa, porque entonces puede continuarla hasta su fallo definitivo.

Se entiende que el juez empieza á conocer de una causa desde el acto de la citación (2).

(1) Cap. X, tit. XXXVIII, lib. V *Decret.*

(2) El papa Lucio III contestando á una consulta del arzobispo de Cantoberi y sus sufragáneos, les dice en 1183 que por muerte del delegante no espira la jurisdicción del delegado «coram quo lis erat contestata. Si vero ante litis contes-

2.º Que el delegado no puede subdelegar á no mediar licencia expresa del delegante, ser delegado del Papa (1), ó tener delegación *ad universalitatem causarum*, en cuyos casos puede subdelegar en otros.

Condiciones necesarias en la persona para imponer censuras.—Es de necesidad por parte de la persona que las impone que reuna en sí las condiciones ó circunstancias siguientes:

- a) Potestad ordinaria ó delegada en el acto de usar de ellas.
- b) Que las imponga *voluntariamente y modo humano* (2) *dentro del propio territorio*, porque nadie puede ejercer jurisdicción contenciosa fuera de su territorio, áun cuando sea en súbdito suyo; á ménos que la contumacia de éste sea notoria y manifiesta, ó haya conocido ya de la causa en el propio territorio, ó el obispo haya sido expulsado de su diócesis injustamente.
- c) Que obre *justa y lícitamente*; de modo que no se halle él ligado con censura ó inhabilitado por ley ó precepto del superior para imponerla, ni obre en esto por odio ó venganza.
- d) Que proceda *con circunspección y sóbriamente* (3).

«tationem decessit, non est a iudicibus, quos delegaverat, ex delegatione hujusmodi procedendum.» *Cap. XIX, tit. XXIX, lib. I Decret.*; pero en el cap. XX del mismo título y libro se cita una decretal dada por Urbano III en 1186, cuyo epígrafe dice: «Si delegatus citavit ante mortem delegantis, perpetuata est ejus jurisdictio;» y funda el Papa su resolución en que «citatione facta, negotium sit quasi coeptum, et maxime si delegatus non sit certus de obitu delegantis.»

(1) «Si pro debilitate, vel pro qualibet alia gravi causa, vel necessitate tractandis causis, quæ tibi a Sede apostolica committentur, interesse non poteris: liberum tibi sit personis discretis et idoneis vices tuas committere: Ita tamen, quod si res tanti est, te consulere debeant, nisi forte causæ ita graves sint, quod sine præsentia tua non possint commode terminari.» *Cap. III, tit. XXIX, lib. I Decret.*

(2) *Cap. LIV, tit. XXXIX, lib. V Decret.*

(3) *Cencil. Trid.*, sesión 25, cap. III *De Reformat.*

ARTÍCULO III.

DEL SUJETO DE LAS CENSURAS ECLESIASTICAS.

Personas sujetas á las censuras de la Iglesia.—

Las censuras eclesiásticas privan de ciertos bienes espirituales á los que incurren en ellas; pero como no todos los hombres están sujetos á la autoridad de la Iglesia, ni son miembros de esta sociedad, y por otra parte existen personas que no han llegado al uso de la razón, ó habiendo llegado al tiempo en que aquella se halla ordinariamente desarrollada, no se encuentran en el pleno ejercicio de sus facultades intelectuales, es indispensable conocer las cualidades ó requisitos necesarios en las personas para que puedan incurrir en las censuras eclesiásticas; puesto que ya se ha tratado en el capítulo tercero de las autoridades que pueden imponerlas.

Las condiciones necesarias para poder incurrir en las censuras eclesiásticas se resumen en el siguiente verso:

Iste viator erit, sacro et baptisinate lotus

Sitque sui compos, liganti subditus esto.

Las censuras eclesiásticas, en este supuesto, sólo pueden imponerse á hombres viadores, bautizados capaces de dolo, y súbditos del que las impone; cuyas circunstancias es preciso explicar para su buena inteligencia.

Hombre ó mujer.—El sujeto debe ser hombre ó mujer, porque los brutos son incapaces de incurrir en censuras.

Cuando se anatematizan ó excomulgan las langostas, orugas, ratones y otros animales nocivos, sólo se trata de execrarlos, pidiendo á Dios su destrucción ó expulsión, y no de una verdadera excomunión ó censura.

En este sentido, Calixto III señaló ciertas preces en el año 1456 contra ciertas calamidades que los pueblos atribuían falsamente á un cometa brillantísimo que apareció entonces en

el firmamento, el cual, reapareció nuevamente el año 1835; pero no excomulgó ni intentó anatematizar al cometa, como ha creído y afirmado no há mucho tiempo cierto célebre astrónomo.

Viador.—Es además necesario que el sujeto de la censura sea *Viador*, porque la potestad de ligar ó atar, dada á la Iglesia, sólo puede ejercerla en los que viven, y por otra parte sólo estos son capaces de corrección.

Verdad es que algunas veces se excomulga á los muertos y se les absuelve; pero en el primer caso únicamente se trata de cierta execración, ó de la declaración de excomunión en que el sujeto había incurrido ántes de su muerte, ó bien de una excomunión indirecta, por la que la Iglesia prohíbe á los vivos sepultar á aquéllos en lugar sagrado, ó que se hagan sufragios públicos y otros oficios cristianos por ellos.

En el caso segundo, ó sea cuando se absuelve á los muertos, esta absolución tiene por único objeto quitar la prohibición, concediendo en su virtud á los vivos facultad de sepultar á aquéllos en lugar sagrado, de orar por ellos y de comunicar con los mismos en los sufragios públicos. En el sentido expuesto ha de entenderse el cap. VI, *quest. II*, causa XXIV, part. II *decreti*: y el cap. XXVIII, tít. XXXIX, lib V *decret.*, cuyo epígrafe, ó sea el sumario del capítulo, dice así: *Excommunicato decedenti in excommunicatione, quantumcumque contritus decesserit, non est communicandum ante absolutionem, nec pro eo orandum, licet sit quoad Deum absolutus: sed si constat Ecclesie de contritione præcedenti, absolventur etiam post mortem ab eo à quo vivus fuerat absolvendus: et hæc des ejus compelluntur per Ecclesiam ad satisfaciendum pro eo.*

Bautizado.—La censura es acto de jurisdicción eclesiástica, y la Iglesia no tiene esta en los no bautizados; por cuya razón no puede imponer censuras á los gentiles (1) judíos, sarra-

(1) *Epist. 1.ª ad Corinth.* cap. V, v. 12.—*Cencil. Trid.* sesión 14, de *pænitent. sacramento*, cap. II.

cenos, ni á ninguno que no está bautizado; pero puede usar de este derecho respecto á los herejes (1) apóstatas y cismáticos, porque sus delitos y desobediencia no pueden destruir ó limitar el derecho que la Iglesia tiene sobre ellos, y á veces convendrá emplear con ellos este remedio espiritual para que vuelvan á la fe y comunión que abandonaron.

Capaces de dolo.—Como las censuras suponen culpa en el sujeto, es claro que éste ha de tener uso de razón, y que los párvulos y los dementes perpetuos no pueden incurrir en censuras; pero si los furiosos, ebrios, etc. (2), por el delito cometido hallándose en el uso de sus facultades intelectuales en el instante de ejecutar aquel, aunque en el acto de aplicarse las censuras carezcan de razón.

Si los impúberes pueden incurrir en censuras.—

Los teólogos disputan sobre si los impúberes, capaces de dolo, ó que tienen uso de razón, pueden ser ligados con censuras; y aunque es indudable que tales sujetos hacen más caso de los azotes que de las censuras, no puede desconocerse que reunen en sí las circunstancias necesarias para que puedan incurrir en dichas penas, porque si Dios castiga los pecados de los impúberes, como es incuestionable, ¿qué razón existe para que la Iglesia no pueda imponerles censuras?

Ademas, el concilio de Trento (3) impone la pena de excomuni6n sin distinción de edad, á los que entren en los monasterios de religiosas, sin6 media licencia escrita del obispo ó superior.

Gregorio IX dispuso en el año 1231 que los percu6res de

(1) C. V, dist. 45.—Cap. III, tít. XLII, lib. III *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. V Decret.,* tít. XXXIX, párrafo 1.º, núm 38.

(3) Cap V de *regularib. et monialib. Sesión XXV.* «Ingressi autem intra septa monasterii nemini liceat, cujuscumque generis, aut conditionis, sexus, vel ætatis fuerit, sine episcopi, vel superioris licentia, in scriptis obtenta, sub excommunicationis pœna ipso facto incurrenda.»

clérigos (1) incurren en excomunión *latæ sententiæ* reservada á la Santa Sede ó á su legado, sin que puedan ser absueltos por el obispo, sinó en los casos que expresa, entre los cuales menciona á los párvulos, y dicho Pontífice se expresa aún más terminantemente en su decretal del año 1237, (2) y dice: *Pueris qui in canonem inciderunt sententiæ promulgatæ, sive ante, sive post pubertatem postulent se absolvi, potest diæcesanus episcopus absolutionis beneficium impertiri: cum propter defectum ætatis, in qua fuit commissus excessus, rigor sit mansuetudine temperandus.*

De todo lo cual resulta que los impúberes incurren en la excomunión impuesta contra los que penetran en los monasterios de monjas ó hieren gravemente á algún clérigo; pero nótese que las censuras impuestas de un modo general, ya sean *á jure* ó *ab homine* no comprenden á los párvulos, si no se expresa lo contrario, en consideración á su tierna edad, y por esta misma razón no están obligados á denunciar ó delatar en virtud de *monitorio* al autor del crimen ó del delito cometido (3).

Súbdito del que la supone.—La censura es acto de jurisdicción, y como tal no puede ejercerse sinó en los súbditos; y en su consecuencia nadie podrá ligarse á sí mismo con censuras, porque esto equivaldría á ser juez y reo en una misma causa, ni tampoco al superior ó igual, porque ni aquél ni éste son súbditos.

Quiénes no pueden incurrir en censuras.—No pueden incurrir en censuras los siguientes:

El Papa.—El Papa no puede incurrir en censuras, porque no tiene en la tierra ningún superior; y únicamente será objeto de ellas según varios doctores, si se hace hereje, á ser esto posible, en cuyo caso puede ser juzgado y condenado por el Concilio general. Así se desprende del C. 6, *distinción XL*, en el que se

(1) Cap. LVIII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) Cap. LX del título y libro expresados.

(3) S. Alfonso de Liguero, *Theolog. mor.*, lib. VII, *dubium III*, núm. 14.

habla del Papa negligente en el cumplimiento de obligaciones, que no mira por su salvación ni por la de los demás, y añade: *hujus culpas istis redarguere præsumit mortalium nullus: quia cunctos ipse judicaturus, a nemine est judicandus, nisi deprehendatur a fide devius.*

Se dice que el Papa puede incurrir en censuras en el caso de hacerse hereje; lo cual sólo podrá verificarse en los actos emanados del mismo como persona particular y no como Vicario de Jesucristo, en cuyo concepto tiene la asistencia divina para no errar en nada de cuanto se refiere á la fé y á las costumbres como siempre se ha creído y profesado, siendo un dogma de fé que el Romano Pontífice es infalible en todo esto, cuando habla *ex cathedra*, según se halla definido por el concilio ecuménico Vaticano.

Los obispos.—Los obispos no quedan ligados con las censuras impuestas por ellos, porque ya se ha dicho que nadie puede ligarse á sí mismo. Tampoco se hallan comprendidos en la suspensión ó entredicho *latæ sententiæ* impuestos generalmente si no se hace mención especial y expresa de ellos.

Inocencio IV, en el concilio de Lyon, celebrádo el año 1245 dice á este propósito: *Quia periculum est episcopis et eorum superioribus* (1), *propter executionem pontificalis officii, quod frequenter incumbit ut in aliquo casu interdicti vel suspensionis incurrant sententiam ipso facto: nos deliberatione provida duximus statuendum, ut episcopi et alii superiores prælati nullius constitutionis occasione, sententiæ sive mandati prædictam incurrant sententiam ullatenus ipso jure; nisi in ipsis de episcopis expressa mentio habeatur.*

Se ve por la anterior decretal, que sólo se exceptúa la suspensión y entredicho, de manera que no incurren los obispos en estas censuras *latæ sententiæ*, si no se hace mención especial ó expresa de ellos; de cuyo beneficio no gozan con respecto á la excomunión, porque de esta no se dice nada, y por lo mismo

(1) Cap. IV, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

habrá que atenerse á la regla general, según la cual quedan ligados con la excomunión *late sententiæ* todos los que cometen el delito á que va aneja.

Los emperadores y reyes.—Los emperadores, emperatrices, reyes, reinas y sus hijos son súbditos en lo espiritual de los obispos ó prelados respectivos; pero éstos no pueden imponerles censuras, porque este derecho está reservado al Sumo Pontífice (1), según la opinión común de los autores.

Este privilegio no se extiende á los ministros de la corona, ni á los consejeros, senadores ó diputados á Córtes, porque ni los autores suponen en ellos este privilegio, ni la potestad episcopal puede restringirse ó limitarse, mientras no existan exenciones legítimas en que se apoyen.

El privilegio en favor de los monarcas se concibe y explica naturalmente, habida consideración á su dignidad suprema, sagrada y singular. Por esto Clemente IV decretó el año 1267 que los favorecidos con indultos apostólicos no podían considerarse exentos de las sentencias (2), en cuya virtud los *ordinarios* imponen las censuras de *excomunión*, *suspensión* ó *entredicho*, á no ser que dichos indultos fuesen otorgados á los reyes, reinas y sus hijos.

Religiosos exentos.—Por la misma razón que los sumos imperantes están exentos de la potestad episcopal en cuanto á las censuras, los religiosos exentos gozan de igual prerrogativa en la parte comprendida en su exención, pero no en aquellas cosas en que dependen del obispo, como v. gr. en la administración de sacramentos. El mismo papa Clemente IV dice, que los indultos apostólicos concedidos á los religiosos *non personarum tantum, sed ordinum privilegiatorum vel locorum ratione*, para que no puedan ser excomulgados ó entredichos.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.* tít. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 40.

(2) Cap. V, tít. VII, lib. V *sext. Decret.*

chos, han de respetarse lo mismo que los otorgados á los reyes (1).

Téngase presente que el Concilio Tridentino (2) dispuso con el objeto de que los *regulares* no despreciasen las censuras episcopales en virtud de su exención de la jurisdicción de los obispos, que dichos *regulares* publiquen y observen en sus iglesias no sólo las censuras y entredichos emanados de la Sede Apostólica, sinó también los promulgados por los *ordinarios* mediante mandato del obispo.

Nuncios y oficiales de la curia romana.—Los oficiales de la curia romana y los nuncios apostólicos no pueden ser ligados con censuras por el obispo de la localidad en donde se hallen, según afirma Scavini (3), fundándose en el capítulo primero de privileg. *in* 6.^o, ó sea en el capítulo I, tít. VII, libro V *sexti decret.* y aunque esto, que dice Scavini parece natural y fundado, debo notar, que Inocencio IV ó el concilio general de Lyon, celebrado en 1245, sólo trata en dicho lugar de la extensión que debe darse á los privilegios concedidos á ciertas personas por la Sede Apostólica. Verdad es que el párrafo primero de dicho capítulo habla del indulto concedido á muchos religiosos para que los obispos ó arzobispos no puedan excomulgar, suspender ó poner entredicho por causa alguna á los monjes; pero nada se dice en concreto respecto á los nuncios y oficiales de la curia romana.

Si los clérigos ó legos delincuentes en su diócesis incurrén en censuras, hallándose fuera de ella.—Los clérigos ó legos que se hallan fuera de la diócesis incurrén en las censuras, si omiten hacer lo que les está prescrito bajo esta pena, v. gr. la residencia, asistencia al Sínodo, restitución de lo hurtado, revelación del delito ó impedimento, etc., por

(1) Libro, título y capítulo citados.

(2) Sesión XXV, cap. XII, de *regular. et monialib.*

(3) *Theolog. mor. de censuris, disput. tertia*, cap. III, nota 1.^a

que delinque allí, en donde no hacen lo que tienen por obligación de hacer.

Si el obispo puede castigar al súbdito que delinque fuera de su diócesis.—El obispo puede castigar, mediante sentencia, á los súbditos que delinquen fuera del territorio, si citados no quieren comparecer ó dar satisfacción, porque entónces hay contumacia; pero no incurren en las censuras *latæ sententiæ*, si son *à jure*, porque son leyes locales y como tales no ligan al que delinque fuera del territorio.

Cuando dichas censuras son *ab homine* se cuestiona entre los autores, si incurren en ellas los que delinquen fuera del territorio, y parece que se debe estar por la opinión negativa, puesto que en una decretal dada por Bonifacio VII en 1301 se dice (1): *Statuto episcopi, quo in omnes, qui fortum commisserint, excommunicationis sententia promulgatur, subditi ejus fortum extra ipsius diocesim committentes, minimè ligari noscuntur: cum extra territorium jus dicenti non pareatur impune.*

Si los extranjeros y peregrinos pueden incurrir en censuras.—Los extranjeros, peregrinos y vagos pueden ser ligados con censuras, mediante sentencia, si el juez eclesiástico les cita ántes de que salgan de la diócesis, en que cometieron el delito y rehusan dar satisfacción, lo cual se confirma por una decretal de Inocencio III dada en 1210 con motivo de la consulta que le hacía un obispo (2), y aun más particularmente respecto al asunto de que se trata por la siguiente declaración del Concilio meldense que dice así (3) *De illis autem, qui de loco*

(1) Cap. II, tít. II, lib. I *sexti. Decret.*

(2) *Postulasti per sedem apost. edoceri, utrum sacerdos habens ecclesiam in una diocesi, et residens in eadem, domicilium vero patrimonii ratione in alia, ibi delinquens, ab eo, in cujus diocesi habeat patrimonium, pro delicto ibidem commisso debeat judicari præsertim in causis, quæ officii sui seu beneficii privationem exposcent? Ad quod breviter respondemus, quod per episcopum, in cujus diocesi deliquit, sententia promulgari poterit in eundem. Seb ab eo, in cujus diocesi beneficium obtinet, erid quoad illud executio facienda, Cap. XIV, tít. II, lib. II *Decret.*

(3) Cap. I, tít. XVII, lib. V *Decret.*

ad locum iter faciunt, et ibi rapinas et deprædationes peragunt, placuit, ut ab illius loci prælato excommunicentur, nec ante ex parochia illa exeant, quam dignè, quæ perpetrarunt, emendent: quoniam excommunicatio proprio episcopo significanda est, ne eos recipiat, antequam illuc redeant, ubi rapinam fecerint, et omnia plenè emendent.

Reglas que han de tenerse presentes.—Acerca de la materia que se viene tratando, habrá de tenerse presente:

1. Los prelados regulares pueden ligar con censuras a sus súbditos donde quiera que estos se hallen.

2. La suspensión y entredicho pueden imponerse a una comunidad, pero no la sentencia de excomunión, porque no es creíble que todos los individuos de una corporación hayan delinquido y no existan entre ellos algunos inocentes. Así consta de una decretal dada por Inocencio IV en 1245, en la que se dice sobre este punto lo siguiente: *In universitatem (1) vel collegium proferri excommunicationis sententiam penitus prohibemus: volentes animarum periculum vitare, quod exinde sequi posset, cum nonnunquam contingeret innoxios hujusmodi sententia irreti-ri: sed in illos dumtaxat de collegio vel universitate, quos culpabiles esse constiterit, promulgetur.*

Sin embargo, el sumo Pontífice puede excomulgar válida y lícitamente á toda una comunidad, si sus individuos han delinquido realmente; pero cualquier otro superior eclesiástico no puede dictar dicha sentencia de excomunión sobre el colegio, comunidad ó cabildo, y únicamente podrá hacerlo sobre sus individuos en particular por modo de precepto ó estatuto, si son merecedores de semejante castigo, porque en este caso se impone la censura contra los contragresores particulares del precepto, y no contra la comunidad ó corporación.

3. Un mismo sujeto puede incurrir simultánea y sucesivamente en muchas censuras, porque así como una persona puede cometer á la vez pecados diversos en especie, número y

(1) Cap. V, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

gravedad, del mismo modo puede contraer muchas censuras, ya por el mismo delito prohibido por distintos superiores, v. gr. por el Papa y por el obispo, ya por la trasgresión de distintas leyes, á las que van anejas censuras del mismo ó distinto género; ó ya finalmente por la repetición de un mismo acto prohibido bajo censura.

ARTÍCULO IV.

DE LAS CAUSAS PARA IMPONER CENSURAS.

Delitos por los que pueden imponerse las censuras.—Después de lo manifestado acerca de las personas y corporaciones que pueden imponer censuras eclesiásticas y de los sujetos que pueden incurrir en dichas penas, procede hablar de los pecados y delitos que pueden ser objeto ó materia de dichas penas, porque no basta haber cometido un pecado ó delito, para que la autoridad use de esta facultad que la Iglesia ha puesto en su mano. Así que las censuras eclesiásticas solo pueden imponerse por—*pecado mortal—consumado ó perfecto en su género—externo—propio—y acompañado de contumacia por parte del sujeto*, cuyas circunstancias se expresan á continuación:

Pecado mortal.—La censura es una pena medicinal que supone culpa en el sujeto á quien se impone, cuyo requisito es tan necesario, que si una persona inocente es ligada con censuras en virtud de lo que resulta de la causa que se le ha seguido, no queda en conciencia sujeto á dicha pena, ni á los efectos que produce, por más que debe conducirse exteriormente como censurado para evitar el escándalo.

La equidad y la justicia exigen que se guarde la debida proporción entre el delito y la pena (1) y como las censuras son generalmente penas (2) gravísimas, no pueden imponerse sinó

(1) Cap. V, tít. IX, lib. V *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 57.

por pecados mortales que sean realmente tales en sí ó por razon de las circunstancias.

La excomunión menor, y la suspensión ó entredicho por breves dias pueden, no obstante, imponerse por un pecado leve ó venial sin que deje de haber la proporción debida entre el castigo y la culpa, porque sólo privan aquellas de algunos bienes espirituales (1).

El mismo Concilio de Trento (2) previene respecto á la excomunión lo siguiente: *Quamvis excommunicationis gladius nervus sit ecclesiasticæ disciplinæ, et ad continendos in officio populos valde salutaris; sobriè tamen, magnaue circumspectione exercendus est: cum experientia doceat, si temerè aut levibus, ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari; et perniciem potius parere, quam salutem.*

Doctrina de Benedicto XIV acerca de este punto.—En todo caso deberá tenerse siempre á la vista la doctrina de Benedicto XIV, que dice: *Suspensionem à divinis (3), seu ab officio, et beneficio, ad longum tempus, atque interdictum etiam personale, nisi partiale sit, sed integrum et totale, nec valide propter culpam, levem, nec prudenter propter lethalem, quæ gravioribus non accenseatur, irrogari. Quamvis igitur episcopus ordinariam potestatem habeat ferendi censuras, easque in unarum constitutionum transgressores decernendi: non tamen expedit, ut hunc suæ potestatis gladium exerat, nisi ad coercenda graviora crimina. Scimus profecto, necesse non esse, ut ante superioris legem, qua aliquid sub censura prohibetur illud jam esset lethaliter malum, sed quandoque contingere, tunc primum graviter malum fieri, cum a superiore prohibetur sub pœna censuræ, quæ certe ejusdem intentionem ostendit obligandi sub mortali; at, non decere, dicimus, ab episcopo aliquid sub gravi præcipi vel prohiberi, statuta in transgressores censura, nisi*

(1) BENEDICTO XIV: *De Synodo diæces.* lib. X, cap. I, núm. 3.

(2) Sesión XXV, cap. III, *De Reformat.*

(3) BENEDICTO XIV, *De Synodo diæces.*, lib. X, cap. I, núm. 3.

materia præcepti, sive ratione sui, sive ratione circumstantiarum, quas inferius indicabimus, talis et tanta sit, ut hanc pœnam exposcat.

Por último, téngase presente que se requiere causa aún más grave para imponer censuras *late sententiæ* que las *sententiæ ferendæ*, sobre lo cual Benedicto XIV se expresa en estos términos (1): *Quod si omnium doctorum consensu, grave et enorme crimen requiritur ad irrogandam censuram, etiam quam vocant comminatoriam, et ferendæ sententiæ; multo sane gravius, et execrabilius esse oportet delictum; ob quod infligatur censura late sententiæ, qua nimirum homo, per solam legis transgressionem, nulla prævia monitione, ejusdem legis ministerio statim perstringitur.*

Consumado y perfecto.—La razón de esta circunstancia se funda en que según la regla del derecho (2), deben restringirse y aplicarse estrictamente las cosas odiosas. Por lo mismo, si se impone v. gr. la pena de excomunión á los homicidas, no incurrirá en ella el que hiere gravemente á una persona, aunque tuviera intención de matarla, ni los que mandan ó aconsejan la ejecución de este delito. Sin embargo, habrá necesidad de tener siempre á la vista la ley, porque si ésta dice terminantemente que se impone la censura á los que mandan, aconsejan ó cooperan al acto principal, v. gr. al duelo, rapto, etc., en este caso todos los expresados incurrirán en ella, porque está clara la voluntad del legislador, y no se amplía su disposición á casos no comprendidos en ella, que es lo que previene la citada regla del derecho

Externo.—Como las censuras pertenecen á la potestad de jurisdicción, y son por lo tanto actos del fuero externo (3) no pueden imponerse sinó por culpas ó pecados manifestados

(1) *De Synodo dioces.*, lib. X, cap. I, núm. 5.

(2) Reg. XV, tít. XII, lib V *sext. decret.*

(3) C. XI, distinc. 32.—C. XX, quæst., 5.^o, causa 2.^a—Cap. II, tít. 31, lib. I *Decret.*—Cap. XXXIII y XXXIV, tít. III, lib. V *Decret.*

exteriormente, porque la Iglesia *non judicat de internis in foro externo* (1), sinó en el tribunal de la penitencia (2).

Propio.—Es necesario para que la excomunión, suspensión ó entredicho personal sean válidas, que se impongan por pecado propio del sujeto á quien se impone; porque el inocente no debe ser castigado por culpas ajenas (3).

Sin embargo, la suspensión y entredicho podrá imponerse (4) á una comunidad (5), mediante el bien común, aunque no hayan delinquido todos y cada uno de sus individuos, porque la suspensión en este caso es más bien *inhabilidad* que *censura*. Así que estas censuras no tienen lugar en los inocentes sinó en cuanto á las funciones y derechos que competen colectivamente á la corporación (6).

Contumacia.—Es tan necesaria la contumacia en el sujeto, que sin ella no puede imponérsele censura alguna por el superior (7). El pecado en sí es la materia remota de la censura, y la contumacia es su materia próxima.

La palabra *contumacia* indica resistencia á los mandatos de la autoridad eclesiástica, y de hecho existe cuando se comete un pecado á pesar de saberse que lleva aneja una censura, porque entonces se falta á la sumisión debida al superior.

(1) *Praelect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 1.^o, núm. 758.

(2) Cap. XXXIV, tít. III, lib. V *Decret.* Allí trata Inocencio III de una consulta que se le hace, y después de manifestar respecto al clérigo que ofrece sus bienes á una iglesia para obtener en ella un canonicato, los casos en que incurre en simonía y cuándo no se halla comprendido en este detestable pecado; añade: «Licet autem taliter duximus respondendum, quia nobis datum est de manifestis tantummodo judicare»

(3) BERARDI: *Comment. in Jus. eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, dissert. 3.^a capítulo IV.

(4) Cap. XV y XVII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(5) Véase lo manifestado en las observaciones de este mismo capítulo.

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.^o, número 45.

(7) Cap. I, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*—Cap. XXIII, tít. XI, lib. V *Decret.*

Ya se deja manifestado que las censuras eclesiásticas no son penas vindicativas, sinó medicinales, que tienen por objeto la corrección y enmienda del pecador; y por esta razón solo se imponen al que delinque después de amonestado. Así que no deben imponerse por pecados meramente pasados, á ménos que se trate del *entredicho* ó *suspensión* que se imponen alguna vez en el concepto de pura pena, ni tampoco por la sola trasgresión del precepto divino (1), natural ó eclesiástico; porque hasta aquí sólo existe la materia remota y es indispensable además que haya contumacia, ó sea materia próxima, que es la desobediencia, desprecio y resistencia á los mandatos de la autoridad eclesiástica (2).

ARTÍCULO V.

SOLEMNIDADES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS CENSURAS.

Las solemnidades de que se trata, preceden, acompañan ó siguen á las censuras.

Precede; la *monición*.

Acompaña; la *sentencia*.

Sigue; la *denuncia* ó *publicación* de hallarse una persona ligada con las censuras.

(1) Cuando hay duda sobre la justicia de la causa que mueve al superior á usar de las censuras, lo mismo que sobre la gravedad de la materia por la que las impone, es necesario someterse en un todo á su exacto cumplimiento, porque consta de un modo claro la autoridad y derecho del superior; y mientras no conste de una manera cierta que falte á su deber en el ejercicio de la potestad, la posesión está á su favor. Téngase además presente, que aun en el caso de ser nula la censura por haberse faltado por el superior á alguno de los requisitos esenciales para que obligue, habrá necesidad de cumplirse exteriormente por el sujeto á quien la impuso para evitar el escándalo siempre que en el fuero externo sea válida sin que suspenda su cumplimiento la apelación interpuesta ante el legítimo superior. Capítulo XX, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párr. 1.º, núm. 55.

Monición previa.—La monición es de necesidad (1) porque la censura se impone por la contumacia y desobediencia actual, no pudiendo decirse que existe en el sujeto, cuando no ha sido amonestado previamente.

Sus requisitos.—Esta monición ha de ser *trina* ó una *pro tribus*, observándose los correspondientes intervalos de tiempo (2), en la inteligencia que es nula la censura, sinó precede una monición por lo ménos (3) ó mejor dicho dos moniciones (4), é ilícita sinó median las tres moniciones ó una *pro tribus* (5).

Si la censura se ha dado contra los participantes ó los que comunican con el excomulgado por el mismo juez, entonces se requiere para su validez la monición trina (6).

Si la monición previa es necesaria en las censuras á jure latae sententiae.—Se incurre en las censuras á jure si son *latae sententiae*, en el acto mismo de cometer el delito que las lleva anejas, y no es preciso que preceda solemnidad alguna, ni que medie declaración ó amonestación de ninguna clase, porque la misma ley ó estatuto es una continua y perenne amonestación.

Esto no obstante, el superior deberá citar al *reo* ántes de pronunciar sentencia declaratoria de la censura en que ha incurrido, por si tiene que alegar alguna cosa en su favor, cuyo requisito no es necesario, cuando el delito es tan conocido y está revestido de tales circunstancias, que no queda al *reo* medio alguno de defensa, ni de excusa racional.

Lo que se acaba de indicar sobre la citación del delincuente y

(1) Cap. XLVIII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. I, IX y XIII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*—Cap. XXVI, tít. XXVIII, lib. II *Decret.*

(2) Cap. IX, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 27.

(4) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. III *De Reformat.*

(5) Cap. V, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(6) Cap. III y XIII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

sentencia declaratoria del juez, sólo se requiere para que el censurado sea considerado como tal en el fuero externo, puesto que en el fuero de la conciencia y ante Dios quedó ligado con dicha censura desde el momento de traspasar el precepto á que iba aneja.

A este propósito dice Benedicto XIV, que para incurrir en las censuras *latæ sententiæ*, *requiri sententiam declaratoriam criminis* (1), *quæ utique est necessaria pro foro externo, in quo nemo est reputandus censura innodatus nisi legitime probetur reus criminis, cui est censura jure ipso alligata: in foro autem interno, et coram Deo, cujus oculis omnia nuda sunt, et aperta, ad incurrendum in censuram latæ sententiæ, nulla est necessaria judicis declaratio, sed sat est, crimen perpetrare, cui illa est annexa: suam quippe contumaciam, et Ecclesiæ contemptum satis aperte manifestat, qui in legem delinquit, quam scit in sui transgressores censuræ vinculum statim, et illico injicere.*

Si será necesaria en las censuras ab homine latæ sententiæ.—Tampoco se requiere declaración alguna del superior para incurrir en las censuras *ab homine* establecidas para precaver un mal futuro (*pro culpa futura*), si son *latæ sententiæ*, por las razones que se dejan apuntadas en la regla anterior; las cuales son en un todo aplicables al caso presente.

Necesidad de la monición en las censuras ferendæ sententiæ.—No se incurre en las censuras *á jure* ó *ab homine pro culpa futura*, si son *ferendæ sententiæ*, sin que medie sentencia especial declaratoria, á cuyo efecto debe citarse al reo para que dé sus descargos y alegue en derecho lo que le convenga.

Lo mismo se dice respecto á las censuras *ab homine* que se imponen *per modum sententiæ* por un delito ó culpa cometida de presente ó en tiempo pasado, como v. gr. cuando se impone la pena de excomunión para que se restituya lo hurtado.

Requisitos para su validez según las Decretales.—En estos casos es necesario por derecho divino, natural y hu-

(1) *De Synodo diocesana*, lib. X, cap. I, núm. 5.

mano que preceda la citación del reo al acto de la sentencia judicial, porque es indispensable para incurrir en la censura, que haya contumacia y ésta no existe cuando no se ha citado al reo para que conteste sobre el hecho ó delito que ha cometido, lo cual debe hacerse, aun cuando el delito sea notorio y manifieste la contumacia, porque ésta ántes de la citación sólo puede existir en el afecto, pero no en el efecto; y no es lo mismo la contumacia contra la ley que existe desde que se traspasa el precepto, que la contumacia contra el juez, la cual sólo existe cuando se desobedece á éste.

Por esta razón, el papa Inocencio IV dispuso lo siguiente: *Sed (1) nec in specie nec in genere pro culpis et offensis præteritis vel præsentibus, excommunicationum sententias absque competentis monitione præmissa promulgent, et si contra præsumpserint, injustas noverint esse illas. Caveant etiam, ut tales sententias excommunicationis, sive specialiter, sive generaliter, in aliquos pro futuris culpis, videlicet si tale quid fecerint, vel etiam pro jam commissis sub hac forma, si de illis intra tale tempus minime satisfecerint, proferre præsumant: nisi mora in exhibenda satisfactione, vel culpa seu offensa præcesserit, quibus merito ad injungendam satisfactionem hujusmodi, et taliter prohibenda similia inducantur, aut alia rationabilis (quam in ipsis sententiis exprimam) causa subsit.*

Verdad es, que en las citadas palabras se dice que son injustas las sentencias que se pronuncian sin la *competente monición*; lo cual indica que serán válidas aunque no medie ésta; pero debe observarse, que aquí se trata no de la monición única, la cual es absolutamente necesaria para la validéz de la sentencia, sinó de la monición trina, necesaria para su licitud (2) ó de la monición (3) *una pro tribus*.

(1) Cap. V, tit. XI, lib. V *sex. Decret.*

(2) Véase á S. Alfonso Ligorio, *Theolog. mor.*, lib. VII, núm. 58.

(3) Hoy es necesario que precedan al ménos dos moniciones para que se impongan las censuras, según declaró el Concilio de Trento, que en cuanto á esto modificó la doctrina de las decretales; así que sería nula la sentencia en que se impusiera una censura sin preceder dos moniciones.

Decretales de Alejandro III é Inocencio III acerca de este punto.—Para que la censura sea válida es necesario que preceda la monición canónica, según una decretal de Alejandro III en la que dispone *ut nec prælati (nisi canonica commonitione præmissa) suspensionis vel excommunicationis sententiam proferant in subjectos, nisi fortè talis sit culpa, quæ ipso suo genere suspensionis vel excommunicationis pœnam inducat* (1).

El papa Inocencio III se expresó sobre la misma materia aún con mayor claridad en el año 1216; y dispuso en el concilio IV de Letrán lo siguiente: *Sacro approbante concilio prohibemus* (2), *ne quis in aliquem excommunicationis sententiam nisi competenti admonitione præmissa, et personis præsentibus idoneis, per quas (si necesse fuerit) possit probari monitio, promulgare præsumat: quod si contra præsumpserit, etiamsi justa fuerit excommunicationis sententia, ingressum Ecclesiæ per mensem unum sibi noverit interdictum, alia nihilominus pœna mulctandus, si visum fuerit expedire.*

De las dos citadas decretales, y principalmente de la última, aparece que la monición canónica es tan necesaria para la imposición de censuras, que no mediando ella es nula la sentencia en que se impongan; así que S. Alfonso Ligorio, después de citar la opinión de distintos autores y sus fundamentos, considera como necesaria dicha monición para que sea válida la sentencia en que se imponen censuras, y funda ésta doctrina en que la Iglesia no tiene facultad de imponerlas sinó á los contumaces, en cuyo caso no puede decirse que se hallan los que no han sido amonestados previamente y con antelación á la sentencia del juez (3).

Requisitos para su licitud según el Derecho de las Decretales.—Para que la censura impuesta por sentencia judicial sea lícita, debe, según las decretales, preceder la moni-

(1) Cap. XXVI, tit. XXVIII, lib. II *Decret.*

(2) Cap. XLVIII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(3) S. LIGORIO: *Theolog. mor.*, lib. VII, núm. 53.

ción trina, la cual existe, cuando el reo es amonestado tres veces, mediando un intervalo prudente entre cada una de ellas, según la diversidad de los negocios y de las circunstancias; y aunque ordinariamente deberá mediar el espacio de dos ó tres días al ménos entre cada una de dichas tres moniciones, podrá, sin embargo, reducirse al intervalo de un día ó de algunas horas cuando exista causa que así lo exija.

También será válida y lícita, según las decretales, la sentencia á la que ha precedido una sola monición canónica, siempre que el juez haya manifestado en ella que vale por tres v. gr. *Admoneo te pro tribus vicibus*; pero en este caso habrá de conceder el espacio de tiempo correspondiente á las tres moniciones, ó sea el intervalo que debe mediar entre cada una de aquellas. Mas si el caso fuere urgente, y hubiere peligro en conceder estas dilaciones, bastará una sola monición por las tres sin necesidad de los tres espacios de tiempo bastando al efecto que se fije por el juez un término.

El papa Gregorio X decretó en 1273, en uno de los concilios generales de Lyon, lo siguiente (1): *Constitutionem felicitis recordationis Innocentii Papæ quarti, prædecessoris nostri, quæ prohibet participantes excommunicatis ea participatione, quæ solam minorem excommunicationem inducit, monitione canonica non præmissa, majori excommunicatione ligari, decernens, promulgatam aliter excommunicationis sententiam non tenere: ad tollendum omnem ambiguitatis scrupulum declarantes decernimus, ita demum esse monitionem canonicam in hoc casu, si aliis rite servatis, eos, qui monentur, exprimat nominatim. Statuimus quoque, ut inter monitiones, quas (ut canonice promulgetur excommunicationis sententia) statuunt jura præmitti, judices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus, observent aliquorum dierum competentia intervalla: nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda.*

(1) Cap. IX, tit. XI, lib. V. sect. Decret.

Disposición del concilio de Trento sobre esta materia.—La citada decretal es muy expresiva (1) y comprende todos los extremos que se dejan expresados; y no se halla derogada, pero sí modificada por el concilio de Trento, en el que se dispone que hayan de preceder al menos dos moniciones para la imposición de las censuras (2); cuyas palabras son tan claras, que no se comprende como los autores moralistas sigan sosteniendo como cosa corriente la doctrina de las decretales sobre la monición trina ó *una pro tribus* sin tener en cuenta que hoy son necesarias dos moniciones al menos, puesto que dicho concilio de Trento dice terminantemente: *Sed si dictæ executioni facile locus esse non possit; licebit judici hoc spirituali gladio in delinquentes uti; si tamen delicti qualitas, præcedente bina saltem monitione, etiam per edictum, id postulet.* En todo lo demás se observará lo que se manda en las decretales trascritas.

Solemnidad que acompaña á las censuras.—La solemnidad que acompaña á las censuras es la sentencia judicial, que habrá de reunir los requisitos siguientes—*Día hábil—dictarse por escrito—persona á quien se impone—causa por la que se impone—testimonio en legal forma al delincuente de la sentencia—ha de pronunciarse ante testigos y á presencia del delincuente.*

Necesidad de que la sentencia se dicte en día no festivo.—Los jueces eclesiásticos no pueden imponer censuras por sentencia judicial, ni actuar en asuntos contenciosos en días festivos. Respecto á los domingos dicen las decretales: *Omnes (3) dies dominicos a vespera in vesperam, cum omni veneratione decernimus observari, et ab omni illicito opere abstinere; ut in eis mercatum minime fiat, neque placitum: neque ali-*

(1) Puede también verse el cap. VI, *quest.* 3.^a, causa 24, part. 2.^a *decret.*, y el capítulo XLVIII, tit. XXXIX, lib. V *decret.*

(2) Sesión XXV, cap. III *De Reformat.*

(3) Cap. I, tit. IX, lib. II *Decret.*

quis ad mortem vel ad pœnam judicetur, nec sacramenta (nisi pro pace, vel alia necessitate) præstentur.

En cuanto á los demás dias festivos el papa Gregorio IX dió en 1232 una decretal en la que señala (1) los dias feriados en que no pueden tener lugar las actuaciones judiciales sobre cuyo punto dice: *Quamvis non prorogari, sed expediri deceat quæstiones: debet tamen judicialis strepitus diebus conquiescere feriatís, qui ob reverentiam Dei noscuntur esse statuti;* y después de consignar las festividades generales de la Iglesia añade: *cæterisque solemnitatibus, quas singuli episcopi in suis diocesisibus cum clero et populo duxerint solemniter venerandas: quibus solemnibus feriis (nisi necessitas urgeat, vel pietas suadeat) usque adeo convenit ab hujusmodi abstineri, ut consentientibus etiam partibus, nec processus habitus teneat, nec sententia, quam contingit diebus hujusmodi promulgari. Licet diebus feriatís, qui gratia vindemiarum vel messium ob necessitates hominum indulgentur, procedi valeat, si de partium processerit voluntate.*

He omitido los dias festivos señalados en dicha decretal, porque en esta parte ha habido disposiciones posteriores que han modificado aquella, y sobre cuyo punto las autoridades eclesiásticas habrán de arreglarse á las disposiciones y reglas particulares del país en que ejercen jurisdicción. Respecto á España ha de observarse lo que se halla dispuesto en el decreto expedido por la sagrada Congregación de Ritos en 2 de Mayo de 1867 (2).

Se ha de consignar por escrito.—Este requisito ha de cumplirse, consignando la persona á quien se impone la censura, la causa en que se funda, dando dentro de un mes contado desde el día que se pidiere, un testimonio auténtico de la sentencia. Todas estas circunstancias están consignadas por Inocencio IV en una decretal que dió en el concilio general de Lyon celebrado en 1245. Su importancia práctica es notoria,

(1) Cap. V, tít. IX, lib. II *Decret.*

(2) Véase el apéndice núm. 1.º de este tomo.

y por lo tanto transcribo literalmente dicha decretal que dice: *Cum medicinalis sit excommunicatio, non mortalis (1), disciplinam, non eradicans, dum tamen is, in quem lata fuerit, non contemnat; caute provideat iudex ecclesiasticus, ut in ea ferenda ostendat, se prosequi, quod corrigentis fuerit et medentis. Quisquis igitur excommunicat, excommunicationem in scriptis proferat, et causam excommunicationis expresse conscribat, propter quam excommunicatio proferatur. Exemplum vero hujusmodi scripturae teneatur excommunicato tradere intra mensem, si fuerit requisitus, super qua requisitione fieri volumus publicum instrumentum, vel litteras testimoniales confici sigillo authentico consignatas. Si quis autem iudicum hujusmodi constitutionis temerius extiterit violator, per mensem unum ab ingressu ecclesiae, et divinis officiis noverit se suspensum. Superior vero, ad quem recurritur, sententiam ipsam sine difficultate relaxans, latorem excommunicato ad expensas, et omne interesse condemnet, et alias puniat animadversione condigna, ut poena docente discant iudices, quam grave sit excommunicationum sententias sine maturitate debita fulminare. Et haec eadem in suspensionis et interdicti sententiis volumus observari. Caveant autem ecclesiarum praelati et iudices universi, ne praedictam poenam suspensionis incurrant: quoniam, si contingeret eos sic suspensos divina officia exequi, sicut prius, irregularitatem non effugient juxta canonicas sanctiones: super qua nonnisi per summum Pontificem poterit dispensari.*

Penas contra el juez que dicta sentencia de palabra.—El juez que impone censuras de palabra y no por escrito, sin causa urgente que se lo impida, queda suspenso *ipso jure* por un mes de la entrada en la Iglesia y de los divinos oficios, haciéndose irregular, si se ingiriese en los divinos oficios dentro del expresado tiempo (2).

(1) Cap. I, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(2) Cap. I, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

Los obispos no se hallan comprendidos en este decreto, puesto que no se hace mención expresa de ellos (1).

Se ha de pronunciar ante testigos.—La sentencia ha de pronunciarse ante testigos según la decretal dada por Inocencio III en el Concilio IV de Letrán. En ella se consignan estas palabras: *Sacro approbante concilio prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi... personis præsentibus idoneis... promulgare præsumat* (2).

A presencia del delincuente.—La sentencia se ha de pronunciar á presencia del delincuente, á ménos (3) que se oculte, ó impida que pueda hacérsele la notificación ó carezca de domicilio, en cuyos casos bastará que se fije en las puertas de la iglesia ó en otro lugar público un edicto en el que se exprese su nombre y la causa por la que se le impone la censura.

Cuando la primera monición se ha hecho al mismo reo, ó puede probarse, que ha llegado á su noticia, entonces pueden hacérsele las demás en su casa, en la iglesia ú otro lugar público sin necesidad de notificárselas personalmente.

Disposición de la ley civil en el procedimiento criminal.—Como las disposiciones canónicas nada precisan acerca de este punto, convendrá que los vicarios se acomoden en España, cuando esto ocurra, á los artículos 166 y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal en la parte relativa á la notificación que debe hacerse al delincuente.

Solemidad que sigue á las censuras.—La solemnidad que sigue á las censuras, es la *denuncia* ó publicación de hallarse una persona ligada con ellas; pero no existe precepto alguno general de denunciar á los que han incurrido en las mismas y por lo mismo la observancia de esta solemnidad ó su omisión queda al prudente arbitrio del superior (4).

(1) Cap. IV, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

(2) Cap. XI, VIII, tit. XXXIX, lib. V. *Decret.*

(3) Cap. V, pár. 1.º, tit. VI, lib. II *Decret.*—Cap. III, tit. III, lib. I *Clementin.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. V Decret., tit. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 33.*

Advertencia.—Las disposiciones canónicas no exigen al juez que observe el orden judicial en los delitos notorios y por lo mismo, no hay necesidad de—acusación ó denuncia—citación ni sentencia por escrito (1).

Si el poder civil podrá inmiscuirse en estas materias.—Los jueces seculares no pueden entender en estas materias, ni aún con el pretexto de la forma en que se ha procedido ó conocido, según la decisión terminante del Concilio de Trento (2) que dice:

«Nefas autem sit seculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico iudici, ne quem excommunicet; aut mandare, ut la- tam excommunicationem revocet; sub prætextu, quod contenta in præsentí decreto non sint observata: cum non ad sæculares, sed ad ecclesiasticos hæc cognitio pertineat.

Esta misma doctrina se ha reproducido últimamente por el papa Pío IX, condenando la proposición 41 del *Syllabus* en la que se enseña que la autoridad civil, aún cuando se ejerza por un infiel, tiene potestad indirecta negativa en las cosas sagradas, compitiéndola el derecho de apelación, *quam nuncupant ab abusu.*

Por la misma razón condenó la proposición 42 que dice: que el derecho civil prevalece cuando existe conflicto entre las leyes de una y otra potestad; y la proposición 44, cuyo contenido es el siguiente: La autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas pertenecientes á la religión, costumbres y régimen espiritual, etc.

Efectos de las mismas censuras.—Estos emanan de las mismas censuras ó son resultados de su violación.

En el primer caso, las censuras, siempre que sean justas, ligan aún para con Dios (3), y por esto, León X condenó la proposición siguiente: *Excommunicationes sunt tantum pænæ externæ.*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., part. 1.^a, tit. 1, pár. 1.^o—BOUXX: *De Judic.*, part. 2.^a, sect. 4.^a, subsect. 1.^a

(2) Sesión 25, cap. III *De Reformat.*

(3) C. VI, quæst. 1.^a, causa 24.

Esta misma verdad se halla sancionada por Pío VI en la bula *Auctorem fidei*.

Las censuras producen además estos tres efectos=

a) La apelación interpuesta de la sentencia en que se impone una censura se admite en un solo efecto, ó lo que es lo mismo, tiene efecto devolutivo, nó suspensivo, y por esta razón la causa pasa al juez superior; pero la ejecución de la sentencia no se suspende (1), porque la ejecución no se distingue de la sentencia en esta clase de derechos espirituales (2).

b) El que ha sido gravado con censura en una diócesis, ha de ser tenido como censurado en toda la Iglesia (3), porque las censuras privan de los bienes de la iglesia considerada como universal, y nó como particular.

c) El que comunica con el que ha sido declarado públicamente incurso en censura, en aquellas cosas que se prohíben por la censura, habrá de ser gravado con una censura igual si conviene á su condición, ó en otro caso con censura de otra especie (4).

Efectos de su trasgresión.—La violación de las censuras produce los efectos siguientes:

a) El que permanece contumaz por un año en la censura (5), si se trata de la excomunión, se dice *insordescens* (endurecido) y es juzgado como sospechoso de herejía (6).

(1) Cap. XIII, XIV y XXXVII, tit. XXVIII, lib. II *Decret.*—Cap. VIII, título XXXI, lib. I *Decret.*—Cap. XX, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 22, cap. I *De Reformat.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 3.^a, cap. X.

(3) Cap. VIII, tit. XXXI, lib. I *Decret.*—C. LXXXII, quæst. 1.^a, causa 1.^a—C. VII, quæst. 1.^a, causa 7.^a—C. II, IV, XXVI y LXXIII, quæst. 3.^a, causa 11.—C. XI y XII apost.—C. XXIV, quæst. 1.^a, causa 7.^a—Cap. XVI, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

(4) C. XIV, quæst. 7.^a, causa 16.

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, *ibid.*

(6) Cap. XIII, tit. VII, lib. V *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 25, cap. III *De Reformat.*

b) El que persevera en el mismo crimen después de la censura, habrá de ser castigado con censuras más graves ú otras penas (1).

c) El que viola la propia censura por el ejercicio del orden incurre en irregularidad (2).

ARTÍCULO VI.

DE LAS CAUSAS QUE EXIMEN DE INCURRIR EN CENSURAS.

Causas que excusan de incurrir en las censuras.

—Las causas por las que no se incurre en las censuras, son las siguientes:—*exención de culpa—ignorancia—miedo grave—impotencia física ó moral—voluntad de la parte en cuyo favor se impuso la censura—si el acto prohibido no fué completo—nulidad de la censura.*

Exención de culpa.—Las censuras son penas gravísimas y como tales suponen culpa grave en el sujeto.—Si éste, pues, no incurre en pecado por cualquiera causa, tampoco contraerá la censura (3) porque todo lo que excusa de culpa, exime por la misma razón de dicha pena. En este supuesto, paso á tratar en particular de las causas por las que el sujeto no incurre en las censuras eclesiásticas.

Ignorancia y sus especies.—Se entiende por ignorancia, *la falta de conocimiento de una cosa.*

La ignorancia puede ser—*invencible—y vencible.*

La ignorancia se llama invencible, cuando el sujeto no tiene conocimiento de una cosa, á pesar de haber practicado por su parte todas las diligencias debidas para llegar á conocer la verdad; y en este supuesto tendrá ignorancia invencible la persona á quien no se ocurrió duda alguna acerca de la bondad ó mali-

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

(2) C. VI y VII, quæst. 3.^a, causa 11.—Cap. I, tít. V, lib. I *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.^o, núm. 75 y sig.

cia de una cosa ni al principio, medio ó fin de su ejecución ó habiéndola ocurrido tal duda, ha puesto los medios y diligencias conducentes para salir de ella.

La ignorancia invencible puede ser—*Del derecho—y del hecho.*

La ignorancia del *derecho* existe, cuando se ignora que haya ley ó precepto prohibitivo del acto, como v. gr. de entrar en los conventos de religiosas.

También existirá ignorancia del *derecho*, si teniendo conocimiento de la ley que prohíbe el acto, se ignora invenciblemente, que lleva anejo una censura; v. gr., Pedro sabe que está prohibido, bajo pecado grave, entrar en los conventos de religiosas; pero ignora, que este acto lleva aneja una censura, ó sea la excomunión.

La ignorancia invencible del *hecho* existe cuando teniendo conocimiento de la ley ó precepto prohibitivo, se ignora que tal ó cual acción es contraria á aquel; v. gr. Pedro sabiendo que está prohibido herir á un clérigo bajo pena de excomunión, dá golpes y maltrata gravemente á Juan, ignorando que fuese clérigo.

Se llama ignorancia vencible, cuando el sujeto carece del conocimiento de una cosa por no haber puesto de su parte las diligencias debidas.

Esta ignorancia puede ser *crasa*, *supina* y *afectada*.

La primera proviene de negligencia ó desidia, como v. gr., quiero saber, pero no estudio, porque soy flojo.

La segunda proviene de ocupación en otros negocios que le impiden poner la diligencia debida en el asunto de que se trata, como v. g., quiero saber las obligaciones propias del párroco, juez ó abogado, pero las ignoro porque me dedico á la caza, pesca ó juego.

La tercera, ó sea la ignorancia afectada, proviene de pura malicia, como v. gr., no quiero saber, si hoy es día de ayuno ó de fiesta, por no cumplir con la obligación de oír Misa ó ayunar, á fin de pecar más libremente.

La ignorancia invencible exime de las censuras.

—La ignorancia invencible del *derecho* ó del *hecho* eximen al sujeto de las censuras, porque en estos casos falta la *contumacia* y desprecio de la censura eclesiástica: así que Bonifacio VIII decretó en 1301 *ut animarum a periculis obvietur* (1), *sententiis per statuta quorumcumque ordinariorum prolati, ligari nolumus ignorantes: dum tamen eorum ignorantia crassa non fuerit aut supina*.

Si la ignorancia crasa ó supina exime de las censuras. — Cuando la ignorancia del *derecho* ó del *hecho* es vencible y gravemente culpable, porque versa sobre una cosa que el sujeto podía y estaba obligado á saber, es necesario conocer los términos empleados por el superior. Si éste impone la censura contra los que ejecutan tal ó cual acción *scienter, temerarie, presuntuose, dolo vel temerario ausu* no se incurre en ella, mediando ignorancia *vencible, crasa ó supina*, porque el superior requiere noticia ó conocimiento de la ley para incurrir en ella.

Cuando el superior emplea términos absolutos ó generales en la imposición de la censura, entonces se incurre en ella ejecutando la acción á que vá aneja, aunque medie ignorancia *crasa ó supina*, según declaró Bonifacio VIII en la decretal que se deja trascrita.

Lo mismo había ya decretado Gregorio IX en 1236, el cual se expresa en los términos siguientes: *Si culpa tua datum est damnum* (2), *vel injuria irrogato, seu aliis irrogantibus opem forte tulisti, aut hac imperitia tua, sive negligencia evenerunt: jure super his satisfacere te oportet, nec ignorantia te excusat, si scire debuisti ex facto tuo injuriam verisimiliter posse contingere, vel jacturam, etc.*

Se incurre en las censuras con ignorancia afectada.—La ignorancia afectada equivale á la ciencia ó conoci-

(1) Cap. II, tít. II, lib. I *sexti. Decret.*

(2) Cap. IX, tít. XXXIV, lib. V *Decret.*

miento de la ley, y por esta razón no exime al sujeto en quien se halla, de incurrir en la censura impuesta.

Miedo grave.—El miedo respectivamente grave, en cuya virtud se ejecuta un acto prohibido bajo la pena de excomunión ú otra censura eclesiástica, exime de incurrir en ella; porque los preceptos de la Iglesia no obligan con tanto detrimento.

Pero si el miedo grave se impusiese en desprecio de la Iglesia y de sus mandatos, ó para ejecutar un crimen gravísimo, entónces el sujeto que ejecuta la acción prohibida bajo censura, incurre en ella; así v. g. el superior ha prohibido bajo excomunión tomar tabaco dentro de la Iglesia, y Antonio burlándose de esta censura, dice á Joaquín que lo preceptuado es un desatino, y que por lo mismo tome tabaco dentro de la iglesia; en la inteligencia que de no hacerlo le va á matar. Si Joaquín toma tabaco por miedo á Antonio incurre en la excomunión, porque el miedo impuesto reconoce por causa el desprecio de la autoridad eclesiástica.

También incurrirá Joaquín en la pena de excomunión, si por miedo á Antonio mata á su obispo, á fin de librarse él de la muerte con que se le ha amenazado por dicho Antonio si no ejecuta este crimen, porque se trata de un mal gravísimo (1).

De la doctrina expuesta se deduce que el miedo grave exime de las censuras impuestas por la Iglesia, ya la cosa mandada ó prohibida sea de derecho eclesiástico, como ayunar en tal día ó fumar en la sacristía; ya de derecho natural ó divino, como la percusión grave de un clérigo; pero existe una diferencia entre los dos preceptos, y consiste en que la trasgresión del precepto eclesiástico por miedo grave exime de la censura y del pecado; y la trasgresión del precepto natural y divino por el mismo motivo exime de la censura, pero no del pecado.

Impotencia física ó moral.—Esta causa se funda en la regla del derecho *Nemo potest ad impossibile obligari* (2); y

(1) S. ALFONSO LIGORIO, *Theolog. mor.*, lib. VII, núm. 46.

(2) Reg. 6.^a, tit. XII, lib. V *sent. decret.*

por esta razón si Antonio debe doscientos reales y no los tiene, ó teniéndolos los necesita para atender á su enfermedad ó la de su familia, ó necesita vender por dicha cantidad una finca ó alhaja que vale cuatrocientos ó mil reales, no incurre en la excomunión que se le impone, si no paga, porque hay impotencia para hacerlo.

Voluntad de la parte interesada.—El deudor á quien se impone la pena de excomunión, si no paga dentro del término que se le ha señalado, no incurre en dicha censura, habiéndosele prorrogado por el acreedor, aún sin haber contado con el juez ó superior que la impuso, porque al señalar el término dentro del cual se había de cumplir con la obligación, iba tácitamente envuelta la cláusula de *á menos que se prorrogue por el acreedor* (1).

Si el acto prohibido no fué completo.—Cuando el acto prohibido bajo censura, no fué consumado ó completo en su género, porque las censuras llevan esta cláusula en términos tácitos ó expresos.

Nulidad de la censura.—Esta nulidad de la censura puede provenir de varias causas, como si el juez es incompetente y no tiene jurisdicción en la persona, ó no observa las solemnidades esenciales del derecho.

En todos estos casos es nula la censura, y lo mismo sucederá cuando el sujeto á quien se impone es inocente, ó no ha habido en él pecado de contumacia.

Es, pues, regla general que el sujeto exento por cualquier motivo de pecado contra la ley eclesiástica, no incurre en las censuras, aunque tenga obligación de conducirse exteriormente muchas veces como excomulgado, suspenso ó entredicho, para evitar el escándalo, según se deja manifestado en el capítulo anterior.

(1) S. ALFONSO LIGORIO, *Theolog. mor.*, lib. VII, núm. 64 y otros autores respetabilísimos.

Si se incurre en la censura, cuando no se ha cumplido la condición aneja á ella ó se apela antes de cumplirse.—Debe tenerse presente en las censuras puestas bajo condición que no se incurre en ellas ántes de cumplirse la condición, y lo mismo sucede cuando se introduce en forma el recurso de la apelación ántes de verificarse aquella, según la notable decretal dada por Celestino III en 1195, cuyo contenido es el siguiente: *Præterea requisiti fuimus (1), si quis iudex ita protulerit sententiam: nisi Sempronio intra XX dies satisfeceris, te excommunicatum, vel suspensum, aut interdictum esse cognoscas: ille, in quem fertur sententia, medio tempore appellans, ad diem statutum minime satisfecerit, utrum ille sententia tali ligatur, aut interpositione appell. tutus existat? Videtur autem nobis, quod huiusmodi sententiam appellationis obstaculum debeat impedire.*

Mas si después de verificada la condición y de haber incurrido por consiguiente en la censura se introdujera apelación no se suspende la censura, porque aquella no se admite sinó en un sólo efecto, según declaró Inocencio III contestando á la consulta de un obispo (2).

Condiciones necesarias en la apelación.—Para que la apelación de la censura impuesta sea legítima, ha de tener las siguientes condiciones:

1.^a Que se apele del juez inferior al superior.

Las apelaciones del Papa al Concilio general son nulas, y fueron condenadas por la Iglesia desde que los herejes emplearon este resorte y acudieron á este ridículo medio para eludir su condenación.

2.^a Que se utilice este recurso dentro del término legal, que es de diez días contados desde la publicación de la sentencia.

Así opinan los decretalistas, fundados en una decretal de Bonifacio VIII (3).

(1) Cap. XL, tit. XXVI, lib. II decret.

(2) Cap. LIII, tit. XVIII, lib. II decret.

(3) Cap. VIII, tit. XV, lib. II sext. Decret.

ARTÍCULO VII.

CESACIÓN DE LAS CENSURAS.

Introducción.

Las censuras propiamente tales en las que el sujeto ha incurrido, no cesan por muerte del superior, ni por la enmienda, dispensa ó muerte del reo, porque son penas espirituales que ligan al alma y duran mientras no se concede su absolución, cuyo acto no puede considerarse como una mera dispensa, porque es realmente el ejercicio de la potestad de jurisdicción ó del poder de las llaves concedido por Jesucristo á su Iglesia.

No sucede lo mismo respecto á la suspensión ó entredicho temporales, que cesan desde el momento de terminado el tiempo por el que fueron impuestas, porque éstas más bien que censuras son penas vindicativas.

También se debe advertir que en las censuras puestas bajo condición no se incurre, si el que las impuso muere antes de que aquella se haya verificado, lo mismo que si el superior muere antes de haberse cometido el delito, á cuya trasgresión impuso una censura, porque su mandato espiró con la muerte del mismo; y en esto se diferencia del estatuto general que manda ó prohíbe alguna cosa bajo censura, el cual persevera en todo su vigor después de la muerte del que la impuso.

La razón de todo esto se funda en que la primera es una censura *ab homine* y la segunda *a jure*. Así v. gr., Pedro después de la muerte de su obispo tomó tabaco en la sacristía, y aunque este acto le había sido prohibido bajo pena de excomunión, no incurrió en dicha censura, porque ésta cesó desde que aquel murió; pero si esta censura fuera *a jure*, entonces Pedro incurriría en la excomunión tomando tabaco en la sacristía después de la muerte de su obispo, porque dicha ley permanecía en toda su fuerza.

Modos de cesar las censuras.—Las censuras eclesiásticas se borran ó cesan por alguna de las causas siguientes (1):

Abrogación, que tiene únicamente lugar en las censuras *a jure*, como si una ley nueva revoca la ley antigua, que imponía censura ó si dicha ley queda abolida por costumbre en contrario, en cuyo caso el que ejecuta el acto prohibido bajo censura por la ley abrogada no incurre en ella; pero si el acto precedió á la abrogación de la ley, es claro que incurrió en dicha pena.

Revocación, la cual tiene solamente lugar en la censura *ab homine*, impuesta por *precepto*, si el superior lo revocó, ó impuesta por *sentencia* que el juez retractó como nula (2).

Casación, y ésta tiene sólo lugar en la censura impuesta por precepto ó por sentencia, distinguiéndose de la revocación en que la casación se hace por el superior mediante apelación ó querella (3).

Muerte del que la impuso, la cual tiene lugar en el caso de que se haya impuesto por precepto: como si el prelado que prescribe á uno bajo censura se abstenga de ejecutar tal ó cual cosa, muere ántes de traspasarse su mandato, el súbdito no incurre en dicha censura por la ejecución del acto prohibido después de la muerte del prelado.

Muerte del censurado, que sólo tiene aplicación á la suspensión y excomunión menor.

Trascurso del tiempo, y esto se refiere á la censura impuesta por tiempo determinado, de lo cual existen ejemplos en el derecho; pero los casos de esta índole deben considerarse mas bien como penitencias y penas, que como censuras.

Absolución, y ésta se concede cuando la censura se ha impuesto con la clausula de que el delincuente no sea admitido á la absolución, sinó después de cierto tiempo.

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, part. 2.^a, dissert. 3.^a, cap. XI.

(2) Cap. XLVIII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. X, tit. XV, lib. II *sext. Decret.*

(3) Cap. I, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

Absolución de censuras.—La absolución de censuras puede considerarse en los conceptos siguientes:

- 1.^o Por razón del fuero, en que se concede.
- 2.^o Por razón del modo con que se otorga.
- 3.^o Por razón de la persona á quien se concede.
- 4.^o Por razón de la persona que la concede.

Absolución por razón del fuero.—El fuero de la Iglesia es—*interno*—y *externo*.

La absolución de la censura puede ser, por lo mismo, en el fuero interno y en el fuero externo.

Su forma.—La absolución de censuras habrá de hacerse con la forma adecuada á cada uno de los casos en que tiene lugar y á este efecto se fija á continuación la que corresponde á cada caso (1).

En el fuero interno.—Si se trata de la absolución de censuras en el fuero interno ó de la conciencia, se empleará la forma común ó sea la usada en la misma absolución sacramental, con intención manifestada al penitente de absolverle de aquella censura especial en que ha incurrido (2).

La forma común en el sacramento de la penitencia designada por el ritual romano es la siguiente: *Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducatur te ad vitam æternam. Amen: Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum tuorum tribuat tibi omnipotens et misericors Dominus. Amen. Dominus noster Jesus Christus te absolvat; et ego auctoritate ipsius te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Deinde, ego te absolvo á peccatis tuis, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Passio Domini N. J. C., merita B. M. virginis et omnium sanctorum, quidquid boni feceris et mali sustinueris, sit tibi in remissionem peccatorum, augmentum gratiæ et præmium vitæ æternæ. Amen.*

(1) Puede verse al P. Mach, Tesoro del sacerdote, 10 edición, pág. 519 y siguiente.

(2) SCAVINI: *Theolog. moral.*, lib I. núm. 997, edit. 13.

Esta absolución solo vale en el fuero interno (1).

En el fuero externo.—Si la absolución tiene lugar en el fuero externo, entonces se empleará la forma señalada al efecto por el superior; pero en el caso de no prescribirse por este, se empleará la forma siguiente: *Dominus noster Jesus Christus te absolvat, et ego auctoritate ipsius et S.S. Domini nostri papæ N. (vel reverend. episcopi N.) mihi concessa, absolvo te á vinculo excommunicationis, suspensionis, etc., quam incurristi propter N.* (Aquí se expresa la causa) y si es de un excomulgado, se añade: *et restituo te communioni et unitati fidelium et sanctis sacramentis Ecclesiæ; in nomine Patris, etc.* (2).

Si la absolución es de la suspensión se añade después de las palabras *restituo te: executioni tuorum ordinum vel officiorum; in nomine Patris, etc.* (3).

En la absolución del entredicho se dice después de las palabras *restituo te: participatione divinatorum. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

Observaciones.—Se deja consignada la forma ordinaria empleada en la absolución de censuras y ahora debo advertir para mayor esclarecimiento de este punto—

1. La fórmula de absolución fué deprecativa en la antigüedad; pero desde el siglo XIII se emplea la forma indicativa.

2. Para la validéz de la absolución no se requieren determinadas palabras, bastando al efecto que se empleen palabras expresivas de la voluntad de absolver (4), sin que haya necesidad de manifestar la causa por la que se incurrió en la censura.

3. Es indiferente para la validez en la absolución de censuras, que aquella se verifique de palabra ó por escrito.

4. El rito que ha de observarse en la absolución judicial se halla prescrito en el ritual y pontifical romano, señalándose allí

(1) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XII, cap. I, núm. 7.

(2) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. I, núm. 997.

(3) S. ALFONSO DE LIGORIO: *Theolog. mor.*, lib. VII, pár. 116, núm. 1.^o

(4) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 2.^a, dissert. 3.^a, cap. XI.

y en las Decretales la forma respecto á la absolución del excomulgado ya difunto (1).

La omisión de dicho rito no produce nulidad del acto, ni es gravemente ilícita (2).

Forma solemne en la absolución de censuras.—

La forma solemne tenía lugar antiguamente en la absolución de la excomunión, hecha por el obispo con asistencia de doce presbíteros. Se recitaban los siete salmos penitenciales y se hería levemente al excomulgado con una vara.

El Pontifical y ritual romano señalan la forma que ha de emplearse en la actualidad.

Casos en que tiene lugar.—La forma solemne suele prescribirse para los casos de un delito enorme y gravísimo.

Absolución de censuras por razón del modo.—La absolución en este concepto puede ser—

Pura, simple y absoluta, como *te absolvo á vínculo excommunicationis*. Esta se usa ordinariamente.

Condicional y esta puede ser—*de pretérito* como *si jam satisfecisti, ego te absolvo*—*de presente*, como *si nunc doles de crimine, à censura incursa te absolvo*—*de futuro*, como *si satisfacies in posterum, nunc pro tunc te absolvo*.

La absolución de pretérito y presente podrá emplearse lícitamente en ciertos casos (3).

La absolución condicional de futuro es ilícita (4).

Ad cautelam.—Esta absolución puede ser de distintas clases y por lo mismo se trata á continuación de cada una de ellas.

Absolución *ad cautelam* que precede á la de pecados.—El ministro de la penitencia concede al penitente la

(1) Cap. XXVIII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 98.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.º, núm. 103.

(4) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. I, núm. 828.

absolución *ad cautelam* antes de absolverle de los pecados para evitar la irreverencia, que resultaría, si aquel se hallara ligado con alguna censura oculta, á cuyo efecto se dicen las palabras que se dejan indicadas al expresar la forma de absolución en el fuero interno.

Absolución *ad cautelam* provisional.—Esta absolución se otorga provisionalmente al principio del litigio á la persona excomulgada que apela al superior, á fin de que tenga aptitud para proseguir el pleito en el tribunal eclesiástico y defenderse del delito que se le atribuye.

Su origen y necesidad.—El papa Clemente III fué el primero que introdujo esta absolución *ad cautelam* (1) en su decreto del año 1190, cuyo epígrafe dice así: *Ante absolutionem communicandum non est excommunicato, licet juraverit parare mandatis Ecclesie, vel composuerit cum offenso. Infamato de excommunicatione communicandum non est, nisi se purget, vel ad cautelam absolvatur* (2).

Es de necesidad conceder esta absolución, porque de otro modo el excomulgado no podría presentarse en juicio para defenderse del crimen, que se le imputa, ni el acusador podría comunicar con él.

Otros casos en que tiene lugar la absolución *ad cautelam*.—La absolución de que se trata, tiene también lugar y habrá de concederse en los casos siguientes:

1.º El Sumo Pontífice la emplea al proveer en determinadas personas los beneficios, y los confesores en la administración del sacramento de la penitencia (3).

2. Esta absolución ha de pedirse en cuantos casos se tenga duda de hecho y aún de derecho, sobre si se ha incurrido en

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.ª, disertación 3.ª, cap. XI.

(2) Cap. XV, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, *ibid.*

censura, porque en estos casos debe seguirse lo más seguro (1); así que la absolución *ad cautelam* se pide siempre que existe una leve duda sobre si se ha incurrido en censura, porque ésta no cesa por la penitencia ó arrepentimiento del sujeto (2), y por esta razón Alejandro VII condenó la proposición siguiente: *Quoad forum conscientiae reo correcto, ejusque contumacia cessante, cessant censuræ* (3).

3. La absolución *ad cautelam* tiene también lugar, para mayor seguridad, en el caso de que la censura impuesta se considere nula (4), ó válida mediante una razón destituida de fundamento (5).

Absolución *ad reincidentiam*.—Esta absolución recibe dicho nombre, porque se concede por cierto tiempo ó para determinado acto, como si prescribe que uno satisfaga al ofendido ó que practique ciertas obras de piedad dentro del tiempo señalado; de manera que si deja trascurrir dicho tiempo sin cumplir lo preceptuado, revive la censura de que fué absuelto (6), como v. gr. *si intra mensem non satisfacias, illico reincidas in excommunicationem, à qua nunc te absolvo*.

Respecto á esta absolución debe advertirse que se requiere nueva culpa según la opinión más probable, para reincidir en ella, porque la primera censura no puede considerarse en suspenso á ménos que se halle así dispuesto por el Sumo Pontífice (7).

(1) Cap. V, tít. XXVII, lib. V *Decret.*—Cap. XV y LII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) C. XXXIII, quæst. 4.^a, causa 23. —Cap. XV, tít. XXXIX, lib. V. *Decret.*—Cap. XXV, tít. XXVIII, lib. II *Decret.*—Cap. XI, tít. II, lib. I *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 1.^o, núm 110.

(4) Cap. XVI, tít. XXVIII, lib. II *Decret.*

(5) Cap. XI, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. VII, pár. 3.^o, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XXI, pár. 6.^o

(7) SC. VINI, lugar citado.

Absolución de censuras por razón de la persona á quien se concede.—La persona ligada con censuras no puede ser absuelta de ellas, sinó se halla con las disposiciones necesarias de derecho, que son las siguientes:

1.^a Que pida la absolución; *ne sententiam ecclesiasticam contemnere videatur* (1).

Sin embargo, se concede algunas veces la absolución al contumaz, cuando así lo exige el bien público, ó es un medio para el más fácil arrepentimiento del criminal.

2.^a Es de necesidad que preceda la satisfacción de la parte en cuyo daño se cometió el delito, á ménos que aquella lo perdone ó se presuma prudentemente su perdón.

Si no puede satisfacer al ofendido por hallarse en imposibilidad de hacerlo, entonces se le absolverá, siempre que preste juramento de hacerlo en cuanto se halle en disposición de cumplir con este deber (2).

Cuando se concede facultad de absolver bajo la cláusula *satisfacta parte*, creen muchos escritores, que es nula la absolución dada sin que preceda este requisito, porque es condición *sine qua non* (3).

3.^a Que repare el escándalo causado con el delito cometido y por el que incurrió en la censura (4).

Si el delincuente habrá de prestar juramento de no volver á incurrir en la censura.—Se requiere por parte del delincuente, que preste juramento de no cometer en lo sucesivo el crimen del que pide la absolución; cuyo requisito previo se exige cuando el crimen es grave, como v. gr., la escandalosa profanación de una iglesia ó la grave percusión de un clérigo, etc. Véase sobre esto el Ritual romano *De Sacramento pœnitentiæ*, al tratar de la absolución de la excomunión en el fuero externo.

(1) Cap. XL, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) Cap. III, tít. XXIII, lib. III *Decret.*—Cap. XXII, tít. XL, lib. V *Decret.*

(3) S. ALFONSO DE LIGORIO: *Theolog. mor.*, lib. VII, núm. 121.

(4) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. I, núm. 830, edit. 13.

Personas excluidas de esta obligación.—Los autores al tratar de este punto dicen; que dicho juramento no ha de exigirse á todos los censurados, ni al *impuber* aunque pida ser absuelto de la censura después de haber llegado á la pubertad, sinó únicamente al que ha cometido un delito enorme, como el usurero público; incendiario de las iglesias; violador ó profanador escandaloso de las mismas; percursor de obispo ó cardenal; al que hiere gravemente á otras personas eclesiásticas, manifiesto raptor, excomulgado notorio, mutilador de miembros y al hereje; sin que haya lugar á exigir el expresado juramento por delitos ménos graves (1). Las palabras *delito grave*, que usa el Ritual romano, han de entenderse en este sentido; porque en el mero hecho de consignar esta circunstancia, supone que no debe exigirse el juramento á todos los que han de ser absueltos de las censuras en que han incurrido, lo cual es una demostración de la doctrina consignada, puesto que sólo pueden imponerse censuras al que ha pecado gravemente. Y siendo cierta esta doctrina, como lo es en efecto, ¿para qué indicar esta circunstancia á no expresar por ella un delito gravísimo ó grave entre los graves? Véase el capítulo anterior.

Reglas que han de tenerse presentes.—Para mayor ilustración y más claro conocimiento de todo lo relativo á este punto, se consignan las reglas siguientes:

1.^a La censura pesa sobre el reo, mientras no se le absuelve de ella, aunque haya satisfecho debidamente á la parte ofendida y se haya enmendado, según consta de la proposición 44 condenada por Alejandro VII, que se deja ya consignada en este artículo (2). Es, pues necesaria la absolución de la censura para que ésta cese y deje de surtir todos sus efectos en la persona que la ha contraído.

(1) *Compend. salmant.*, tratado XXXVI, cap. I, punto 11, núm. 73.—SCAVINI, *Theolog. mor.* de censuris, cap. VII, quest. 4.^a, núm. 3.—S. ALFONSO LIGORIO, *Theolog. mor.*, lib. VII, cap. I, núm. 129.

(2) Véase el *Compendio Salmantic.*, tratado XXXVI, punto X, núm. 68.

2.^a Una misma persona que se halle ligada con distintas censuras, puede ser absuelta de una y no de las restantes.

3.^a La absolución arrancada por miedo es válida cuando el juez no quiere conceder la absolución, á pesar de haber cesado la contumacia del reo y de hallarse en el deber de otorgarla, porque en este caso el miedo es impuesto justamente; pero si el miedo es injusto ó causado injustamente, la absolución es nula, según declaró Gregorio X el año 1273 en el concilio general de Lyón: *Absolutionis, dice, beneficium (1) ab excommunicationis sententia, vel quicumque revocationem ipsius, aut suspensionis, seu etiam interdicti per vim vel metum extorta, præsentis constitutionis auctoritate omnino viribus vacuumus. Ne autem sine violentia crescat audacia, eos qui absolutionem seu revocationem hujusmodi vi vel metu extorserint, excommunicationis sententiæ decernimus subiacere.*

Las palabras de la citada decretal no hacen distinción expresa entre el miedo justo é injusto; pero los términos en que está concebida, denotan que se refiere al miedo injusto, y por otra parte parece que la misma razón dicta la distinción (2) hecha.

4.^a El ausente puede ser absuelto de censuras, lo mismo que incurrir en ellas, porque esta absolución no es sacramento, sino una mera relajación de la pena impuesta por la Iglesia.

Sin embargo, la presencia del reo es muy conveniente para que se guarde la debida reverencia y mayor humildad del mismo censurado.

En el caso de concederse, mediante causa urgente, por medio de procurador, se requiere en este mandato, especial para pedir la absolución, á fin de que conste por este medio el arrepentimiento del censurado.

(1) Cap. único, tít. XX, lib. I *sext. Decret.*

(2) Véase á SCAVINI: *Theolog. mor. de censuris*, cap. VII, quæst. 6.^a

Absolución de las censuras por razón de la persona que la concede.—Es de necesidad en la persona que absuelve—

- 1.º Que tenga facultad para ello.
- 2.º Libertad de coacción y de miedo (1).

Quiénes tienen esta facultad en caso de necesidad.—Se trata aquí de una persona que ha incurrido en censuras reservadas ó no reservadas—que se halla por otra parte, ó puede hallarse con conciencia de pecado mortal, sin que tenga medio de salir de este estado por medio de la absolución, toda vez que no se encuentra sacerdote que tenga facultades para ello en todo ó en parte (2).

Cuando el sujeto se halla en este caso, cualquier sacerdote tiene facultad de absolver para toda clase de censuras, sin que obste al efecto que esté excomulgado ó no tenga aprobación ó licencias de confesar; porque la equidad aconseja que en estos casos se faciliten al moribundo todos los medios para reconciliarse con Dios y santificar su alma en este apurado instante de su vida.

El Concilio de Trento (3) dice á este propósito: *Verumtamen pie admodum, ne hac ipsa occasione aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis: atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitentes à quibusvis peccatis, et censuris absolvere possunt.*

Obligaciones respectivas del absuelto y del que absuelve en estos casos.—El que ha sido absuelto en el artículo de la muerte de censuras reservadas, tiene obligación de recurrir al superior ó su delegado si convalece, no para que le absuelva de nuevo, sinó para que le imponga la debida penitencia y satisfacción.

(1) Cap. únic., tit. XX, lib. I *sext. Decret.*

(2) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. I, núm. 829.

(3) Cap. VII de la ses. 14.

A este efecto, el confesor que le absuelve debe exigirle aun bajo juramento, la promesa de satisfacer á la parte ofendida y de presentarse al superior si recobra la salud, advirtiéndole que de no hacerlo, reincide, *ipso facto*, y sin necesidad de nueva sentencia, en la censura de que le absolvió por hallarse en peligro de muerte.

Esta doctrina se funda en las disposiciones canónicas (1) entre las cuales no debo omitir la siguiente: *Eos, qui a sententia (2) canonis vel hominis (cum ad illum, a quo alias de jure fuerant absolventi, nequeunt propter imminentis mortis articulum, aut aliud impedimentum legitimum, pro absolutionis beneficio habere recursum) ab alio absoluntur: si, cessante postea periculo, vel impedimento hujusmodi, se illi, a quo his cessantibus absolvi debebant, quam cito commode poterunt, contempserint presentare, mandatum ipsius super illis, pro quibus excommunicati fuerant, humiliter recepturi et satisfacturi, prout justitia suadebit: decernimus (ne sic censuræ illudant ecclesiasticæ) in eandem sententiam recidere ipso jure. Idem statuimus de his, quibus (cum a Sede Apostolica vel a legatis ipsius, absolutionis beneficium a quibusvis sententiis consequuntur) injungitur, ut ordinariorum morum, vel aliorum quorumlibet suscepturi pœnitentiam ab eisdem, se conspectui repræsentent, et passis injuriam, seu his, quibus propter hoc obligati existunt, satisfactionem exhibeant competentem: si hæc cum primum commode poterunt, non curaverint adimplere.*

Absolución de las censuras ab homine.—De las censuras *ab homine* impuestas por sentencia ó mandato particular sólo puede absolver el que la impuso, ó su delegado, el sucesor ó superior, porque *ejus est solvere, cujus est ligare*.

También puede absolver de estas censuras el romano pontífice ó su delegado, porque como vicario de Jesucristo en la tierra, tiene jurisdicción en toda la Iglesia.

(1) Cap. XI y LVIII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XXII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

Si el metropolitano puede absolver de las censuras impuestas por sus sufragáneos.—El metropolitano tiene también este derecho respecto á las dichas censuras impuestas por sus sufragáneos, pero no de un modo absoluto é ilimitado, sinó únicamente cuando se acude ante él en virtud de apelación de las sentencias de aquéllos (1) pero en estos casos habrá de poner en conocimiento del obispo la absolución concedida (2) y en el caso de que la censura impuesta sea justa, remitirá al apelante á su obispo para que este le absuelva (3).

Decreto de Inocencio IV acerca de este punto.—Inocencio IV dispuso en el año 1245, con arreglo á la doctrina expuesta, lo siguiente: *Cæterum Rothomagen. archiepiscopo (4) vel ejus officiali non licet excommunicatis ab archidiaconis vel aliis subditis suffraganeorum ipsius archiepiscopi cum nec excommunicantium, nec excommunicatorum sint iudices) absolutio- nis beneficium impertiri: excommunicatos autem ab ipsis suffra- ganeis, vel eorum officialibus possunt absolvere, si ab ipsis liti- gantibus ad eos fuerit. Neutra vero partium appellante, si qua ipsarum per archiepiscopum vel ejus officialem ab excommunica- tione contra eam lata pro reliqua postulet se absolvi, vel alias coram eis de parte adversa querimoniam sine apellationis inter- positione deponat: non est in hoc ab ipsis (cum sui non sunt iudi- ces) audienda. Sed si excommunicatus deponat apud eos de suf- fraganeo, ut imponatur ei pœna, et pro suo interesse super injus- ta excommunicatione querelam, audire utique debent eum: secus autem, si conqueratur de ipso, ut relaxetur hujusmodi sententia contra se ab eo pro alio promulgata: quoniam tueri hanc causam non ad ipsum suffraganeum, sed eum, pro quo est sententia lata,*

(1) Cap. VIII y IX, tít. XXXI, lib. I *Decret.*—Cap. I, tít. XVI, lib. I *sext. Decret.*—Cap. XL y XLVIII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. I, tít. XI, li- bro V *sext. Decret.*—Cap. III, pár. IX, tít. XV, lib. II *sext. Decret.*

(2) Cap. III, tít. XXXI, lib. I *Decret.*

(3) Cap. XI, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. VII, pár. III, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(4) Cap. VII, tít. XI, lib V *sext. Decret.*

spectat. Attamen si suffraganeus vel extra iudicium pro suorum deffensione iurium, vel etiam in iudicio ex suo procedens officio, inquirendo videlicet, vel simile quid agendo, aliquem excommunicet: in hoc casu conveniendus est ipse suffraganeus coram archiepiscopo vel ejus officiali: quia ipsius interest defendere causam suam.

La importancia de la materia que se trata me ha movido á trascribir la anterior decretal en confirmación de la doctrina consignada, según la cual, si Diego, por ejemplo, fué excomulgado ó suspenso por su obispo mediante sentencia especial, no puede ser absuelto por el obispo de otra diócesis, aunque se haya trasladado á ella con el objeto de vivir allí.

Por igual razón, si fué excomulgado especialmente en ajena diócesis por delito en ella cometido, tampoco puede ser absuelto por el obispo propio cuando ha regresado á su diócesis.

Quién puede absolver de la censura ab homine, impuesta por mandato general.—Si la censura *ab homine* ha sido impuesta por mandato general, y no por sentencia especial como, v. gr., *se impone la pena de excomunión á todos los que cometan tal delito* sin hacer mención de reserva alguna, en este caso cualquier sacerdote aprobado puede absolver de dicha censura, aun fuera de la confesión, si otra cosa no se previniera, porque la absolución de censuras se refiere al fuero externo (1).

Los autores fundan esta doctrina en una decretal (2) del año 1212, dada por Inocencio III en contestación á la consulta de un obispo, y de esta misma opinión es S. Alfonso Ligorio, que dice á este propósito: *Ratio quia (3) hæc censuræ æquiparantur censuris latis a jure, et ideo a quocumque absolvi possunt, cum agatur de re favorabili, quæ amplianda est, quantum res patiatur.*

(1) Téngase, sin embargo, presente que los obispos no pueden absolver fuera de confesión de las censuras papales ocultas, según declaración del concilio de Trento, sesión XXIV, cap. VI de *Reformat.*

(2) Cap. XXI, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(3) *Theolog. mor. univ.*, lib. VII, num. 73.

Si habrá necesidad de pedirle absolución de censuras en caso de duda.—Cuando se duda, si las leyes eclesiásticas han impuesto censura en ciertos casos, ó si la sentencia dictada por el juez comprende censura en su fórmula, entonces no hay necesidad de pedir la absolución, porque no consta que se haya incurrido en ella, y debe creerse que el legislador ó el juez no quisieron envolver en palabras oscuras dicha pena.

Cuando conste ciertamente de la censura *à jure* ó *ab homine* versando solo la duda, sobre si se ha incurrido en ella, entonces ha de seguirse la regla de derecho: *In dubio tutior pars est eligenda* (1) y como consecuencia habrá de pedirse la absolución *ad cautelam*.

Reglas que han de tenerse presentes.—Lo delicado de la materia, que se trata, me obliga á hacer las indicaciones siguientes:

a) La absolución de estas censuras no puede darse por el inferior al que las impuso, ni aun en el fuero interno (2).

b) El cabildo, sede vacante, tiene esta facultad respecto á las censuras *ab homine*, impuestas por el obispo (3).

c) El Obispo puede absolver al *censurado* por el prelado inferior de la clase ínfima ó media, siempre que dé conocimiento de este acto al expresado prelado y el así absuelto dé satisfacción al mismo (4).

Censuras *a jure* y sus especies.—Las censuras *a jure* pueden ser tales==

En un sentido impropio, como si se imponen por tiempo determinado; y en este caso hacen las veces de penitencias ó penas.

En un sentido propio, como si se imponen por tiempo indeterminado.

(1) Cap. V, tít. XXVII, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XI, cap. 1.º, tít. XXXI, lib. I *Decret.*

(3) Cap. únic., tít. XVII, lib. I *sext. Decret.*

(4) Cap. III, tít. XXXI, lib. I *Decret.*

La censura en este último sentido puede ser—*reservada*— y no *reservada*.

Absolución de las censuras en su sentido impropio.—De estas censuras solo puede absolver el que puede dispensar de la ley, porque más bien debe considerarse dispensa de ley, que verdadera absolución (1).

Absolución de las censuras *a jure* no reservadas
—Todos los sacerdotes aprobados pueden absolver válida y licitamente de ellas en el fuero interno y externo, aun cuando el sujeto sea de otra diócesis; lo mismo de la excomunión que de la suspensión y entredicho.

Esta doctrina se halla ajustada á la práctica constante de la Iglesia (2) y se deduce de la Decretal *Nuper* de Inocencio III en la que se dice: *quia tamen conditor canonis ejus absolutionem sibi specialiter non retinuit eo ipso concessisse videtur facultatem aliis relaxandi* (3); así que los sacerdotes ántes de absolver de los pecados en el Sacramento de la Penitencia dicen estas palabras: *te absolvo ab omni vinculo excommunicationis, etc.*

Absolución de las censuras *a jure* reservadas.—Los sacerdotes meramente aprobados no pueden absolver de ellas, porque es de necesidad, que tengan autorización especial del superior para ello; y por lo mismo tienen el deber de manifestar al penitente que acuda á este efecto ante el legítimo superior (4) porque *per quas causas res nascitur per easdem dissolvitur*.

Los superiores legítimos son—los que impusieron las censuras—sus sucesores—delegados—los superiores á ellos.

En su consecuencia, el Sumo Pontífice puede absolver de todas las censuras *a jure* y *ab homine*, porque tiene jurisdicción

(1) BERARDI: *Comment. in Jus. eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, dissert. 3.^a capítulo XI.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus. eccles. univ.*, tom. IV, *ibid.*

(3) Cap. XXIX, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(4) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. I, núm. 829, edit. 13, lib. III, núm. 366.

plena y ordinaria en toda la Iglesia, como vicario de Jesucristo en la tierra.

Los obispos y otros prelados tienen facultad de absolver de las censuras fulminadas por ellos, así como sus delegados, sucesores y superiores; lo cual se funda en el principio de Derecho ya citado de que *per quas causas, etc.*

También tienen este derecho respecto á las censuras *latæ sententiæ* reservadas á ellos en la bula *apostolicæ sedis*.

Facultad concedida por la bula de la cruzada.—

Los fieles que tomaren la bula de la santa cruzada tienen derecho á elegir por confesor *dos veces, una en la vida y otra en el artículo de la muerte*, á cualquier presbítero secular ó regular, que está aprobado por el ordinario, y recibir de él en el fuero de la conciencia la absolución de cualesquiera pecados y censuras reservadas á cualquier ordinario y también á la silla apostólica sin más excepción que el crimen de herejía y en cuanto á los eclesiásticos la censura de que trata Benedicto XIV en su constitución *Sacramentum penitentiæ*.

De manera que el sacerdote aprobado para oír en confesión, tiene facultad en España para absolver en el fuero de la conciencia de toda clase de pecados y censuras á los penitentes que tengan la bula de la cruzada, sin más limitación que la herejía y la sollicitación *ad turpia*.

Atribuciones de los obispos en cuanto á las censuras reservadas al Sumo Pontífice.—

Los Sumos Pontífices se han reservado la absolución de varias censuras é irregularidades. Como unas y otras pueden ser públicas ú ocultas, llevadas ó nó al fuero contencioso, siendo unas especialmente reservadas y otras simplemente reservadas, hay necesidad de tratar separadamente de cada una de ellas para mayor claridad en esta materia de suyo espinosa y delicada, no ménos que de frecuente uso y aplicación práctica.

Decreto de la sagrada Congregación del Santo Oficio.—Este decreto de la suprema Congregación del Santo Oficio expedido en 27 de Junio de 1866, dispuso y declara, que

en las facultades concedidas á los obispos y otros ordinarios de absolver de todos los casos reservados á la Santa Sede en atención á las circunstancias de los tiempos y lugares, se entienda que de dichas facultades y gracias se exceptúan para lo sucesivo los casos reservados en la bula *Sacramentum pœnitentiæ* de Benedicto XIV, que son los pecados *attendantis absolutionem complicitis in materia turpi y falso denunciantis sacerdotem aliquem de sollicitatione*; de modo que es necesario acudir á Su Santidad, cuando ocurra alguno de dichos casos (1).

Decreto tridentino.—El concilio de Trento dispone sobre esta materia lo siguiente: *Liceat episcopis in irregularitatibus omnibus, et suspensionibus, ex delicto occulto provenienti-bus, excepta ea, quæ oritur ex homicidio voluntario; et exceptis aliis deductis ad forum contentiosum, dispensare; et in quibus-cumque casibus occultis, etiam Sedi Apostolicæ reservatis, delin-quentes quoscumque sibi subditos, in diœcesi sua per se ipsos, aut vicarium, ad id specialiter deputandum, in foro conscientie gratis absolvere, imposita pœnitentia salutari. Idem et in hære-sis crimine in eodem foro conscientie eis tantum, non eorum vicariis, sit permissum* (2).

El obispo según el anterior decreto, puede absolver en el fuero de la conciencia por sí ó por su vicario designado especialmente al efecto, de todas las censuras ocultas reservadas á la Santa Sede. Igual facultad se le concede respecto á las irregularidades y suspensiones no deducidas al fuero externo con-tencioso, excepción de la que proviene de homicidio voluntario.

Pueden igualmente absolver por sí ó sus vicarios en el fuero de la conciencia de las censuras ocultas reservadas al Papa en la bula de la Cena á excepción de la herejía mixta (3).

Si el obispo podrá absolver en el fuero de la conciencia de la herejía mixta.—El concilio de Trento

(1) Puede verse dicho decreto de la expresada Congregación del Santo Oficio en el *Boletín eclesiástico* del arzobispado de Burgos, tomo IX, pág. 396.

(2) Ses. XXIV, cap. VI, *De reformat.*

(3) S. ALFONSO LIGORIO: *Theolog. mor.*, lib. VII, núm. 74.

autoriza a los obispos para absolver por sí mismos del crimen oculto de herejía, cuya facultad no pueden delegar á sus vicarios (1) como en las demás censuras.

Se ha discutido mucho entre los sabios sobre si dicha facultad, concedida por el Tridentino á los obispos, se les ha quitado por la constitución apostólica llamada *Bula de la cena*. Hoy no puede ménos de defenderse que la absolución del crimen ó delito oculto de herejía, no deducido ó llevado al fuero contencioso ó que en el caso de haberse llevado á este, no pudo probarse quedando el reo absuelto por defecto de prueba, fué reservado por la expresada constitución (2) al Sumo Pontífice, y

(1) Se trata aquí de la herejía interna y externa á la vez, pero que es oculta y no se ha llevado al fuero judicial ó contencioso; porque respecto á la herejía meramente interna y mental, lo mismo el obispo que cualquier sacerdote aprobado pueden absolver de ella (BOUIX, *de episcop.*, part. 5.^a, cap. 18, párrafos 1.^o y 2.^o) toda vez que la Iglesia no impone ni castiga con censuras los actos ó pecados internos; y la absolución del delito de herejía se reservó á Su Santidad solamente por razón de la censura anja á la misma herejía. Por igual razón, el obispo ó cualquier simple sacerdote aprobado, pueden absolver en el fuero de la conciencia de la herejía puramente externa, como v. g., si Antonio niega de hecho ó de palabra uno ó más artículos de fé, pero interiormente los cree, no es formalmente hereje, ni incurre por consiguiente en las censuras fulminadas contra los herejes, por más que ha pecado gravemente contra la fé, y deba ser castigado como hereje en el fuero externo, aunque asegure que su herejía era solamente externa. Véase á BENEDICTO XIV *de Synodo diocesana*, lib. IX, cap. IV, núm. 4.^o

(2) Esta bula, que empieza, *consueverunt*, se llamó de la *cena*, porque se acostumbró á publicarla todos los años en Roma el día de la última cena del Señor, ó sea la feria quinta de la Semana Santa ó mayor. Dicha bula es obra de varios papas; pero no todos convienen sobre quién la publicó por primera vez. Unos dicen que tuvo principio en 1420 en tiempo de Martino V. Otros la dan un origen más antiguo y la atribuyen á Clemente V, y más probablemente á Bonifacio VIII, cuya elección se verificó en 1294; pero es lo cierto, que Julio II mandó en 1511 que esta bula se guardase en todas partes. Paulo III se reservó en 1536 la absolución de las censuras contenidas en dicha bula; y San Pio V mandó en 1568 que se publicara en la Iglesia universal.

Gregorio XIII amplió en 1583 las censuras contenidas en aquella. Esta célebre bula no se publicó en España, y desde el tiempo de Clemente XIV dejó de publicarse el día de *Jueves Santo* en Roma.

que los obispos no pueden en virtud del derecho concedido á los mismos por el concilio de Trento absolver de la indicada censura (1).

Su facultad para absolver de ella en el fuero judicial.—Los obispos pueden absolver al hereje, de cuyo delito conocen en el fuero judicial, bien sea de oficio ó en virtud de acusación, denuncia ó delación, ó ya porque el mismo delincuente manifiesta espontáneamente su crimen en dicho fuero (2), ó se presenta voluntariamente ante el mismo obispo (3).

En estos casos los obispos están autorizados para reconciliar con la Iglesia y absolver al hereje en uno y en otro fuero de la censura eclesiástica, en que incurrieron por su herejía.

Es más, pueden mandar al penitente hereje, después de haber abjurado sus errores, á un simple confesor para que le absuelva, y esta absolución dada por el confesor en el fuero sacramental, aprovecha y vale también en el fuero externo, de cuya jurisdicción proviene y emana (4).

Los obispos no están privados de esta facultad en su diócesis, aunque en ella haya inquisidores de la fé delegados por la Santa Sede, porque unos y otros pueden y deben cumplir con este deber de común acuerdo, á fin de extirpar de las diócesis esta peste, según declaró Bonifacio VIII en 1298 en una decretal dirigida á los inquisidores de la fé, cuyo epígrafe dice así: *Non (5) derogatur ordinariis super processu hæreticorum, licet Papa generaliter alteri deleget. Et super eodem facto episcopus et inquisitor possunt procedere communiter vel divisim, vel proferre sententiam, in qua si discordant, debent Papæ referre. Et episcopi, qualitercumque procedant, debent servare modum inquisitoribus impositum.*

(1) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. IX, cap. IV—S. ALFONSO LIGORIO, *theolog. mor.*, lib. VII, núm. 82 y sig.

(2) BENEDICTO XIV, *De Synodo dioces.*, lib. IX, cap. V, núm. 4.

(3) BENEDICTO XIV, *De Synodo dioces.*, lib. IX, cap. IV, núm. 3.

(4) BENEDICTO XIV: *De Synodo dioces.* lib. IX, cap. IV, núm. 3.

(5) Cap. XVII, tit. II, lib. V *sext. Decret.*

Los obispos deberán observar en este importantísimo al par que delicado asunto las reglas prescritas en la citada decretal de Bonifacio VIII, las cuales se reducen á que si ellos y los inquisidores forman separada é independientemente los respectivos procesos, es preciso que se comuniquen mutuamente lo actuado y pronuncien juntamente la sentencia, si están de acuerdo; pero si no convinieren acerca de esta, deberán remitir el negocio suficientemente instruido á la Santa Sede (1).

Derecho de los obispos para absolver en ambos fueros á los imposibilitados de acudir á Roma y bajo qué condiciones.—Los obispos pueden absolver en ambos fueros por sí ó por otros de todas las censuras reservadas al Papa, cuando los que han incurrido en ellas no pueden acudir á Roma, en cuyo caso están los impúberes, ancianos, enfermos, las mujeres, hijos de familia y todos los que no son *sui juris*, ó se hallan legítimamente impedidos para hacer este viaje; pero los así absueltos tienen obligación de acudir al Papa, ó á su delegado, tan pronto como cese el impedimento, bajo la pena de reincidencia en la censura de que fueron absueltos.

Decretales de Alejandro III sobre este punto.—Alejandro III dice en una decretal dada en 1180: *De cætero noveris, quod, si quis pro violenta manuum injectione in clericum, et vinculo excommunicationis adstrictus, si habens capitales inimicitias, vel alias justas excusationes, quibus, ab itinere rationabiliter excusetur, ita quod sine periculo, apostolico se nequeat conspectui præsentare, licet diæcesano episcopo recepto juramento secundum morem ecclæsiæ sibi absolutionis gratiam impertiri. Sed est illi sub juramento debito injungendum, ut, quam citius opportunitatem habuerit, romano Pontifici adeat, mandatum apostolicum suscepturus* (2).

El mismo Papa dió otra decretal en igual fecha, cuyo epi-

(1) Véase el citado capítulo XVII.—Cap. I, tít. III, lib. V *Clementin.*—Capítulo I, tít. III, lib. V *extravag. comm.*

(2) Cap. XI, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

grafe dice así: *Mulieres, quæ (1) inciderunt in canonem, si quis suadente, absolvuntur, ab episcopo. Idem in personis, quæ non sunt sui juris, vel sunt delicatæ, de quibus dubitatur, quod non possent commode accedere ad curiam.*

Los textos citados solo hablan de la censura en que se ha incurrido *ob percussionem clerici*, porque era la más común y frecuente en aquella época, pero los decretalistas extienden esta facultad á todas las demás censuras cuando existe igual dificultad para acudir á Roma.

Tampoco se comprenden de un modo explicito en los expresados capítulos todos los casos en que he manifestado que los obispos pueden absolver de las censuras papales, lo cual no obsta á la exactitud de la doctrina consignada, porque se funda en otros textos del derecho que no pueden dejar duda alguna.

Decretal *Eos qui á sententia de Bonifacio VIII.*—Este papa dice: *Eos, qui (2) á sententia canonis vel hominis (cum ad illud, a quo alias de jure fuerant absolvendi, nequeunt propter imminens mortis articulum, aut alium impedimentum legitimum, pro absolutionis beneficio habere recursum) ab alio absolventur.*

En este mismo capítulo se dice que los así absueltos han de presentarse al superior cesando el impedimento, bajo la pena de reincidir *ipso jure* en la censura de que fueron absueltos.

Decretal *Ex nescitur de Clemente III.*—Se dice en ella lo siguiente: *Quod mulieres, senes (3), et valetudinarii, seu membrorum destitutionibus impediti, licet ad Apostolicam Sedem non veniant, ab episcopis valeant fidelium communioni restitui.*

Decretal *Quamvis incidens de Gregorio IX.*—Después de hablarse en este capítulo de la obligación de acudir á Su Santidad para obtener la absolución de las censuras reserva-

(1) Cap. VI, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XXII, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

(3) Cap. XIII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

das al mismo, anade: *Nisi imminente (1) mortis articulo, infirmitate, inimicitia aut inopia, puerili vel senili ætate, fragilitate sexus, seu alia corporis impotentia, sive quolibet impedimento canonico retrahatur, quo nimis romanum Pontificem possit adire.*

Reglas que han de tenerse presentes.—Para evitar dudas en esta materia de sí difícil y complicada, habrá de tenerse presente:

1.^a Por la facultad que el obispo concede para absolver de pecados reservados no se entiende que autoriza para aquellos que tienen aneja censura reservada, á diferencia de la concesión hecha por el Papa en la que se otorga esta facultad, porque los casos papales son reservados por la censura, á excepción de los dos siguientes:

a) Benedicto XIV reservó á la Santa Sede *Bulla Sacramentum* la absolución del falso calumniador, esto es, de aquél ó aquellos penitentes que falsamente acusan á los confesores ante los jueces eclesiásticos del delito de *sollicitantes ad inhonestam*, en cuyo caso se comprenden también los que mandan ó aconsejan esta calumnia.

b) El que cometen los que reciben dones considerables de los *regulares* de ambos sexos hasta tanto que se restituyan (2).

Todos los demás pecados reservados á la Santa Sede lo son por razón de la censura que tienen aneja.

2.^a Los que tienen facultad para absolver de las censuras reservadas á Su Santidad, no tienen por este solo hecho potestad para absolver de aquellas cuya absolución se ha reservado el obispo: pero la facultad concedida en los jubileos de absolver *ab omnibus reservatis* se extiende á los reservados episcopales.

(1) Cap. LVIII del título y libro citados.

(2) *Bulla Religiosa* de Clemente VIII.—*Nuper* de Urbano VIII y *Pastor bonus* de Benedicto XIV.

Si los imposibilitados de acudir á Roma estarán obligados á pedir la absolución pontificia por carta ó procurador.—Esta duda se consultó á la sagrada congregación del santo oficio, la cual contestó en 8 de julio de 1860: *consulat probatos auctores, inter quos S. Alphonsum Marianum de Ligorio.*

Este santo expone las distintas opiniones sobre esta materia y considera como más probable y común el parecer de aquellos para quienes no hay necesidad de acudir á la santa sede en los casos citados, porque existiendo el impedimento de ir á Roma se restituye á los obispos la potestad ordinaria de absolver que les fué quitada por la reserva (1).

Personas que tienen imposibilidad de acudir á Roma.—A pesar de que en los citados textos de las decretales se habla con claridad de las personas que se hallan imposibilitadas de acudir á Roma para obtener de la santa sede la absolución de las censuras, la importancia práctica de esta materia me mueve á extenderme más sobre este punto señalando las reglas siguientes:

- 1.^a Las personas que han cumplido sesenta años se consideran imposibilitadas por razón de la edad para este efecto (2).
- 2.^a Los regulares aun cuando se trate de censuras en que incurrieron antes de ingresar en religión.
- 3.^a Los pobres á menos que sean mendigos vagamundos.
- 4.^a Las mujeres á menos que sean expresamente señaladas en la censura.
- 5.^a Los impúberes, aun cuando pidan la absolución de la censura después de haber llegado á la pubertad.
- 6.^a Los hijos de familia, los detenidos en las cárceles, los enfermos, los militares, las personas que viven en comunidad, los que tienen obligación de sostener y mantener su familia, los que desempeñan un cargo público y todos los demás, que no

(1) S. ALFONSO LIGORIO: *Theolog. mor.*, lib. VII, núm. 89.

(2) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. I, núm. 829.

pueden ir á Roma sin un grave daño espiritual ó temporal propio ó de su familia.

7.^a Los que tienen un *impedimento perpetuo* quedan completamente libres de acudir á Roma, una vez obtenida la absolución del obispo.

Se considera el impedimento perpetuo, siempre que pueda durar diez años.

8.^a Cuando el impedimento es por largo tiempo, como por un año ó seis meses, aun puede absolver el obispo, pero en este caso habrá de prestarse juramento por el delincuente (á excepción de los párvulos) de presentarse al superior á la posible brevedad bajo pena de reincidencia.

9.^a Los que tienen impedimento por *breve tiempo* como por unos días, entónces aun puede absolver el obispo si media necesidad de celebrar ó comulgar para evitar la infamia ó escándalo; pero la censura queda en todo su vigor.

Observaciones.—De la doctrina consignada aparece—

1.^o Que los obispos no pueden absolver en el fuero de la conciencia á los herejes ocultos (1) cuyo delito no es conocido con notoriedad de *derecho* ni de *hecho*.

La notoriedad de derecho procede de las *pruebas judiciales* (2).

La notoriedad de hecho procede de la *fama pública*, la cual existe, cuando el delito de herejía en una persona es conocido por la mayor parte de la vecindad, parroquia, colegio ó comunidad en que el sujeto vive (3). De manera que el delito será considerado como oculto fuera de estos casos, aun cuando sea conocido de algunas personas y pueda probarse judicialmente.

2.^o Que los obispos pueden absolver en el fuero interno y

(1) BOUIX: *De episcopo*, part. 5.^a, cap. XIX.

(2) BOUIX: *De judic.*, tom. I, part. 2.^a, cap. IV, pár. 5.^o

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, part. 1.^a, tit. VII, núm. 187.

externo á los impedidos de acudir á Roma, cuya facultad les compete por derecho ordinario (1).

3.^o Que los obispos pueden reconciliar con la Iglesia y absolver en uno y otro fuero á los herejes arrepentidos de cuyo delito conocen en el fuero judicial, mediante acusación—denuncia—delación—ó inquisición.

4.^o Que los obispos pueden igualmente absolver en ambos fueros al hereje que se presenta espontáneamente y manifiesta á los mismos en el fuero judicial su delito.

5.^o Que los obispos pueden igualmente absolver en el fuero externo de la excomunión reservada, á los herejes que se presentan voluntariamente (2) á los mismos y una vez recibida la abjuración de sus errores ante notario y testigos, mandarlos á un simple sacerdote para que los absuelva, valiendo esta absolución sacramental aun para el fuero externo (3).

6.^o Que el obispo puede absolver á los protestantes, nacidos de padres herejes y educados en la herejía, que quieren ingresar en el gremio de la Iglesia y así lo manifiestan en el fuero externo.

7.^o Que los obispos no pueden absolver en el fuero de la conciencia sin especial facultad de la Santa Sede á los que habiendo pasado al protestantismo, tratan de abjurar sus errores, si su herejía no es pública y no quieren hacer abjuración de ella en el fuero judicial (4).

Si los obispos podrán absolver de la herejía notoria con notoriedad de hecho.—Se trata aquí de la herejía interna y externa que es conocida de la mayor parte de la vecindad, parroquia, colegio ó comunidad en que la persona vive. Solo el sumo pontífice puede absolver de esta excomunión,

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., part. 1.^a, tit. VII, número 201.

(2) BOUX: *De episcopo*, cap. XIX, pár. 2.^o, prop. 2.^a

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V Decret., part. 1.^a, tit. VII, núm. 200 y 203.

(4) BOUX: *De episcopo*, part. 5.^a, cap. XIX, pár. 2.^o

en cuanto que la bula de la cena reserva al sumo pontífice la absolución de esta censura no llevada al fuero judicial: de manera que los obispos no tienen ordinariamente facultad para absolver de la herejía oculta ó pública, que es notoria con notoriedad de hecho; así que se limitan sus atribuciones en esta materia á la herejía externa de la que conocen en el fuero judicial (1).

Atribuciones de los vicarios en esta materia.—

Los vicarios generales de los obispos no tienen en el asunto de que se trata facultad alguna, limitándose sus atribuciones á las que expresamente delegue en él la autoridad ordinaria ó sea el obispo de quien es vicario.

El obispo puede delegar en él aquellos derechos que le competen *jure ordinario* y son los siguientes:

1.º Puede conocer de los delitos de herejía, mediante mandato especial (2) del obispo.

2.º Puede absolver de la herejía notoria llevada al fuero judicial, mediante delegación especial del obispo (3).

3.º Puede absolver de la herejía oculta á los impedidos de acudir á Roma, mediante delegación del obispo (4).

Advertencia.—Los obispos y los delegados por ellos para absolver de la herejía mixta llevada al fuero judicial, habrán de tener presente, que la abjuración de la herejía é imposición de penitencia adecuada al delito cometido, han de preceder al acto de la absolución de la censura en que incurrieron (5).

(1) BOUIX: *De episcopo*, part. 5.^a, cap. XIX, pár. 2.^o, prop. 4.^a

(2) BOUIX: *De jure*, part. 2.^a, cap. IV, pár. 2.^o—*De episcopo*, part. 5.^a, capítulo XVIII, pár. 1.^o, prop. 3.^a

(3) BOUIX: *De episcopo*, part. 5.^a, cap. XIX, pár. 2.^o, prop. 3.^a

(4) BOUIX: *De episcopo*, part. 5.^a, cap. XIX, pár. 3.^o, prop. 4.^a

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, part. 1.^a, tit. VII, núm. 200.—BOUIX: *De episcopo*, part. 5.^a, cap. XIX, párrafo 2.^o, prop. 2.^a

CAPITULO IV.

DE LA EXCOMUNIÓN.

La comunión entre los fieles.—Las diócesis episcopales conocidas también en los tiempos primitivos de la Iglesia con el nombre de parroquias, eran de corta extensión en un principio; así que el número de obispos era mucho mayor que en tiempos posteriores; según aparece de innumerables monumentos de la antigüedad y por eso se observa en las lecciones del breviario, que los romanos pontífices ordenaban con frecuencia un número igual ó mayor de obispos, que de presbíteros. Un vestigio de esta corta extensión de diócesis se encuentra en las diócesis suburbicarias que constituyen los grados episcopales cardenalicios.

Esta es la razón de que no hubiese parroquias ó títulos presbiterales en las ciudades episcopales, durante muchos siglos. Los obispos se hallaban al frente de la única iglesia de la ciudad y la presidían: allí se reunían con el clero y fieles para la celebración de los divinos misterios, apareciendo de este modo la unidad de todos los fieles entre sí y con su cabeza el obispo.

Esto mismo se verificaba en las poblaciones situadas fuera de la ciudad episcopal y á cuyo frente se hallaban los presbíteros: estos colocados en sus títulos administraban el pasto espiritual á los fieles y reunidos en la iglesia constituían una perfecta unidad en la celebración de los divinos misterios con el presbítero su cabeza, dependiendo todos ellos de su inmediato centro de unidad, que era el obispo.

La Iglesia era de forma larga y estrecha á manera de nave en donde el obispo era el piloto y capitán del buque; los presbíteros y diáconos sus inmediatos auxiliares, y los fieles eran por decirlo así los viajeros que marchan por el camino de peregrinación dirigidos por los rectores de la nave (1). Reunidos allí

(1) *Constit. apostol.*, lib. II, cap. LXI.

todos y colocados en sus respectivos puestos recibían la instrucción conveniente del obispo y sus auxiliares con la mayor compostura, así como el sacratísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor. Todos los que eran admitidos á estas santas reuniones, se decía que eran admitidos á la comunión y con estas palabras se significaba que se hallaban ordenadamente colocados dentro de la nave de salvación ó en el rebaño de nuestro Señor Jesucristo, formando parte de la gente santa, santificada por el real sacerdocio dentro del cuerpo de Jesucristo.

Se llamaba *comunión* á esta colectividad de fieles, porque todas las cosas santas, que se hallaban en esta nave, redil, real sacerdocio y cuerpo de Cristo, se comunicaban á todos, y todos como hermanos de la misma familia participaban de ellas.

La idea que se ha dado de la comunión cristiana se halla confirmada por lo que se consigna en la sagrada liturgia: allí se usan desde tiempos antiquísimos las palabras *communio* y *communicantes*, con las que se significa no sólo la comunión real del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino también la participación real de los frutos del sacrificio ofrecido por el sacerdote y la comunicación con los santos del cielo, del purgatorio y de la Iglesia militante (1).

Personas excluidas de la comunión cristiana.—

Se representaba de tal modo el cuerpo de Cristo en estas reuniones de los fieles, que las personas excluidas de estas asambleas como los infieles y herejes, se hallaban *extra communio-nem*, hallándose en igual caso aquellos que mediante sentencia eran condenados como reos de gravísimos crímenes (2).

Las personas que habían pecado no eran excluidas de la comunión ó de estas santas asambleas, por aquel solo acto, sino que era además preciso la contumacia ó que permaneciesen pertinaces en su pecado después de las amonestaciones fraternales, á las que seguía la declaración judicial, mediante sentencia

(1) AVANZINI: Exposit. *bulæ apost. sedis*, pág. 77.

(2) AVANZINI: Exposit. *bulæ apost. sedis*, pág. 74.

de la autoridad episcopal, por la que el impenitente se colocaba con respecto á la Iglesia en igual estado al que se hallaban con relación á la misma los gentiles que no habían abrazado la fé.

El cristiano separado de la Iglesia por el citado acto de la autoridad, perdía ante la Iglesia todos los derechos adquiridos por el bautismo y no podía recuperarlos de nuevo, sinó mediante penitencia y cesación de la pertinacia ó contumacia.

El pecador separado de la Iglesia en la forma expresada y que aspiraba á entrar de nuevo en ella por la penitencia, se colocaba á las puertas de la misma ó se le permitía el ingreso en ella, según el grado á que pertenecía, para oír la palabra divina y dirigir al Señor sus plegarias; pero se le obligaba á salir de allí antes de la celebración del santo sacrificio, y en todo caso era excluido de la participación de los frutos del sacrificio incruento públicamente celebrado; así como de la participación de las preces comunes, por las que la Jerusalén terrestre se une *mente et corde* con la Jerusalén celestial en la celebración del sacrificio, que es lo que constituye principalmente la comunión; puesto que la mera entrada en la Iglesia para oír la divina palabra y las lecciones de las sagradas Escrituras, no era participación de la comunión, sinó un mero grado de penitencia pública, que tenía por objeto manifestar el arrepentimiento de sus pecados, como medio de conseguir la reposición á su antiguo estado.

Una vez cumplida la penitencia pública, se restituía al delincuente á la comunión por un acto de la autoridad, que lo absolvía ante la Iglesia, y esta absolución era considerada como un nuevo bautismo por el que revivían ante la Iglesia todos sus antiguos derechos de cristiano.

La doctrina expuesta acerca de la naturaleza de la excomunión se halla fundada en múltiples monumentos de la antigüedad, entre los cuales citaré la célebre causa del cisma llevado á efecto por Felicísimo y otros en tiempo de S. Cipriano. Felicísimo, hombre criminal se había separado de los obispos de la Iglesia africana y recibía en su comunión á los *lapsos* sin imponerlos

penitencia ni exigirles la confesión de su pecado, no permitiendo comunicasen con él á los que se hallaban en comunión con los obispos legítimos.

S. Cipriano con motivo de este escandaloso cisma dirigió una carta á sus sufragáneos en la que se lamentaba de esta desgracia que pesaba sobre la iglesia africana y haciendo un resumen de los delitos enormes debidamente justificados, que se habían cometido por Felicísimo, así como el de dividir los fieles entre sí separando las ovejas de su pastor, los hijos de su padre y los miembros de Jesucristo de su legítimo obispo, se felicita de que muchos hermanos no cayeron en la red del seductor y caudillo de esta sedición; pero á la vez hace mención de Augendo, quien sin tener para nada en cuenta al obispo ni la Iglesia, se asoció á esta conspiración. Respecto á este y á todos los que se hayan unido á Felicísimo dispone que no se les admitirá en la Iglesia para comunicar *nobiscum*.—*Abstinuimus communicatione Felicissimum et Augendum, item Repostum de extorribus, Irenem Rutilorum et Paulam, etc., etc.* (1).

Motivo de esta exclusión.—Los cismáticos separándose de las iglesias á que se hallaban adscritos y formando ellos una nueva iglesia, ejecutan por sí mismos un acto propio de la excomunión. Esta es necesaria por parte de la Iglesia, no tan solo para separar, porque este acto lo ejecutan los cismáticos por sí mismos, sinó también para hacerlos entender que no pueden volver por derecho propio á la unidad de la Iglesia y para que los fieles entiendan que los cismáticos se hallan excluidos de la Iglesia de Cristo, no pudiendo en su consecuencia comunicar con ellos, mientras por un acto público y solemne de la misma Iglesia sean admitidos de nuevo á la comunión.

La excomunión impuesta por pecados, que no separan al pecador por este mero hecho de la unidad de la Iglesia; tiene por objeto reducir al delincuente y volverlo al buen camino, pi-

(1) AVANZINI: *Exposit. bulæ apost. sedis*, pág. 78.

diéndose por el mismo la penitencia canónica; a diferencia de la excomunión impuesta á que se han separado de la unidad de la Iglesia por el cisma ó la herejía, cuyo objeto es, separarlos ó declararlos separados para conservar la unidad de comunión y de fé.

Así, pues, la excomunión impuesta al pecador es un acto de la Iglesia para la enmienda del delincuente por la penitencia canónica; y la excomunión impuesta al cismático ó hereje, es un acto de la Iglesia para defenderse y sostenerse en primer término contra la acción de los cismáticos, herejes y apóstatas.

Esta excomunión era á la vez un medio de evitar la perversión y contagio de los fieles, porque estos tenían prohibición de toda comunicación social con los excomulgados (1).

Significado de la palabra excomunión y sus distintas acepciones.—La palabra excomunión tomada en su significado gramatical, es lo mismo que hallarse fuera de la comunión; así que en los documentos citados se expresaba esta misma idea con las palabras—*extra communionem*—*abstentio ab ecclesia* y el excomulgado *abstentus communicatione*.

La palabra *excommunicatio* (excomunión) se usó en la antigüedad para expresar toda clase de censuras; pero desde el siglo XII ó XIII se concretó á una censura singular, distinta de la suspensión y entredicho (2).

Cuando la palabra *excommunicatio* se empleaba sin aditamento, significaba la excomunión menor (3).

Después de la publicación de las Decretales de Gregorio IX se toma dicha palabra por la excomunión mayor según declaró este papa en 1237 con estas palabras: *si quem* (4) *sub hac forma verborum: illum excommunico, vel simili, á iudice suo excommunicari contingat, dicendum est, eum non tantum minori, quæ a*

(1) AVANZINI: *Exposit. bullæ apost. sedis.*, pág. 82.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 3.^a, cap. VI.

(3) C. XII, quest. 4.^a, causa 3.^a—Cap. I, tít. XII, lib. II *sext. Decret.*

(4) Cap. LIX, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

perceptione sacramentorum sed etiam majori excommunicatione (que a communione fidelium separat) esse ligatum.

Su definición.—Se entiende por excomunión, *una censura instituida por la Iglesia, que separa al excomulgado de la comunión de los fieles.*

Se dice *censura*, porque censura y corrige á los rebeldes y contumaces con la privación de los bienes eclesiásticos; y cuando se impone á los incorregibles, tiene por objeto impedir que los demás se contaminen con su comunicación (1).

Instituida por la Iglesia, porque es una pena eclesiástica y trae su origen de la institución de la Iglesia.

Que separa al excomulgado, etc., lo cual distingue la excomunión de las otras censuras, porque la suspensión sólo priva del oficio ó beneficio eclesiástico, y el entredicho, de los divinos oficios.

Sus especies.—La excomunión se divide en las especies siguientes:

Justa é injusta, según que se impone ó no se impone por juez legítimo, mediante pecado de contumacia y con las formalidades de derecho ó sin ellas.

Latae y ferende sententie, según que se incurre en ella *ipso facto* ó por sentencia del Juez, según se deja explicado en el capítulo anterior (2).

Mayor y menor, según que se priva de la participación de todos los bienes comunes entre los fieles ó sólo del uso pasivo de los sacramentos, ó sea de su recepción (3).

Medicinal y mortal, según que se impone por leves ó graves delitos; pero no está ya en uso.

Origen de la excomunión *latae sententie*.—Esta excomunión apenas se conoció en los primeros siglos de la Iglesia

(1) C. XVI y XVII, quest. 3.^a, causa 24.

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tit. XVI[II], pár. 8.^o

(3) *Prælect. Jur. Canon. in seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 2.^o, párrafo 2.^o

respecto á los delitos que no separaban por su naturaleza al sujeto de la unidad de la Iglesia según aparece de los llamados cánones apostólicos, en los que se impone la excomunión con estas palabras: *dejiciatur—communione privetur—convenit communioni privari—damnetur—ab ecclesia abscindatur—segregate—separetur—separationis pœna feriatur—pœnam ferat segregationis*.

El concilio primero de Nicea usa de iguales palabras, cuando impone esta censura y lo mismo se observa en los cánones de concilios posteriores; pero cuando hablan de crímenes, que por su naturaleza separan de la unidad de la Iglesia, como—la apostasía de la fé—la herejía—el cisma; entonces la excomunión era ya *latæ sententiæ* por la naturaleza misma del delito, que una vez consumado, rompía la unidad de la fé y comunión, sin necesidad de la sanción canónica, porque la unidad de la Iglesia se halla con relación al cisma ó herejía consumada, en igual caso que la afirmación y la negación entre sí.

Esta verdad se halla confirmada por las sanciones canónicas. El concilio de Nicea después de sancionar el simbolo de fé, dice respecto á los que defienden que hubo un tiempo, en que el hijo de Dios no existía, la Iglesia católica y apostólica los anatematiza. Lo mismo dice de los lapsos y apóstatas, y todos ellos fueron considerados como separados de la Iglesia y privados *ipso facto* de la comunión.

El concilio de Gangres dictó varios cánones dogmáticos y los padres de dicho concilio manifiestan con respecto al que rehusa aceptar lo sancionado en ellos, *tamquam hæreticus, anathematizatus et damnatus abjiciatur. Et erit non solum incommunicatus, verum etiam ab Ecclesia habeatur extorris*.

La palabra *extorris* (Desterrado, echado de su tierra) indica separado *eo ipso* de la Iglesia, que es la comunión *latæ sententiæ*; pero esta excomunión que separa por su naturaleza á los delincuentes de la unidad de la Iglesia, no impedía que se los anatematizase por un acto especial de la autoridad eclesiástica, lo cual era de necesidad, cuando surgía duda sobre la orto-

doxia ó heterodoxia de alguno, porque los herejes bajo el nombre de cristianos deseminaban sus errores y se consideraban dentro de la Iglesia, á fin de distinguir y separar á los lobos de las ovejas; estaba determinado, que los sospechosos de herejía compareciesen en juicio y mediante una explícita detestación del error, desvaneciesen toda duda ó sospecha. Si no comparecían ó rehusaban dar la debida explicación, entonces eran privados de la comunión, según aparece de muchos monumentos de la antigüedad (1).

A semejanza de esta separación de los cismáticos, herejes y apóstatas manifiestos de la unidad de la Iglesia, se introdujo paulatinamente la forma de excomulgar á los demás pecadores por determinados delitos; y esta excomunión se conoce con el nombre de *excomunión latæ sententiæ*; de modo que el crimen cometido sea considerado como sentencia judicial.

El documento más antiguo de esta excomunión se halla en el concilio primero de Toledo, celebrado en el año 400. Allí se dice del que haya despojado al clérigo, religioso, ó una persona pobre, que si mandado por el obispo comparecer á su presencia para dar razón de su conducta, no obedeciere *ut excommunicatus habeatur, donec andiatur, ut reddat aliena* (2) y esta disposición fué trasladada por Graciano á su decreto (3).

Se trata aquí de un delincuente, que citado por la autoridad legítima no quiere presentarse en juicio y no habiendo medio de hacerle obedecer, se castiga su contumacia por la sentencia de excomunión *ipso facto incurrenda*, hasta tanto que cumplierse lo mandado.

Este modo de excomulgar á ciertos pecadores se siguió desde el siglo XI en adelante para castigar la contumacia de aquellos que no comparecían en juicio haciéndose sordos á los mandatos de los jueces, así como para reprimir ciertos de-

(1) AVANZINI: *Exposit. bulæ apost. sedis*, pág. 85.

(2) Cánón 11.

(3) C. XXI, quest. 3.ª, causa 24.

litos muy comunes no ménos que para suplir la acción de los obispos, porque estos ocupados en otros muchos asuntos no podían vigilar tan inmediatamente como en los primeros siglos la conducta de sus subordinados, aparte de otras muchas consideraciones propias de la nueva situación de la Iglesia y el creciente desarrollo de su autoridad en los pueblos (1).

Excomunión mayor y sus especies.—Se entiende por excomunión mayor, *una censura, que priva al sujeto de todos los bienes comunes de la Iglesia.*

La excomunión mayor se divide por razón del sujeto que incurre en ella en estas dos especies—*tolerada y no tolerada.*

Se llama excomulgado tolerado, *la persona que ipso facto ha incurrido en excomunión sin preceder sentencia judicial, que le declare incurso en dicha censura.*

Se llama excomulgado no tolerado, *la persona declarada nominatim excomulgada por sentencia judicial.*

Sus efectos.—Ciertos crímenes de especial gravedad que se los consideró dignos de la censura de excomunión para sostener en su vigor la disciplina eclesiástica y para reprimirlos y extirparlos, fueron prohibidos por leyes positivas con la pena de excomunión *ipso facto incurrenda*: de modo que cometido el delito castigado con censura, se incurría desde luego en ella sin necesidad de declaración judicial, porque el delito cometido se hallaba en lugar de la sentencia.

Ocurría, sin embargo, algunas veces, que el delito no era muy notorio y entonces la autoridad eclesiástica se limitaba á declarar, mediante un juicio sumario, que el delincuente había incurrido en excomunión.

Estos excomulgados con excomunión mayor, *a jure* ó *ab homine*, tolerados ó no tolerados eran considerados *vitan los* en la antigua disciplina sin más diferencia que la siguiente:

a) Aquellos, cuya excomunión era pública, eran públicamente *vitan dos*.

(1) AVANZINI: *Exposit. bullæ apost. sedis*, pág. 87.

b) Aquellos otros cuya excomunión no era notaria, sólo eran *vitandos* privadamente (1).

Se llaman *vitandos* á estos excomulgados con excomunión mayor, porque los fieles tenían prohibición de comunicar con ellos en lo espiritual y temporal, en lo eclesiástico y civil.

Consecuencias que resultaron de esto.—Se ha visto el origen y desenvolvimiento de la excomunión *late sententie* muy cómoda para la autoridad eclesiástica; pero objeto de escándalos con el trascurso del tiempo, porque los criminales, que se mostraban rebeldes á la citación judicial por los efectos sociales de la excomunión, sentían aun más verse separados y excluidos de la compañía de los fieles, sin que hubiese precedido juicio ni sentencia.

Las mismas palabras *delincuente notorio* son de tal índole, que admiten distintos grados y lo que uno llama notorio ó público, otro lo considera como incierto, dudoso y secreto, ó al menos no tan notorio que excluya las causas que eximen al delincuente de incurrir en la excomunión.

Si se agrega á esto:—

a) Que las excomuniones *late sententie* habían crecido extraordinariamente con el trascurso del tiempo, sin que se hubieren revocado después de surtir el efecto que motivó su sanción.

b) Que los fieles se veían á la vez castigados indirectamente porque se los privaba de toda comunicación eclesiástica y civil con los delinquentes.

Se comprenderá la necesidad de poner remedio á estos males y perturbaciones consiguientes, lo cual se llevó á efecto por el papa Martino V en el concilio de Constanza.

Constitución *ad evitanda scandalum* de Martino V.—Martino V dió la indicada constitución (2) en el concilio de Constanza y su texto literal es el siguiente:

(1) Cap. XIV, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XII, cap. V, num. 4, lib. VI, cap. V, num. 2.º

Ad evitanda scandala et multa pericula quæ conscientijs timoratis contingere possent, Christifidelibus tenore præsentium misericorditer indulgemus, quod nemo deinceps a communione aliqujus in sacramentorum administratione, vel receptione, aut alijs quibuscumque divinis, intus et extra prætextu cujuscumque censure, aut sententiæ ecclesiasticæ, a jure vel ab homine generaliter promulgata, teneatur abstinere, vel aliquem vitare, aut interdictum ecclesiasticum observare; nisi sententiæ vel censura hujusmodi fuerint illata contra personam, vel collegium, universitatem, ecclesiam, communitatem, vel locum certum, a judice publicata, vel denunciata specialiter et expresse, constitutionibus apostolicis et alijs in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Salve si quem, pro sacrilega manus injectione in clericum, in sententiam latam a canone adeo notorie constiterit incidisse, quod factum non possit aliqua tergiversatione celari, nec aliquo suffragio excusari: nam a communione illius, licet denunciatus non fuerit, volumus abstineri, justa canonicas sanctiones. Per hoc tamen non interdumus relevare, neque juvare sic excommunicatos, suspensos, interdictos aut prohibitos.

Su reproducción.—La citada constitución *ad evitanda scandala* se reprodujo en el conciliábulo de Basilea con leves alteraciones (1) y se insertó en el concordato celebrado entre León X y Francisco I de Francia, lo mismo que en el concilio V de Letrán.

En favor de quiénes se dió.—La citada disposición redujo el número de excomulgados vitandos según se ha visto; pero el fin del legislador fué precisamente favorecer á los fieles (2), según se vé claramente en el texto de la misma, de manera que la excomunión produce los mismos efectos en los excomulgados que antes de la constitución de Martino V y el excomulgado tolerado y no tolerado se hallan impedidos de comunicar con los fieles.

(1) AVANZINI: *Exposit. constit. apost. sedis*, pág. 88.

(2) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 53.

Casos que comprende.—La constitución de Martino V comprende los dos casos siguientes:

a) Los declarados *nominatim* excomulgados por sentencia judicial.

b) Los públicos percusores de clérigos, cuyo delito no puede ocultarse, ni eludirse.

Necesidad de la declaración judicial respecto á los públicos percusores de clérigos.—La declaración judicial en el caso del epígrafe es de necesidad para que esta clase de criminales sean vitandos (1) porque el delincuente que ha herido públicamente á un clérigo y cuyo hecho es tan notorio, que no puede negarlo, podrá, sin embargo, alegar que estaba ebrio—que lo hizo en justa defensa—que ignoraba su estado ú otra causa cualquiera.

No basta, por lo mismo la notoriedad del *hecho*; se necesita además la notoriedad de *derecho*, ó sea la sentencia del juez, declaratoria del crimen ó delito para que el público percusor de un clérigo sea excomulgado vitando.

Esta necesidad de la declaración judicial se halla confirmada por una antigua práctica ó costumbre en algunos países (2), que vino á confirmarse por la bula *Apostolicæ sedis* (3).

Reglas que han de tenerse presentes.—La constitución *ad evitanda scandala* de Martino V pasó por muchas vicisitudes: fue en tiempos poco conocida; se restringió por algunos en sus disposiciones; pero ha llegado á prevalecer paulatinamente hasta el punto, de constituir regla de derecho en toda su extensión (4), y por lo mismo conviene fijarse en sus disposiciones y en los efectos de las mismas, porque se trata de un

(1) SCAVINI: *Theolog. mor.*, tract. IV, disput. 3.^a, cap. VIII, art. 1.^o, párrafo 2.^o

(2) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 2.^o, párrafo 2.^o, número 771.

(3) *Excommunic. lata sent. romano pontifici reservata*, art. 2.^o y 17.

(4) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XII, cap. V, núm. 4.

punto práctico y de grande aplicación. En su consecuencia habrá de tenerse presente:

1.º Que la excomunión y las demás censuras *late sententiæ* quedan convertidas por dicha disposición en censuras *ferendæ sententiæ*, en el fuero externo (1).

2.º Que las censuras *late sententiæ*, una vez cometido el delito á que ván anejas, producen todos sus efectos en el fuero interno ó de la conciencia (2).

3.º Que si bien las censuras *late sententiæ* quedan convertidas en censuras *ferendæ sententiæ* respecto al fuero externo, media, sin embargo, aun en cuanto á esto, diferencia entre una y otra, porque—

a) La censura *ferendæ sententiæ* surte sus efectos en el fuero interno y externo por la sentencia condenatoria del juez, pronunciada con arreglo á derecho.

b) La censura *late sententiæ* contraída en el fuero interno, sólo necesita para producir sus efectos en el fuero externo la sentencia declaratoria del juez.

4.º Que en virtud de dicha constitución dada en favor de los fieles, éstos no están obligados á evitar ó abstenerse de comunicar en las cosas divinas y civiles con las personas que les consta se hallan excomulgadas, siempre que no hayan sido declaradas como tales por sentencia judicial (3).

5.º Que respecto á estas personas *ipso facto* excomulgadas y conocidas como tales, tendrá obligación por derecho natural de evitar todo trato con ellas si media peligro de perversion ó escándalo.

Comunicación con los herejes.—Los fieles deben abstenerse de comunicar con los herejes en los dos conceptos siguientes:

(1) AVANZINI: *Exposit. const. apost. sedis*, pág. 89.

(2) C. VI, quæst. 1.ª, causa 24.

(3) AVANZINI: *Exposit. const. apost. sedis*, pág. 90.

Por razón de la herejía.—En este concepto media peligro de perversión porque *las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres* (1), y para evitarlo es necesario de parte de los católicos, que observen lo siguiente:

1.º No tener trato familiar con ellos y en su consecuencia los fieles, principalmente seglares, deben evitar toda disputa con ellos en materias religiosas en cuanto que no pueden ser de provecho alguno, á no mediar una bastísima instrucción (2).

2.º Los rectores de las iglesias no deben permitir á los herejes desempeñar cargos sagrados, ni que se les dé á besar la *paz* en la misa, porque es signo solemne de unión y concordia religiosa.

Constitución *cum sicut*.—El papa Clemente VIII dispuso en dicha constitución respecto á los Italianos, que viven en países heréticos, lo siguiente:

1.º Que ningún italiano habite en población de los herejes, si no existe allí alguna iglesia católica, en la que pueda ejercerse libremente el culto católico.

2.º Que no puedan unirse en matrimonio con herejes sin licencia del Sumo Pontífice, ni tampoco=

a) Asistir á los funerales de aquellos.

b) Ser padrinos de bautismo de sus hijos, á menos que les bautice un sacerdote católico, ni que los herejes sean padrinos en el bautismo de sus propios hijos.

c) Ser asistidos por médicos herejes, si hubiere médico católico idóneo.

3.º Que los párrocos amonesten seriamente á los italianos, que se dirigen á dichos países sobre su estrecha obligación de conservar la fé católica, observar sus preceptos, etc.

Por razón de la excomunión.—En este concepto no se les prohíbe comunicar con los herejes en las cosas civiles y profanas, á menos que sean *vitandos*, ó en otros términos, que

(1) *Epist. 1.ª ad corint.*, cap. XV, v. 33.

(2) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. II, núm. 840.

se hallen excomulgados *nominatim et specialiter*, porque aun cuando sean públicos y notorios no por esto han de ser considerados como vitandos y por esta razón es lícito á los católicos principalmente en los puntos donde existe libertad de cultos, comunicar con los herejes públicos en todos los actos civiles (1).

Si los católicos podrán comunicar *in divinis* con los herejes.—Los católicos tienen prohibición bajo pecado grave de comunicar en esto con los herejes, porque este acto lleva anejo=

- a) El peligro de perversión ó escándalo.
- b) La comunicación en un rito falso.
- c) Cierta aprobación exterior de una secta falsa (2).

Como consecuencia de lo expuesto, no puede permitirse á los herejes que celebren en las iglesias católicas ni tampoco los católicos pueden celebrar lícitamente en las iglesias de aquellos, á ménos que la costumbre ó pobreza de ciertos países pueda excusar de pecado, según acontece en ciertos puntos, donde los católicos y herejes celebran en unas mismas iglesias, unos después de otros.

Prohibición de recibir los sacramentos de ministros herejes.—Los católicos no pueden lícitamente recibir los sacramentos de los obispos ó párrocos heréticos, fuera del caso de necesidad extrema, según declaró la sagrada congregación del Santo oficio; si de hacerlo resulta escándalo, peligro de perversión, ó si el sacramento se administra *ritu hæretico*, porque de no mediar algunas de estas circunstancias, podría recibirse los sacramentos de los herejes no denunciados *nominatim*, siempre que no sean públicos percursores de clérigos (3).

Cosas permitidas á los católicos en esta materia.
—Los católicos pueden *simul orare* con los herejes no denun-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret. part. 1.^a, tit. VII, núm. 211 y sig.

(2) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. II, núm. 840.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret. part. 1.^a, título VII, núm. 218.

ciados y oír con ellos *rem divinam ac conciones*, asistir á sus funerales y sepelio siempre—

a) Que esto se haga sin ánimo de favorecer á los herejes como tales porque esto es intrínsecamente malo, sinó en el concepto de humanidad y amistad.

b) Que este acto se verifique sin escándalo ú ofensa de los católicos y sin comunicación en los ritos y ceremonias de los herejes.

c) Que los herejes sean enterrados en lugar profano, porque si el acompañamiento fuese para una cosa ilícita, cooperarían al pecado, de los que hacían el sepelio (1).

Su asistencia á los templos heréticos.—Los católicos pueden lícitamente visitar los templos de los herejes, cuando no se celebra el falso rito (2), orar allí *ritu catholico* y aun asistir á sus bautismos, matrimonios y pláticas religiosas, si se ejecuta sin fin alguno malo como actos de pura curiosidad, considerando sus ritos como una representación cómica, lo cual no es por sí signo de profesión de la herejía.

Si esta asistencia tiene por objeto prestar un servicio puramente civil, como la persona que acompaña al templo á su amo; ó enterarse de los errores que allí se enseñan por el ministro hereje para refutarlos ó combatirlos: entonces esta asistencia será sin duda alguna lícita en todos conceptos, siempre que no haya escándalo ni peligro de perversión (3).

Finalmente; la sagrada congregación del santo oficio contestó en 14 de Enero de 1848 á una consulta dirigida á la misma, que los católicos pueden asistir á los templos de los herejes por mera curiosidad, siempre que no medie comunicación *in sacris* (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., part. 1.^a, título VII, núm. 214.

(2) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. II, núm. 840.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., part. 1.^a, tít. VII, núm. 215.

(4) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. II, núm. 840.

Si podrán ser padrinos en el bautismo de los herejes.—Los católicos que viven en países heréticos como Alemania, Inglaterra, ó en puntos donde existe libertad de cultos como Francia, pueden ser padrinos en el bautismo del hijo de un hereje, si este sacramento se administra *ritu catholico*, porque esto no es acto por sí malo ó prohibido.

Los católicos no pueden ordinariamente, á no mediar causa justa y grave, consentir que los herejes ó cismáticos sean padrinos en el bautismo de sus hijos, puesto que tienen imposibilidad de cumplir con los deberes anejos á este cargo (1).

Reglas que han de tenerse presentes.—La importancia práctica de esta materia, me obliga á insistir en ella reproduciendo parte de la doctrina que se deja consignada, en las reglas siguientes:

1.^a Que la comunicación *in divinis* con los herejes y cismáticos aun no denunciados es siempre peligrosa (2).

2.^a Que dicha comunicación está prohibida, siempre que medie escándalo, según se deja consignado.

3.^a Que los fieles habrán de abstenerse de este trato con los herejes y cismáticos, cuando haya peligro de perversión, como se ha indicado, y este fué el motivo en que se fundó el arzobispo de Turín para prohibir á sus diocesanos en 12 de Mayo de 1863, que asistieran á los templos de los protestantes aun por mera curiosidad, bajo pena de excomunión *late sententie* reservada (3).

Significado de la palabra anatema.—La palabra *anatema* quiere decir maldición ó execración, significándose por ella en el uso de la Iglesia la excomunión mayor.

Los sagrados cánones expresan con esta palabra=

a) La excomunión contraída por herejía ó sospecha de

(1) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ. in lib. V Decret.*, part. 1.^a, tit. VII, núm. 216.

(2) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. VI, cap. V, núm. 2.^o

(3) SCAVINI: *Theolog. mor.*, lib. II, núm. 840, edit. 13.

ella, que encierra la omnimoda y completa separación de la Iglesia (1).

b) Las solemnidades empleadas en la excomunión, como la publicación de la misma con candelas encendidas, que se apagan después, y otras ceremonias instituidas por la Iglesia.

c) Se usa también de la expresada palabra para distinguir esta censura de la excomunión menor (2).

Efectos de la excomunión mayor en el excomulgado.—Esta excomunión separa completamente de la comunión de la Iglesia, hasta el punto de que el sujeto en quien ha recaído, no es considerado como miembro de aquella, sino como gentil y publicano: así que pierde todos los derechos que había adquirido por el bautismo (3), y por esta razón se les niega lo que se concede á los fieles que permanecen dentro del gremio de la Iglesia (4).

La importancia de esta materia y la conveniente claridad en su exámen, exige que se trate de estos efectos de la excomunión en los tres conceptos siguientes =

1.º Privación de los bienes espirituales comunes entre los fieles.

2.º Privación de los beneficios y oficios eclesiásticos.

3.º Privación de comunicación forense y civil.

Privación de los bienes espirituales comunes entre los fieles.—Estos pueden resumirse en los siguientes=

Uso activo de los sacramentos, ó sea de la potestad de conferirlos (5); de manera que si administra los sacramentos, fuera del caso de necesidad extrema, incurre en irregularidad; pero el acto es válido, ménos el sacramento de la penitencia, que es nulo por defecto de jurisdicción.

(1) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. III *De Reformat.*

(2) C. XII, quæst. 4.^a, causa 3.^a

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XVIII, párr. 9.º

(4) C. V, dist. 19.—Cap. XXX, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. III, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(5) Cap. IV y X, tít. XXVII, lib. V *Decret.*

Uso pasivo de los sacramentos, ó sea de la recepción de ellos, y comprende también á los excomulgados tolerados (1); porque la persona que es contumaz contra los preceptos de la Iglesia, debe ser excluida de la participación de bienes de ella.

Esto no obstante, podrá recibir los sacramentos, cuando media peligro de muerte, mutilación, infamia, etc., porque la ley eclesiástica no obliga con tanto detrimento (2).

Sacrificio de la Misa.—El excomulgado, que asiste al sacrificio de la Misa peca mortalmente, á ménos que medie ignorancia, ó necesidad de evitar un grave daño; debiendo advertir, que si el excomulgado es vitando ó manifiesto percursor de clérigo, debe ser arrojado de la iglesia, si voluntariamente no quiere salir, y en caso de no poder expulsarlo, se suspenderá el santo sacrificio, si no ha empezado el cánon (3).

Asistencia á los divinos oficios, como el rezo público de las horas canónicas, procesión pública, etc., sin que por esto se entienda que se halla exento del rezo privado del oficio divino.

Sufragios comunes de la Iglesia, que provienen á los fieles de los oficios públicos y sacrificio de los ministros del culto; así como los frutos de las satisfacciones, que se aplican por autoridad de los prelados del común tesoro de la Iglesia, mediante las indulgencias (4); pero los sufragios privados, oraciones y el acto del sacrificio pueden ofrecerse en nombre propio por la conversión de los excomulgados (5).

Sepultura eclesiástica, en cuyo caso se hallan los excomulgados vitandos únicamente, aun cuando muriesen arrepentidos, porque ante todo es necesario que se los absuelva previamente. (6)

(1) Cap. XXXII y LIX, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. X, tit. XXVIII, lib. V *Decret.*

(2) S. ALFONSO DE LIGORIO: *Theolog. mor. univ.*, lib. VII, núm. 158.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXIX, pár. 2.º, núm. 130.

(4) Quaest. 3.ª, causa 11.—Cap. XXVIII y XXXVIII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid, núm. 126.

(6) Cap. XII, tit. XXVIII, lib. III *Decret.*

Ingreso en la Iglesia, mientras se celebran los divinos oficios, porque fuera de este caso pueden asistir al templo y orar allí privadamente en sitio separado de los demás fieles.

Privación de oficios y beneficios eclesiásticos.—

El excomulgado queda incapacitado para obtener beneficio eclesiástico; de suerte que la elección, presentación ó nombramiento, mediante el cual se le promueve á un beneficio, es nula *ipso jure* porque el excomulgado, sin excluir al tolerado, tiene prohibición de comunicar con los fieles y de ejercer el oficio eclesiástico (1).

El excomulgado no queda privado del beneficio obtenido ántes de incurrir en la censura, por más que pueda privársele de él, si permanece en la excomunión y la contumacia es grave.

El clérigo que ha incurrido en excomunión no queda privado *ipso facto* de los frutos del beneficio adquirido ántes de incurrir en esta censura, según la opinión más probable; pero se hace acreedor á que se le prive de ellos, mediante sentencia judicial (2).

Si el excomulgado puede ejercer jurisdicción eclesiástica y desempeñar otros cargos.—En cuanto á la jurisdicción eclesiástica que venía ejerciendo el clérigo, que incurre en excomunión debe advertirse:

a) Que el excomulgado no puede ejercer lícitamente jurisdicción eclesiástica (3) porque el ejercicio de la jurisdicción es la principal comunicación con los fieles.

b) Que son nulos los actos de jurisdicción ejercidos por el excomulgado vitando, porque ha quedado privado de aquella sin que por este punto haya divergencia entre los canonistas (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 147.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 2.º, núm. 156 y sig.

(3) C. IV, quæst. 1.ª, causa 24.—Cap. XXIV, tít. XXVII, lib. II *Decret.*—Cap. I, tít. VIII, lib. I *sext. Decret.*—Cap. I, tít. XIII, lib. I *sext. Decret.*—Capítulo X, tít. XIV, lib. I *sext. Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 264.

c) Que el excomulgado tolerado ejerce válidamente la jurisdicción, cuando los fieles no oponen contra él esta excepción, porque la Iglesia permite á los fieles la comunicación *in divinis et humanis* con los excomulgados tolerados; pero todos los actos de jurisdicción ejercidos por éstos serán nulos, cuando los fieles oponen la excepción de hallarse excomulgados, y en este concepto lo rechazan; lo cual habrá de probarse dentro del término de ocho días, contados desde el siguiente al en que se opuso la excepción (1).

d) La excomunión priva de la facultad de predicar y enseñar públicamente la Teología ó Derecho Canónico, porque en esto existe una comunicación notable prohibida á los excomulgados.

Privación de comunicación forense y civil.—La excomunión priva de la comunicación forense; de manera que el excomulgado vitando no puede ser juez (2), actor (3), abogado (4), procurador (5), testigo (6), ni escribano (7); pero podrá ser demandado en juicio (8), porque de otro modo le resultaría provecho de su malicia, y en este supuesto tiene derecho á defenderse (9).

El excomulgado tolerado puede actuar como juez, actor, procurador, testigo, escribano, etc.; pero existe facultad en los

(1) Cap. I, tít. XII, lib. II *sext. Decret.*

(2) Cap. XXIV, tít. XXVII, lib. II *Decret.*—Cap. I, tít. VIII, lib. I *sext. Decret.*—C. XXXVII, quæst. 1.^a, causa 24.

(3) Cap. VII, tít. I, lib. II *Decret.*—Cap. II y XII, tít. XXV, lib. II *Decret.*—Cap. VIII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(4) Cap. VIII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(5) Cap. VII, tít. I, lib. II *Decret.*—Cap. VIII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*—Cap. VII, tít. XIX, lib. II *Decret.*

(6) Cap. VIII, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccl. univ.*, in lib. II *Decret.*, tít. XXII, párrafo 1.^o, núm. 5.

(8) Cap. VII, tít. I, lib. II *Decret.*

(9) Cap. VIII, X y XI, tít. XXV, lib. II *Decret.*

fieles de rechazarlo en dichos conceptos, oponiendo la excepción de hallarse aquél excomulgado.

Los excomulgados se hallan privados igualmente de la comunicación civil, comprendida en las palabras siguientes=

Os, orare, vale, communio, mensa negatur.

Sobre cuya significación me limito á las indicaciones que siguen=

La palabra *os* expresa el ósculo de paz y toda comunicación verbal ó por escrito (1), lo mismo que cualquier signo de benevolencia (2).

Orare, ó sea la recitación de su nombre en las preces públicas (3).

Vale, ó sea la señal de urbanidad, bien se haga de palabra, por gesto ó escrito (4).

Communio, expresándose con esta palabra toda comunicación en los actos meramente civiles, como trabajar, sentarse, habitar, dormir, celebrar contratos, etc. (5).

Mensa, ó sea la reunión en la misma mesa y la asistencia con los excomulgados á los convites *per modum societatis* (6).

Causas que permiten al excomulgado ejercer actos prohibidos al mismo.—Las indicadas prohibiciones de la Iglesia no obligan en los casos de una grave necesidad, como peligro de muerte, infamia, pérdida de bienes, y por lo mismo es lícita al excomulgado vitando la comunicación civil y hasta la recepción y administración de sacramentos.

(1) C. XVI y XXVII, quæst. 3.^a, causa 11.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXIX, parágrafo 2.^o, núm. 177.

(3) C. XIX, quæst. 3.^a, causa 11.—Cap. XXVIII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(4) C. XVII, quæst. 3.^a, causa 11.

(5) C. XXIX y XXXVIII, quæst. 3.^a, causa 11.—Cap. LIX, tit. XXXIX, libro V *Decret.*

(6) Epist. 1.^a *ad Corinth.*, cap. V, v. 11.—C. XVII y XXVI, quæst. 3.^a, causa 11.—C. XVII, quæst. 1.^a, causa 22.—C. XXVII, quæst. 1.^a, causa 27.

El excomulgado tolerado puede administrar los sacramentos, siempre que medie petición por parte de los fieles (1).

Prohibición á los fieles de comunicar con los excomulgados vitandos.—Los fieles no pueden licitamente comunicar con los excomulgados, que han sido declarados tales por sentencia judicial, ni con los públicos percursores de clérigos en la forma que se deja ántes consignado.

Censura impuesta al que traspasa este mandato.—La trasgresión de esta ley produce en el sujeto excomunión menor y pecado.

El fiel que comunicaba con el excomulgado no tolerado incurriría en excomunión menor; según las disposiciones del derecho (2); pero esta censura ha dejado de existir por la bula *Apostolicæ Sedis*.

El papa Pio IX sólo habla en dicha Constitución de la excomunión mayor (3), generalmente reservada al Sumo Pontífice, en que incurren las personas que comunican con el excomulgado *nominatim* por el Papa *in crimine criminoso, ei scilicet impendendo auxilium vel favorem* (4) y de la excomunión de la misma especie, en que incurren los clérigos, que comunican libremente y á sabiendas con los excomulgados *nominatim* por el Romano Pontífice (5).

Si incurren en pecado.—El fiel que comunica con el excomulgado vitando incurre generalmente en pecado venial; pero habrá pecado mortal en los casos siguientes=

a) Si comunica públicamente en las cosas divinas, porque traspasa el precepto de la Iglesia en cosa grave (6).

(1) HUGUENIN: *Exposit., meth. Jur. Canon, pars special.*, lib. II, título II, trat. 2.º, disert. 2.ª, cap. II, art. 1.º, pár. 1.º

(2) C. III, quest. 3.ª, causa 11.—Cap. XXIX, XXX, XXXVIII y LV, título XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. III, tit. XI, lib. V *sect. Decret.*

(3) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.ª, cap. II, pár. 184.

(4) *Excommunic. lata sent. Rom. Pont. reserv.*, art. 16.

(5) Art. 17, *ibid.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V. *Decret.*, tit. XXXIX, párrafo 2.º, núm. 178.

b) Si comunica *in crimine criminoso*, ó sea en aquel delito por el cual se impuso la excomunión.

c) Si comunica voluntariamente y á sabiendas con el excomulgado *nominatim* por el Papa.

d) Si comunica con el excomulgado después de dictada sentencia *contra participantes*.

Casos en que los fieles pueden comunicar con los excomulgados vitandos.—La prohibición de comunicar con los excomulgados vitandos deja de existir, mediante justas causas, que se hallan comprendidas en las palabras siguientes:

Utile, lex, humile, res ignorata, necesse.

Todos los autores convienen en que puede comunicarse con los *vitandos* en los cinco casos expresados, y se fundan en las siguientes palabras de Gregorio VII en un concilio celebrado en Roma: *Quoniam multos peccatis nostris (1) exigentibus pro causa excommunicationis perire quotidie cernimus, partim ignorantia, partim nimia simplicitate, partim timore, partim etiam necessitate, devicti misericordia, anathematis sententiam ad tempus, prout possumus, opportune temperamus. Apostolica itaque auctoritate ab anathematis vinculo hos subtrahimus: videlicet uxores, liberos, servos, ancillas, seu mancipia, necnon rusticos servientes, et omnes alios, que non adeo curiales sunt, ut eorum consilio scelera perpetrentur, et eos, qui ignorantes excommunicatis communicant, sive illos, qui communicant cum eis, qui excommunicatis communicant. Quicumque autem orator, sive peregrinus, aut viator in terram excommunicatorum devenerit, ubi non possit emergere, vel non habeat unde emat, ab excommunicatis accipiendi licentiam damus. Et si quis excommunicatis non in sustentationem superbie, sed humanitatis causa dare aliquit voluerit, non prohibemus.*

(1) C. CHI, quest. 3.^a, causa 11.

Acerca de la inteligencia de ellas, me limito á estas indicaciones:

Utile, ó sea cuando media utilidad espiritual ó corporal, como dar consejos saludables al excomulgado, ó pedirselos si no puede acudirse á otro, darle limosna ó recibirla de él (1).

Lex, ú obligación matrimonial, en cuyo caso la mujer puede comunicar con su marido y *vice versa* (2).

Humile, ó la humildad de sujeción en cuya virtud el hijo puede comunicar libremente con su padre, el soldado con sus jefes, etc. (3).

Res ignorata, ó sea la ignorancia de derecho ó hecho no afectada (4).

Necesse, que es la necesidad espiritual ó temporal del mismo excomulgado ó de otros, siempre que sea grave y no pueda remediarse por otro no excomulgado (5).

Facultad para comunicar con el excomulgado tolerado.—Los fieles pueden comunicar libremente con todos los excomulgados tolerados (6), según la constitución *Ad evitanda scandala* de Martino V (7).

También será lícito comunicar en las cosas civiles con los herejes y cismáticos que no han sido declarados tales por sentencia judicial (8), siempre que no haya escándalo ó peligro de perversión; pero en esta materia es preciso proceder con su-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 2.^o, núm. 183.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 3.^a, cap. VI.

(3) C. CIII, quest. 3.^a, causa 11.—Cap. XXXI, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

(4) C. CIII, ibid.—Cap. XXIX, ibid.

(5) C. CV, ibid.—Cap. XXXIV, ibid.

(6) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV tít. XVIII, pár. 10.

(7) BERARDI: *Comment. in Jus. Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 3.^a, cap. VI.

(8) VECCHIOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 53.

ma prudencia (1), y principalmente si se trata de la comunicación con los mismos *in divinis*.

Si los excomulgados tolerados pueden comunicar con los fieles.—Los excomulgados tolerados no pueden comunicar con los fieles, sinó en los casos permitidos á los *vi-tandos*, y cuando los fieles les invitan á ello, porque estos=

a) Pueden pedir la administración de sacramentos al sacerdote excomulgado, que está tolerado.

b) El excomulgado tolerado puede administrar válidamente los sacramentos en cuantas ocasiones se le pidan por los fieles.

c) El excomulgado tolerado peca gravemente, si se ingiere en la administración de las cosas divinas, sin mediar petición por parte de los fieles.

Excomunión menor, y sus efectos.—Se incurría únicamente en ella por la comunicación con el excomulgado *vi-tando*; pero ha dejado de existir por la bula *Apostolicæ Sedis*, según se deja manifestado.

Su efecto directo era la privación pasiva de los sacramentos (2), y el efecto indirecto la privación de ser elegido para beneficios, porque el beneficio se confiere al beneficiado para que reciba los sagrados órdenes, y ofrezca el sacrificio de la Misa, etcétera, cuyos actos no pueden tener lugar mediante la excomunión, así que Gregorio IX hablando del que está ligado con excomunión menor dice en una decretal de 1237: *Si tamen scienter talis electus fuerit, ejus electio est irritanda, pro eo, quod ad susceptionem eorum eligitur, à quorum perceptione à sanctis patribus est privatus* (3).

Cualquier sacerdote aprobado para oír en confesión, tenía facultad para absolver de esta censura, puesto que no era reservada; pero como ha dejado de existir, es inútil decir más acerca de ella (4).

(1) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. VI, cap. V.

(2) Cap. II, tít. XXV, lib. II *Decret.*—Cap. X, tít. XXVII, lib. V *Decret.*—Cap. LIX, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

(3) Cap. X, tít. XXVII, lib. V *Decret.*

(4) Cap. XXIX, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

CAPITULO V.

DE LA SUSPENSIÓN.

ARTÍCULO I.

DE LA SUSPENSIÓN COMO CENSURA.

Suspensión, y en qué se distingue de las otras censuras.—Se entiende por suspensión: *Una censura eclesiástica que impide directamente al clérigo el uso ó ejercicio del orden, oficio ó beneficio.*

Se dice, que es una *censura*, para distinguirla de la irregularidad que es una mera inhabilidad para recibir y ejercer los órdenes, así como de la suspensión meramente penal y de las demás penas eclesiásticas que no son censuras.

Se dice que *impide directamente al clérigo* para expresar que esta censura solo puede recaer en un clérigo.

Se dice que *impide el uso ó ejercicio del orden*, etc., para distinguirla de la degradación ó deposición que privan del mismo título ó beneficio eclesiástico.

La suspensión se distingue de la excomunión en que esta priva de todos los bienes de la comunión cristiana, se impone á los clérigos y legos, y no priva del ejercicio de los órdenes, sinó indirectamente en cuanto que impide la administración de sacramentos; pero la suspensión no priva de todos los bienes espirituales, se impone solamente á los clérigos é impide directamente el uso de los órdenes.

Se diferencia también del entredicho, en que éste puede imponerse á los legos, priva de la recepción de algunos sacramentos, divinos oficios y sepultura eclesiástica.

Distinción entre la suspensión penal y medicinal.—Una y otra suspensión se distinguen entre sí en lo siguiente:

1.^o El término de la suspensión medicinal es la enmienda y arrepentimiento del clérigo, á diferencia de la meramente penal, que puede ser perpétua ó temporal.

2.^o La suspensión medicinal requiere monición previa para imponerse, lo cual no es preciso en la meramente penal, que se impone por culpa pasada.

3.^o La suspensión medicinal sólo se impone por culpa propia de aquél sujeto á quien se aplica, y la meramente penal puede fulminarse sobre una comunidad por culpa de uno de sus individuos.

4.^o La medicinal no termina sinó mediante la absolución, y la penal concluye por el trascurso del tiempo señalado ó por dispensa del superior.

Si la censura de suspensión se distingue de la suspensión impuesta al penitente por el confesor.—La censura de *suspensión* se distingue igualmente de la suspensión de celebrar que se impone por el confesor al penitente, cuya diferencia se comprende desde luego, fijándose en que la primera sólo se impone por el que tiene jurisdicción en el fuero externo, y para la segunda basta que la haya en el interno, etc.

Clasificación de esta censura.—La suspensión puede considerarse en los tres conceptos siguientes:

1.^o Por razón de las funciones que prohíbe ejercer al clérigo.

2.^o Por razón del tiempo que dura.

3.^o Por razón de la causa que la motiva.

Especies de suspensión por razón de las funciones que prohíbe ejercer al clérigo.—La suspensión en este concepto se divide en—*total*—y *parcial*.

La primera priva al clérigo del uso ó ejercicio del oficio y beneficio eclesiástico á la vez.

La segunda priva sólo del ejercicio del orden ó de la jurisdicción; del oficio ó del beneficio.

La suspensión pura, simple y absoluta priva de todo uso ó ejercicio del ministerio eclesiástico, y como que es suspensión

total, el sujeto tiene prohibición de ejercer todo orden y jurisdicción, y de percibir los frutos del beneficio (1).

No sucede lo mismo en la suspensión parcial, porque el sujeto suspenso solamente del orden, podrá ejercer los demás ministerios eclesiásticos, así como el suspenso de sola la jurisdicción, queda únicamente inhabilitado para desempeñar esta.

El suspenso de solo el oficio, ó sea del ejercicio del orden y jurisdicción, no se entiende que lo esté del beneficio siempre que cumpla por medio de otro sus cargas, y el delito que la ha motivado no sea enorme, y no permanezca un año en este estado por culpa suya.

Finalmente, el suspenso de solo el beneficio, ó sea de sus emolumentos, frutos y administración, no lo está del ejercicio del orden y jurisdicción, ó sea del oficio, ni tampoco de los demás beneficios que posea fuera de la diócesis, á ménos que no se exprese otra cosa al imponérsele esta censura (2).

Especies de suspensión por razón de su duración.

—La suspensión por razón del tiempo se divide en —*temporal*— y *perpétua*—ó *absoluta*—y *determinada* según que fija ó no fija el tiempo de su duración.

Sus especies por razón de su causa motiva. —La suspensión en este concepto se divide en las especies siguientes:

Paramente penal é impropia, la cual tiene por objeto el castigo del delito cometido.

Medicinal, que tiene por objeto la enmienda del delincuente.

Ad cautelam, que consiste en privar al clérigo del ejercicio del ministerio eclesiástico, no porque sea criminal ó esté convicto ó confeso de un crimen, sinó porque está mal conceptuado por el público ó media acusación ó inquisición judicial del crimen que se le atribuye, é importa mucho para el buen nombre de la clase y respeto á las sagradas funciones que no se desempe-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus eccl. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXIX, párrafo 4.º, núm. 266.

(2) BERARDI: *Comment. in jus eccl. univ.*, tom. 4.º, pár. 2.º, dissert. 3.ª, capítulo VII.

ñe el santo ministerio sinó por las personas de vida y conducta irrepreensible, no ménos que de buena opinión y fama entre el pueblo fiel.

De lo expuesto acerca de la suspensión *ad cautelam* se desprende: 1.^o que es parcial y sólo priva al sujeto á quien se impone del ejercicio del órden, pero nó del beneficio: 2.^o que como no es censura en un sentido propio, no se requiere que en su imposición se observen las fórmulas canónicas prescriptas para las censuras: y 3.^o, que el sujeto á quien se impone, tiene el grave deber de someterse á su cumplimiento.

La suspensión se divide además en—

A jure y ab homine.

Latae y ferendae sententiae.

Judicial y extrajudicial ó ex informata conscientia.

Quiénes pueden imponer esta censura.—Sólo el legislador puede imponer la suspensión *a jure*, correspondiendo este derecho en cuanto á la suspensión *ab homine*, a todos los que pueden excomulgar ó juzgar á los clérigos con jurisdicción en el fuero externo; debiendo advertir que los obispos no podían, según el derecho antiguo, suspender á los presbíteros sin consentimiento del cabildo (1); pero esta ley quedó abrogada por costumbre legítima en contrario.

A quiénes se impone.—La suspensión propiamente dicha sólo puede imponerse á los clérigos, porque se refiere necesariamente al oficio ó beneficio eclesiástico, del cual son incapaces los legos (2), y en este supuesto—

a) Puede imponerse esta censura á cualquier clérigo, sea cual fuere su dignidad, á excepción del Sumo Pontífice, y siendo necesario en cuanto á los obispos, que se haga mención especial de ellos en los decretos generales de suspensión (3) para que incurran en ella.

(1) Cap. I, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XVIII, tit. XXXI, lib. V *Decret.*—SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V. *Decret.*, tit. XXXIX, pár. 4.^o, núm. 274.

(3) Cap. IV, tit. XI, lib. V. *sext. Decret.*

b) Los religiosos pueden también ser penados con esta censura, siempre que hayan recibido al ménos la prima clerical tonsura.

c) Puede imponerse la suspensión á una corporación eclesiástica.

d) La persona que ha incurrido en esta censura, puede ser de nuevo suspensa por la misma causa ó por otra distinta.

e) Los muertos no pueden incurrir en suspensión.

Causas para ello.—La suspensión *a jure* ó *ab homine* no puede imponerse sinó por culpa propia y grave, sin que esto obste para que el juez pueda imponerla por breve tiempo, mediante culpa leve (1).

Es condición esencial en la suspensión como censura, que se imponga por tiempo indeterminado; de modo que si es por cierto tiempo, ó *in perpetuum*, tiene el concepto de pena vindicativa (2).

Forma que ha de observarse en su imposición.—El derecho no determina las palabras que hayan de emplearse en la imposición de esta censura, y por lo mismo sólo se requiere el uso de aquellas que declaren suficientemente este efecto.

En todo caso es necesario que preceda *monición*, porque no puede constar á la Iglesia la contumacia de una persona, si no se la amonesta ántes; pero esto ha de entenderse en el supuesto de que la suspensión se imponga como censura, ó sea para la corrección del delincuente; porque si se impone como pena vindicativa por el delito cometido, entónces no se requiere que preceda monición (3).

Requisitos en la sentencia de suspensión.—La sentencia de suspensión ha de consignarse por escrito, expresan-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXIX, pár. 4.º, núm. 282 y sig.

(2) BERARDI: *Comment.* en *Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 2.ª, disert. 3.ª, cap. VII.

(3) Cap. XXXIII, tit. XX, lib. II *Decret.* = Cap. V, tit. XI, lib. V *Decret.*

do la causa por la que se impone, y con obligación de entregar testimonio de ella al suspenso, si lo pidiere.

Si el juez no observase esto, faltando temerariamente á las prescripciones de la ley, queda suspenso por un mes *ab ingressu ecclesie et officiis divinis* (1).

Efectos de la suspensión.—Los efectos de la suspensión son varios, atendidas sus distintas clases; puesto que cada una de ellas obra tan solamente en la extensión que expresan las palabras, debiendo advertirse=

a) Que la suspensión impuesta en términos generales, se entiende del oficio y beneficio, á diferencia de la suspensión parcial, que no se extiende fuera de la materia que indica, así que la suspensión del orden no incluye la suspensión de la jurisdicción, ni el suspenso del orden superior queda suspendido del orden inferior; pero el suspenso del orden recibido queda inhabilitado para ascender á otro orden mayor (2).

b) La suspensión total *ab officio* priva de la potestad de jurisdicción y comprende la prohibición del ejercicio de los actos del orden (3), no pudiendo, en su consecuencia, elegir, ser elegido, ni dar sufragio alguno (4); pero el suspenso únicamente de la jurisdicción no queda suspenso del orden ni del beneficio (5).

c) La suspensión del beneficio no priva del beneficio, sino de sus frutos (6) y administración (7).

d) El sujeto que hallándose suspenso ejerciere las funciones que le están prohibidas, incurre en culpa grave, porque desprecia el precepto de la Iglesia y su censura, debiendo advertir que

(1) Cap. I, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disert. 3.^a, cap. VII.

(3) Cap. I, tit. XIV, lib. II *sext. Decret.*

(4) Cap. VIII, tit. IV, lib. I *Decret.*—Cap. XXVI, tit. VI, lib. I *Decret.*—Capítulo VIII, tit. XIV, lib. I *Decret.*—Cap. XVIII, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXIX, párrafo 4.^o, núm. 290 y sig.

(6) Cap. VII, tit. VI, lib. I *Decret.*

(7) Cap. I, pár. 2.^o y cap. XVI, tit. VI, lib. I *sext. Decret.*

además incurre en irregularidad por el ejercicio del orden (1), cuya pena no se extiende al que quebranta la suspensión de jurisdicción ó beneficio (2), por más que deba ser castigado con otras penas (3).

c) El suspenso de la jurisdicción y beneficio queda inhabilitado para su ejercicio hasta el punto de ser nulo lo que hiciere, siempre que sea personalmente denunciado.

Absolución de ella.—La suspensión como censura cesa de los mismos modos que la excomunión. Si aquélla tiene el carácter de pena vindicativa cesa=

a) En el momento de transcurrir el tiempo señalado en su imposición cuando es temporal, y ántes por dispensa del que la impuso, su superior ó sucesor, siendo necesaria la dispensa pontificia de la pena temporal *à jure*, para que cese ántes de cumplir el término señalado.

b) Si dicha pena es perpetua, sólo cesa mediante dispensa, y si se impone en términos absolutos sin señalamiento de tiempo, entónces podrá absolver de ella el que la impuso, su superior ó sucesor si es *ab homine*, y el obispo si *à jure*, debiendo advertir que el obispo por sí ó por sus vicarios puede absolver de la suspensión, ya sea *à jure*, ó bien *ab homine*, siempre que provenga de delito oculto (4) y no sea reservada.

ARTÍCULO II.

DE LA SUSPENSIÓN «EX INFORMATA CONSCIENTIA»

Suspension *ex informata conscientia*, y su origen.—

Se entiende por la indicada suspensión: *La sentencia dictada por el obispo, mediante causa conocida por él en su conciencia, y no en virtud de información ó proceso jurídico* (5).

(1) Cap. I, tít. XIV, lib II *sext. Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 308.

(3) PHILLIPS: *Comp. Jur Eccles.*, lib. III, sect. 2.^a, cap. II, pár. 187.

(4) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VI *De Reformat.*

(5) BOUIN: *De Judiciis*, part. 2.^a, sect. 4.^a, subsect. 3.^a, cap. I.

El papa Gregorio IX dice que los reos de homicidio, áun cuando sea oculto, no pueden ejercer los órdenes recibidos hasta que hayan obtenido la correspondiente dispensa (1). Esta suspensión del ejercicio de los órdenes por el citado delito, se extendía al crimen oculto de herejía (2), y á los regulares, quienes podían ser suspendidos por sus prelados de ascender á órdenes superiores, mediante conocimiento secreto de crímenes de aquellos (3).

Estos son los únicos precedentes de la suspensión *ex informata conscientia*; así que el verdadero origen de ella se encuentra en el Concilio de Trento, puesto que los obispos no pudieron en tiempos anteriores imponer la suspensión de recibir los órdenes ó de su ejercicio por delitos ocultos (4), ménos en los casos concretos que se dejan indicados.

La palabra *ex informata conscientia*, no se halla consignada en el decreto tridentino que la motivó, sinó que se introdujo por los autores para expresar en breves términos el modo de sentenciar concedido á los obispos en determinados casos, sin preceder proceso alguno ordinario ni jurídica información.

Facultad concedida por ella á los prelados.—La importancia de la materia me obliga á consignar el texto del Concilio Tridentino, que dice así: *Cum honestius, ac tutius sit subjecto, debitam præpositis obedientiam impendendo, in inferiori ministerio deservire, quam cum præpositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem; ei, cui ascensus ad sacros ordines à suo prelato ex quacunque causa etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extrajudicialiter, fuerit interdictus; aut qui à suis ordinibus, seu gradibus, vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspensus; nulla contra ipsius prælati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo; aut ad priores ordines, gradus, et dignitates, sive honores, restitutio suffragetur* (5).

(1) Cap. XVII, tit. XI, lib. I *Decret.*

(2) BOUIX: *De Judiciis*, part. 2.^a, sect. 4.^a, subsect. 3.^a, cap. I.

(3) Cap. V, tit. XI, lib. I *Decret.*

(4) Cap. IV y XVII, tit. XI, lib. I *Decret.*—Cap. XXIV, tit. I, lib. V *Decret.*

(5) Sesión 14, cap. I de *Reformat.*

El citado texto prohíbe el ascenso á órdenes sagrados, á quien su prelado lo prohíbe por cualquiera causa, aun por delito oculto, de cualquier modo, aunque sea extrajudicialmente; ó lo que es lo mismo, el prelado puede negar á un súbdito suyo el ascenso á los sagrados órdenes, aun mediante causa ó delito oculto, sin que aquél pueda utilizar licencia alguna para ser promovido contra la voluntad de su prelado.

Esta facultad de los obispos ó prelados se extiende á impedir la restitución ó restablecimiento en sus primeros órdenes, grados, dignidades ú honores al que estuviere suspenso de los mismos por ellos, *mediante cualquiera causa, aun por delito oculto, de cualquier modo, aunque sea extrajudicialmente.*

Las palabras que ponemos en bastardilla no se hallan expresamente consignadas en este segundo caso del decreto Tridentino; y por esto muchos canonistas, de la secta jansenista y galicana en gran parte, han sostenido que los obispos pueden en virtud del decreto Tridentino impedir *extrajudicialiter, etiam ob delictum occultum*, el ascenso á los órdenes; pero no suspender de ellos ni de las dignidades eclesiásticas en la expresada forma, ó sea *extrajudicialiter*, etc. (1).

Esta interpretación dada por los citados sectarios al decreto Tridentino es errónea y no puede sostenerse en manera alguna, porque el mismo proemio del expresado capítulo Tridentino demuestra que las palabras *ob occultum crimen*, etc., han de tenerse por repetidas en el caso segundo; puesto que se propone revestir á los obispos de mayores atribuciones para impedir que los clérigos, y principalmente los destinados para la cura de almas, sean criminales ó vivan deshonestamente (2).

Esto mismo se desprende del contexto de las palabras usadas por el Concilio en el citado capítulo; pero en todo caso,

(1) BOUÏX: *De Judiciis*, part. 2.^a, sect. 4.^a, subsect. 3.^a, cap. I.

(2) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, parte 4.^a, sect. 4.^a, art. 2.^o, núm. 689 y sig.

este punto se halla resuelto por la Sagrada Congregación del Concilio en un decreto de 24 de Noviembre de 1657, en el que contesta: *Prælatum nedum posse ob occultum crimen extrajudicialiter interdicerè suo subdito ascensum ad ordines, sed itidem ob occultum crimen posse etiam extrajudicialiter illum suspendere ab ordinibus jam susceptis* (1).

Esta doctrina está repetidamente sancionada por otras muchas declaraciones de la citada Congregación (2), no ménos que por la bula *Auctorem fidei*, en la que Pío VI censura las proposiciones siguientes del Sínodo de Pistoya respecto á las suspensiones *ex informata conscientia*, en esta forma:

Prop. 49. *Item quæ damnat ut nullas et invalidas suspensiones ex informata conscientia—falsa, perniciosa, in Tridentinum injuriosa.*

Prop. 50. *Item in eo quod insinuat soli episcopo fas non esse uti potestate, quam tamen ei deferit Tridentinum, suspensionis ex informata conscientia legitime infligendæ—jurisdictionis prælatorum Ecclesie læsiva.*

Requisitos necesarios para proceder *ex informata conscientia*.—El obispo ó prelado no debe utilizar este medio, sinó cuando sea necesario para el cumplimiento de su cargo pastoral, porque esta forma de proceder se otorgó para atender á las necesidades de las iglesias; exponiéndose por otro lado, fuera de estos casos, á condenar á los inocentes ó á los culpables en más de lo justo, no ménos que á hacer odiosa su autoridad; y por esto Benedicto XIV declara reprehensible la conducta del obispo, que consigne en el Sínodo su determinación de suspender *ex privata tantum scientia* á los clérigos gravemente delinquentes (3).

El obispo en todo caso necesita tener certeza de las causas para prohibir la recepción de órdenes ó suspender de su ejercicio (4).

(1) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XII, cap. VIII, núm. 3.º

(2) BOUX: *De Judiciis*, ibid., cap. II.

(3) *De Synodo diocesana*, lib. XII, cap. VIII, núm. 6.º

(4) PIERANTONELLI, *praxis, fori eccl'es.*, lit. VII, pár. 3.º

Casos en que tiene lugar.—La suspensión *ex informata conscientia* solo tiene ordinariamente lugar:

a) En los delitos ocultos, que no pueden probarse concluyentemente en el fuero externo (1).

b) También compete esta facultad en algún caso público, como remedio extraordinario, ó sea cuando no pueda proceder en forma judicial sin daño notable del bien público (2).

c) El obispo tendrá igualmente derecho para denegar los órdenes á un sujeto en quien no hay tacha alguna, si considera que no es necesario ni útil á su iglesia (3).

Reglas que han de tenerse presentes.—Como el decreto Tridentino se limita á conceder á los prelados el derecho de prohibir el ascenso de un clérigo á un orden superior y á suspender del oficio y órdenes recibidos; es necesario tener esto presente, puesto que dicha disposición ha de interpretarse estrictamente como derogatoria del derecho común hasta entonces vigente (4), siendo consecuencia de esto:

a) Que no puede *ex informata conscientia* excomulgar á alguno ó poner entredicho ú otra pena fuera de las que se dejan expresadas.

b) Que en virtud de la indicada facultad no le compete suspender del beneficio ó sus frutos, según la opinión más probable, porque la suspensión del oficio no se incluye en aquélla, puesto que puede nombrarse un sustituto, que levante las cargas con derecho á la percepción de parte de los frutos de aquél (5), y por otra parte la ley derogatoria del derecho común se ha de interpretar estrictamente (6).

c) Que la facultad concedida por el Concilio de Trento se extiende á la suspensión temporal ó perpetua, si bien la Sagra-

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 54.

(2) BOUX: *De Judiciis*, part. 2.^a, sect. 4.^a, subsect. 3.^a, cap. III y IV.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. XVI *De Reformat.*

(4) BOUX: *De Judiciis*, ibid, cap. IV, limit. 1.^a

(5) BOUX: *De Judiciis*, ibid., cap. III, prop. 5.^a, cap. IV, limit. 6.^a

(6) VECCHIOTTE: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 54.

da Congregación del Concilio se ha separado en esta parte de sus decisiones anteriores, disponiendo que dichas suspensiones perpetuas no se impongan *nisi præmissis monitionibus* (1), porque la suspensión *ex informata conscientia* es un remedio extraordinario que no debe emplearse sinó en caso de necesidad, la cual no existe nunca para la suspensión perpetua, puesto que el obispo puede conseguir el fin del Concilio, mediante la suspensión por tiempo indeterminado.

d) Que el uso de esta facultad no tiene aplicación sinó respecto á los clérigos, siendo además probable que puede emplearse respecto á los delitos públicos (2), si bien ilícitamente, cuando no existe motivo suficiente para separarse de la forma ordinaria; siendo por otra parte muy problemático, si convendría hoy que el Papa autorizase á los obispos para que empleasen el procedimiento *ex informata conscientia* en toda clase de delitos (3).

Forma de proceder en estos casos.—El prelado habrá de expresar su resolución en forma de decreto sin las ritualidades judiciales; así que puede omitir aún las formas del juicio sumario, y no tiene obligación de manifestar al delincuente la causa de la suspensión (4).

Es atribución suya observar, si lo tiene por conveniente, algunas formalidades del juicio ordinario ó sumario, siempre que manifieste en la sentencia que obra con arreglo al derecho que se le concede por el Concilio de Trento en la sesión 14, capítulo I *De Reformatione*; porque de no hacerlo así, habría lugar á la apelación (5).

Efectos de la suspensión *ex informata conscientia*.—La suspensión *ex informata conscientia*, ya sea temporal, perpetua ó por tiempo indeterminado, porque todas estas for-

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 54.

(2) BOUX: *De Judiciis*, *ibid.*, cap. III, prop. 1.^a—Cap. IV, limit. 3.^a

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 54.

(4) BOUX: *De Judiciis*, *ibid.*, cap. III, prop. 2.^a y 7.^a

(5) BOUX: *De Judiciis*, *ibid.*, prop. 8.^a

mas pueden emplearse válidamente (1), surte desde luego su efecto y ha de cumplimentarse en todas sus partes, bajo pena de irregularidad (2), mientras no se revoque como injusta (3), porque el suspenso no puede utilizar el recurso de la apelación, según el Concilio de Trento (4) y repetidas declaraciones de la Sagrada Congregación del Concilio; lo cual es muy natural, puesto que la apelación no tiene lugar sinó del juicio propiamente dicho (5).

Derechos del que se considere agraviado.—La parte interesada tiene expedito el camino para recurrir á la Santa Sede contra la determinación del obispo, cuyo recurso se admite en un solo efecto, ó lo que es lo mismo, tiene efecto *devolutivo*, pero no *suspensivo*.

La Santa Sede procede en la forma que tiene por conveniente en averiguación de la verdad; pero acostumbra de ordinario dar comisión al metropolitano ó al obispo más próximo para que requiera al *ordinario* del recurrente, á fin de que exprese la causa de haberle denegado los órdenes, con facultad de ordenar al recusado, si aquél no alega causa legítima, según aparece del decreto dado por la Sagrada Congregación del Concilio en 21 de Abril de 1668 (6).

Resulta, pues, que la facultad concedida á los obispos para proceder *ex informata conscientia*, no les autoriza á ello sino mediante razones suficientes para probar el delito ó causa ante la Sagrada Congregación del Concilio, si los interesados acuden á la Santa Sede en queja de la conducta seguida contra ellos por sus respectivos ordinarios (7).

(1) BOUXX: *De Judiciis*, part. 2.^a, sect. 4.^a, subsect. 3.^a, cap. III, prop. 4.^a

(2) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tit. XX, pár. 7.^o

(3) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon. pars special.*, lib. II, tit. II, trat. 2.^o, dissert. 2.^a, cap. II, art. 1.^o, pár. 2.^o

(4) Sesión 14, cap. I *De Reformat.*

(5) BOUXX: *De Judiciis*, ibid., cap. III, prop. 3.^a

(6) BENEDICTO XIV: *De Synodo dioces.*, lib. XII, cap. VIII, núm. 4.^o

(7) BOUXX: *De Judiciis*, ibid., cap. IV, limit. 4.^a

CAPÍTULO VI.

ENTREDICHO Y CESACIÓN Á DIVINIS.

ARTÍCULO I.

DEL ENTREDICHO.

Entredicho y en qué se distingue de la excomunión y suspensión.—Se entiende por entredicho: *Una censura eclesiástica, por la que se prohíben las funciones sagradas destinadas al uso de los fieles* (1).

El entredicho se distingue de la excomunión, en que ésta priva de los bienes comunes entre los fieles, y aquél afecta directa ó indirectamente á los lugares.

Se diferencia de la suspensión, en que ésta no tiene lugar en los legos y en que su objeto es distinto.

Origen del entredicho personal.—Escritores notables (2) creen que el entredicho personal es más antiguo que el local, encontrando el origen de aquél en las excomuniones menos graves, que estaban antiguamente en uso y por las cuales se privaba únicamente á los fieles de ciertos derechos de la comunión cristiana; así que ven cierta imagen del entredicho personal en el primer grado de los penitentes, que eran excluidos de la reunión de los fieles en la Iglesia; pero este entredicho tomó una nueva forma desde que se introdujo el entredicho local.

Origen del entredicho local.—Los canonistas no están de acuerdo sobre el origen del entredicho local.

Creen unos que ya se conocía en tiempo de S. Basilio el Grande (3).

(1) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.^a, cap. II, párrafo 186.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus. eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, dissert. 3.^a capítulo VIII.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus. eccles. univ.*, ibid.

Otros consideran más verosímil que el uso de esta censura se introdujo en el siglo VI para poner freno á ciertos escándalos, y hallan el primer caso de esta índole en lo que refiere San Gregorio de Tours, de haberse cerrado ciertas iglesias con motivo del sacrilego asesinato del obispo S. Pretestato.

Algunos opinan que no se conoció hasta los tiempos de S. Gregorio VII ó Alejandro III (1).

Sus especies.—El entredicho puede ser—

Personal, que afecta directamente á la persona, á quien se prohíbe la participación de las cosas divinas.

Local, que afecta inmediatamente al lugar, á fin de que no puedan celebrarse en él los divinos oficios.

Mixto, que afecta á los lugares y personas. Se llama también ambulatorio, porque afecta no sólo á la persona, sinó á cualquier lugar en que la persona ingrese (2).

El entredicho local y personal pueden ser—

Local general, porque contiene en sí muchos lugares, como un reino, una provincia, diócesis ó ciudad.

Local especial, porque se impone á un lugar determinado, como una iglesia ó todas las de una ciudad.

Personal general, el cual afecta á una corporación, como todos los habitantes de una provincia, ciudad, parroquia, monasterio, etc.

Personal especial, que se refiere á personas particulares ó individualmente consideradas, como Pedro, Diego, etc., ó las personas que hayan cometido el delito que se expresa.

El entredicho personal se divide además en—

Total y parcial, segun que comprende todos los efectos del entredicho personal ó alguno de ellos, como la entrada en la iglesia, celebración de la misa ó recepción de sacramentos (3).

(1) VECCHIOTTI: *Iust. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 5.^o

(2) Cap. XI, tít. I, lib. IV *Decret.*—Cap. I, tít. XXVIII, lib. II *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 5.^o, núm. 325.

Extensión del entredicho local.—El entredicho local general se rige por las reglas siguientes =

a) Si se impone á una ciudad, comprende los arrabales de ella con sus edificios.

b) Si se ha impuesto á una ciudad ó diócesis se halla comprendida la iglesia catedral.

c) En el entredicho de una diócesis se incluyen las ciudades y todos los lugares de ella.

d) El entredicho de una iglesia comprende sus capillas y cementerio contiguo.

e) Los seculares y regulares, los habitantes y forasteros exentos y no exentos, tienen obligación de observar el entredicho local general, á ménos que medie un privilegio especial.

f) El entredicho local lleva siempre anejo el entredicho personal de aquellos, que fueron causa del entredicho (1).

A quiénes comprende el entredicho personal.—El entredicho personal general comprende=

a) A todas las personas, aun ausentes de la corporación entredicha, sin otra excepción que los forasteros, estudiantes, peregrinos y mercaderes.

b) Si el entredicho se impone al pueblo, no se comprende el clero; y si aquel recae sobre el clero, no se incluye el pueblo, la iglesia ni el obispo á ménos que se exprese.

c) El entredicho general de las personas eclesiásticas comprende á los regulares, pero no el entredicho del clero, porque aquéllos no están comprendidos bajo el nombre de clérigos en las cosas odiosas (2).

Sus causas.—El entredicho es una censura eclesiástica, y como tal supone culpa grave y contumacia, porque la pena debe guardar proporción con la culpa; pero puede imponerse tam-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXIX, párr. 5.º, núm. 326 y sig.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 334 y sig.

bién por culpa venial, cuando aquel es parcial y por breve tiempo, porque la pena es leve en estos casos.

Quiénes pueden imponerlo, y á quiénes.—Esta censura eclesiástica sólo puede imponerse por las personas que tienen jurisdicción en el fuero externo, hallándose en este caso—

a) El Sumo Pontífice, sus legados, nuncios, delegados y subdelegados.

b) El obispo aun cuando no haya sido consagrado, y todos los que ejercen jurisdicción cuasi episcopal en sus respectivos súbditos.

c) El cabildo ó sea el vicario capitular, *sede vacante*.

d) Los prelados regulares en cuanto al entredicho personal respecto á sus súbditos.

El sujeto del entredicho personal es la persona ó corporación sujeta á la jurisdicción de quien lo impone, siempre que se halle dotada de razón, porque en otro caso es incapaz de precepto y de la pena aneja al precepto.

El sujeto del entredicho local es el lugar sujeto á la jurisdicción de quien lo impone (1).

Forma en la imposición del entredicho.—El derecho no la señala, y por lo mismo bastará aquélla en que se exprese la voluntad del que lo impone, siendo necesario para su licitud, que se consigne por escrito, en el cual ha de indicarse la causa que lo motiva, y se entregará un ejemplar á la parte interesada si lo pidiere, bajo la pena de quedar privado por un mes del ingreso en la iglesia.

Es además necesario en el entredicho impuesto como censura que preceda monición, no siendo ésta necesaria en el entredicho personal especial, como pena vindicativa.

Los entredichos generales, principalmente locales, no sue-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ., in lib. V Decret., tit. XXXIX, párrafo 5.*, número 343.

len imponerse como pena vindicativa, porque son graves y privan de muchos bienes espirituales (1).

Sus efectos.—Estos son los siguientes—*privación activa y pasiva de los sacramentos—privación activa de los oficios divinos—privación activa y pasiva de sepultura eclesiástica—privación de ingreso en la Iglesia.*

Privación activa y pasiva de los sacramentos (2). Esta prohibición no es absoluta, y por lo tanto, puede administrarse=

a) El bautismo á los párvulos (3) y á los adultos (4) con las solemnidades prescritas.

b) La confirmación (5) y sacramento de la penitencia no sólo á los moribundos y peregrinos (6), sinó á todos los demás, siempre que no se hallen excomulgados con excomunión reservada é impuesta por haber dado causa al entredicho (7).

c) La Eucaristía ó viático á los que se hallan en peligro probable de muerte (8).

d) La extremaunción puede también recibirse por el sujeto, que tiene imposibilidad de confesarse y recibir el viático.

e) El matrimonio, sin que puedan darse las bendiciones nupciales (9).

Privación activa de los oficios divinos (10) ó la celebración del sacrificio de la Misa, bendición de los santos óleos, fuente

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, tít. II, tract. 2.º, disert. 2.º, cap. II, art. 1.º, pár. 3.º

(2) Cap. XLIII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*—Cap. XVI, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(3) Cap. XI, tít. I, lib. IV *Decret.*

(4) Cap. XIX, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(5) Cap. XIX, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(6) Cap. XI, tít. XXXVIII, lib. V *Decret.*

(7) Cap. XXIV, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(8) Cap. XI, tít. XXXVIII, lib. V *Decret.*—Cap. LVII, tít. XXXIX, libro V *Decret.*—Cap. XXIV, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(9) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 5.º, núm. 358 y sig.

(10) C. p. LVII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

bautismal, ramos ó palmas, cirio en el día de la Purificación, nupcias, templos, agua bendita, vasos y ornamentos sagrados, consagración de altares, horas canónicas y oficio de la Virgen en el lugar señalado especialmente para esto y con la solemnidad ordinaria, á ménos que medie privilegio, y éste existe al efecto, quedando en suspenso el entredicho en—

a) Las festividades de la Natividad del Señor, Pascua, Pentecostés y Asunción de la Virgen (1), festividad del Corpus y su octava (2), fiesta de la Inmaculada Concepción en toda España por concesión de León X (3).

b) Celebración de la Misa, una vez en la semana (4), cuya facultad se extendió después á todos los días, aun para los oficios divinos, siempre que se celebren sin canto solemne y á puertas cerradas, sin toque de campanas, hallándose excluidos ó fuera de la iglesia los excomulgados y entredichos denunciados (5).

Privación activa y pasiva de sepultura eclesiástica (6); acerca de lo cual debe advertirse—

a) Que si el entredicho es local, general ó especial no pueden sepultarse allí los cadáveres de los fieles, mientras que aquél subsista (7) y esta prohibición se extiende aun á los párvulos, pero no á los clérigos de aquella ú otra iglesia.

b) Cuando el entredicho es personal, la persona sobre quien recae no puede sepultarse en sagrado (8); pero es necesario á este efecto que sea declarado como tal (9).

(1) Cap. XXIV, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(2) Constitución *Ineffabile* de Martino V y *Excellentissimum* de Eugenio IV.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 365.

(4) Cap. LVII, tít. XXXIX, lib. V *Decret.*

(5) Cap. XXIV, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(6) Cap. XI, tít. XXXVIII, lib. V *Decret.*—Cap. III, pár. 3.º, tít. XXXIII, lib. V *Decret.*—Cap. VIII, tít. VII, libro V *sext. Decret.*

(7) Cap. XI, tít. XXXVIII, lib. V *Decret.*

(8) Cap. VIII, tít. VII, lib. V *sext. Decret.*—Cap. I, tít. VII, lib. III *Clementin.*

(9) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXIX, párrafo 5.º, núm. 377.

Este tercer efecto del entredicho no comprende á los clérigos (1), siempre que no estén ligados con entredicho especial personal ni hayan dado lugar culpablemente al entredicho.

Se entiende por clérigos para este efecto todas las personas eclesiásticas, ya sean seculares ó regulares, varones ó hembras, etc.

Privación de entrada en la iglesia (2), para cuyo efecto se requiere sentencia especial, porque no va aneja absolutamente al entredicho, sinó que más bien es un nuevo entredicho.

Condiciones necesarias para que obligue el entredicho.—Es de necesidad que se haya publicado (3), porque en otro caso no hay obligación, según la extravagante *Ad vitanda*, á observar el entredicho local, ni á dejar de comunicar con el personalmente entredicho, por más que éste deba abstenerse á *divinis* desde que se halla ligado con la censura, puesto que dicha extravagante no tuvo por objeto dispensarles gracia alguna.

Se requiere además que las personas en cuyo favor se puso entredicho local lo observen, porque en otro caso se entiende que la Iglesia lo deja sin efecto (4).

Penas contra los que lo quebrantan.—Los que faltan á las prescripciones del entredicho, incurren en culpa, y además, los legos incurren *ipso jure* en excomunión:

a) Si obligan al clérigo á celebrar pública y solemnemente en el lugar entredicho.

b) Si tratan de convocar al pueblo en el lugar entredicho para asistir á los oficios divinos por medio de toque de campana ó público pregón.

(1) Cap. XI, tit. XXXVIII, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XLVIII, tit. XXXIX, lib. V. *Decret.*—Cap. XX, tit. XI, lib. V *ext. Decret.*

(3) PHILLIPIS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.^a, cap. II, pár. 186.

(4) Cap. XX, tit. XXXIII, lib. V *Decret.*

c) Si tratan de impedir que los excomulgados ó entredichos *nominatim*, salgan del lugar sagrado, cuando son amonestados á ello por el clero.

d) Si ellos, una vez amonestados, rehusan salir del lugar sagrado (1).

e) Si mandan ú obligan á dar sepultura eclesiástica (2) en lugar entredicho (3).

Respecto á los clérigos se halla dispuesto:

a) Que incurren *ipso jure* en entredicho *ab ingressu ecclesie*, si celebran ó hacen celebrar los divinos oficios en lugar entredicho (4).

b) El clérigo que celebra á sabiendas en lugar entredicho ó quebranta el entredicho personal, queda irregular (5).

ARTÍCULO II.

DE LA CESACIÓN A DIVINIS.

Cesación a divinis y en qué se distingue del entredicho.—La cesación *a divinis*, que se conoce también con el nombre de suspensión eclesiástica de las divinas alabanzas, *sive organorum*, es: *La prohibición eclesiástica impuesta á los clérigos de celebrar los divinos oficios en determinado lugar.*

Se distingue del entredicho=

1. En que aquella no es censura, puesto que no se impone en pena de un delito, sinó en señal de dolor y tristeza de la Iglesia por la gravísima injuria ú ofensa hecha á ella y al honor divino,

(1) Cap. II, tit. X, lib. V *Clementin.*

(2) Cap. I, tit. VII, lib. III *Clementin.*

(3) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, tit. II, trat. 2.º, disert. 2.º, cap. II, art. 1.º, pár. 3.º

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 55.

(5) Cap. I, XVIII y XX, tit. XI, lib. V *sext. Decret.*

como medio de reparación y á fin de que el delincuente desista de la injuria y dé satisfacción (1).

II. En que la cesación *a divinis* no es nunca *a jure*, sinó *ab homine*, y afecta inmediatamente al lugar, mediatamente á las personas, y nunca determinadamente; á diferencia del entredicho, que afecta siempre á una ó muchas personas determinadas.

III. En que la persona que quebranta la cesación *a divinis* no incurre en irregularidad por más que peque gravemente (2).

Sus especies, y quién puede imponerla.—La cesación *a divinis* puede ser=

General, porque afecta á una provincia, ciudad, villa, etcétera.

Especial, porque se impone á un lugar determinado, como una iglesia, cementerio, oratorio, etc.

Dicha cesación *a divinis* sólo puede imponerse por quién tenga jurisdicción en el fuero externo, como el Sumo Pontífice—obispos y otros que tienen jurisdicción cuasi episcopal—capítulo *Sede vacante* (3).

Causa para ello, y forma en su imposición.—Se requiere para su imposición que medie un delito gravísimo, porque debe existir proporción entre él y los daños que resultan de la cesación *a divinis*, que siempre son gravísimos.

Es además necesario que el delito sea notorio y manifiesto con notoriedad de hecho.

La cesación *a divinis* no se impone, sin que preceda monición al delincuente para que preste y dé satisfacción, y si no

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XXXIX, pár. 6.º, núm. 402.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.ª, disertación 3.ª, cap. VIII.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XXXIX, párrafo 6.º, núm. 414.

quiere darla, se impone expresándose en instrumento público la causa que la motiva.

De dicho documento se confiere testimonio al delincuente.

La cesación *a divinis* que no se funda en la causa indicada ó carezca de debida forma, es nula, y como tal no puede obligar á su observancia.

Efectos de la cesación *a divinis*.—Estos son=

Privación de los divinos oficios (1), en cuya virtud no se celebran los oficios divinos, sin que baste para obrar de otro modo el privilegio de celebrar misas privadas *januis clausis* en tiempo de entredicho (2).

Esta disposición no impide que se celebren los oficios divinos=

a) En las festividades de la Natividad del Señor, Pascua y Pentecostés (3).

b) Puede celebrarse el santo sacrificio de la Misa una vez á la semana en cualquier iglesia para la renovación de la Eucaristía, con asistencia de un solo ministro ó á lo más dos (4).

c) Los clérigos pueden rezar horas de dos en dos dentro de la iglesia, porque este rezo no es público ó solemne, sinó privado y este es lícito fuera de la iglesia en tiempo de entredicho y cesación *a divinis*.

Privación de sacramentos (5), á excepción del bautismo á los párvulos, penitencia á los que se hallan en peligro de muerte y viático; y cuya facultad se extiende por benignidad de la Iglesia, según respetabilísimos doctores=

a) A la administración del bautismo á los adultos.

b) Confirmación y penitencia aun á los que disfrutan buena salud.

(1) Cap. XI, tít. I, lib. IV *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 407 y sig.

(3) Cap. XXIV, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 416.

(5) Cap. XI, tít. I, lib. IV *Decret.*

c) Matrimonio sin la solemnidad nupcial (1).

Privación de sepultura eclesiástica, si la cesación supone entredicho, porque ella por sí no impide el sepelio de los clérigos y legos en la iglesia ó cementerio, siempre que se haga sin la solemnidad de los divinos oficios.

Obligación de observarla y su abrogación.—La cesación *a divinis*, como ley eclesiástica dada por causa gravísima, obliga bajo culpa grave y excomunión *ipso jure* á los regulares, aun cuando sean exentos, siempre que la cesación sea general.

Los legos que no la observen incurrén en culpa grave y en la pena que el juez les aplique, puesto que el derecho no tiene señalada ninguna (2).

La cesación *a divinis* puede abrogarse por la autoridad eclesiástica que la impuso, el delegado ó superior.

CAPITULO VII.

DE LAS PENAS VINDICATIVAS.

Penas que la Iglesia tiene establecidas.—La Iglesia usó de las penitencias, censuras y penas vindicativas desde los tiempos más remotos contra los fieles delincuentes. Estas últimas han caído en desuso respecto á los legos, habiendo sucedido á ellas las multas pecuniarias, que habrán de aplicarse á lugares piadosos, y nunca en provecho del juez eclesiástico (3).

También se priva á los legos de sepultura eclesiástica en los casos señalados en el derecho, sin que esta pena suponga excomunión precedente, como en otros tiempos (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 412.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 421 y sig.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. III *De Reformat.*

(4) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.^a, cap. II, pár. 188.

Penas contra los clérigos.—Los clérigos incurren en irregularidad en los casos que se dejan señalados (1), teniendo además señaladas otras muchas penas, de las que se pasa á tratar.

Penas temporales.—Estas son de tres clases, según que privan de *la fama—libertad—bienes de fortuna*.

Infamia, y sus especies.—Se entiende por infamia: *La privación de buena fama*.

La infamia se divide en—

Infamia de hecho; y es: *La que procede de la misma torpeza de la obra que lleva aneja esta nota ante las personas probas y honestas*.

Infamia de derecho es: *La que se decreta é impone por autoridad de la ley, mediante un hecho torpe*.

Sus causas y efectos.—La infamia de derecho tiene únicamente la consideración de pena, y puede contraerse:

Ipso jure, ó sea mediante la perpetración de un delito que la ley ha declarado digno de ignominia; pero es necesario para incurrir en esta infamia que el expresado delito sea público (2), sin que haya necesidad de sentencia declaratoria del crimen.

Sentencia judicial, como los condenados por el juez mediante delito de hurto, rapiña, etc.

Calidad de la pena, como la de azotes, privación de honores, exclusión de la milicia, etc.

Los efectos de la infamia de derecho ó de hecho son—

La irregularidad—y la privación de beneficios eclesiásticos.

Privación de libertad, acerca de la cual debe advertirse que la Iglesia empleó desde los tiempos antiguos la encarcelación (3) en lugar decente, habida consideración á la calidad de

(1) Lib. III, tít. I, cap. VI, art. 4.º de esta obra.

(2) SCHMALZGRUEBER; *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tít. XXXVII, párrafo 4.º, núm. 166.

(3) Cap. III, tít. IX, lib. V *sent. Decret.*—Cap. XV, tít. XI, lib. V *sent. Decret.*

la persona y gravedad del delito (1), reclusión en un monasterio (2), destierro (3).

Privación de bienes de fortuna.—Se hallan en este caso la=

Multa pecuniaria, y puede imponerse por el juez eclesiástico en los casos que señala el derecho, estatuto sinodal ó práctica de la curia, y en todos aquellos otros que la ley deja al arbitrio judicial el señalamiento de la pena (4).

Traslación del beneficiado.—El obispo puede por vía de pena trasladar al clérigo á otro beneficio (5), y así lo declaró la sagrada Congregación del Concilio en 19 de Diciembre de 1857 (6).

Privación de beneficios, y ésta tiene lugar en los casos siguientes:

Ipsa jure, ó sea cuando va aneja á la perpetración de un delito, como el homicidio del rector ó beneficiado de la iglesia, por el que tiene en ella algún beneficio (7)—la persecución ó percusión directa ó indirecta de algún cardenal de la santa Iglesia Romana (8) ú obispo (9) etc.

Sentencia judicial, no bastando al efecto la sentencia declaratoria del crimen, sino que ha de imponerse ademas en ella la privación de beneficio.

Sus efectos.—La privación *ipso jure* de los beneficios produce los efectos siguientes:

(1) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. VI, *De Reformat.*

(2) *DEVOTI: Inst. Canon.*, lib. IV, tit. I, pár. 10, nota 4.^a—*Ibid.*, tit. XVII, pár. 3.^o, nota 1.^a

(3) C. XIII, pár. 1.^o, quæst. 5.^a, causa 26.—Cap. I, tit. II, lib. V *Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, *ibid.* núm. 178.

(5) Cap. V, tit. XIX, lib. III *Decret.*

(6) HUGUENIN: *Exposit., meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, título II, trat. 2.^o, disert. 2.^a, cap. II, art. 2.^o, pár. 2.^o

(7) Cap. XII, tit. XXXVII, lib. V *Decret.*

(8) Cap. V, tit. IX, lib. V *Decret.*

(9) Cap. I, tit. VIII, lib. V *Clementin.*

a) El beneficio ó título benefical se pierde en el acto de cometer el delito, y como queda vacante, puede desde luego conferirse á otro sin que medie sentencia judicial.

b) No hace suyos los frutos provenientes del beneficio desde el día que cometió el delito.

c) No puede permutar el beneficio ni resignarlo en favor de otro.

d) Si muere, puede obtenerse por otro el beneficio, no como vacante por muerte, sino por delito (1).

La privación del beneficio por *sentencia judicial* no produce los efectos que se dejan indicados, sino desde el tiempo en que se dió sentencia de privación.

En qué se distingue de la suspensión, deposición é inhabilidad para obtener beneficios.—La privación de beneficios se distingue:—

De la suspensión, en que ésta como censura no es perpetua, ni priva del título benefical.

De la deposición, en que ésta produce inhabilidad para obtener beneficios.

De la inhabilidad, en que como ésta incapacita á la persona para obtener dignidades, oficios ó beneficios eclesiásticos (2) no priva por sí de los beneficios ya obtenidos, y por otra parte, la simple privación no inhabilita para alcanzar otros beneficios, debiendo además advertir que la inhabilidad es muchas veces efecto de otra pena, como irregularidad ó deposición.

Deposición, y sus especies.—La palabra deposición en su sentido lato comprende también la degradación, pero en sentido extricto se distingue de ésta, y al efecto se la da el nombre de *deposición simple*, que puede definirse: *Una pena eclesiástica, que priva perpetuamente al clérigo del ejercicio de la potestad de orden y jurisdicción, no ménos que de todo derecho para obtener válidamente un beneficio.*

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXVII, párrafo 3.º, núm. 129.

(2) Cap. II, pár. 2.º, y cap. XV, tít. II, lib. V *sext. Decret.*

La deposición puede ser *total* y *parcial*, según que priva del ejercicio del orden, y del beneficio y oficio, ó solo de alguno de ellos (1).

Si se distingue de la privación de beneficios.—

La deposición tiene gran semejanza con la privación de oficio y beneficio, porque una y otra son perpetuas (2); pero se distinguen en que la privación no siempre se impone como pena de un delito, y aún en el caso de ser penal no produce por sí inhabilidad para obtener nuevos beneficios.

En qué conviene con la suspensión.—La suspensión conviene con la deposición, en que=

- a) Una y otra se impone solamente á los clérigos.
- b) Ambas pueden ser totales ó parciales.
- c) Producen irregularidad ejerciendo el cargo de que han sido depuestos ó suspensos (3).

Sus diferencias.—La suspensión se distingue de la deposición en lo siguiente:

- a) La suspensión como censura se da por tiempo indeterminado, y la deposición es perpetua (4).
- b) La suspensión no priva del beneficio como la deposición (5).
- c) La suspensión puede imponerse extrajudicialmente *ex informata conscientia*, á diferencia de la deposición, que sigue siempre al crimen cierto y probado, debiendo por lo mismo preceder á su imposición la citación ó monición con todas las condiciones del orden judicial (6).

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 4.^a, cap. I.

(2) *Praelect. fur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 7.^a, art. 4.^o, núm. 837.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disertación 4.^a, cap. I.

(4) Cap. III, tit. XXVII, lib. V *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXVII, párrafo 3.^o, núm. 134.

(6) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

d) Puede incurrirse *ipso facto* en la suspensión, lo cual no sucede en la deposición, porque ésta exige siempre sentencia judicial.

Causas por las que se impone la deposición.—La deposición es una pena gravísima, y por lo mismo no puede imponerse sinó por delitos muy graves; así que solo se emplea esta pena, según la legislación vigente, contra los reos de crímenes enormes por su naturaleza y por las circunstancias que los acompañan (1).

Todas las causas graves, que pueden ser motivo de deposición se resumen en lo siguiente:

I. Si el clérigo ejecuta actos que se oponen á la condición eclesiástica hallándose en este caso:

- a) El que entiende judicialmente en causas de sangre (2).
- b) La profesión militar (3).
- c) Si ha producido terror hiriendo ó matando (4).
- d) Los que viven en concubinato ó acuden á los jueces civiles en causas eclesiásticas.
- e) Los simoníacos y los que obtienen beneficios sin consentimiento del obispo.

f) Los que son negligentes en los divinos oficios, etc. (5).

II. Cuando los clérigos tienen una inveterada costumbre de delinquir y no se arrepienten, apesar de las reiteradas amonestaciones, como son:

- a) Los que faltan á la templanza en la bebida ó se entregan al juego de azar (6).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXVII, párrafo 3.º, núm. 136.

(2) C. XXIX y XXX, quæst. 8.ª, causa 23.—Cap. V, tit. L, lib. III *Decret.*

(3) C. VI, quæst. 8.ª, causa 23.—Cap. V, tit. XXXVII, lib. V *Decret.*

(4) C. VII, dist. 45.—Cap. I, tit. XXV, lib. V *Decret.*

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, part. 2.ª, disert. 4.ª, cap. I.

(6) C. I, dist. 35.

b) Los que frecuentan las tabernas (1), ó son mal hablados, adúladores ó traidores (2), truhanes ó bufones.

c) Los que frecuentan los monasterios de religiosas sin justa causa, y no desisten después de amonestados (3).

d) Los usureros (4), y los que se emplean en otros oficios de torpe lucro (5).

III. Si se trata de delitos enormes que conviene reprimir con severísimas penas para el sostenimiento de la disciplina eclesiástica, como la apostasía, herejía, blasfemia, perjurio, etc. (6).

Si el depuesto conserva los privilegios del canon y del fuero.—Es indudable que la deposición no priva de ellos al clérigo, á ménos que se exprese otra cosa en la sentencia, debiendo además advertir que el obispo puede dispensar al depuesto, restituyéndolo á su anterior estado, siempre que haya hecho penitencia y se haya enmendado (7).

Degradación, y sus especies.—La degradación, que se conoce también con el nombre de *deposición solemne*, puede definirse: *Una pena por la que se priva solemnemente al clérigo del orden, oficio, beneficio y estado clerical, con motivo del crimen atroz que ha cometido y su incorregibilidad.*

La degradación se divide en—

Verbal ó sentencial, que es: *La promulgación solemne de la sentencia auténtica de degradación.*

Real, que se llama también actual y solemne, y es: *La ejecución de la sentencia de degradación.*

Distinción entre la degradación verbal y real.—Se distinguen estas dos especies de degradación en lo siguiente:

(1) C. III, dist. 44.

(2) C. III y VI, dist. 46.

(3) Cap. VIII, tít. I, lib. III *Decret.*

(4) Cap. I, tít. XIX, lib. V *Decret.*

(5) Cap. IV, tít. I, lib. III *Decret.*

(6) BERARDI: *Comm. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 2.^a, disert. 4.^a, cap. I.

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXVII, pár. 3.^o, núm. 137.

a) La primera es la mera declaración de que una persona está degradada, y la segunda lleva á efecto la penalidad impuesta.

b) La primera declara á una persona indigna de los privilegios del canon y del fuero, y la segunda la priva de hecho de tales privilegios.

c) La degradación verbal puede hacerse por el obispo confirmado y no consagrado, por sí ó por otro, y la solemne ó real por sólo el obispo consagrado (1).

En qué se distingue de la deposición simple.—La degradación se diferencia de la deposición en que=

a) Esta puede hacerse por el vicario general, y la degradación real por sólo el obispo.

b) Para la deposición no se requiere el número de obispos, dignidades ó sacerdotes, que para la degradación (2).

c) La deposición puede ser parcial, ó sea de sólo el beneficio ú oficio ó ejercicio del órden, pero la degradación priva á la vez de todos ellos.

d) La deposición no priva de los privilegios del canon y del fuero, y la degradación real priva de ellos.

e) El depuesto no es entregado al juez secular; pero sí el que ha sido degradado solemnemente.

f) El depuesto puede volver á su primer estado por gracia del obispo, y el degradado sólo por el Sumo Pontífice (3).

Causas justas para la degradación.—La degradación verbal puede imponerse, mediante alguno de los delitos siguientes:

I. Herejía manifiesta y apostasía de la fé con reincidencia ó contumacia (4).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXXVII, párrafo 3.º núm. 138 y sig.

(2) *Concil. Trid.*, sesión 13, cap. IV *De Reformat.*

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. IV, pár. 57.

(4) Cap. IX, tít. VII, lib. V *Decret.*—Cap. IV, tít. II, lib. V *sext. Decret.*

- II. Falsificación de letras apostólicas (1).
- III. Grave contumelia, calumnia, crimen de asechanzas y de conspiración contra el obispo (2).
- IV. Asesinato (3) y crimen frecuente de sodomía.
- V. Celebración de misas y oír en confesión sin hallarse ordenado de presbítero.
- VI. Fabricación y adulteración de moneda.
- VII. Adulterio ó concubinato con reincidencia después de amonestado.
- VIII. Simonía notoria, estupro, incesto, hurto, perjurio, homicidio (4) y otros delitos que llevan aneja esta pena por derecho común eclesiástico (5).

Por quién ha de hacerse la degradación solemne y ante quién.—La degradación actual ha de hacerse por el obispo propio del delincuente ú otro obispo también consagrado delegado por aquél.

Este acto habrá de verificarse en la iglesia ú otro lugar sagrado con asistencia de otros obispos, abades, etc., observando las solemnidades de derecho prescriptas en el Pontifical Romano.

Forma de la degradación verbal según la legislación antigua.—La antigua disciplina de la Iglesia sobre esta materia se resume en lo siguiente:

- a) La degradación verbal de un obispo se hacía ante otros doce obispos.
- b) La degradación de un presbítero ante seis obispos.
- c) La degradación de un diácono ó subdiácono ante tres obispos.

(1) Cap. VII, tit. XX, lib. V *Decret.*—Cap. XXVII, tit. XL, lib. V *Decret.*

(2) C. XVIII, quest. 1.^a, causa 11.

(3) Cap. I, tit. IV, lib. V *sext. Decret.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXVII, párrafo 3.^o, núm. 143.

(5) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. IX, cap. VI, pár. 7.^o y siguientes.

d) La degradación de un clérigo inferior ante solo el obispo propio, á presencia del cabildo catedral ó dos ó tres capitulares en representación de aquél (1).

Derecho vigente sobre esta materia.—La degradación verbal y real de cualquier clérigo aun ordenado *in sacris* puede hacerse, segun el derecho vigente, sin la presencia de obispos, bastando al efecto la asistencia del mismo obispo para la degradación real, pudiendo delegar en su vicario general para la verbal.

Es además necesario en ambas la asistencia del respectivo número de abades mitrados, ó en su defecto personas constituidas en dignidad eclesiástica, recomendables por su edad y ciencia en el derecho (2), las cuales tienen voto decisivo, siendo necesario para la degradación verbal unanimidad de votos en todos los casos, según la opinión más probable (3).

TÍTULO II.

DE LOS DELITOS ECLESIASTICOS.

CAPÍTULO PRIMERO.

DELITOS EN GENERAL.

Definición del pecado.—El pecado proviene de cualquier amor desordenado, y es según S. Agustín, *Factum, dictum vel concupitum contra legem æternam Dei*, ó sea un hecho, dicho ó deseo contra la ley eterna.

San Agustín bajo las palabras *legem æternam Dei* expresa, según manifestación del mismo, la razón divina ó la

(1) C. IV, V, VI y VII, quæst. 7.^a, causa 15.—Cap. II, título IX, lib. V *sex. Decret.*

(2) *Concil. Trid.*, sesión 13, cap. IV *De Reformat.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccl. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XXXVII, párrafo 3.^o, núm. 145 y sig.

voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe su perturbación; así que se comprenden en las palabras ley eterna y ley divina, todas las verdades dadas á conocer por la luz de la razón y la revelación, así como todas las leyes dadas por los legisladores en bien de la sociedad eclesiástica ó civil, puesto que toda potestad emana de Dios (1), y el que resiste á la potestad, resiste al mandato y ordenación de Dios (2).

San Ambrosio dá una definición parecida del pecado, cuando dice: *Quid est peccatum, nisi prævaricatio legis divinæ, et cælestium innobedientia præceptorum?*

Delito, y su distinción del crimen.—San Agustín, en su obra *De civitate Dei*, expresó perfectamente el origen, naturaleza y causas de todos los delitos con estas palabras: *Fecerunt civitates duas amores duo, terrenam scilicet amor sui usque ad contemptum Dei, cælestem vero amor Dei usque ad contemptum sui* (3).

Se entiende por delito: *Una acción ú omisión imputable á su autor que turba el orden social* (4).

También puede definirse: *Toda acción ú omisión externa y voluntaria penada por la ley.*

Las palabras delito y crimen se distinguen en que la primera es genérica, y la segunda se concreta á los delitos públicos y más graves (5); pero se usan comunmente para expresar una misma cosa, y por esta razón se emplean indis-

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, dissert. 1.^a, capítulo I.

(2) C. XLV, quæst. 4.^a, causa 23.—C. XXVII y XXIX, quæst. 5.^a, causa 23.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, disertación 1.^a, cap. I.

(4) TARQUINI: *Inst. Jur. pub. Eccles.*, lib. I, cap. I, sect. 1.^a, art. 1.^o, párr. 3.^o

(5) HUGUENIN: *Exposit. méth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, tit. II, trat. 2.^o, disert. 1.^a, cap. I.

tintamente en esta obra siguiendo á la generalidad de los escritores (1).

Diferencia entre el pecado y delito.—Todo delito es pecado, por que media una trasgresión del derecho divino ó humano, y Dios prescribe á los hombres la obediencia no sólo á las leyes dadas por él á su Iglesia, sinó á las emanadas de la potestad civil, siempre que no se opongan á los mandatos divinos ó eclesiásticos; pero nó todo pecado es delito, porque el pecado sólo llegará á revestir la naturaleza de crimen, cuando es externo y se halla penado por la ley humana.

San Isidoro de Sevilla dice á este propósito: *Multi vitam sine crimine habere possunt, sine peccato non possunt... Joanne apostolo attestante, qui ait: si dixerimus, quia peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas in nobis non est* (2).

Esta misma distinción se expresa con suma claridad por San Agustín al tratar de los que hayan de ser ordenados (3).

El pecado y el delito se distinguen entre sí, en que el primero puede ser—

a) Interno ó externo, y el delito ha de ser precisamente externo.

b) El delito es siempre pecado, pero el pecado no es siempre delito.

c) El simple pecado cae solo bajo la acción de la Iglesia en el fuero interno ó penitencial, si es meramente interno, y en ambos fueros, si es externo.

Especies de delitos.—Los delitos se dividen—

Por razón del objeto en—delitos directamente contra Dios —y delitos directamente contra las cosas consagradas á Dios (4).

Por razón de las personas en—delitos propios de los clérigos,—y delitos comunes á los clérigos y legos.

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tit. II, pár. 1.º

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

(3) C. I, distinct. 81.

(4) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.ª, disertación 1.ª, cap. II.

Por razón del fuero en—delitos meramente eclesiásticos, porque se oponen únicamente á las leyes eclesiásticas, y quedan sujetos al castigo de la Iglesia, ya sean ejecutados por los clérigos, ya por los legos—meramente civiles, porque quebrantan solo las leyes civiles y su castigo pertenece á la potestad civil, si bien en el concepto de pecado están sujetos á la potestad de la Iglesia en el fuero interno (1)—y mixtos, porque se oponen á las leyes de ambas potestades, y en su virtud cada una impone las penas señaladas en sus respectivos códigos.

Por razón de la notoriedad en—delitos externos ocultos, porque se cometen á escondidas y no pueden probarse (2), debiendo advertir que el delito puede ser absolutamente oculto, porque no puede probarse de manera alguna en el fuero externo, ó casi oculto, porque sólo consta á pocas personas ó hay gran dificultad para probarlo—y público, porque se ha ejecutado de un modo notorio.

La notoriedad puede ser—

De derecho, en cuanto que se conoce por espontánea confesión del delincuente en juicio (3), por plenas pruebas judiciales (4), ó por sentencia definitiva judicial (5).

De hecho, cuando se ha cometido á la vista de la mayor parte del vecindario de un pueblo ó parroquia, ó de una corporación, de manera que no puede negarse ni tergiversarse (6).

Condiciones necesarias en el delito.—Es requisito necesario para que exista delito:

- 1.º La trasgresión de un precepto penado por la ley.
- 2.º Que esta trasgresión sea acto externo, ó su omisión.

(1) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. II.

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon.*, pars special., lib. II, título II, tract. 2.º, disert. 1.ª, cap. I.

(3) Cap. VII y X, tít. II, lib. III *Decret.*—Cap. XXIV, tít. XL, lib. V *Decret.*

(4) Cap. XXIV, tít. XL, lib. V *Decret.*

(5) Cap. VII y X, tít. II, lib. III *Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. I, párr. 1.º

3.^o Que se ejecute con advertencia de parte del entendimiento y consentimiento libre por parte de la voluntad.

Las personas, pues, que trasgasan la ley penal sin mediar estas condiciones, no pueden ser consideradas como realmente delinquentes ó reos de un delito; así que no incurren en pena alguna por la trasgresión de la ley.

Si los párvulos incurren en responsabilidad criminal.—Los párvulos y los que á ellos se equiparan, como los dementes, furiosos ó dormidos (1) y los que son obligados por fuerza á ejecutar ú omitir alguna cosa, no incurren en responsabilidad, porque falta en ellos el consentimiento libre de parte de la voluntad, ó la advertencia por parte del entendimiento, que es el origen y raíz principal de todo delito.

En igual caso se hallan los que casualmente han delinquido, sin que haya precedido al acto ú omisión culpa alguna; lo mismo que aquellos otros en quienes existe ignorancia del derecho positivo, siempre que no sea crasa ó supina, ó ignorancia de hecho, á pesar de haber practicado las investigaciones que están á su alcance (2).

Responsabilidad en los impúberes y púberes.—

Las personas en quienes existen todas las circunstancias esenciales para incurrir en responsabilidad penal por su acción ú omisión; pero que obraron sin la conveniente madurez de juicio, han de ser castigados ménos severamente que los otros criminales y reos de igual delito sin circunstancias atenuantes, hallándose en este caso—

a) Los que han salido de la infancia y no han llegado á la pubertad.

b) Los que han llegado á la pubertad sin haber salido de la menor edad (3).

(1) Cap. únic., tít. IV, lib. V *Clementin.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus. Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, disertación 1.^a, cap. III.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXIII.

c) Los que por enfermedad carecen de la debida ó completa discreción (1), debiendo hacer la conveniente distinción entre los ebrios, pródigos y los que delinquieron, efecto de un justo dolor ó una pasión vehemente.

Penalidad en los mayores de edad.—Todos aquellos que tienen completa madurez de juicio y se han hecho reos de un delito con pleno conocimiento y deliberada voluntad, están sujetos á las penas señaladas en la ley, sin que haya motivo alguno para atenuarlas; y esta penalidad comprende no sólo á los que ejecutaron el delito (2), sinó también á los que lo mandaron (3), aconsejaron (4) ó aprobaron siempre que el delito consista en sólo el consentimiento (5) y los que pudiendo impedirlo, no lo evitaron (6).

CAPITULO II.

DELITOS CONTRA DIOS.

Significado de la palabra apostasía, y su definición.—La palabra apostasía es griega, y significa deserción ó defección, y puede definirse: *La defección de la fé cristiana recibida en el bautismo.*

La persona que se hubiere propuesto abrazar la religión cristiana, si desiste de su propósito ántes de recibir el bautismo, no es apóstata, ni queda sujeto á las penas sancionadas contra la apostasía (7).

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, disert. 1.^a, cap. III.

(2) C. XXXIV, quæst. 8.^a, causa 23.—Cap. VIII y XIII, pár. 5.^o, tít. VII, lib. V *Decret.*—Cap. VI, tít. XII, lib. V *Decret.*

(3) Cap. VII, tít. XX, lib. V *Decret.*—Cap. II, tít. XIV, lib. V *Decret.*

(4) Cap. VI, pár. 3.^o, tít. XII, lib. V *Decret.*

(5) Cap. XI, tít. VII, lib. V *Decret.*

(6) C. VIII, quæst. 3.^a, causa 23.—Cap. II, tít. VII, lib. V *Decret.*

(7) *Prælect. Jur Canon in Seminar. S. Sulpit.*, part. IV, sect. 6.^a, art. 2.^o, párrafo 1.^o, núm. 719.

Sus especies.—La apostasía puede ser=

Apostasía de la fé.

Apostasía de desobediencia.

Apostasía de irregularidad.

Apostasía de la fé, y sus clases.—La apostasía de la fé se conoce también con el nombre de apostasía de perfidia que es: *La completa deserción de la fé católica recibida en el bautismo, y el tránsito al judaismo, paganismo ú otro género de infidelidad.*

También son apóstatas de la fé los que han abandonado por completo la fé católica sin abrazar religión alguna, como los ateos é indiferentes (1).

Los apóstatas de los primeros siglos eran de las dos clases siguientes=

Apóstatas que pasaban al judaismo.

Apóstatas que pasaban al gentilismo.

Especies de apóstatas que pasaban al judaismo.

—Estos eran de las tres especies siguientes=

Unos abandonaban por completo la religión cristiana y pasaban al judaismo, como Aquila y Barcochebas.

Otros no abandonaban por completo la religión cristiana, sinó que de ella y la judaica formaban una nueva religión, como los cerintianos, ebionitas y nazareos.

Otros, sin profesar dogma alguno judaico, se unían á los judíos en ciertos ritos y costumbres, como el descanso en el sábado, comían ó ayunaban con ellos, y los consultaban en sus enfermedades, recibiendo de ellos amuletos para su curación.

Especies de apóstatas que pasaban al gentilismo.—Estos apóstatas eran de dos clases=

Unos obraban así espontáneamente.

Otros por temor á las penas.

Lapsos y sus distintos nombres.—Se daba el nom-

(1) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 10.

bre de *lapsos* á los que pasaban al gentilismo por temor á las penas, que los gentiles imponían á los cristianos.

Los lapsos eran conocidos con los nombres de *thurificati*, *sacrificati* ó *libellatici*, según que ofrecían incienso á los ídolos, comían de las cosas sacrificadas á los mismos, ó abjuraban la religión en ciertos libelos entregados á los magistrados gentiles, ó que recibían de éstos, á fin de que no se los obligara á ofrecer sacrificios á los ídolos.

Clases de libeláticos.—Muchos escritores opinan, que estos apóstatas eran de las tres clases siguientes—

Unos juraban ó declaraban ante los magistrados que no eran cristianos, y negaban su religión de palabra ó por escrito, manifestando que se hallaban dispuestos á ofrecer sacrificios á los ídolos, si se les ordenaba por el magistrado.

Otros no abjuraban la religión, ni daban libelo, sinó que mandaban á un amigo gentil ó un esclavo para que sacrificase á los ídolos ó negase la fé, consiguiendo de este modo el libelo del magistrado, como si ellos hubiesen hecho lo que hicieron por otros.

Otros, finalmente, comprendiendo que podrían templar la ira de los magistrados con dinero ú otros presentes, se presentaban ante ellos, manifestando que eran cristianos y que como tales no podían ofrecer sacrificios ni incienso á los ídolos, pero obtenían, mediante una cantidad, el libelo de inmunidad (1).

Modos de incurrir en la apostasía de la fé. — Los modos de incurrir en la apostasía son los tres siguientes:

a) Si uno renuncia interiormente á la fé, en cuyo caso será apóstata ante Dios solamente, y no incurrirá en las penas canónicas, porque es un pecado interno, del que la Iglesia no puede conocer en el fuero externo (2).

(1) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. IV, tit. III.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, título IX, núm. 4.

b) Si uno renuncia sólo de palabra ó con hechos la religión, es considerado como apóstata en el fuero externo.

c) Si uno abandona interior y exteriormente con palabras ó hechos la religión cristiana; lo cual constituye verdadera apostasía en el fuero interno y externo, aunque el delito sea oculto.

Penas contra los apóstatas de la fé.—Los apóstatas, como reos de verdadera idolatría, eran en la antigua disciplina arrojados de la iglesia, y en algunos puntos no se les concedía el perdón ó absolución sinó en el artículo de la muerte, la cual aún se les negaba en algunas iglesias, dejándolo todo en manos del Señor, quien en su infinita misericordia los perdonaría si el arrepentimiento era sincero; pero esta severidad se templó andando el tiempo, y los delincuentes obtenían el perdón aun fuera del artículo de la muerte, mediante penitencias más ó ménos largas y graves (1).

Los apóstatas quedan sujetos en la actualidad á las penas fulminadas contra los herejes y sus fautores (2), é incurrén en excomunión *latæ sententiæ* reservada de un modo especial á la Santa Sede (3).

Penas contra los lapsos.—Los que abjuraban la religión cristiana sólo exteriormente (*lapsos*) eran castigados con las penas correspondientes, pero se les concedía el perdón, si se arrepentían sinceramente, habida consideración al miedo de los tormentos que los movió á apostatar (4).

Abjuración de la infidelidad.—Los apóstatas que desean volver á la religión cristiana no tienen obligación de abjurar públicamente ante los infieles, si de esto han de resultar graves males, bastando al efecto que abjuren su infidelidad

(1) DEVOTE: *Inst. Canon*, lib. IV, tit. III, pár. 8.º

(2) Cap. XIII, tit. II, lib. V *sext. Decret.*

(3) Bula *Apost. Sedis: excom. lat. sent. special. modo Rom. Pont. reservatæ*, artículo 1.º

(4) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 10.

ante los fieles, y se abstengan de actos propios y protestativos de la falsa religión (1).

Apostasía de desobediencia, y su penalidad.—Es un delito que consiste en negar la obediencia debida á Dios y á sus ministros (2), y se llama apóstata de desobediencia: *La persona que por desprecio y soberbia quebranta los preceptos de su prelado y no presta obediencia á los sagrados cánones ó preceptos divinos* (3).

La apostasía de desobediencia tiene diversa penalidad, según la causa de donde procede, porque si la desobediencia proviene de infidelidad, como en el caso de ^{no creer} que el Papa tenga potestad suprema en la Iglesia, entonces es considerado como hereje, y en tal concepto se le castiga (4).

Si la desobediencia procede de soberbia y desprecio al precepto divino ó eclesiástico, se le declara infame, queda inhabilitado para acusar ó ser testigo, se le excomulga, y si después de la correspondiente monición es contumaz, se le depone, entregándolo, por último, á la curia seglar, si es incorregible (5).

Cuando la desobediencia procede de ignorancia, fragilidad ú otra causa sin desprecio formal, entonces se procede con más lenidad en la imposición de la pena (6).

Apostasía del instituto regular, y cuándo tiene lugar.—Se entiende por esta apostasía: *La omnimoda defecación ó temeraria separación del estado religioso sin propósito de volver á él ó con ánimo de no volver.*

El religioso no puede considerarse apóstata de la religión, sino median las circunstancias siguientes=

- (1) BENEDICTO XIV: *De Synodo diocesana*, lib. XIII, cap. XX, núm. 18.
- (2) Cap. II y V tít. XXXIII, lib. I *Decret.*
- (3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. IX, número 7.º
- (4) C. V, dist. 19.
- (5) C. III, quest. 4.ª, causa 3.ª.—C. XI, quest. 3.ª, causa 11.
- (6) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. IX, núm. 10.

a) Que haya defección de un instituto religioso, aprobado como tal por la Santa Sede.

b) Que se hayan hecho en él los votos esenciales.

c) Que de hecho se haya salido del convento sin licencia del superior y con intención de no volver (1).

Los regulares que dejan el convento y abandonan el hábito religioso por causa ó pretexto de pedir la nulidad de su profesión, son considerados como apóstatas (2).

Su penalidad.—El derecho tiene señaladas muchas penas contra los religiosos apóstatas, como lo excomunión *latæ sententiæ* (3) suspensión perpetua del ejercicio de los órdenes recibidos durante su apostasía, á ménos que medie dispensa pontificia (4)—pérdida de todos los privilegios de su religión (5).

Hoy los religiosos apóstatas no incurren en censura alguna *latæ sententiæ*, y sólo los expulsados (*ejecti*) de sus conventos quedan *ipso facto* suspensos del ejercicio de los órdenes (6).

Quedan además sujetos á las penas particulares contenidas en sus reglas ó constituciones (7).

Apostasía del orden, y penas que lleva anejas.—

Se entiende por esta apostasía: *La temeraria defección ó tránsito del estado clerical á la vida seglar.*

Existe la apostasía del orden, cuando el clérigo ordenado *in sacris*, abandonando su orden, deja la tonsura y hábito clerical, y abraza por autoridad propia la milicia, matrimonio, etc.

Los clérigos de menores no se consideran como apóstatas, si dejan la tonsura y hábito clerical, y no incurren por lo tanto en penalidad.

(1) SCHMALZGRUBER: *Jus. Eccles. univ.*, ibid., núm. 12 y sig.

(2) BENEDICTO XIV: *De Synodo dioces.*, lib. XIII, cap. XI, pár. 14.

(3) Cap. II, tít. XXIV, lib. III *sex. Decret.*

(4) Cap. VI, tít. IX, lib. V *Decret.*

(5) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIX *De Regular.*

(6) Bula *Apost. Sedis, suspensiones lat. sent. Rom. Pont. reservate*, pár. 5.^o

(7) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 12.

Los apóstatas del orden incurren en—

- a) Excomunión mayor *ferendæ sententiæ* (1).
- b) Excomunión *latæ sententiæ* reservada al obispo, si contrajeran matrimonio (2).
- c) Infamia de hecho é irregularidad (3).
- d) Pérdida del privilegio del cánón.
- e) Puede encarcelárselos (4).

Significado de la palabra herejía, y su definición.—La palabra herejía procede de otra griega, y entre los latinos equivalía á secta, tomándose en su consecuencia en bueno ó mal sentido entre ellos; pero los escritores eclesiásticos expresaron desde muy antiguo con esta palabra el error pecaminoso contra la fé (5).

Se entiende por herejía: *El error voluntario y pertinaz contra la fé, profesado por una persona bautizada.*

Sus especies.—La herejía puede ser—

Material, que es el error contra la fé, sin advertencia de parte del entendimiento, ni pertinacia por parte de la voluntad.

Formal, que es el error voluntario y pertinaz contra alguna verdad de fé, profesado por la persona bautizada.

Esta doctrina está de acuerdo con la que consigna San Agustín (6) y Santo Tomás (7); y de ella resulta que la herejía *material*, es tan solo error por parte del entendimiento, á diferencia de la *formal*, que además del error por parte del entendimiento, incluye pertinacia de parte de la voluntad.

(1) Cap. III, tít. IX, lib. V *Decret.*

(2) Bula *Apost. Sedis, excom. lat. sent. episcopis sive ordin. reservate*, pár. 1.º

(3) SCHMALZGRUEBER: *Fus. Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. IX, número 31.

(4) Cap. V, tít. IX, lib. V *Decret.*

(5) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. IV, pár. 1.º

(6) C. XXXI, quæst. 3.ª, causa 24.

(7) *Summa Theolog.*, *secunda secunda*, quæst. 11, art. 1.º y sig.

Interna ó externa, según que se manifiesta ó no exteriormente con palabras ú otro signo externo.

Mixta, que tiene lugar si existe en el entendimiento y se manifiesta exteriormente.

Ocultas, que no se dá á conocer á nadie ó muy pocos.

Manifiesta, que se demuestra ante muchas personas (1).

En qué consiste la herejía formal.—Es necesario en el sujeto para que haya herejía formal=

Error en el entendimiento, porque la herejía es una especie de infidelidad, que supone error del entendimiento contra la fé.

Pertinacia de la voluntad, cuyas dos circunstancias son de absoluta necesidad para que exista dicha herejía (2).

Que el error verse sobre una verdad revelada por Dios, propuesta como de fé católica por el magisterio de la Iglesia (3).

Que dicho error se profese por una persona bautizada, si ha de quedar ligada á la penalidad impuesta por la Iglesia á los reos de herejía (4).

Remedios y precauciones de la Iglesia contra la herejía.—La herejía es un delito gravísimo, y como tal ha de ser castigado; así que la Iglesia juzga de la herejía externa formal ó puramente externa (5), empleando los remedios oportunos para la corrección y enmienda de los delincuentes, no ménos que para ejemplo de los demás y conservación de la fé católica.

Toma las precauciones convenientes contra la herejía por medio de=

a) La profesión de fé prescrita á unos.

(1) SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, trat. 8.º, disp. 1.º, cap. IV, art. 2.º

(2) C. XXIX y XXXI, quæst. 3.º, causa 24.

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 13.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Fus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. VII, pátrafo 1.º, núm. 9 y sig.

(5) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 13.

- b) La prohibición de leer libros heréticos.
- c) Prohibe á los legos predicar la divina palabra, ó que dis-
puten sobre los misterios de la fé.
- d) Visita episcopal, etc., (1), é impone penas contra los reos
de este delito, ó sea de herejía formal externa, porque la pura-
mente mental ó interna no está sujeta á censuras ni penas, así
como tampoco la herejía material.

Penas contra los herejes. —Todo lo relativo á las pe-
nas impuestas por la Iglesia contra los herejes puede resumirse
en lo siguiente:

- a) Incurren en excomunión *latæ sententiæ* reservada de un
modo especial al Sumo Pontífice, hallándose en igual caso los
que les den crédito, sus encubridores, favorecedores, y en gene-
ral todos los que de cualquier modo los defiendan (2).
- b) Quedan privados *ipso jure* de sepultura eclesiástica (3).
- c) Se hacen irregulares no pudiendo recibir los órdenes ni
ejercer los que hubieren recibido (4) y quedan inhábiles para
obtener dignidades, oficios ó beneficios eclesiásticos.
- d) Quedan privados de las dignidades ó beneficios obteni-
dos antes de incurrir en herejía (5).
- e) Incurren en infamia de hecho y de derecho, cesando aque-
lla por la conversión, y ésta por dispensa (6).
- f) También quedaban inhabilitados para testar ó adquirir
por testamento—se les confiscaban los bienes—perdían el dere-
cho de patronato, la patria potestad, y se les imponían multas
pecuniarias, penas corporales, cárcel, destierro y hasta la pena
capital (7).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. VII, pár. 2.^o

(2) Bula *Apost. Sedis, excommun. lat. sent. special. modo Rom. Pont. reservata*,
art. 1.^o

(3) Cap. VIII, tit. VII, lib. V *Decret.*—Cap. II, tit. II, lib. V *sext. Decret.*

(4) C. XXI, quest. 7.^a, causa 1.^a—Cap. II y XV, tit. II, lib. V *sext. Decret.*

(5) Cap. IX, tit. VII, lib. V *Decret.*—Cap. XII, tit. II, lib. V *sext. Decret.*

(6) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 13.

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. VII, pár. 4.^o

Jueces en estas causas.—El Sumo Pontífice es el juez supremo en las causas de herejía, y de él desciende y depende la jurisdicción espiritual de todos los demás jueces, que lo son:

a) La Sagrada Congregación de la Inquisición y la del Indice.

b) Los legados *á latere*.

c) Los obispos en sus respectivas diócesis.

d) El cabildo *sede vacante*.

e) Los prelados inferiores con jurisdicción cuasi episcopal.

f) Los inquisidores y todos los jueces delegados *ad hoc* (1).

Denuncia de los herejes.—La denuncia puede ser=

Fraterna, que tiene por objeto la enmienda del delincuente, y está prescrita por la caridad.

Judicial, que se halla prescrita por la ley, como necesaria al bien común, y por esto la bula *Apostolicæ Sedis* impone la pena de excomunión reservada al Sumo Pontífice á los que no denuncian á los corifeos ó jefes de los *masones* ó *carbonarios* ú otras sectas de este género (2).

La denuncia judicial de todos los herejes aún ocultos es hoy muy difícil y de escasa utilidad (3).

Comunicación con ellos.—Los antiguos cánones prohibían la comunicación con los herejes; pero esto quedó reducido á los límites que se dejan señalados en otro lugar de esta obra (4), así que=

I. Los católicos pueden comunicar lícitamente, mediante legítima causa (5) con los herejes, principalmente en los países que existe la libertad de cultos, y les es lícito celebrar contratos y orar juntamente con los no denunciados; asistir á los actos del culto, oír la divina palabra y acompañar á los funerales y sepultura.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. V Decret.*, tit. VII, pár. 5.^o

(2) *Excommun. late sent. Romano Pontifici reservate*, art. 4.^o

(3) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 13.

(4) Lib. IV, tit. I, cap. IV.

(5) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 15.

II. Los católicos pueden asistir á los templos de los herejes y dirigir sus preces al Señor *ritu catholico*, oír los sermones ó pláticas de aquellos mediante justa causa, (1), ser padrinos en el bautismo de los hijos de herejes, si este Sacramento se administra con el rito católico, puesto que no está prohibido por ninguna ley; pero el católico no puede, sin grave causa, designar á un hereje para padrino de un hijo suyo.

III. Puede admitirse á los hijos de herejes en las escuelas católicas, áun cuando sean adultos y se hallen imbuidos en sus errores, porque no son *nominatim* denunciados; pero los hijos de los católicos no pueden asistir á las escuelas de los herejes, porque hay peligro de que se perviertan.

IV. Los católicos no pueden lícitamente recibir los sacramentos de párrocos ú obispos herejes, debiendo evitar toda comunicación con ellos en las cosas divinas, por el peligro de participación en el rito herético—de pervisión en la fé católica—y por el peligro ú ocasión de escándalo (2).

Significado de la palabra cisma, y su definición.

—La palabra *schisma* (cisma) procede de otra griega que significa división, partición ó separación.

Se entiende por cisma: *La separación de la unidad de la Iglesia* (3).

Quiénes son cismáticos.—El Sumo Pontífice es el centro de la unidad católica, y por lo mismo se llama *cismático*, al que rehusa someterse al Sumo Pontífice y comunicar con los miembros de la Iglesia sujetos á aquél; y en un sentido lato será también cismático el que se separa de su propio obispo (4); así que serán propiamente cismáticos los que se separan del Sumo Pontífice negándole la debida reverencia y obediencia, ó de los

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ. in lib. V Decret.*, tít. VII, pár. 5.º, núm. 213 y sig.

(2) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon., pars special.*, lib. II, título II, trat. 2.º, disert. 1.ª, cap. II, art. 1.º

(3) C. XXXIV, quæst. 1.ª, causa 24.

(4) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.º, cap. II, pár. 190.

demás miembros de la Iglesia, ejerciendo ó practicando aparte los ayunos, oraciones y otras funciones espirituales, como si fuesen un cuerpo distinto de la Iglesia; lo cual puede verificarse directa ó indirectamente (1).

Requisitos necesarios al efecto.—Para que una persona sea considerada propiamente como cismática, se requiere:

a) Que la expresada separación vaya acompañada de pertinacia, porque el cisma es una especie de rebelión contra el Sumo Pontífice ó la Iglesia.

b) Que dicha separación tenga lugar en cuanto á las cosas que pertenecen á la unidad de la Iglesia.

c) Que la persona que obra de este modo, reconozca al Sumo Pontífice como cabeza de la Iglesia y verdadero vicario de Jesucristo, por más que le niegue la obediencia.

d) Que ejerza acto formal de desobediencia, como si no quiere obedecer al Sumo Pontífice, por más que reconozca que se le deba obediencia con arreglo á la doctrina de fé.

Especies de cisma.—El cisma puede ser=

Simple ó puro, el cual existe cuando no se impugna dogma alguno de fé católica (2).

Mixto, ó sea cuando va acompañado de herejía.

El cisma simple puede ser=

Especial, ó sea cuando uno se separa injustamente de la propia Iglesia, y rehusa obedecer á su obispo.

Particular, ó sea cuando las iglesias particulares se separan entre sí, salva la unidad de fé y comunión con el Sumo Pontífice, cabeza de la Iglesia universal.

Universal, el cual existe cuando alguna iglesia, obispo ó

(1) SCHMALZGRÜBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. VIII, núm. 7 y siguientes.

(2) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, parte 4.^a, sect. 6.^a, art. 2.^o, núm. 726.

fiel niega pertinazmente la obediencia ó sumisión al Romano Pontífice (1).

En qué se distingue de la sedición y herejía.—El cisma se distingue de la sedición en que ésta sólo produce separación ó disidencia en la sociedad civil ó política, y aquél en la eclesiástica ó religiosa (2).

El cisma se diferencia de la herejía=

a) En que todo hereje es cismático, pero no vice-versa (3), por más que el cisma vaya acompañado casi siempre de herejía, porque aún cuando sea en un principio *simple cisma* no pasa largo tiempo sin que se incurra en error herético (4).

b) En que la herejía se opone directamente á la fé, negando ó dudando sobre alguno de sus artículos, y el cisma se opone directamente á la caridad rompiendo la unidad de la Iglesia.

c) El cisma es camino para la herejía, como la pérdida de la caridad lo es para la pérdida de la fé, porque el cismático concluye por profesar la herejía para justificar su separación de la Iglesia (5).

Penas contra los cismáticos.—El cisma es un pecado gravísimo, en el que no cabe parvidad de materia, porque su malicia consiste en la soberbia y desprecio de la Iglesia, cuya unidad rompe en cuanto está de su parte; así que se hallan sujetos á las mismas penas que los herejes, si una vez amonestados para que vuelvan á la unidad de la Iglesia, no quieren obedecer (6). En su consecuencia el derecho les impone=

a) La excomunión mayor *late sententiæ* reservada al Sumo Pontífice (7).

(1) VECCHIOTTE: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 16.

(2) SANTO TOMÁS: *Summa Theolog.*, *secunda secundæ*, quæst. 42, art. 1.^o

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret*, tít. VIII, núm. 2.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. V, pár. 2.^o

(5) SANTO TOMÁS: *Summa Theolog.*, 2.^a 2.^æ, quæst. 39, art. 1.^a, *ad tertium*.

(6) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, parte 1.^a, disert. 2.^a, cap. II.

(7) C. V, dist. 19 —C. XLIII, quæst. 5.^a, causa 23.

b) Inhabilidad para obtener ó retener beneficios eclesiásticos (1).

c) Irregularidad é infamia (2) juntamente con la privación de toda jurisdicción eclesiástica (3).

d) Suspensión de los sagrados órdenes (4).

e) La bula *Apostolicæ Sedis* les impone excomunión *lata sententie*, reservada de un modo especial al Romano Pontífice (5).

Comunicación con ellos.—Respecto á la comunicación con los cismáticos habrá de tenerse presente lo que se deja manifestado en cuanto á la misma con los herejes, debiendo únicamente advertir que los actos de orden ejercidos por ellos son ilegítimos y sacrílegos, si no se ha observado el rito católico en la parte esencial (6).

En cuanto á lo demás habrá de tenerse presente la instrucción de Pío VI, dada con motivo del trastorno verificado en Francia, durante la revolución que tuvo lugar en dicho país. En ella se dice:

a) Que no es lícito acudir para la administración del bautismo á un presbítero juramentado, sinó en caso de necesidad extrema.

b) Que no puede acudirse al párroco intruso para la celebración del matrimonio.

c) Que se puede acudir al presbítero juramentado ó párroco intruso, á falta de sacerdote católico, para recibir el sacramento de la penitencia en el artículo ó peligro de muerte.

d) Que los fieles no pueden asistir áun los dias festivos al

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, ibid.

(2) PHILLIPIS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.^a, cap. II, pár. 190.

(3) C. VI, pár. 1.^o, quæst. 1.^a, causa 7.^a—C. XXXI y sig., quæst. 1.^a, causa 24.—Cap. I, tít. VIII, lib. V *Decret.*

(4) C. V, quæst. 1.^a, causa 9.^a—Cap. I, tít. VIII, lib. V *Decret.*

(5) *Excom. lat. sent. special. modo Roman. Pont. reservate*, art. 3.^o

(6) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 16.

sacrificio de la misa y oficios divinos celebrados por sacerdote juramentado (1).

Blasfemia, y casos en que tiene lugar.—Se entiende por blasfemia: *Toda locución injuriosa dirigida con ánimo deliberado contra Dios.*

La blasfemia puede tener lugar==

I. Cuando se afirma de Dios una cualidad que no le conviene, lo cual puede tener lugar como si se dice==

a) Que es cruel, injusto, etc.

b) Cuando se le niega una propiedad ó atributo que le compete, como la ciencia, providencia, etc.

c) Cuando se atribuye á una criatura lo que es propio de Dios, como la omnisciencia, omnipotencia, etc. (2).

Esta blasfemia es herética en cada uno de los conceptos expresados (3), y se conoce con el nombre de *enunciativa* (4).

II. Cuando se detesta á Dios, y se le desea algún mal, como si se expresa que perezca ó muera, ó se le nombra indecentemente.

Esta blasfemia se denomina *simple* (5) y se conoce con el nombre de *imprecativa*.

III. Cuando se pronuncian palabras injuriosas contra la Virgen ó los santos, como que no es virgen, ó que éstos no están en el cielo (6).

Su penalidad.—La blasfemia se castigaba en la ley antigua con pena de muerte (7) y esta misma pena se impone por Justiniano á los blasfemos.

(1) HUGUENIN: *Exposit. meth. Jur. Canon. pars special.*, lib. II, tít. II, trat. 2.º, dissert. 1.ª, cap. II, art. 1.º, pár. 1.º

(2) STO. TOMÁS: *Summa Theolog.*, 2.º, 2.ª, quæst. 13, art. 1.º

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXVI, número 12.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. X, pár. 1.º

(5) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.ª, cap. II, pár. 191.

(6) Véase á SCAVINI: *Theolog. moral. univ.*, trat. 5.º, disp. 2.ª, cap. II, art. 2.º

(7) LEVITI: cap. XXIV, v. 16.—DANIEL: cap. III, v. 96.—C. XLI, quæst. 4.ª, causa 23.—C. XCIII, quæst. 3.ª, causa 11.

Las leyes eclesiásticas distinguen entre la blasfemia herética y simple, castigando la primera con igual pena que la sancionada contra los herejes, mediante el juicio correspondiente (1).

En cuanto á la blasfemia simple ha de tenerse presente, que los clérigos reos de este delito quedaban separados de su oficio y beneficio, y los legos de la comunión eclesiástica, según la legislación antigua (2).

Las Decretales de Gregorio IX disponen que los blasfemos puedan reconciliarse con Dios y la Iglesia, mediante penitencia pública (3), habiendo lugar á excomulgarlos, si no se someten á dicha penitencia y á proceder contra ellos como sospechosos de herejía, si son contumaces por largo tiempo (4).

Las penas señaladas en la actualidad contra los blasfemos son varias, que se imponen según el prudente arbitrio del juez eclesiástico, con arreglo á la calidad del delito y circunstancias de las personas (5).

Divinación, y sus especies.—El paganismo encerraba una gran multitud de prácticas supersticiosas, que se propagaron entre los cristianos, por más que pugnaban con los principios de la religión cristiana (6).

Estos ritos supersticiosos se comprenden en la palabra *divinación*, que es: la ciencia ó investigación de las cosas futuras ú ocultas.

Esta ciencia ó arte vano comprende las especies siguientes (7)=

Astrología, que es la investigación por el curso de los astros ó movimiento y situación de las estrellas, de aquellas

(1) BERARDI: *Comment. in Jus. eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, dissert. 2.^a capítulo III.

(2) C. X, quæst. 1.^a, causa 22.—C. XIII, quæst. 3.^a, causa 24.

(3) Cap. II, tít. XXVI, lib. V *Decret.*

(4) C. XXXI, quæst. 3.^a, causa 24.

(5) DEVOTE: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. X, pár. 3.^o

(6) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.^a, cap. II, párrafo 191.

(7) C. I, quæst. 4.^a, causa 26.

cosas futuras que no dependen de las leyes naturales, sinó de la libre voluntad de los hombres.

Esta especie de divinación se conoce también con el nombre de *Astrología judiciaria*, á diferencia de la astrología natural, mediante la cual se conocen ó conjeturan las cosas que naturalmente han de tener lugar, como los eclipses, lluvias, vientos, granizos, etc., y esta es lícita, pero no la otra (1).

Augurio, que es la investigación, como medio cierto, de las cosas futuras por el canto de las aves.

Se le dá el nombre de—

Aruspicium, cuando se busca este conocimiento de las cosas en las entrañas de los animales espirantes.

Auspicium, si se busca este conocimiento por el vuelo de las aves (2).

Omen, si se busca dicho conocimiento por la voz del hombre.

Chiromantia, *metoposcopium*, *notomantia*, si por las manos, semblante, ó frente, etc (3).

Sortilegio, que es, la investigación de las cosas ocultas por medio de la suerte (4), como el autor de un hurto, homicidio, etc.; pero no se prohíbe por esto el uso de las suertes en las cosas políticas, como la división de un campo entre muchos, ó la designación por este medio del soldado ó división que ha de dar el asalto á una plaza enemiga, etc.

Divinación por pacto con el demonio.—Esta puede tener lugar mediante *pacto explicito* (*necromantia*) como si Satanás contesta (5) al que lo consulta, ó lo hace por medio de los ídolos (*oracula*) ó por adivinos *pythones* ó *pythonisas*, etc.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus. Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XXI, número 15.

(2) Véase á SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, trat. 5.^o, disp. 3.^o, cap. I, art. 2.^o

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tit. XIII, pár. 2.^o

(4) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 6.^a, pár. 2.^o, núm. 737.

(5) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tit. XIII, pár. 4.^o

Se llama *pacto implícito*, cuando para el conocimiento de las cosas ocultas se emplea un medio que no conduce al intento por su naturaleza, ni por disposición divina.

Leyes que la prohíben.—La Iglesia dictó leyes salubres para impedir que los cristianos se entregasen al ejercicio del arte ó estudio de la divinación, y á este efecto la condena bajo severas penas (1) más ó ménos graves, según la culpabilidad de las personas (2); cuyas disposiciones se hallan confirmadas por otras posteriores, en las que se impone á los reos de este delito la obligación de hacer penitencia por cuarenta días (3) y la suspensión al clérigo del oficio por más ó ménos tiempo según la gravedad del crimen (4).

Los Sumos Pontífices León X, en su const. *Supernæ*, Sixto V en su const. *Cæli et terræ*, Gregorio XV en su constitución *Omnipotentis Dei*, Urbano VIII en su const. *Inscrutabilis*, prescriben á los obispos y á otras autoridades superiores que procedan contra los clérigos ó legos que sean reos de este delito, declarando á unos y otros infames con arreglo á las disposiciones canónicas (5), é imponiendo á los clérigos la pena de suspensión, privación de oficio y beneficio ú otras penas á su arbitrio (6).

Se advierte respecto á los legos, á quienes se pruebe igual delito, que se les imponga la pena de excomunión (7).

Magia y sus especies.—Se entiende por magia: *El arte de hacer ó ejecutar cosas maravillosas.*

La magia puede ser—*natural y supersticiosa ó diabólica.*

(1) C. VI, quæst. 2.^a, causa 26.—Quæst. 5.^a, causa 26.

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, disert. 2.^a, cap. III.

(3) Cap. I, tít. XXI, lib. V *Decret.*

(4) Cap. II, tít. XXI, lib. V *Decret.*

(5) C. IX, quæst. 5.^a, causa 3.^a

(6) *Prælect. Jur. Canon., in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 6.^a, pár. 2.^a, núm. 738.

(7) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XIII, pár. 5.^a

La primera es: *El arte de hacer cosas maravillosas, mediante causas naturales ó secretos de la naturaleza.*

La magia supersticiosa es: *El arte de ejecutar cosas maravillosas, mediante pacto explicito ó implícito con el demonio.*

Si se distingue de la divinación.—La magia tiene mucha semejanza con la divinación; pero se distingue de ella, en que la primera tiene por objeto ejecutar cosas maravillosas, y ésta el conocimiento de cosas ocultas.

Su penalidad.—La iglesia impone á los magos la pena de excomunión, y si son clérigos la de deposición (1) en la forma que se deja indicada respecto á la divinación con sus varias especies.

Si la iglesia condena el magnetismo, sonambulismo y espiritismo.—La Iglesia condena igualmente el magnetismo, sonambulismo y espiritismo en su parte supersticiosa, puesto que se halla identificada en este concepto con la divinación y la magia (2).

Perjurio, y su penalidad.—La invocación del nombre de Dios en confirmación de lo que se dice, ó en apoyo de la promesa hecha, se ha mirado como cosa lícita siempre que vaya acompañado de verdad, justicia y necesidad (3).

Se entiende por perjurio, *la invocación del nombre de Dios en apoyo de la mentira ó de la verdad, sin justicia ni necesidad.*

El perjurio se ha condenado por el Señor como un gravísimo crimen (4).

Los sagrados cánones imponen severas penitencias contra los perjuros (5), así que:

(1) Quæst. 5.^a, causa 26.—Cap. I y II, tit. XXI, lib. V *Decret.*

(2) *Praelect. Jur. Canon., in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 6.^a, pár. 2.^o, núm. 737.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. II *Decret.*, tit. XXIV, párrafo 1.^o

(4) Quæst. 1.^a, causa 22.

(5) C. XVIII, quæst. 1.^a, causa 6.^a—C. XVII, quæst. 1.^a, causa 22.—C. I y sig., quæst. 5.^a, causa 22.

- a) Los declara infames (1).
- b) Impone á los clérigos la suspensión ó deposición del oficio.
- c) Excluye á todos los legos de la comunión eclesiástica (2).
- d) Unos y otros se hallan excluidos perpetuamente de ser testigos (3) con obligación en los fieles, previa monición, de denunciarlos (4).

Violación del voto, y pena contra los que le quebrantan.—El voto ó promesa hecha á Dios de una cosa mejor y posible, es agradable al Señor y debe cumplirse, sin que haya facultad de retractarlo en el que le ha hecho deliberadamente.

La persona que ha hecho un voto simple y no lo cumple, queda sujeta en el fuero interno y penitencial á dar la competente satisfacción, sin que haya lugar á ninguna pena pública ó del fuero externo (5).

No sucede lo mismo respecto al que delinque públicamente contra los votos solemnes, así que los monjes que abandonan el monasterio y el hábito religioso, son castigados como apóstatas, hallándose en igual caso los clérigos que se entregan á la vida seglar (6).

(1) C. XVII, quæst. 1.^a, causa 6.^a

(2) C. XII, dist. 81.—C. XVII, quæst. 1.^a, causa 22.—Canon XIX, quæst. 5.^a, causa 22.—Cap. X, tít. I, lib. II *Decret.*—Cap. X, tít. XXIV, lib. II *Decret.*—Cap. III, tít. XXII, lib. III *Decret.*

(3) C. XVIII, quæst. 1.^a, causa 6.^a—C. XIV, quæst. 5.^a, causa 22.

(4) C. VIII, quæst. 5.^a, causa 22.

(5) BERARDI: *Comment. in Jus. Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, dissert. 2.^a, cap. IV.

(6) C. XVIII y XIX, quæst. 1.^a, causa 27.—Cap. I, V y VI, tít. IX, lib. V *Decret.*—Cap. IV, tít. I, lib. II *Decret.*—Cap. XXI, tít. I, lib. V *Decret.*

CAPÍTULO III.

DELITOS CONTRA LAS COSAS CONSAGRADAS Á DIOS.

Sacrilegio en su sentido lato y extricto.—La palabra sacrilegio en un sentido latísimo puede definirse: *Todo delito contra la ley divina como cosa sagrada* (1).

En este sentido se consideran sacrílegos los cismáticos, blasfemos, magos, etc. (2).

El sacrilegio en su sentido extricto es: *La violación de una cosa sagrada que se halla destinada al culto divino* (3).

Sus especies.—El sacrilegio se divide en—*personal—local—y real* (4).

Sacrilegio personal, y modos de verificarse.—Se entiende por sacrilegio personal: *La violación de las personas eclesiásticas.*

Esta puede verificarse de los modos siguientes:

I. Matando, hiriendo ó golpeando gravemente á los obispos, prelados, sacerdotes ó clérigos (5), sin excluir á los clérigos casados, siempre que su matrimonio no sea con viuda, y lleven tonsura y hábito clerical (6).

Se comprende también en este caso los monjes ó regulares (7) de uno y otro sexo, según se desprende fácilmente de las disposiciones canónicas (8).

(1) Cap. VII, tít. XLI, lib. V *Decret.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, dissert. 3.^a, cap. I.

(3) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XI, pár. 1.^o

(4) C. XXI, quæst. 4.^a, causa 17.

(5) C. XXI y XXIX, quæst. 4.^a, causa 17.—Cap. V, tít. IX, lib. V. *sext. Decret.*—Cap. I, tít. VIII, lib. V *Clementin.*

(6) Cap. únic., tít. II, lib. III *sext. Decret.*

(7) C. XXI y XXIX, quæst. 4.^a, causa 17.

(8) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, dissert. 3.^a, cap. I.

II. Los que injurian á las personas eclesiásticas por medio de la violación de su inmunidad personal (1).

III. Por medio del *raptó* de una religiosa ó unión carnal con ella (2), hallándose en igual caso el clérigo ó monja que quebrantan la ley de la continencia (3).

Sacrilegio local, y casos en que tiene lugar.—El sacrilegio *local*, puede definirse: *La violación de lugar sagrado*.

Este sacrilegio tiene lugar, cuando se deniega el honor y reverencia debida al lugar sagrado, y puede verificarse de alguno de los modos siguientes:

a) Si los edificios destinados al culto se arruinan, ó son destruidos por incendio ó de cualquier otro modo (4).

b) Si las iglesias ó lugares sagrados se profanan por medio de combate ó pelea dentro de ellas (5).

c) Si se conversa en ellos como en los lugares profanos (6), ejerciendo actos judiciales, civiles ó criminales, negociaciones ó ferias, vanos clamores, sediciones, congresos civiles, etc.

d) Si tienen lugar en ellos representaciones teatrales ó espectáculos profanos (7).

e) Si media violación del asilo eclesiástico (8), porque es necesario guardar el respeto y veneración debida á la casa de Dios (9).

f) Homicidio, efusión de sangre, sepultura de un infiel, ó excomulgado, vitando, etc. (10).

(1) *Inst. Jur. Canon.*, por R. de M., part. 3.^a, lib. II, cap. V, pár. 2.^o

(2) C. XIV, XVII y XXXVII, quæst. 1.^a, causa 27.

(3) C. II y V, dist. 28.—C. XI, quæst. 1.^a, causa 27.

(4) C. VI, quæst. 4.^a, causa 17.—C. XXII, quæst. 3.^a, causa 24.

(5) C. VII, quæst. 4.^a, causa 17.

(6) Cap. I, V, VI y X, tit. XLIX, lib. III *Decret.*—Cap. II, tit. XXIII, lib. III *sext. Decret.*

(7) Cap. XII, tit. I, lib. III *Decret.*

(8) C. VIII, X, XIX y XX, quæst. 4.^a, causa 17.

(9) BERARDI: *Comment. in Jus. eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, disert. 3.^a, cap. I.

(10) DEVOTI: *Inst. Canon*, lib. IV, tit. XI, pár. 1.^o

Sacrilegio real, y cuándo se verifica.—Se entiende por sacrilegio real: *El hurto ó profanación de cosas sagradas.*

Puede verificarse hurtando:

- a) Una cosa sagrada en lugar sagrado.
- b) Una cosa sagrada en lugar no sagrado.
- c) Una cosa no sagrada en lugar sagrado (1).

Observaciones.—De la doctrina consignada resulta, que se comete sacrilegio real:

I. Si se hurtan ó roban cosas sagradas, como las destinadas al culto, el dinero y toda clase de bienes de la Iglesia (2); las donaciones hechas por el testador á la misma, los bienes benéficiales que sobran al clérigo después de cubiertas sus atenciones (3).

II. Si los iglesias, altares, vasos, ornamentos sagrados, etcétera, se convierten en usos torpes ó profanos (4).

III. Si se roban de lugar sagrado cosas profanas ó no sagradas.

Penas contra los reos de sacrilegio personal.—El Papa Bonifacio VIII dispuso que los percucores de los cardenales de la Santa Iglesia Romana, y los que aconsejan ó cooperan de algún modo á este horrible sacrilegio, sean considerados como reos de un crimen de lesa majestad, perpetuamente infames, y que no puedan testar ni disponer de sus bienes, etc. (5).

Clemente V impuso penas muy parecidas á los percucores, etc. de obispo (6).

Este crimen sacrilego se halla penado por la bula *Aposto-*

(1) C. XXI, quæst. 4.^a, causa 17.

(2) C. V, quæst. 2.^a, causa 12.—C. III, V, XII y XVIII, quæst. 4.^a, causa 17.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, part. 1.^a, disert. 3.^a, cap. I.

(4) DEVOTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, tít. XI, pár. 1.^o

(5) Cap. V, tít. IX, lib. V *sext. Decret.*

(6) Cap. I, tít. VIII, lib. V *Clementin.*

licæ Sedis con la censura de excomunión *latæ sententiæ* reservada de un modo especial al Sumo Pontífice (1).

Esta censura comprende á los que matan, mutilan, hieren, aprisionan, encarcelan, detienen ó persiguen hostilmente á los cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, legados ó nuncios de la Santa Sede, lo mismo que á los que les arrojan de sus diócesis, territorios, tierras ó dominios, hallándose también en este caso los que lo mandan, ratifican ó prestan para ello auxilio, consejo ó favor (2).

Incurren en la censura de excomunión *latæ sententiæ* reservada al Sumo Pontífice los que por su gestión del demonio ponen manos violentas en los clérigos ó monjes de uno ú otro sexo, á excepción en cuanto á la reserva de los casos y personas en que por derecho ó privilegio se permite que absuelva el obispo ú otra persona (3).

Penalidad en que incurren los reos de sacrilegio local.—Los que destruyen, despojan ó incendian las iglesias, incurren en la pena de excomunión, y no se les absuelve de ella hasta que satisfagan debidamente (4).

La bula *Apost. Sedis* impone la censura de excomunión *latæ sententiæ*, reservada de un modo especial al Sumo Pontífice; á los que usurpan la jurisdicción ó secuestran bienes ó rentas pertenecientes á personas eclesiásticas por razón de sus iglesias ó beneficios (5).

Los que extraen violentamente y sin las formalidades de derecho á las personas refugiadas en la iglesia, quedan exclui-

(1) *Excommunicationes lat. sent. speciali modo Roman. Pontif. reservatæ* artículo 5.º

(2) *Bula Apostolicæ Sedis*, id., ibid.

(3) C. XXIX, quæst. 4.ª, causa 17.—*Bula Apost. Sedis excommunic. latæ sent. Roman. Pontifici reservatæ*, art. II.

(4) C. I, VI y XXI, quæst. 4.ª, causa 17.—Cap. II y V, tit. XVII, lib. V *Decret.*—Cap. XXII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 22, capítulo XI *De Reformat.*

(5) *Excommunicat. latæ sent. speciali modo Rom. Pont. reservatæ*, art. XI.

dos de la comunión (1) ó sujetos á penitencia pública (2), y si son clérigos se los depone.

La bula *Apostolicæ Sedis* impone la censura de excomunión reservada al Sumo Pontífice á los que mandan violar ó violan con temeraria audacia la inmunidad del asilo eclesiástico (3).

Penas contra los que enajenan las cosas eclesiásticas.— Los ministros del culto que enajenan las cosas eclesiásticas sin mediar causa canónica y las solemnidades de derecho, incurrían en deposición y después en excomunión (4).

La bula *Apostolicæ Sedis* impone la censura de excomunión *latæ sententiæ* reservada al Sumo Pontífice á todos los que por sí ó por otros muevan, insinúen ó aconsejen al Sumo Pontífice la enajenación ó infeudación de las ciudades ó lugares pertenecientes á la Santa Sede bajo cualquier pretexto, aunque sea el de necesidad ó evidente utilidad (5).

La citada bula *Apost. Sedis* impone la censura de excomunión no reservada á nadie, y de la cual pueden absolver en su consecuencia los sacerdotes aprobados para oír en confesión á los penitentes, á los que enajenan ó se atreven á tomar bienes eclesiásticos sin el beneplácito apostólico, según la forma prescrita en la extravagante *Ambitosæ* (6).

Penalidad contra los reos de hurto sacrílego.— Los reos de hurto sacrílego quedan sujetos hasta que den la competente satisfacción (7) á=

a) Pena pecuniaria (8).

b) Infamia perpetua (9).

(1) C. X, XI y XXXV, quæst. 4.^a, causa 17.

(2) C. XIX y XX, quæst. 4.^a, causa 17.

(3) *Excommunicat. latæ sent. Rom. Pont. reservatæ*, art. V.

(4) Cap. únic. tít. IV, lib. III *Extravag. commun.*

(5) *Excommunicat. lat. sent. Rom. Pont. reservatæ*, art. XIII.

(6) *Excommunicat. lat. sent. nemini reservatæ*, art. III.

(7) Cap. XVI, tít. II, lib. II *Decret.*

(8) C. XXI, quæst. 4.^a, causa 17.

(9) C. XIII, quæst. 4.^a, causa 17.

c) Excomunión (1).

Observación.—Las autoridades eclesiásticas procederán contra los reos de sacrilegio, imponiéndoles las penas que consideren justas, según su prudente arbitrio en los casos que no se hallen señaladas en particular por las disposiciones canónicas (2).

Abuso en el culto de los santos.—Este puede cometerse de los modos siguientes:

a) No dando culto á los que debe darse por mandato de la Iglesia (3).

b) Dando culto á los que la Iglesia no ha declarado dignos de este honor (4).

c) Tributando á los santos el honor que no les corresponde.

Estos delitos envuelven el de apostasía, herejía, etc., de los que se deja tratado en este título, y por lo mismo no me detengo á examinar este punto con más detención.

Rebautizantes y rebautizados, y su penalidad.—Los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Orden no pueden reiterarse, porque imprimen carácter, según se deja indicado en otro lugar, siendo considerados como sacrílegos los que quebrantan este precepto.

Los que rebautizan y los rebautizados que consienten en ello (5), incurren en irregularidad, quedando depuestos los rebautizantes del órden y los rebautizados inhabilitados para ascender al clericalto (6).

(1) C. XXI, quæst. 2.^a, causa 12.

(2) BERARDI: *Comm. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a; disert. 3.^a, capítulo III.

(3) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, disert. 3.^a, cap. III.

(4) C. LVII y LVIII, quæst. 3.^a, causa 11.

(5) C. XXXV, quæst. 5.^a, causa 23.—C. XXI, quæst. 7.^a, causa 1.^a—C. CXVII y CXVIII, distinct. 4.^a *De Consecrat.*

(6) C. LXV, dist. 50.—C. III, dist. 98.—C. X, quæst. 7.^a, causa 1.^a

Estas penas establecidas contra los rebautizantes no son aplicables á los que reiteran la confirmación y el orden, puesto que no se hace mención de ellos (1).

Recepción furtiva de los órdenes y su penalidad.

—Se dice que reciben furtivamente los órdenes:

a) Aquellas personas que sin licencia y consentimiento del obispo, ó sin previo exámen y aprobación se introducen dolosamente entre los ordenados, ignorándolo el ordenante (2).

b) Los que admitidos á los órdenes menores, reciben en el mismo día el subdiaconado (3).

c) Los que reciben dolosamente dos órdenes mayores al mismo tiempo, contra la prohibición del superior (4).

Las personas que reciben furtivamente los órdenes, incurren en suspensión del ejercicio de los órdenes recibidos de este modo, y si el obispo prohibió su recepción bajo pena de excomunión, quedan también suspensos del ejercicio de los demás órdenes recibidos legítimamente (5).

Pena contra los ordenados *per saltum*.—Los órdenes han de recibirse por su orden gradual, y los que no lo observan, se llaman ordenados *per saltum*, incurriendo en la pena de suspensión (6); pero nó en irregularidad á ménos que ejerciesen el orden así recibido sin haber obtenido la correspondiente dispensa.

Penas contra los clérigos que ejercen solemnemente un orden no recibido.—El clérigo que ejerce solemnemente un orden que no ha recibido, incurre en—

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom. IV, part. 1.^a, disertación 3.^a, cap. IV.

(2) C. V, dist. 24.—C. V, dist. 64.—Cap. I, tít. XXX, lib. V *Decret.*

(3) Cap. II, tít. XXX, lib. V *Decret.*

(4) Cap. III, tít. XXX, lib. V *Decret.*

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXX, número 7.^o

(6) C. I, distinc.—I, II, *Concil. Trid.*, sesión 23, cap. XIV *De Reformat.*

- a) Excomunión *ferendæ sententiæ* (1).
- b) Suspensión por dos ó tres años del ejercicio del orden últimamente recibido (2).
- c) Irregularidad, en cuya virtud queda inhabilitado para recibir los órdenes (3).

Ejercicio de los órdenes por el clérigo depuesto ó excomulgado.—El clérigo depuesto que ejerce alguno de los actos de orden ú oficio del cual se halla depuesto, incurre en excomunión *ferendæ sententiæ* (4).

El clérigo excomulgado, suspenso ó entredicho, que ejerce alguno de los actos propios del orden, incurre en las penas siguientes:

- a) Deposición del oficio y beneficio eclesiástico, que se impondrá mediante sentencia (5).
- b) Privación de todos los beneficios (6).
- c) Irregularidad *ipso jure* (7).

CAPITULO IV.

SIMONÍA.

Etimología de la palabra simonía, y su definición.—La palabra simonía procede de Simón Mago, autor de este delito en la ley evangélica, quien ofreció á los apóstoles dinero, diciéndoles: *Date et mihi hanc potestatem, ut cuicumque imposuero manus, accipiat Spiritum Sanctum* (8).

- (1) Cap. I, tít. XXVIII, lib. V *Decret.*
- (2) Cap. II, tít. XXVIII, lib. V *Decret.*
- (3) Cap. I y II, tít. XXVIII, lib. V *Decret.*
- (4) Cap. I y II, tít. XXVII, lib. V *Decret.*
- (5) Cap. IV, tít. XXVII, lib. V *Decret.*
- (6) Cap. VI, tít. XXVII, lib. V *Decret.*
- (7) Cap. IX, tít. XXVII, lib. V *Decret.*—Cap. I, tít. XIV, lib. II *sext. Decret.*
- Cap. I, tít. XI, lib. V *sext. Decret.*
- (8) *Act. Apost.*, cap. VIII, v. 18 y 19.

Se entiende por simonía, *studiosa voluntas emendi aut vendendi aliquid spirituale vel spirituali annexum*.

Suárez dá una definición que coincide con la que se deja consignada, puesto que la describe de este modo: *Un sacrilegio que se comete mediante la promesa, venta ó cualquier otro contrato, en el que lo espiritual, considerado como tal, se permuta por una cosa temporal*.

Gravedad de este delito.—La simonía es uno de los más graves delitos eclesiásticos, y por eso el príncipe de los Apóstoles, al oír la oferta de Simón Mago, le dice: *Pecunia tua tecum sit in perditionem: quoniam domum Dei existimasti pecunia possideri.—Non est tibi pars, neque sors in sermone isto: cor enim tuum non est rectum coram Deo. —Pœnitentiam itaque age ab hac nequitia tua, et roga Deum, si forte remittatur tibi hæc cogitatio cordis tui.—In felle enim amaritudinis, et obligatione iniquitatis video te esse (1)*.

Este delito es uno de los más ofensivos á Dios, porque rebaja sus gracias y dones hasta el punto de compararlas en valor con los bienes terrenos, haciéndolas objeto de comercio y precio temporal.

Es, por otra parte, grandemente pernicioso á la Iglesia, porque prepara el camino á los indignos para obtener los beneficios eclesiásticos.

Los sagrados cánones designan á la simonía con los nombres de—*turpissimum lucrum* (2)—*Flagitium piaculare* (3), ó sea aquél que se castiga con la muerte.—*Crimen horribile nimis* (4). Se compara á la blasfemia de los judíos y al pecado del traidor Judas (5),—á la lepra (6),—peste superior á otras enfermedades y á la misma herejía (7).

(1) *Act. Apost.*, cap. VIII, v. 20 y sig.

(2) C. VIII, quest. 1.^a, causa 1.^a

(3) C. V, quest. 1.^a, causa 1.^a

(4) Cap. IX, tít. III, lib. V *Decret.*

(5) C. XXI, quest. 1.^a, causa 1.^a

(6) Cap. XIV, quest. 1.^a, causa 1.^a

(7) C. V y VIII, quest. 1.^a, causa 1.^a—Cap. V y sig., tít. III, libro V *Decret.*

Sus especies.—La simonía se divide en las especies siguientes:

Por razón de la ley que la prohíbe, en—

Simonía de *derecho divino*, que existe cuando se da una cosa espiritual por otra temporal.

Simonía de *derecho eclesiástico*, que tiene lugar cuando se da una cosa espiritual ó aneja á ella por otra espiritual ó aneja á la misma, faltando á las prescripciones eclesiásticas que lo prohíben, como la permuta de beneficios eclesiásticos, hecha por autoridad privada (1).

Por razón de las personas que dan ó reciben las cosas sagradas en—

Interna, que existe únicamente en la mente ó en el propósito interno de cometer simonía.

Externa, que tiene lugar cuando el propósito interno se deja sentir por medio de un acto externo.

La simonía externa se subdivide en—

Mental, y ésta existe cuando sin mediar pacto expreso ó tácito, se adquiere, ejerce ó se da una cosa espiritual en compensación de otra temporal, ó una cosa temporal por otra espiritual, como si uno aspira á los sagrados órdenes ó beneficios con el fin especial de enriquecerse ó gozar honores (2).

Real, la cual tiene lugar cuando mediante pacto se concede una cosa espiritual para conseguir otra temporal, ó una temporal por otra espiritual.

La simonía real se divide en—

Convencional expresa, que tiene lugar cuando en términos claros se pacta la entrega de una cosa espiritual por otra temporal, ó vice-versa.

Convencional tácita, como en el caso de que el prelado di-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. III, pár. 1.^o, número 19 y sig.

(2) C. III, distinct. 59.—C. VII, distinct. 61.—C. XX, quæst. 7.^a, causa 16.

late de propósito la confirmación del electo hasta que obtenga de éste alguna cosa temporal (1).

Confidencial, que tiene lugar siempre que se presenta para un beneficio, se confiere ó resigna con el fin de que el beneficio se trasfiera á un tercero, ó parte de sus frutos cedan en provecho de otra persona que la presentada ó nombrada (2).

Por razón de la cosa que es objeto de precio, se divide en (3):=

Munus á manu, que es el dinero y toda clase de bienes temporales (4).

Munus á lingua, que es el favor, y tiene lugar cuando median ruegos á fin de captarse la gracia de alguna persona con el objeto de obtener de ella una cosa espiritual, habiendo también simonía en la concesión de una cosa espiritual en virtud de los ruegos de la persona ó recomendación hecha en favor de la misma (5).

Munus ab obsequio, y existe cuando se obtienen las cosas sagradas por razón de servicio prestado indebidamente (6); sobre lo cual se expresa Santo Tomás en los términos siguientes: *Idem est, quod aliquis det rem spiritualem pro aliquo obsequio temporali exhibito, vel exhibendo, ac si daret pro pecunia data vel promissa, qua illud obsequium æstimari posset* (7).

Por razón de la cosa espiritual, que es estimada en precio, se comete simonía, cuando se comercia con las cosas espirituales ó anejas á ellas, como los sacramentos, sacramentales, oficios eclesiásticos, beneficios, actos de la potestad de orden ó de ju-

(1) Cap. XXXIII, tit. III, lib. V *Decret.*

(2) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tom IV, part. 1.^a, disertación 3.^a, cap. II.

(3) C. CXIV, quæst. 1.^a, causa 1.^a

(4) C. VI, quæst. 3.^a, causa 1.^a

(5) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.* tom. IV, part. 1.^a, disertación 3.^a, cap. II.

(6) C. CXIV, quæst. 1.^a, causa 1.^a

(7) *Se unda Secunda*, quæst. 100, art. 5.^o

risdicción, reliquias de los santos, sepultura, profesión monástica, etc. (1).

Debe, sin embargo, advertirse, que no se comete simonía vendiendo ó comprando cosas sagradas, que tienen materia estimable en precio, si sólo se tiene ésta en consideración independientemente de su bendición ó consagración.

Tampoco existe simonía, cuando se exige en la administración de las cosas espirituales ó sagradas alguna cosa temporal en virtud de otro título justo, como la sustentación de los ministros de la Iglesia, ó trabajo extrínseco, título de gratitud ó costumbre.

Requisitos necesarios para la existencia de este delito.—Es de necesidad para que exista simonía, que medie=

Pacto de compra, venta ú otro semejante.

Precio, que consiste en la cosa temporal.

Merced, que es la cosa espiritual.

Pacto simoníaco.—Se entiende por pacto simoníaco:

Cualquier contrato oneroso ó recíproco y todo convenio tácito ó expreso, mediante el cual se da ó promete como precio lo espiritual por lo temporal.

De esta definición resulta, que la compra ó venta, el arriendo, transacción, permuta, contrato innominado y cualquier otro pacto expreso ó tácito, se comprende bajo las palabras pacto simoníaco, hallándose en igual caso la presentación ó nombramiento, elección, institución, confirmación, renuncia, remisión y otros actos semejantes en los que media precio.

El pacto simoníaco no comprende solamente los actos positivos, sinó también la omisión de ellos, mediante precio, sin que importe para el caso la denominación que se dé al expresado pacto, porque la ley recae sobre la cosa y no sobre las palabras que puedan darse á aquélla (2).

(1) BERARDI: *Comment. in Jus Eccles. univ.*, tomo IV, part. 1.^a, disert. 3.^a, cap. II.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. III, pár. 2.^o, núm. 45 y sig.

Si éste existe cuando se intenta por una de las partes, ó es ficticio de parte de la otra.—No se requiere pacto expreso para que exista simonía: basta al efecto pacto tácito, aun cuando se intente únicamente por una sola parte; de modo que si uno da, ofrece, presta, ó propone prestar una cosa temporal con ánimo de obligar á otro á dar una cosa espiritual, existe por su parte simonía, aunque el otro no lo advierta, ó advirtiéndolo no acepte, ni consienta, ó no dé lo espiritual, ó lo conceda sin consideración alguna á lo temporal, que se dá ú ofrece. La prueba de esto se vé en el mismo Simón Mago, en quien existió simonía, y sólo por su parte, puesto que S. Pedro rechazó su petición.

— Cuando media pacto oneroso, ficticio de parte de uno, existe realmente simonía, al ménos mental, por parte del otro, que tiene ánimo verdadero de prestar ó entregar lo espiritual ó temporal que prometió, debiendo también ser considerado como simoníaco en el fuero externo aquel otro que mintió perniciosamente y sacrilegamente, mientras no pruebe la ficción.

Si el obsequio temporal prestado con la esperanza de obtener un dón espiritual puede considerarse como simoníaco.—El dón ú obsequio temporal prestado á uno con la sólo esperanza de que este le conceda un dón espiritual por gratitud ó remuneración, sin mediar pacto alguno ni voluntad de obligarle, no puede ser considerado como delito simoníaco.

Tampoco puede considerarse como simonía la concesión de un beneficio eclesiástico al bienhechor temporal por gratitud y como medio de satisfacer á una obligación de reconocimiento, porque en estos actos no existe pacto ni precio.

Precio simoníaco, y puntos que comprende.—Es cualquier dón estimable en precio, que se dá por una cosa espiritual ó aneja á ella.

Este precio comprende *munus a manu*, *munus a lingua*, y *munus ab obsequio*, que se dejan explicados, pero es de necesi-

dad para que sea considerado como simoníaco, que medie pacto oneroso que produzca obligación de justicia conmutativa.

Reglas que han de tenerse presentes.—Como consecuencia de la doctrina (1) consignada habrá de tenerse presente:

I. No es simonía conferir un beneficio en consideración al parentesco ó amistad, porque si bien este motivo es temporal, carece del concepto de compensación temporal por el beneficio, en cuanto que el *colator* de éste nada recibe en vez de aquél.

II. Tampoco es simonía interceder, rogar ó recomendar al *colator* para que confiera el beneficio á un tercero ó á sí mismo, aun cuando el *colator* conceda el beneficio por esta sola consideración, siempre que no medie pacto alguno tácito ó expreso.

III. La concesión del beneficio con motivo de preces *armate*, ó medio grave causado injustamente, no es simonía, á menos que medie pacto.

IV. La persona que confiere un beneficio al deudor suyo con objeto de cobrar la deuda ó por temor de perder el crédito, no incurre en simonía, si no ha mediado pacto.

Si habrá simonía en redimir por precio la injusta vejación.—La vejación injusta que impide la pacífica posesión del (2) beneficio ya obtenido, puede redimirse lícitamente con dinero, siempre que—

- a) El derecho sea cierto y pleno.
- b) La vejación injusta.
- c) La cosa que se da por la ilícita vejación, ha de ser temporal.
- d) No ha de haber otro medio de impedir la expresada vejación.

Cuando el beneficio no se ha obtenido y se trata de redimir por este medio la injusta vejación que impide la confirma-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.* tit. III, párrafo 3.º, núm. 116 y sig.

(2) Cap. XXVIII, tit. III, lib. V *Decret.*

ción del electo, institución del presentado, etc., entónces habrá simonía, si la vejación procede de persona que puede servir directamente para la consecución del beneficio, como los electores, patronos, colatores, etc.

Merced simoniaca, ó cosa espiritual.—Se entiende por cosa espiritual, que constituye merced simoniaca: *Todo lo que es de algún modo sobrenatural y ordenado á la salud espiritual del alma por institución divina ó disposición de la Iglesia.*

Cosas que son objeto de merced simoniaca.—Las cosas espirituales que pueden constituir merced simoniaca son las siguientes (1):

I. Todo lo que es espiritual en sí y por esencia, como la gracia santificante, virtudes teológicas y morales, dones del Espíritu Santo, gracias *gratis datas*, carácter sacramental, etc.

II. Todo lo que es espiritual *causaliter*, en cuanto que es causa de la gracia santificante y de las demás cosas espirituales expresadas en el caso anterior, como los sacramentos, sacramentales y oficios eclesiásticos ordenados á un fin espiritual y sobrenatural.

III. Las cosas que son efectos ó actos procedentes próximamente de la gracia, dón, oficio y potestad espiritual como su causa, hallándose en este caso el oficio divino, bautizar, ordenar, celebrar, predicar la palabra de Dios, hacer milagros, etc.

IV. Las cosas que sin ser en sí espirituales, están anejas á lo espiritual por su conexión con las mismas.

Penas contra los simoníacos.—No se trata aquí de las penas establecidas en el tribunal del Juez eterno, en el que se halla penada toda clase de simonía, siquiera sea mental y meramente interna, puesto que es una especie de sacrilegio, digno de pena eterna.

Tampoco se trata de la penitencia que habrá de imponerse por el confesor en el tribunal de la penitencia, sinó únicamente de las penas en que los simoníacos incurren *ipso jure*, ó por

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. III, pár. 4.º

sentencia judicial con arreglo á los sagrados cánones. Las penas impuestas por éstos no alcanzan á los reos de simonía meramente interna ó mental (1), hallándose en igual caso la simonía meramente convencional ó incompleta que no se ha consumado por la entrega del precio y de la cosa espiritual ó merced (2), lo mismo que la simonía mixta llevada á efecto por la entrega de solo el precio.

Pena contra los que ordenan mediante simonía.

—Los que mediante simonía real, confieren órdenes, incurren *ipso facto* en=

a) *Suspensión* perpetua de la colación de todos los órdenes sin excluir la prima tonsura (3).

b) *Entredicho* ó privación de entrar en la Iglesia é irregularidad y privación del régimen y administración de su iglesia, así como de percibir todos los frutos de sus beneficios, si quebranta la suspensión ó entredicho.

c) *Excomunión* reservada al Sumo Pontífice (4), á ménos que el delito sea completamente oculto (5).

Penalidad en que incurren los ordenados simoniácamente.—El ordenado simoniácamente incurre *ipso facto*.

a) En *excomunión* (6) también reservada al Papa, á ménos que el delito sea enteramente oculto.

b) *Suspensión* de los órdenes recibidos simoniácamente, con inhabilidad para ascender á órdenes superiores (7).

(1) STO. TOMÁS: *Summa Theolog. secunda secund.*, quæst. 100, art. 6.º

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. III, pár. 5.º, núm. 244 y sig.

(3) Cap. XLV, tit. III, lib. V *Decret.*—Cap. II, tit. I, lib. V *Extravag. commun.*—Const. *Sanctum et salutare* de Sixto V.—Const. *Romanum Pontificem* de Clemente VIII.

(4) Cap. II, tit. I, lib. V *Extravag. comm.*

(5) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.*, lib. III, sect. 2.ª, cap. II, pár. 193.

(6) C. XII y XXII, quæst. 1.ª, causa 1.ª—Cap. XXXVIII, tit. III, lib. V *Decret.*

(7) Cap. II, tit. I, lib. V *Extravag. commun.*

c) Privación de oficios y beneficios é inhabilidad para obtener otros, si quebranta la suspensión (1), y privación de voz activa y pasiva, si es regular.

Penas contra los reos de simonía en la concesión ó recepción de beneficios.—La concesión ó recepción simoniaca de beneficios está penada con excomunión *ipso facto* (2), reservada al Sumo Pontífice; pero si este delito es oculto, puede absolver de aquélla el obispo (3).

En todo caso, la elección, confirmación, institución y cualquiera otra provisión de oficio, beneficio ó dignidad eclesiástica es *ipso jure* nula, sin que el provisto adquiera por ella ningún derecho (4).

El beneficiado queda además inhabilitado para obtener el mismo oficio ó beneficio (5) y además se le priva de los beneficios adquiridos antes legitimamente mediante sentencia judicial (6).

Penalidad contra los reos de simonía confidencial.—Los reos de simonía confidencial incurren en—

- a) Excomunión reservada al Sumo Pontífice.
- b) Entredicho de ingresar en la Iglesia respecto á los obispos y prelados.
- c) Nulidad de la resignacion y colación hecha en virtud de aquélla.
- d) Privación de todos los beneficios ó pensiones ántes obtenidas.
- e) Inhabilitación para obtener el mismo ú otros beneficios.

(1) Const. *Sanctum et salutare* de Sixto V.

(2) Cap. II, tít. I, lib. V *Extravag. comm.*—Const. *Cum primum* de San Pío V.

(3) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VI *De Reformat.*

(4) Cap. XXVII, tít. III, lib. V *Decret.*—Cap. II, tít. I, lib. V *Extravag. commun.*

(5) VECCHIOTTI: *Inst. Canon.*, lib. IV, cap. II, pár. 19.

(6) Cap. XXI, tít. I, lib. V *Decret.*

El beneficio resignado de este modo queda reservado al Sumo Pontífice.

Se incurre en las expresadas penas *ipso jure*; pero la privación de pensiones y beneficios adquiridos legítimamente con anterioridad, requiere sentencia declaratoria del delito.

Las penas indicadas suponen desde luego en el sugeto que la simonía se haya llevado á efecto de hecho, mediante entrega y recepción del beneficio, sin que sea necesario que se haya completado por ambas partes, como la entrega de la pensión (1).

Pena contra los reos de simonía por ingreso en religión.—La simonía cometida por el ingreso en religión ó recepción del monacato lleva anejas las penas siguientes:

a) Los que mediante pacto dan ó reciben dinero, incurren en *excomunión*, si son personas singulares; pero el capítulo que consiente en dicha recepción incurre en *suspensión* del oficio capitular (2).

b) Los que á sabiendas reciben á alguno de este modo, y el así recibido, habrán de ser expelidos del monasterio y encerrados en paraje de mayores privaciones, mediante sentencia (3).

c) Incurren en infamia de derecho (4) y en irregularidad, si el delito es notorio.

Penalidad por la simonía cometida en otras materias.—No se incurre *ipso facto* en pena alguna por la simonía que ha tenido lugar en otras materias que las beneficiales, órdenes é ingreso en religión, de modo que la simonía en la administración y recepción de sacramentos, bendiciones, consagraciones, venta ó compra de pensiones, vicarias temporales, etc., no lleva aneja pena alguna *ipso jure*, y los actos que

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. III, párrafo 5.º, núm. 272.

(2) Cap. I, tit. I, lib. V *Extravog. comm.*

(3) Cap. XXV y XL, tit. III, lib. V *Decret.*

(4) Cap. I, tit. I, lib. V *Extravog. comm.*

han tenido lugar son válidos, sin que haya obligación de renunciar ó privarse de ellos, mientras no recaiga sentencia condenatoria en pena de la expresada simonía (1).

Las penas *ferendæ sententiæ* en estos casos son las de excomunión, suspensión y otras que se expresan en el Derecho (2).

Censuras *latæ sententiæ* contra los simoníacos según el derecho vigente.—La bula *Apostolicæ Sedis* reduce las censuras *latæ sententiæ* sobre esta materia á las siguientes:

a) Los reos de simonía real y sus cómplices respecto á toda clase de beneficios (3) incurrn en excomunión reservada al Sumo Pontífice.

b) Igual pena se impone á los reos de simonía confidencial en cualquiera clase de beneficios, sea cual fuere su dignidad (4).

c) La misma censura de excomunión reservada al Sumo Pontífice, se impone á los reos de simonía real por el ingreso en religión (5).

d) Los que ordenan á alguno sin título de beneficio ó patrimonio, con pacto de que el ordenado no les pida alimentos incurrn *ipso jure* en suspensión por un trienio de conferir órdenes (6).

Restitución de las cosas recibidas mediante simonía.—Los pactos y contratos simoníacos son nulos, y en su virtud no se puede transmitir la merced ó precio convenido;

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. III, párrafo 5.º, núm. 277 y sig.

(2) C. VII, VIII y sig., quæst. 1.ª, causa 1.ª.—Cap. VI, XI y XIX, tít. III, libro V *Decret.*

(3) *Excommunicat. latæ sent. Romano Pontifici reservatæ*, art. 8.º

(4) Bula *Apostol. Sedis*, id. *ibid.*, art. 9.º

(5) Bula *Apostol. Sedis*, id. *ibid.*, art. 10.

(6) Bula *Apost. Sedis, suspensiones latæ sent. Summo Pontifici reservatæ*, artículo 2.º

pero en la aplicación de este principio general habrá de tenerse presente:

1. La simonía en materia benefical obliga en el fuero de la conciencia á la restitución de lo dado y recibido desde luego, y antes de que se mande por sentencia judicial.

2. La merced simoníaca, ó sea la cosa espiritual recibida en materia no benefical, se halla exenta de la obligación de restituir, porque sólo se requiere para la válida traslación de la cosa espiritual, la potestad de trasmitirla en el que la confiere, y capacidad en el que la recibe.

3. El precio recibido simoníacamente en materia no benefical habrá obligación de restituirlo, mediante sentencia judicial, y no ántes, á ménos que el precio exceda á la estimación del provecho temporal, transmitido á otro con la cosa espiritual; así que la venta de vasos sagrados, crisma, óleo santo, etc., no obliga á la restitución del precio recibido, si éste no excede al de las materias indicadas.

Cuando el precio se ha recibido por la merced ó cosa meramente espiritual, que no proporcione ningún provecho temporal, entónces habrá obligación de restituir desde luego y sin necesidad de que preceda sentencia judicial, porque se ha faltado á la justicia conmutativa.

4. La restitución del precio simoníaco ha de hacerse al que lo dió, á ménos que deba destinarse á otro objeto por sentencia del juez ó ley eclesiástica especial.

El precio dado en la colación simoníaca de un beneficio habrá de restituirse á la iglesia en que se halla dicho beneficio, según las disposiciones del derecho (1).

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. III, pár. V número 297 y sig.

CAPITULO V.

DELITOS COMUNES CONTRA EL PRÓJIMO.

Delitos comunes contra el prójimo, y sus especies.—Estos delitos, de los cuales se hace mención en las Decretales, pertenecen á la segunda tabla del Decálogo, y son todos aquellos que atentan contra los derechos del prójimo, ocasionándole un daño.

Estos delitos pueden ser contra—la vida—fama ó fortuna.

Delitos contra la vida.—Se comprende bajo esta denominación todo crimen contra la vida ó incolumidad de cuerpo del prójimo, como—el parricidio—homicidio—suicidio—aborto—duelo.

Significado de la palabra parricidio y su definición.—Entre los delitos contra el prójimo descuella el homicidio, y entre los homicidios sobresale el parricidio.

Esta palabra se empleó en otros tiempos para designar cualquier homicidio ó delito capital.

La significación de la expresada palabra está concretada hoy á una especie determinada de homicidio, y puede definirse en su sentido propio, *el homicidio de los padres por sus hijos ó el de los hijos ejecutado por sus padres.*

El parricidio en su sentido impropio es, *el homicidio ejecutado por parientes colaterales, afines ó cónyuges.*

A quiénes comprende.—La idea que se deja indicada acerca del parricidio, da desde luego á conocer que las personas comprendidas en la expresada palabra son:

- a) Los hijos que matan á su padre ó madre.
- b) Los padres que matan á sus hijos.
- c) Los nietos que matan al abuelo ó abuela ó á otros ascendientes, hasta el infinito; y viceversa.
- d) El suegro ó suegra que matan al yerno ó nuera, y viceversa.

- e) El marido que mata á su mujer, y viceversa.
- f) El hermano que mata á su hermano ó hermana.
- g) El consanguíneo que mata á otro consanguíneo suyo dentro del cuarto grado.
- h) Comprende igualmente á los extraños que de algún modo cooperan á la ejecución de este horrible crimen.

Penas contra los parricidas.—El antiguo derecho imperial imponía severísimas penas contra los parricidas; eran tan graves y extraordinarias que causa horror su sola lectura, y ellas son una prueba evidente del concepto que se tenía formado de este horrible crimen.

La Iglesia castiga el parricidio con las penas que se expresan á continuación:

I. Los hijos que mataban á sus padres incurrían en penas más severas que las impuestas á los demás homicidas (1); así que=

- a) Se les privaba por un año del ingreso en la Iglesia.
- b) Por tres años de la comunión eucarística.
- c) Por diez años de las oblações.
- d) Se les imponían además ayunos, abstinencia de carnes y vino, y otras obras de penitencia (2).

El Derecho de Decretales no señala pena determinada (3).

II. La madre viuda que mata á su hijo ha de ser encerrada en un monasterio, y se la prohíbe contraer nuevas nupcias, si no media peligro de incontinencia (4).

Si es casada se aplicarán otras penas, ménos la de separarla de su marido (5).

Estos delitos se castigan actualmente por los jueces civiles, sin que apenas entiendan en ellos los tribunales eclesiásticos.

(1) Cap. XIX, de *penitentia*, dist. 1.^a

(2) C. XV, quest. 2.^a, causa 33.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. X, número 21.

(4) Cap. I, tit. X, lib. V *Decret.*

(5) Cap. II, tit. X, lib. V *Decret.*

III. El clérigo parricida ha de ser degradado, y después se entregará al juez seglar.

IV. Los padres que aún sin intención ahogan á sus párvulos en el lecho, quedan sujetos á penitencia por tres años, con obligación de no alimentarse en uno de ellos sinó con pan y agua (1), siempre que haya mediado culpa; pero esta ley ha caído en desuso.

Aborto, y su penalidad —Los padres y otras personas que procuran el aborto, incurren en las penas siguientes:

I. La madre que procura el aborto del feto animado y lo ahoga en el útero ó lo expelle vivo y lo mata, incurre en el delito de parricidio con las penas que lleva anejas.

II. Los que procuran el aborto del feto animado, directa ó indirectamente, por sí ó por otro, lo mismo que los que lo aconsejan ó auxilian:

a) Incurren en todas las penas señaladas por el derecho contra los homicidas voluntarios.

b) Contraen irregularidad.

c) Quedan privados de todo privilegio clerical.

d) Tienen inhabilidad para obtener beneficios.

e) Se les priva de sus oficios ó beneficios eclesiásticos.

f) Si el delincuente es clérigo debe deponérsele y ser degradado, entregándolo después á la curia seglar.

Estas penas se imponen en la const. *Ad effrenatum de* Sixto V y const. *Sedes apostólica* (2) de Gregorio XII.

III. La bula *Apost. Sedis* impone la censura de excomunión reservada á los obispos ú ordinarios contra *procurantes abortum, effectu sequuto* (3), hallándose en igual caso los que toman veneno ú otras sustancias para contraer inhabilidad de engendrar ó concebir (4).

(1) Cap. III, tít. X, lib. V *Decret.*

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. X, núm. 30.

(3) *Excommunicat. lat. sent. episcop. sive ordinar.*, reservata, art. 2.^o

(4) PHILLIPS: *Comp. Jur. Eccles.* lib. III, sect. 2.^a, cap. II, pár. 194.

Exposición de párvulos y lánguidos.—La inhumanidad de abandonar á los párvulos y enfermos de cualquiera edad es un delito grave, que tiene cierta analogía con el parricidio.

Se entiende aquí por párvulos los menores de siete años, y por lánguidos los enfermos de cualquiera edad, que sufren un padecimiento grave, constante, perpetuo é incurable, que los inhabilita para el trabajo de cualquier clase.

Su penalidad.—La iglesia ha considerado este delito como un pecado grave (1) que priva al padre de la patria potestad y al señor de la potestad dominica (2).

Homicidio y sus especies.—Se entiende por homicidio, *el acto por el que se priva de la vida á un hombre por otro hombre.*

El homicidio se divide en==

Voluntario, que se ejecuta directa ó indirectamente de propósito y con ánimo de privar á uno de la vida.

Casual, que tiene lugar sin intención del que lo ocasiona.

El homicidio voluntario puede ser:

Justo, en cuanto no se prohíbe por ley alguna.

Injusto, ó sea el que se halla prohibido por la ley natural, divino-positiva ó humana.

El homicidio justo puede ser:

Necesario, ó sea cuando uno se ve en la precisión de matar á otro en defensa de la propia vida ó intereses.

Punitivo, que es el ejecutado por autoridad pública en castigo de un delito.

Penas contra los homicidas.—Aparte de la irregularidad (3), en que se incurre en los casos expresados en otro lugar de esta obra (4), el homicidio tiene anejas las penas siguientes:

(1) C. XXI, dist. 86.—C., IX, dist. 87.

(2) Cap. unic., tit. XI, lib. V *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XII.

(4) Lib. III, tit. I, cap. VI, art. 4.^o

I. Los que matan, mutilan ó hieren á los cardenales, patriarcas, arzobispos, obispos, legados ó nuncios de la Silla Apostólica, lo mismo que los que lo mandan, ratifican, ó prestan al efecto auxilio, consejo ó favor, incurren en excomunión *latæ sententiæ*, reservada de un modo especial al Sumo Pontífice (1).

II. El homicidio voluntario é injusto se halla condenado en las Sagradas Escrituras con la pena de muerte (2).

El derecho eclesiástico impone al homicida lego la excomunión *ferendæ sententiæ* (3), y al clérigo la deposición (4), debiendo además ser encerrado en un monasterio (5).

III. El clérigo homicida queda inhábil para obtener beneficios eclesiásticos (6) é incurre en irregularidad.

IV. Los asesinos incurren en las penas de excomunión, deposición de dignidades, honores, orden, oficio, beneficio y del asilo eclesiástico, etc. (7).

Suicidio y su penalidad.—El hombre no es dueño de su vida y miembros, y en este supuesto, el que se mata ó mutila usurpa á Dios este derecho.

La Iglesia castiga este delito con la privación de sepultura eclesiástica, según se deja indicado en otro lugar de esta obra (8); siempre que este acto se haya ejecutado con pleno conocimiento.

Torneos y su penalidad.—Los torneos son una especie de pelea ecuestre celebrada con gran solemnidad por los no-

(1) Bula *Apost. Sedis; excommun. lat. sent. speciali modo Rom. Pont. reservata*, art. 5.º

(2) *Genesis*, cap. IX, v. 6.—*Levit.*, cap. XXIV, v. 17.—*MATH.*, cap. XXVI, v. 52.—*Apocalipsis*, cap. XIII, v. 10.

(3) C. XX, quest. 3.ª, causa 24.

(4) C. XII, dist. 81.—Cap. X, tít. I, lib. II *Decret.*

(5) C. VII, dist. 50.—Cap. VI, tít. XXXVII, lib. V *Decret.*—Cap. VI, párrafo 7.º, tít. XII, lib. V *Decret.*

(6) *Concil. Trid.*, sesión 14, cap. VII *De Reformat.*

(7) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XII, pár. 3.º

(8) Lib. III, tít. III, cap. III, art. 3.º

bles para ostentación de sus fuerzas, pericia en el manejo de las armas y de su valor á toda prueba (1).

Los torneos verificados con armas á propósito para matar, mutilar ó herir, están prohibidos bajo pena de privación de sepultura eclesiástica (2); pero si estos juegos ó diversiones se verifican con las debidas precauciones, sin que medie peligro de la vida ó herida grave, entónces no están prohibidos á los legos.

Los clérigos tienen prohibición terminante de tomar parte en los torneos (3), quedando privados de las oblações y oraciones públicas de los fieles, si mueren peleando en estos juegos; pero no de sepultura eclesiástica, siempre que hubiesen dado señales de arrepentimiento (4).

Corridas de oros y su penalidad.—San Pío V, en su const. de 1567, y otros Sumos Pontífices prohíben las corridas de toros, imponiendo la pena de excomunión contra las autoridades que las permiten, y la privación de sepultura eclesiástica á los que mueren en esta bárbara diversión.

Sin embargo, pueden permitirse, y de hecho están autorizadas en España por Gregorio XIII y Clemente VIII, bajo la condición de que se tomen las precauciones debidas por aquellos á quienes corresponde, y de que esta diversión no se verifique en días festivos.

Duelo, y su penalidad por el derecho antiguo.—La palabra *duellum* procede de las dos latinas *duorum bellum* y puede definirse, la *pelea singular verificada de mutuo acuerdo entre dos, con peligro grave de muerte ó mutilación* (5).

El duelo público ó privado está prohibido por derecho natural, porque el precepto *non occides*, comprende el homicidio llevado á efecto por autoridad privada, y el peligro próximo vo-

(1) Cap. I, tít. XIII, lib. V *Decret.*

(2) Cap. I y II, tít. XIII, lib. V *Decret.*

(3) SCHMALZGRUBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XIII, núm. 6.

(4) C. IV, quæst. 8.^a, causa 23.

(5) SCHMALZGRUBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XIV.

luntario de muerte propia ó de otros, y por esta razón se halla prohibido bajo penas graves (1).

El clérigo que entra en desafío debía ser depuesto (2) é incurría en irregularidad, si mataba ó mutilaba á otro (3), según el antiguo derecho.

Disciplina del Concilio de Trento acerca de este punto.—El Concilio de Trento impone excomunión *latæ sententiæ* á los señores temporales que conceden sitio en sus tierras para el duelo, y quedan privados de la jurisdicción y dominio en dichos lugares ó ciudades, si las han obtenido de la Iglesia, disponiendo, para el caso en que las posean en feudo, que este vuelva al señor directo (4).

Los que entraren en desafío y sus padrinos incurren en excomunión y pérdida de todos sus bienes, así como en la de infamia perpetua, debiendo ser castigados según los sagrados cánones, como homicidas, y si muriesen en el mismo desafío, sean privados de sepultura eclesiástica.

Las personas que dieren consejo en la causa de desafío, sobre el hecho ó derecho, ó persuadiesen á él por cualquier motivo ó razón, así como los expectadores, incurren en excomunión y en perpetua maldición (5).

Penas impuestas á los duelistas por Pio IV y Gregorio XIII.—Pio IV, en su const. *Ea quæ* impone además de las penas que se dejan indicadas, la de privación de beneficios é inhabilidad para obtenerlos á los clérigos, disponiendo respecto á todos los duelistas que este delito sea considerado como de lesa majestad, llevando anejas las penas de cárcel, inhabilidad para testar, etc., cuya penalidad extiende á los que de cualquier modo concurren al duelo.

(1) *Praelect. Jur. Canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 4.^a, sect. 6.^a, art. 2.^o, párrafo 741.

(2) Cap. I, tít. XIV, lib. V *Decret.*

(3) C. VIII, dist. 50.—Cap. II, tít. XIV, lib. V *Decret.*

(4) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIX *De Reformat.*

(5) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIX *De Reformat.*

El papa Gregorio XIII en su bula *Ad tollendum*, extiende, el decreto Tridentino al duelo privado, llevado á efecto mediante mútuo acuerdo, en tiempo señalado y lugar convenido aun cuando no haya padrinos ni las demás solemnidades que suelen preceder al duelo.

Constituciones de Clemente VIII y Benedicto XIV sobre la misma materia.—Clemente VIII, en su constitución *Illius vices*, confirma todas las penas señaladas contra los reos de este delito.

Benedicto XIV declaró, que la privación de sepultura eclesiástica impuesta por el Concilio de Trento contra los que mueren en el lugar del duelo, se entiende que es *latæ sententiæ*, incurriéndose en ella, aun cuando la muerte se verifique fuera del lugar en que se recibió la herida, sin que obste para ser privado de sepultura eclesiástica que se hayan dado por el delincuente señales ciertas de penitencia, ni que en su virtud haya obtenido la absolución de sus pecados y censuras.

Dice asimismo que dicha pena va aneja al duelo público ó privado (1).

Penalidad del duelo con arreglo á la bula apostolicæ Sedis.—La bula *Apostolicæ Sedis* impone excomunión *latæ sententiæ* reservada al Sumo Pontífice contra los que llevan á efecto el duelo ó simplemente provocan á él, ó lo accepan, cuya censura extiende=

a) A todos los cómplices, ó cualquiera que presta su auxilio ó favor.

b) A los que de propósito asisten al duelo.

c) A los que lo permiten ó no lo prohíben en cuanto pueden, cualquiera que sea su dignidad, aun la Real ó Imperial (2).

Sagitarios y balistarios.—El ejercicio de este arte, en guerra justa de cristianos contra cristianos, está permitido, re-

(1) Const. *Detestabilem* de 10 de Noviembre de 1752, pár. 9.º

(2) *Excommunicat. lat. sent. Rom. Pont. reservata*, art. 3.º

probándose cuando se emplea en favor de los infieles contra los católicos (1), bajo la pena de excomunión.

Delicta carnis.—Bajo esta denominación se comprenden el=rapto=estupro=fornicación=concubinato=incesto=adulterio=poligamia=sodomía, y de ellos se pasa á tratar brevemente.

Rapto, y su penalidad.—Se ha tratado ya de este delito en otro lugar de esta obra (2), y por lo tanto me limito á señalar aquí su penalidad, que puede resumirse en lo siguiente:

Es impedimento dirimente para el matrimonio entre el raptor y la robada (3) y además=

a) El raptor era castigado con la pena de esclavitud, de la cual quedaba libre pagando el precio competente (4).

b) Si la robada fuese monja, los bienes del raptor y sus cómplices se adjudicaban al monasterio de la religiosa (5).

c) El raptor seglar y sus cómplices incurrían *ipso jure* en excomunión (6) y el raptor clérigo queda depuesto (7) del estado clerical (8).

d) Incurrían en infamia y se hacen inhábiles para obtener dignidades (9).

e) El raptor queda obligado á dotar á la robada competentemente, según el prudente arbitrio del juez (10).

Estupro en su sentido lato y estricto.—La pala-

(1) Cap. únic, tít. XV, lib. V *Decret.*

(2) Libro III, tít. I, cap. VII, art. 4.º, pár. 3.º

(3) C. IV, IX y X, quæst. 2.ª, causa 36.—Cap. VII, tít. XVII, lib. V *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VI, *De Reformat.*

(4) C. III, quæst. 1.ª, causa 36.

(5) C. XXX, quæst. 1.ª, causa 27.

(6) C. I, quæst. 2.ª, causa 36.

(7) C. I y IV, quæst. 2.ª, causa 36.

(8) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VI *De Reformat.*

(9) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VI *De Reformat.*

(10) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VI *De Reformat.*

bra estupro en su sentido lato es, *la unión carnal ilícita con virgen ó viuda que viva honestamente.*

En sentido propio es, *illicita virginis defloratio, non precedente pactione conjugali* (1).

Su penalidad.—El derecho canónico impone á los reos de este delito las penas siguientes:

a) Si el estuprador era clérigo, se le deponía (2) y obligaba á dotar á la estupra (3).

b) Cuando el delincuente es lego, tiene obligación de contraer matrimonio con ella, y si el padre de ésta se opone, queda obligado á dotarla (4), ó en su defecto se halla sujeto á excomunión, castigo corporal y reclusión en un monasterio (5).

Fornicación en su sentido lato y extricto.—Este crimen y pecado, prohibido por derecho natural y divino-positivo, es, en un sentido lato, *cualquiera unión carnal fuera del matrimonio* (6).

En su sentido propio y extricto es, *la unión carnal cum meretrice* (7).

Su penalidad.—El clérigo que incurre en fornicación es castigado con pena arbitraria á juicio del superior, como en carcelación, multa, suspensión y aun deposición y privación de beneficio, si es incorregible y el crimen es notorio con escándalo (8).

Concubinato y su penalidad por derecho antiguo.—El derecho canónico considera concubinarios á las personas de diverso sexo y libres, que viven habitualmente en con-

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret. tit. XVI, pár. 2.º

(2) C. 44, quaest. 7.ª, causa 2.ª

(3) Cap. I, tit. XVI, lib. V Decret.

(4) Cap. I, tit. XVI, lib. V Decret.

(5) Cap. II, tit. XVI, lib. V Decret.

(6) C. II, párrafo 1.º, quaest. 1.ª, causa 36.

(7) C. 2.º, párrafo 1.º, quaest. 1.ª, causa 36.

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XVI, pár. 1.º

sorcio ilícito sin ánimo de casarse, siendo indiferente para el caso, que habiten ó no en la misma casa.

Los clérigos ordenados *in sacris*, reos de este delito, podían ser privados de sus oficios y beneficios (1).

Legislación tridentina respecto á los clérigos concubenarios.—El Concilio de Trento dispone respecto á los clérigos concubenarios ó que tienen á su lado mujeres sospechosas (2):

a) Que se los amoneste con monición especial para que dejen su compañía ó trato con ellas (3), y si así amonestados por el obispo no obedecieren, quedan privados *ipso facto* de la tercera parte de los frutos, obenciones, rentas de los beneficios y pensiones, que habrán de aplicarse á la fábrica de la Iglesia ú otro lugar piadoso á voluntad del obispo (4).

b) Si continuasen en su delito y no obedecieren á la segunda monición, pierden por este mero hecho (*eo ipso*) todos los frutos expresados, y habrán de ser suspendidos por el obispo, de la administración de sus beneficios cuando éste lo considere oportuno (5).

c) Si aún siguiesen en su criminal conducta, serán privados perpetuamente de los beneficios (6), pensiones y oficios eclesiásticos, quedando inhábiles para obtener otros beneficios dignidades y honores de cualquier clase, hasta que se hayan arrepentido debidamente á juicio de sus superiores (7).

d) Cuando las penas indicadas no surtieren el debido efecto; entonces serán excomulgados.

Penas que impone á los legos reos de este delito.

(1) C. 2.^o, distinct. 28.—C. 11, distinct. 32.

(2) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. III Decret., tít. 11, pár. 2.^o

(3) *Prælect. Jur. canon. in Seminar. S. Sulpit.*, part. 2.^a, sect. 2.^a, art. 3.^o pár. 4.^o, núm. 344.

(4) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIV *De Reformat.*

(5) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIV *De Reformat.*

(6) *Concil. Trid.*, sesión 21, cap. VI *De Reformat.*

(7) *Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIV *De Reformat.*

—El Concilio de Trento dispone respecto á los legos concubenarios, solteros ó casados, de cualquier estado ó condición:

a) Que habrán de ser excomulgados, si después de amonestados tres veces por el *ordinario*, no dejaren las concubinas; sin que los absuelva de la excomunión hasta que obedezcan (1).

b) El ordinario procederá severamente contra dichos concubenarios, si permaneciesen en su delito por un año con desprecio de las censuras impuestas (2).

c) Ordena en cuanto á las concubinas, que si no obedecen después de las tres moniciones, sean castigadas gravemente por el *ordinario* y se las destierre del lugar ó de la diócesis, si el ordinario lo considera conveniente, impetrando el auxilio del brazo, seglar, si fuere necesario (3).

Incesto y su penalidad en los clérigos.—Se entiende por incesto, *la unión carnal entre personas que por ser consanguíneas ó afines no pueden contraer matrimonio entre sí* (4).

Este delito supera en gravedad al adulterio (5), y el clérigo que incurra en él, es castigado con la pena de privación del beneficio y deposición, principalmente si con el incesto se comete adulterio.

Penas contra los legos incestuosos.—El lego que persevera en el delito expresado habrá de ser excomulgado (6).

Si el marido pecase con la consanguínea de su mujer ó la mujer con el consanguíneo del marido, quedan privados respectivamente de exigir el débito conyugal (7).

El que contrae á sabiendas nupcias incestuosas incurre en excomunión (8).

(1) *Concil. Trid.*, sesión 24, cap. VIII de *Reformat. matrim.*

(2) *Concil. Trid.*, sesión 24, *ibid.*

(3) *Concil. Trid.*, sesión 24, *ibid.*

(4) C. II, pár. 4.º, quæst. 1.ª, causa 36.

(5) C. XI, quæst. 7.ª, causa 32.

(6) C. IX, quæst. 2.ª, causa 35.

(7) Cap. I y IV, tít. XIII, lib. IV *Decret.*

(8) Cap. unic., tít. unic., lib. IV *Clementin.*

Sacrilégio carnal.—La unión carnal con una religiosa se castiga con la pena de excomunión, si el delincuente es lego; y con la de privación de beneficio y deposición, si es clérigo (1).

Sodomía.—Este delito excluye al delincuente lego de la comunión de los fieles hasta su arrepentimiento (2), é incurre además en excomunión; con facultad en el cónyuge inocente, si aquél es casado, para pedir el divorcio perpétuo, lo mismo que en el caso de adulterio (3).

El clérigo reo de este delito queda privado de oficio y beneficio, depuesto del orden clerical, y habrá de ser recluido en un monasterio (4).

Adulterio y su penalidad en los legos.—El cónyuge inocente puede pedir el divorcio ó separación perpétua *quoad thorum et cohabitationem* (5), y el criminal pierde la dote y las donaciones *propter nuptias*.

El cónyuge adúltero incurre en excomunión (6), y la mujer adúltera será encerrada perpétuamente en un monasterio, si su marido no quiere vivir con ella (7).

Penas contra los clérigos reos de este delito.—El clérigo adúltero ha de ser depuesto, privado de oficio y beneficio y encerrado perpétuamente en un monasterio (8).

Si se ha hecho sospechoso de este delito, ó ha quedado difamado, aun cuando no esté convicto, ha lugar á la purificación (*purgatio*) canónica, y si no consigue justificarse, quedará suspenso de su oficio (9).

(1) C. VI, y XXVIII, quæst. 1.ª, causa 27.

(2) Cap. IV, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus ecclæ univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XVI, pár. 4.º

(4) Cap. IV, tit. XXXI, lib. V *Decret.*—Const. *Horrendum*, dada por S. Pio V en 3 de Setiembre de 1568

(5) Cap. V, tit. XXXVIII, lib. I *Decret.*—Cap. IV y V, tit. XIX, lib. IV *Decret.*

(6) Cap. VI, tit. XVI, lib. V *Decret.*

(7) Cap. XIX, tit. XXXII, lib. III *Decret.*

(8) C. X y XI, dist. 81.

(9) Cap. V, tit. XVI, lib. V *Decret.*

El marido, madre, hija ó hermana no incurren en la censura del cánón, si hieren al clérigo adúltero sorprendido en el acto de cometer este delito.

Lenocinium.—Es un delito público, que consiste en prostituir ó permitir la prostitucion de las hijas vírgenes, esposas ó mujeres legítimas, ú otras hembras, y se halla castigado con penas severas (1).

Poligamia.—Se trató de este delito en otro lugar de esta obra (2), y por lo mismo me limito á señalar su penalidad.

La persona que ha contraído á sabiendas matrimonio con mujer casada, debía hacer penitencia pública por siete años, ayunando cuarenta dias á pan y agua (3); pero esta pena no está en uso, y por lo tanto queda al arbitrio prudente del juez eclesiástico señalar el castigo de este delito.

Delitos contra los bienes temporales del prójimo.—Estos delitos son—rapña—hurto—usura—*crimen falsi*, etcétera, y de ellos se pasa á tratar brevemente.

Rapña, y su penalidad.—Esta palabra suele tomarse en un sentido lato, por la usurpación manifiesta ú oculta de una cosa temporal (4), ó por el robo público y violento de una cosa.

En su sentido propio, como aquí se toma, es *la usurpación violenta é injusta de una cosa ajena, mueble ó semoviente* (5).

Este delito se castiga con la pena de *excomunión*, y si el delincuente muere en el acto de cometer el delito ó no restituye ántes de su muerte, queda privado=

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V. *Decret.*, tit. XVI, pár. 3.º, número 90.

(2) Lib. III, tit. I cap. VII, art. 2.º

(3) Cap. II, tit. IV, lib. IV *Decret.*

(4) C. X, quest. 4.ª, causa 14.—C. VI, quest. 5.ª, causa 14.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tit. XVII, pár. 2.º, número 56.

a) De sepultura eclesiástica, sufragios de la Iglesia y oraciones públicas de los fieles (1).

b) No goza del asilo eclesiástico, y por lo mismo puede ser extraído á viva fuerza de las iglesias (2).

c) Los que despojan de sus bienes á los cristianos náufragos, incurrén en excomunión (3).

Incendarios y su penalidad.—Se entiende por incendiarios, *las personas que por sí ó por otros incendian con ánimo deliberado las poblaciones, predios, casas, edificios ú otros bienes ajenos, como las mieses, etc., por odio, venganza, ó con el fin de obtener algún provecho ó lucro.*

Los incendiarios de iglesias ó lugares sagrados y religiosos incurrén en *excomunión* (4).

Violadores de las iglesias y su penalidad.—Se entiende por violadores de las iglesias: *las personas que destruyen, deterioran violentamente ó despojan las iglesias y otros lugares sagrados ó religiosos.*

Este delito se halla castigado con la censura de *excomunión* (5).

Etimología de la palabra hurto y su definición.—Se cuestiona entre los juriconsultos acerca de la etimología de esta palabra, diciendo unos que procede de *furvo*, que significa negro, porque el hurto se comete ocultamente y en la oscuridad.

Otros dicen que procede de *fraude* ó *á ferendo* ó *auferendo*, etcétera.

Se entiende por hurto, *la usurpación oculta de una cosa ajena contra la voluntad legítima de su dueño.*

Su penalidad.—El hurto está prohibido por derecho di-

(1) Cap. II, tit. XVII, lib. V *Decret.*—Cap. II, tit. XVIII, lib. V *Decret.*

(2) C. VI, quæst. 4.^a, causa 17.—Cap. VI, tit. XLIX, lib. III *Decret.*

(3) Cap. III, tit. XVII, lib. V *Decret.*

(4) C. CVII, quæst. 3.^a, causa 11.—C. XXXI y sig., quæst. 8.^a, causa 23.

(5) C. CVII, quæst. 3.^a, causa 11.—C. V y XXI, quæst. 4.^a, causa 17.—Cap. XXII, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

vino, natural y positivo (1), y las penas impuestas por la Iglesia contra los reos de este delito son las siguientes:

a) El ladrón notorio ó condenado por hurto, incurre en *infamia* (2).

b) Se hace irregular, y en su virtud no puede ser promovido á los órdenes ni ejercer los recibidos, según se desprende de varias disposiciones del derecho (3).

c) El clérigo reo de hurto notable ó reincidente en este delito, debe ser depuesto del orden y oficio (4), y sinó se arrepiente, se le impone la pena de excomunión (5).

Plagio y su penalidad.—Este delito se comete=

Contra el hombre libre, ocultándolo ó reduciéndolo á prisión—por la compra ó venta—por donación—ó dándole en dote.

Contra el esclavo cuando se le oculta, reduce á prisión ó se le persuade á que huya de la casa de su amo—recibiendo al esclavo fugitivo con las cosas que ha hurtado y vendiéndolo ó comprándolo.

Este delito es castigado con pena inferior á la de muerte.

Peculado.—El delito de *peculado* consiste en el hurto de dinero, ó cosas pertenecientes al Erario público ó al Fisco.

Abigeatus.—Es un delito extraordinario, que consiste en el hurto de los animales que se hallan pastando en el campo.

Significado de la palabra usura y su definición.—

El nombre *usuræ* (usura) procede de *utendo seu usu* (6), y significa el bueno ó mal uso de una cosa, pero se toma generalmente en mal sentido, ó sea por el mal uso de una cosa.

(1) *Exod.*, cap. XX, v. 15.—*Deuteron.*, cap. V, v. 19.

(2) C. XVII, quaest. 1.^a, causa 6.^a

(3) C. V, dist. 51.—C. XXXIX, quaest. 7.^a, causa 2.^a—*Reg. jur.* 87, tít. XII, lib. V *sex. Decret.*

(4) C. XII, dist. 81.

(5) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XVIII pár. 2.^o, número 91.

(6) SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, tract VI, disp. 2.^a, disert. 2.^a, cap. II, artículo 6.^o, pár. 2.^o—BOUVIER: *Inst. Theolog. tract. de contract.*, art. 2.^o

Se llama por los griegos *τοκος* como por antífrasis, porque mediante ella, el dinero de sí estéril produce dinero.

Se entiende por usura, *el lucro que proviene inmediatamente del mútuo ó en virtud del mútuo.*

Se dice en primer lugar *lucro*, con cuya palabra se expresa el dinero y todo lo que es estimable en precio, lo mismo que cualquier gravámen impuesto al mutuario; así que=

a) El exigir lo que se debe de justicia por otro concepto, no es objeto de usura y, por lo mismo, el que dá á una persona dinero para obtener su amistad, á fin de que pague la deuda, vuelva el depósito ó cese en la vejación injusta, no es reo de usura, porque no reporta lucro.

b) Tampoco será reo de usura el que exija una cosa que no es estimable en precio, como si uno presta dinero á un sacerdote bajo la condición de que celebre cierto número de misas, porque las misas no son estimables en precio, ni pueden reportar lucro, y el que obrare de este modo sólo será reo de simonía.

Se dice que *proviene del mútuo*, porque la usura tiene propiamente su fundamento en sólo el mútuo.

Se dice que *proviene inmediatamente*, etc., porque todos convienen en que no es usura percibir alguna cosa con motivo del mútuo, siempre que no proceda del mútuo ó en virtud de sólo el mútuo.

Explicación de los términos usados en este concepto.—Se entiende por mútuo, *un contrato por el cual se transmite á otro el dominio de una cosa que se consume primo usu con obligación de devolver otra cosa semejante en la misma especie y calidad después de algún tiempo.*

Este contrato es el fundamento de la usura: así que=

a) Lo dado en mútuo se llama *suerte ó capital*.

b) Lo recibido sobre el capital se llama *usura (fœnus)*. En este supuesto: si M. entrega á D. mil reales, con la condición de que le abone cien reales anuales hasta que le devuelva el capital, la usura ó lucro son los cien reales y la suerte ó capital los mil reales.

- c) Se llama *mutuante* al que da el dinero.
d) Se denomina *mutuario* al que lo recibe.

Especies de usura.—La usura puede ser=

Interna, que consiste únicamente en la intención de recibir lucro del mútuo.

Externa, que consiste en la intención dada á conocer exteriormente de recibir lucro del mútuo.

La usura externa puede ser=

Explicita ó *formal*, que es la expresa convención de pagarla.

Implicita ó *paliada*, que tiene lugar, cuando el mutuante no estipula lucro alguno, pero da desde luego á conocer que espera algún beneficio del mútuo.

Real, que se percibe mediante pacto explícito ó implícito.

Mental, la que se intenta, desea y se percibe como deuda del mútuo, sin que haya mediado pacto explícito ó implícito.

Meramente mental, la que dada á conocer exteriormente como la mental, se intenta y desea, sin que de hecho se perciba.

Su prohibición y penalidad.—La Iglesia en conformidad con las prescripciones del derecho divino (1). ha prohibido siempre la usura (2) bajo las penas de suspensión y deposición respecto á los clérigos, y las de excomunión y privación de sepultura eclesiástica en cuanto á los legos, prohibiéndose además recibir sus oblacones al altar.

Causas que eximen de incurrir en ella.—Existen causas por las que puede recibirse alguna cosa sobre la cantidad ó capital prestado, mediante un título extrínseco (3), y son las siguientes:

(1) *Deuteron.*, cap. XXIII, v. 19 — *Psalm.* 54, v. 10 y sig. — *Ezechiel*, capítulo XVIII v. 10 y sig. — *Luc.*, cap. VI, v. 35.

(2) *Canon. Apost.* 43. — C. II. dist. 47. — C. I y sig.: *quest.* 3.^a, causa 14. — Cap. únic., tít. V, lib. V *Decret.* — Cap. III, IV y XI, tít. XIX, lib. V *Decret.*

(3) SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, tract. 6.^o, disp. 2.^a, dissert. 2.^a, cap. 2.^o, art. 6.^o, pár. 3.^o

Danimum emergens, con cuyas palabras se significa el daño que resulta en sus bienes é intereses al acreedor por haber prestado su dinero, como en el caso de entregar á otro la cantidad destinada para reparar sus casas ó comprar trigo en la época de abundancia; lo cual dá por resultado que las casas se deterioren ó arruinen, y que se vea obligado á comprar trigo á mayor precio (1), en cuyo caso puede exigirse alguna cosa sobre el capital (2), siempre que se observen las condiciones siguientes:

a) Que el daño resulte realmente de la privación del dinero dado en mútuo.

b) Que el mutuante lo ponga en conocimiento del mutuario, para que éste vea si le conviene ó nó recibir el dinero con esta carga.

c) Que la cantidad recibida en este concepto sobre el capital sea igual al daño ó peligro del daño.

d) Que el pacto puede versar sobre el daño ó peligro de daño, con obligación en el mutuante de dejar al arbitrio del mutuario pactar sobre el daño ó su peligro, etc. (3).

Lucrum cessans.—Se expresa con estas palabras el lucro de que se priva la persona prestando el capital destinado para negociar con él, en cuyo caso puede exigirse un premio sobre el capital, con tal que se observen las condiciones siguientes:

a) Que la esperanza de lucro de que se priva el mutuante, sea cierta ó muy probable (4).

b) Que la cantidad prestada sea causa *lucris cessantis*.

(1) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V Decret., tit. XIX, pár. 3.º, núm. 93.

(2) SANTO TOMÁS: *Summa Theolog.*, secunda secundæ, quæst. 78, art. 2.º *ad primum*.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 113 y sig.

(4) S. ALFONSO DE LIGORIO: *Theolog. mor*, lib. III, tract. 5.º, cap. III, dub. 7.º

c) Que el mutuante haga saber al mutuario el lucro de que se priva y la compensación que ha de satisfacerle.

d) Que la compensación pactada guarde proporción con el lucro de que se priva, etc.

Pena convencional.—Que consiste en pactar el pago de una cantidad sobre el capital, si el mutuario no lo devuelve á su tiempo y este pacto es lícito (1)=

a) Si la negligencia del mutuario es culpable ó notable.

b) Si es moderada y proporcionada á la culpa.

c) Si el mutuante no lleva ánimo de lucrar por este medio (2).

Peligro de perder el capital, cuya causa se resuelve en la primera, puesto que el préstamo se hace en malas condiciones (3), y en su consecuencia es lícito este pacto en el que se exige alguna cosa sobre el capital=

a) Si el peligro es verdadero y extraordinario.

b) Si el mutuante no tiene obligación de caridad á prestarlo al mutuario.

c) Y si éste conviene en dicha condición (4).

Crimen falsi y sus especies.—Se entiende por este delito, *la dolosa corrupción de la verdad en perjuicio de otro*.

Este delito puede ser=verbal—escrito—y de hecho.

Su penalidad.—El *crimen falsi* es un delito gravísimo que lleva anejas distintas penas según la calidad de las personas ó cosas sobre que versa; así que=

a) Los falsificadores de letras apostólicas y sus fautores incurrían en excomunión (5) reservada de un modo especial al Sumo Pontífice (6).

(1) S. ALFONSO DE LIGORIO: *Theolog. mor.*, lib. III, tract. 5.º, cap. III, dub. 7.º, núm. 766.

(2) SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, trat. 6.º, disp. 2.º, disert. 2.ª, cap. II, artículo 6.º.

(3) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, ibid., núm. 95.

(4) SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, ibid.

(5) Cap. VII, tít. XX, lib. V *Decret.*

(6) Bula *Apost. Sedis*, art. 9.º, de las excomuniones reservadas al Papa *speciali modo*.

b) El testigo que á sabiendas dice falso testimonio ú oculta la verdad en juicio (1) incurre en infamia (2), y si es clérigo, habrá de ser depuesto y encerrado en un monasterio para que haga allí penitencia (3).

c) El abogado que abandonando la causa de su cliente, deja de hacer las pruebas, ó admite pruebas y excepciones falsas de la parte contraria, está obligado á reparar los daños y perjuicios causados por su culpa (4).

d) El juez eclesiástico, que dicta sentencia injusta de propósito y con dolo, incurre en suspensión *à divinis*, y en irregularidad si prescinde de aquella (5), quedando obligado á satisfacer los daños y perjuicios causados.

e) La suposición de parto—venta de una misma cosa á distintas personas—alteración de pesos y medidas—adulteración de comestibles y bebidas—mutación dolosa de mojonos, de términos y límites de los campos—falsificadores de moneda, etc., se hallan comprendidos *in crimen falsi*, cuya penalidad se halla consignada en las leyes civiles y canónicas (6).

CAPITULO VI.

DELITOS PROPIOS DE LOS CLÉRIGOS.

Se da este nombre á los delitos que se oponen al estado clerical y á las obligaciones propias de los clérigos, y como de ellos se ha tratado en distintos capítulos de esta obra, me limito á reseñar los siguientes:

(1) Cap. I, tít. XX, lib. V *Decret.*

(2) C. IX, quest. 5.^a, causa 3.^a

(3) C. VII, dist. 50.

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XX, número 13 y 22.

(5) Cap. I, tít. XIV, lib. II *sex. Decret.*

(6) SCHMALZGRUEBER: *Jus Eccles. univ.* in lib. V *Decret.*, tít. XX, número 45 y sig.

Apostasia del clericato y monacato (1).

Delitos en la administración de sacramentos (2).

Caza y su penalidad.—Los clérigos tienen prohibición de dedicarse al ejercicio de la caza (3) clamorosa (4), bajo pena de excomunión y suspensión, debiendo preceder para imponerla la correspondiente monición, según se desprende de las disposiciones canónicas (5); pero dicha prohibición y su penalidad se halla abrogada en muchos países por costumbre en contrario.

Clérigos percusores y sus distintas clases.—Se entiende por clérigos percusores, *los simples tonsurados y los ordenados de menores ó in sacris que maltratan á otros clérigos ó legos.*

Estos percusores pueden ser:

Malefici, y son los que maltratan de obra.

Maledici, y son los que maltratan de palabra.

Su penalidad.—Se prohíbe á los clérigos, y en particular á los ordenados *in sacris*, castigar por sí mismos á los legos aún cuando sean delincuentes (6), porque esto repugna á la modestia clerical y á la mansedumbre propia de su estado.

El clérigo que golpea ilícitamente á otro, aún cuando sea lego, ha de ser corregido según el prudente arbitrio del superior; y si no se enmienda, se le depone (7).

Los clérigos que maltratan á otro de palabra, son reos de delito mayor ó menor según la gravedad de la ofensa y calidad de la persona variando en su consecuencia la pena que se les impone (8).

(1) Véase el cap. II de este título.

(2) Véase el cap. IV de este título.

(3) C. I, dist. 34.—C. VIII y sig., dist. 86.—Cap. I y II, tít. XXIV, lib. V *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 24, cap. XII de *Reformat.*

(4) SCHMALZGRUEBER: *Jus. eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXIV.

(5) C. I, dist. 34.—C. XXI, quæst. 2.^a causa 12.

(6) C. I y VII, dist. 45.—C. XXV, dist. 86.—Cap. I, tít. XXV, lib. V *Decret.*

(7) Cap. I, tít. XXV, lib. V *Decret.*

(8) SCHMALZGRUEBER: *Jus. eccles. univ.*, in lib. V *Decret.*, tít. XXVI.

Excepciones.—Los clérigos pueden castigar á los que faltan á su deber, en los casos siguientes:

Los maestros pueden emplear este correctivo en caso necesario, siempre que sea moderado y se halle en uso (1).

b) Los sacerdotes ancianos y otros clérigos pueden castigar levemente á los jóvenes ordenados de menores, cuando faltan á la compostura debida, mientras se celebran los divinos oficios (2).

c) Los prelados eclesiásticos seculares ó regulares tienen derecho á castigar moderadamente á los clérigos ó religiosos, súbditos suyos (3).

Excesos de los obispos.—Los obispos y los superiores á ellos pueden delinquir contra sus súbditos, de varios modos, que pueden resumirse en lo siguiente:

1. Si los gravan con exacciones indebidas ó cargas nuevas.
2. Si los vejan con censuras y otras penas indebidas, ó los tratan malamente, haciéndolos objeto de desprecio, aun para los legos (4).
3. Cuando limitan ó privan á sus súbditos de los derechos, inmunidades y jurisdicción que les compete por privilegio ó costumbre legítima.
4. Cuando les privan de las iglesias sujetas á los mismos (5).
5. Si aplican en provecho suyo las iglesias ó beneficios que les corresponde proveer (6).
6. Si confieren los beneficios á sujetos indignos (7).
7. Si son causa directa ó indirecta de homicidio, quedan

(1) C. XIX, dist. 1.^a, *De poenitentia* — Cap. I, X y LIV, pár. 2.^o, título XXXIX, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XVI y LIV, tit. XXXIX, lib. V *Decret.*

(3) C. VIII, dist. 45.

(4) Cap. I, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(5) Cap. II, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(6) Cap. III, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(7) Cap. XI, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

irregulares una vez cometido y se los priva del oficio episcopal y sacerdotal, así como de la administración de su diócesis (1).

8. Cuando obligan á los confesores súbditos suyos á descubrir al pecador ó el pecado oído en confesión (2).

9. Cuando mandan ó prohíben á sus súbditos privilegiados alguna cosa contra el tenor de sus privilegios (3).

Excesos de los prelados inferiores.—Los prelados inferiores á los obispos pueden excederse en el ejercicio de su autoridad—

a) Si unen por autoridad propia iglesias sujetas á su jurisdicción (4).

b) Si se atribuyen como derecho suyo la concesión de indulgencias é imposición de penitencias públicas con solemnidad, y el conocimiento de las causas matrimoniales, á ménos que medie privilegio ó costumbre en contrario (5).

Excesos de los súbditos.—Los súbditos faltan á los deberes para con sus prelados:

1.º Si no observan las festividades establecidas por el obispo.

2.º Si no observan las censuras promulgadas por él mismo, cuyo cumplimiento obliga también á los regulares exentos (6).

3.º Si niegan la obediencia á los mismos ó los demandan ante los jueces seculares, cuyo delito lleva aneja la deposición y privación de oficio y beneficio (7).

4.º Si los beneficiados mudan para sí en el beneficio la causa de posesión, como si el vicario se arroga el título de rector prin-

(1) Cap. X, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XIII, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

(3) Cap. V, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

(4) Cap. VIII, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

(5) Cap. XII, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

(6) Cap. XVIII, tít. XXXI, lib. V *Decret.*—*Concil. Trid.*, sesión 25, capítulo XII *De Regular.*

(7) Cap. XV, tít. XXXI, lib. V *Decret.*

cial, en cuyo caso habrá de ser removido de su oficio, como perjurio é infame (1).

5.º Si muchos clérigos sin consentimiento de su prelado establecen para sí el sello común y derechos de corporación (2).

6.º Si quebrantan la clausura entrando en los monasterios de religiosas, sin la competente licencia, en cuyo caso incurren en exco nunció reservada al Sumo Pontífice (3).

Vida y honestidad de los clérigos —De esta materia se ha tratado en distintos lugares de esta obra, y señaladamente en el cap. VII, tit. VI, lib. II.—Cap. VI, tit. I, lib. III; así que me limito á las indicaciones siguientes =

a) Es necesario que medie recta intención en los aspirantes á órdenes sin excluir la tonsura.

b) Tienen obligación de cumplir los deberes propios de su estado, y huir de toda distracción ménos honesta.

c) Si uno afirma que es clérigo, tiene el deber de probarlo por medio de las letras formadas de su obispo, por el libro de los ordenados, reservado en el archivo ó cancelaría episcopal; por testimonio auténtico ante notario, por confesion de la parte contraria, por testimonio de un testigo de mayor excepción, por fama ó juicio público, por el uso constante de tonsura y hábito clerical, ó por otras pruebas ó indicios.

Cohabitación de los clérigos con mujeres.—También se habló de esto en el cap. VII, tit. VI, lib. II de esta obra; pero la importancia de este punto me mueve á consignar lo siguiente:

Es regla general que los clérigos no pueden lícitamente vivir en una misma casa con mujeres, en quienes pueda haber sospecha de incontinencia (4), porque su trato provoca á la lascivia (5), como dice S. Jerónimo.

(1) Cap. VI, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(2) Cap. XIV, tit. XXXI, lib. V *Decret.*

(3) Bula *Apost. Sedis, excommunicat. lat. sent. Rom. Pont. reservata*, art. 6.º

(4) C. XVI, dist. 32.—C. XXIII y sig., dist. 81.—*Concil. Trid.*, sesión 25, cap. XIV *De Reformat.*

(5) C. XVII, dist. 32.

Casos en que es lícita.—Esto no obstante, los clérigos pueden vivir con personas de otro sexo, que alejen todo peligro y sospecha de incontinencia, hallándose en este caso:

a) Las personas parientes en primero ó segundo grado de consanguinidad, como madre, abuela, hermana, tía, sobrina, etc. (1).

b) Las personas de otro sexo, que son de la familia de los parientes con quienes viven, como criadas ó sirvientas, etc. (2).

c) Las personas extrañas de edad avanzada y buena fama en quienes no haya sospecha de incontinencia (3).

d) Las personas en primer grado de afinidad y aún en segundo grado, siempre que no medie peligro ni sospecha de incontinencia.

Observación.—Se entiende que los clérigos pueden cohabitar con personas de otro sexo en los casos indicados, siempre que no medie peligro de incontinencia.

Si dichas disposiciones se extienden á los obispos.—Las reglas indicadas tienen aplicación á los obispos y otros prelados en cuanto á las personas parientes en primero y segundo grado de consanguinidad y las otras personas de su familia; puesto que no existe disposición canónica general que lo prohíba, si bien habrá de procederse en esta materia con más exquisita cautela.

Penas contra los clérigos concubenarios (4).

Delitos por abuso en el sacramento de la penitencia.—Estos delitos son:

La infracción del sigilo sacramental.

Solicitud *ad turpia*.

Absolución del cómplice en pecado torpe.

(1) C. XVI, dist. 32.—C. XXVII y XXXI, dist. 81.—Cap. IX, tit. II, lib. III *Decret.*

(2) C. XXVII, dist. 81.

(3) C. XVI, dist. 32.

(4) Véase el capítulo V de este título.

Sigilo sacramental y penas contra el confesor que lo quebranta.—Se entiende por sigilo sacramental, *la obligación de guardar secreto y no revelar los pecados conocidos únicamente por la confesión sacramental, á no mediar licencia expresa del penitente.*

El confesor que falta al sigilo sacramental comete un gravísimo delito, y por esta razón se halla penado con la deposición de todo oficio sacerdotal.

En la antigua disciplina se le prohibía además tener mansión estable, debiendo en su consecuencia peregrinar perpetuamente (1); pero los inconvenientes anejos á este género de vida, que cedía en oprobio del orden eclesiástico, fueron la causa de que esta disposición penal se modificase, quedando el reo de este delito, sujeto á penitencia perpetua y clausura en un monasterio (2).

Solicitación ad turpia, y su penalidad.—Se entiende por este delito, *la provocación ad res venereas por el confesor.*

Este pecado es gravísimo, y por lo mismo (3) es digno de una grave pena; así que Benedicto XIV ordena á los inquisidores y ordinarios de los lugares, que procedan contra los reos de este gravísimo delito imponiéndoles las penas debidas (4).

El confesor que comete este delito=

a) Queda perpétuamente inhabilitado para la celebración del santo sacrificio de la Misa (5).

b) Incurre en suspensión de oficio y privación de beneficios.

Estas penas no se llevan á efecto sinó mediante (6) sentencia judicial (7).

(1) C. II, dist. 6^a de penitentia.

(2) Cp. XII, tit. XXXVIII, lib. V Decret.

(3) SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, tract. 10, disput. 1.^a, cap. III. art. IV, número 399.

(4) Const. *Sacramentum penitentiae*, del año 1741.

(5) BENEDICTO XIV: Decreto *In generali congregatione* de 5 de Agosto del año de 1745.

(6) Véase el apéndice núm. II.

(7) SCAVINI: *Theolog. mor. univ.*, ibid.

Obligación de denunciar al reo de este delito.—

Las personas solicitadas *ad turpia* de palabra, por escrito, signos ó gestos, etc., (1) en el acto de la confesión sacramental—antes ó inmediatamente después de la confesión—con ocasión ó pretexto de la confesión—*extra occasionem confessionis* en el confesionario ú otro lugar destinado ó electo para oír confesiones tienen obligación de denunciar dentro de un mes á los confesores ó sacerdotes que les hubieren solicitado *ad turpia* de uno de los modos indicados, bajo la censura de excomunión *latæ sententiæ* no reservada (2).

Falsa denuncia de solicitación *ad turpia* y su penalidad.—El Sumo Pontífice Benedicto XIV dice, que personas perversas, llevadas de odio, ira ú otra causa indigna, denuncian falsamente á inocentes confesores de haber solicitado *ad turpia*, sin temor al tremendo juicio de Dios y con desprecio de la autoridad de la Iglesia.

Ordena (3) á fin de corregir esta execrable audacia y detestable crimen, que ningún sacerdote, sea cual fuere su dignidad, pueda en virtud de ningún privilegio absolver de este enorme pecado, que desde luego queda reservado á la Santa Sede, á ménos que el criminal se halle en el artículo de la muerte.

Pío IX, en su decreto de 27 de Junio de 1866, expresa que este delito se ha de tener como exceptuado de las facultades otorgadas por concesión apostólica á los obispos y ordinarios de los lugares; de manera que permanece reservado á la Santa Sede, y este caso (4), lo mismo que el otro referente á los que reciben dones de los *regulares* de ambos sexos en cantidad de consideración, son los únicos sin censura, que se hallan reserva-

(1) BENEDICTO XIV: Const. *Sacramentum penitentię* de 1741.

(2) Bula *Apostolicę Sedis, excommunicat. lat. sent. nemini reservata*, art. 4.º

(3) Const. *Sacramentum penitentię* del año 1741.

(4) *Acta iis decrepta, que apud Sanctam Sedem geruntur*, tomo II, pág. 673.

dos al Sumo Pontífice, según se deja dicho en otro lugar de esta obra.

Absolución del cómplice *in peccato turpi*.—Benedicto XIV prohíbe al confesor, sea cual fuere su dignidad, absolver á su cómplice en pecado torpe, bajo pena de excomunión reservada á la Santa Sede, y declara nula é irrita dicha absolución.

De esta su disposición exceptúa únicamente el caso de extrema necesidad, ó sea el artículo de la muerte, pudiendo entonces, sin incurrir en censura, absolverlo, siempre que no haya otro sacerdote (1).

La bula *Apostolicæ Sedis* impone la censura de excomunión, reservada de un modo especial al Sumo Pontífice, á los que absuelven á su cómplice en pecado torpe, aunque sea en el artículo de la muerte, siempre que otro sacerdote, aun cuando no esté aprobado para confesar, pueda oír la confesión del moribundo sin que de ello resulte infamia y escándalo grave (2).



(1) Const. *Sacramentum penitentiae* y Const. *Apostolici muneris* de 1745.

(2) *Excommunicat. lat. sent., speciali modo Rom. Pont. reservata*, art. 10.

APÉNDICES



NÚMERO 1.º

Reducción de fiestas en España.

BREVE DE 2 DE MAYO DE 1867 Y R. O. DE 26 DE JUNIO
DE 1867.

Habiendo suplicado muchas veces el gobierno español á nuestro santísimo señor el papa Pío IX, que para bien del comercio, fomento de las artes y provecho de la agricultura, disminuyese el número de los días festivos; su Santidad, teniendo presente la sincera piedad y ardiente amor de aquella nación á la fé católica, dilató acoger las referidas preces hasta que de tal modo se proveyese á las necesidades que expuso dicho gobierno, que al propio tiempo se atendiese á la fé y piedad del pueblo. Así, pues, el mismo santísimo Señor mandó que esta reiterada petición fuese sometida al exámen de la congregación de sagrados Ritos.

Por lo que, después de oída una relación fiel sobre todo ello del infrascrito secretario de la misma congregación, su Santidad, pesada maduramente la importancia de las razones, pedido el parecer de algunos obispos del reino de España, y no mudando la ley relativa á la observancia de los otros días festivos, se ha dignado disponer lo siguiente:

Primero: que queda derogado el precepto de oír misa los días de fiesta de segundo órden, llamados vulgarmente *días de misa*, en los cuales, sin embargo, era permitido trabajar en obras serviles.

Segundo: que quede derogado el precepto que mandaba á los fieles oír misa y abstenerse de obras serviles el lunes de Pascua como también el lunes de Pentecostés y el día que sigue inmediatamente á la Natividad de Jesucristo.

Tercero: que tenga lugar la misma derogación en las fiestas de la Natividad de la Madre de Dios, y de S. Juan Bautista, la celebración de las cuales fiestas deberá trasladarse á la dominica próxima siguiente, que no esté impedida por fiesta

doble de primera clase, con una sola misa solemne, como se acostumbra en las votivas de las mismas fiestas.

Cuarto: que en cada diócesis haya un solo patrono principal, *que habrá de ser designado por la Santa Sede*, quedando vigente el precepto de oír misa y de abstenerse de obras serviles.

Quinto: que las fiestas de los demás patronos y de otros santos que en una ó otra diócesis por privilegio especial se observan hasta ahora bajo ambos preceptos, puedan trasladarse con su oficio y misa á la primera dominica siguiente libre que no sea privilegiada y en que no ocurre una doble de primera ó segunda clase. Y será de cargo de los obispos exponer á la Santa Sede las dudas, si ocurren algunas, sobre las fiestas abrogadas en este artículo; y podrán indicar libremente los motivos para conservar una ú otra de dichas fiestas.

Que se entienda remitida por dispensación de la benignidad apostólica la obligación de ayunar en las vigiliás de las fiestas, que por este indulto quedan abrogadas «siempre que el ayuno no esté prescrito por otra parte, ó por razón de la cuaresma ó de las cuatro témporas.» Pero su Santidad mandó que el dicho precepto del ayuno, que existía anteriormente en las vigiliás abrogadas ahora por el presente indulto, se traslade á todos los viernes y sábados del sagrado adviento.

Mas por cuanto Su Santidad al querer proveer á la conciencia de los pueblos y atender á la indigencia de aquellos que comen el pan con el sudor de su rostro, no ha tenido intención de disminuir la veneración de los santos y la saludable penitencia de los cristianos; ha mandado por tanto que los oficios y misas de los santos y de las solemnidades, tanto en las fiestas abrogadas como en sus vigiliás, se conserven y celebren como ántes en todas las iglesias.

Su Santidad abriga la esperanza de que el devotísimo pueblo español hará uso de esta concesión apostólica, la cual declaró deber observarse desde el día primero del año próximo de 1868, con tal espíritu, que se esmerará en santificar con mayor fervor y piedad los demás días festivos, que han de permanecer bajo la observancia del precepto.

REAL ÓRDEN DE 26 DE JUNIO DE 1867.

Al ordenar el gobierno de S. M. la publicación del adjunto decreto pontificio sobre reducción de días festivos en estos reinos, ha consignado el debido testimonio de su acatamiento y respeto, inculcando al propio tiempo á las autoridades y á todos en general, el puntual cumplimiento de cuanto contiene.

Pero todavía, al circularlo á los prelados diocesanos, no era posible dejar de llamar de un modo especial la atención de autoridades y particulares sobre el motivado deseo y fundada esperanza de Su Santidad, de que las fiestas que quedan vigentes se observen por lo mismo con mayor rigor y fervor religioso.

Tan justa esperanza y solicitud, sin embargo, serán efímeras si, como es fácil y de desear, no se concierta eficaz y convenientemente la acción combinada de la

autoridad eclesiástica y de la civil, y á ello se encamina la presente circular, en armonía con la que á su vez se publica en el mismo propósito por el ministerio de la Gobernación y otros ministerios.

No tiene por objeto ciertamente, y lo contrario sería reprehensible temeridad, excitar al episcopado á desplegar en este punto el celo evangélico, que nunca omite, en plausible cumplimiento de su alta misión apostólica, sino para que sepa una vez más que en este religioso empeño puede tener por cierta, como en todo caso análogo, la eficaz y debida cooperación del gobierno y de sus autoridades; y para que así mismo sepan los súbditos que nada omitirán éstas ni aquél, á fin de que los saludables preceptos de la Iglesia sean acatados. No puede ser, ni debe, que cuando las diversas comuniones cristianas observan tan insignemente, como es sabido, áun esas mismas fiestas, y algunas comuniones bíblicas las de su rito, no aventaje á todas en este punto la comunión católica, tanto como sobre todas se elevan la suprema unidad y la exclusiva verdad y pureza de su dogma. Y si en ello pudiera haber negligencia más ó menos vituperable en los gobernados, es menester que no la haya, sino saludable energía de parte de las autoridades.

Y así se realizará ciertamente si auxiliado el notorio fervor religioso del pueblo español por el reconocimiento y siempre acreditado celo apostólico y persistente inculcación de sus párrocos y prelados diocesanos, estos y aquellos imparten oportunamente, y como consagrados lo harán hacerlo si por desgracia en algún caso fuere necesario, el auxilio laudable de la autoridad secular.

Así por el influjo combinado y permanente de una y otra potestad, predomina en los ánimos la idea fija de que las solemnidades de la Iglesia se han instituido para ser como deben respetadas y guardadas; y de que no pueden dejar de serlo impunemente áun en el orden administrativo, supuesta la resolución del gobierno.

Prevalecerán también como ideas prácticas y reglas de aplicación, que en los casos de verdadera necesidad, si esta es particular, deben los interesados solicitar y obtener la licencia de una y otra autoridad; si es pública, pero no ordinaria ó periódica, la iniciativa es de las mismas autoridades diocesana y provincial; si la necesidad pública, en fin, es ordinaria ó periódica y más ó menos general, cual sucede en las épocas de recolección, sementera ó vendimia en países agrícolas, las autoridades municipal y parroquial, puestas de acuerdo, son las que deben recurrir con la debida anticipación al diocesano para la dispensa ó traslación de días festivos que esté en sus atribuciones; y su resolución publicada á tiempo y en forma por edicto ó bando de buen gobierno prevendrá prudentemente el escándalo y la represión.

Podrá ser todavía que en algún caso haya que requerir el concurso y autoridad áun del gobierno supremo; nada será más digno de su deber, y ninguna reclamación justa y fundada dejará de ser convenientemente acogida. Que quieran las autoridades, y querrán los súbditos: que las autoridades locales, municipal y parroquial, expliquen y constantemente sostengan la debida unidad de acción y armonía.

nía, y la represión será innecesaria: que donde por desgracia, así no se realice, cada una de dichas autoridades mire como un deber inexcusable el recurrir á la suya superior inmediata, como esta en su caso al gobierno supremo por el ministerio correspondiente: que los párrocos, arciprestes y vicarios en sus casos respectivos, tengan en este punto reglas fijas y adecuadas á que atenerse, y el alto fin de la Iglesia, como el católico propósito de S. M. y la esperanza y voluntad pontificia tan solemnemente expresadas y ya de todos conocidas, no quedarán defraudadas.

REAL DECRETO DE 13 DE AGOSTO DE 1877.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con el dictámen del Consejo de Estado en pleno, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El decreto pontificio de 2 de Mayo de 1867 sobre reducción de dias festivos tendrá cumplimiento en las islas de Cuba, Puerto Rico, adyacentes de estas y posesiones españolas del Golfo de Guinea desde el dia 1.º de Enero de 1878.

Art. 2.º La promulgación con igual fin del mismo decreto en las islas Filipinas se hará únicamente para la población católica de origen europeo.

Art. 3.º Las Autoridades de Ultramar á quienes corresponda cuidarán de la observancia de las fiestas que quedan vigentes. Si en épocas de recolección ó con otro motivo urgencias públicas inexcusables hicieran necesaria la dispensa en este punto, habrá de intervenir para ello el asentimiento y licencia de las Autoridades civil y eclesiástica.

Dado en Palacio á trece de Agosto de mil ochocientos setenta y siete.—Alfonso.—El Ministro de Ultramar, Cristóbal Martín de Herrera.

NUMERO 2.º

Sobre reparación de Templos y edificios eclesiásticos.

R. D. DE 13 DE AGOSTO DE 1876.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las obras de construcción y reparación de los templos catedrales colegiales y parroquiales, palacios episcopales, seminarios conciliares é iglesias, y casas de religiosos y religiosas, se dividen en ordinarias y extraordinarias.

Se consideran obras ordinarias las que cada año hay necesidad de hacer para tener los edificios en buen estado de conservación, y pueden costearse con las dotaciones consignadas para gastos del culto y sostenimiento de los Seminarios con-

ciliares en los artículos 34 y 35 del Concordato de 1851, con la parte de la renta de las Sillas episcopales vacantes, que conforme al art. 37 del mismo Convenio debe emplearse en reparar los palacios de los Prelados, y con las limosnas de los fieles.

Se consideran obras extraordinarias las que no pudiendo hacerse con los medios indicados, deben sin embargo ser costeadas por el Estado en cumplimiento del art. 36 del Concordato y del 13 del Convenio adicional de 1859.

Las obras que se hagan sin subvención del Estado se considerarán como ordinarias para los efectos de este decreto.

Art. 2.º Las obras ordinarias de reparación de los templos catedrales colegiales y parroquiales, de los palacios episcopales, de los seminarios conciliares y de las iglesias y casas de institutos religiosos, se harán por los respectivos Cabildos, Párrocos, Prelados y Superiores, bajo la autoridad y vigilancia de los propios Ordinarios.

El Estado no tendrá en estas obras otra intervención que la que le corresponde por las disposiciones generales de policía urbana.

Art. 3.º Las obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos se harán con sujeción á las disposiciones generales para la ejecución de servicios públicos y á las contenidas en el presente decreto.

Art. 4.º Las obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos se contratarán en pública subasta.

Podrán, sin embargo, hacerse por Administración ó por contrata sin subasta:

Primero. Las obras cuyo presupuesto no exceda de 1,250 pesetas.

Segundo. Aquellas para cuya ejecución no se presenten licitadores en dos subastas consecutivas.

Tercero. Las de restauración artística que, oídas la Junta diocesana que se establece en el artículo siguiente, la Comisión provincial de Monumentos y la Real Academia de San Fernando, se disponga que se hagan por Administración.

El que una obra se haga por Administración no excluye la celebración de subastas parciales para la adquisición de materiales ó para cualquiera otro servicio que pueda realizarse sin inconveniente por medio de licitación pública.

Art. 5.º Para auxiliar al Gobierno en la instrucción de los expedientes de obras extraordinarias de construcción y reparación de templos y demás edificios destinados al servicio de la Iglesia, y para velar por su buena ejecución, habrá en la capital de cada diócesis una Corporación que se titulará *Junta diocesana de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos*, compuesta del Prelado, y en Sede vacante ó impedida, del Gobernador de la diócesis, Presidente; del Dean; de un Canónigo, elegido por el Cabildo; de un Párroco con residencia en la población, designado por el Prelado; del Promotor fiscal, y donde hubiere más de uno, del más antiguo; del Síndico del Ayuntamiento, y de un individuo nombrado por la Comisión provincial de Monumentos.

Art. 6.º Para atender á los gastos del material de las Juntas creadas en el ar-

título anterior, se señala á la de Toledo la asignación anual de 1,500 pesetas; á las demás metropolitanas la de 1,250, y á las sufragáneas la de 1,000.

Art. 7.^o Cuando la obra haya de hacerse fuera de la capital de la diócesis, se creará, luego que se apruebe la contrata de construcción, y si hubiere de hacerse por Administración cuando se autorice el comienzo de los trabajos, una Junta especial, dependiente de la diocesana.

Presidirá la Junta especial, si la obra ha de hacerse en su Colegiata, el Abad; si en una parroquia, el Párroco; si en un Palacio episcopal, la persona que el Prelado designe; si en un Seminario, el Rector; si en iglesia ó casa de religiosos, el Superior, y si en iglesia ó casa de religiosas, el Capellan; y serán Vocales: el Alcalde, el Síndico del Ayuntamiento y los dos vecinos de la población que hayan contribuido con mayor limosna para la obra; y si no los hubiese, dos vecinos nombrados, uno por el Presidente de la Junta y otro por el Alcalde.

En el presupuesto de la obra se consignará la cantidad necesaria para los gastos de la Junta especial.

Art. 8.^o Para practicar los reconocimientos facultativos de los edificios, levantar planos y formar los proyectos de las obras, se nombrará por el Ministerio de Gracia y Justicia el número de Arquitectos diocesanos y de suplentes que se juzgue necesario, atendiendo á la extensión y especiales circunstancias de cada diócesis.

Estos facultativos deberán residir en la circunscripción donde hayan de prestar sus servicios.

Art. 9.^o Los Arquitectos diocesanos no tendrán sueldo fijo sinó cuando por la importancia de la obra, cuyo proyecto ó dirección se les encomiende, se considere conveniente y económico señalarles dotación anual, mientras duren los trabajos.

En los demás casos percibirán honorarios con arreglo á tarifa, entendiéndose que no excederán de la mitad de los señalados para obras en edificios particulares; abonándoseles además los gastos de viaje cuando presten servicio fuera del lugar de su ordinaria residencia.

Art. 10. Los Arquitectos diocesanos se comunicarán con el Ministerio de Gracia y Justicia por conducto de los Presidentes de las Juntas de reparación de templos y edificios eclesiásticos; podrán, sin embargo, en casos graves y urgentes dirigirse por sí al Ministerio, pasando al propio tiempo copia de la comunicación al expresado Presidente.

Art. 11. No se ejecutará obra alguna extraordinaria en los templos ni en los edificios destinados al servicio de la iglesia sin previa autorización Real.

Art. 12. Siempre que los Prelados, Presidentes de los Cabildos, Párrocos, Rectores de los Seminarios y Superiores de casas religiosas consideren necesarias en los edificios puestos á su cuidado obras á cuya ejecución no se pueda atender con el presupuesto ordinario, lo pondrán en conocimiento del Presidente de la Junta diocesana, acompañando los documentos que estimen oportunos para

justificar la necesidad y urgencia de la obra, y expresando su importe según cálculo prudencial.

Art. 13. En vista de la comunicación á que se refiere el artículo anterior, el Prelado pedirá informe al Alcalde de la localidad y á cualesquiera otras personas que juzgue conveniente acerca del estado del edificio y de si es necesaria y urgente la obra. Asimismo cuidará de que conste la imposibilidad de costearla con el presupuesto ordinario, y que se ha invitado al vecindario á contribuir con limosnas, expresándose cual ha sido el fruto de la cuestación.

Instruido así el expediente, lo pasará á la Junta diocesana para que acuerde lo que proceda sobre la necesidad y urgencia de la obra que se reclama.

Art. 14. Las Juntas diocesanas formarán y elevarán trimestralmente al Ministerio de Gracia y Justicia los expedientes de obras extraordinarias sobre que hayan tomado acuerdo favorable, numerándolos por el orden de preferencia que á su juicio deba darse á la ejecución.

Art. 15. Con presencia de los expedientes elevados por las Juntas diocesanas, y teniendo en cuenta el crédito consignado en el presupuesto para reparaciones extraordinarias, se resolverá por el Ministerio de Gracia y Justicia qué obras han de ejecutarse, y se ordenarán los reconocimientos facultativos y la formación de los proyectos correspondientes.

Art. 16. Las Juntas diocesanas comunicarán á los Arquitectos á quienes corresponda las Reales resoluciones á que se refiere el artículo precedente; y en su cumplimiento, los expresados facultativos procederán á reconocer los edificios en que han de hacerse las obras.

Si del reconocimiento resultase que no es necesaria la reparación solicitada, lo pondrán en conocimiento de la Junta diocesana, quedando con esta declaración terminado el expediente y dándose cuenta al Ministerio de Gracia y Justicia.

Cuando el Arquitecto considere necesaria la obra y calcule que su coste no excederá en más de un 20 por 100 de la suma en que aparezca apreciada en el expediente, procederá á la formación del proyecto, informando sobre si ha de hacerse por contrata ó por administración.

Cuando estime que el importe de la obra subirá más de un 20 por 100 sobre lo calculado al solicitar su ejecución, lo pondrá en conocimiento de la Junta diocesana, suspendiendo la formación del proyecto hasta que recaiga Real resolución.

Art. 17. Interin se publican formularios completos para la redacción de los proyectos de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos, los Arquitectos diocesanos se atenderán, en la parte que sea aplicable, á los establecidos en el ramo de Obras públicas; y procurarán economizar gustos, conciliando la belleza de la forma con la sencillez de la decoración y cuidando en las nuevas edificaciones de que las plantas no excedan de la capacidad necesaria, habida consideración al objeto del edificio que proyecten.

Art. 18. Los documentos de que ha de constar todo proyecto de obra, serán:

1.º Los planos necesarios para determinarla gráficamente.

- 2.º El presupuesto.
- 3.º La Memoria explicativa.
- 4.º El pliego de condiciones particulares, facultativas y económicas, en los casos en que la obra haya de ejecutarse por contrata.

En las instrucciones que se dicten para la ejecución del presente decreto se prescribirá la forma en que han de presentarse estos documentos.

Art. 19. Los Arquitectos pasarán los proyectos de obras que redacten á los Presidentes de las Juntas diocesanas para que estas Corporaciones los eleven con su informe al Ministerio de Gracia y Justicia.

Cuando las Juntas adviertan que en los proyectos falta algún documento, ó que no está redactado con arreglo á instrucción, los devolverán á los Arquitectos para que subsanen la falta.

Art. 20. Al Ministerio de Gracia y Justicia corresponde aprobar los proyectos de obras y acordar su ejecución.

Cuando el presupuesto de la obra exceda de 5,000 pesetas, no se resolverá el expediente sin informe del Gobernador de la provincia, quien para emitirlo habrá de oír necesariamente al Arquitecto provincial.

También se oirá, en los casos en que la importancia artística de la obra lo requiera, á la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Cuando las obras hayan de contratarse en pública subasta, se designará al propio tiempo el día en que ha de celebrarse para que se publiquen oportunamente los anuncios en la *Gaceta de Madrid* y en el *Boletín oficial* de la provincia.

Art. 21. Las subastas se celebrarán ante las Juntas diocesanas de construcción y reparación de templos y edificios eclesiásticos, en la forma que determine la instrucción, y el Vocal que presida el acto adjudicará el remate al mejor postor, salva la Real aprobación, sin cuyo requisito no quedará perfecto el contrato.

Comunicada á la Junta diocesana la aprobación de la subasta y adjudicación de las obras, se procederá al otorgamiento de la escritura, y el Presidente de la expresada Corporación cuidará de que comiencen los trabajos en el día estipulado, dando las órdenes necesarias á la Junta especial en el caso previsto en el artículo 7.º

Art. 22. Los Arquitectos encargados de la dirección de las obras procederán, si lo estimaran necesario, al replanteo de las mismas antes de que comiencen; vigilarán su construcción, haciendo las visitas que juzguen convenientes y las que les ordenen las Juntas diocesanas, evaluarán en los plazos señalados en la contrata los trabajos ejecutados y materiales acopiados, y expedirán las certificaciones de abono que correspondan.

Art. 23. En las obras cuyo presupuesto no exceda de 5,000 pesetas podrá el Arquitecto-Director, bajo su responsabilidad, hacer en el proyecto las alteraciones que en el curso de la ejecución aparezcan convenientes, con tal que no produzcan aumento de gastos, dando cuenta por conducto de la Junta diocesana al Ministerio de Gracia y Justicia. En las obras cuyo importe se haya calculado en más

de 5,000 pesetas, y siempre que la modificación eleve la cifra del presupuesto, no podrá alterarse el proyecto sin Real autorización.

Tampoco podrá hacerse modificación alguna, sinó en virtud de Real orden, en los proyectos sobre que haya dado dictámen la Real Academia de San Fernando.

Art. 24. Las Juntas diocesanas, y las especiales en su caso, velarán porque las obras se ejecuten con sujeción al proyecto aprobado y á las condiciones estipuladas, dando aviso al Arquitecto ó al Gobierno, según proceda, de las faltas que adviertan.

Art. 25. Terminadas que sean las obras, el Arquitecto encargado de su dirección, procederá á hacer las mediciones y valoraciones, y á formar las liquidaciones finales, así en las ejecutadas por contrata como en las hechas por administración.

Art. 26. Las reclamaciones de los empresarios de obras sobre la inteligencia y cumplimiento de los contratos se resolverán gubernativamente por el Ministerio de Gracia y Justicia, previa audiencia de la Junta diocesana, de la especial si la hubiere y del Arquitecto-Director.

Contra la resolución adoptada en la vía gubernativa procederá el recurso contencioso-administrativo ante el Consejo de Estado.

Art. 27. Cuando los trabajos hayan de ejecutarse por administración la Junta diocesana nombrará un pagador, á cuya orden se librarán los fondos y de cuyo cargo será el pago de materiales, mano de obra, con las formalidades que prescriba la instrucción.

Los Arquitectos, cuando propongan que una obra se haga por este medio comprenderán en el presupuesto de ella la remuneración del pagador, y propondrán la fianza que debe prestar para seguridad de los caudales que maneje.

Art. 28. A la Junta diocesana corresponde examinar y aprobar las cuentas de las obras que se ejecuten por Administración, que deberá presentar el pagador, visadas por el Arquitecto-Director; si encontrase algún reparo lo comunicará al expresado Arquitecto, y en el caso de no venir á un acuerdo la Junta y el Director facultativo, se remitirá el expediente á la decisión del Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 29. En casos de reconocida urgencia podrán los arquitectos diocesanos, por orden del Prelado, ó á requerimiento de la autoridad local, disponer apeos provisionales, cercar en todo ó en parte los edificios, y adoptar las medidas necesarias para prevenir desgracias y garantizar la seguridad del tránsito público, con sujeción á los reglamentos de policía urbana, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia y de la Junta diocesana, dando cuenta justificada de los gastos hechos, y proponiendo lo que consideren necesario según el estado del edificio.

Art. 30. Los honorarios de los Arquitectos por formación de proyectos se satisfarán en tres plazos iguales; el primero cuando sean aprobados; el segundo cuando se haya invertido en las obras la mitad del presupuesto, y el tercero cuan-

do se haga la recepción definitiva. Los de dirección, visitas y reconocimiento de las obras durante su ejecución se satisfarán por trimestres vencidos.

Cuando se señale sueldo fijo al Arquitecto-Director, se le satisfará mensualmente por medio de nómina.

En el caso previsto en el párrafo segundo del art. 16 se incluirá el importe de los honorarios de reconocimiento en la consignación del mes siguiente al de la fecha del informe; del mismo modo se satisfarán los honorarios devengados por los trabajos á que se refiere el artículo anterior.

Art. 31. Los Arquitectos diocesanos presentarán en el mes de Julio de cada año á los Presidentes de las Juntas diocesanas una Memoria de sus trabajos durante el ejercicio del presupuesto anterior, expresando los reconocimientos facultativos que hayan hecho, proyectos que hayan formado, obras cuya dirección les haya sido encomendada, y estado en que se encuentre su ejecución.

Las Juntas diocesanas remitirán con un informe dichas Memorias al Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 32. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, para cuya ejecución se dictarán por el Ministerio de Gracia y Justicia las convenientes instrucciones.

Dado en San Ildefonso á trece de Agosto de mil ochocientos setenta y seis.—Alfonso.—El Ministro de Gracia y Justicia, Cristóbal Martín de Herrera.

INSTRUCCIÓN DE 28 DE MAYO DE 1877.

~~~~~

### CAPÍTULO PRIMERO.—*De los proyectos de obras.*

Artículo 1.º Los documentos de que, según el art. 18 del Real decreto de 13 de Agosto de 1876, debe constar todo proyecto de obras se ordenarán y presentarán por duplicado, fechados y firmados por el Arquitecto á quien se haya encargado su formación, y con sujeción á lo que se dispone en los artículos siguientes.

Art. 2.º Los planos se presentarán en papel tela en la escala de 1 por 100 para las plantas y alzadas generales, de 1 por 50 á 1 por 25 para las alzadas particulares y de 1 por 10 para los detalles de construcción y decoración. Cuando sea grande la extensión del perímetro que ha de ocupar la construcción, las plantas y alzadas generales se presentarán en la escala de 1 por 200.

Art. 3.º El presupuesto, Memoria explicativa y pliego de condiciones se presentarán escritos en papel común no continuo de marca española, ajustándose al metro como unidad de medida y á la peseta como unidad de moneda, escribiéndose en letra las cantidades á que sea preciso hacer referencia en los pliegos de condiciones.

Art. 4.º El presupuesto debe expresar los precios elementales y unitarios de los materiales y de la mano de obra; y se podrá añadir á lo que con arreglo á ellos resulte ser el importe total hasta un 5 por 100 para imprevistos, hasta un 8 por 100 por beneficio industrial del contratista comprendido el interés del dinero adelantado, y un 6 por 100 para pago del proyecto, dirección facultativa, reconocimientos, visitas de inspección, premio del pagador y gastos de la Junta especial de las obras, en el caso de que hubiera de crearse, conforme al art. 7.º del Real decreto de 13 de Agosto de 1876; acompañará al presupuesto un resumen arreglado al modelo núm. 1.º

Art. 5.º En la Memoria explicativa se expondrán las razones en que se funda la traza y el presupuesto de la obra proyectada, y se determinarán los puntos que no puedan comprenderse con toda claridad por el exámen de aquellos documentos.

Art. 6.º En los pliegos de condiciones facultativas se expresarán las obligaciones generales del contratista, la clase y procedencia de los materiales, el orden y forma en que han de realizarse las obras, y todo lo relativo á su ejecución que no parezca bastante definido en los planos, presupuestos y Memoria explicativa.

En los de condiciones económicas particulares se conformarán los Arquitectos á lo prescrito en las generales que comprende la presente instrucción, añadiendo las que sean necesarias en cada caso. Cuando la obra haya de costearse en parte limosnas ó con cantidades sacadas del fondo de reserva, se expresará el tiempo y forma en que han de entregarse al contratista. Las prestaciones en materiales y trabajos con que los pueblos ó particulares hubiese ofrecido contribuir á la ejecución de la obra, se capitalizarán con arreglo á los precios establecidos en el presupuesto, y se determinará la época y modo en que han de hacerse para acreditar á su tiempo el importe de ellas al contratista.

También se expresará en las condiciones económicas el importe de la fianza con que ha de asegurarse el cumplimiento de la contrata, y el plazo porque debe responder de la buena ejecución de las obras. La fianza se constituirá á disposición del Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 7.º En los proyectos de reconstrucción de todo ó parte de un edificio se tomará en cuenta al formar los presupuestos el valor de los materiales aprovechables de lo que haya de demolerse, deducido el importe del derribo.

Cuando se proyecte la construcción de un nuevo edificio para sustituir á otro emplazado en lugar distinto, se expresará en la Memoria explicativa el valor del que ha de pasar al dominio del Estado luego que termine la obra.

Art. 8.º Los Arquitectos que formen proyectos de obras deberán al remitirlos á las Juntas diocesanas, informar de si el deterioro del edificio procede de no haberse hecho á su tiempo las reparaciones ordinarias que deben costearse del presupuesto del culto. Las expresadas corporaciones transcribirán con su dictámen este informe al Ministerio de Gracia y Justicia.

CAPÍTULO II.—*De la celebración de las subastas.*

Art. 9.º Las subastas para la construcción y reparación extraordinaria de templos y edificios eclesiásticos se anunciarán con 20 días de anticipación en la *Gaceta de Madrid*, en el *Boletín oficial* de la provincia y en el eclesiástico de la diócesis donde hayan de ejecutarse las obras.

Al pie de los anuncios se insertará el modelo de proposición. Los planos, presupuestos, pliegos de condiciones facultativas y económicas y Memoria explicativa estarán de manifiesto en la Secretaría de la Junta diocesana, de reparación de templos desde que se anuncie la subasta hasta que se celebre.

El anuncio y proposición se arreglarán al modelo núm. 2.

Art. 10.º Las subastas se celebrarán ante las Juntas diocesanas de construcción y reparación extraordinaria de templos y edificios eclesiásticos, observándose las formalidades siguientes:

1.º Reunida la Junta diocesana en el lugar, día y hora designados en el anuncio, con asistencia del Notario público, el Presidente declarará que comienza el plazo para recibir proposiciones.

2.º Por espacio de media hora, á contar desde que el Presidente haga la declaración expresada, se recibirán por el Notario las proposiciones que se presenten: estas proposiciones deberán estar incluidas en pliegos cerrados y rubricados por el autor en la cubierta.

3.º Trascurrido el plazo de media hora, el Presidente declarará fenecido el señalado para presentar proposiciones, y se procederá á la apertura de los pliegos.

4.º No se admitirá proposición que no vaya acompañada de documento que acredite haber consignado su autor en la Caja general de Depósitos ó en la sucursal de la provincia donde se verifique la subasta una cantidad igual al 5 por 100 del importe del presupuesto, en calidad de depósito provisional, para responder de que aceptará el remate, caso que le fuese adjudicado.

5.º Tampoco serán admitidas las proposiciones cuya redacción no estuviere ajustada al modelo inserto en el anuncio de la subasta, ni las que fijen un precio superior al señalado en el presupuesto de contrata.

6.º El Presidente adjudicará el remate á favor del autor de la proposición que resulte más ventajosa entre las admisibles: si hubiera dos ó más que ofreciesen hacer la obra en la misma cantidad, se señalará el plazo de un cuarto de hora para que sus autores puedan mejorarlas por medio de proposiciones verbales, que harán públicamente: trascurrido este tiempo, se declarará el remate á favor del que resulte mejor postor; se devolverá á los demás los resguardos de depósito que hayan acompañado á sus proposiciones, y el Presidente dará por terminado el acto.

Art. 11.º Inmediatamente después de celebrada la subasta se redictará por el Notario acta de lo ocurrido, que firmará con el Presidente y el rematante, ó quien le representare legítimamente.

Si se hubieren hecho protestas, se consignarán en el acta, así como la decisión que sobre ellas hubiese dictado el Presidente.

Art. 12. El Presidente de la Junta diocesana de reparación de templos elevará al Ministerio de Gracia y Justicia en el término de tres días, contados desde la celebración de la subasta, copia autorizada del acta para que pueda recaer la Real aprobación. Si fuere aprobado el remate, se procederá á formalizar el contrato en escritura pública, que otorgará el Presidente de la Junta á nombre del Estado, y el rematante por sí ó por persona que legítimamente le represente.

Si el rematante no compareciere á otorgar la escritura en el término de 20 días desde la aprobación de la subasta, se declarará rescindido el contrato á su perjuicio, con retención del depósito provisional, y quedando sujeto á responsabilidad en los términos prescritos en el art. 5.º del Real decreto de 27 de Febrero de 1852: en la misma pena incurrirá si al presentarse á otorgar la escritura apareciere no tener aptitud legal para la celebración del contrato, ó no haber consignado en la Caja general de Depósitos ó en la sucursal de la provincia una suma igual al 10 por 100 de la cantidad en que se le haya adjudicado la obra como fianza de la fiel ejecución del contrato.

Así los depósitos previos para tomar parte en la subasta, como las fianzas para la ejecución del contrato, podrán constituirse en metálico ó en valores de los que se admiten en garantía de todos los servicios públicos, estimados con arreglo á lo prescrito en el Real decreto de 29 de Agosto de 1876, ó á las disposiciones que en adelante rigieren en esta materia.

El Gobierno puede dispensar del otorgamiento de la escritura pública en aquellos contratos cuyo importe no pase de 2.500 pesetas; y en este caso el contratista deberá presentar en el mismo plazo de 20 días, en la junta diocesana, el resguardo de la fianza presentada para que conste en el expediente el cumplimiento de esta condición.

Art. 13. Si en la subasta no se presentare proposición admisible, se anunciará otra con igual anticipación y bajo las mismas condiciones que en la primera; y si en la segunda tampoco hubiere postor á quien pueda adjudicarse el remate, podrá disponerse por el Ministerio de Gracia y Justicia que se anuncie tercera subasta, previa reforma del presupuesto, ó bien que se hagan las obras por administración, sin que exceda su coste del primitivo.

Art. 14. Si en el término de dos meses desde la fecha de la subasta no se hubiere dictado Real resolución aprobándola ó desaprobandola, podrá el rematante retirar su proposición, devolviéndosele en este caso el depósito provisional.

Art. 15. Serán de cuenta del contratista los gastos de publicación en la *Gaceta de Madrid* y en los *Boletines oficiales* de la provincia del anuncio de la subasta, los de su celebración y copia del acta, y los del otorgamiento y copia de la escritura.



CAPÍTULO III.—*De la ejecución de las obras por contrata.*

Art. 16. El contratista deberá comenzar las obras en el término de 30 días, contados desde la fecha de la aprobación de la subasta, y terminirlas en los plazos que se señalen en los pliegos de condiciones. En caso de mora, el Estado podrá rescindir el contrato á su perjuicio con retención de la fianza y bajo la responsabilidad establecida en el artículo 12.

Cuando la dilación fuere por justa causa, podrá el Gobierno conceder al contratista la prórroga que estime conveniente.

Art. 17. El contratista estará obligado á seguir en los trabajos las instrucciones del Arquitecto encargado de su dirección en cuanto no se opongan á las condiciones del contrato, y acopiar los materiales y emplear los operarios y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en los plazos estipulados.

Podrá también abreviar la construcción si á ello no se opusieren las instrucciones del Arquitecto director; pero en este caso no tendrá derecho á que se le abone en cada mes mayor suma de la que importe la obra que esté obligado á ejecutar en el mismo período.

No podrá el contratista hacer mensualmente ménos obra de la que proporcionalmente corresponda, según los plazos establecidos en la contrata.

Art. 18. Cuando el Gobierno disponga que cesen ó se suspendan por tiempo indefinido las obras, tendrá derecho el contratista á pedir la rescisión del contrato. En este caso se procederá á la recepción de las que tenga ejecutadas; liquidando y abonándosele su importe al precio de contrata, así como el valor de los materiales que tenga acopiados al pié de la obra, cuando se le notifique la suspensión, previo certificado del Arquitecto director en que se fije su valor, y se declare que son de la procedencia y calidad prescritas en el pliego de condiciones.

Art. 19. Mensualmente, si en el contrato no se hubieren estipulado otros plazos, se ordenará el abono al contratista del importe de las obras ejecutadas en virtud de certificación expedida por el Arquitecto director ajustada al *modelo número 3*.

Las certificaciones deberán expedirse en los cinco primeros días del mes siguiente á aquel en que hayan sido hechas las obras que comprendan.

Art. 20. Las certificaciones de obras deberán extenderse por duplicado, remitiéndose inmediatamente por la Junta diocesana un ejemplar al Ministerio de Gracia y Justicia para que en su vista se haga la consignación de su importe.

Art. 21. Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute, tomando por base los precios unitarios consignados en el presupuesto, con el aumento consiguiente por imprevistos, si los hubiere, y el del beneficio industrial é interés del dinero adelantado, y con la rebaja proporcional á la que hubiere hecho en su proposición respecto del total importe de las obras.

Art. 22. No serán de abono al contratista las obras que ejecute y no estén comprendidas en el proyecto que haya servido de base á su contrato. Tampoco

podrá hacer variación alguna que no haya sido autorizada por Real orden. Exceptuánse las que puede disponer el Arquitecto director, conforme al art. 23 del Real decreto de 13 de Agosto de 1876.

Art. 23. El contratista no tendrá derecho á indemnización por pérdidas ó perjuicios nacidos de aumento de precio de materiales ó mano de obra, de falta de medios auxiliares ó de cálculos equivocados.

Art. 24. Si el Estado no hiciera efectivo el pago de las obras ejecutadas dentro de los tres meses siguientes al término de aquel á que se refiera la certificación, tendrá derecho el contratista al abono del interés legal correspondiente al tiempo de la mora; y si trascurriesen otros dos más sin realizarse el pago, á pedir la rescisión del contrato, que se llevará á efecto en los términos establecidos en el artículo 18; pero deberá ponerlo por escrito con 15 días de anticipación en conocimiento de la Junta diocesana y del Arquitecto para que este adopte las disposiciones oportunas y proponga lo que sea más conveniente á los intereses del Estado.

Art. 25. En ningún caso podrá el contratista abandonar la ejecución de las obras sin Real autorización: si lo hiciere, podrá rescindirse el contrato á su perjuicio, con retención de la fianza y bajo la responsabilidad consignada en el art. 12.

Art. 26. Las certificaciones de obras que durante la ejecución expida el Arquitecto director tendrán el carácter de documentos provisionales, y su importe se entenderá satisfecho á buena cuenta y sin perjuicio de las rectificaciones que cesan hacerse en la liquidación definitiva que se practique á la terminación de los trabajos.

Art. 27. Concluidas que sean las obras, el Arquitecto director dará inmediatamente cuenta á la junta diocesana; y esta al Ministerio de Gracia y Justicia para que por este ceatro se ordene la recepción provisional y se designe el Arquitecto que ha de hacerla.

Art. 28. La recepción provisional se verificará con presencia del Presidente de la Junta diocesana ó del Vocal de esta corporación en quien delegue su representación, del Arquitecto encargado de la dirección ó inspección de la obra, del nombrado por el Gobierno para hacer la recepción y del contratista ó su legítimo representante.

Si las obras se hubieren ejecutado fuera de la cabeza de la diócesis, podrá el Presidente de la Junta diocesana delegar su representación en el de la Junta especial.

Si el contratista no concurriese por sí ni por apoderado, se entenderá que renuncia al derecho de asistir al acto.

La recepción se hará mediante un reconocimiento detenido hecho por el Arquitecto designado por el Gobierno, en mérito del cual declarará dicho facultativo si las obras se han ejecutado con entera sujeción al proyecto que haya servido de base al contrato, de todo lo cual se levantará acta.

Art. 29. Si del reconocimiento resultase que las obras no se han ejecutado

con arreglo á lo estipulado, se suspenderá la recepción y se requerirá al contratista para que subsane los defectos que se encuentren.

El contratista podrá reclamar contra esta decisión en el término de 15 días; y si lo hiciere, nombrará el Gobierno otro Arquitecto para resolver, oído su dictamen: si se desestima la reclamación, se ordenará al contratista que proceda desde luego á la ejecución de la obra que falte ó á la reforma de la que resulte defectuosa, sin perjuicio de los recursos que el contratista pueda utilizar con arreglo á las leyes: igual resolución se adoptará si no reclamase en el término antes prefijado.

Si el contratista se negare, se harán por Administraciones y á su costa las obras y rectificaciones, empleándose en costearlas la fianza y el importe de los libramientos que no se le hayan satisfecho, sin perjuicio de repetir contra cualesquiera otros bienes que posea ó poseyere en adelante si aquellas sumas no fueren bastante para la completa ejecución del contrato.

Si resultare no fundada la reclamación del contratista, serán de su cuenta los gastos del nuevo reconocimiento hecho á su instancia; en caso contrario, serán de cuenta del Estado.

Art. 30. Hecha la recepción provisional, procederá el Arquitecto encargado de las obras á practicar la liquidación final de su importe, previa su medición general. Así este documento, como los datos en que se funde, se pondrán de manifiesto al contratista para que en el término de 10 días exponga lo que tenga por conveniente.

Si en este plazo no hiciere reclamación, se entenderá que se conforma; si la hiciere, se procederá en los términos prescritos en el artículo anterior respecto de aquellas á que dé lugar la recepción provisional de las otras.

La liquidación final se formará con sujeción al *modelo núm. 4.º*, debiendo quedar redactada y remitida á la Junta diocesana dentro de la mitad del plazo de garantía, ó antes si es posible; y si la contrata ha sido rescindida, en el de un mes, á contar desde la fecha de la orden de rescisión.

Art. 31. La liquidación final de las obras se remitirá por la Junta diocesana al Ministerio de Gracia y Justicia, á quien corresponde su aprobación.

Art. 32. La recepción definitiva de las obras se verificará terminado que sea el plazo de responsabilidad fijado en el pliego de condiciones particulares. Durante dicho plazo será el contratista responsable de la conservación y reparación de la obra contratada.

La recepción definitiva se practicará con las mismas formalidades que la provisional, y por el mismo procedimiento se resolverán las reclamaciones á que diere lugar.

Aprobada por el Gobierno la recepción definitiva, se devolverá al contratista la fianza que hubiere prestado, y se le declarará libre de responsabilidad.

CAPÍTULO IV.—*De la ejecución de obras por Administración.*

Art. 33. Cuando el Gobierno di-ponga que una obra se ejecute por Administración, lo comunicará á la Junta diocesana, para que ésta lo haga al Arquitecto que haya de dirigir los trabajos, y nombre Pagador á cuyo cargo se libren las cantidades necesarias para co-tearlos, determinando la garantía que ha de prestar del fiel desempeño de su cargo.

Al tiempo de acordar que una obra se ejecute por Administración, se determinará la remuneración que ha de darse al Pagador.

Art. 34. El Arquitecto encargado de una obra que ha de ejecutarse por Administración hará con la anticipación conveniente, por conducto de la Junta diocesana el pedido de los fondos que en cada mes considere necesarios.

Art. 35. Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dictarán las órdenes oportunas para que se libre á cargo del Pagador de la obra la cantidad que en vista del informe del Arquitecto se estime bastante para satisfacer los gastos de cada mes.

Art. 36. La obra comenzará apenas el Pagador cobre la cantidad consignada para los gastos del primer mes, de lo cual dará cuenta, conforme al *modelo n.º 5.º*, en término de tres dias después de cobrada; y el Arquitecto cuidará de no retrasar el pedido de fondos para que no sufran interrupción los trabajos.

Art. 37. Los libramientos que se expidan á favor de los Pagadores de obras que se ejecutan por Administración tendrán el carácter de «á justificar,» y se acreditará documentalente la inversión de su importe dentro del plazo prescrito en el art. 8.º de la ley de 28 de Febrero de 1873.

Art. 38. Los pagos de jornales se harán por semanas ó quincenas; los de materiales en los plazos establecidos en los contratos de adquisición. La justificación se sujetará á los *modelos desde el n.º 6. al 12 inclusive.*

Art. 39. Terminadas las obras, el Arquitecto dará cuenta por escrito á la Junta diocesana, y procederá en seguida á hacer la liquidación de las mismas en la forma que se previene en los artículos 30 y 31 para las obras por contrata en lo que sea aplicable á las hechas por Administración; sirviéndose al efecto del *modelo número 13.* Hecha que sea, la pasará á la Junta para que dé el curso prescrito en los artículos citados.

Art. 40. Los honorarios de los Arquitectos se abonarán en la forma establecida en el artículo 39 del Real de 13 de Agosto de 1876; así estos como los gastos de las Juntas especiales y el premio del Pagador se justificarán con sujeción á los *modelos números 14, 15, 16 y 17.* y por nómina mensual los del personal facultativo y administrativo cuando se le haya señalado sueldo fijo.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1.ª Todas las obras por contrata que á la fecha de esta instrucción estén en curso de ejecución deberán sujetarse, en cuanto á la manera de redactar las certifi-

caciones de las obras ejecutadas y demás documentos que los Arquitectos diocesanos deben extender, á los modelos aprobados con esta fecha; lo mismo se verificará en las obras que se hagan por Administración, rindiéndose por los Pagadores las cuentas en el plazo señalado en el artículo 37.

2.<sup>a</sup> Los expedientes pendientes de subasta pública que tengan ya señalado el plazo dentro del cual debe celebrarse el remate continuarán en tramitación; pero aprobada que sea la subasta y adjudicadas las obras, los Arquitectos se sujetarán á esta instrucción en todo cuanto no se oponga á las condiciones del contrato celebrado.

3.<sup>a</sup> Los expedientes que obren en este Ministerio, y en los cuales no haya recaído resolución para que se ejecuten las obras, se sujetarán á lo ordenado en el decreto de 13 de Agosto del año pasado y á la presente instrucción, á cuyo efecto se devolverán á las Juntas de las diócesis respectivas, si estas lo reclamaren, para que puedan ser comprendidos en las relaciones trimestrales á que se refiere el artículo 14 del referido decreto.

Aprobado por S. M.—Madrid 28 de Mayo de 1877.—Calderón y Collantes.

### CIRCULAR DE 31 DE JULIO DE 1877.

Las disposiciones que contiene la Instrucción publicada con fecha 28 de Mayo último para el cumplimiento del Real decreto de 13 de Agosto de 1876, sobre reparación extraordinaria de templos y edificios eclesiásticos, tienen por objeto establecer orden y uniformidad en cuanto se refiere á la formación de planos y presupuestos, expedición de certificaciones de obras, redacción de cuentas y demás operaciones de contabilidad que este servicio exige; siendo la principal ventaja que ha de reportar el nuevo sistema, la de facilitar el conocimiento y exámen de los proyectos que se remitan á la Real aprobación y de los demás documentos que deban redactarse durante la ejecución de las obras y después de terminadas.

Mas para lograr este fin es indispensable que las nuevas Juntas diocesanas, las especiales en su caso y los demás funcionarios que han de tener más ó menos directamente intervención en estos asuntos, rivalicen en celo para secundar los propósitos del Gobierno. Y á fin de evitar dudas en el planteamiento de las referidas disposiciones y de fijar con claridad lo que conviene hacer para su observancia; el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que al remitir á V. el adjunto ejemplar autorizado de los expresados decreto é instrucción con los modelos redactados en la forma más propia para su cabal inteligencia, se le comuniquen las disposiciones siguientes:

Primera. Que en el plazo más breve posible se reconstituya la Junta diocesana con arreglo á lo prevenido en el art. 5.<sup>o</sup> del decreto referido, dando cuenta á este Ministerio de haberse verificado expresando los nombres de las personas que la compongan.



Segunda. Que la primera relación de los expedientes de obras de reparación extraordinaria que se forme en cumplimiento del art. 14 de dicho decreto, se remita á este Ministerio en los diez primeros días del mes de Setiembre próximo, incluyéndose en ella los expedientes que se hayan incoado según sus prescripciones hasta 31 de Agosto, siempre que sobre ellos haya tomado la Junta acuerdo favorable. También podrán ser incluidos en la misma relación los instruidos con arreglo al Real decreto de 4 de Octubre de 1861, si la Junta así lo estima, atendida la necesidad y urgencia de las obras; á cuyo efecto podrá reclamar á este Ministerio los expedientes que se hallen en este caso y estén pendientes de tramitación.

Tercera. Que respecto á los expedientes de obras en ejecución se llame la atención de V. y de la nueva Junta diocesana para que cuide con su notorio celo de evitar en lo sucesivo el retraso de los contratistas en el cumplimiento de sus obligaciones, así como de que se forme puntualmente el resumen de fondos que el Tesoro destina á esta atención, pues al Estado interesa saber no sólo que las obras se han ejecutado dentro de los plazos fijados, sino también la suma á que asciende su importe para ultimar los expedientes y cerrar la cuenta del crédito abierto al efecto, debiendo disponer V. que se remitan los relativos á todas las obras ya terminadas, bien lo hayan sido por contrata ó por Administración, y se activen los pendientes de algún trámite; no dándose curso á las peticiones para la formación de expedientes, cuando éstos se refieran á templos ó edificios para cuya reparación hayan sido libradas anteriormente cantidades, si no se ha justificado su inversión en las obras para que fueron concedidas.

Cuarta. Que encareca V. á la Junta diocesana y á las especiales que se creen, la necesidad y conveniencia de que se cumplan con la mayor exactitud las disposiciones que contienen el decreto de 13 de Agosto de 1876 é Instrucción de 28 de Mayo último; pues sólo así será posible obtener los benéficos resultados que el Gobierno de S. M. espera que han de producir.

De Real orden lo digo á V. para su inteligencia y cumplimiento, esperando se servirá V. dar aviso del recibo de esta circular y de los documentos que en ella se incluyen. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 31 de Julio de 1877.—El Subsecretario encargado del Despacho, Víctor Arnau.

### CIRCULAR DE 5 DE MAYO DE 1880.

La necesidad que la Administración tiene de conocer el estado de los servicios que se ejecutan con fondos que salen del Tesoro público y de cumplir las disposiciones de la Contabilidad general del Estado, han obligado á reunir datos y antecedentes que tanto en este Ministerio como en la Ordenación de pagos existen, de los cuales resulta que en poder de algunas Juntas diocesanas ó de las subalternas, se conservan en depósito fondos librados con anterioridad á la

publicación de la Instrucción de 28 de Mayo de 1877, con destino á obras de reparación de templos y otros edificios eclesiásticos, sin que á pesar del tiempo trascurrido, se haya dado cuenta de los invertidos ni reintegrado aquellas cantidades que no hayan tenido la debida aplicación. Como las expresadas disposiciones no autorizan estos depósitos ni pueden tolerar que permanezcan en la anómala é irregular situación en que han estado, y todavía se encuentran, sin haberse invertido en el servicio á que se destinaron; el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar lo siguiente:

1.º Las Juntas diocesanas dispondrán que se reintegren inmediatamente en las Tesorerías de las respectivas provincias, las cantidades que libradas con anterioridad al 1.º de Julio de 1877, con destino á obras de reparación de templos y otros edificios eclesiásticos, conserven en su poder ó en el de las subalternas, por no haberse invertido en las obras para cuya ejecución fueron consignadas.

2.º El reintegro se verificará separadamente por cada uno de los expedientes á que dichas cantidades debían aplicarse, remitiendo una relación de los reintegros verificados, con copias de las cartas de pago que al efecto se expidan, y se formará el resumen de las sumas gastadas pertenecientes á dichas consignaciones, ya se hayan hecho las obras por administración, ya por contrata, aunque ésta no esté terminada ni ejecutadas todas las que fueron comprendidas en los presupuestos aprobados por esta Superioridad, manifestando, á ser posible, el cálculo aproximado del importe á que pueden ascender las que aún faltan por ejecutar de dichos presupuestos, á fin de que por este Ministerio se resuelva, en cada caso particular, lo que proceda en interés del mejor servicio.

De Real orden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo digo á V. para su inteligencia y cumplimiento, encareciendo á V. la necesidad de que cuanto más pronto se remitan los datos que se reclaman. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 5 de Mayo de 1880.—El Subsecretario, Nicanor de Alvarado.

### CIRCULAR DE 13 DICIEMBRE DE 1880.

Por el Real decreto de 13 de Agosto de 1876 y la instrucción de 28 de Mayo de 1877 se modificaron las disposiciones que venían rigiendo sobre construcción y reparación de templos, conventos, seminarios, palacios episcopales y otros edificios eclesiásticos.

Tenía por principal objeto su publicación establecer orden y unidad en el servicio, sujetar la formación é instrucción de los expedientes ó trámites claros y precisos, redactar también de una manera uniforme los documentos facultativos que habían de constituir los proyectos de obras, haciendo desaparecer la irregularidad que en unos y otros se venía observando.

Propúsose asimismo evitar los gastos que infructuosamente se originaban al formar un número excesivo de proyectos, sin relación alguna con la suma que les

estaba destinada en el presupuesto general del Estado. Las prescripciones establecidas sobre este importante extremo deben observarse fielmente, porque sistema práctico y provechoso es no acometer sino aquellas obras que pueden legalmente construirse, sin permitir que se emprendan á la vez muchas, que forzosamente tienen que suspenderse por falta de recursos, con grave perjuicio de los intereses públicos. Esto es lo que desgraciadamente había sucedido en varias diócesis, donde con escasos elementos se empezaron reedificaciones y construcciones costosas, cuyos trabajos, ó se han perdido estérilmente, ó han sufrido tales deterioros que han traído, como consecuencia natural, un notable aumento en sus gastos.

Tampoco podía olvidar este Ministerio que se imponían á los Arquitectos sacrificios facultativos y pecuniarios en hacer proyectos que no llegaban á aprobarse, ni ménos á ejecutarse, para cuya formación bastaba sólo la petición del Párroco ó la de un Alcalde, dejándose casi siempre á discreción del mismo arquitecto, que por sí propio, ó excitado por inmoderado deseo de los solicitantes, decidiera de la importancia del proyecto; el cual frecuentemente dejó de ajustarse á las necesidades de la localidad, comprendiendo más que obras de verdadera urgencia, otras de mero adorno, y aún de lujo. Estas consideraciones han movido al Gobierno de S. M. á regularizar la formación de los proyectos, evitando que puedan repetirse casos en que la concepción artística de una nueva construcción, sólo propia para grandes poblaciones, se destinase, y de ello hay muchas huellas, á pueblos de reducido número de habitantes. También ha acontecido que para decidir al Gobierno á que cooperase á estos exagerados propósitos, se ha solicitado una corta subvención, comprometiéndose en cambio los Ayuntamientos y contribuyentes de la localidad por medio de solemnes ofertas, expresadas á veces en escrituras y documentos públicos, á costear las obras. Pero los hechos han demostrado que si en ciertas ocasiones los donativos de los fieles y Municipios han sido eficaz ayuda del Tesoro, en otras la mayor parte de las construcciones ó reparaciones que tenían por base ofertas semejantes, no sólo no se han realizado, sino que han debido lo poco que adelantaron, más al esfuerzo de aquel que al del vecindario, que, faltando á sus compromisos ó careciendo de recursos suficientes, suspendía indefinidamente las obras, imposibilitando á este Ministerio de reformar ó reducir, sin nuevos y mayores gastos, tales proyectos á sus naturales proporciones; siendo bien conocidos de las Juntas los entorpecimientos y perjuicios que ha causado á los intereses de la Iglesia y del Estado este sistema de ofrecimientos, pocas veces realizados de un modo ordenado y conveniente. Estos hechos han motivado la necesidad de la autorización previa para la formación de proyectos, de cuya importancia puede ahora juzgarse por el cálculo aproximado que en las mismas peticiones se hace constar, sin aventurarse á otros gastos que los que las exigencias del servicio y la situación del Tesoro consientan.

Ha sido necesario además exigir de las Juntas diocesanas la formación de relaciones comprensivas de los expedientes incoados durante un trimestre, los cuales

deben ser clasificados y numerados por orden de preferencia, para que este Ministerio pueda autorizar con acierto las obras que según su urgente necesidad deban ser primeramente atendidas. Así ha procurado hacerlo desde el año económico de 1877, en que las nuevas disposiciones empezaron á regir, invirtiendo el crédito consignado en el presupuesto general. Pero la previsión del art. 14 del decreto ha sido á veces defraudada por el sistema que siguen algunas diócesis al formar las relaciones, pues omitiendo la clasificación y orden de preferencia, las deducen á listas de instancias sin datos suficientes, y otras clasifican todas las peticiones de urgentes con el número 1.º de orden, con lo cual, en vez de facilitar, se embaraza la acción de la Administración; puesto que, sin negar la conveniencia de muchas de las obras que se proponen, preciso es que las Juntas, reconociendo la imposibilidad de atender á todas, se atemperen á seguir el criterio que la penuria del Tesoro impone, estableciendo un riguroso orden de preferencia y limitando las relaciones á aquéllas de más indispensable reparación, y siendo también preciso sujetar la formación del presupuesto al cálculo fijado en la petición y prescindir de los aumentos que con demasiada frecuencia solicitan los Arquitectos, ni pedir la formación de presupuestos adicionales, sinó en los casos de muy reconocida urgencia.

Otras modificaciones importantes introdujeron las citadas disposiciones. Establecieron reglas para la celebración de las subastas y para las obras que pueden hacerse por Administración, exigiendo, así en unas como en otras, aquéllas formalidades y requisitos que la Administración de la Hacienda exige en el manejo é inversión de los fondos públicos; y, sin olvidarse de armonizar sus intereses con los de los particulares, ha procurado atender, en la medida de sus fuerzas, al contratista y al Arquitecto que acuden en su auxilio, abonando sus obras al uno y sus legítimos honorarios al otro.

No es ménos importante la necesidad de evitar la excepción de construirse por Administración y seguir severamente la regla general de la licitación pública en la ejecución de esta clase de obras. El rigor con que se exige su adjudicación en pública subasta, evitando el frecuente sistema contrario, ha dado en la práctica los más satisfactorios resultados, siendo muy contados los casos en que, por falta de licitadores, ó por la especial naturaleza de la obra, se haya tenido que acudir á la autorización por Administración.

Debe hacerse notar, sin embargo, que no se ha conseguido aún todo lo que era de esperar de las disposiciones publicadas, por causas nacidas de la diversa inteligencia que se ha dado á alguno de sus preceptos, que no está conforme con el espíritu y propósito que las inspiraron. Por esto tiene necesidad el Ministro que suscribe de exponer algunas observaciones y dictar medidas, que sirvan como de aclaración de aquella parte que no ha sido ni bien comprendida ni justamente aplicada.

Omitese por los Notarios en las actas de los remates á que concurren el expresar los requisitos que la legalidad del acto exige, á fin de apreciar por ellas que han revestido las formalidades que la instrucción previene; pues no se hacen cons-

tar todas las proposiciones presentadas por los licitadores, ni la forma y cantidad en que se ha constituido el depósito para tomar parte en la subasta, y si se ha hecho en metálico ó en valores; datos que deben aparecer en el acta para evitar todo motivo ó protestas por parte de los que han concurrido al remate.

Como garantía del cumplimiento del contrato se exige que el rematante preste ántes de otorgar la escritura la fianza correspondiente, en metálico ó en valores de la Deuda pública. No se cumple en todas las diócesis este precepto ineludible, y en algunas se ha dispensado del otorgamiento de la escritura que previene el artículo 12 de la instrucción, y hasta de prestar la fianza en la forma determinada; habiéndose considerado algunas Juntas con facultades para sustituir esta garantía con la de un fiador personal que este Ministerio no ha podido aceptar.

Otra terminante prescripción, asimismo, es la de que los fondos consignados para la ejecución de una obra no puedan ser distraídos de su objeto, empleándose en otra distinta, y, sin embargo, se registran casos de haber hecho lo contrario algunas Juntas diocesanas, sin haber obtenido, ni aún solicitado, del Ministerio la competente autorización.

Para el pago de los gastos que produce la formación del proyecto, reconocimientos y visitas á las obras y gastos de viajes, se autoriza la inclusión en el presupuesto de la correspondiente partida, cuyo importe total se reclama por algunos Arquitectos, sin expresar en sus minutas los conceptos parciales por que se deben. Y como dicha suma es un crédito que se aprueba con aquel objeto y no una cantidad fija que se deba abonar por trabajos facultativos que todavía no pueden conocerse y á veces variar durante la ejecución y dirección de las obras; en las minutas de honorarios deben expresarse dichos trabajos fijando su importe según tarifa y deduciendo la rebaja correspondiente conforme al art. 9.º del decreto referido.

No deben tampoco los arquitectos hacer aumento alguno en concepto de imprevistos en las certificaciones que expiden de las obras ejecutadas; porque ni la cantidad que se incluye en el presupuesto es cantidad alzada y fija que forzosamente se deba al contratista, ni la administración debe abonar gastos que no se hagan y así lo previene el art. 21 de la Instrucción respecto de los imprevistos; y si ocurre alguno de estos gastos, se valorará con las demás obras.

Y en cuanto á la justificación de las sumas libradas para obras autorizadas por administración, de absoluta necesidad es que se verifique dentro del plazo legal. El art. 36 exige que los pagadores de obras den cuenta, conforme al modelo número 5.º de los circulados, de la fecha del cobro de las consignaciones; y como este precepto no se cumple con regularidad, es de todo punto imposible que la Administración conozca desde cuándo empieza el plazo dentro del cual debe formalizarse la cuenta, como previene el art. 37, pudiendo su omisión ser motivo de responsabilidad; porque si las cantidades percibidas no se invierten oportunamente dentro del ejercicio del presupuesto á que corresponden, no podrá aprobarse el gasto, y será forzoso devolver al Tesoro las sumas que se hayan percibido.



Tampoco pueden pasarse en silencio las reclamaciones, ó más bien quejas, que se han dirigido sobre ciertas prácticas observadas en algunas diócesis, que conviene evitar para lo sucesivo, y sobre las cuales se llama muy especialmente la atención de los Prelados. Refiérense estas á los excesivos derechos que se han exigido á los contratistas por la instrucción de los expedientes, al premio percibido por los habilitados y depositarios de los fondos, al mucho tiempo que estos los han retenido y retienen en su poder después de cobrados del Tesoro, y á la forma usada por algunos al verificar los pagos en calderilla en cantidad mayor que la autorizada. La práctica que sobre estos puntos se sigue guarda tan poca uniformidad, y las quejas afectan intereses tan dignos de respecto, que urge poner el oportuno remedio. Cierto es que en unas diócesis los gastos de instrucción de expedientes se han reducido cuerdamente á los de publicación del anuncio de la subasta en la *Gaceta* y *Boletín oficial* de la provincia, celebración del remate, copia del acta de éste y otorgamiento y copia de la escritura de contrato; pero en otras se han comprendido derechos, que se dicen abonados al Presidente de la Junta diocesana, Secretario, Notario eclesiástico y porteros, por los decretos, autos, diligencias, oficios, edictos, copias, citaciones, notificaciones, comisiones y otros conceptos varios, para cuya exacción se ha aplicado el Arancel de los Tribunales eclesiásticos.

Ni los expedientes para la reparación de templos deben sujetarse al de la Curia eclesiástica para exigir derechos, ni el contratista tiene obligación de abonar los que se le han exigido en la forma ántes expresada; habiéndose dado el caso de tener que satisfacer por instrucción de expediente las sumas excesivas de 100 y 125 pesetas, tratándose de presupuestos, en que la ejecución material de la obra no pasaba de 1.000 á 1.250; á cuyos gastos se agregaban los premios descontados por habilitación y por los depositarios de los fondos. Y son tanto más de rechazar estas partidas, cuanto que en los presupuestos del Estado se ha venido consignando una que trimestralmente perciben las Juntas destinadas exclusivamente á los gastos de instrucción de los expedientes y material de las Secretarías de las mismas, una mala inteligencia ha podido tal vez dar motivo á práctica semejante, que debe desaparecer por completo.

Tan discordes como en este punto, lo han estado respecto al premio que debe abonarse por cobranza de las consignaciones que el Estado destina á esta clase de obra.

En unas diócesis, olvidando los habilitados lo dispuesto expresamente sobre el particular, se ha permitido que estos perciban por tal concepto, medio y hasta tres cuartillos por ciento de las sumas cobradas; y existen casos en que además de dicho premio, han deducido al suyo respectivo el depositario de fondos de la Junta diocesana y el de la local; exacciones no justificadas, que implicando una disminución del importe de las obras, se traducen en efectivo perjuicio de estas y del contratista. Sólo los habilitados del clero han podido percibir por premio de co-

branza y pago, un cuartillo por ciento, como se dispuso por la Real orden de 27 de Diciembre de 1858.

Desde que se publicó la instrucción de 28 de Mayo de 1877, las obras se han ejecutado sinó con toda la regularidad á que se aspiraba, con alguna mayor que anteriormente, habiéndose procurado consignar con puntualidad los fondos necesarios para el pago á los contratistas; y si no siempre se ha realizado con la rapidez debida, efecto ha sido, unas veces de estar el crédito agotado, otras del estado precario del Tesoro público y también de la poca exactitud en la expedición y remisión de las certificaciones. Pero es ya propósito decidido del Gobierno, en cuanto de sus atribuciones dependa, el de apartar los obstáculos que se opongan á que la reparación de templos se verifique en las mejores condiciones que una buena administración exige, ya proponiendo el aumento del crédito legislativo correspondiente, ya adoptando al propio tiempo las medidas que por otros conceptos puedan concurrir á subvenir más ámpliamente á este importantísimo servicio.

Se ha solicitado también por algunos contratistas que se consignen y libren á su nombre las cantidades que se les adeuden por la ejecución de las obras que tienen á su cargo, fundándose en que por sí mismo pueden gestionar su cobro en la respectiva tesorería de provincia, como se verifica en los demás servicios públicos. Este Ministerio estimó favorablemente alguna de estas peticiones, no sólo por estar en armonía con lo que se observa en la Administración general del Estado, sinó para evitar las quejas relativas á la demora que sufren en percibir lo que se les debe, descuento de premios por un servicio que se les impone, que los contratistas pueden hacer por sí mismos con más sencillez para la Administración y ventaja propia.

El Ministro que suscribe, que ha tomado en consideración los inconvenientes que el actual sistema de consignar fondos ofrece, y examinado algunos de los antecedentes que obran en el Ministerio, donde constan tanto el importe de los derechos exigidos por la instrucción de los expedientes, como los premios por cobranza de los habilitados y depositarios, en manera alguna imputables al contratista, ni ménos al Tesoro, en perjuicio del cual redundan en definitiva algunos de estos gastos, estima como más conveniente y práctico, en armonía también con lo establecido en las disposiciones generales que regulan todos los servicios del Estado, que, dejando todo lo que se refiere al pago de las obras y honorarios, como cuestión de mera contabilidad, á cargo de la Ordenación de Pagos y de las Administraciones económicas de Hacienda pública de las provincias, aparta de las Juntas el enojoso cuidado de manejar fondos que á su vez dejaban al del administrador-depositario, habilitado del clero, ó al de las subalternas, y las coloca en situación más desembarazada y con acción más expedita y eficaz para ejercer la celosa vigilancia que vienen prestando, sobre todo cuando se relaciona con la reparación de templos y con las personas que en la misma intervienen. El Gobierno, por su parte, ordenará con la prontitud posible, la consignación de fondos y expedición de los libramientos oportunos, á fin de que los interesados

acudan á percibir por sí propios su importe, ó que gestionen del modo que mejor crean convenir á sus intereses, el abono de las cantidades que adeuden. Este procedimiento reportará además la ventaja de que, terminadas y recibidas definitivamente las obras, ya se hayan ejecutado por contrata, ya por administración, el Estado tendrá conocimiento inmediato de la inversión de las cantidades consignadas, sin que pueda darse la extraña anomalía, que aún se observa, de que permanezcan en poder de algunas Juntas diocesanas, de las locales y habilitados ó depositarios nombrados al efecto, fondos destinados para obras de reparación de templos, que habiendo sido librados y percibidos hace diez, doce ó más años, ni se hayan invertido en las obras, ni tampoco hayan sido reintegrados al Tesoro como ha debido hacerse, según lo exige el rigor de la contabilidad; y respecto de muchos de los gastados, que todavía se desconozca su inversión, por no haberse dado debida cuenta de ella, ni remitido los documentos que con tal objeto se exigen.

Mientras el servicio de la reparación de templos revista el carácter de obligación que el Estado debe atender, consignando al efecto un crédito en el presupuesto general, no puede prescindirse de las disposiciones y leyes que regulan la pública contratación, ni de aplicar los preceptos de la Ley de Contabilidad. En armonía con aquéllas y ésta, fué modificada la marcha irregular antes seguida, publicándose modelos para su mejor y puntual cumplimiento. Mas para conseguir los fines apetecidos, necesario es que los Prelados, las Juntas diocesanas y las especiales en su caso, secunden como hasta aquí con empeño y actividad los esfuerzos del Gobierno de S. M., procurando, en cuanto de ellas dependa, que no haya demora en la remisión de los documentos y datos que se pidan; pues la experiencia tiene confirmado, y este Ministerio debe hacerlo constar, que en aquellas diócesis que con más escrupulosidad se han sujetado á las disposiciones publicadas, no solo el servicio ha marchado con rapidez, sino que también se han hecho los pagos á los contratistas con menor demora, evitando los entorpecimientos que la irregularidad administrativa fácilmente presenta.

Expuestos los anteriores motivos, que justifican suficientemente la razón de la presente circular, debe el Ministro que suscribe, guiado por el mismo propósito facilitar y hacer más expedita la formación de ciertos proyectos y presupuestos. Dícese en el art. 8.<sup>o</sup> del Real decreto de 13 de Agosto de 1876, que los reconocimientos facultativos de los edificios, formación de planos y proyectos de las obras se harán por el número de arquitectos diocesanos y suplentes que el Ministerio de Gracia y Justicia nombre y juzgue necesarios. Esta disposición absoluta, por la cual se separó de toda intervención en las funciones facultativas en lo relativo á la reparación de templos, á toda otra persona perita que no sea arquitecto, obedeció al escrúpulo con que el Gobierno miró las disposiciones vigentes que determinan las atribuciones que corresponden á dichos profesores, únicos competentes para proyectar y dirigir toda clase de edificios particulares y públicos, entre los cuales no pueden ménos de estar comprendidos los destinados al servicio de la Iglesia.

Pero como no siempre pueden tener desarrollo normal las medidas que en ocasiones se dictan con el mejor deseo, ha acontecido que cuando se trata de reparaciones de poco coste y en templos situados á largas distancias de las capitales donde residen generalmente los arquitectos, á estos se les causan verdaderos perjuicios por tener que abandonar sus habituales ocupaciones y residencia, y se originan además gustos excesivos, atendiendo el importe total de la reparación que se proyecta. Adoptando un temperamento que sin mermar la intervención de los Arquitectos en los presupuestos que se hagan para estas reparaciones, facilite la tramitación de los expedientes, ocasionando también ménos gustos, puede este inconveniente ser menor, autorizando á los maestros de obras, ó á los maestros alarifes para que formen los proyectos y presupuestos para trabajo de pura conservación, cuyo importe material no exceda de 1.250 pesetas y no afecten á partes del edificio que puedan considerarse de mérito artístico; pero pasan lo los proyectos, ántes de que las Juntas los remitan á este Ministerio, á los Arquitectos diocesanos, para que informen sobre ellos, y redacten cuando no lo esté el resumen general del presupuesto, conforme al modelo núm. 1.º de los circulados.

Teniendo presentes las anteriores observaciones, y la diversa práctica seguida por las Juntas en la aplicación de las disposiciones ántes repetidas; con el fin de evitar para lo sucesivo todo motivo de dudas y consultas; y atento el Gobierno de S. M. á poner el servicio de la reparación de templos bajo el uniforme sistema y principios administrativos en que están basados los demás del Estado, salvo sólo las excepciones que la fudole especial de las obras exigidas en algunos templos y á veces su importancia artística aconsejan, circunstancias apreciadas ya al dictarse aquellas; S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien mandar que se cumplan y observen, así por las Juntas diocesanas como por cuantos intervengan en este importante servicio, las prescripciones y reglas siguientes:

1.ª La instrucción de los expedientes previos se sujetará estrictamente á lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Real decreto de 13 de Agosto de 1876; haciéndose constar en ellos los datos necesarios sobre la urgencia de las obras, imposibilidad de costearlas con la consignación ordinaria, informe de la autoridad local, fruto de la cuestación ú oferta del vecindario y cálculo aproximado del importe de la reparación que se solicita. La Junta diocesana, en vista de estos datos, resolverá por medio de acuerdo en los mismos expedientes, si pueden ser incluidos en la relación trimestral; y en caso afirmativo, los clasificará y numerará por orden de preferencia según la urgencia de las obras.

2.ª Para obtener la autorización de obras de reparación en los templos y demás edificios eclesiásticos á que se refiere el decreto citado, las Juntas diocesanas formarán y elevarán á este Ministerio, según previene el art. 14, las relaciones trimestrales acompañadas de los expedientes previos, sobre los que hayan tomado acuerdo favorable. Dichas relaciones se redactarán conforme al siguiente modelo:

DIOCESIS DE.....

*RELACIÓN de los expedientes en solicitud de fondos para obras de reparación, instruídos en esta diócesis con arreglo á los artículos 12 y 13 del Real decreto de 13 de Agosto de 1876, que forma la Junta en conformidad al art. 14 del mismo.*

| Número<br>de<br>órden. | Nombre<br>del<br>edificio. | Localidad<br>en que<br>está situado. | Cálculo<br>aproximado<br>del coste<br>de<br>las obras. | OBSERVACIONES. |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|                        |                            |                                      |                                                        |                |

*(Fecha y firma del Presidente.)*

No se incluirán en relación, según se dispuso por la Real orden circular de 31 de Julio de 1877, los expedientes antiguos que existan en este Ministerio y no hayan sido reclamados por las Juntas, para apreciar si el importe material de las obras del presupuesto formado anteriormente puede fijarse como cálculo exigido para figurar en la relación, y en caso negativo para que se pidan los informes oportunos, conforme al art. 13 del referido decreto.

3.<sup>a</sup> Todos los expedientes previos, ya se refieran á templos ó á conventos, palacios episcopales ó seminarios, se incluirán en una misma relación, con numeración correlativa, que seguirá en las posteriores que se formen. Los que ya figuren en una, no se incluirán ni repetirán en las demás, ni se dará un mismo número á varios expedientes. Si al remitirse la relación considerase la Junta preferentes las obras de algunos de los ya incluidos en las anteriores sobre los cuales no haya recaído la autorización correspondiente, puede hacer de él una recomendación especial sin repetirlo en aquella; tampoco se dará curso ni incluirá en relación, como se previno en la Real orden de 31 de Julio de 1877, á ningún expediente previo referente á edificios que hubiesen sido reparados con fondos del Estado, mientras no esté justificada su inversión; debiendo hacerse constar esta circunstancia en los que en lo sucesivo se instruyan.



4.<sup>a</sup> En ningún caso se acompañarán á los expedientes previos que se remitan con la relación trimestral los proyectos ni presupuestos de las reparaciones que se solicitan, debiendo únicamente constar el cálculo aproximado de las obras; ni las Juntas autorizarán su formación, sinó después de haberlo así resuelto este Ministerio en virtud de lo dispuesto en el art. 15 del referido decreto.

5.<sup>a</sup> Las Juntas diocesanas trasladarán íntegras las Reales órdenes autorizando la forma de proyectos á los Arquitectos respectivos, haciendo constar el cálculo que sirvió de base á cada uno; debiendo el Arquitecto suspender sus trabajos sobre cualquier proyecto cuyo importe pase del límite que fija el art. 16 del decreto, y manifestar á la Junta el aumento que podrá necesitar y las razones que lo hacen indispensable.

6.<sup>a</sup> Los Arquitectos diocesanos se sujetarán escrupulosamente á los modelos circulados y prescripciones de la instrucción, procurando separar con claridad en el resumen del presupuesto las partidas destinadas á la ejecución material de las obras, imprevisto y beneficio industrial que forman el tipo del de la contrata de las demás que se incluyen para gastos del proyecto; y cuando las obras se hagan por Administración, podrán adicionar otra partida para gastos de la Junta especial, que el Gobierno se reserva aprobar según los casos, suprimiéndola siempre que las obras hayan de ejecutarse por contrata.

7.<sup>a</sup> Las Juntas diocesanas podrán encomendar los trabajos necesarios para el reconocimiento de edificios y formación de proyectos de obras autorizadas á los Arquitectos de las diócesis limítrofes cuya residencia esté más próxima, si el de la propia estimare más económico y expedito que así se verifique.

8.<sup>a</sup> Para que exista la debida uniformidad en la remisión de los expedientes y documentos redactados por los Arquitectos, estos funcionarios presentarán por separado, y con cubiertas en que así se exprese, el proyecto y su duplicado, con el informe que previene el art. 8.º de la instrucción; las Juntas, después de llenar los demás requisitos, que según los casos sean necesarios, unirán el proyecto al expediente instruido, y haciendo constar al final de éste el acuerdo que tomen y su informe, le darán curso, acompañando también el duplicado correspondiente.

9.<sup>a</sup> Los proyectos y presupuestos de mera reparación y conservación que no afecten á alguna parte de los edificios considerada de mérito artístico, siempre que el cálculo de la ejecución material de aquéllos no exceda de 1.250 pesetas, podrán formarse, á lo sucesivo, por Maestros de obras y alarifes, designados por las Juntas; debiendo someterse después al informe de los Arquitectos diocesanos, quienes manifestarán principalmente si puede ofrecer algún inconveniente grave la ejecución de las obras, y redactarán, cuando carezcan de él, el resumen del presupuesto y el general de las mismas, con arreglo al modelo número 1.º El Gobierno podrá disponer, una vez terminadas, que sean reconocidas por un Arquitecto para su recepción definitiva. La redacción de dichos presupuestos se sujetará á lo dispuesto en las disposiciones vigentes para este servicio.

10. Las Juntas no autorizarán, ni los Arquitectos formarán presupuestos adi-

cionales á las obras en curso de ejecución, sin que previamente se haya solicitado de esta Superioridad, exponiendo las razones que aconsejen la necesidad de su formación y el cálculo aproximado á que puede ascender su importe; en caso de ser autorizados, se redactarán también por duplicado, en la misma forma que se exige para los presupuestos primitivos.

11. El art. 20 del Real decreto de 13 de Agosto de 1876 dispone que cuando el presupuesto—y debe entenderse el de contrata—exceda de 5.000 pesetas, no se resolverá el expediente sin informe del Gobernador civil, que oirá necesariamente al Arquitecto provincial. Cuando no haya Arquitecto provincial, ó éste sea el autor del proyecto, lo informará el municipal de la capital de la diócesis; y si tampoco lo hubiese, las Juntas remitirán los expedientes y proyectos sin dicho informe, expresando la causa de esta omisión.

12. Los plazos que para comenzar las obras y otorgar la escritura se fijan al contratista en los artículos 12 y 13 de la instrucción, no podrán ser alterados ni sustituidos con otros, según se ha verificado algunos en pliegos de condiciones unidos á los presupuestos; debiendo dar principio forzosamente los trabajos de las obras contratadas dentro de los 30 días, contados desde la fecha de la orden de aprobación de la subasta; sin perjuicio de que si en casos excepcionales no puede el contratista verificarlo, solicite prórroga utilizando el derecho que le concede el artículo 16.

13. Los Arquitectos expedirán las certificaciones de obras en los plazos que se fijan en los pliegos de condiciones particulares de cada contrata, ó en su defecto en el que señala el art. 19 de la instrucción, y serán redactadas con sujeción á los modelos circulados, sin que se haga aumento alguno en concepto de imprevistos; y sólo en el caso de haber ocurrido éstos, se valorarán con las demás obras ejecutadas en el período que abraza la certificación.

14. Cuando las obras subastadas hayan de abonarse, no sólo con recursos del Estado, sino con otros procedentes del fondo de reserva de la diócesis, donativos, limosnas, ofertas vecinales y con el importe de materiales tomados en cuenta en el presupuesto aprobado, valorarán los Arquitectos en las certificaciones que expidan el importe total de las obras ejecutadas en el período que las mismas comprendan, expresando después separadamente la parte que corresponda abonar al Estado, y la que deba serlo por cada uno de los mencionados conceptos.

Igual procedimiento se seguirá al hacer las liquidaciones finales de las obras.

15. La consignación de fondos para pago de obras subastadas se hará en lo sucesivo á nombre de los contratistas, que la percibirán directamente de las Tesorerías de las provincias respectivas, con las formalidades que estas dependencias tienen establecidas. Cuando en casos excepcionales se haga todavía alguna consignación de fondos para pago de obras de reparación á nombre de las Juntas diocesanas, y los habilitados del Clero la cobren directamente del Tesoro, percibirán por este servicio un cuartillo por 100, según se dispuso por Real orden de 27 de

Diciembre de 1858; debiendo hacer entrega de los fondos á los acreedores en un plazo que no exceda de ocho días después del cobro.

Los pagadores que se nombren para obras cuya construcción se haga por Administración, percibirán el tanto por 100 ó remuneración que en cada caso particular se señale, como premio del servicio que prestan y de la obligación que se les impone de rendir cuenta justificada de las sumas que perciban.

16. Los contratistas á cuyo favor se haya adjudicado la subasta para la ejecución de las obras, se hallarán obligados al abono de los gastos que ocasionen la publicación de los anuncios de la subasta en la *Gaceta* y *Boletín oficial* de la provincia, la extensión del acta del remate, el otorgamiento de la escritura de contrata y la copia en papel simple de esta, sin tener que satisfacer otro gasto alguno anterior á los de construcción de las obras.

17. En las actas de los remates se harán constar por los Notarios todas las proposiciones que sean presentadas por los licitadores, expresando si han sido acompañadas del documento en que se acredite haberse constituido el depósito previo de 5 por 100 para tomar parte en el remate, en metálico ó en valores públicos, y la cantidad efectiva ó la nominal del mismo.

18. Los Notarios que autoricen la escritura de contrata harán relación en ella del resguardo ó documento que justifique haberse constituido la fianza del 10 por 100 efectivo, en que se haya adjudicado el remate.

Las Juntas remitirán á este Ministerio una copia en papel simple de la escritura, y cuando en virtud de lo dispuesto en el párrafo último del art. 12 de la instrucción, se dispense de su otorgamiento, se remitirá en el mismo plazo que dicho artículo fija copia del resguardo de la fianza prestada, devolviéndose el original al contratista.

19. Para obviar las dificultades que se han tocado en la práctica en la devolución de las fianzas á los contratistas por no haberse sujetado su constitución á una fórmula precisa, se usará en lo sucesivo la siguiente:

«D. N. N., de su propiedad y para garantir la ejecución de las obras de reparación ó construcción del (templo ó edificio) de..., provincia de..., de cuyas obras es contratista, y á disposición de la Junta diocesana de..., entrega en depósito la cantidad de... (se expresará en letra la suma, determinando si es en metálico ó en valores, y en este caso designando los que sean y teniendo presente que el importe de la fianza ha de ser por su valor efectivo al tipo de cotización y no por el nominal)». Los depósitos para las fianzas pueden ser constituidos por el mismo contratista ó por otra persona que garantice la ejecución del contrato, siendo devueltas á su tiempo al que resulte ser propietario del depósito.

20. En las minutas de honorarios expresarán los arquitectos todos los servicios facultativos que hayan prestado y les sean de abono, fijando según tarifa el importe de los devengados por cada uno de ellos, y haciendo después la deducción correspondiente, conforme á lo dispuesto en el decreto referido.

21. Los Pagadores á cuyo nombre se hacen las consignaciones para pago de

obras autorizadas por administración, darán cuenta, conforme al modelo número 5.º de los circulados, de la fecha de su cobro y justificarán su inversión, según previene el art. 37 de la Instrucción, dentro del plazo fijado en las disposiciones vigentes.

No habiendo rendido todos los Pagadores las cuentas de las obras que se han ejecutado por administración, dentro del citado plazo, deberán verificarlo, los que estén en descubierto del cumplimiento de este servicio, en el término de un mes, á contar desde que la presente circular sea recibida en la diócesis.

22. El art. 27 de la Instrucción previene que se dé cuenta á este Ministerio de la terminación de las obras, para que se designe el arquitecto que haga la recepción provisional de las mismas. Si pasados veinte dias desde la fecha en que se haya remitido por la Junta la comunicación haciéndolo presente, no se hubiese hecho dicha designación, el Prelado dará orden al arquitecto diocesano para que lo verifique. Igual procedimiento se seguirá, cuando terminado el plazo de garantía y responsabilidad del contratista deba hacerse, conforme al art. 32, la recepción definitiva de las obras.

23. No se tratará más que de un solo asunto en cada comunicación.

Para evitar la confusión que resulta de la práctica contraria, serán devueltas á las Juntas diocesanas respectivas, con aquel objeto, las que comprendan diversos expedientes en un solo oficio.

24. Se excita el celo de los Presidentes de las Juntas diocesanas para que, haciendo uso de su autoridad, eviten el retraso que se observa en la tramitación de algunos expedientes, y que ni aquellas ni los arquitectos dejen de promover, y dar por su parte, el más pronto y exacto cumplimiento á las órdenes que se expiden por este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. para su inteligencia y cumplimiento. sirviéndose V. acusar el recibo de la presente circular. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1880.—Alvarez Bugallal.

## **Sobre vasos y ornamentos sagrados.**

R. O. DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 1862.

En cumplimiento de lo acordado con Su Santidad en las disposiciones que dejamos trascritas, se consignaron en la ley de 7 de Abril de 1861, diez millones de reales para ornamentos, vasos sagrados y demás efectos necesarios para el culto. El procedimiento que debía seguirse en la inversión de estos fondos, se marca en la Real orden que espresa el epígrafe, cuyo texto literal es como sigue. "Con el fin de que las iglesias parroquiales no carecan de los ornamentos, "vasos sagrados y demás efectos que, según rúbrica, son necesarios para el culto, consignó diez millones de reales la ley de 7 de Abril de 1861; pero como

“esta cantidad no puede aplicarse desde luego en su totalidad al referido objeto, “sinó en el tiempo y forma que se determina en la ley vigente de los presupuestos generales del Estado y se ordene en los sucesivos, es conveniente que la inversión de los fondos disponibles en la actualidad, así como los correspondientes á los años venideros, se verifique de una manera equitativa, y que responda en lo posible á las verdaderas y más apremiantes necesidades de las parroquias. Al efecto S. M. la Reina (q. D. g.) se ha servido mandar, que los respectivos curas párrocos instruyan el oportuno expediente, que será elevado á este “Ministerio por el diocesano, con su informe, observando en su tramitación las “reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> “En el expediente se hará constar por medio de inventario, el número “de ornamentos sagrados que á la sa ón existan en la iglesia parroquial, expresando su clase y calidad, estado actual de servicio y duración probable.

2.<sup>a</sup> “Lo establecido en la precedente regla, es aplicable á los vasos sagrados y demás objetos destinados al culto.

3.<sup>a</sup> “Al expediente acompañará una nota ó lista, en que con la debida claridad aparezca el número de vasos, ornamentos sagrados y demás objetos que, “según rúbrica, sean de absoluta é imprescindible necesidad para el servicio del “culto con el presupuesto detallado de su importe.

4.<sup>a</sup> “También se hará constar la categoría de la parroquia, el número de “eclesiásticos adscritos al servicio de la misma, y el de los feligreses que cuenta.

5.<sup>a</sup> “Hecha á favor del respectivo diocesano la consignación de fondos con “exclusivo destino á la reparación ó adquisición de los vasos, ornamentos y demás objetos de que se hace mérito, se elevará á este Ministerio por conducto “del prelado, y con su informe, cuenta documentada de la inversión de dichos “fondos.

## NUMERO 3.<sup>o</sup>

### CEMENTERIOS

#### Enterramiento en las Iglesias.

R. O. DE 12 DE MAYO DE 1849.

De varios expedientes instruidos en el Ministerio de mi cargo, resulta que en algunos puntos existe todavía notable propensión, así á inhumar los cadáveres como á trasladar sus restos á cementerios ó panteones particulares situados dentro del poblado, y con el objeto de prevenir los abusos á que semejante tendencia pudiera dar lugar, con detrimento de la salud pública, la Reina



(Q. D. G.) oído el parecer del Consejo de Sanidad, y conforme con su dictamen, se ha servido resolver:

1.<sup>o</sup> Que continúe indefinida la prohibición de enterrar los cadáveres, y de trasladar y colocar sus restos en las iglesias, panteones ó cementerios que estuvieren dentro de poblado.

2.<sup>o</sup> Que el permiso concedido por la regla 2.<sup>a</sup> de la R. O. circular de 19 de Marzo de 1848, para trasladar cadáveres á cementerio ó panteón particular, se entiendan, si estos se hallan situados fuera de las poblaciones.

Y 3.<sup>o</sup> Que sólo queden vigentes las excepciones que en favor de los MM. RR. arzobispos, R. obispos y religiosas, establecieron las Rs. Ords. de 6 de Octubre de 1806, 13 de Febrero de 1807 y 30 de Octubre de 1835.

### R. O. DE 26 DE JULIO DE 1883.

Dada cuenta á S. M. del expediente instruido en este Ministerio á consecuencia de la consulta elevada al mismo por V. S. sobre si las Hermanitas de los Pobres de esa capital podrían construir un cementerio especial á 200 metros de distancia del Asilo en que habitan, destinado únicamente á sepulturas de las religiosas.

Vistas la Real orden de 17 de Octubre de 1805, que prohíbe que las comunidades eclesiásticas, sean de la clase que fuesen, establezcan para su uso cementerios particulares; la de 30 de Octubre de 1835 prescribiendo que solamente los cadáveres de las religiosas profesas en claustrura puedan ser enterradas en los atrios ó huertos de sus conventos, conduciéndolos, en caso de que aquéllos no reúnan buenas condiciones higiénicas, á los cementerios públicos; la de 12 de Mayo de 1849, dictada con el mismo espíritu de prohibición que la precedente, reservando, sin embargo, los privilegios concedidos á los reverendos prelados y religiosas por disposiciones anteriores; la de 28 de Agosto de 1850, 22 de Junio de 1860, 7 de Febrero de 1865, y 19 de Mayo de 1882, que previenen no podrá construirse ningún cementerio á menor distancia de 1.000 metros de poblado; la de 17 de Febrero y 22 de Noviembre de 1879, dictadas con audiencia del Real Consejo de Sanidad, prohibiendo la construcción de cementerios particulares, solicitada por los colegios de misioneros de Avila y de Veruela (Zaragoza):

Considerando que las Hermanitas de los Pobres del Asilo de Ancianos de esa capital no constituyen comunidad religiosa.

Considerando que aunque no se hallaran en este caso no podría accederse á la pretensión, por cuanto el terreno destinado por ellas á establecer el referido cementerio no reúne las condiciones de emplazamiento que las disposiciones vigentes determinan:

Considerando que las leyes dictadas en todo tiempo sobre esta materia es-

tán informadas en el sentido de que los enterramientos de los cadáveres humanos se verifiquen en cementerios comunes y distante de poblado:

Considerando que de acceder á lo solicitado por las Hermanitas de los Pobres, se sentaría una jurisprudencia contraria al espíritu de la legislación vigente y á los preceptos de la higiene:

Considerando que pretensiones idénticas se repiten con frecuencia, por ignorancia sin duda de las disposiciones vigentes, que son motivos de rémora para la Administración;

S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo informado por la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, se ha servido disponer lo siguiente:

1.º Que se desestime la solicitud de las Hermanitas de los Pobres del Asilo de ancianos de esa capital.

2.º Que en lo sucesivo se deniegue toda instancia solicitando autorización para construir cementerios particulares, cualesquiera que sean las circunstancias y condiciones que en la pretensión concurren.

3.º Que se reserven los privilegios concedidos en la Real orden de 12 de Mayo de 1849 en favor de los reverendos prelados y de las religiosas en clausura, teniendo en cuenta respecto á éstas cuanto dispone la regla 3.ª de la R. O. de 30 de Octubre de 1835.

4.º Que esta disposición se considere de carácter general para cuantos casos análogos puedan ocurrir en lo sucesivo.

Y 5.º Que se publique en la *Gaceta de Madrid* y en los *Boletines oficiales* de provincia esta Real disposición.

De Real orden, etc.—Madrid 26 de Julio de 1883.—Gullón.—Sr. Gobernador de la provincia de Vizcaya.

#### R. O. DE 30 DE OCTUBRE DE 1835.

Se mandó llevar á efecto lo prevenido en la Real cédula de 10 de Mayo de 1818, b'jo las reglas siguientes:

«1.ª Que hayan de sepultarse los cadáveres de las religiosas precisamente en los atrios ó huertos de los monasterios ó conventos, señalándose en ellos para este destino un paraje, con prohibición de que pueda hacerse en los coros bajos y en las iglesias.

2.ª Que los gobernadores civiles reconozcan los huertos y atrios asegurándose de su ventilación y demás requisitos necesarios antes de prestar su aprobación para la inhumación en ellos.

3.ª Que los cadáveres de las religiosas que fallecieren en monasterios ó conventos en que no haya huerto ó atrio ventilado donde sepultarlos, se conduzcan á los cementerios públicos, en los cuales se demarcará el lugar que pareciese más á propósito.

4.ª Que los gobernadores civiles, asociados de un regidor y del síndico pro-

curador general, reconozcan todos los monasterios y conventos de religiosas de las capitales para asegurarse de la existencia en ellos de huertos ó lugares proporcionados para el enterramiento, prohibiendo desde luego que éste se verifique en otra parte.

Y 5.<sup>a</sup> Que en los pueblos subalternos de la capital den comisión los gobernadores civiles al sujeto que tuvieren por oportuno, para que en unión con un regidor y el síndico procurador general ejecute la visita con el objeto indicado.

## Construcción de Cementerios

### REAL CÉDULA DE 3 DE ABRIL DE 1787.

1. He tenido á bien resolver y mandar que se observen las disposiciones canónicas, de que soy protector, para el restablecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios, según lo mandado en el Ritual Romano y en la ley 11, tít. XIII, P. 1.<sup>a</sup>, cuya regla y excepciones quiero se sigan por ahora, con la prevención de que las personas de virtud ó santidad, cuyos cadáveres podrán enterrarse en las iglesias según la misma ley, hayan de ser aquellas por cuya muerte deban los ordinarios eclesiásticos formar procesos de virtudes y milagros, ó depositar sus cadáveres conforme á las decisiones eclesiásticas; y los que podrán sepultarse, por haber escogido sepulturas, hayan de ser únicamente los que ya las tengan propias al tiempo de expedirse esta cédula.

2. Para que todo se ejecute con la prudencia y buen orden que deseo en beneficio de la salud pública de mis súbditos, decoro de los templos y consuelo de las familias cuyos individuos se hayan de enterrar en los cementerios, se pondrán de acuerdo con los prelados eclesiásticos los corregidores, como delegados míos y del Consejo en todo el distrito de sus partidos, procurando llevar por partes esta importante materia, comenzando por los lugares en que haya ó hubiere habido epidemias, ó estuviesen más expuestos á ellas, siguiendo por los más populosos y por las parroquias de mayores feligresías en que sean más frecuentes los entierros y continuando después por los demás.

3. Se harán los cementerios fuera de las poblaciones, siempre que no hubiere dificultad invencible ó grandes anchuras dentro de ellas, en sitios ventilados é inmediatos á las parroquias, y distantes de las casas de los vecinos; y se aprovecharán para capillas de los mismos cementerios las ermitas que existan fuera de los pueblos, como se ha empezado á practicar en algunos con buen suceso.

4. La construcción de los cementerios se ejecutará á la menor costa posible, bajo el plan ó diseño que harán formar los curas de acuerdo con el corregidor del partido, que cuidará de estimularlos, y expondrá al prelado su dictámen en los casos en que haya variedad ó contradicción para que se resuelva lo conveniente.

5. Con lo que resolviese ó resultase se procederá á las obras necesarias, costeándose de los caudales de fábrica de las iglesias si los hubiere; y lo que faltare se prorrateará entre los partícipes en diezmos, incluidas mis Reales tercias, excusado y fondo pío de pobres, ayudando también los caudales públicos con mitad ó tercera parte del gasto, según su estado, y con los terrenos en que se haya de construir el cementerio, si fueren concrjiles ó de propios.

6. Los fiscales del Consejo se encargarán en esta parte de la más exacta y arreglada ejecución, y me darán cuenta de tiempo en tiempo de lo que se vaya adelantando haciendo uso con los prelados y corregidores del reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, hecho con acuerdo del ordinario eclesiástico en lo que sea adaptable, para allanar dificultades y resolver las dudas que puedan ocurrir en otros pueblos.

#### R. O. DE 8 DE AGOSTO DE 1830.

Enterado el Rey nuestro Señor del expediente instruido á consecuencia de las contestaciones que han mediado entre el M. R. arzobispo de Granada y el corregidor y Ayuntamiento de dicha capital sobre la construcción de un cementerio, á cuya obra se pretende que contribuyan los fondos de propios; S. M., conformándose con lo expuesto por V. I. en 16 de Junio último, se ha servido mandar que se lleven á efecto las Rs. Ords. de 13 de Enero y 17 de Julio de 1807, y la de 20 de Enero de 1808 que se citan en este expediente, en las que se designan los fondos de fábrica y Junta decimal como responsables á costear las obras de que se trata, á que se agrega además el que se utiliza el ramo de fábrica de iglesias de aquella ciudad de lo que se contribuye por el terreno de las sepulturas á razón de 75 reales que percibe por cada cuerpo de aquella vasta población.

#### R. O. DE 26 DE NOVIEMBRE DE 1857.

Se ha enterado la Reina (Q. D. G.) con profundo sentimiento de que, apesar de las reiteradas disposiciones dictadas hasta el día, aún hay en España 2.655 pueblos que carecen de cementerio, lo cual es tanto más de extrañar en este país eminentemente católico, en cuanto á que esos venerandos asilos, consagrados por la religión, son á la vez garantía segura de publica salubridad. Y deseando S. M. poner remedio á esta falta, se ha servido mandar, con fecha de hoy, que adoptando V. S. dentro de sus facultades las medidas más eficaces, procure que en el menor término posible se construya, cuando ménos, un cercado fuera de cada población con destino á cementerio, previa aprobación por quien corresponda del presupuesto y obras que al efecto se propongan por los respectivos Ayuntamientos.

R. O. DE 19 DE ABRIL DE 1862

Vista la carta de V. E. en que da cuenta del expediente promovido por el Ayuntamiento de esta capital (La Habana) para construir por su cuenta un cementerio general en la misma, y pide se definan las atribuciones que á las autoridades civil y eclesiástica correspondan en la construcción, reparación y entretenimiento de los cementerios; la Reina (Q. D. G.), de conformidad con lo manifestado por el Consejo de Estado en pleno, se ha servido resolver:

1.º Que el cementerio en cuestión se lleve á efecto por el Rdo. obispo con los fondos que dice tener reunidos para ello, sin tocar á los públicos y sin gravamen alguno del vecindario, todo sin perjuicio de que la autoridad civil tenga la intervención que le corresponde, así en la elección del local como en lo demás que toque á la salubridad pública.

2.º Que la administración de los productos del cementerio corresponde á la autoridad eclesiástica sin perjuicio de las atribuciones de V. E. como vice-real patrono en la fijación y-revisión de tarifas, á fin de que éstas sean siempre beneficiosas al vecindario, si los productos, como parece natural, fuesen superiores á la conservación de las fábricas y demás gastos.

Y 3.º Que para uniformar las disposiciones que deban regir en lo sucesivo en materia de construcción de cementerios, administración de sus fondos, y cuantos particulares puedan ser á ellos referentes, forme V. E. expediente en que oiga á las corporaciones y oficinas que crea conveniente, al M. Rdo. arzobispo de Cuba y Rdo. obispo de esa ciudad, y al Consejo de Administración, remitiéndole en seguida con su informe para la oportuna resolución.

R. O. DE 20 DE OCTUBRE DE 1876.

Se declararon de utilidad pública las obras de construcción de un cementerio en la ciudad de San Sebastián, desestimando las reclamaciones del propietario de unos terrenos que se oponía á la ocupación fundándose en que podía construirse en otra parte y que se inutilizaba su finca que era de las más apreciadas en los contornos, la cual debería ser expropiada, previa la instrucción del expediente, con arreglo á las disposiciones vigentes.

R. O. DE 17 DE FEBRERO DE 1886.

Dada cuenta á S. M. del expediente instruido en esa Dirección general con motivo de la consulta hecha por el gobernador civil de la provincia de la Coruña á causa de las dificultades que se ofrecen á los Ayuntamientos para emplazar los nuevos cementerios á las distancias marcadas en la R. O. de 19 de Mayo de 1882; oído el parecer del Real Consejo de Sanidad y de la sección de Gobernación del Consejo de Estado, y teniendo en consideración la urgencia de resolver la indicada



consulta, dando con ello solución á las muchas dificultades que de índole parecida surgen continuamente en las provincias, cuyos Ayuntamientos tienen su población diseminada en caseríos, parroquias y barrios separados entre sí; y atendiendo, finalmente, á que la ampliación que para las disposiciones relativas á inhumaciones y exhumaciones propone la Sección de Gobernación del referido Consejo de Estado han de tenerse en cuenta en la ley de Sanidad, cuya preparación y estudio permite más amplitud de tiempo; la Reina (Q. D. G.), Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por ese Centro directivo, se ha dignado mandar que para autorizar las construcciones de nuevos cementerios, tanto en la Coruña como en las demás provincias, se observen las siguientes prescripciones de carácter general:

Primera. Para construir nuevos cementerios será precisa la autorización del Ministro de la Gobernación previo el oportuno expediente y dictámen razonado del Real Consejo de Sanidad.

Segunda. Este expediente se instruirá por los respectivos Ayuntamientos, oyendo á la Junta municipal de Sanidad y cura párroco.

Tercera. Se harán constar en el mismo por medio del oportuno plano, autorizado por un arquitecto, ingeniero ó maestro de obras, si en la localidad no hubiese de los primeros, la superficie del cementerio en proyecto, distancia media de la población, orientación contraria á los vientos que más comunmente reinan en la localidad, fijación de rumbos con gran precisión, y especificando las condiciones geológicas del terreno.

Cuarta. A estos datos deberá agregarse el informe de dos médicos, en que se hagan constar las condiciones higiénicas del nuevo cementerio, su proximidad á los ríos más inmediatos, acueductos, manantiales, lagunas, etc., y cuanto sea conveniente para poder apreciar las buenas ó malas condiciones del sitio elegido para establecerlo.

Quinta. Se unirá al expediente certificado expresivo del número de defunciones ocurridas en el último decenio, deduciéndose de él el de cadáveres que corresponda al año común.

Sexta. Informe razonado del Ayuntamiento, referido á los años que podrá utilizarse el nuevo cementerio, dado el número de cadáveres que haya que inhumar en cada año.

Sétima. La capacidad del cementerio deberá ser bastante para que pueda utilizarse, cuando menos, por el espacio de 20 años sin necesidad de remover los restos mortales.

Octava. Hechos constar estos datos en el proyecto, y levantado el oportuno plano de edificación, marcando el perímetro que se destine á la capilla, habitación del capellán y empleados del cementerio, depósito de cadáveres, almacén de efectos fúnebres, sala de autopsias, y cerca destinada al sepelio de los que fallezcan fuera de la religión católica, se pasará todo lo actuado al gobernador, para que después de oír á la Junta provincial de Sanidad y al arquitecto de la Diputación, lo eleve á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Novena. No se dará curso por la autoridad superior de la provincia á ningún proyecto de construcción de cementerio si el lugar propuesto para emplazarlo no dista cuando ménos dos kilómetros de la última casa de la población en el caso de que esta sea ó exceda de 20.000 habitantes. En las de menor vecindario podrán construirse á 1.000 metros de distancia si el censo no es menor de 5.000 habitantes, y si lo fuere, á 500 metros.

Décima. Dada la formación de algunos términos municipales, cuyo vecindario en vez de tener sus habitaciones agrupadas están esparcidas por todo él, sin que pueda elegirse terreno que diste de todas las edificaciones la distancia marcada en las disposiciones precedentes, el Gobierno podrá autorizar la reducción de conformidad con lo que propongan los Ayuntamientos y Juntas de Sanidad, aunque eligiendo en todo caso el lugar más apropiado, y que resulte equidistante de todos los caseríos.

Undécima. Llegado el expediente á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad, ésta lo pasará al Real Consejo de Sanidad del Reino para que informe cuanto se le ofrezca y parezca acerca del proyecto y sus condiciones higiénicas; y oído el dictámen del expresado Cuerpo, consultará con S. M. la aprobación ó lo que creyere más justo y conveniente.

Duodécima. Quedan derogadas todas las circulares y Reales órdenes dictadas acerca de la construcción de cementerios que estén en oposición con lo dispuesto en la presente. La Dirección general de Beneficencia y Sanidad promoverá el oportuno expediente para que, oídas las autoridades y Corporaciones que deben intervenir en el asunto, se apruebe por S. M. un reglamento general del orden y régimen interior de los cementerios, recopilando ó reformando las disposiciones que actualmente están en vigor.

De Real orden, etc.—Madrid 17 de Febrero de 1886.—Gonzalez.—Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.

## R. O. DE 22 DE ABRIL DE 1887.

Pasado á informe de las Secciones de Gobernación, Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente instruido á instancia de varios arquitectos en solicitud de que se reforme la disposición 3.<sup>a</sup> de la Real orden de 17 de Febrero de 1886, sobre construcción de cementerios, dicho Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictámen:

“Excmo. Sr.: Las Secciones han examinado el expediente promovido á instancia de varios arquitectos en solicitud de que se reforme la disposición 3.<sup>a</sup> de la Real orden de 17 de Febrero de 1886 sobre construcción de cementerios.

Con objeto de evitar las dificultades que se ofrecían á los Ayuntamientos para emplazar los nuevos cementerios á las distancias establecidas por la Real orden de 19 de Mayo de 1882, se dictó la Real orden de 17 de Febrero de 1886, en cuya disposición 3.<sup>a</sup> se establecía en el expediente que según en la misma se

disponía debían incoar los Ayuntamientos para la construcción de los nuevos cementerios, se haría constar por medio del oportuno plano autorizado por un arquitecto, ingeniero ó maestro de obras, si en la localidad no hubiese de los primeros, la superficie del cementerio en proyecto, distancia de la población, orientación, según los vientos que más comunmente reinan en la localidad, etc.

En 3 de Marzo de 1886 acudieron varios arquitectos, residentes en Granada, en solicitud de que se aclarase dicha Real orden por considerar atentatoria á sus derechos la disposición 3.<sup>a</sup> citada que en ella se contiene, solicitud á que luego se han adherido otros varios arquitectos de distintas provincias: fundan todos ellos su reclamación en que dicha Real orden concede á los ingenieros facultades extrañas á su clase, y á los maestros de obras atribuciones que no están en armonía con la limitación de sus estudios, y en que siendo los cementerios edificaciones públicas, á los arquitectos les corresponde formar sus planos por ser de su exclusiva competencia todo lo que á aquéllas se refiere, por lo que dicha Real orden debería aclararse en el sentido de que sólo los arquitectos pudieran hacer los planos de los cementerios.

Remitido el expediente á informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ésta lo emitió en 1.<sup>o</sup> de Julio de 1886 en el sentido de que procedía acceder á lo solicitado.

El estado lamentable en que se encuentran la mayor parte de los cementerios en España, faltos de toda clase de condiciones higiénicas, estado que hacía más grave la epidemia cólica últimamente desarrollada, dió origen á varias disposiciones que tendían á evitar dichos inconvenientes, y entre ellas á la Real orden de 17 de Febrero de 1886, en la que se procuraba facilitar á los pueblos de escasa importancia la reforma, y á evitar que por los cuantiosos gastos que la construcción de nuevos cementerios les produjese, incompatibles con el estado del Erario municipal, se vieran imposibilitados de plantearla, continuando con el antiguo cementerio, sufriendo los perjuicios que el mismo causaría á la salud en la localidad; y á conseguir esto tiende la disposición 3.<sup>a</sup>, cuya declaración solicitan los arquitectos por creerse por ella perjudicados; es cierto que el art. 6.<sup>o</sup> del reglamento de 22 de Julio de 1884 les otorga el derecho de proyectar y dirigir toda clase de edificios que fuesen costeados con fondos públicos ó de corporaciones, así como aquellos que, aunque de propiedad particular, tuviesen uso público, como capillas, hospitales, teatros, etc.; pero en esta disposición no pueden de lleno considerarse incluidos los cementerios, y ménos aquellos de los pueblos que no han de ir acompañados de edificación alguna que por su importancia requiera se la considere comprendida en la citada disposición.

Pero además hay que tener en cuenta los intereses de los pueblos de poco vecindario y escasos medios económicos, y si bien deben atenderse los derechos de los arquitectos, no hasta el punto de sacrificar á aquéllos en aras de éstos, é imposibilitar á dichos pueblos para construir nuevos cementerios que reúnan las debidas condiciones, imponiéndoles para ello gastos que no pueden sufragar,

sinó por el contrario, ha de facilitárseles los medios de hacerlos; al efecto la citada Real orden con tal propósito, previendo el caso de que la autorización de un arquitecto no fuese fácil de obtener, establece las personas que podían suplirla, citando en primer lugar á los ingenieros, en segundo á los maestros de obras, si bien dicha disposición debiera entenderse siempre en el sentido del preferente derecho por parte de los arquitectos para proyectar los planos de los cementerios, pudiéndolo hacer sólo en su falta los ingenieros, en la de éstos los maestros de obras en las poblaciones de pequeña importancia, para lo cual se podría tener en cuenta que éstos últimos están autorizados en los pueblos de ménos de 2 000 vecinos por el art. 3.º del reglamento de 31 de Diciembre del 53, para proyectar y construir edificios de particulares, pudiendo considerarse esta autorización como la que ha de servir de base para la aclaración.

En resumen, la Sección opina que procede aclarar la Real orden de 17 de Febrero de 1886 en el sentido de que en la construcción de cementerios deberá intervenir un arquitecto, excepto en las poblaciones de ménos de 2.000 vecinos; en las que si no los hubiera, podrán ser sustituidos por un ingeniero, y á falta de él por un maestro de obras.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden, etc.—Madrid 22 de Abril de 1887.—León y Castillo.—Señor Director general de Beneficencia y Sanidad.

### R. O. DE 16 DE JULIO DE 1888.

Las malas condiciones higiénicas y de capacidad de gran número de cementerios, motivaron en el año de 1884 que se mandasen clausurar 7.186 de los 10.091 que componían el total de los existentes.

Posteriormente, por R. O. de 17 de Febrero de 1886, se acordó la manera de tramitar los expedientes que se promovieran para autorizar la construcción de nuevos cementerios, para que obedeciendo á reglas generales de higiene, reuniesen todas las condiciones apetecibles sin riesgo para la salud pública.

Estas dos disposiciones es indudable que han dado un satisfactorio resultado, puesto que desde que fueron acordadas se ha autorizado la construcción de más de 200 cementerios.

Pero como la necesidad de dar mayor impulso á estas construcciones es reconocida como de grandísima conveniencia, el Gobierno se cree en el deber de ampliar y reformar la mencionada Real Orden de manera que se den mayores facilidades á los pueblos, á fin de que estos, en la proporción que les permitan sus recursos y con relación á las necesidades del vecindario, puedan con más brevedad atender á un servicio tan importante y que tanto reclama la higiene pública.

Por estas razones y consideraciones, de acuerdo con lo manifestado por las Direcciones generales de Beneficencia y Sanidad y de Administración local; S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido mandar que para la aprobación de los expedientes de nueva construcción de cementerios se observen las reglas siguientes:

Primera. Los expedientes que se promuevan para la construcción de nuevos cementerios, cuyas obras importen 15.000 ó más pesetas, seguirán la tramitación siguiente:

1.º El expediente se instruirá por los respectivos Ayuntamientos, oyendo á la Junta municipal de Sanidad y cura párroco.

2.º Se harán constar en el mismo por medio del oportuno plano, autorizado por un arquitecto, ingeniero ó maestro de obras, si en la localidad no hubiere de los primeros, la superficie del cementerio en proyecto, distancia media de la población, orientación contraria á los vientos que más comunmente reinen en la localidad, fijación de rumbos con gran precisión, especificando las condiciones geológicas del terreno.

3.º A estos datos deberá agregarse el informe de dos médicos, en que se haga constar las condiciones higiénicas del nuevo cementerio, su proximidad á los ríos más inmediatos, acueductos, manantiales, lagunas, etc., y cuanto sea conveniente para poder apreciar las buenas ó malas condiciones del sitio elegido para establecerlo.

4.º Se unirá al expediente certificado expresivo del número de defunciones ocurridas en el último decenio, deduciéndose de él el de cadáveres que correspondan al año común.

5.º Informe razonado del Ayuntamiento, referido á los años que podrá utilizarse el nuevo cementerio, dado el número de cadáveres que hayan de inhumarse en cada año.

6.º La capacidad del cementerio deberá ser bastante para que pueda utilizarse, cuando menos, por el espacio de veinte años sin necesidad de remover los restos mortales.

7.º Hechos constar estos datos en el proyecto, y levantado el oportuno plano de edificación, marcando el perímetro que se destine á la capilla, habitación del capellán y empleados del cementerio, depósito de cadáveres, almacén de efectos fúnebres, sala de autopsias y cerca destinada al sepelio de los que fallezcan fuera de la religión católica, se pasará todo lo actuado al gobernador para que, después de oír á la Junta provincial de Sanidad y al arquitecto de la Diputación, lo eleve á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

8.º No se dará curso por la autoridad superior de la provincia á ningún proyecto de construcción de cementerio, si el lugar propuesto para emplazarlo no dista cuando ménos 2 kilómetros de la última casa de la población, en el caso de que ésta sea ó exceda de 20.000 habitantes. En las de menos vecindario po-



drán construirse á 1.000 metros de distancia si el censo no es menor de 5.000 habitantes, y si lo fuere, á 500 metros.

9.ª Dada la formación de algunos términos municipales, cuyo vecindario, en vez de tener sus habitaciones agrupadas, están esparcidas por todo él, sin que pueda elegirse terreno que esté de todas las edificaciones á la distancia marcada en las disposiciones precedentes, el Gobierno podrá autorizar la reducción, de conformidad con lo que propongan los Ayuntamientos y Juntas de Sanidad, aunque eligiendo en todo caso el lugar más á propósito y que resulte equidistante de todos los caseríos.

10. Llegado el expediente á la dirección general de Beneficencia y Sanidad, ésta lo pasará al Real Consejo de Sanidad del Reino para que informe cuanto se le ofrezca y parezca acerca del proyecto y sus condiciones higiénicas; y oído el dictámen del expresado Cuerpo, consultará con S. M. la aprobación ó lo que creyese más justo y conveniente.

Segunda. Cuando el importe de las obras esté consignado en los presupuestos aprobados, la Dirección general de Beneficencia y Sanidad propondrá á S. M. á la vez que la aprobación del proyecto, la autorización para verificar la subasta de contratación en los términos marcados en el Real decreto de 4 de Enero de 1883.

A este efecto, los Ayuntamientos cuidarán de enviar con el proyecto certificación que acredite que el importe del mismo, está consignado en el presupuesto aprobado, y los pliegos de condiciones facultativas y económicas que han de servir de base á la subasta.

Quando á la vez que los proyectos de obras y pliegos de contratación de las mismas venga con los expedientes la propuesta de recursos, la Dirección de Beneficencia, antes de proponer acuerdo definitivo, pasará el expediente á la de Administración local para que en el término de quince días lo devuelva informado y pueda someterse también este particular á la resolución de S. M.

Tercera. Los proyectos de nueva construcción de cementerios, cuyo coste no llegue á 15.000 pesetas se aprobarán por los gobernadores de las provincias, oyendo á la Comisión permanente de la Diputación provincial.

Cuarta. Los gobernadores de las provincias quedan autorizados para dispensar á los Ayuntamientos de la construcción de las dependencias que se siguen como necesarias en la disposición primera, cuando la escasez del vecindario y los pocos recursos con que cuente el Municipio imposibiliten al Ayuntamiento de hacer esos gastos; pero en ningún caso podrán dispensar que en los nuevos cementerios haya una modesta capilla, sala de depósito de cadáveres, y un espacio destinado á dar decorosa sepultura á los cadáveres de los que fallezcan fuera del gremio de la religión católica.

Quinta. Los gobernadores de las provincias darán cuenta todos los meses á la Dirección general de Beneficencia y Sanidad del número de expedientes en curso y de los proyectos que aprueben.

Sexta. La resolución de estos expedientes deberán dictarla los gobernadores al

mes de presentados éstos con los documentos que exige la referida disposición primera.

Setima. Los gobernadores de provincia acusarán recibo de esta disposición y darán cuenta de haberla mandado insertar en el *Boletín oficial*.

De Real Orden, etc.—Madrid 16 de Julio de 1888.—Moret.—Sres. Directores generales de Beneficencia y Sanidad y de Administración local.

## Sobre propiedad de Cementerios.

### DECISIONES DE 8 Y 12 DE ENERO DE 1884.

El Ayuntamiento de Barcelona acordó en 21 de Junio de 1881 disolver la Junta de cementerios que á la sazón existía en la ciudad y crear en su lugar nueva Junta que, como delegada y dependiente de la Municipalidad cuidara del cementerio general existente, y de lo relativo al establecimiento de otro nuevo. El obispo de la diócesis entabló demanda para que se declarase que el cementerio general era propiedad de la Mitra, á la cual correspondían sus productos y administración, sin perjuicio de la intervención del Ayuntamiento en materia de policía y salubridad, y que se declarase nulo el acuerdo citado y se revocase por contrariar la administración que exclusivamente correspondía á la Mitra, etcétera. El Gobernador de la provincia requirió de inhibición á la Sala de lo civil de la Audiencia del distrito cuando ésta conocía de la reclamación, y formalizada competencia, *se decide á favor de la autoridad judicial*, visto el art. 172 de la ley municipal, el 2.º de la ley orgánica de Tribunales de 1870 y

Considerando: 1.º Que la demanda incoada por el reverendo obispo de Barcelona, va dirigida á que se declare que el cementerio de aquella ciudad es propiedad de la Mitra, y á que se revoque el acuerdo del Ayuntamiento de 21 de Junio de 1881, en cuanto por él se disminuyen ó menoscaban los derechos dominicales inherentes á la propiedad del expresado cementerio;

2.º Que la misma demanda deja á salvo las facultades que las leyes confieren á los Ayuntamientos sobre policía, higiene y salubridad de las poblaciones, para que sobre estos extremos adopte el de Barcelona las medidas que tenga por conveniente sobre el cementerio de aquella ciudad, y en tal concepto no puede dudarse que la reclamación del reverendo obispo está circunscrita á los derechos civiles que nacen del título de propiedad sobre el expresado cementerio.

3.º Que con arreglo al art. 172 de la ley municipal anteriormente citada, puede, el que se crea perjudicado en sus derechos civiles por los acuerdos de los Ayuntamientos, reclamar contra ellos mediante demanda ante el juez ó Tribunal competente; y tratándose de una reclamación que se funda en un título

lo civil, como es el de propiedad, es incuestionable que los Tribunales son competentes para conocer de tal reclamación, con arreglo á las leyes del fuero común.

El Ayuntamiento de Barcelona creó en 1836 una Junta de cementerio rural compuesta del alcalde, un teniente, del diocesano ó su vicario, cuatro regidores, el procurador del común y dos obreros de las parroquias eligidos por las obras mismas, la cual después de empeñada oposición del prelado, á que puso término el Gobierno por dos Reales órdenes, se hizo cargo de los caudales, libros y documentos del cementerio, aprobando por fin en 1839 un reglamento para el gobierno de la Junta. En Junio de 1881 la Corporación municipal acordó la disolución de la Junta de cementerios de la ciudad; de la creación de otra, que como delegada y dependiente de la Municipalidad, cuidara del cementerio general existente y de lo relativo al establecimiento de otro nuevo que se tenía proyectado.

Los representantes de las Juntas de obras de las iglesias parroquiales entablaron demanda ordinaria para que se dejara sin efecto la anterior resolución y se restableciera á las obras en la posesión de su derecho civil á percibir una parte de los productos y á participar de la administración del edificio, pidiendo además por otrosí, que antes de emplazar al demandado el Juzgado suspendiese el acuerdo.

Denegada esta solicitud incidental y apelada la negativa para ante la Audiencia del distrito, el Gobernador la requirió de inhibición, formalizándose competencia, que es decidida á favor de la autoridad judicial, vistos los arts. 172 de la ley municipal y 2.º de la orgánica judicial:

Considerando: 1.º Que el presente conflicto se ha suscitado á consecuencia de la demanda incoada por los comisionados de las Juntas de obras de las iglesias contra el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona de 21 de Junio de 1881, en cuanto por él mismo se les priva de la posesión en que están á percibir la parte que les corresponde en los productos del cementerio de aquella ciudad y en la administración del mismo.

2.º Que en tal concepto la demanda tiene por objeto la reivindicación de un derecho civil que nace del título de propiedad que tiene la Iglesia sobre el cementerio de que se trata, construido con fondos de las obras de las parroquias; y por lo mismo, con arreglo al art. 172 de la ley municipal anteriormente citado, el que se crea perjudicado en sus derechos civiles por los acuerdos de los Ayuntamientos pueden reclamar contra ellos ante el juez ó Tribunales competentes, que en el presente caso lo son los del fuero común, con arreglo á la ley.

## Exhumaciones y traslación de cadáveres.

R. O. DE 19 DE MARZO DE 1848.

El jefe político de Madrid en 16 de Noviembre último propuso como conveniente la modificación de alguna de las disposiciones contenidas en las Reales Ordenes de 27 de Marzo de 1845 y 21 de Febrero de 1846 relativas á la exhumación y traslación de cadáveres de un cementerio á otro, ó panteón particular; y tomando S. M. la Reina en consideración los respetables motivos que, por lo general, mueven á solicitar semejantes traslaciones, con objeto de conciliar aquellos, con las precauciones que al mismo tiempo exige la conservación de la salud pública, se dignó oír en el particular el dictámen del Consejo de Sanidad del Reino, y de conformidad con lo que este ha expuesto, se ha servido dictar las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> No podrá verificarse la exhumación y traslación de cadáveres sin licencia expresa del jefe político de la provincia donde se hallen sepultados.

2.<sup>a</sup> No se permitirá la traslación de cadáveres más que á cementerio ó panteón particular.

3.<sup>a</sup> Se prohíbe la exhumación y traslación de cadáveres antes de haber transcurrido dos años desde la inhumación.

4.<sup>a</sup> Para verificar la exhumación dentro del tiempo de dos á cinco años, después de sepultado un cadáver, ha de preceder á la licencia del jefe político: 1.<sup>o</sup>, el permiso de la autoridad eclesiástica; y 2.<sup>o</sup> un reconocimiento facultativo, por el cual conste que la traslación no puede perjudicar á la salud pública.

5.<sup>a</sup> Este reconocimiento será practicado por dos profesores de la ciencia de curar, y su nombramiento corresponde al jefe político.

6.<sup>a</sup> Los profesores nombrados han de ser precisamente doctores en Medicina ó individuos de la Academia de Medicina y Cirujía de la provincia, cuando los cadáveres que hayan de exhumarse estén en el cementerio de la capital donde aquella tenga su residencia. Si la exhumación se hubiere de hacer en pueblos donde no haya doctores, el jefe político nombrará los que juzgue más conveniente.

7.<sup>a</sup> Las certificaciones que han de dar los profesores nombrados, serán individuales: en caso de discordia, se nombrará un tercero.

8.<sup>a</sup> Después de cinco años de estar sepultado un cadáver, el jefe político puede ordenar su exhumación y traslación de la manera y con los requisitos que estime más oportunos, disponiendo que, en todos los casos, se haga con la decencia y respeto debidos, dando conocimiento al de la provincia donde el cadáver haya de trasladarse, y obteniendo previamente el asentimiento de la autoridad eclesiástica.

9.<sup>a</sup> Los cadáveres embalsamados podrán exhumarse en cualquier tiempo, y sin necesidad del reconocimiento facultativo que establece la regla 4.<sup>a</sup>

10. Las solicitudes para trasladar á España cadáveres que hayan sido sepultados en país extranjero, ó viceversa, se dirigirán á S. M. por conducto de este Ministerio, acreditándose en ellas previamente la circunstancia de hallarse embalsamados, ó la de que, haciendo más de dos años que fueron sepultados, se encuentran ya en estado de completa desecación.

11. Todos los gastos que ocasionen los actos de exhumación serán de cuenta de los interesados.

12. Los honorarios que ha de devengar cada profesor por el acto del reconocimiento y certificación correspondiente, serán de 160 rs. vn. en Madrid, 120 en los demás pueblos del Reino. El jefe político elevará esta suma á la que estime oportuno, en razón á la distancia que hubieren de recorrer los profesores nombrados, cuando el reconocimiento se haga en pueblo diferente de aquel en que estén domiciliados.

13. Se reducirán los honorarios á la mitad de lo establecido en la regla anterior, siempre que se hiciere á un mismo tiempo el reconocimiento de dos ó más cadáveres.

14. Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en las Rs. Ords. de 27 de Marzo de 1845 y 21 de Febrero de 1846.

#### R. O. DE 30 DE ENERO DE 1851.

Habiendo consultado el Gobernador de la provincia de Málaga acerca de las reglas que hayan de observarse para verificar dentro de los cementerios exhumaciones y traslación de cadáveres de un punto á otro, así como también para las mondas de los huesos; oído el parecer del Consejo de Sanidad, y conformándose con lo que ha expuesto en 3 de Agosto último, ha tenido á bien S. M. la Reina dictar las disposiciones siguientes:

- 1.<sup>a</sup> Se prohíben las mondas ó limpieas generales de los cementerios.
- 2.<sup>a</sup> No podrán ser trasladados los cadáveres de un punto á otro, dentro de un mismo cementerio, antes de trascurridos cinco años de la inhumación, sinó en el tiempo y con los requisitos que determina la R. O. de 19 de Marzo de 1848 para la exhumación de un punto cualquiera del cementerio general al cementerio ó panteón particular.
- 3.<sup>a</sup> Por consecuencia, las limpieas de los cementerios serán parciales, y limitadas exclusivamente á los cadáveres que lleven cinco años desde su enterramiento.
- 4.<sup>a</sup> Los gobernadores de provincia podrán modificar el tiempo prescrito en la disposición anterior, respecto de aquellos cementerios cuya capacidad no sea proporcionada al número de defunciones anuales de la respectiva población.
- 5.<sup>a</sup> La traslación de huesos enteramente secos á los osarios puede hacerse en cualquier tiempo.
- 6.<sup>a</sup> No es necesaria la intervención de facultativos para la ejecución de estas operaciones en los casos que determinan las disposiciones 3.<sup>a</sup>, 4.<sup>a</sup> y 5.<sup>a</sup>



7.ª y última. Para todo lo que sea relativo á la traslación de cadáveres desde un punto cualquiera á cementerio ó panteón particular, se cumplirá estrictamente lo establecido en Reales órdenes de 19 de Marzo de 1848 y 12 de Mayo de 1849, salvo las modificaciones que se establezcan á consecuencia del informe pedido al Consejo de Sanidad en 9 del actual sobre esta materia.

R. O. DE 31 DE AGOSTO DE 1853.

Se resuelve una nueva consulta del gobernador de Málaga sobre la inteligencia de las reglas de la R. O. de 30 de Enero de 1851, declarando que cuando la reducida capacidad de los cementerios fuerza á los gobernadores á usar de la facultad que les concede la regla 4.ª, «puede hacerse la exhumación de los cadáveres sin la intervención de facultativos; pero en tales casos habrán de exhumarse necesariamente aquellos cadáveres que lleven más tiempo sepultados, y parcialmente, esto es, uno por uno, á medida que haya necesidad de ello para dar sepultura á otros;» pero los gobernadores, en tales casos, deberán, sin embargo, adoptar aquellas disposiciones que juzguen más convenientes para evitar los peligros que las exhumaciones anticipadas ocasionan, ya sean impidiendo que se formen nichos en los cementerios muy reducidos, ya haciendo que todos los cadáveres se sepulten en la tierra, ya haciendo que se aumente la extensión de los cementerios, ó en fin, procurando la construcción de otros más capaces y con todas las condiciones debidas.» Y á la vez se manifestaba la extrañeza de que una capital de la importancia de Málaga no tuviese más que un cementerio y éste sin las condiciones higiénicas necesarias, por lo que se encargó al gobernador que llamase la atención de la Municipalidad para que se ocupase de la construcción de otro nuevo cementerio.

R. O. DE 19 DE JUNIO DE 1857.

Deseando la Reina (Q. D. G.) evitar de una vez los conflictos que ocasione la diversa inteligencia dada por los gobernadores de provincia á la R. O. de 19 de Marzo de 1848 en lo relativo á traslaciones de cadáveres, se ha servido resolver que en lo sucesivo se dirijan á S. M., por conducto de este Ministerio, las solicitudes para trasladar cadáveres de una á otra provincia, reservándose tan solo á los gobernadores la facultad de acordar dichas traslaciones cuando hayan de verificarse dentro de la provincia de su respectivo mando.

R. O. DE 1.º DE AGOSTO DE 1863.

La Reina... en vista de lo acordado en el expediente instruido para la exhumación y traslación á New-York de los restos mortales de Mr. Charles Roulet, depositados en un nicho del cementerio general de esa ciudad, se ha dignado disponer: que cuando ocurran casos de esta naturaleza, adopte V. E. por sí, dentro

de las prescripciones de la R. O. de 19 de Marzo de 1848 y sin perjuicio de lo que preceptúa la regla 10 de la misma, la resolución que proceda. De Real orden etcétera.—Madrid 1.º de Agosto de 1863.—Sr. Gobernador superior civil de Cuba.

R. O. DE 6 DE FEBRERO DE 1866.

Se dispone que en *Filipinas*, conforme á la R. O. de 19 de Marzo de 1848, sean iguales los derechos de los facultativos en la exhumación de cadáveres á los que se cobran en Madrid, y que los 160 y 120 rs. á que alude la regla 12 de la citada Real orden se entiendan en el Archipiélago en la proporción de dos por uno.

R. O. DE 11 DE AGOSTO DE 1866.

La Reina... ha tenido á bien disponer que se hagan extensivas á esa isla (á Puerto Rico) las Rs. Ords. de 30 de Enero de 1851 y 31 de Agosto de 1853, vigentes en la Península.

R. O. DE 6 DE AGOSTO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 1867.

En 6 de Agosto último se dijo á V. S. por este Ministerio lo siguiente:

«A pesar de que está terminantemente prohibido por la R. O. de 16 de Julio de 1857, confirmando lo ya dicho en disposiciones anteriores y especialmente en 12 de Mayo de 1849, la inhumación ó traslación de cadáveres á iglesias, panteones ó cementerios que se hallan dentro de poblado, es lo cierto que, desacatando estas Reales disposiciones, hay autoridades que siguen ordenando inhumaciones en cementerios de hospitales que se hallan dentro de las poblaciones. Con objeto, pues, de que tenga cumplimiento lo dispuesto por S. M. y de que las medidas de salubridad y salvación general se respeten con beneficio de los mismos pueblos, la Reina (Q. D. G.) recomienda á V. S. muy especialmente la perfecta observancia de lo mandado; por ser este asunto de la única y exclusiva competencia de las Autoridades civiles y al que la alta Administración consagra un especialísimo interés.»

Lo que de orden de S. M. reproduzco á V. S., encargándole dé cuenta de cuantos cementerios se hallen en esa provincia dentro de poblado, y de las medidas que haya adoptado ó adopte para corregir este estado de cosas. Dios, etc.—Madrid 19 de Noviembre de 1867.—Gonzalez Bravo.

R. O. DE 10 DE ENERO DE 1876.

Con el objeto de atender al mejor servicio, S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido facultar á V. E. para la autorización de exhumaciones y traslaciones de ca-

dáveres al tenor de lo prescrito en las Rs. Ords. de 19 de Marzo de 1848 y 19 de Junio de 1857 que constituyen la legislación vigente en este punto.—De Real orden, etc.—Madrid 10 de Enero de 1876.—Romero y Robledo.—Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.

CIRCULAR DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1886.

*Dirección general de Beneficencia y Sanidad.*—Ha llamado la atención de este Centro la frecuencia con que por medio de despachos telegráficos se pide autorización para trasladar cadáveres ó restos mortales de una á otra provincia, Ultramar ó el extranjero, sin cumplir lo que acerca del particular está establecido en las Reales órdenes de 19 de Marzo de 1848 y 19 de Julio de 1857. Para evitar este abuso en lo sucesivo se ha acordado prevenir á los gobernadores de provincia:

1.º Que cuando se trate de la traslación de un cadáver de una á otra provincia, Ultramar ó el extranjero, podrán pedir las familias, por conducto de dichas autoridades, la autorización necesaria; pero en este caso, único en que la petición de la autoridad podrá ser telegráfica, deberá expresarse en el despacho el nombre del solicitante, nombre y dos apellidos que hubiera llevado el fallecido y la precisa circunstancia de hallarse embalsamado el cadáver.

2.º En ningún caso podrá pedirse por medio de telegrama la traslación de una á otra provincia, Ultramar ó el extranjero, de restos mortales, sinó que deberá hacerse por medio de instancia de pariente ó testamento, acompañándose á ella la partida de defunción para que se pueda conocer en qué caso de la Real orden de 19 de Marzo de 1848 está comprendida la autorización que se pide.

3.º Los gobernadores de provincia cuidarán de remitir, sin pérdida de correo, á este Centro los documentos referentes á las traslaciones de cadáveres embalsamados, ó sea la solicitud de la parte interesada, y certificado del acta de embalsamamiento, suscrita por el subdelegado de Medicina respectivo, según previene la regla 4.ª de la Real orden de 20 de Julio de 1861.

Esta Dirección general encarga á V. S. el cumplimiento de la presente circular. Dios, etc. Madrid 11 de Noviembre de 1886.—El Director general, Teodoro Baró.—Sr. Gobernador de la provincia de.....

R. O. DE 5 DE ABRIL DE 1889.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación comunica con fecha de hoy á esta Dirección general la Real orden siguiente:

«Ilmo. Sr.: La Real orden de 10 de Enero de 1876 facultó á esa Dirección general de Beneficencia y Sanidad para autorizar las traslaciones de cadáveres ó de sus restos de una á otra provincia, y atendiendo á que este servicio reclama en la mayoría de casos una rápida tramitación;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino; se

ha servido disponer que puedan conceder en lo sucesivo dichas autorizaciones los gobernadores civiles de las provincias, con sujeción á las siguientes reglas:

1.<sup>a</sup> Corresponderá conceder las traslaciones al gobernador de la provincia en que se encuentren los cadáveres ó los restos, debiendo aquella autoridad dar inmediatamente cuenta de su acuerdo al gobernador de la provincia en que haya de verificarse la inhumación, á fin de que pueda comunicar las órdenes oportunas á las autoridades locales.

2.<sup>a</sup> Será condición indispensable para conceder un traslado, el que previamente se solicite en instancia firmada por el pariente más cercano del difunto, ó por persona á quien aquél autorice para ello.

3.<sup>a</sup> Nunca podrán autorizar la traslación de cadáveres no embalsamados, debiendo exigir que á la solicitud para el traslado se acompañe siempre la correspondiente certificación de embalsamamiento, expedida por el subdelegado de Medicina, según previene la Real orden de 20 de Julio de 1861.

4.<sup>a</sup> De conformidad con lo dispuesto en la Real orden de 18 de Julio de 1887, no concederán traslaciones de cadáveres, ó de sus restos, cuando la inhumación se pretende hacer fuera de los cementerios destinados al servicio público.

5.<sup>a</sup> En ningún caso se autorizará el traslado de cadáveres ya inhumados antes de haber transcurrido dos años desde su inhumación, según previene la Real orden de 19 de Marzo de 1848, y con arreglo á la misma será indispensable para conceder la traslación después de los dos años y antes de los cinco, que previamente se verifique el reconocimiento facultativo que preceptúa la regla 3.<sup>a</sup> de la citada Real orden.

6.<sup>a</sup> La autorización para trasladar cadáveres ó sus restos á las provincias de Ultramar ó al extranjero, así como las que se soliciten para el traslado desde estos puntos á las provincias del Reino, serán concedidas por este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines consiguientes.\*

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 5 de Abril de 1889.—El Director general, Teodoro Baró.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...

## Panteones particulares.

R. O. DE 12 DE MAYO DE 1849.

De varios expedientes instruidos en el Ministerio de mi cargo, resulta que en algunos puntos existe todavía notable propensión, así á inhumar los cadáveres como á trasladar sus restos á cementerios ó panteones particulares situados dentro de poblado, y con el objeto de prevenir los abusos á que semejante tendencia pudiera dar lugar con detrimento de la salud pública, la Reina (Q. D. G.), oído el parecer del Consejo de Sanidad, y conforme con su dictámen, se ha servido resolver:

1.º Que continúe indefinida la prohibición de enterrar los cadáveres, y de trasladar y co'ocar sus restos en las iglesias, panteones ó cementerios que estuvieren dentro de poblado.

2.º Que el permiso concedido por la regla 2.ª de la R. O. circular de 19 de Marzo de 1848, para trasladar cadáveres á cementerio ó panteón particular, se entiendan, si éstos se hallan situados fuera de las poblaciones.

Y 3.º Que sólo queden vigentes las excepciones que en favor de los MM. RR. arzobispos, reverendos obispos y religiosas, establecieron las Rs. Ords. de 6 de Octubre de 1806, 13 de Febrero de 1807 y 30 de Octubre de 1835.

R. O. DE 13 DE JULIO DE 1860.

Declara que las adquisiciones de terrenos en los cementerios para construir panteones ó sepulturas de familia no están sujetas al derecho de hipotecas.

R. O. DE 26 DE JULIO DE 1883, que queda trascrita  
en este apéndice.

R. C. DE 3 DE ENERO DE 1854 Y R. O. DE 19 ABRIL DE 1859.

En la Real cédula de 3 de Enero de 1854, dictando reglas para la demarcación y arreglo de parroquias, se encargaba entre otras cosas á los MM. RR. ar obispos, RR. obispos y vicarios capitulares, Sede vacante, de las iglesias de España, que refrenaran el abuso "que especialmente en la corte y grandes poblaciones, se va introduciendo en los cementerios, por imitar costumbres no muy laudables ni conformes con la creencias y culto católico, en las costosas sepulturas y sus adornos, y otras profanas demostraciones de lujo de las familias, más bien que del sincero dolor por sus difuntos y deseo del eterno descanso de sus almas."

Fundándose en este encargo el Rdo. obispo de Santander, pidió al Gobierno que prohibiese la construcción de panteones particulares en los cementerios. El Sr. Ministro de la Gobernación pasó el asunto á informe del Consejo de Estado, y evacuado por las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del mismo Consejo, se remitió el expediente, como de su competencia, al Ministerio de Gracia y Justicia, por el cual fué resuelto de conformidad con el referido informe, que dice así:

*Dictámen del Consejo de Estado aprobado por Real orden  
de 19 de Abril de 1859.*

Secciones de Gobernación y Fomento, y Estado y Gracia y Justicia.—Excelentísimo Sr.: En cumplimiento de la R. O. de 11 de Noviembre último, estas



Secciones han examinado la comunicación del Rdo. obispo de Santander, relativa á la erección de panteones particulares en los cementerios, remitida á este Ministerio del digno cargo de V. E., de Real orden comunicada por el de Gracia y Justicia.

Resulta, que el diocesano de Santander, fundándose en la base 11 de la Real instrucción de 3 de Enero de 1854, que se le dirigió para llevar á efecto el arreglo parroquial prevenido por el art. 31 del último Concordato, solicita se prohíba la construcción de panteones particulares en los cementerios, permitiéndolo únicamente cuando se trate de bienhechores de la Iglesia ó del pueblo. Esta es, en resumen, la solicitud del obispo. Las Secciones, en su vista, convienen con el reverendo prelado en que, á veces, la erección de mausoleos sólo tiene por objeto hacer ostentación de las riquezas y satisfacer la vanidad, tan impropia de aquellos lugares, en los que debe reinar la modestia y humilde igualdad de nuestra sacrosanta religión; pero tampoco pueden desconocer que en otros casos no se construyen por orgullo y pompa, sino por rendir un merecido tributo á las virtudes, á los servicios ó al talento del difunto, ó para tributar un recuerdo á la memoria del padre, del hijo ó de la esposa queridos. En estos casos, la Administración no puede impedirlo, ni sería conveniente que tal hiciese; y como hay grave dificultad en apreciar la causa ó motivo por que se levanta el mausoleo, por eso, á juicio de las Secciones, no debe estimarse la pretensión de que se trata.

Es verdad que la base 11 de la mencionada Real instrucción recomienda á los obispos que en sus respectivas diócesis desarraiguen la costumbre que en algunas poblaciones se va introduciendo de construir esta clase de monumentos; pero en sentir de las Secciones, aquella base no es una prescripción absoluta; es tan solo un consejo para que por medio de la persuasión y haciendo uso de los medios más bien morales que coercitivos que el clero tiene á su alcance en la predicación, en las pláticas doctrinales, en las amonestaciones familiares, y hasta con el ejemplo, encamine los espíritus del pueblo cristiano á que prescinda, en las construcciones funerarias, de las pompas y ostentación de la vanidad mundana, que por otra parte no pueden nunca reglarse de una manera tan determinada que permitan fijar norma y apreciación anticipada; razón, sin duda, por la que la Real instrucción citada, no consignó la prohibición en una forma general y absoluta, limitándose, por el contrario, á una recomendación más de prudencia que de precepto. Además, no pueden impedirse estas construcciones, porque siendo un acto de interés privado, el Gobierno debe dejar á los particulares en libertad completa, sin que por esto se entienda que abdica la justa y necesaria intervención que le corresponde para prohibir que destinen sus capitales á objetos contrarios á las leyes ó prohibidos por éstas, lo cual se remedia en cuanto á las construcciones de mausoleos, obligando á los interesados á que los planos del decorado de las obras se sometan á la aprobación de la autoridad eclesiástica respectiva, que seguramente no permitirá en ellos

adornos contrarios á las creencias y al culto católico, ni prohibirá que en estas obras se inviertan las cantidades que los particulares juzguen necesarias. Mejor sería que las sumas destinadas á este fin se empleasen en objetos piadosos, tales como donativos al culto, sufragios, etc., que es lo que pretende el obispo; pero esto necesariamente tiene que dejarse al prudente arbitrio de los particulares, y por lo mismo, el Gobierno se halla imposibilitado para ordenarlo, y caso de hacerlo, sus disposiciones producirían resultados contrarios á los que desea el prelado de Santander, omitiendo las Secciones su demostración, harto manifiesta para que sea menester someterla á la ilustrada consideración de V. E.

Así opinan las Secciones en cuanto á la prohibición referida; pero no concluirán sin hacer presente á V. E. que, á su juicio, la resolución del asunto no compete al Ministerio de la Gobernación, y, por lo tanto, pudiea devolverse el oficio del obispo al Ministerio de Gracia y Justicia, acompañando copia de este informe, si mereciese la aprobación de S. M., para que en su vista se determine por dicho Ministerio lo que crea conveniente.—V. E., sin embargo, propondrá á S. M. lo que, como siempre, estime mas acertado.

Tal fué el dictámen del Consejo de Estado, con el que se conformó S. M., como aparece por la R. O. de 19 de Abril de 1859, que se comunicó por el Ministerio de Gracia y Justicia al de la Gobernación, y después por éste en 5 de Mayo á los señores gobernadores de las provincias. He aquí la Real orden:

En vista del expediente instruido en el Ministerio, con motivo de una comunicación elevada por el Rdo. obispo de Santander, relativa á la erección de panteones particulares en los cementerios, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver de conformidad con la consulta de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo de Estado, que fué remitida por el Ministerio del digno cargo de V. E. á este de Gracia y Justicia con fecha 4 de Marzo último.

#### R. O. DE 10 DE JUNIO DE 1886.

Pasado á informe del Real Consejo de Sanidad el expediente instruido acerca de la solicitud de la Madre Superiora Vicaria en España de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, interesando se las autorice á construir dentro del terreno de cada uno de sus conventos las criptas necesarias para su enterramiento, dicho Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictámen...

En apoyo de su solicitud expuso la predicha Madre Superiora que, según las constituciones aprobadas por Su Santidad, las religiosas guardan clausura perfecta, no saliendo más que para trasladarse, en virtud de mandato, de una á otra casa de la Orden, por lo cual las autoridades civiles y eclesiásticas les han concedido permiso para construir dentro del convento, en las casas ya establecidas, el cementerio con destino al enterramiento de las religiosas que en él fallezcan; que tratando el Instituto de crear casas en Bilbao y otras poblaciones para proseguir el piadoso y benéfico fin de propagar la instrucción, educando á las niñas, así de las

clases acomodadas como de las menesterosas, se advierte la necesidad de dotar á dichas casas de los enterramientos especiales.

La Dirección general del ramo, teniendo en cuenta las prescripciones de la R. O. de 26 de Julio de 1883, interesó se hiciese constar si las religiosas á que se refiere el expediente, guardan la clausura perfecta que para conceder cementerio especial exige la de 12 de Mayo de 1849.

En contestación á la Real orden que para obtener este dato se dictó, el cardenal arzobispo de Toledo expuso que según la fundación del instituto religioso, aprobada por Su Santidad, están obligadas dichas religiosas á guardar clausura con las pequeñas y accidentales modificaciones exigidas por el servicio de la educación de la juventud á que se dedican, opinando además que las corresponde el derecho reclamado, según se reconoció por la autoridad competente, á las del primer convento del citado Instituto, establecido en Chamartín de la Rosa.

En vista de los documentos relacionados, el Centro general directivo consultó al Consejo si á más de las reglas que preceptúa la R. O. de 30 de Octubre de 1835, y teniendo presente las que se refieren á la salubridad en general, á la de las educandas y sus familias y la de las religiosas en clausura perfecta, completa y absoluta, deben adoptarse otras para garantizar la pública salud y cuáles en general y en cada caso en particular.

Los términos de la comunicación remisiva evidencian, á juicio de la Comisión, que si bien la consulta no versa especialmente sobre el extremo de si corresponde ó no á las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús el derecho de inhumarse dentro del convento, concedido á los que guardan clausura perfecta, está con él tan íntimamente relacionado que por las prescripciones que rigen sobre este particular, ha de ser resuelta.

En efecto, la R. O. de 17 de Octubre de 1805 que prohibió á las comunidades eclesiásticas de cualquier clase establecer para su uso cementerios particulares; la de 30 de Octubre de 1835 prescribiendo que sólo los cadáveres de las religiosas profesas en clausura pudieran ser enterrados en los atrios de sus conventos si estos tuvieran buenas condiciones higiénicas, según privilegio otorgado por la Real cédula de 19 de Abril de 1818, y confirmado en 12 de Mayo de 1849, y la reciente de 26 de Julio de 1883 mandando se deniegue toda instancia en solicitud de autorización para construir cementerios particulares, cualesquiera que sean las condiciones y circunstancias que en la pretensión concurren, con reserva únicamente de los privilegios concedidos á los reverendos prelados y á las religiosas en clausura, claramente demuestran, á juicio de la Comisión, que no es posible, sin infringir dichas disposiciones y contrariar los preceptos de la Administración sanitaria, conceder la autorización general que solicita la Madre Superiora de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús; pues dedicadas éstas á la enseñanza, no guardan, como es notorio, la clausura perfecta, completa y absoluta que sirvió de fundamento al privilegio otorgado á las monjas en 1818.

Consultando la Comisión como el Centro general directivo desea los intereses

de la salud pública, los de las educandas y sus familias, y con el propósito de garantizar en lo posible los tres, se cree obligada á consignar que produciría notable perturbación en éstos el prescindir de las disposiciones vigentes sobre la materia y autorizar, haciendo caso omiso de la reciente R. O. de 26 de Julio de 1883, que se multiplique sin razón fundada el número de cementerios particulares.

No cabe dictar reglas que protejan debidamente la salud pública y que á la vez se inspiren en el propósito de ampliar el privilegio concedido sólo á los reverendos obispos y á las monjas que guardan clausura perfecta, pues estando dedicadas las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús á la enseñanza, cualesquiera que fueren los que se propusieran, no alcanzarían á impedir que la permanencia de las educandas cerca de las criptas y en roce con las familias y con el público en general fuese inconveniente si no era perjudicial.

Tiene, por último, en cuenta la Comisión que no debe consentirse sin muy fundados motivos que dentro de las poblaciones se establezcan cementerios particulares, siquiera sea escaso el número de cadáveres que en ellos se haya de inhumar.

En méritos de lo expuesto, la Comisión opina que no procede se otorgue la autorización solicitada por la Madre Superiora Vicaria en España de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, y por tanto, que debe prohibirse en todas las casas de la Institución se construya el cementerio especial ó cripta donde hubieran de inhumarse los cadáveres de las mencionadas religiosas.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden, etc.—Madrid 10 de Junio de 1886.—Gonzalez.—Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.

### R. O. DE 18 DE JULIO DE 1887.

Ilmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. del expediente instruido en esa Dirección general á virtud de las instancias elevadas á la misma, pidiendo autorización para construir panteones particulares fuera de poblado, fundándose en que las Reales órdenes de 19 de Marzo de 1848, 12 de Mayo de 1849 y 6 de Agosto de 1867, se limitan á prohibir las inhumaciones y traslación de restos á iglesias, panteones ó cementerios particulares, situados dentro de poblado:

Considerando que el espíritu que informa estas disposiciones se funda en que no deben practicarse inhumaciones fuera de los cementerios destinados al servicio público; que éstos han de estar situados á la mayor distancia posible de todo lugar urbanizado y con las condiciones higiénicas necesarias á fin de evitar los graves perjuicios que á la salud pública puede ocasionar el lugar de emplazamiento de los cementerios;

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, oído el dictamen del Real Consejo de Sanidad, se ha servido disponer:

1.º Queda prohibida la inhumación de cadáveres fuera de los cementerios comunes. Se exceptuarán únicamente los de individuos de la familia Real, los de los muy reverendos arzobispos, reverendos obispos y los de las monjas que hayan guardado perfecta y absoluta clausura, los cuales seguirán disfrutando del privilegio que les concede la Real orden de 30 de Octubre de 1835:

Igualmente quedan exceptuados aquellos á quienes el Gobierno de S. M., por circunstancias especiales, conceda de Real orden excepción para ser inhumados en iglesias, panteones ú otros lugares.

2.º Solo podrá permitirse la construcción de panteones osarios con la condición precisa de que han de estar situados á la distancia de poblado que determina la Real orden de 17 de Febrero de 1886, y que no radiquen en iglesia ó convento á que deba concurrir el público, debiendo atenerse para la traslación de los restos, en tiempo oportuno, á lo prevenido en la Real orden de 19 de Marzo de 1848.

3.º Las autorizaciones concedidas con anterioridad á esta disposición para construir panteones particulares, se entenderán únicamente para colocar restos ó cadáveres embalsamados, todo en los términos que marca la Real orden de 19 de Marzo de 1848.

De Real orden etc. Madrid 18 de Julio de 1887.—Moret.—Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.

## **Instalación de carros fúnebres.**

R. O. DE 2 DE JULIO DE 1867.

El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al gobernador de la provincia de Santander lo que sigue:

«Remitido á informe de el Consejo de Estado el expediente relativo á la instalación en esa capital de los carros fúnebres para conducir los cadáveres al Cementerio, aquella Corporación ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el adjunto expediente instruido á instancia de D. Galo Gautier sobre que se le ampare en el derecho que tiene adquirido como contratista en Santander del servicio de carruajes fúnebres para conducir los cadáveres al cementerio.

Aunque en el expediente mencionado hay algunos extremos relacionados con el motivo que da origen á la queja, éste es, sin embargo, en realidad, el único sometido á consulta, y sobre el cual, por lo tanto, ha de recaer el dictamen de las Secciones. Puede reducirse á breves palabras. Creyendo el Ayuntamiento de la citada ciudad que era de reconocida utilidad y conveniencia la innovación que



proyectaba hacia tiempo, relativa á la conducción de los cadáveres al cementerio, valiéndose de carros fúnebres, como de antiguo se practica en otras capitales del Reino, trató de ponerla en planta, si bien no le fué posible al pronto realizarlo por haber presentado graves dificultades las condiciones especiales de la población que, falta de carruajes de servicio público y caballerías destinadas al arrastre y transporte, no suministraban para el caso los elementos que abundan en otros pueblos. Con motivo de este aplazamiento el Rdo. obispo antecesor del actual, en comunicación de 6 de Marzo de 1858, dirigida al alcalde, le decía, entre otras cosas, con tono de reconvencción: «El mejor medio de excusar aun á los tales en lo posible un espectáculo tan poco agradable como de suyo necesario y aun saludable para todos (aludía al hecho de llevar en una sola vez dos ó más cadáveres), sería sin duda el transporte en coche ó carruaje mortuario, cual se usa ya en poblaciones numerosas, como Madrid, Valencia, Valladolid, Pamplona y otras. Lo que en ellas se obtiene sin gasto notable y aun con ganancia, podría igualmente lograrse en Santander; y he sentido que no se llevase adelante el pensamiento que de hacerlo así se tuvo antes de ahora, según me informaron. Donde no faltan hábiles especuladores para otras empresas lucrativas, creo que con un poco más de celo y diligencia se facilitaría el mismo buen resultado que en otras partes.»

En vista de tal excitación redobló el Ayuntamiento sus gestiones; pero tampoco le fué dado por mucho tiempo hacerlas productivas. Variaron, por fin, las circunstancias; y contando con probabilidades de éxito para la contratación del servicio, pudo entablar el expediente de creación de carros fúnebres, formando el reglamento y bases de la contratación que en 9 de Febrero de 1865 aprobó el gobernador de la provincia. Con más de un mes de antelación anunciöse la subasta en el *Boletín oficial* y en los periódicos locales, y celebrada que fué, se adjudicó el remate á D. Galo Gautier; pero desde el día en que debía plantearse el servicio surgió la oposición del Rdo. obispo actual, y como consecuencia, la de los cuatro sacerdotes que tiene encargados en economato de la cura de almas en la parroquia de la ciudad. Considerando perjudicados sus derechos con tal oposición, alzóse en queja el reclamante, apoyado por el favorable parecer del gobernador de la provincia; y pedido informe al citado Rdo. obispo, éste lo evacuó en 30 de Enero último manifestando, en otras cosas, que para la innovación de que se trata no se contó en manera alguna con su autoridad como era necesario, pues sólo tuvo noticia de ella por medio de un cartel impreso en que se fijaban los precios de conducción; que su antecesor sólo había hecho una indicación, obligado tal vez por el conflicto y aprieto en que le ponía la Alcaldía al exponerle el estado de alarma y espanto en que se hallaba la población; y por último, que para el acto religioso de la conducción de cadáveres la Iglesia tiene determinados los ritos contenidos en el Ritual Romano, en los cuales ni al mismo obispo es permitido hacer alteraciones, como cosa reservada á Su Santidad y á la Sagrada Congregación correspondiente.

Por la ligera reseña que acaba de trazarse se vé que la cuestión debatida en el expediente parece de índole grave por dimanar de un conflicto ocurrido entre la potestad civil y la eclesiástica, cuyos límites y jurisdicción, si bien fáciles de deslindar en teoría científica, son difíciles de señalar en la esfera práctica sin menoscabo de ninguna de ambas. Pero examinada detenidamente, se viene á conocer que no existe verdadero conflicto; pues aún resolviendo á favor del reclamante, ni se concede á la autoridad civil más atribuciones que las que tiene, ni á la eclesiástica se la despoja de las que le corresponden. Es indudable que á la primera toca reglamentar respecto de la materia sobre que versa la actual controversia cuanto sea procedente, ya para la conservación del orden público, ya para la salubridad y bienestar de los pueblos; á la vez que compete á la segunda velar por la observancia de los ritos y ceremonias de la religión establecidos en sufragio de los difuntos, y para edificación y consuelo de los vivos. En tal supuesto, y concretando los principios al caso práctico, el Ayuntamiento de Santander, representante de sus administrados, pudo pensar en la innovación de los carros mortuorios por creer que así satisfacía una necesidad relacionada con los intereses, cuya tutela le está encomendada, siempre que al llevar á cabo su pensamiento no tratase de alterar ó suprimir ritos religiosos propios de la conducción y entierro de los cadáveres. Del mismo modo el Rdo. obispo usa de un derecho y cumple con un deber tratando de conservar los mencionados ritos ordenados por la Iglesia, si bien no por eso puede disminuir las atribuciones que en la materia propia de su competencia incumben á la autoridad municipal. Ahora bien: ¿se puede decir que con la instalación de los carros fúnebres se menoscaba la integridad de las atribuciones de la autoridad eclesiástica? Seguramente no; pues del mismo modo que llevándose en hombros los cadáveres, se pueden cumplir las ceremonias religiosas, conduciéndolos en los carros mencionados.

Si por escasez de eclesiásticos ó por otro motivo cualquiera no es posible acompañar á todos con la cruz parroquial y observar en los entierros las solemnidades religiosas establecidas en el Ritual Romano, deberá atenderse á llenar dicha necesidad por el medio que se crea oportuno; pero no combatiendo una reforma que sin lastimar la piedad, solamente se concreta á la materialidad del modo con que se verifica la conducción. Hubiera sido de desear que entre el Ayuntamiento de Santander y el actual Rdo. obispo de la diócesis hubiera mediado antes de la reforma un entero acuerdo; pero también merece tenerse en cuenta que si bien la Municipalidad faltó á un deber de consideración no avisando á dicho prelado la ejecución de un proyecto, éste se hallaba tácitamente aprobado y hasta recomendado por el antecesor en la Sede, al paso que es sensible que después de tantos anuncios oficiales que llevaban consigo una completa publicidad aguardase dicho prelado á interponer su veto cuando ya se habían creado respetables derechos particulares al amparo de una subasta legal. Pero tal falta de acuerdo previo se concreta únicamente al Rdo. obispo de hoy, no á la autoridad eclesiástica en general, pues con el consentimiento del predecesor se puso en prác-

tica la innovación, y por lo tanto, no resulta de lo acordado por el Ayuntamiento ningún vicio que anule lo hecho, aunque sí procede advertir á la Corporación que hubiera sido de desear que para obrar con la debida armonía, participara oportunamente al prelado que el servicio de que se trata se hallaba en vías de ejecución.

En apoyo de este juicio, y por consiguiente en pró de la petición de D. Galo Gautier, existe también una de las leyes vigentes del Reino. La 1.ª, tít. III, lib. I, de la Nov. Recop., dictada para el establecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios según el Ritual Romano, establece en su pár. 6.º, que se haga uso del reglamento del cementerio del Real Sitio de San Ildefonso, hecho con acuerdo del ordinario eclesiástico, en lo que sea adaptable para allanar dificultades y resolver dudas que puedan ocurrir en otros pueblos; y el art. 2.º de dicho reglamento, inserto en la nota 2.ª de la misma ley, dice entre otras cosas que «se tendrán en las parroquias unas andas con una caja cubierta y puesta sobre ruedas que puedan llevar una ó dos caballerías, y se enviarán á la casa mortuoria siempre que se pidan.» Por consiguiente, la instalación de los coches mortuorios no es una innovación peligrosa ni ilegal; de donde se deduce que carece de fundamento la oposición suscitada por el prelado de Santander, en lo que estrictamente se refiere al modo de la conducción.

Si la ley así lo ha consentido, la práctica constante observada en Madrid y otras varias capitales del Reino justifica igualmente lo hecho por el Ayuntamiento de Santander. Sabido es que en dichos puntos se encuentra establecida la forma de conducción de cadáveres por medio de carruajes mortuorios, y que no ya particulares, sinó corporaciones religiosas, tienen á su cargo semejante servicio, del que se valen las familias más piadosas, con excepción de las que carecen de todo medio de fortuna. Pues bien: si la autoridad eclesiástica representada en diversos prelados ha autorizado por su parte la creación de dichos carruajes en gran número de poblaciones del Reino, parece injusto que á otra del mismo se niegue en particular la reforma, estableciendo una desigualdad irritante; y además, si esto sucediera por considerarse justa la negativa, tal resolución implicaría una censura de los prelados que para aquélla dieron su consentimiento, y se inferiría en rigor lógico que también procedía hacer desaparecer los carros fúnebres en las ciudades donde fueron establecidos.

Si, pues, la reforma planteada por el Ayuntamiento de Santander no menoscaba el ejercicio espiritual de la autoridad eclesiástica; si, lejos de ser ilegal, está fundada en una ley; si tiene en su apoyo la costumbre observada en otras capitales con el consentimiento de RR. obispos y muy reverendos arzobispos; y si en otro concepto muy atendible, al amparo de dicha reforma se han creado intereses particulares respetables en la personalidad del rematante del servicio, quien ha tenido que hacer esfuerzos y desembolsos que no deben ser ilusorios; de todo se deduce que procede resolver esta controversia á favor de la Municipalidad, y por lo tanto, en pró de los derechos adquiridos por el exponente.

Resumiendo lo expuesto, las Secciones opinan:

1.º Que se debe sostener á D. Galo Gautier en el goce de los derechos que como contratista del servicio de carruajes fúnebres haya adquirido con la adjudicación del remate, haciendo que cese la oposición suscitada por el Rdo. obispo de Santander.

2.º Que procede advertir al Ayuntamiento que hubiera sido de desear que para obrar con la debida armonía participara oportunamente al prelado que el servicio de que se trata se hallaba en vías de ejecución »

Y habiéndose dignado S. M. resolver de conformidad con el preinserto dictamen; de Real orden lo digo á V. S., etc.»

Lo que de la propia Real orden, comunicada por el expresado Sr. Ministro, se publica en la *Gaceta* para que sirva de Jurisprudencia en casos análogos.—Madrid 2 de Julio de 1867.—El Subsecretario, Juan Valero y Soto.

### Exequias de cuerpo presente.

R. O. DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1849.

Enterada la Reina (Q. D. G.) de una exposición que, en 30 de Enero último, dirigió al Ministerio de Gracia y Justicia el Rdo. obispo de Mallorca, haciendo presente la conveniencia de que en aquella diócesis se establezca la práctica de conducir los cadáveres á las iglesias por el tiempo necesario para celebrar las exequias de cuerpo presente, conforme al rito católico, se dignó S. M. oír el parecer del Consejo de Sanidad, y conformándose con lo que esta Corporación le ha expuesto en 8 de Agosto próximo, se ha servido desestimar la indicada solicitud, mandando que V. S., bajo su responsabilidad, no consienta en esa provincia una práctica que puede considerarse abusiva, supuesto que se halla reconocido que no impide á los beneficios de las exequias la ausencia del cadáver, en cuyo auxilio se celebra, siendo así que su presencia en los templos puede, en el mayor número de casos, ser perjudicial á la salud pública. S. M. quiere también que de esta regla general queden exceptuados los MM. RR. arzobispos y RR. obispos, los cuales gozan del privilegio de poder ser enterrados en sus respectivas catedrales.

R. O. DE 28 DE AGOSTO DE 1855.

Nada más perjudicial á la salud pública que la exposición de los cadáveres en las iglesias. Cuantos de la higiene pública se han ocupado, todos han prescrito como una de las medidas sanitarias más importantes la prohibición de conducir los cadáveres de los templos; la descomposición subsiguiente á la muerte produce miasmas nocivos, que aspiradas por los fieles concurrentes, son origen de las en-

fermedades más graves. La exactitud de estas observaciones ha sido reconocida en todas épocas.—El Sr. D. Carlos IV en 1801 expidió un decreto prohibiendo los funerales de cuerpo presente; y sin bien las preocupaciones y el orgullo que se arrastra más allá del sepulcro la relegó al olvido, un esfuerzo de demostración de las buenas medidas sanitarias la reprodujo en 20 de Setiembre de 1849.

Por no haberse exigido con firmeza la responsabilidad que en esta última Real disposición se imponía á los gobernadores que consintiesen una práctica, que bien puede calificarse de abusiva, volvieron los funerales de cuerpo presente, y sí en todo tiempo dañosa la expresada práctica, el perjuicio se eleva al grado máximo considerado el estado sanitario del país y la influencia que en el ánimo opera la vista de los cadáveres. Absurdo, inconcebible es que cuando se prescriben las fumigaciones y todos los desinfectantes para purificar la atmósfera de la habitación donde ha ocurrido un caso de epidemia, se permita conducir los cadáveres de los epidemiados á los templos, lugar en general de escasa ventilación, y más si se compara con el número de personas que en ellos se reúnen.

Penetrada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la verdad de las consideraciones expuestas y de que las exequias de cuerpo presente son una manifiesta infracción de los Reales mandatos, se ha servido prohibir el expresado acto, haciendo responsables á los gobernadores de las provincias de la menor relajación que en particular consientan.

#### R. O. DE 13 DE FEBRERO DE 1857.

Enterada la Reina (Q. D. G.) de las exposiciones que le han dirigido varios prelados, para que se permitan las exequias de cuerpo presente, según la práctica religiosa sancionada por la Iglesia desde los primeros siglos; oído el Consejo de Sanidad, conformándose con el parecer de las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación del Consejo Real, y de acuerdo con el Ministro de Gracia y Justicia, se ha dignado S. M. mandar que la Real orden de 20 de Setiembre de 1849, prohibiendo las exequias de cuerpo presente, sólo tenga valor y efecto cuando haya epidemias declaradas por la autoridad, y cuando los facultativos, al dar el parte de la defunción, expresen que el cadáver no se encuentra en el estado de ser conducido á la iglesia para que se le recen de cuerpo presente las prees que marca el Ritual Romano, cuya circunstancia no omitirán en ningún caso en que proceda, bajo su responsabilidad.

#### R. O. DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1865.

Los perjuicios que puede causar á la salud pública la celebración de exequias y funerales de cuerpo presente mientras existen en algunas provincias enfermedades de carácter coleriforme, aconsejan en las presentes circunstancias que se observen con todo rigor las prescripciones contenidas en las Rs. Ords. de 20 de Setiembre



de 1849 y 13 de Febrero de 1857; y la Reina ha tenido á bien disponer que adopte V. S. las medidas convenientes para el cumplimiento de las expresadas Reales disposiciones, quedando prohibida desde este día la celebración de exequias de cuerpo presente, de acuerdo con lo preceptuado por aquellas.—De Real orden, etcétera. —Madrid 8 de Septiembre de 1865.—Posada Herrera.

#### R. O. DE 18 DE ENERO DE 1867.

Atendiendo la Reina á que el buen estado sanitario de Europa y la estación fría en que nos encontramos aleja de nuestro país toda contingencia perjudicial para la salud pública, ha tenido á bien mandar que cese la prohibición que por las circunstancias se había establecido respecto á funerales, y que desde la publicación de esta orden en la *Gaceta* puedan celebrarse en los templos las exequias de cuerpo presente.—Lo que de orden de S. M. etc.—Madrid 18 de Enero de 1867.—Gonzalez Bravo.

#### CIRCULAR DE 1.º DE ABRIL DE 1875.

Ha llamado la atención de esta Dirección general de Beneficencia y Sanidad el abuso que en varias provincias se comete celebrando exequias de cuerpo presente contra lo terminantemente prescrito en Rs. Ords. de 28 de Agosto de 1855 y 15 de Febrero del 72. Excito el celo de V. S. en el cumplimiento de dichas Reales disposiciones, y le hago presente la necesidad de que ese Gobierno de provincia ordene á las autoridades eclesiásticas se abstengan en lo sucesivo de infringir un precepto de higiene pública tan constantemente aconsejado por la ciencia y prevenido por todo Gobierno que conoce sus deberes.—Dios, etc.—Madrid 1.º de Abril de 1875.—El Director general, Salvador López Guijarro.—Sr. Gobernador civil de, ...

#### CIRCULAR DE 28 DE MAYO DE 1884.

Dirección general de Beneficencia y Sanidad.—Ha llamado la atención de este Centro directivo el abuso que viene cometiéndose en algunas provincias de España, permitiendo la celebración de exequias de cuerpo presente en las iglesias, infringiendo de este modo las Reales órdenes de 20 de Septiembre de 1849, 28 de Agosto de 1855, 13 de Febrero de 1857, 15 de Febrero de 1872 y otras que sobre este particular se han dictado, encaminadas todas á evitar los perjuicios que á la salud pública puede ocasionar la exposición de los cadáveres en las iglesias y los miasmas pútridos que produce la descomposición de los mismos.

El Gobierno, fiel guardador de los preceptos de higiene, y el primero en velar por la salud pública, no puede tolerar que en los templos se desarrollen focos de infección perjudiciales á los fieles concurrentes que los aspiren; y en tal con-

cepto excito el celo de V. S. para el cumplimiento de dichas Reales órdenes, y le encarezco la necesidad de que ese Gobierno de provincia haga que se cumpla por todos sin excusa ni pretexto de ningún género un precepto de higiene pública tan constantemente aconsejado por la ciencia y prevenido por todo Gobierno que conoce sus deberes.

Lo que, etc.—Madrid 28 de Mayo de 1884.—El Director general, Ezequiel Ordóñez.—Sr. Gobernador de la provincia de....

## Requisitos para el entierro de cadáveres.

R. O. DE 12 DE DICIEMBRE DE 1853.

En vista de las diferentes quejas producidas una con motivo de darse sepultura á diferentes cadáveres sin el correspondiente certificado facultativo, según se previene en Real orden circular de 1.º de Diciembre de 1837, la Reina (Q. D. G.) se ha servido resolver prevenga á V. S. que disponga lo conveniente para que en la provincia de su mando se dé el más puntual y exacto cumplimiento á lo dispuesto en la referida soberana resolución.

R. O. DE 22 DE ABRIL DE 1857.

Se comunica á los gobernadores civiles una Real orden expedida por Gracia y Justicia, en la cual se ruega y encarga á los obispos que adopten las disposiciones convenientes á fin de que en los cementerios comprendidos en el término de sus diócesis, al hacerse los entierros se digan solo las preces y oraciones piadosamente establecidas por la Iglesia, y se evite con el mayor celo que se pronuncien y lean discursos ó composiciones poéticas, se hagan demostraciones de ningún género contrarias á la disciplina eclesiástica, ó se ejecute acto alguno de carácter profano, ageno del respeto que se debe á los lugares consagrados por la religión católica, impetrando para ello, en caso necesario, el cumplimiento y eficaz apoyo de las autoridades civiles, á las cuales será transcrito este Real precepto.

R. O. DE 1.º DE AGOSTO DE 1857.

En vista de una comunicación elevada por el Rdo. obispo de la Habana, ha tenido á bien disponer la Reina, que V. E., en su cualidad de Gobernador político y vice-patrono de las iglesias de esa isla, haga publicar, para su puntual observancia en la misma, las Rs. Ords. de 22 y 23 de Abril último.

LEY DE 17 DE JUNIO DE 1870.

Esta ley provisional del Registro civil y su título IV que trata de *las defunciones* (arts. 75 á 95), establece que ningún cadáver pueda ser enterrado sin que antes haya hecho el asiento de la defunción en el libro, expidiendo el juez municipal, en papel común, la licencia de sepultura, que no podrá verificarse hasta las veinticuatro horas trascurridas desde la consignada en la certificación que expida el facultativo, expresiva de las circunstancias que requiere el art. 77 y siguientes de la ley, el 62 al 64 del reglamento, y la R. O. de 19 de Noviembre de 1872.

SENTENCIA DE 28 DE MAYO DE 1883.

A las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche del 6 de Junio de 1881, falleció D. Francisco de Iturribarría en esta corte, y su médico de cabecera don Victor Parraverde, sin reconocer el cadáver y pedida que le fué por la familia, expidió certificación expresiva de que la defunción ocurrió á las cinco de la tarde del expresado día 6, verificándose el sepelio á la misma hora de la tarde siguiente:

Instruida causa contra Parraverde y condenado como autor del delito previsto y penado en el art. 349 del Código, interpuso recurso de casación por haberse infringido á su juicio los arts. 1.º y 596, caso 5.º del propio código, el 77 de la ley del Registro civil, la regla 4.ª de la Real orden ó instrucción de 19 de Noviembre de 1872 y la Real orden de 30 de Diciembre del mismo año. El T. S. casa y anula el fallo recurrido:

«Considerando que incurre en delito de infracción de las leyes sobre inhumaciones, conforme al art. 349 del Código penal, el que practica ó hubiere hecho practicar una inhumación, contraviniendo á lo dispuesto por las leyes y reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones:

Considerando que en realidad D. Victor Parraverde, al expedir con referencia á la noticia que recibió de la casa mortuoria la certificación en que expresaba que el fallecimiento de su cliente Iturribarría ocurrió á las cinco de la tarde, ó sea cinco horas antes á la en que tuvo lugar, no ejecutó un acto que directamente tendiese á la práctica de la inhumación que el citado artículo exige, porque encomendada por la ley del Registro civil en su art. 77 y en las Rs. Ords. de 19 de Noviembre y 30 de Diciembre de 1872 como función propia de los médicos forenses de Madrid y después de los higienistas, la del reconocimiento de los cadáveres con el fin de proceder á su inhumación, es visto que el documento destinado á este objeto y no la certificación del médico de cabecera, es el que realmente debe estimarse con eficacia legal para la práctica de la inhumación; razón por la cual la Sala sentenciadora no ha aplicado con acierto á este caso la mencionada disposición del Código penal:

Considerando que incurren en falta, según el art. 596, núm. 5.º, los que infringieron las disposiciones sanitarias dictadas por la Administración sobre conducción de cadáveres y enterramientos en los casos no previstos en el lib. II del Código penal, acto sin duda ejecutado por Parraverde en la certificación mencionada, en cuanto que la afirmación inexacta en cuanto á la hora del fallecimiento de Iturribarria, aunque sin eficacia legal para constituir el delito especial de la infracción de leyes sobre inhumaciones, tendía no obstante á la infracción de las disposiciones sanitarias en cuanto la inoportuna inhumación puede afectar á la salud pública. \*

## **Construcción de Cementerios, para los que mueren fuera de la comunión de la Iglesia.**

~~~~~

R. O. DE 13 DE NOVIEMBRE DE 1831.

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor de una reclamación del representante británico, pidiendo un terreno en la Coruña para cementerio de los subditos de su nación; que se señalen también otros en todos los puntos de residencia de los cónsules ingleses, y que se le manifieste la voluntad de S. M. en cuanto á cercar el que su Gobierno ha comprado en esta corte con igual objeto; se ha servido S. M. resolver, conformándose con el dictámen de su Consejo de señores Ministros, que no hay inconveniente en conceder dichos terrenos, pudiéndolos adquirir los ingleses de los particulares, y cercarlos, con tal que se observen las formalidades prevenidas, á saber: que se cierren con tapia, sin iglesia, capilla ni otra señal de templo, ni culto público ni privado, y que bajo la misma condición podrán hacer uso del terreno que tienen comprado en esta corte, poniéndose, sobre todo, de acuerdo con las autoridades locales, á las que se deberán hacer las prevenciones oportunas.

LEY DE 29 DE ABRIL DE 1855.

Artículo 1.º En todas las poblaciones, donde la necesidad lo exija á juicio del Gobierno, se permitirá construir cementerios adonde sean conducidos, depositados y sepultados, con el respeto debido á los restos humanos, los cadáveres de los que mueran fuera de la comunión católica.

Art. 2.º En aquellas poblaciones que no tengan los cementerios especiales á que se refiere el artículo anterior, los alcaldes y Ayuntamientos cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de que los cadáveres de los que mueran fuera de la comunión católica sean enterrados con el decoro debido á los restos humanos, tomando las precauciones convenientes para evitar toda profanación.

R. O. DE 16 DE JULIO DE 1871 Y 28 DE FEBRERO DE 1872.

Gob.—Siendo frecuentes las consultas dirigidas á este Ministerio y ocasionadas á conflictos gravísimos entre las autoridades civil y religiosa, con motivo de las inhumaciones de personas que fallecen fuera de la Iglesia católica, el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que por ahora, y hasta que otra cosa se determine, los Ayuntamientos de los pueblos destinen dentro de los cementerios un lugar separado del resto, donde, con el mayor decoro y al abrigo de toda profanación, se dé sepultura á los cadáveres de aquellos que pertenezcan á religión distinta de la católica.—De Real orden lo participo á V. S. para su conocimiento y á fin de que tenga el más exacto cumplimiento en todas ocasiones lo dispuesto en esta Real orden.

Madrid 16 de Julio de 1871.—Sr. Gobernador de...

No obstante la Real orden circular de este Ministerio, fecha 16 de Julio último, en la que se prevenía el modo de proceder con los cadáveres de los que mueren fuera de la comunión católica, viene observándose que al tratar de darle el debido cumplimiento en la práctica, ha ofrecido dificultades ó inconvenientes más ó menos justificados por parte de la autoridad religiosa. Teniendo esto presente, y deseando el Gobierno de S. M. que se guarde incólume el principio de libertad de cultos, plenamente garantizado por la constitución de la Monarquía, así para los españoles como para los extranjeros; aspiran lo por otra parte á evitar, en cuanto sea posible, los conflictos y contestaciones que frecuentemente ocurren entre los delegados de la autoridad civil y la eclesiástica; S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien dictar las disposiciones siguientes:

1.^a De conformidad con el espíritu y disposiciones consignadas en la ley de 29 de Abril de 1855, en todas las poblaciones donde no hubiese cementerio destinado á inhumar los restos de los que mueren perteneciendo á religión distinta de la católica, se ampliarán los existentes, tomando la parte del terreno contiguo que se considere necesario para el objeto. La parte ampliada se rodeará de un muro ó cerca como las demás del cementerio, y el acceso á la misma se verificará por una puerta especial independiente de éste, por la cual entrarán los cadáveres que allí deban inhumarse y las personas que los acompañan.

2.^a Los Ayuntamientos y asociaciones religiosas distintas de la católica que, contando con recursos suficientes, deseen construir cementerios especiales para el objeto indicado, podrán verificarlo desde luego, sujetándose á lo que relativamente á higiene pública y policía sanitaria previenen las disposiciones vigentes, é instruyéndose los expedientes oportunos en la forma que éstas determinan.

3.^a La adquisición por los Ayuntamientos del terreno de que se trata para la construcción de un nuevo cementerio ó ampliación del antiguo, así como las obras que en ambos casos sean necesarias, se declararán de utilidad pública y expropia-

ble aquél, por lo tanto, conforme á lo dispuesto en el art. 14 de la Constitución y demás preceptos legales vigentes.

4.^a Los Ayuntamientos respectivos incluirán en sus presupuestos las partidas correspondientes á los gastos que la ejecución de las citadas obras originen.

5.^a y última. Cualquier duda que pueda ocurrir en la inteligencia y para el cumplimiento de esta Real orden, se consultará inmediatamente á este Ministerio para la resolución que corresponda.

De Real orden, etc.—Madrid 28 de Febrero de 1872.—Sagasta.—Sr. Gobernador de la provincia de....

R. O. DE 2 DE ABRIL DE 1883.

No ha cumplido aún la mayoría de los Ayuntamientos los preceptos que sobre la construcción de cementerios neutros contenía la Real orden de 28 de Febrero de 1872, encaminada á que la Administración española pudiera proporcionar decorosa sepultura á los que mueran fuera del gremio de la religión católica y cumpliera así con uno de los más ineludibles deberes que llena el Estado en todos los países civilizados.

Para subsanar este lamentable abandono, para cumplir al fin las prescripciones de la Real orden citada y para evitar frecuentes y graves conflictos entre las autoridades eclesiásticas y civiles, guardando además el espíritu y la letra del artículo 11 de la Constitución, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer prevenga V. S. á todos los Ayuntamientos cuya población exceda de 600 vecinos, y á los que sin alcanzar ese número correspondan á capitales de partido judicial:

1.^o Que de conformidad con el espíritu y disposiciones de la ley de 29 de Abril de 1855 se amplíen los cementerios existentes, respetando los cerramientos que tengan, tomando la parte de terreno contiguo que se considere necesaria; cerrando el nuevo espacio adquirido de un muro ó cerca como los del actual cementerio, con entrada independiente de éste.

2.^o Los Ayuntamientos y asociaciones religiosas disidentes que, contando con recursos, deseen construir cementerios especiales, podrán verificarlo sujetándose á las disposiciones vigentes sobre higiene y policía sanitaria, previa la instrucción del oportuno expediente.

3.^o La adquisición por los Ayuntamientos del terreno que en la primera disposición se menciona lo mismo que las obras que sean necesarias, ya para la construcción de un cementerio neutro, ya para la ampliación de los cementerios existentes, podrán verificarse siempre que fuere preciso considerando estos fines como de utilidad pública, conforme á las disposiciones que rigen para la expropiación cuando se trata de obras que tienen aquel carácter, y con arreglo á lo que previene la mencionada R. O. de 28 de Febrero de 1872.

4.^o Los Ayuntamientos de poblaciones, cabezas de partido judicial ó compuestas de más de 600 vecinos, formarán para el objeto referido un presupuesto ex-

traordinario con las partidas necesarias para los gastos que exijan las obras citadas; y cuando por su estado económico no pudieran realizar en el próximo ejercicio las sumas precisas, incluirán por lo menos en dicho presupuesto extraordinario el importe de la mitad de las obras, debiendo precisamente incluir la otra mitad en el ordinario de 1884 á 1885.

V 5.º El presupuesto indicado deberá terminarse en el más breve plazo conforme á lo que previenen para casos análogos los arts. 142, 143 y siguientes de la ley municipal.

Las dudas que sobre la inteligencia y cumplimiento de la presente circular puedan originarse lo mismo á V. S. que á los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, seran inmediatamente consultadas á este Ministerio.

De Real orden, etc.—Madrid 2 de Abril de 1883.—Gullón.—Sr. Gobernador de la provincia de...

Depósito de cadáveres

R. O. DE 11 DE ABRIL DE 1856.

Se ha servido mandar S. M. que se permita el depósito de cadáveres por solo el tiempo que la ciencia aconseja y que es compatible con la salud pública, en capillas independientes de las iglesias, en épocas normales ó en que no alicja al país alguna epidemia, siempre que las capillas se hallen enteramente separadas de los templos, que no estén habilitadas para el culto, ni por otro motivo tengan entrada en ellas los fieles, y que se observen con todo rigor las precauciones higiénicas de ventilación y purificación.

R. O. DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1865.

Habiendo hecho presente á S. M. la Reina (Q. D. G.) que si la celebración de exequias de cuerpo presente es en ciertas circunstancias nociva á la salud pública, la práctica establecida de depositar los cadáveres en las iglesias ofrece mayores peligros y es más perniciosa que aquella, por lo que la Administración ha adoptado frecuentemente medidas para prever y conjurar los males que dicha práctica pudiera producir, se ha servido S. M. disponer que se observen con todo rigor las prescripciones contenidas en la R. O. de 11 de Abril de 1856.—De la de S. M. etc.—Madrid 19 de Septiembre de 1865.—Posada Herrera.

R. O. DE 28 DE ABRIL DE 1875.

Pasada á informe del Real Consejo de Sanidad la comunicación de este Gobierno de provincia... en la que se encarecía la conveniencia de dictar alguna

disposición para el depósito de cadáveres embalsamados, con fecha 14 del actual lo ha emitido en la forma siguiente:

Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer ha aprobado este Consejo, por mayoría de votos, el dictamen de su primera Sección que á continuación se inserta.

Por el Ministerio de la Gobernación se ha remitido á este Cuerpo consultivo, para que informe lo que crea conveniente, una consulta del gobernador de Madrid, manifestando haber llamado su atención que en algunos casos las inhumaciones de los cadáveres embalsamados se verifican muchos días después de practicado el embalsamamiento, ora porque las familias deseen retener los restos de personas queridas, ora por la confianza de haberse puesto al abrigo de todo temor de insalubridad, merced á dicho procedimiento; habiendo ejemplo de haber permanecido en una casa y por algunos años los cadáveres embalsamados de dos párvulos, cuya inhumación causaba honda pena al cariño maternal. Y como el espíritu de nuestras leyes, de acuerdo con el interés de la pública salud, prohíbe los depósitos de cadáveres, y los embalsamados se les considera en distintas condiciones, el gobernador solicita las reglas á que haya de atenerse.

Tal es la consulta sobre la que debe informar el Consejo; y la Sección, á quien por éste se le ha encomendado, la encuentra digna de una pronta resolución.

El amor de las familias es tan natural y digno de respeto que no debe extrañarse el deseo de conservar en la propia morada, aún convertido en cadáver, los restos de una madre, de un padre ó de un hijo, con doble motivo cuando practicado un embalsamamiento se consideran libres de insalubridad. Pero como no puede responderse de esto de una manera indudable y *a priori*, hasta el punto de servir de base para establecer reglas legales, por razones que fuera largo enumerar, así en las condiciones del cadáver, como del embalsamador, del procedimiento, del local y situación de éste; etc., etc.; á la vez que generalizado pudiera llegarse á un extremo peligroso y repugnante bajo muchos puntos de vista; por todo esto, pues, en el estado social presente y en la estrechez de nuestras viviendas, aún en el caso de que la ciencia alcanzase la perfección en los embalsamamientos, no sería circunspecto acceder al sentimiento de unos pocos contra la conveniencia general.

Por más que sea digno de consideración el amor hacia los restos inanimados, la higiene, sobre todo en asuntos de salubridad pública, debe anteponerse á todo deseo que la contrarie, y una buena higiene no podría aconsejar nunca, dadas nuestras construcciones y nuestra manera de vivir, que se autorizase el depósito en las casas por más de tres días de cadáveres embalsamados ó no embalsamados, los cuales deben entregarse á nuestra madre la Iglesia, y ser conducidos al lugar ó necrópolis por ella santificado con el nombre de cementerios ó panteones fuera de poblado y autorizados *ad hoc*.

Fundada la Sección en el espíritu más que en la letra de las consideraciones

expuestas, y que pudiera explicar si no estuvieran al alcance del Consejo, su dictamen no puede menos de ser contrario á semejantes depósitos en las casas mortuorias y en las iglesias, y así opina se consulte al Gobierno de S. M., proponiéndole la adopción de las disposiciones siguientes:

1.^a El tiempo de depósito ó permanencia de los cadáveres embalsamados, ya sea en las casas mortuorias, ya en las iglesias, no podrá exceder de tres dias después del embalsamamiento; durante los cuales, y por si el estado del cadáver exigiera acortar el plazo, quedará bajo la vigilancia del subdelegado que intervino la operación.

2.^a La disposición anterior no será obstáculo á las que se adopten por las autoridades en los casos de epidemia...

Y conforme S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden, etc.—Madrid 28 de Abril de 1875.—Romero y Robledo.

Disposiciones del Código penal.

Art. 349. El que practicare ó hubiere hecho practicar una inhumación, contraviendo á lo dispuesto por las leyes ó reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, incurrirá en las penas de arresto mayor y multa de 150 á 1,500 pesetas.

Art. 350. El que violare los sepulcros ó sepulturas, practicando cualesquiera actos que tiendan directamente á faltar al respeto debido á la memoria de los muertos, será condenado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 355. El que exhumare ó trasladare los restos humanos con infracción de los reglamentos y demás disposiciones de sanidad, incurrirá en la multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 595. Serán castigados con la multa de 5 á 25 pesetas y reprensión:

5.^o Los que infringieren las disposiciones sanitarias dictadas por la Administración sobre conducción de cadáveres y enterramientos, en los casos no previstos en el libro II de este Código.

6.^o Los que profanaren los cadáveres, cementerios ó lugares de enterramiento, por hechos ó actos que no constituyan delito.

SENTENCIA DE 20 DE MAYO DE 1884.

La joven Vicenta Anastasia Sanchez dió á luz, ayudada de su madre, un niño robusto y viable, que en opinión de los médicos, si sufrió la muerte á los pocos instantes de nacer, no fué por consecuencia de enfermedad común. Instruida causa y hallado el cadáver del recién nacido envuelto entre paja en un cuarto de trastero, la Audiencia de Manzanares absolvió á las citadas mujeres por el delito de

infanticidio, cuya prueba legal faltaba, y las condenó como autoras del delito de inhumación ilegal de cadáveres, previsto en el art. 349 del Código penal.

El Ministerio público interpuso recurso de casación impugnando ambas calificaciones de la sentencia; y el Tribunal Supremo casa y anula la recurrida en cuanto castigó á las acusadas por el delito de inhumación.

«Considerando que la aplicación que la Audiencia hace del art. 349 del Código es sin duda errónea, porque derivándola del hecho de haberse encontrado el niño en el cuarto del trastero envuelto en paja y en estado de putrefacción, semejante hecho encaminado á la ocultación del producto del parto y del delito en su caso, no supone la práctica de una inhumación contraviniendo á lo dispuesto en las leyes ó reglamentos respecto al tiempo, sitio y demás formalidades prescritas para las inhumaciones, como exige la letra y espíritu del mencionado art. 349.»

Denegación de sepultura eclesiástica.

DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO Y R. O. DE 9 DE FEBRERO DE 1860.

Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dice al de la Gobernación en 9 de Febrero último (de 1860) lo siguiente:

Excmo. Sr.: Con fecha 3 de Diciembre último la Sección de Gracia y Justicia del Consejo de Estado ha elevado á este Ministerio la consulta siguiente: «Con Real orden comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 24 del actual, se remite á informe de la Sección el expediente instruido con motivo de la conducta observada por los curas párrocos de Llivia y Puigcerdá, provincia de Gerona, diócesis de Urgel.—El gobernador civil de la provincia, en 18 de Agosto último, acudió al Ministerio de la Gobernación manifestando que en 3 de aquel mes había fallecido en la villa de Puigcerdá un párvulo de once meses, y que al tratarse de darle sepultura en uno de los nichos del cementerio, se opuso el cura á que los eclesiásticos acompañaran el cadáver y á que se celebrara el oficio de gloria, fundándose en que el diocesano sólo consentía se hicieran las inhumaciones en zanjas ú hoyos, y no en nichos, teniendo la familia y amigos que acudir al párroco del inmediato pueblo de Ise, en Francia, para que se celebrara la misa de gloria por el niño difunto; y en virtud de la sorpresa que había ocasionado este hecho y la de también haberse negado el párroco de Llivia á conceder sepultura eclesiástica al cadáver de un adulto fallecido de apoplejía, dirigió una comunicación al prelado, rogándole aplicase á los desmanes que refería el oportuno correctivo, elevándolo todo á conocimiento del Gobierno de S. M. Pasada esta comunicación de la autoridad civil al Ministerio de Gracia y Justicia, se pidió informe al obispo de Urgel acerca de los hechos que la motivaban, y de éste aparece que los nichos formados en los cementerios de Puigcerdá han sido sin el co-

nocimiento ni intervención de la autoridad eclesiástica, por cuya razón el prelado había amonestado al Ayuntamiento de la villa á que se sujetara para ello á las formalidades prescritas en los cánones, puesto que los cementerios constituyen parte del edificio de la iglesia y dependen exclusivamente de la autoridad eclesiástica.

Y respecto á haberse negado la sepultura en su grado al cadáver de José Alavert, vecino de Llívia y fallecido en 1.º de Julio último, manifiesta que, según informe del párroco, aquel desgraciado, no sólo fué impenitente á la hora de la muerte, sino que le constaba no haber cumplido con el precepto pascual, y que era voz pública el no haber querido nunca sujetarse á confesión sacramental, habiendo desatendido las amonestaciones del médico, del vicario y hasta las súplicas del párroco durante su última enfermedad, para reconciliarse con la Iglesia, en cuya virtud el cura, fundándose en la ley 5.ª, art. 8.º, lib. III de las sinodales, se había negado á enterrarle en sagrado.

Fijados, pues, los hechos que ocasionaron la comunicación del gobernador de Gerona, entrará la Sección en el examen de la consulta pedida. En diferentes ocasiones el Consejo y la Sección han tenido el honor de manifestar á V. E. que la concesión ó denegación de sepultura eclesiástica constituía parte del derecho de penar que tiene la Iglesia, y cuyo ejercicio le debe estar libre y expedito.

En este sentido consultó la Sección en 1.º de Febrero último, en el expediente promovido por el gobernador civil de Guadalajara respecto á la denegación de sepultura en sagrado á un adulto fallecido en Tonja; ateniéndose para ello á los precedentes sentados, y especialmente á la consulta del Consejo Real de 2 de Septiembre de 1851, que opinó debían siempre respetarse los acuerdos de la autoridad eclesiástica en este punto, limitándose la civil á cuidar solo se colocara en lugar decoroso el cadáver del que por sus errores había sido lanzado del gremio de la Iglesia.

En los hechos denunciados por el gobernador de Gerona, la autoridad eclesiástica ha obrado dentro del círculo de sus atribuciones, y solo el superior jerárquico en este orden será el que puede conocer de sus desmanes, caso que los hubiera cometido. Ante el obispo, debieron, pues, acudir los interesados, si se les ofrecía que los párrocos respectivos habían aplicado mal las prescripciones canónicas; pero consta, por el contrario, que las familias de los interesados no han presentado queja alguna en este expediente, procediendo en todo la autoridad civil como en cuestión de orden público.

Las razones alegadas por el prelado, justifican la conducta de los eclesiásticos de Puigcerdá y Llívia, puesto que los cementerios están sujetos enteramente á la autoridad del obispo, que dice no haber dado su consentimiento á la formación de los nichos, y, por consiguiente, su bendición á las paredes en que se colocó el cadáver del párvulo fallecido en Puigcerdá; y que la impenitencia á la hora de la muerte, es, según los principios del derecho eclesiástico, una de las causas que privan de la sepultura en sagrado.

Así, por lo tanto, la Sección es de dictamen de que siendo la autoridad eclesiástica la única que puede decidir si se debe ó no conceder sepultura en sagrado, y á la vez si el sitio en que ésta se verifica está adornado de todos los requisitos prescritos para inhumar cadáveres de los católicos, los acuerdos tomados por los párrocos de Puigcerdá y Llívia deben respetarse, y únicamente la autoridad del prelado es la que los puede corregir, supuesto que la familia de los interesados en estos dos casos tenga reclamación que presentar; debiéndose manifestar al gobernador de Gerona que interponga el prestigio de su autoridad para que cesen las desavenencias que se dice median entre el obispo de la diócesis y el Ayuntamiento de Puigcerdá respecto á la construcción de los nichos en el cementerio de esta villa.

Y habiéndose conformado S. M. la Reina con el preinserto dictamen, lo trascribo á V. E. de Real orden para su conocimiento y efectos correspondientes. —De la propia Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación, lo traslado á V. S. para los mismos fines y por contestación á su oficio de 18 de Agosto del año próximo pasado.

R. O. DE 29 DE OCTUBRE DE 1861.

He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en este Ministerio á consecuencia del enterramiento verificado en el cementerio de la Escala, provincia de Gerona, del cadáver de Rafael Puig, del cual resulta:

1.º Que el expresado Puig, según comunicación del Ilmo. Sr. obispo de Gerona, que obra en dicho expediente, se resistió y negó obstinadamente á recibir los Santos Sacramentos hasta su postrer instante, muriendo por lo mismo impenitente y fuera del gremio de nuestra Santa Madre la Iglesia.

2.º Que privado el cadáver de Puig de la sepultura eclesiástica por dicha autoridad como consecuencia natural de su impenitencia, y dispuesta la inhumación en lugar contiguo al cementerio, si ya no habia alguno destinado para los desgraciados que mueren de tal manera, el alcalde de la Escala se resistió á cumplir las órdenes del prelado, comunicadas verbalmente y en forma solemne por el párroco de dicho pueblo, el cual, revestido de los ornamentos sacerdotales, y puesto en la puerta del sagrado recinto de los muertos, protestó contra este desafuero, retirándose al fin luego que adquirió la persuasión de la inutilidad de sus exhortaciones.

3.º La sepultura verificada violentamente dentro del mismo por orden y con presencia del alcalde.

4.º El entredicho fulminado por la autoridad eclesiástica contra el citado cementerio, en el cual desde entonces no se da sepultura eclesiástica al cadáver de ningún católico.

5.º La exhumación de dicho cadáver, reclamada por el Ilmo. Sr. obispo de Gerona para proceder á la reconciliación de aquel lugar sagrado.

Y 6.ª La resolución negativa del gobernador á la petición del citado prelado y la destitución del alcalde de la Escala acordada por aquella autoridad.

Enterado S. M. de cuantos extremos abraza este expediente, y considerando que la censurable conducta observada por dicho alcalde ha sido causa de un conflicto con las autoridades eclesiásticas á que nunca debió darse lugar; considerando asimismo que el Concordato vigente celebrado en 1851 con la Santa Sede dice en su art. 4.º refiriéndose á asuntos eclesiásticos: «*Que en todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica, los obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los Sagrados Cánones*» considerando que el objeto de la Real orden de 19 de Marzo de 1848, relativa á la exhumación y traslación de cadáveres de un cementerio á otro, etc., fué impedir las frecuentes é inmotivadas exhumaciones y traslación de cadáveres, y de ninguna manera el de poner obstáculos á la acción de la justicia eclesiástica ni civil; y considerando, por último, que con las censuras que han recaído en dicho cementerio, se irroga infinitos perjuicios á los vecinos de la Escala, que tienen que llevar sus muertos al del pueblo de Ampurias, viéndose así separados de las sagradas cenizas de sus padres, hermanos é hijos, ha tenido por conveniente resolver, después de haber oído al Consejo de Estado, que se deje expedita la jurisdicción del diocesano en el caso de que se trata y en todos los demás que ocurran de igual naturaleza, llevando á efecto la exhumación del cadáver de Rafael Puig, previas las precauciones higiénicas que requiere el estado del difunto, y aprobar la conducta seguida por V. S. y la destitución del citado alcalde de la Escala.

R. O. DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1871.

Visto el expediente remitido por V. S. á este Ministerio, en que la autoridad eclesiástica de esa diócesis pretende que se exhume el cadáver de D. Sebastián Rodríguez, inhumado en el cementerio de Fuentesauco: Resultando que el expresado D. Sebastián parece que hubo de arrojarse por una de las ventanas de la torre de la iglesia de S. Juan en aquella villa, dejando de existir á los pocos momentos, pero recibiendo el Sacramento de la Extremaunción: Resultando que al trasladar con la oportunidad debida dicho cadáver al cementerio, en la puerta del mismo se opuso el cura ecónomo á que se le diese entrada hasta que obtuviese contestación á la consulta que tenía dirigida á sus superiores: Resultando que la autoridad local de Fuentesauco, obediendo las órdenes del Juzgado de primera instancia, y fundándose á la vez en que el estado de descomposición del cadáver no permitía dilatar por más tiempo su enterramiento, ordenó se verificase éste sin la menor dilación en el citado cementerio: Resultando que tan luego como la autoridad superior eclesiástica tuvo conocimiento del suceso, reclamó contra esta medida, quejándose de intrusión en su jurisdicción, y exigiendo del alcalde al propio tiempo se exhumase el cadáver del sagrado recinto en que se encontraba, por ser el de un impenitente suicida: Resultando que éste se negó á semejante reclama-

ción, fundándose en las Reales órdenes de 19 de Mayo de 1848, 12 de Mayo de 1849 y 30 de Enero de 1851, que prohíben terminantemente las exhumaciones hasta tanto que trascurren dos años por lo ménos desde la defunción: Resultando que á consecuencia de esta negativa la autoridad eclesiástica declaró entredicho el cementerio, previniendo á los párrocos de Fuentesauco que mientras permaneciese en él dicho cadáver no permitiesen la inhumación en el mismo del de ningún fiel: Y resultando, por último, que por parte de la misma autoridad eclesiástica se adujo también la entrega de las llaves del cementerio que siempre habían obrado en poder del alcalde, á lo cual no accedió éste, entre otras razones, por ser aquél propiedad del Municipio, edificado de los fondos exclusivamente del pueblo, siendo una de las fincas correspondientes al patrimonio del común, y con tal carácter inscrita en el Registro de la propiedad; pero sin que esto obstase para que los párrocos dispusieran de ellas para los altos fines de su sagrado ministerio: Considerando que el desgraciado D. Sebastián Rodríguez lo mismo pudo tener la intención de suicidarse, que por efecto de un vahido ó accidente imprevisto se desprendiese de la ventana de la torre y ocasionar su muerte: Considerando que aun en caso de verdadero suicidio debió suponerse la previa enajenación mental que por lo común precede á semejantes catástrofes, y á que siempre presume la Iglesia que ha lugar al arrepentimiento en los últimos momentos de la vida, mayormente cuando á Rodríguez se le había administrado el Sacramento de la Extremaunción: Considerando que al ordenar el alcalde el enterramiento en el único sitio que existe destinado al efecto en Fuentesauco, no hizo otra cosa que dar cumplimiento á las leyes de Sanidad que le están encomendadas: Considerando que también obró de perfecto acuerdo con lo dispuesto en las Reales órdenes que quedan mencionadas al negarse á verificar la exhumación pretendida por la autoridad eclesiástica, puesto que lo prohíben terminantemente hasta pasados cuando ménos dos años: Considerando que no estuvo ménos acertado el alcalde negándose á entregar las llaves del camposanto, puesto que si bien éste es un lugar sagrado, pertenece al Municipio, cuya administracion obtiene desde tiempo inmemorial, y hoy en virtud de lo dispuesto en el párrafo 6.º del art. 50 de la ley municipal: Considerando, por último, que la declaración del entredicho del cementerio de aquella localidad, acordada por el Rdo. obispo de esa diócesis, pudiera ocasionar un conflicto entre sus habitantes, el Rey (Q. D. G.) se ha servido aprobar la conducta observada por V. S. en este asunto, previniéndole que no consienta dije de inhumarse en el cementerio de dicha villa, del cual conservará la llave la Municipalidad. Al propio tiempo ha tenido á bien mandar S. M. se dé conocimiento de este asunto al Ministerio de Gracia y Justicia, para que por él se dicten las disposiciones oportunas, á fin de que la autoridad eclesiástica procure tranquilizar los ánimos de los vecinos de dicha población que hayan podido conmover las órdenes con este motivo ha expedido.

De Real orden, etc.—Madrid 25 de Noviembre de 1871.—Candau.—Señor Gobernador de Zamora.

R. O. DE 30 DE MAYO DE 1878.

En el expediente instruido por Doña Francisca Brisolará y Barceló, en solicitud de que se declare ilegal y abusiva la inhumación de su padre D. José, en el cementerio protestante de Mahón:

Resultando de cuantos detalles abraza este expediente, como de la consulta evacuada por la mayoría de las Secciones de Gobernación y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, lo propio que del voto particular de la minoría de ambas Secciones y de la refutación que á este voto acompaña:

Resultando que D. José Brisolará al tiempo de su muerte en Mahón, de donde era vecino, ocurrida en 24 de Febrero de 1876, después de dictar cuatro días antes el correspondiente testamento, vivía al parecer en el seno del catolicismo, puesto que no constaba se le hubiera separado de este gremio, previas las censuras y el expediente con los descargos y recursos que determinan los cánones:

Resultando que el fallecimiento, según certificación facultativa, fué efecto de una fiebre reumática la cual, tres días antes del suceso, privó por completo al enfermo de sus facultades intelectuales:

Resultando que solicitada la Extremaunción por la familia del Sr. Brisolará, le fué denegada por el párroco fundándose en que no la pedía el moribundo (á pesar de que los interesados expresaron la imposibilidad física y moral de verificarlo); en que no cumplía desde algún tiempo con los preceptos de la Iglesia, y en que habiéndose personado dos días antes el propio párroco, una vez solo y otra acompañado del vicario, en casa del enfermo á fin de reconciliarle temiendo que muriese impenitente, no le permitieron acercarse al lecho del paciente por estar privado de razón:

Resultando que informando el párroco al sufragáneo de Menorca, á la sazón en Mahón, participándole lo hecho en el particular, S. I. encargó dirigir y ejecutó oraciones públicas para alcanzar del Altísimo la gracia de la conversión:

Resultando que habiendo fallecido D. José Brisolará sin la Extremaunción, y solicitándose por su hija D.^a Francisca el sepelio eclesiástico en el panteón de familia que el difunto poseía en el camposanto, el mismo párroco le negó la sepultura eclesiástica:

Resultando que á instancia de dicha atribulada señora, el alcalde y el subgobernador interpusieron sus buenos oficios ante el Rdo. prelado, quien fallando *ex informata conscientia*, aprobó la conducta del párroco:

Resultando que en vista de esta resolución del señor obispo, el alcalde y el subgobernador, desestimando la demanda de la familia de Brisolará para que el enterramiento se hiciese en el cementerio católico, é interinamente en un lugar entredicho y á propósito, ordenaron que el cadáver fuese sepultado en el cementerio protestante por carecerse en Mahón del neutro prevenido en la R. O. de 16 de Julio de 1871:

Resultando que también le fué denegada á dicha señora doña Francisca Brisolara por el Juzgado de primera instancia la información que prometía para probar el catolicismo de su señor padre á fin de que no se le impusiera la pena canónica sin la debida audiencia:

Resultando que en este estado y con tales resoluciones la expresada señora, persuadida de que su difunto padre ha vivido siempre en el gremio de la Iglesia católica, cumpliendo todos sus preceptos, como tiene la seguridad de probarlo, sin que ninguna autoridad eclesiástica le hubiera reconvenido ni expulsado; en que educó á sus deudos en la misma fé, en que desde Febrero de 1874 posía *ad perpetuum* panteón de familia en el cementerio católico de Mahón, donde abrigaba el propósito, no sólo de trasladar las cenizas de sus hijos muertos en Nueva Orleans, sino que tenía el de pedir licencia al Rdo. obispo para erigir en dicho cementerio un altar con el objeto de que en él se celebrase el Santo Sacrificio de la Misa todos los días, acudió al Gobierno solicitando amparo y protección contra el terrible y excepcionel fallo de que se ha hecho mérito, cuya gravedad y trascendencia sume á toda la familia en la aflicción y el desconsuelo:

Resultando que reclamados los datos necesarios, y remitidos por este Ministerio á informe de las Secciones de Gobernación y Gracia y Justicia del Consejo de Estado, la mayoría, fundándose en los cánones, leyes y prácticas sobre la materia, reconocen: primero, que la concesión y denegación de sepultura eclesiástica, si bien compete á los ministros de la Iglesia, ha de hacerse de conformidad con las mismas leyes y cánones: segundo, que en el caso concreto objeto de la demanda la privación de la sepultura católica al cadáver de D. José Brisolara, impuesta por el párroco de la iglesia de Santa María de Mahón, y aprobada por el Rdo. obispo de Menorca *ex informata conscientia*, no se obró con arreglo á derecho, esto es, previa la instrucción del oportuno expediente canónico por lo cual debe instruirse para que recaiga el fallo que en justicia proceda: tercero, que como tampoco procedía el enterramiento de dicho cadáver en el cementerio protestante, y si en el que para estos casos se dispone en la R. O. de 16 de Julio de 1871, deberá exhumarse tan pronto lo consientan las leyes sanitarias á fin de trasladarle á dicho cementerio especial ó al católico, si para entonces como resultado de la información y sentencia así se hubiese acordado: cuarto, que para evitar conflictos futuros, de acuerdo con el nuncio de Su Santidad, se procure hacer saber á los reverendos obispos que la privación de sepultura eclesiástica no puede acordarse *ex informata conscientia*, siendo necesario ordenarla bajo las censuras y previo el oportuno expediente canónico mencionado; y quinto, que esta resolución se circule á las autoridades para que á ella arreglen su conducta:

Resultando que la minoría de dichas Secciones solo difiere de la mayoría en que no habiéndose procedido en dicha privación de sepultura con arreglo á las prescripciones canónicas y civiles, se debe en el tiempo oportuno, según las leyes sanitarias permitan; prestar la conveniente protección para trasladar los restos de D. José Brisolara al cementerio católico y mausoleo de familia del finado, em-

pleándose al efecto los medios de inteligencia y concordia necesarios; y si en estas gestiones y resolución se invierte más tiempo del que fuera de desear, se verifique la traslación provisional según propone la mayoría; y por último, que se hagan las advertencias convenientes á las autoridades de Mahón por no haber cumplido lo dispuesto en las Rs. Ords. de 2 de Septiembre de 1851 y 6 de Octubre de 1859, encargándoles que en lo sucesivo ajusten su conducta á lo dispuesto en la legislación vigente.

Vistas las sesiones, 14, 23 y 24 del Concilio de Trento, en las que resulta anulado el capítulo XII del cuarto de Letran, donde se autorizaban los fallos *ex informata conscientia*:

Vista la facultad de excomunión, limitada por nuestro piadoso pontífice romano Pío IX en la bula *Apostolica Sedis moderatione convenit*:

Visto el art. 45 del último Concordato:

Vistas las Rs. Ords. de 2 de Septiembre de 1851, 6 de Octubre de 1859 y 16 de Julio de 1871:

Considerando que la privación de sepultura eclesiástica y exclusión del gremio de la Iglesia á un católico que habiendo sido bautizado ha seguido en ella sin abjurar, sin ser amonestado y sin existir méritos en términos de justicia para aseverar que haya muerto impenitente, es una pena gravísima y terrible que está reservada por la misma Iglesia para casos muy excepcionales de rebelión, escarnecimiento, reprobaciones y desprecios contra el dogma, y solo aplicables con la medida, moderación y templanza tan propia de nuestra veneranda doctrina católica, y aun así precedida del expediente en que aparezcan las amonestaciones, audiencia, la sentencia y demás requisitos que los sagrados cánones exigen de conformidad con las leyes del Reino:

Considerando que en ninguna circunstancia puede dictarse *ex informata conscientia*, fallo que únicamente tiene su aplicación taxativa, esto es, para los delitos y ordenaciones de los clérigos á quienes los reverendos prebados pueden castigar y denegar dichas órdenes cuando en conciencia no les crean dignos de esta gracia, pues tratándose del derecho de los fieles han de atemperarse al expediente referido:

Considerando que no habiéndose intruido expediente contra el difunto don José Brisolara, mal pudo recaer acto judicial ni la sentencia prevenida en los cánones con la audiencia, amonestación y trámite que en los mismos y en las leyes del poder temporal se determinan:

Considerando que esta falta, una vez cometida, debe subsanarse con decidido espíritu de concordia y de recta justicia, procediendo desde luego á la instrucción del expediente á fin de que, dejando libre el derecho de la Iglesia, se abra empero la defensa de la familia lastimada, y obvie la alta inpección administrativa que en los actos externos del culto corresponde al Gobierno encargado de proteger y amparar á los súbditos con arreglo, no sólo á las prácticas usadas en todos los tiempos, sino á la medida y necesidades que nacen del desenvolvimiento de los pro-

blemas sociales que agitan los pueblos, á las leyes del Reino y á lo pactado en el Concordato:

Considerando que las autoridades civiles de Mahón, al prevenir el enterramiento del cadáver de Brisolara en el cementerio protestante, si no se ajustaron, como hubiera sido de desear, á las disposiciones vigentes, se atemperaron en lo posible, pues no existiendo entonces sitio adecuado para éstas inhumaciones, al fin en el cementerio protestante quedaba el cadáver al abrigo de toda otra profanación:

Considerando, por último, cuánto conviene para evitar sucesos análogos que á los ojos mundanos pudieran afectar á la benéfica y piadosa doctrina de la Iglesia ponerse de acuerdo con el nuncio de Su Santidad á fin de que *Collatis consiliis* se haga saber á los reverendos obispos que la privación de sepultura eclesiástica debe acordarse en virtud de expediente, según está prevenido; S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer, con vista del dictámen de las secciones de Gobernación y Gracia y Justicia del Consejo de Estado:

1.º Que no habiéndose obrado como procedía en la denegación *ex informata conscientia* de la sepultura eclesiástica al cadáver de D. José Brisolara, el Muy reverendo obispo de Menorca, usando de su autoridad, proceda sin levantar mano á instruir el expediente canónico con arreglo á la sesión 23 del Concilio de Trento y en armonía con el cap. III de la sesión 24 del mismo Concilio, recibiendo las informaciones, dando audiencia á la familia Brisolara, admitiendo justificantes y uniendo testimonio legal del testamento del difunto y del certificado de óbito del facultativo, pronunciándose de de luego la sentencia que crea justa, y concediéndose á los interesados las apelaciones según derecho para los tribunales eclesiásticos, para la Audiencia del territorio, y en su caso para el Tribunal Supremo de Justicia.

2.º Que como no debió haber sido enterrado el cadáver de D. José Brisolara en el cementerio protestante, y careciéndose en la actualidad del que determina la R. O. de 16 de Julio de 1871, se proceda con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 19 de Marzo de 1848, regla 4.ª, á la traslación al cementerio católico del citado cadáver, y con anuencia de la autoridad eclesiástica se cerque con verja ó pared el espacio que comprenda el mausoleo de la familia del finado, recomendando la pronta terminación del expediente para su fello en definitiva.

3.º Que á fin de cortar conflictos de esta índole y á tenor de lo mandado en el art. 45 del último Concordato, disponiendo que las dificultades que puedan surgir entre las potestades eclesiástica y civil sean arregladas *Collatis consiliis*, se procure, de acuerdo con el nuncio de Su Santidad, hacer saber á los reverendos obispos, sin que por esto se ofenda su claro talento y recta conciencia que los distingue, que la privación de sepultura eclesiástica solo podrá acordarse previo el oportuno expediente canónico y en las condiciones que las leyes permitan.

Y 4.º Que se comunique esta resolución á las autoridades para su conocimiento y para que arreglen su conducta á lo que las leyes prescriben.

De Real orden, etc.—Madrid 30 de Mayo de 1878.—Romero y Robledo.—Sr. Gobernador de la provincia de...

R. O. DE 3 DE ENERO DE 1879.

Ilmo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas acerca de la inteligencia y cumplimiento de la R. O. de 30 de Mayo último dictada por el Ministerio de la Gobernación, y deseando S. M. el Rey (Q. D. G.) resolverlas armonizando como se debe los derechos del Estado con la libertad de la Iglesia en el desempeño de su augusta misión, ha tenido á bien mandar que los gobernadores civiles y demás autoridades á quienes corresponda ejecutar lo dispuesto en la citada Real orden, procedan de acuerdo con los reverendos prelados, *dejando libre el derecho de la Iglesia, como textualmente se expresa en aquélla, pues no fué ni pudo ser el objeto de dicha soberana disposición despojar á la Iglesia de la facultad que exclusivamente la compete para declarar quiénes mueren dentro de su comunión y quiénes fuera de ella; y por consecuencia le conceder á los unos y negar á los otros la sepultura eclesiástica con arreglo á los sagrados cánones y á los convenios celebrados con la Santa Sede.* Es asimismo la voluntad del Rey, que cuando muera alguno fuera de la religión católica, y no haya en la población cementerio propio en que pueda dársele sepultura, se entierren los restos mortales de los que en estas circunstancias fallezcan en lugar decoroso, inmediato, pero separado del cementerio católico, según está repetidamente prevenido, *evitando toda profanación bajo la más estrecha responsabilidad de las autoridades que dejen de cumplir este precepto estando por la índole de sus funciones obligadas á ello.* Lo que de Real orden, y por acuerdo del Consejo de Ministros, tengo el honor de participar á V. I. para su debido conocimiento y efectos consiguientes:

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1879.—Calderón y Collantes.—Sr. Obispo de Badajóz.

Enterramiento civil de párvulos católicos.

R. O. DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1890.

En el expediente instruido en el Ministerio de la Gobernación á instancia de V. E. sobre que se declare ilegal el enterramiento en el cementerio civil de Ribadavia del cadáver del párvulo católico Abraham Gómez Pérez y se ordene la traslación de sus restos al cementerio católico de dicha villa, cuyo expediente fué remitido á este Ministerio para que en su vista se dictase la resolución procedente, el Consejo de Estado en pleno ha emitido el siguiente informe:

•Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden de 16 de Julio último, dictada por el Ministerio del digno cargo de V. E., el Consejo ha examinado con el detenimiento que lo delicado de la materia sometida á su consulta requiere, el expediente incoado por el Reverendo Obispo de Tuy sobre el conflicto ocurrido en

tre dicha Autoridad y la del Alcalde de Ribadavia, de la provincia de Orense, con motivo de la inhumación del párvulo católico Abraham Gómez Pérez en el cementerio civil de aquel pueblo:

Resultando de los antecedentes remitidos:

Que con fecha 14 de Junio de 1887 el Reverendo Prelado de Túy ofició al Ministerio de la Gobernación denunciando el hecho de que el 7 de Febrero anterior ocurrió en Ribadavia, pueblo de su jurisdicción diocesana, el fallecimiento del niño católico, de seis años, Abraham Gómez Perez, cuyo cadáver, á petición del padre y previa autorización de la Alcaldía, fué inhumado en el cementerio civil de dicha localidad.

Añade asimismo el Prelado que al enterarse de lo sucedido lo puso en conocimiento del Gobernador de la provincia, denunciándole el caso y pidiéndole que pudiese el remedio posible al daño hecho para dejar á la Iglesia en el lugar que le correspondía.

Que á esta comunicación contestó el Gobernador con otra, en la que decía que había dispuesto instruir expediente para que las leyes se cumplieran rigurosamente y se dejasen en su lugar los derechos de la Iglesia.

Que después de varias comunicaciones cruzadas entre ambas Autoridades, y en vista de que al asunto no se ponía un pronto y satisfactorio término concretó sus pretensiones en la última comunicación dirigida á la Autoridad civil de la provincia en 13 de Marzo de aquel año; reduciéndolas á los tres puntos siguientes:

1.º Reprobación pública del hecho de haberse privado de sepultura católica á un católico.

2.º Que á costa de los autores se trasladase el cadáver al cementerio católico tan luego como lo permitan las leyes sanitarias, aislándose hasta tanto la sepultura y levantándose un acta, ó poniéndose una inscripción en que constase esta determinación.

Y 3.º Que se impusiera al Alcalde la oportuna corrección, ó que se le hicieran las advertencias correspondientes para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza.

Que trascurridos veinticuatro dias sin tomarse por el Gobernador determinación alguna, es porque elevaba la queja al Ministro de la Gobernación, con súplica de que se ordenase á aquella Autoridad ejecutara lo propuesto por el Prelado en los tres puntos referidos.

Dado por el Obispo de Túy traslado de esta comunicación á ese Ministerio, impetró de éste su valimiento cerca del de Gobernación para el más pronto y favorable despacho de sus pretensiones.

El Negociado de la Sección correspondiente de este Ministerio, estimando ajustadas á derecho las pretensiones formuladas por el ordinario de Túy, fundándose en que así como la Iglesia tiene derecho de negar la sepultura eclesiástica al individuo que muere fuera de su comunión, lo tiene también para hacer que se le dé al que muere dentro de ella; y en que con el caso ocurrido en Ribadavia había

padecido detrimento la jurisdicción eclesiástica, propuso que procedía llamar sobre este asunto la atención del Ministerio de la Gobernación, significándole al propio tiempo la conveniencia de que adoptara la resolución que estimase adecuada al fin de que no resultara lastimada la Autoridad del Prelado en su justificada petición, de conformidad con cuyo dictamen se expidió la Real orden de 5 de Julio de 1887.

En 23 del mismo mes y año instó de nuevo el Prelado á Gobernación invocando el nombre de la religión y los Sagrados Cánones conculcados, toda vez que apesar de la anterior Real orden nada se disponía por el indicado centro ministerial, continuando el escándalo con befa de los autores de la violación, por lo cual solicitaba que cuanto antes se impusiese un correctivo.

Reiteró en 10 de Octubre de dicho año sus súplicas el Prelado, y con fecha 31 del mismo mes se expidió por el Ministerio de la Gobernación Real orden contestando á la de 5 de Julio, expedida por ese departamento, en la que se declaró que aquel Ministerio, tratándose de asunto de tanta importancia, había creído indispensable la formación de expediente, que en su día sería sometido á informe del Consejo de Estado, y se resolvería como en justicia procediese, procurando establecer una jurisprudencia que hoy no existe, y armonizar los derechos de la Autoridad eclesiástica con el que pue la asistir á los padres del párvulo inhumado en el cementerio civil de Ribadavia.

Comunicada la Real orden anterior al Ordinario de Tuy, éste, en nueva comunicación, dirigida á ese Ministerio en 23 de Enero de 1888, quejándose de que con dicha disposición se retardaba, en vez de satisfacer, la plenitud de la justicia de sus demandas, sin renunciar á lo que estimaba indisputable derecho, pidió que desde luego se interesase al Ministro de la Gobernación para que hiciera extensiva al caso de Ribadavia la Real orden de 13 de Octubre del 87 expedida por el mismo, por la que se resolvió un caso idéntico ocurrido en la diócesis de Cuenca, mandando aislar el sitio del enterramiento del párvulo Juan Jesús Carretero y Araque, en tanto que trascurrido el plazo señalado por las disposiciones sanitarias se procedía á la exhumación é inmediato sepelio en el cementerio católico.

Con Real orden de 13 de Febrero se pasó copia á Gobernación, significándole nuevamente la conveniencia de que defiriera á la petición del Prelado, si el estado del expediente lo permitía y lo estimaba procedente.

En 13 de Abril y con Real orden de esa fecha, dictada de conformidad con lo propuesto por la Sección de Orden público del Ministerio de la Gobernación, se remitió á ese departamento el expediente, interesándole la conveniencia de que con Audiencia del Consejo de Estado en pleno, recayese una resolución de carácter general, que determinase el derecho de la Iglesia y el que pudiera asistir por las leyes civiles á los padres en los casos de enterramiento de párvulos.

Al expediente, compuesto de comunicaciones y Reales órdenes á que en este extracto se hace referencia, acompaña, entre los antecedentes remitidos por el

Gobernador de la provincia de Orense, una certificación de la Alcaldía de Ribadavia, en la que se afirma ser cierto el hecho denunciado, y al mismo tiempo se unen por vía de ilustración, dos resoluciones adoptadas telegráficamente por aquel Ministerio, en dos casos ocurridos en Mocejón, provincia de Toledo, y en Barcelona, resoluciones en las que se sienta la doctrina «de que los menores de edad deben ser enterrados bajo la religión que determinen sus padres.»

El negociado, en vista del nuevo giro dado al expediente, por lo que hace al caso concreto del conflicto ocurrido en Ribadavia, mantuvo sus afirmaciones de acuerdo con las que se expidió la ya citada Real orden de 5 de Junio de 1887, resolviendo á favor de las pretensiones del Reverendo Obispo de Tuy. Y por lo que concernia á la necesidad de dictar una medida que por su carácter general evitase este género de cuestiones, la estimaba procedente; y á dicho fin, expuso la doctrina sobre que tal resolución debía fundarse, deduciéndose sus conclusiones en el sentido de que á la Autoridad eclesiástica corresponde la facultad de exigir que el párvulo bautizado descansa en lugar sagrado; pero que por la naturaleza mixta é importancia del asunto, procedía se obrase de acuerdo con el Nuncio de su Santidad, y oyendo, desde luego, el parecer del Consejo de Estado en pleno.

En 16 de Julio de 1888 se dictó la Real orden, en cumplimiento de la cual, evacua el Consejo su consulta.

Con tales antecedentes, y entrando de lleno en el estudio del fondo de la cuestión que en este expediente se ventila, toda ella queda en sus más precisos términos, reducida á resolver, cuál de las dos potestades, si la eclesiástica ó la civil, representante en estos casos de los derechos del padre, es la competente para dirimir cuál haya de ser el lugar del enterramiento de los párvulos que mueran dentro ó fuera del gremio de la Iglesia, según que hayan ó nó recibido el Sacramento del Bautismo.

No pudiendo negarse á la Iglesia los caracteres que la constituyen como una Sociedad perfecta, dentro del orden de lo esencial á que su imperio se contrae, evidente es su jurisdicción en todo aquello que de un modo directo toque ó se relacione con los derechos espirituales que á ella solo atañe definir ó reconocer ó negar en uso de su poder legislativo. Es asimismo axiomático en buenos principios canónicos, que la sepultura eclesiástica es un *derecho espiritual* perfecto que por el Bautismo adquieren los fieles, y del cual, nadie, ni aún la misma Iglesia, puede privarles, á no ser que á él se renuncie, una vez llegado el uso de la razón, por medio de la apostasia ó realizando actos que lleven consigo la aplicación de tal pena.

Siendo del mismo modo dogmático dentro de la comunión católica que el bautismo imprime carácter, de tal suerte, que una vez recibido por el hijo, pertenece de lleno en lo religioso á la Iglesia católica, y este vínculo solo puede romperse mediante la abjuración, claro y á todas luces cierto resulta el derecho de la Iglesia para reclamar el cadáver del párvulo bautizado á fin de darle cristiana sepultura.

Verdad es, que con arreglo á los Cánones, puede el padre elegir sepultura

para el hijo impúber por carecer este de discernimiento; pero aparte de que en buena doctrina canónica ha de hacerlo el padre antes del fallecimiento del hijo, siempre y en todo caso, se sobreentiende ese derecho dentro del cementerio católico, y no en lugar profano, tanto, que algunos pontífices, como Bonifacio VIII, impusieron pena de excomunión á los que instigasen á los fieles á hacer semejante elección.

Por lo que al párvulo no bautizado se refiere, terminantes son las disposiciones canónicas que le privan de sepultura en sagrado.

Mas como quiera que de las premisas sentadas se deduce que con arreglo á los principios fundamentales del derecho canónico prescriben, siempre que se trata de definir quiénes mueren ó no dentro del seno de la Iglesia, y á quiénes, por tanto, debe ó nó negarse sepultura eclesiástica, las materias sobre que tales juicios versan son constitutivas de verdaderos derechos espirituales, en cualquiera de los casos resulta innegable, que, á la potestad eclesiástica corresponde conocer de ellos y resolver no tan sólo á título de derecho, sinó con obligación ineludible.

Se alega en contraposición de la doctrina expuesta el mejor derecho de los padres por virtud de los que la patria potestad les confiere y el art. 11 de la Constitución vigente, que al autorizar la tolerancia de cultos parece llevar implícito la libertad en el padre como árbitro de la educación de sus hijos, de disponer con sujeción á qué religión han de ser sepultados una vez que mueran antes de llegar á la edad de discernimiento; cuyos principios informaron las dos resoluciones del Ministerio de la Gobernación, relativas á los casos de Mocejón y Barcelona, por las cuales se dispuso que «los menores de edad deben ser enterrados bajo la religión que determinen los padres».

Pero tal dificultad carece en absoluto de fundamento si atentamente se considera que aunque no extinguiése como realmente se extingue en el padre la patria potestad con la muerte del hijo nunca en aquella como institución que regula la legislación civil, radicaría la facultad de despojar al hijo de un perfecto derecho *espiritual*, del cual á él toca exclusivamente renunciar por un acto de su libre voluntad en edad competente, y á la Iglesia definir en caso de duda.

Y no es tan sólo ésta quien ha de velar porque tal derecho no se le conculque, y antes por el contrario se le respete y haga efectivos, sinó que también el Estado debe venir en auxilio de la Iglesia prestándole el apoyo de sus medios coercitivos, bien cuando se le otorga, bien así mismo cuando se le niega, si ha de obrar en armonía con su elevada misión de protector de todo derecho *legítimamente* definido.

Y que así lo han querido entender nuestras leyes fundamentales sobre estas materias, se desprende en general de los artículos 3.º y 4.º del Concordato de 1851 que es ley del Reino, é implícitamente del mismo contenido del art. 11 de nuestra Constitución.

Con efecto se dispone en los primeros que «no se pondrá impedimento alguno á los Prelados y demás sagrados Ministros en el ejercicio de sus funciones,

ni les molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo, antes bien, cuidarán todas las Autoridades del Reino de guardarles y de que se les guarden el respeto y consideración debidos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro ó menosprecio,» y «que en las cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la Autoridad eclesiástica, los Obispos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados Cánones.»

Y en armonía con los mismos, el texto del citado art. 11 de la Constitución española, que al declarar que la Religión católica, apostólica, romana, es la del Estado, no obstante autorizar la tolerancia, reconoce por parte de la Iglesia el incontrovertible derecho á ser respetada en sus leyes, y por tanto en el libre ejercicio de las mismas.

Ajustándose á esa doctrina, y ya más en concreto el punto que ha motivado este expediente, se han dictado posteriormente disposiciones ministeriales, entre otras las Reales órdenes de 3 y 7 de Enero de 1879, por las que explícitamente se ha declarado «que corresponde á la Iglesia la facultad de decidir quiénes mueran dentro de su comunión y quiénes fuera, y por lo tanto de conceder á los unos y negar á los otros sepultura eclesiástica,» sin que en estas disposiciones se haya hecho exclusión expresa de los párvulos.

Finalmente y con posterioridad á las resoluciones del Ministerio de la Gobernación, dictadas por telégrafo y sin formación de expediente, en los casos mencionados de Mocejón y Barcelona, se expidió por dicho Centro la Real orden de 13 de Octubre de 1887, invocada por el Reverendo Obispo de Tuy, como aplicable al caso ocurrido en Ribadavia por resolver en ella uno idéntico acaecido en la diócesis de Cuenca, de acuerdo con las pretensiones de esta Autoridad eclesiástica.

En virtud de todo lo expuesto; teniendo además en consideración, que no aparece en el expediente un solo dato que haga presumir existiese oposición por parte de los padres al acto de la recepción canónica del sacramento del Bautismo del párvulo de que se trata, y en vista del estado de derecho sobre la delicada materia que ha dado margen á esta consulta, el Consejo no puede ménos de reconocer la justicia de la petición formulada por el Reverendo Prelado de Tuy y declarar asimismo que en el conflicto producido en Ribadavia con motivo del enterramiento del párvulo Abraham Gómez Pérez ha padecido detrimento la jurisdicción eclesiástica; y se hace de todo punto necesario volver por su indicación y decoro, como garantía eficaz de la armónica relación que debe existir entre ambas potestades, procurando el deslinde de sus atribuciones respectivas.

Mas como de un lado urge cuanto antes poner satisfactorio término á la situación irregular creada á causa del sepelio del párvulo Gómez Pérez verificado en el cementerio civil de Ribadavia, y de otro pudiera ser oportuno oír el parecer del muy Reverendo Nuncio apostólico antes de dictarse una medida de carácter general, tratándose de un asunto de mixto fuero, y esto dilataría acaso por largo tiempo la resolución definitiva del caso concreto que motiva esta consulta; tenien-

do además en cuenta que han transcurrido ya con exceso los dos años exigidos por las leyes sanitarias para poder proceder á la exhumación del susodicho párvulo, el consejo tiene la honra de proponer á V. E. las siguientes conclusiones:

1.^a Que el enterramiento del cadáver de Abraham Gómez Pérez, verificado el 7 de Febrero de 1887 en el cementerio civil de Ribadavia, debe ser declarado nulo por anticanónico é ilegal.

2.^a Que se proceda, por tanto inmediatamente á la exhumación y traslación de los restos de dicho párvulo, del cementerio civil en que yacen al cementerio católico de Ribadavia, á costa de los reconocidos como autores del primer sepelio.

3.^a Que con traslado de la Real orden que por V. E. recaiga, se signifique al Ministerio de la Gobernación la conveniencia de que, si lo estima oportuno, advierta al Alcalde de Ribadavia, á fin de que en lo sucesivo se abstenga de conceder autorizaciones, para las cuales carece de competencia.

Y 4.^a Que esta resolución se tenga como regla de aplicación general para los casos que ocurran en la práctica, en tanto que otra cosa se disponga, de acuerdo con el muy Reverendo Nuncio apostólico.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de 1890.—Villaverde.
—Sr. Obispo de Tuy.

Llaves de los cementerios.

~~~~~

R. O. DE 18 DE MARZO DE 1861.

En el expediente relativo á si las llaves del cementerio de Bestabal, provincia de Granada, deben estar depositadas en poder del alcalde ó del cura párroco de la expresada villa, las Secciones de Estado y Gracia y Justicia, de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, con fecha 5 del mes último han informado lo siguiente:

“Excmo. Sr.: Estas Secciones han examinado el expediente instruido con motivo de las contestaciones que han mediado entre el M. R. arzobispo y el gobernador de Granada sobre si corresponde al cura párroco ó al alcalde de Bestabal conservar las llaves del cementerio de la misma villa. Siempre es sensible todo conflicto entre las autoridades, pero sube esto de punto cuando no existe ninguna razón fundada para ello. Esto es cabalmente lo que sucede en el asunto que ha motivado el expediente sobre que han de emitir su informe las Secciones. Desde los primeros tiempos del Cristianismo han sido considerados los cementerios como lugares sagrados y por consiguiente han tenido los privilegios y pre-



rogativas de tales. Eran consagrados por los obispos con las ceremonias que para el efecto establece el Ritual Romano, del mismo modo que se hacía para consagrar las iglesias. Y á tal punto llegó la paridad, que se estableció la necesidad de la reconciliación de estos asilos de muerte, si por acaso eran profanados. De aquí procedieron los privilegios de que han estado en posesión los cementerios de servir de lugares de asilo, de estar exentos del comercio humano é incapacitados para ser objeto de lucro ó negociación, de no poderse juzgar en ellos pleitos de seglares y otras prerrogativas semejantes. Y no podía suceder otra cosa, porque los fieles mientras viven, pertenecía á la sociedad civil; desde que mueren, sus restos pertenecen á la Iglesia que les recibe y conduce al cementerio con las plegarias y oraciones de los difuntos, y les dá sepultura bendecida como parte de la comunión de la Iglesia en que vivieron. De aquí ha procedido la parte tan principal que la autoridad eclesiástica ha tenido siempre en todo cuanto se ha referido á cementerios, que se han considerado como una parte integrante de las iglesias parroquiales. Ambos derechos, el canónico y el civil, están conformes en esto. Y para que resulte más si cabe el carácter de lugar sagrado que los cementerios tienen, considérense con sus cruces y signos de la religión repartidos por todas partes, con la concurrencia de fieles que á ellos asiste, con el recogimiento que el lugar inspira, con el sentimiento religioso que por todas partes se difunde, con las oraciones que por el eterno descanso de los muertos se escuchan.

Si se examina la dirección y administración de los cementerios, se verá que por la ley 4.<sup>a</sup> título XIII, Part. 1.<sup>a</sup>, correspondía á los obispos señalarlos fijar su extensión y amojonarlos. D. Carlos III por cédula de 3 de Abril de 1787, que es la ley 1.<sup>a</sup>, tit. III de la Nov. Rec., restableciendo la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios según el Ritual Romano, dispuso que ésta se verificase á la menor costa posible, bajo el plan ó diseño que harían formar los curas de acuerdo con el corregidor del partido, costeándose los gastos de los caudales de fábricas de las iglesias si los hubiere, prorrateándose lo que faltase entre los partícipes en dieismos, ayudando también los caudales públicos.

Por la R. O. de 2 de Junio de 1833, encargándose la construcción de cementerios en todos los pueblos, se ordenó que donde se alegase y probase que las fábricas de las iglesias no tienen fondos para construirlos, se eche mano de los de propios donde puedan soportar este gravamen, y si tampoco estos existen, los Ayuntamientos propongan los medios que consideren más adecuados para tan importante objeto. Se ve, pues, con qué especial cuidado han tratado las leyes de poner de manifiesto la intervención que se ha concedido á las autoridades eclesiásticas y á las iglesias en este particular, ya concediéndolas el tomar la iniciativa, ya presentando los fondos municipales como obligados en primer término á costear estas obras. Es consecuencia natural y lógica de esto que la custodia de los cementerios esté cometida á las autoridades eclesiásticas, cuya

primera intervención siempre ha sido reconocida por las leyes, y no debe ser obstáculo para ello el que un cementerio haya sido construido con fondos municipales, porque no por eso se habrá cambiado la esencia del lugar, puesto que desde el momento en que haya sido consagrado pertenece á los bienes de la Iglesia inalienables. Muchas iglesias hay construidas con fondos de los pueblos y de que son patronos los Ayuntamientos; sin embargo, á ninguno se le ocurrió la pretensión de tener en su poder las llaves, que corresponden al párroco. Téngase presente además que en el caso particular á que se refiere el expediente, ni siquiera se han tomado el alcalde de Bestabal y gobernador de la provincia la molestia de acreditar que el cementerio de este pueblo ha sido construido á expensas de los bienes de propios.

Si se consultan los antecedentes que sobre asuntos análogos existen en el Consejo, se verá que cuantas consultas se han evacuado lo han sido en este sentido. En un expediente promovido con motivo de cuestiones suscitadas entre el Ayuntamiento de Palencia, que amplió el cementerio con fondos de propios y construyó una capilla, y el obispo de la diócesis, sobre exacción de los derechos de sepultura, las Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación informaron en 23 de Octubre de 1847 que no había podido nunca ponerse en duda el carácter eclesiástico del cementerio de Palencia, pues la circunstancia de que una parte había sido costeada por fondos municipales, ni alteraba su naturaleza, ni era más que el cumplimiento de la ley 1.<sup>a</sup>, tit. III, lib. I de la Nov. Recop., debiendo considerarse como cosa religiosa sujeta á la autoridad del ordinario. Formóse después un reglamento de mutuo acuerdo entre ambas autoridades, y habiendo sido oídas para su aprobación las mencionadas Secciones, en 24 de Junio de 1849 informaron que debía aprobarse; y partiendo del principio que los cementerios deben considerarse como dependencias eclesiásticas, se estableció en el art. 24 del expresado reglamento que el capellán nombrado por el Ayuntamiento, aprobado por el obispo, y revocable por este *ad nutum*, tendría la llave del cementerio, entregándosela de día al sepulturero. En el expediente instruido con motivo de la denegación de sepultura eclesiástica al cadáver de Martín de Laserna, en Villaverde de Trucios, provincia de Santander, dispuso el gobernador que el párroco entregase la llave del cementerio al alcalde: y oídas las mismas Secciones de Gracia y Justicia y Gobernación, al informar sobre el fondo de la cuestión; lo hicieron también manifestando que se obligase al alcalde á que inmediatamente devolviese dicha llave al párroco; que era á quien correspondía tenerla.

No por esto se priva á la Administración de la justa intervención que debe tener en los cementerios en todo lo que se refiere á su policía y régimen en cuanto tiene relación con la salud. Desde las leyes de Partida hasta las disposiciones más recientes, se ha reconocido esta intervención para que por nadie sea disputada. Las autoridades administrativas pueden y deben examinar los cementerios para ver si se cumple con las prescripciones legales acerca de las sepulturas; celar cuidado-

samente para que se construyan donde no las haya, ejerciendo una policía severa, no sólo en que para su construcción se guarden las reglas al efecto establecidas, sino también en los depósitos de cadáveres, entierros y exhumaciones.

Es cuanto se refiere á cementerios *mixti-fori*; pero cada una de las autoridades que intervienen en el asunto tiene terminantemente deslinadas sus atribuciones de modo que puedan ejercerlas sin lastimarse. Siempre que las autoridades locales tengan que entrar en los cementerios para cumplir con su cometido pueden hacerlo, y el párroco ó quien en su nombre tenga la llave deberá franquearla inmediatamente, de modo que el servicio público pueda llenarse sin retraso y sin obstáculo alguno.

Opinan las Secciones puede servirse V. E. consultar á S. M. que al cura párroco y no al alcalde de Bestabal corresponde tener las llaves del cementerio de dicha villa, con la obligación de facilitarlas á dicho alcalde ó á cualquier delegado en su nombre siempre que las pidan para el ejercicio de su cometido.

Y habiéndose servido resolver S. M. de acuerdo con el preinserto informe, de su Real orden lo comunico á V. S. como regla general para lo sucesivo.

R. O. DE 22 DE ENERO DE 1883.

Dada cuenta á S. M. del expediente instruido en la Dirección general de Beneficencia y Sanidad con motivo del conflicto surgido entre el reverendo obispo de esa diócesis y el alcalde de Plasencia sobre la posesión de las llaves del cementerio de esta ciudad, construido á expensas del municipio:

Vistas la Real orden de 18 de Marzo de 1861, que trata del fuero mixto respecto de los camposantos, y la de 13 de Noviembre de 1872, expedida por virtud de competencia entre las dos referidas autoridades, cuya disposición se fundó en la acordada del Consejo de Estado por haber pretendido el Ilmo. señor obispo de Zamora que se derogase la de 25 de Noviembre de 1871, relativa á la sepultura Sagrada que se dió en el cementerio de Fuentesadco á un cadáver.

Vista la quinta conclusión del acuerdo referido, por el cual opinó el Consejo de Estado que deben los cementerios tener dos llaves, con objeto de que las autoridades municipal y eclesiástica posean cada una la suya, y puedan por este medio ejercer con independencia la primera cuanto referirse pueda á la higiene, policía y orden dentro de aquellos recintos, y la segunda en lo que hace relación á las materias espiritual y religiosa:

Vista la Real orden de 14 de Julio de 1879, dictada también con motivo de otra competencia promovida entre las autoridades civil y eclesiástica de Soria sobre la posesión de las llaves del camposanto de aquella capital, que fué expedida en vista de la acordada del Consejo de Estado fecha 27 de Junio del mismo año, encargándose en ella el cumplimiento de la de 13 de Noviembre de 1872:

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha dignado resolver que se esté á lo prevenido en las Reales órdenes de 13 de Noviembre de 1872, 14 de Julio de 1879 y la con-

clusión quinta de la acordada del Consejo de Estado, en que se fundó la primera de estas Reales disposiciones; es decir, que el cementerio de Plasencia tenga dos llaves, una en poder de la autoridad municipal y la otra en el de la eclesiástica, con el objeto que anteriormente queda expresado.

De Real orden, etc.—Madrid 22 de Enero de 1883.—Gullón.—Sr. Gobernador de la provincia de....

## NUMERO 4.º

### Sobre Seminarios.

---

R. O. DE 21 DE MAYO DE 1852.

Teniendo en consideración lo convenido con la Santa Sede acerca del régimen y enseñanza de los Seminarios conciliares, deseando tenga cumplido efecto en su letra y espíritu lo dispuesto sobre el particular en el artículo 28 del Concordato y conformándome con lo que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, me ha propuesto el de Gracia y Justicia con inteligencia del Nuncio de Su Santidad, vengo en declarar lo siguiente:

Art. 1.º En todo lo tocante al arreglo de los Seminarios conciliares, á la enseñanza y administración de sus bienes, se observarán los decretos del *Concilio de Trento*.

Art. 2.º En su consecuencia quedan enteramente libres los diocesanos para nombrar el rector y los catedráticos de sus respectivos Seminarios y para removerlos y suspenderlos de sus destinos; pero se les ruega y encarga dar conocimiento á mi Gobierno, por conducto del Ministro de Gracia y Justicia, de todos los nombramientos arriba dichos, con expresión de los méritos, servicios y circunstancias de los nombrados, y de cualquiera alteración que introduzcan en lo sucesivo en el plan de estudios.

Art. 3.º En los Seminarios conciliares habrá todas las asignaturas necesarias para la carrera de teología, hasta el grado de licenciado, limitándose al de bachiller en la Facultad de Cánones.

Art. 4.º Los estudios posteriores que sean necesarios para recibir los grados de doctor en teología, este mismo grado y el de licenciado en Cánones se harán precisamente en los Seminarios generales ó centrales.

Art. 5.º Los eclesiásticos estudiarán precisamente en las Universidades del Reino los cursos de derecho civil.

Art. 6.º Los ordinarios admitirán y recibirán en los Seminarios conciliares, en clase de alumnos internos, el número de jóvenes que juzguen conveniente segun la necesidad y utilidad de la diócesis y disposición de aquellos.

Art. 7.º No siendo posible, como es notorio, que todos los alumnos de los Se-

minarios sean internos, los diocesanos podrán, según su prudente discreción, admitir en calidad de externos, el número de jóvenes necesarios para el servicio de sus respectivas diócesis, proponiéndolo á mi Gobierno y previa su conformidad.

Art. 8.º Los grados menores se conferirán en los Seminarios conciliares, terminado que sea el presente curso académico.

Art. 9.º El Tribunal de exámen será presidido por el obispo ó su delegado.

Art. 10. Los grados mayores de teología y Cánones se conferirán exclusivamente en los Seminarios centrales. Interin éstos se establecen, se conferirán dichos grados en los Seminarios de Toledo, Valencia, Granada y Salamanca, en la forma que se determine desde el principio del curso académico próximo venidero de 1852 á 1853.

Art. 11. Los grados de bachiller y licenciado en derecho civil se recibirán por los interesados en las Universidades del Reino, aprobándoles al intento los cursos de filosofía y Cánones que hubieren ganado en los Seminarios eclesiásticos, cualesquiera que sean sus asignaturas, y los establecidos en las Universidades, siempre que aquéllos sirvan solo para los efectos eclesiásticos.

Art. 12. Los graduados en los Seminarios conciliares y centrales prestarán el juramento que corresponda y se determine en el plan de estudios para los mismos establecimientos.

Art. 13. Los diocesanos expedirán los títulos de los grados mayores y menores que se confieran, extendiéndolos en papel del sello de ilustres.

Art. 14. Los estudios de filosofía, Cánones y teología, ganados hasta aquí en los Institutos y Universidades del Reino, aprovecharán para la carrera eclesiástica como si se hubiesen seguido por los interesados en Seminarios clericales.

Art. 15. Los grados mayores y menores de jurisprudencia, posteriores al plan general de estudios de 1845 se considerarán como obtenidos en la Facultad de Cánones para todos los efectos de la carrera eclesiástica, debiendo hacer previamente los interesados la protestación de la fé ante el diocesano.

Art. 16. Quedan derogadas todas las disposiciones del plan y reglas generales de estudios vigentes relativos á los Seminarios conciliares.

Art. 17. El Ministro de Gracia y Justicia dictará las resoluciones oportunas para la ejecución del presente decreto.



R. C. DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1852.

Se publica y autoriza por esta Real cédula el plan de estudios formado por el M. R. Nuncio de S. S., consultados los prelados de España y atendidas las observaciones que han sido hechas por los mismos. Es como sigue:

PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS SEMINARIOS CONCILIARES DE ESPAÑA.

TÍTULO I.—*Latinidad y humanidades.*

El estudio de gramática y humanidades se hará en cuatro años, supuestos los rudimentos de latín y castellano, que los alumnos deben haber aprendido antes, y de los cuales, así como de los demás que constituye la instrucción primaria, serán examinados en la forma que cada diocesano estime conveniente.

Año primero. Repaso de los rudimentos, sintaxis de ambas lenguas é historia sagrada.—Año segundo. Repaso de la sintaxis y su terminación; estudio de la prosodia y ortografía en ambos idiomas é historia profana.—Año tercero.—Retórica teórica ó sea preceptos del arte, oratoria y poética; principios de lengua griega y terminación de historia profana.—Año cuarto. Retórica práctica ó sea aplicación de los preceptos del arte, oratoria y poética en latín y castellano, continuación de la gramática griega, é historia particular de España.

TÍTULO II.—*Filosofía.*

El estudio de la filosofía se hará en tres años.

Año primero. Lógica y metafísica é historia de la filosofía.—Año segundo. Ética y elementos de matemáticas.—Año tercero. Física experimental con nociones de química. Principios de cálculo diferencial é integral y físico-matemática.

TÍTULO III.—*Teología.*

El estudio de la teología será en siete años.

Año primero. Fundamentos de religión, lugares teológicos y elementos de lengua hebrea.—Año segundo. Instituciones teológico dogmáticas, historia y disciplina eclesiástica y conclusión de la lengua hebrea.—Año tercero. Continuación de las instituciones teológico-dogmáticas, y de la historia y disciplina eclesiástica y teología moral.—Año cuarto. Conclusión de la teología dogmática y moral, y de la historia y disciplina eclesiástica. Con estos cursos podrá recibirse el grado de bachiller.—Año quinto. Instituciones bíblicas, ó sea crítica hermenéutica general, patrología y oratoria sagrada.—Año sexto. Conclusión del estudio de la Sagrada Escritura, ó sea crítica y hermenéutica particular, continuación de la patrología y de la oratoria sagrada.—Con estos seis cursos podrá recibirse el grado de

licenciado.—Año sétimo. Disciplina del Concilio de Trento y particular de España conforme á sus Concilios y Concordatos. Con estos siete cursos podrá recibirse el grado de doctor.

Como el estudio de la sagrada teología es el estudio de todo eclesiástico, los que quieran estudiar Cánones han de haber ganado los cuatro primeros cursos de aquella Facultad, con los cuales, y uno de Cánones, podrán graduarse de bachiller en esta.

#### TITULO IV.—*Derecho canónico.*

El estudio del derecho canónico se hará en tres años.

Año primero. Derecho público eclesiástico, é instituciones canónicas.—Año segundo. Decretales. Concluido este año podrá recibirse el grado de licenciado en Cánones.—Año tercero. Disciplina del Concilio de Trento y particular de España conforme á sus Concilios y Concordatos.

Terminado este año se podrá recibir el grado de doctor en la misma facultad.

Los que hayan hecho la carrera completa de teología, serán dispensados del tercer año de Cánones en atención á que las materias que se enseñan en éste las tienen ya estudiadas. Por consiguiente, concluido el segundo año de Cánones, recibirán sucesivamente los grados de licenciado y doctor.

Esta parte del plan regirá mientras no se establezcan los Seminarios centrales, en cuyo caso, teniéndose presentes los estudios que en ellos deban hacerse, se modificará respecto de los últimos cursos de la carrera.

No siendo necesarios todos estos estudios á cuantos se dediquen á la carrera eclesiástica, por haber en la Iglesia muchos ministerios que no requieren toda esta instrucción, ni hallándose todos en la disposición de hacerlos por falta de recursos ó por no estar dotados de un entendimiento á propósito, los ordinarios prescribirán á esta clase una carrera más abreviada que será en la forma siguiente:

Años primero, segundo y tercero de latinidad y humanidades. Un año de filosofía para el estudio de lógica y metafísica.

Dos de teología dogmática y moral, en cada uno de los cuales los alumnos asistirán á las cátedras de moral establecidas para los de carrera completa, y se les explicará por un profesor destinado al efecto, un curso compendiado de teología dogmática.

#### NÚMERO 5.º

#### Sobre obligaciones eclesiásticas.

R. D. DE 15 DE ENERO DE 1875.

En vista de lo expuesto por el Ministro de Hacienda, y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º El presupuesto de obligaciones eclesiásticas correspondiente al año económico actual que figura en la sección 3.ª de Obligaciones de los departamentos ministeriales, *Ministerio de Gracia y Justicia*, por la suma de pesetas 3.251, 014'46 se declara ampliado hasta la cantidad de pesetas 41.611,674, que es el importe de la misma atención, en el presupuesto de 1870-71, último en que fueron consignadas todas las asignaciones del culto y clero. Esta ampliación se entenderá solamente en la parte proporcional necesaria á satisfacer las obligaciones que se devenguen desde 1.º del presente mes al término del año económico y con la misma distribución detallada del referido presupuesto de 1870-71.

Art. 2.º Las obligaciones propias del presupuesto restablecido por el artículo anterior se abonarán al clero en la forma acostumbrada y en las épocas en que sean satisfechos los haberes de todas las clases activas del Estado, según lo permitan las atenciones preferentes de la guerra civil.

Art. 3.º Los atrasos que resulten á favor del clero por obligaciones de los presupuestos anteriores y al ejercicio corriente devengadas y no satisfechas por el Tesoro público serán objeto de una liquidación, que se realizará inmediatamente, á fin de que una vez determinado su importe se acuerde la forma en que haya de ser satisfecho.

Art. 4.º El Ministro de Hacienda dispondrá lo conveniente para el cumplimiento de este decreto, del cual dará oportunamente cuenta á las Cortes.

Dado en Palacio á quince de Enero de mil ochocientos setenta y cinco.— Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

## DECRETO DE 28 DE ENERO DE 1875.

La ampliación de los créditos del presupuesto de obligaciones eclesiásticas correspondiente al año económico actual, dispuesta por decreto de 15 de este mes, exige la determinación de las cantidades á invertir en cada servicio durante el segundo semestre del referido año económico; y por esta razón, y porque en el presupuesto de 1870 á 71 que sirvió de base á la expresada ampliación dejaron de comprenderse algunas de las obligaciones concordadas con la Santa Sede,

El Rey, y en su nombre el Ministerio Regencia,

Ha decretado lo siguiente:

Artículo 1.º El presupuesto de obligaciones eclesiásticas para el segundo semestre de este año económico que forma parte de la sección 3.ª de obligaciones de los departamentos ministeriales del mismo se fija en la suma de 21.626,528 pesetas 24 céntimos, distribuida por capítulos y artículos con sujeción al adjunto estado:

Art. 2.º Se declaran anulados los remanentes que en 31 de Diciembre últi-

mo resulten de los créditos que para obligaciones eclesiásticas figuraron en el presupuesto aprobado por decreto de 26 de Junio de este año.

Dado en Madrid á veintiocho de Enero de mil ochocientos setenta y cinco.—El Presidente del Ministerio-Regencia, Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

*Presupuesto de Obligaciones eclesiásticas para el segundo semestre de 1874-75.*

| Capítulos. | Artículos. | OBLIGACIONES.                                             | Por artículos. |          | Por capítulos. |      |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|------|
|            |            |                                                           | Pesetas.       | Cts.     | Pesetas.       | Cts. |
| 11         | 1.º        | Clero catedral.....                                       | 2,826,250      |          |                |      |
|            | 2.º        | Exceso de dotación á varios capitulares.....              |                | 2,162'50 |                |      |
|            | 3.º        | Clero colegial.....                                       | 268,775        |          |                |      |
|            | 4.º        | Idem id. suprimido, parroquial y benefical.....           | 10,608,587'50  |          |                |      |
|            | 5.º        | Dotación á jubilados.....                                 |                | 7,255    |                |      |
|            | 6.º        | Clero parroquial de las provincias Vascongadas.....       | 576,428'75     |          |                |      |
|            | 7.º        | Capellanes excedentes de las catedrales.....              |                | 9,645    |                |      |
|            | 8.º        | Dotación del M. R. Patriarca....                          | 18,750         |          |                |      |
|            |            |                                                           | <hr/>          |          | 14,317,853'75  |      |
| 12         | 1.º        | Culto catedral.....                                       | 488,750        |          |                |      |
|            | 2.º        | Gastos de administración y visita .                       | 108,500        |          |                |      |
|            | 3.º        | Culto colegial.....                                       | 63,508'75      |          |                |      |
|            | 4.º        | Idem colegial suprimido y parroquial.....                 | 3,821,644'87   |          |                |      |
|            | 5.º        | Gasto de la Administración económica.....                 | 117,843'75     |          |                |      |
|            | 6.º        | Culto y conservación del Santuario de Monserrat, etc..... |                | 11,250   |                |      |
|            | 7.º        | Gastos imprevistos.....                                   | 25,000         |          |                |      |
|            | 8.º        | Culto parroquial de las Provincias Vascongadas.....       | 164,951'75     |          |                |      |
|            | 9.º        | Seminarios conciliares y bibliotecas.                     | 637,375        |          |                |      |
|            | 10         | Biblioteca Colombina.....                                 |                | 2,250    |                |      |
|            | 11         | Ofrenda al Apóstol Santiago.....                          | 6,153'75       |          |                |      |
|            |            |                                                           | <hr/>          |          | 5,447,232'87   |      |
| 13         | Único.     | Personal de religiosas en clausura.                       | "              |          | 876,056'87     |      |
| 14         | "          | Material de id. id.....                                   | "              |          | 536,739'75     |      |
| 15         | 1.º        | Personal del Tribunal de las Ordenes.....                 | 40,525         |          |                |      |
|            | 2.º        | Idem de la imprenta de bulas....                          | 5,500          |          |                |      |
|            |            |                                                           | <hr/>          |          | 46,025         |      |

|    |     |                                                                |           |               |
|----|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 16 | 1.º | Material del Tribunal de las Órdenes.....                      | 1,625     |               |
|    | 2.º | Idem del Tribunal de Cruzada....                               | 2,000     |               |
|    | 3.º | Gastos de la publicación de la bula en Madrid.....             | 477'50    |               |
|    |     |                                                                |           | 4,102'50      |
| 17 | 1.º | Reales fábricas de San Pedro y San Juan de Letrán en Roma..... | 46,961'25 |               |
|    | 2.º | M. R. Nuncio de Su Santidad....                                | 12,500    |               |
|    |     |                                                                |           | 59,461'25     |
| 18 | 1.º | Bulas de la Península.....                                     | 32,100    |               |
|    | 2.º | Idem de Ultramar.....                                          | 5,218'75  |               |
|    |     |                                                                |           | 37,318'75     |
| 19 | 1.º | Instituto de las hijas de la Caridad.....                      | 9,550     |               |
|    | 2.º | Idem de San Vicente de Paul....                                | 25,937'50 |               |
|    | 3.º | Idem de San Felipe Neri.....                                   | 21,000    |               |
|    | 4.º | Colegios profesionales de Padres Escolapios.....               | 25,000    |               |
|    |     |                                                                |           | 31,487'50     |
| 20 | 1.º | Reparación de templos.....                                     | 125,000   |               |
|    | 2.º | Idem de conventos de religiosas...                             | 50,000    |               |
|    | 3.º | Idem de palacios episcopales y seminarios.....                 | 12,500    |               |
|    | 4.º | Gastos de instrucción de expedientes.....                      | 32,750    |               |
|    |     |                                                                |           | 220,250       |
|    |     |                                                                |           | 21.626,528'24 |

Madrid 28 de Enero de 1875.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

## Contribución territorial y sobresueldos.

El clero sufre el descuento del 10 por 100 de sus cortas asignaciones con la forma de donativo voluntario (Artículo 2.º de la ley de 31 de Diciembre de 1881),

Se exceptúan de la contribución de inmuebles:

1.º Los templos, cementerios y las casas ocupadas por las comunidades religiosas; los edificios, huertos y jardines destinados al servicio de los templos ó á la habitación y recreo de los párrocos ú otros ministros de la Iglesia.—Los palacios de los obispos.

2.º Los edificios ocupados por los Seminarios conciliares.

3.º Los edificios destinados á hospicios, hospitales, cárceles, casas de corrección ó de beneficencia general ó local etc. (Art. 5.º del Reglamento general para el repartimiento de la contribución de inmuebles, cultivo, etc., de 30 de Septiembre de 1885).—(R. O. de 14 de Marzo de 1867.)



## Repartimientos municipales.

R. O. DE 16 DE JULIO DE 1879.

Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente promovido por el Reverendo Obispo de Guadix con motivo de incluirse á los Curas párrocos de varios pueblos de aquella diócesis en los repartimientos para gastos municipales y provinciales, las Secciones de Gobernación, de Hacienda y de Gracia y Justicia de aquel alto Cuerpo han emitido el dictámen siguiente:

«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Abril último se remite á informe de estas Secciones el expediente instruido con motivo de la reclamación que el Reverendo Obispo de Guadix elevó al Gobierno de S. M. en solicitud de que aclarándose las dudas que ocurren respecto á si las asignaciones del Clero, las Iglesias y casas rectorales están exentas de tributación, se declare que no deben ser comprendidas en los repartimientos generales.

No es la primera vez que se dirigen al Gobierno peticiones en este sentido.

En efecto en 13 de Septiembre de 1859 el clero parroquial de Velez Rubio, con apoyo del Diocesano de Almería, elevó al Ministerio de Hacienda, por conducto del de Gracia y Justicia, una instancia solicitando se le declarase exento de figurar en los repartimientos vecinales, y por Real orden de 20 de Octubre del año siguiente, dictada de conformidad con lo propuesto por la Dirección correspondiente de aquel Centro, y de acuerdo con el dictámen de la Asesoría general, se desestimó la instancia, sentándose la doctrina de que los reclamantes se hallaban sujetos al pago de las cuotas que les correspondiesen en los repartimientos vecinales, como todas las demás clases del Estado.

Diez años después, la Diputación provincial de Tarragona consultó al Ministerio del digno cargo de V. E. si los Capitulares de la catedral de Tortosa estaban ó no obligados á contribuir para los gastos municipales en proporción á sus respectivas asignaciones, y en Real orden de 27 de Noviembre de 1871, publicada en 22 de Diciembre siguiente, se declaró igualmente, de conformidad con lo propuesto por la Sección de Gobernación y Fomento de este Consejo, que como los productos del impuesto de que se trata se habían de destinar principalmente á cubrir atenciones de la localidad, comprendía á todos los vecinos ó residentes en ella, pues nada más natural y conforme á los principios de justicia que contribuyan á levantar tales cargas cuantos á su vez gozan de las comodidades y conveniencias á que se destinan, como los empedrados, los paseos, el alumbrado y los demás servicios indispensables en un pueblo culto; deduciéndose de aquí la lógica consecuencia de que los recurrentes no estaban exentos de los repartimientos.

Igual jurisprudencia se sentó en otra orden de 19 de Octubre de 1873, publicada en 26, en la cual, conformándose también el Gobierno con el parecer de

la Sección antes mencionada, se hizo una declaración más amplia, puesto que se dijo que los Ayuntamientos podían hacer extensivos los repartimientos generales además de los haberes del clero, á otros emolumentos que los interesados tuviesen por derechos parroquiales ú otros conceptos.

El Cura párroco de Adrada promovió asimismo un expediente para que no se le comprendiera en el repartimiento general, fundándose en que, según los artículos 33 y 36 del Concordato vigente, la asignación del Clero no ha de sufrir descuento pues no solo debe ser congrua, sinó también segura, revistiendo el carácter de indemnización y no el de sueldo ó pensión. La Sección de Gobernación, con cuyo dictámen se conformó S. M., en 31 de Octubre de 1876, manifestó que la lectura de los artículos del Concordato bastaba para persuadir de que no tenían aplicación al caso, y que aunque el carácter de las asignaciones del Clero fuera el de una indemnización, no están exentos de contribuir al sostenimiento de servicios y atenciones de que disfrutan, como vecinos, los que pertenecen á aquella respetable clase, y que no se halla en el Concordato artículo alguno que directa ó indirectamente establezca tal exención, mientras que la ley municipal entónces en vigor (no alterada por la actual en esta parte), sujeta á la obligación de sostener los gastos del pueblo á toda clase de riqueza, cualquiera que sea la forma en que se manifieste, sin más excepción que las de los pobres de solemnidad, acogidos en los establecimientos de Beneficencia y las clases de tropa de tierra y mar.

Si las reglas generales son en muchas ó en todas ocasiones confirmadas por las excepciones, la asentada anteriormente lo ha sido por la Real orden de 27 de Marzo de 1875, *Gaceta* del 17 del mes siguiente, que declarando pobres á los religiosos misioneros de Filipinas, los eximió del repartimiento general, prueba inequívoca de que el Clero seglar está obligado á contribuir como los demás vecinos.

Ante esta constante jurisprudencia, no se comprende cómo las Diputaciones provinciales han podido incurrir en contradicciones respecto á la materia, como manifiesta el Reverendo Obispo de Guadix en su reclamación.

Las Secciones opinan, en su consecuencia, que el Clero debe figurar en los repartimientos generales que se verifiquen para atender á los gastos de los Municipios.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1879.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Granada.

## Contribución de consumos.

---

### REALES ÓRDENES DE 4 DE MARZO DE 1878.

He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) de la solicitud del Ayuntamiento de Consuegra, provincia de Toledo, pidiendo se declare si la comunidad de Frailes de S. Francisco de Asís, establecida en dicha Villa, debe pagar los derechos de consumos.

S. M., de acuerdo con lo propuesto por V. E., se ha servido resolver que la expresada comunidad está obligada á pagar los derechos correspondientes á las especies que consume.

De Real orden. etc. Madrid 4 de Marzo de 1878.—Orovio.—Sr. Director general de Impuestos.

He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) de la solicitud de los presidentes de las comunidades religiosas de Olmedo, pidiendo se sirva declararlas exceptuadas de los repartimientos de consumos con motivo de ser pobres.

S. M., de acuerdo con lo propuesto por esa Dirección general, se ha servido desestimar la indicada instancia.

De Real orden, etc. Madrid 4 de Marzo de 1878.—Orovio.—Sr. Director general de Impuestos.

### R. O. DE 17 DE FEBRERO DE 1879.

Solicitado por el Rvdo. obispo de Orihuela que se declarase que los eclesiásticos no debían incluirse en los repartimientos por consumos y sal, S. M. se ha servido disponer... «que con arreglo al derecho hoy constituido por el art. 215 de la instrucción vigente, no pueden dejar de ser comprendidos los eclesiásticos en los repartimientos de que se trata.»

## Cédulas personales.

El R. D. de 27 de Mayo de 1884 solo exceptua del pago de este impuesto á—las clases de tropa—los acogidos en los asilos de beneficencia y los mendigos—las religiosas profesas y las Hermanas de la Caridad. (Art. 9.º)

NUMERO 6.º

**Sobre devolución  
de propiedades del clero exceptuadas de la venta.**

DECRETO DE 9 DE ENERO DE 1875.

Cuando en 1860 se concordó con la Santa Sede la permutación de los bienes del clero, solo se exceptuaron de ella los que por su naturaleza y condiciones no podían entrar en el comercio ni satisfacer ninguna necesidad económica, quedando por consiguiente y desde entonces realizada por completo la desamortización de toda la propiedad inmueble. Con posterioridad y por diferentes Autoridades se adoptaron diversas disposiciones, en cuya virtud muchos de los bienes no comprendidos en la permutación volvieron á poder del Estado, habiéndose demolido unos, destinándose á servicios públicos otros y subsistiendo los demás en poder del Estado.

El Ministerio-Regencia desea remediar en lo posible los efectos de aquellas disposiciones, porque de no hacerlo, monumentos que á su carácter piadoso agregan el mérito histórico y artístico desaparecerán como tantos otros en desdoro de la Nación.

Por estas consideraciones ha decretado lo siguiente:

Artículo 1.º Los Jefes económicos, de acuerdo con los Muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos, pondrán á disposición de los mismos aquellas propiedades del clero que, exceptuadas de la permutación concordada con la Santa Sede en 1860, existan hoy en poder del Estado por consecuencia de disposiciones posteriores y no se hallen aplicados á servicios públicos.

Art. 2.º Si se hubiese emprendido la demolición de alguno de los edificios de dicha procedencia, los Jefes económicos dispondrán la suspensión de los trabajos, dando cuenta al Ministerio de Hacienda. Asimismo la darán de los que se hallen destinados á servicios públicos.

Art. 3.º Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán las disposiciones convenientes para la ejecución de este decreto.

Madrid nueve de Enero de mil ochocientos setenta y cinco.—El Presidente del Ministerio-Regencia, Antonio Cánovas del Castillo.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

R. D. DE 4 DE ENERO DE 1867.

Tomando en consideración lo que me ha propuesto el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el de Gracia y Justicia y el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Bajo el concepto de huerto y campo anejo á las casas rectorales, ya sea conocido con este nombre ó con el de iglesario, manso ú otro, se considera exceptuada y excluida de la venta, conforme al art. 6.º del Convenio otorgado con la Santa Sede en 25 de Agosto de 1859, la finca que haya venido disfrutando y poseyendo gratuitamente el párroco para su comodidad y recreo y para las necesidades de su casa, aunque no esté materialmente unida á ésta.

Art. 2.º Queda por lo tanto excluido de la excepción lo que constituya ó haya constituido un conjunto ó colectividad de bienes que forme ó haya formado la renta del párroco, de la parroquia ó de la iglesia.

Art. 3.º Cuando el párroco no tenga casa, no dejará, sin embargo, de conservársele el huerto, si existe la finca que haya poseído en tal concepto con las condiciones marcadas en el art. 1.º

Art. 4.º No será tampoco obstáculo para la conservación de la finca el que por cruzarla algún camino ó por otra causa análoga aparezca dividida en más de un trozo la que se reclame, si su extensión y el importe de sus productos dan á conocer que se ha considerado como una regalía del párroco y no como base ó fundamento de su renta. Si sobre la extensión hubiese dudas, se fijará con imparcial criterio, procurando que no exceda de una y media ó dos hectáreas, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y las circunstancias especiales de la localidad.

Art. 5.º Los diocesanos y los gobernadores, previo el reconocimiento pericial que crean oportuno, separarán al punto la finca que deba ser exceptuada, remitiendo sin demora los expedientes al Gobierno para la resolución que proceda. Mientras los expedientes se instruyen y terminan, se respetarán las fincas á que se refieren. Los demás bienes que deban quedar fuera de la excepción serán comprendidos en un inventario adicional que se formará al mismo tiempo con arreglo al art. 15 del R. D. de 21 de Agosto de 1860 para que se permuten y vendan.

Art. 6.º Los gobernadores, de acuerdo con los diocesanos, obrarán con la mayor actividad y con la mejor armonía para no perjudicar á la Iglesia ni al Estado. Los expedientes, con todas las justificaciones que sean necesarias para probar la naturaleza y origen de la finca y la posesión en que ha estado el párroco de disfrutarla gratuitamente, se instruirán de oficio sin causar á los párrocos gasto ni gravamen alguno.

Art. 7.º El gobierno dictará las disposiciones necesarias para la pronta y fácil ejecución de cuanto queda dispuesto, procurando que se resuelvan de una vez todas las excepciones de los pueblos de cada diócesis que correspondan á una mis-



ma provincia. Dado en Palacio á 4 de Enero de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Manuel García Barzanallana.

### CIRCULAR DE 19 DE ENERO DE 1867.

A continuación del R. D. de 4 de Enero que circula la Dirección añade:

«Y con el fin de que se cumpla con la mayor precisión y exactitud cuanto se previene en el preinserto Real decreto, esta Dirección general ha acordado que se observen las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Recibida que sea esta circular en ese Gobierno de provincia se publicará sin demora en el *Boletín oficial* de la misma, invitando á todos los párrocos de ella que se crean con derecho al disfrute de huerto ó campo anejo á sus respectivas rectorales, ya sea conocido con este nombre, ó con el de iglesario, manso ú otro, á que presenten en la Administración de Hacienda pública la oportuna solicitud en el preciso término de sesenta dias, á contar desde la fecha en que aparezca en dicho periódico.

2.<sup>a</sup> Pasado que sea este término, se procederá á la formación de un expediente general de excepción de huertos de esa provincia, con objeto de que, si es posible, se resuelvan todas de una vez, con arreglo á lo prevenido en el art. 7.<sup>o</sup> del expresado Real decreto.

3.<sup>a</sup> Ese expediente se instruirá en la Administración de Hacienda pública, y deberá abrazar: todos los individuales que se estén tramitando en las oficinas provinciales, y no haya llegado el caso de ser remitidos aún á este Centro directivo; todos los que hayan sido devueltos á las mismas para la ampliación de diligencias; todos los que se remitan ahora, con el fin de que se engloben en aquél, y que pendían de acuerdo de esta Dirección; y todas las nuevas reclamaciones que se hayan presentado con arreglo á la prevención primera.

4.<sup>a</sup> Se procurará consignar en él todas las pruebas necesarias á justificar la extensión de cada una de las fincas que se trate de exceptuar, así como que ha venido disfrutándose y poseyéndose gratuitamente por el párroco para su comodidad y recreo y para las necesidades de su casa.

5.<sup>a</sup> Estas pruebas se aducirán de oficio, y consistirán: en los datos ó antecedentes que puedan obtenerse de las oficinas del Estado ó de la diócesis; en los informes que se juzgue oportuno pedir á las corporaciones ó funcionarios dependientes de uno ú otra; y en caso de necesidad, en los reconocimientos periciales que haya que hacer para fijar la verdadera extensión y demás circunstancias de la finca cuya excepción se pida.

6.<sup>a</sup> Con objeto de evitar la duplicidad de concesiones, se hará constar también con escrupuloso esmero, respecto de cada uno de los reclamantes, si en la actualidad viene ó no disfrutando alguna otra finca rústica en igual concepto al de que ahora se trata; y en caso afirmativo, se consignará cuál sea ésta, su extensión, linderos, clase de cultivo á que se dedique, y las demás circunstancias que puedan

conducir á formar una idea exacta de su verdadera importancia; así como la orden en virtud de que haya sido exceptuada y se posea y disfrute gratuitamente por el párroco.

7.<sup>a</sup> Obtenidos esos datos, formará la Administración tres relaciones, en que se comprenderán todos los expedientes individuales que constituyan el general, y que serán clasificados en esta forma: La primera abrazará las reclamaciones que en su concepto puedan acordarse favorablemente de plano por resultar con claridad y sin género alguno de duda, que reúnen las condiciones legales para la excepción. La segunda contendrá las que con la misma seguridad puedan denegarse desde luego, por aparecer idéntica prueba de que carecen de esos requisitos. Y la tercera abarcará las que, por no existir una justificación directa y bastante para resolverlas en sentido afirmativo ó negativo, deban sujetarse á más amplia instrucción, segregándose del expediente general, para seguir por separado cada uno de ellos en particular, con el fin de decidir individualmente y con más conocimiento de causa, el caso concreto á que se refieran.

8.<sup>a</sup> Instruido así el expediente, le pasará la Administración á ese Gobierno, el que, poniéndose de acuerdo con el diocesano en la forma que estime oportuno, consignará en él su opinión respecto de todas y cada una de las pretensiones deducidas, cuidando de que conste también la de aquél, que procurará armonizar con la suya en cuanto esté de su parte, y remitiéndolo todo á esta Dirección general para los efectos que correspondan.

Al dar á V. S. las instrucciones que precelen sobre la manera de instruir el expediente general de excepción de huertos rectorales de esa provincia, juzgo innecesario decirle cosa alguna acerca de la verdadera inteligencia, en su parte sustancial, de las disposiciones contenidas en el Real decreto á que se refieren, que, por ser tan claras y precisas, no me parece necesitan de más detalladas prevenciones, y me concreto tan solo á recomendar á V. S. que despliegue la mayor actividad y celo en la evacuación de un servicio que es de tanta importancia para los intereses de la Iglesia y del Estado, á fin de que se cumplan con estricta justicia las prevenciones que contienen.»

## LEY DE 21 DE DICIEMBRE DE 1876.

D. Alfonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de España, etc.

Artículo 1.<sup>o</sup> Teniendo en cuenta el fin piadoso y altamente humanitario á que se hallan destinados, se declaran exceptuados de la venta por el Estado, ordenada en la ley de 1.<sup>o</sup> de Mayo de 1855, los bienes y rentas que posee hoy en propiedad el instituto de las Escuelas pías, y los que puedan corresponderle á virtud de sentencia dada á su favor en reclamaciones judiciales que tengan pendientes ó que puedan intentar ejercitando acciones ó derechos que le correspondan en la actualidad.

Art. 2.<sup>o</sup> Igualmente, y por idénticas razones, se declaran exceptuados de la

venta por el Estado, ordenada en la ley de 1.º de Mayo de 1855, los bienes y rentas que posea en propiedad el instituto de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, dedicadas á la enseñanza.

Por tanto, etc.

Dado en Palacio á 21 de Diciembre de 1876.—Yo el Rey.—El Ministro de Hacienda, José García Barzanallana.

### SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 29 DE OCTUBRE DE 1872.

Cualquiera que sea la inteligencia que pueda darse al párrafo tercero art. 2.º de la ley de 1.º de Mayo de 1855, y al quinto de la de 11 de Julio de 1856, sobre lo que se entiende por «Rectorías ó casas destinadas á la habitación de los curas párrocos,» ni sus prescripciones, ni el Concordato de 16 de Marzo de 1851, ni el convenio con la Santa Sede de 25 de Agosto de 1859, ni disposición alguna de cuantas se han dictado sobre esta materia, tienen aplicación al presente caso, por cuanto aún careciendo el párroco de San Facundo de casa rectoral en que vivir, no podía comprenderse en la excepción que las citadas leyes hacen á su favor, un edificio que no es verdaderamente casa ni jamás fué habitable, ni podría disfrutar gratuitamente por estar destinadas sus rentas á un fin piadoso.

R. O. DE 22 DE AGOSTO DE 1876.

Excmo. Sr.:

Vista la comunicación de 19 de Junio último en que el M. R. Arzobispo de Santiago se queja de que por el Jefe económico de la Coruña, prescindiendo del Concordato y del Convenio celebrado con Su Santidad en 25 de Agosto de 1859 se están vendiendo los huertos é iglesias y aun se teme se vendan las casas rectorales de los párrocos: Vista la comunicación del Jefe económico de la Coruña en que traslada la que con la queja antes indicada le ha dirigido el Prelado y pide se dicten medidas para que las dificultades desaparezcan: Visto lo expuesto por V. E. al consultar sobre todo á este Ministerio en 16 del corriente en que hace presente: que los bienes de la Iglesia no deben enagenarse sin que se obtenga la permutación y cesión canónica prevenida en el Convenio de 1859; que los bienes de iglesias y las casas rectorales de los párrocos están exceptuados de la venta y de la permutación por consiguiente por el art. 32 del Concordato y 6.º del Convenio; que para determinar las condiciones y extensión de los bienes exceptuables como de iglesias se dictó por este Ministerio de acuerdo con el de Gracia y Justicia y de conformidad con el M. R. Nuncio de Su Santidad el Real decreto de 4 de Enero de 1867 en el cual se ordena que mientras se instruyen los expedientes sean respetadas las fincas y que los bienes que queden fuera de la excepción deben comprenderse en los inventarios adicionales para que sean permu-

tados y después vendidos; y teniendo en cuenta que las disposiciones vigentes aclaran y resuelven todas las dudas, y que las concordadas deben ser religiosamente observadas; el Rey (q. D. g.) se ha servido mandar que se prevenga al Jefe económico de la Corona cumpla estrictamente lo concordado con Su Santidad. De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1876.—Barzanallana.—Sr. Director general de Propiedades y Derechos del Estado.

## NUMERO 7.º

### Sobre provisión de Dignidades y prebendas eclesiásticas.

R. D. DE 25 DE JULIO DE 1851.

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, acerca de la necesidad de fijar reglas y bases determinadas á qué poder ajustarse en la provisión de las mitras, dignidades y prebendas eclesiásticas, y de conformidad con lo expuesto sobre la materia por la Cámara, vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1.º En la clasificación y propuesta de sujetos que han de ser presentados para las mitras, se tendrá muy presente lo dispuesto en los sagrados cánones y en los párrafos 12, 13 y 14 de la ley 12, tit. XVIII, lib. I. de la Novísima Recopilación, cuya inviolable observancia encargo muy particularmente á la Cámara y al Ministro de Gracia y Justicia.

Art. 2.º Para las primeras Sillas de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiadas se propondrán precisamente capitulares de la misma ó superior categoría, que además de estar adornados de las circunstancias que se expresan en la regla 1.ª art. 18, ley 12, tit. XVIII, lib. I de la Nov. Recop., ya citada, tengan también el grado de doctor ó licenciado en Teología ó Jurisprudencia, y hayan servido cuatro años dignidad ó prebenda de oficio ú ocho canonicatos de gracia.

Art. 3.º Para el arcedianato titular se propondrá al canónigo de gracia más antiguo de cualquiera de las iglesias de la misma superior clase, con tal que tenga grado mayor en Teología ó Derecho y seis años de residencia.

Art. 4.º Igualmente se propondrá para la dignidad de maestrescuela, prebendados de oficio de las respectivas iglesias que hayan servido su prebenda por espacio de cuatro años al menos.

Art. 5.º Para las demás dignidades de las iglesias metropolitanas serán propuestos:

1.º Canónigos de las mismas dignidades de las sufragáneas, ó abades de las

colegiatas que hayan servido su prebenda, cuatro años las dignidades, abades y canónigos de oficio, y seis los de gracia, ú ocho no teniendo grado mayor.

2.º Canónigos de las iglesias sufragáneas que teniendo grado mayor hayan residido su prebenda ocho años ó diez á falta de dicho requisito.

3.º Párrocos que al grado mayor añadan doce años de servicio en el ministerio parroquial, de los cuales durante dos han de haber regido parroquias de término, ó cuatro de ascenso. A los que no tengan grado mayor se exigirán quince años de párroco.

4.º Los jueces metropolitanos, los provisoros y vicarios generales que con la correspondiente Real cédula auxiliatoria hayan desempeñado estos cargos y sus fiscalías por doce años.

5.º Los fiscales de los mismos Tribunales eclesiásticos que lo hayan sido por quince años.

6.º y último. Los catedráticos de Teología y Jurisprudencia en las Universidades y Seminarios centrales por doce años.

Art. 6.º Para dichas dignidades de las iglesias sufragáneas deberán proponerse canónigos de las mismas iglesias que cuenten una cuarta parte menos del tiempo de residencia exigida en los párrafos 1.º y 2.º del artículo precedente: los sujetos de que tratan los otros párrafos del mismo artículo, deduciéndose en su respectivo caso una cuarta parte del tiempo de servicio allí indicado.

Art. 7.º Para la propuesta de los canonicatos vacantes en las iglesias metropolitanas, se formarán las categorías siguientes:

1.º Las dignidades de iglesias sufragáneas que cuenten dos terceras partes del tiempo de residencia que para cada caso se prefiere en el párrafo 1.º del art. 5.º, y los canónigos de las mismas iglesias sufragáneas adornados de los requisitos indicados en el párrafo 1.º del artículo anterior.

2.º Los párrocos en quienes concurren las cualidades que se expresan en el párrafo 3.º del mismo art. 5.º con rebaja de una cuarta parte del tiempo del servicio.

3.º Las personas designadas en los demás párrafos del propio artículo con igual rebaja de la cuarta parte del tiempo de servicio que respectivamente se exige. De seis canongías vacantes de todas las iglesias, una se conferirá á cada una de las precedentes categorías, proponiéndose para las restantes indistintamente de entre todas ellas, á sujetos que, careciendo de dichos requisitos, hayan prestado servicios importantes en utilidad de la Iglesia ó del Estado, cuyos servicios deberán ser clasificados previamente tales por la Cámara en expediente particular, oyendo al diocesano ó diocesanos á quienes corresponda, pero en todo caso se dará la debida preferencia á los párrocos.

Art. 8.º Las reglas contenidas en el artículo anterior se aplicarán igualmente á las canongías que vaquen en las iglesias sufragáneas, entendiéndose la parte primera del párrafo 1.º con los canónigos de oficio, y la segunda con los de gracia de las colegiatas, rebajándose el tiempo de servicio ó residencia á los sujetos com-



prendidos en las otras categorías una tercera parte, en lugar de la cuarta que allí se fija. Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán también para las propuestas que no estén sujetas á determinada categoría:

1.º Los beneficiados ó capellanes asistentes de las Iglesias metropolitanas con seis años de residencia cuando tengan al menos el grado de bachiller en ciencias eclesiásticas u ocho á falta de este grado.

2.º Los rectores y catedráticos de Teología en los Seminarios conciliares ó de Filosofía de los centrales que con grado mayor académico en dichas ciencias eclesiásticas hayan servido en propiedad por espacio de seis años, ó de ocho en defecto de dicho grado, debiendo tener en todo caso el de bachiller.

3.º Los párrocos de ascenso que cuenten respectivamente este mismo tiempo de servicio, con tal que al menos dos de ellos lo sean en parroquias de ascenso.

4.º Los párrocos de entrada que en cada caso cuenten una mitad más del tiempo prefijado en el párrafo precedente.

5.º Los alumnos pensionistas á expensas de sus propias familias, de los Seminarios centrales que tomen el grado mayor en ciencias eclesiásticas y hayan obtenido constantemente buena nota, entre ellas, tres al ménos de sobresalientes.

Art. 9.º Para las propuestas de canongías de gracia de las colegiatas se formarán listas que contengan las cinco categorías de que habla el párrafo segundo del artículo anterior, reduciéndose á una mitad del tiempo de servicio y á dos las notas de sobresaliente que se exige á los alumnos pensionistas de los Seminarios centrales, y comprendiéndose en la primera categoría, con las circunstancias allí expresadas, los beneficiados ó capellanes asistentes de las sufragáneas, y en la segunda á los catedráticos de Filosofía de los Seminarios conciliares.

Art. 10. De nueve canongías vacantes en las iglesias colegiales, se conferirá una á los comprendidos en las primeras categorías, otra á los de la segunda, otra á los de la tercera, y otra á los de la cuarta y quinta, las cuales para los efectos formarán una sola, siendo libre la propuesta para las demás vacantes entre los comprendidos en todas las expresadas categorías, con la excepción contenida en el último párrafo del art. 7.º

Art. 11. Para obtener las plazas de beneficiado ó capellán asistente de las iglesias metropolitanas, se exigirán algunos de los requisitos siguientes:

1.º Haber sido asistente en iglesia sufragánea cuatro años siendo bachiller en ciencias eclesiásticas, ó seis á falta de esta circunstancia.

2.º Haber sido cura propio en curato urbano por el mismo período respectivamente.

3.º Haber desempeñado en propiedad cátedra de Filosofía en Seminario conciliar tres años, teniendo grado mayor, ó cinco con sólo el de bachiller, ó bien dos ó cuatro respectivamente, si la cátedra fuere de Teología, ó haber sido alumno pensionado en Seminario central ó conciliar á sus propias expensas, y recibido grado de bachiller en ciencias eclesiásticas, obteniendo buena nota en todos los exámenes públicos anuales.

Art. 12. Las mismas reglas se observarán para las propuestas de vacantes de la misma clase en iglesia sufragánea, reduciendo á dos tercios el tiempo de servicio, y comprendiéndose además á los párrocos de iglesia rural, y los coadjutores que tengan respectivamente cuatro ó seis años de servicio efectivo.

Art. 13. Una plaza de nueve vacantes se dará precisamente á cada categoría, tanto en las iglesias metropolitanas como en las sufragáneas, debiendo proponerse indistintamente para las piezas restantes sujetos de cualquiera categoría, ó asistentes de las colegiales que por sus circunstancias sean acreedores á recompensa.

Art. 14. Los que sirvieren economato por cuatro años efectivos, los coadjutores que cuenten respectivamente tres ó cuatro años de servicio, y los alumnos de los Seminarios conciliares que tengan grado de bachiller en Filosofía, ó hayan sacado constantemente, durante su carrera, buena nota en los exámenes públicos anuales, podrán ser propuestos para beneficiados ó capellanes asistentes de las iglesias colegiales.

Art. 15. En igualdad de circunstancias disfrutarán preferencia:

1.º Los que tengan grado superior académico, y el que cuente alguno de ellos, al que carezca de todos.

2.º Los que por razón de salud ú otra justa causa soliciten traslación á pieza de igual categoría.

3.º Los que en su respectiva categoría y clase cuenten más tiempo de servicio.

4.º Los que soliciten pieza de inferior categoría á la que obtengan.

Art. 16. Para los efectos del presente decreto, los capellanes castrenses que hayan obtenido sus cargos en curso, tendrán la consideración de curas propios, y únicamente el concepto de ecónomo los que carezcan de aquella circunstancia.

Art. 17. A fin de poder llevar á cabo lo más pronto posible el Concordato sin perjudicar derechos adquiridos, y conciliando también en lo posible los intereses individuales con los del Estado en su caso, según su espíritu y tendencia, se observarán las siguientes disposiciones transitorias para el solo efecto de que sirvan de regla en las propuestas:

1.ª Se considerará grado mayor académico el título de lector que hubieren obtenido en su Orden los exclaustrados y secularizados.

2.ª La enseñanza dada por éstos en el concepto expresado, se reputará como tenida en Seminario conciliar, y asimismo se contarán á los exclaustrados y secularizados como tiempo de servicio efectivo en el ministerio parroquial, los años que hubieren servido en su día los curatos de su respectiva Orden.

3.ª Los exclaustrados secularizados que habiendo recibido grado mayor en Universidad del Reino, hayan desempeñado en los mismos establecimientos cátedras pertenecientes á su Orden, serán tenidos como catedráticos propietarios de Universidad.

4.ª El tiempo que los mismos sujetos hayan servido por parroquias en economato por no estar debidamente autorizados para obtener curatos, previo concurso de oposición, se considerará servido en concepto de cura propio.

5.<sup>a</sup> A los lectores de Filosofía que hayan desempeñado cátedras de esta Facultad en institutos de segunda enseñanza del Reino, se les abonará para su clasificación el tiempo que las hubieren desempeñado.

6.<sup>a</sup> Los prelados, vicarios generales ó provinciales, y los abades mitrados con título de lector en Teología, se considerarán en la categoría de dignidades de iglesia metropolitana, pudiendo ser propuesto por lo tanto para prebendas de esta clase ó de las inferiores, excepto las primeras sillas, según sus cualidades y merecimientos personales.

7.<sup>a</sup> Los prelados locales con el mismo título de lector que después de la excomunión ó secularización hayan servido en economato seis años, parroquias de cualquiera clase, ó anteriormente en curatos de su Orden, se considerarán comprendidos en la cuarta categoría del art. 10.

8.<sup>a</sup> Los abades mitrados de las colegiatas que no tienen carácter episcopal, los presidentes y dignidades de las mismas iglesias, los vicarios y cualesquiera otros que ejerzan jurisdicción *vere nullius*, y los capellanes mayores de las Capillas Reales, tendrán la categoría de la prebenda á que en el Concordato se asigna una cantidad igual, cuando ménos, á la que correspondió á sus beneficios en el quinquenio de 1829 á 1833.

9.<sup>a</sup> Los racioneros de las iglesias metropolitanas que en el indicado quinquenio disfrutaron una renta igual al ménos á la que se señala por el Concordato á los canónigos de las mismas iglesias, ó que á pesar de no haber gozado aquella renta hayan servido por más de diez y seis años en prebendas y curatos, tendrán opción á canongías de iglesias metropolitanas.

10. Los mismos prebendados que no tengan los expresados requisitos, los medio-racioneros de las propias iglesias metropolitanas, los racioneros y medio-racioneros de las sufragáneas, los canónigos de colegiatas y capellanes de Reales Capillas en quienes concurra relativamente alguna de las dos circunstancias que se expresan en el artículo anterior, y las dignidades de colegiatas que estén comprendidos en el art. 8.º, tendrán opción á canonicato de iglesia sufragánea; pero solo á plaza de asistente de metropolitana ó canongía de colegiata aquellos en quienes no concurra ninguna de dichas dos circunstancias, y los racioneros y medio-racioneros de las mismas iglesias colegiales.

11. Los beneficiados ó capellanes de las iglesias metropolitanas, catedrales y colegiales se comprenderán entre los asistentes de la respectiva iglesia, cualquiera que hubiere sido la renta de dicho quinquenio y el tiempo de servicio del interesado.

12. Los poseedores de beneficios fundados en las iglesias parroquiales que real y efectivamente han tenido aneja la cura de almas, se considerarán como curas propios de la categoría inferior inmediata á la del curato. Los que no estén comprendidos en la disposición anterior y los poseedores de capellanías colativas serán considerados solamente como coadjutores. Unos y otros serán atendidos en

la provisión de asistentes de iglesia sufragánea ó colegiata según sus servicios y circunstancias.

Art. 18. A fin de no perjudicar derechos adquiridos, respetando además en cuanto sea posible hasta las esperanzas legítimas, según el espíritu del Concordato, se propondrá exclusivamente, mientras los haya idóneos para las prebendas y beneficios de la respectiva clase de las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales, los actuales poseedores de las dignidades que se supriman y los demás sujetos comprendidos en las reglas transitorias 8.<sup>a</sup> y siguientes del art. 17; pero colocados éstos, las piezas que en cada clase resulten todavía vacantes, se proveerán con entera sujeción á las disposiciones y opción que por este decreto se concede á las diversas clases y carreras, dando entre todas ellas la debida preferencia á los párrocos respecto de las piezas que no correspondan á categoría determinada.

Art. 19. Se dirigirá á los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos y cabildos metropolitanos, sufragáneos y colegiales cédula de ruego y encargo, excitándoles á fin de que en las provisiones que les correspondan elijan sujetos adornados de las circunstancias y requisitos que por este decreto se exigen, y observen lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 20. Con el propio objeto se excitará también á los patronos de las iglesias que se conserven á virtud de lo dispuesto en el párrafo 3.<sup>o</sup> del art. 21 del Concordato.—Dado en Palacio á 25 de Julio de 1851.—Rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Ventura González Romero.

### R. O. DE 30 DE JUNIO DE 1863.

Ilmo. Sr :

He dado cuenta á S. M. de la comunicación de 30 del mes próximo pasado en que V. I. participa á este Ministerio el fallecimiento de D. Pedro Cenón de Zaballuru, abad de la colegiata de Logroño, y la provisión que V. I. ha hecho de esta vacante por estimarla comprendida entre las prebendas que deben proveerse en rígurosa alternativa de S. M. y los respectivos arzobispos y obispos:

Considerando que el art. 23 del Concordato celebrado en 1851 dispone que las reglas establecidas para la provisión de las prebendas de las iglesias catedrales se observen en todas sus partes respecto de las iglesias colegiatas.

Que por una de aquellas reglas, consignada en el art. 18, la dignidad de deán se ha de proveer siempre por S. M. en todas las iglesias y en cualquier tiempo y forma que vaque:

Que según los arts. 14, 22 y 32, el abad de las colegiatas es, como el deán, presidente del cabildo en ausencia del prelado y primera silla en su iglesia apareciendo bajo este aspecto equiparadas en los referidos artículos ambas piezas eclesiásticas, por lo cual su provisión debe ajustarse á la misma regla:

Que de consiguiente, el Concordato de 1851 no altera ni modifica en esta parte el Convenio de 1753, en virtud del que, subrogada la Corona al Santo Pa-

dre en todos los casos generales y especiales de reservas, ha ejercido constantemente el derecho de proveer las primeras sillas de todas las colegiatas del Reino que no eran de patronato particular:

Que por las razones expuestas en la real cédula de ruego y encargo á los M. RR. arzobispos y RR. obispos de 31 de Diciembre de 1851, publicada oficialmente en aquella época, se asentó como cosa cierta, sin contradicción alguna del representante de Su Santidad, que correspondía por siempre á la Corona la provisión de la dignidad de deán en todas las iglesias metropolitanas y catedrales, é igualmente la de abad en todas las colegiatas, excepto las de patronato particular, en cualquier tiempo y forma que vacare:

La Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, ha tenido á bien resolver que la abadía se proveerá siempre por Su Majestad en todas las iglesias colegiatas, excepto las de patronato particular, en cualquier tiempo y forma que vacue.—De real orden, etc.—Madrid 30 de Junio de 1863.—Monares.—Sr....

#### R. O. DE 27 DE JUNIO DE 1867.

Habiéndose suscitado dudas acerca de la inteligencia y aplicación de varias disposiciones del último Concordato sobre provisión de piezas eclesiásticas en las iglesias metropolitanas, sufragáneas y colegiales, conformándome con lo que en su razón, de acuerdo con el muy reverendo Nuncio apostólico y el parecer del Consejo de Ministros, me ha propuesto el de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La alternativa establecida entre mi Real Corona y los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos, queda interrumpida en la Sede vacante, en cuyo tiempo todas las provisiones me corresponden, continuando la alternativa en el nuevo pontificado, según el estado en que había quedado el día en que terminó la anterior.

Art. 2.º Se entiende por promoción el tránsito de una pieza inferior á otra de superior categoría ó consideración canónica.

Art. 3.º Corresponde exclusivamente á mi Real Corona la presentación de los abades, presidentes de los cabildos de las iglesias colegiales y curas propios á la vez de sus parroquias, previo concurso especial y propuesta en terna del diocesano.

Art. 4.º El concurso de oposición se convocará por el mismo diocesano con término al ménos de treinta días, y se celebrará en la capital de la diócesis, haciéndose los ejercicios en el modo y forma que se practica para las prebendas de oficio de la iglesia catedral, con asistencia de cinco examinadores sinodales, designados por el ordinario.

Art. 5.º Serán requisitos indispensables:

1.º Tener grado mayor en Teología ó Cánones.



2.º Ser ó haber sido canónigo en iglesia catedral, de oficio en colegiata, ó cura párroco por espacio de ocho años, de los cuales dos al menos en parroquia de ascenso.

Art. 6.º El diocesano remitirá al Ministerio de Gracia y Justicia su propuesta en la forma que se practica en la provisión de curatos.

Art. 7.º Las disposiciones precedentes se aplicarán única y exclusivamente en las vacantes que ocurran en las actuales colegiatas, y en las catedrales que por el Concordato se unen á otras Sillas, luego que esto tenga efecto.

Art. 8.º El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo necesario para su cumplimiento.—Dado en Palacio á 27 de Junio de 1867.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

### R. O. DE 16 DE MAYO DE 1852.

S. M. se ha servido, de acuerdo con el muy reverendo Nuncio apostólico, convenir y declarar lo siguiente:

Artículo 1.º En cada una de las iglesias metropolitanas habrá seis beneficios anejos á los oficios de tenor, contralto, sochantre, salmista, organista y maestro de capilla. En las sufragáneas serán cuatro, siendo la designación de oficios á voluntad de los prelados. En las colegiatas sólo habrá beneficiados, sochantre y organista.

Art. 2.º Si atendidas las particulares circunstancias se estimare necesario aumentar este número para el mejor servicio y mayor esplendor del culto en alguna iglesia se consignará sobre el respectivo presupuesto de gastos del culto, la dotación que cada uno ha de disfrutar, teniendo presente esta circunstancia al fijar aquél.

Art. 3.º De la misma manera figurarán en el propio presupuesto las dotaciones de cualquiera otra clase de ministros y dependientes de las iglesias y cabildos no comprendidos en el presupuesto del personal.

Art. 4.º Las piezas de que trata el art. 1.º, y las de la misma ó análoga clase que se aumenten á virtud de lo dispuesto en el art. 2.º, se proveerán previa oposición, verificándose ésta en el modo y forma que determinen los prelados, oyendo á los cabildos.

Art. 5.º Los beneficios destinados á los cargos ú oficios de que trata el art. 1.º se proveerán con arreglo al Concordato y disposiciones vigentes, tocando exclusivamente á los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos y cabildos en conformidad á lo dispuesto en el párrafo 4.º del artículo 14 del Concordato, el nombramiento de los demás de esta clase y de otros ministros y dependientes, cuyas dotaciones se consignen en el presupuesto de gastos del culto.

Art. 6.º Hecha la oposición para proveer los beneficios de Real presentación, remitirán los diocesanos al Ministerio de mi cargo nota de los opositores y la censura de los jueces, indicando los sujetos que merezcan ser preferidos, atendidas to-

das las circunstancias á fin de que S. M. pueda nombrar de entre los aprobados á quien estime más convenient.

R. D. DE 14 DE MAYO DE 1852.

Habiendo mediado contestaciones entre el reverendo obispo de Segovia y su cabildo catedral acerca de la forma con que después de la publicación del nuevo Concordato debe darse la posesión á los sujetos nombrados por S. M. para las prebendas de la misma iglesia, se manda por este decreto lo siguiente:

Artículo 1.º Los nombrados por mí para prebendas y beneficios de todas clases, presentarán á los ordinarios, dentro del término prefijado, mis reales cédulas que al intento se les expiden por la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 2.º En vista de estas cédulas y en cumplimiento de lo que en las mismas se expresa, instruirán los ordinarios el correspondiente expediente, y expedirán el título de colación y canónica institución, mandando dar la posesión á quien co-  
rresponda.

Art. 3.º El nombrado para alguna prebenda presentará al cabildo el título de colación y mandamiento de posesión que librare el diocesano, y el cabildo proce-  
derá, en su consecuencia, á dar al interesado lisa y llanamente, sin exigirle otro ju-  
ramento más que el de cumplir las obligaciones anejas á su oficio en lo que no se  
oponga al Concordato, la posesión corporal de la prebenda.

REALES DECRETOS DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1852.

Habiendo pretendido algunos cabildos catedrales intervenir en la colación é institución canónicas de las canongías de oficio, y en la de los beneficios que les corresponde proveer en su turno... vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Pertenece exclusivamente á los ordinarios en sus respectivas dió-  
cesis dar la colación é institución canónicas, de todas las dignidades, canongías  
de oficio y de gracia, y beneficios de metropolitanas, sufragáneas y colegiadas,  
parroquiales, coadjutorales y demás, sea cualquiera la persona ó Corporación á  
quien corresponde la elección, presentación ó nombramiento y la forma en que  
se haga.

Art. 2.º Se exceptúan las dignidades y canongías reservadas á Su Santidad,  
y conferidas en forma graciosa, respecto de las cuales solo compete al ordinario  
expedir el mandamiento de *immittendo in possessionem*.

Artículo único. El número de votos que por el pár. 4.º art. 14 del Concor-  
dato, se concede á los prelados en toda elección ó nombramiento de personas  
que corresponda á los cabildos, ha de computarse por el de capitulares asignados  
á cada iglesia y no por el que haya existentes ó concurran al acto de la votación.

R. O. DE 21 DE JULIO DE 1852.

Estando declarado por el R. D. de 30 de Abril último que el personal de las iglesias metropolitanas se entendiese definitivamente constituido y organizadas aquéllas en la forma prevenida en el Concordato, desde el día 1.º del corriente, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado mandar que para la provisión de las prebendas vacantes desde dicha fecha se observen los turnos prevenidos en el art. 17 de dicho Concordato, y que en las correspondientes al de la Corona se proceda en la forma dispuesta en el Real decreto de 25 de Julio de 1851.

Asimismo se ha dignado prevenir S. M. que, al dar cuenta de toda vacante, los Prelados expresen á quién corresponde por aquella vez el turno, indicando también en los beneficios, si es de los de oficio, para proceder en este caso á su provisión, conforme á lo dispuesto en el R. D. de 16 de Mayo último.

R. D. DE 6 DE DICIEMBRE DE 1888.

A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y en virtud de lo convenido con el Muy Reverendo Nuncio Apostólico; de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º La mitad de las Canongías y de los Beneficios de gracia correspondientes á cada Iglesia, catedral ó colegial será en adelante de oposición.

Su provisión quedará sujeta con la otra mitad, al turno establecido por el Concordato entre la Corona y los prelados, ó entre la Corona, los prelados, y éstos con sus Cabildos, según se trate de Canongía ó de Beneficio.

Cuando no fuera divisible por dos el número de canónigos ó de beneficiados, se aplicará á la oposición la parte mayor.

Art. 2.º A las Canongías ó á los Beneficios que se provean por oposición, á tenor de lo determinado en el artículo precedente, podrán imponerse cargos especiales, como los de enseñar en los Seminarios, cuidar de las Bibliotecas y Archivos de las iglesias, promover el estudio y la observancia de la Sagrada Liturgia, y dirigir las sagradas ceremonias.

Los ordinarios, oyendo á sus respectivos Cabildos, y atendiendo á la necesidad y utilidad de la Iglesia, señalarán el cargo que ha de imponerse á cada Canongía ó Beneficio de oposición.

Los mismos ordinarios podrán, sin embargo, relevar de la enseñanza á los obligados á ella, si así lo aconsejasen circunstancias especiales.

Art. 3.º Los ejercicios de oposición á las Canongías serán los mismos que se

practican en los concursos á las actuales de oficio, y para los Beneficios lo serán los usados en concursos a parroquias; pero cuando lleven anejo un cargo especial, según lo establecido en el artículo anterior, se añadirá un ejercicio adecuado sobre las materias relativas á dicho cargo, ejercicio que fijarán los ordinarios, oyendo á sus Cabildos.

Art. 4.º Serán individuos y presidentes natos de los Tribunales de oposición los ordinarios de las diócesis respectivas. Constituirán además dichos Tribunales para las Canongías de metropolitana y sufragáneas, el deán y tres canónigos: uno de éstos de oficio, otro de oposición, ó en su defecto de oficio, y el tercero de gracia. Para las Canongías de las Catedrales que han de reducirse á Colegiatas, y para los Beneficios de éstas y de las metropolitanas y sufragáneas el deán y un canónigo de oficio. Para las Canongías y Beneficios de las Iglesias colegiales el abad y un canónigo de oficio. Cuando el deán ó el abad, según los casos, faltan ó se hallen imposibilitados de formar parte de un Tribunal, los sustituirán el que haga las veces de presidente del Cabildo.

Art. 5.º Cuando el ordinario no concurra á un Tribunal de oposición, delegará su representación de individuo del mismo en un capitular de la Iglesia en que hubiere ocurrido la vacante, pero entonces corresponderá la presidencia al deán, ó al abad, ó al presidente del Cabildo, según los casos.

Art. 6.º Los canónigos que hayan de ser jueces en un Tribunal de oposición, serán designados de entre los de la misma Iglesia.

Su nombramiento se hará por la Corona, los prelados, ó éstos con sus Cabildos, según fuere la autoridad á quien toque la provisión.

Art. 7.º En todo Tribunal de oposición á Canongía ó Beneficio, serán tantos los votos cuantos fuesen los individuos que lo compongan.

Art. 8.º En vista del resultado de toda oposición á Canongía ó Beneficio, formará el Tribunal la terna procedente, la cual se elevará al Ministerio de Gracia y Justicia por conducto del obispo de la diócesis, ó se someterá á la autoridad del prelado, ó á la de éste con su Cabildo, según quien deba proveer la vacante, á fin de que entre los individuos propuestos se elija libremente el que haya de ser agraciado. Cuando la vacante hubiere recaído en Catedral que haya de reducirse á Colegiata, cursará dicha terna al expresado Ministerio el ordinario de la misma diócesis. Cuando corresponda á la Iglesia Prioral de las Ordenes Militares, la elevará el Reverendo Obispo Prior.

Art. 9.º La provisión de las Canongías de oficio en las Iglesias Catedrales ó Colegiales seguirá haciéndose como en la actualidad.

Art. 10. Las disposiciones de este decreto no son aplicables á las prebendas reservadas á Su Santidad por el Concordato.

Art. 11. La dignidad de abad de las Iglesias Colegiales se seguirá proveyendo por concurso de oposición con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 27 de Junio de 1867.

Art. 12. Los Beneficios de oficio de las Iglesias Catedrales ó Colegiales se-

guirán proveyéndose con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 16 de Mayo de 1852.

Art. 13. De toda vacante de Prebenda ó Beneficio dará inmediata cuenta el ordinario de la diócesis respectiva al Ministerio de Gracia y Justicia, manifestando el turno, si en él tuviere parte, á que según su juicio corresponda la provisión y la forma en que ésta deba verificarse.

Art. 14. Se exceptúan de las disposiciones contenidas en este decreto las Colegiatas de Santa María de Roncesvalles y Sacro Monte de Granada, que se rigen por reglas especiales, y la de San Isidoro de León, respecto de la oposición á Canongías, y del nombramiento de abad que seguirá haciéndose por la Corona.

Art. 15. Asimismo queda exceptuada de las disposiciones de este decreto la Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, sujeta al arreglo definitivo que acerca de ella se acuerde, según lo dispuesto por el art. 6.º del Real decreto de 21 de Noviembre de 1851. El nombramiento de abad de dicha Iglesia seguirá haciéndose por la Corona, y todos sus capitulares deberán tener grado mayor en Teología, Cánones ó Derecho.

Art. 16. Las dudas que puedan suscitarse en la ejecución de este decreto, ó las omisiones que en él se notaren, se resolverán ó suplirán de común acuerdo por el Ministro de Gracia y Justicia y el Muy Reverendo Nuncio de Su Santidad.

Artículo transitorio. Mientras en cualquiera Iglesia Catedral ó Colegial no haya el número de canónigos y beneficiados de oposición que deba tener con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.º de este decreto, tanto la Corona como el prelado, proveerán, una vez por oposición y otra por gracia, las vacantes sujetas á turno, que respectivamente les correspondan; observando dicha alternativa en el modo de proveer dentro de cada una de las mencionadas clases de canónigos y beneficiados.

Igual alternativa se observará cuando toque la provisión de Beneficios á los prelados con sus Cabildos.

Dado en Palacio á 6 de Diciembre de 1888.—María Cristina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez.

### **Término concedido para sacar el título de presentación.**

R. O. DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1861.

Siendo conveniente para que el culto se tribute en las iglesias catedrales y colegiales con el esplendor y decoro debido, y el servicio religioso se desempeñe con la exactitud reclamada por su importante objeto, que los agraciados con las piezas eclesiásticas que se sirven en ellas, se presenten á residirlas á la mayor brevedad posible, la Reina (q. D. g.) se ha dignado mandar: que el término ordinario si na-



lado hasta ahora para evacuar las diligencias preliminares á los nombrados para la Península, quede reducido á 60 días, de los que los 30 primeros, destinados á sacar la Real cédula de nombramiento, correrán desde el día en que se feche la comunicación del mismo á V. S. y á los interesados, y los otros 30, dentro de los cuales ha de tomarse la posesión, se contarán desde la data de aquella. El termino para las islas adyacentes se reduce á 90 días, divididos en la misma proporción. Estas disposiciones serán aplicables á todos los nombramientos que se participaren á V. S. desde la presente fecha.

R. O. DE 19 DE FEBRERO DE 1889.

Excmo. Sr.: Siendo uno de los más importantes cargos que sobre V. E. pesan el que como Vice Real Patrono de esas Iglesias le impone el deber de velar, de acuerdo con los prelados de ellas, por el buen gobierno y régimen de las mismas, y como quiera que de algún tiempo á esta parte se vienen cometiendo algunos abusos, tales como el de prolongar injustificadamente la presentación á recibir la colación canónica de los nombrados para prebendas y la de no regresar algunos á recibirlas cuando les espiran los plazos de licencias concedidas con arreglo á la ley;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, deseando poner término á tales abusos, en alto grado perjudiciales al buen servicio de la Iglesia, se ha servido dictar las siguientes disposiciones:

1.<sup>a</sup> Los agraciados con nuevo nombramiento para cualquier cargo eclesiástico ó con ascenso en sus prebendas, deberán acreditar, mediante certificación de embarque remitida á este Ministerio, haberlo verificado dentro de los cuarenta y cinco días, siguientes á la fecha de su nombramiento ó ascenso, y noventa, según éste sea para las Antillas ó Filipinas respectivamente, cuando residan en la Península.

2.<sup>a</sup> Inmediatamente después de recibir del Prelado la canónica institución, deberá comunicarse á este Ministerio, y darse cuenta de la fecha en que á virtud de aquélla, se le considere posesionado de su cargo.

3.<sup>a</sup> En los casos de licencia, deberá el prebendado á quien se conceda, dar cuenta á este Ministerio de las fechas de embarque, tanto al comenzar á hacer uso de ella, como al verificarlo de regreso.

Este requisito se llenará mediante los oportunos certificados expedidos por las Comandancias de Marina de los puntos en que desembarque y reembarque el prebendado en uso de licencia.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el de los prelados de esas Iglesias, encareciéndole la conveniencia de que, atento al cumplimiento de las disposiciones relativas á residencia de los prebendados, excite de los referidos prelados la formación de los expedientes canónicos necesarios para la declaración de vacantes de las prebendas que no se hallen servidas con arreglo á lo que disponen los Sagrados Cánones, contraviniendo asimismo á lo mandado en la prece-

dente Real orden. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1889.—Becerra—Sres. Gobernadores generales de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

## Sobre publicación en la «Gaceta» de las provisiones eclesiásticas.

R. O. DE 2 DE OCTUBRE DE 1889.

Ilmo. Sr.: La conveniencia de que la opinión pueda apreciar debidamente las razones y condiciones legales que justifican los nombramientos del personal dependiente de este Ministerio, así en el orden civil como en el eclesiástico, aconseja que al igual que viene practicándose respecto á los funcionarios de la carrera judicial; se publiquen en la *Gaceta* todos los Reales decretos de nombramientos eclesiásticos, á los que deberá acompañar un extracto de la hoja de méritos y servicios de los agraciados, siempre que no sean nombrados, en virtud de oposición, con arreglo á las disposiciones vigentes en la materia, toda vez que cuando hay propuesta de Tribunal, esta es la base única de criterio en la resolución ministerial.

De conformidad con lo expuesto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que desde esta fecha tenga cumplido efecto la publicación en la *Gaceta de Madrid* de todas las provisiones eclesiásticas que sean objeto de Real decreto.

## Sobre expedición de títulos.

CIRCULARES DE 18 DE AGOSTO Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 1889.

Ilmo. Sr.: Con el fin de evitar los abusos á que pueda dar lugar la práctica establecida en la Cancillería de este Ministerio para la expedición de Reales despachos y títulos, de acuerdo con lo informado por esta dependencia, S. M. la Reina (Q. D. G.), Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, ha tenido á bien disponer que en adelante se practiquen de oficio todas las diligencias necesarias para la expedición de dichos despachos y títulos, previo el pago de todos los derechos que se marcan en el arancel vigente verificados en dicha dependencia.

Lo que de Real orden participo á V. I. para su conocimiento y el de los individuos del Clero de esa Diócesis, haciéndole presente al mismo tiempo que con objeto de facilitar la entrega á los interesados de sus respectivos títulos, se remi-

tirán éstos directamente por el oficial Jefe de la Cancillería al Secretario de Cámara de V. I. ó Vicario Capitular en Sede Vacante.

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 18 de Agosto de 1889.—José Canalejas y Méndez.—Ilmo. Sr. Obispo de...

Ilmo. Sr.: Por Real orden de 18 de Agosto último, se dispuso que todas las diligencias necesarias para que los individuos del Clero de esa diócesis obtuviesen sus respectivos títulos, se practicasen de oficio por la Cancillería de este Ministerio, donde debe verificarse el pago de los derechos que se devenguen por todos conceptos, y cuyos documentos una vez diligenciados se remitan al Secretario de Cámara de V. I. por el Jefe del Archivo y Cancillería para su entrega á los interesados. Del importe de los expresados derechos que se verifica en papel de pagos al Estado, queda en la referida Cancillería el oportuno comprobante, consistente en las mitades del papel; pero no sucede así en la parte correspondiente a los derechos de timbre que debe satisfacer cada título, conforme á los artículos 94 y 102 de la Ley de 31 de Diciembre de 1881, porque esto se hace por medio de un sello suelto que se une al título, y del cual no puede quedar justificante alguno. Y como en el caso de extraviarse uno ó más títulos de los remitidos por la Cancillería quedaría sin poderse justificar la parte correspondiente al pago del timbre, S. M. la Reina (Q. D. G.) Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo, se ha servido disponer que no se exija por dicha Cancillería el expresado timbre, y que en su lugar se haga por la autoridad ó funcionario encargado de dar la posesión al interesado.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo participo á V. I. rogándole se sirva disponer lo necesario, para que en todos los casos antedichos tenga lugar la exacción del correspondiente timbre.

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 19 de Septiembre de 1889.—El Secretario, Diego Arias de Miranda.

## NÚMERO 8.º

### Clasificación de parroquias.

R. D. DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1851.

Teniendo presente la urgente necesidad de fijar y determinar las parroquias que se han de llamar urbanas y las que se han de tener como rurales, conforme á lo dispuesto en el art. 33 del Concordato, señalando también las clases que deba haber de estas últimas... vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se considerarán curatos rurales las vicarías, tenencias, anejos y

las parroquias con cura propio en población que no exceda de 50 vecinos, y urbanas todas las demás.

Art. 2.º Las parroquias rurales serán de primera y segunda clase. Corresponderán á la primera clase las feligresías que excedan de 35 vecinos, y á la segunda las restantes.

Art. 3.º Se titularán *párrocos* ó curas propios los vicarios perpetuos que con entera independencia rijan sus vicarías ó anejos.

Art. 4.º Los tenientes en anejo, dependientes del cura propio, se titularán en adelante *coadjutores*.

Art. 5.º Los curatos, vicarías y tenencias perpetuas que se hallaban vacantes á la fecha de la ley referente á la publicación y ejecución del Concordato, se proveerán en la forma observada anteriormente, y con entera sujeción á lo que en el Concordato se establece, los que después hayan vacado y los que vacaren en adelante.

Art. 6.º El Ministro de Gracia y Justicia dará las disposiciones convenientes para la ejecución de este decreto.

#### R. O. DE 10 DE AGOSTO DE 1866.

He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunicación del ordenador general de pagos de este Ministerio, fecha 30 de Septiembre de 1864, proponiendo algunas medidas para la mejor contabilidad, y exponiendo al mismo tiempo la urgente necesidad de llevar á debida ejecución en todas las diócesis el R. D. de 21 de Noviembre de 1851, expedido con conocimiento del muy reverendo Nuncio de Su Santidad, y recordado en circular de este Ministerio de 16 de Marzo de 1863.

Con este motivo, y teniendo íntima conexión con la expresada circular, he dado también cuenta á S. M. de otra de la misma fecha de 16 de Marzo de 1863, sobre remisión de notas á este Ministerio y publicación de edictos para concurso.

Enterada S. M. y conformándose con lo por mí propuesto, de inteligencia con el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, y sin perjuicio de lo que se determine en el arreglo definitivo del clero parroquial, se ha servido ordenar:

Artículo 1.º Los diocesanos en cuyo territorio no haya tenido aún puntual cumplimiento en todas sus partes el R. D. de 21 de Noviembre de 1851, dictarán las disposiciones conducentes para que se verifique á la mayor brevedad, dando cuenta á este Ministerio.

Art. 2.º Se declara que las vicarías y tenencias independientes de matriz, aunque sus vicarios y tenientes no hayan gozado antes del carácter de perpetuos, están comprendidas en la disposición del art. 3.º del mencionado R. D. de 21 de Noviembre de 1851.

Art. 3.º Los tenientes de matriz, ó en anejo de ella, se denominarán coadjutores.

Art. 4.º Los ordinarios, dentro del término canónico, publicarán, en la época que estimen más conveniente, sus edictos para la celebración de concurso.

Art. 5.º Cuarenta días antes, al ménos, de la comunicación del edicto, remitirán á este Ministerio nota de los curatos que hayan de proveerse, con expresión de la advocación de la iglesia, clase y categoría del curato, y de la dotación que el último poseedor haya gozado, proponiendo á la vez, si lo creyere oportuno, dentro del período establecido y á virtud de la ley de 23 de Febrero de 1845 y R. O. de 26 de Mayo del propio año, la variación que reputen necesaria siendo el curato de los clasificados de entrada. Asimismo remitirán los diocesanos con sus propuestas para la provisión de los curatos, nota, en los propios términos, de los curatos que hubieren vacado con posterioridad, ó hayan de quedar vacantes en el caso de ser nombrados los propuestos en primer lugar para otra parroquia.

Art. 6.º A este fin se declara:

1.º Que el *statu quo* á que se refiere el art. 4.º del R. D. de 29 de Noviembre de 1851, acordado con intervención del muy reverendo Nuncio de Su Santidad, es la clasificación individual, hecha por la Junta superior del culto y clero en 1845 y 1848, de las reglas y tipos de dotación establecidos en dicha R. O. de 26 de Mayo de 1845, con las variaciones hechas posteriormente con Real aprobación; y 2.º, que el máximo de la dotación de los curas propios en parroquia rural de segunda clase, que no se designó en el art. 4.º del expresado decreto de 29 de Noviembre de 1851, ha de ser de 3.300 rs. *minimum* para los curas de parroquia rural de primera clase.

Art. 7.º Si antes de la publicación del edicto no recibiese el diocesano Real orden en contrario, se entenderá que ha merecido la aprobación de S. M. la nueva dotación propuesta á consecuencia de lo prevenido en el art. 5.º

Art. 8.º Se derogan en todas sus partes las citadas circulares de 16 de Marzo de 1863, y cualquiera otra resolución posterior contraria á las disposiciones precedentes.—Lo que de Real orden, etc.—Zarauz 10 de Agosto de 1866.—Arraola.

## Sobre demarcación y arreglo parroquial.

R. C. DE 3 DE ENERO DE 1854.

«La Reina. Muy reverendos en Cristo padres arzobispos, reverendos obispos y vicarios capitulares Sede vacante de las iglesias de esta Monarquía. Ya sabéis que en el último Concordato celebrado entre la Santa Sede y mi Corona, se estipuló



solemnemente que, á fin de que en todos los pueblos del Reino se atendiera con el esmero debido al culto religioso y á todas las necesidades del pasto espiritual, procederáis desde luego á formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial en vuestras respectivas diócesis, teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio y de la población, y las demás circunstancias locales, oyendo á los cabildos catedrales, á los respectivos arciprestes y á los fiscales de los Tribunales eclesiásticos, y tomando por vuestra parte todas las disposiciones necesarias para que pudiera darse por concluido y ponerse en ejecución el indicado arreglo, previo el acuerdo de mi Gobierno, en el menor término posible: que considerándose por el mismo Concordato divididas las parroquias en urbanas y rurales, y haciéndose sobremanera urgente determinar las comprendidas en una y otra denominación, señalando también las clases que debía haber de rurales para el más pronto efecto de la dotación de los párrocos y de sus coadjutores, expedí á este fin un mi decreto en 21 de Noviembre de 1851, conformándome con lo que para ello me propuso á la sazón mi Ministro de Gracia y Justicia, después de haber oído al mi Consejo de la Cámara eclesiástica y conferenciado con el muy reverendo Nuncio apostólico en esta corte; y que por otro mi decreto de la misma fecha, librado de igual conformidad y con trámites idénticos, y por consiguiente mi cédula de 30 de Diciembre de aquel año, os encargué nombráseis á lo menos un vicario foráneo amovible *ad nutum* con título de arcipreste en cada partido judicial civil de vuestras diócesis, excepto en los de las capitales de ellas ó donde los hubiese ya con aquel título, al efecto, entre otros, de que os informarán y ayudarán al nuevo arreglo y demarcación de parroquias en la parte que el Concordato exige su audiencia.

Y ahora sabed: que no siendo ya posible dilatar más negocio tan importante, de que depende la subsistencia proporcionalmente decorosa del culto, la de los párrocos y sus coadjutores, de un modo estable y permanente la abundancia del pasto espiritual á los fieles, el mayor bien de la Iglesia y consiguientes ventajas del Estado; oído mi Consejo de la Cámara, y conformándome con lo que de acuerdo con el muy reverendo cardenal Brunelli, pro-Nuncio que fué de Su Santidad en estos Reinos, y de la inteligencia con el actual representante de la Santa Sede me ha propuesto el infrascrito mi Ministro de Gracia y Justicia, he creído oportuno y aún indispensable al mejor acierto y uniformidad apetecida en todo lo posible, no menos que á la facilidad de lograr el previo acuerdo de mi Gobierno que también el Concordato exige, para que los planes parroquiales se pongan en ejecución, excitar vuestro celo y pastoral solicitud para que, sin perjuicio de la plena libertad que tenéis de dictar lo que estimáreis más conveniente al mejor servicio de la Iglesia y del Estado, y sin coartároslo en manera alguna, procuréis, al formar y concluir en el menor término posible la demarcación y arreglo de parroquias que el Concordato os encomienda, tener presentes las reglas ó bases que siguen:

- I. Las diócesis se mantendrán divididas en arciprestazgos.
- II. Hubrá iglesias parroquiales matrices, ayudas de parroquia ó anejos, capillas y santuarios habilitados para el culto.

III. Las parroquias matrices se dividirán en urbanas y rurales, con arreglo al Concordato y al citado mi decreto de 21 de Noviembre de 1851.

IV. En las iglesias catedrales habrá parroquia con el correspondiente territorio cuyos habitantes, aunque no sean capitulares ni dependan del cabildo, serán feligreses de ella.

V. Habrá también parroquia en las colegiadas, con arreglo al Concordato, y en los términos que expresa la base precedente.

VI. El número de parroquias de cada población aglomerada será proporcionado á su vecindario.

Cuando la población *aglomerada* no pase de 4.000 almas habrá una sola parroquia.

A medida que el vecindario sea más considerable se aumentará el número de parroquias, conformándose en lo posible al siguiente cuadro:

| Vecindario de las poblaciones. | Número de parroquias que corresponden. |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 4.001 á 10.000.....            | 2                                      |
| 10.001 á 15.000.....           | 3                                      |
| 15.001 á 20.000.....           | 4                                      |
| 20.001 á 25.000.....           | 5                                      |
| 25.001 á 35.000.....           | 6                                      |
| 35.001 á 45.000.....           | 7                                      |
| 45.001 á 55.000.....           | 8                                      |
| 55.001 á 65.000.....           | 9                                      |
| 65.001 á 75.000.....           | 10                                     |
| 75.001 á 90.000.....           | 11                                     |
| 90.001 á 110.000.....          | 12                                     |

110.001 en adelante, una parroquia más por cada 10 000 almas.

VII. En los países cuya población esté diseminada, es decir, sin componer pueblo, se formarán comarcas, siempre que el número de almas sea prudencialmente bastante para componer feligresía, y se establecerá parroquia en el punto de cada una que se estime más conveniente para la asistencia espiritual de sus habitantes no debiendo distar de ella los más lejanos según las diferentes localidades, sino una hora regular de camino.

VIII. Habrá ayuda de parroquia: primero, en las comarcas que se formen con arreglo á la precedente base, cuando la parroquia no esté situada de manera que toda la feligresía pueda recibir cómodamente el pasto espiritual. Segundo, en toda población aglomerada, cualquiera que sea su vecindario y el número de ayudas de parroquia, comprendidas dentro del término de la misma comarca, siempre que fuere necesario, bien sea á causa del número de almas, bien por circunstancias especiales topográficas.

En ningún caso las ayaldas de parroquia excederán en más de una tercera parte del número de coadjutores correspondientes á la parroquia matriz, que se indicará en la base 19.

IX. Las ayaldas de parroquia estarán sujetas y dependerán de la parroquia matriz.

X. Las parroquias se dividirán en clases.

XI. Las parroquias rurales serán de primera y segunda clase, con arreglo á mi citado decreto de 21 de Noviembre de 1851.

XII. Las urbanas serán de entrada, ascenso y término.

XIII. Serán de término las parroquias sitas en capital; 1.º, de diócesis; 2.º, de provincia; 3.º, de distrito judicial.

Lo serán además las sitas en otras poblaciones que por sus circunstancias particulares estén en casos de excepción, que deberá probarse debidamente.

XIV. En cada diócesis habrá tres parroquias de ascenso por cada una de término, y lo serán las sitas en las poblaciones que sigan inmediatamente en importancia á las que tengan parroquia de término.

XV. Todas las demás parroquias urbanas serán de entrada.

XVI. Tanto las parroquias urbanas como las rurales estarán regidas por cura propio.

XVII. En las ayudas de parroquia habrá coadjutores dependientes de los curas propios de las matrices, marcándose por los respectivos ordinarios las obligaciones y atribuciones que aquéllos hayan de tener.

XVIII. Todo eclesiástico ha de estar adscrito precisamente á una iglesia.

Los eclesiásticos no coadjutores adscritos á las parroquias, además del servicio que deben prestar en ellas por su título ó por disposición del diocesano, auxiliarán en caso de necesidad á los párrocos en el desempeño de sus funciones.

XIX. En las poblaciones aglomeradas que excedan de 800 almas habrá el conveniente número de coadjutores, distribuyéndose, cuando haya más de una, entre las parroquias de cada población, según sus respectivas necesidades, y procurando los ordinarios acomodarse al siguiente cuadro:

| Número de almas de la población. |         |              | Número<br>de Coadjutores. |
|----------------------------------|---------|--------------|---------------------------|
| De                               | 801 á   | 1.200. ....  | 1                         |
|                                  | 1.201 á | 2.100. ....  | 2                         |
|                                  | 2.101 á | 3.200. ....  | 3                         |
|                                  | 3.201 á | 4.000. ....  | 4                         |
|                                  | 4.001 á | 5.000. ....  | 5                         |
|                                  | 5.001 á | 6.100. ....  | 6                         |
|                                  | 6.101 á | 7.300. ....  | 7                         |
|                                  | 7.301 á | 8.600. ....  | 8                         |
|                                  | 8.601 á | 10.000. .... | 9                         |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 10.001 á 11.500.....                                        | 10 |
| 11.501 á 13.000.....                                        | 11 |
| 13.001 á 14.500.....                                        | 12 |
| 14.501 á 16.000.....                                        | 13 |
| 16.001 en adelante, uno más por cada 2.000 almas de exceso. |    |

En las poblaciones que excediendo de 500 almas y no pasando de 800 se hiciere necesario por sus circunstancias especiales, otro eclesiástico además del párroco para la celebración de la misa en días de precepto, podrá ocurrirse á esta necesidad destinando al efecto el diocesano á quien tenga por oportuno, con la conveniente remuneración, mientras no resida habitualmente en el mismo pueblo otro sacerdote.

XX. Las coadjutorías indicadas serán verdaderos beneficios eclesiásticos residenciales, perpetuos, y colativos, y como tales no podrán perderlos sus poseedores sinó por las causas y medios prescritos en el derecho canónico. Los ordinarios fijarán sus obligaciones determinando la forma y modo de ejercerlas, en la explicación de la doctrina cristiana, asistencia á los enfermos, y administración de los Santos Sacramentos, excepto los del Bautismo y Matrimonio, sin perder de vista que corresponde primaria y principalmente al párroco el personal desempeño de todos los cargos indicados.

XXI. Para fijar la dotación de los curas y coadjutores y la consignación para gastos del culto se tomarán en consideración primera y principalmente, las circunstancias generales del país y las de las respectivas diócesis, y en segundo lugar las especiales de la población, comparada con la generalidad de las que tengan iglesia de la propia clase y categoría en la misma diócesis.

En su consecuencia, no será necesario que los curatos de término, por el solo hecho de serlo, tengan el máximo que señala el Concordato, ni tampoco que en cada diócesis se fije una cantidad dada, que sirva indistintamente y sin excepción de máximo para todas las parroquias de una misma categoría. Pero se prescindirá para fijar estas dotaciones del valor del producto de los derechos de estola y pié de altar, del eventual, limosna por la celebración de misas y demás personales, de los mansos ó iglesarios y de las cargas de fundaciones que deben cumplirse en la parroquia; é igualmente se prescindirá del valor que en otro tiempo hubieren tenido los curatos, sus diezmos, primicias y rentas.

Sin embargo, el valor mayor que tuvieron los curatos antes de las pasadas vicisitudes se tendrá en cuenta por vía de excepción, aplicable única y exclusivamente á los que disfrutaron las rentas en aquella época; pero sin que en ningún caso pueda exceder la dotación del máximo que fija el Concordato respectivamente para los párrocos y sus coadjutores.

Además de las reglas precedentes se tomarán también en cuenta para determinar la cantidad de gastos del culto: primero, la renta que en todos conceptos percibieran anteriormente las fábricas; segundo, los usos y costumbres y el mayor ó menor esplendor con que se haya venido sirviendo anteriormente el culto.

XXII. En cada parroquia habrá una Junta de fábrica. Presidirá esta Junta el párroco ó quien haga sus veces. Sus facultades y número de individuos podrán variar según lo que, atendidas las circunstancias de cada diócesis, arciprestazgo y parroquia se estime más conveniente. El ordinario determinará uno y otro, y al mismo se rendirán las cuentas en las épocas que disponga, cesando cualquier privilegio, uso ó costumbre en contrario.

XXIII. Las cofradías en debida forma establecidas en las parroquias y sus anejas estarán sujetos á sus respectivos párrocos en todo lo que concierna al tiempo y modo de celebrar las funciones religiosas, sin perjuicio de lo que respecto á su régimen interior prevengan sus constituciones y estatutos legítimamente aprobados.

XXIV. Al plan parroquial se unirá tanto el arancel general de derechos de iglesia y estola que ha de regir en cada diócesis, como el particular de cada arciprestazgo ó parroquia, si por sus circunstancias especiales fuere necesario hacer alguna excepción de las reglas generales.

XXV. Si por cualquiera causa ó razón no pudiese aplicarse en todo ó en parte alguna de las bases precedentes, los diocesanos lo consignarán así en los planes parroquiales, con expresión del motivo en que se funden.

XXVI. Los prelados harán constar en los expedientes los curatos de patronato particular, los poseedores de éste, y si los bienes de la fundación han sido ó no adjudicados á las familias, expresando las demás prerrogativas y derechos que por razón de patronato ejerzan actualmente los patronos, y haciendo las observaciones oportunas sobre aquellos en que deban cesar, sea cual fuere el uso, abuso ó fundamento de su ejercicio, por no ser de los comprendidos entre los que concede á los mismos el derecho canónico.

También harán constar el número de capellanías y beneficios de toda clase fundados en cada parroquia.

Y en su consecuencia he mandado expedir la presente mi célula, por la cual os ruego y encargo:

1.º Que forméis un plano general, claro y distinto de las iglesias parroquiales de vuestras respectivas diócesis, siguiendo la actual división de éstas en arciprestazgos, é instruyendo expediente separado para cada uno, á fin de que la dilación y dificultades que en el curso de alguno puedan experimentarse, no embaracen el de los demás expresando en cada arciprestazgo los pueblos de que conste, por riguroso orden alfabético, y las parroquias, ayuda de parroquia, capillas, santuarios, ermitas y oratorios habilitados para el culto público que en cada lugar hubiere, con la clase y número de ministros que hoy cuenten para su servicio y el que hayan de tener en adelante, según la clase á que eleváreis ó redujáreis cada iglesia de las existentes, ó de las que de nuevo erigiéreis y destináreis al servicio parroquial, atendidas las necesidades de la población, extensión y naturaleza del territorio y demás circunstancias locales, que indicáreis y explicaréis por menor en cualquier caso excepcional, marcando en él las distancias por el tiempo



que regularmente se invierta en el camino de un punto extremo á la iglesia parroquial ó ayuda de parroquia.

2.º Que reunidas las noticias necesarias, y oído el respectivo arcipreste por lo tocante á pueblos que no sean las capitales de vuestra diócesis, oigáis también respecto á aquéllas y éstas á vuestros cabildos catedrales y á los fiscales de vuestros Tribunales eclesiásticos, según el Concordato dispone; y procediendo en todo con arreglo á derecho, y en lo conducente con especialidad al capítulo *Ad audientiam de edif.* renovado en el cap. IV, sesión 21 del santo Concilio de Trento, formalicéis en su caso vuestros autos de erección de nuevas parroquias desmembradas de las antiguas, de supresión ó de conservación de éstas en su actual estado, determinando su clase, la asignación correspondiente de párrocos y coadjutores, su dotación y la de fábrica, según las circunstancias lo exigieren, en vista de las indicadas en las bases anteriores, y me remitáis dichos vuestros autos originales, conclusos y fechos, á medida que los fuéris dictando, con un duplicado auténtico de ellos, á mins del referido mi Ministro de Gracia y Justicia, para que, visto todo en mi Consejo de la Cámara, y conmigo consultado, pueda yo á mi vez acordar previamente, como exige el Concordato, que se dé por terminados y puedan ponerse en ejecución los planes de arreglo parroquial.

3.º Que para formar desde luego y concluir en el menor término posible, como ordena el mismo Concordato, los de la mayor parte de los arciprestazgos de las diócesis, cuyas Sedes episcopales quedan por él subsistentes en los propios lugares donde hoy radican, ó han de trasladarse á otros, ó unirse á las que se conservan ó erigirse de nuevo ó extender su jurisdicción ordinaria á territorios exentos, limítrofes ó enclavados en aquéllas, no es indispensable que preceda la demarcación particular de cada diócesis, y el conocimiento de sus nuevos límites, que en observancia del Concordato han de determinarse con la posible brevedad y del modo debido (*servatis servandis*) por la Santa Sede; puesto que al nuevo arreglo y demarcación parroquial ordena el mismo Concordato que procedan los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos desde luego, indicando así la grande urgencia de esta demarcación y arreglo, la suma necesidad de emprenderlo cuanto antes, y que el no estar hecha aún la nueva demarcación de la diócesis no puede ser causa ni motivo suficiente para demorar la de las parroquias y su completo arreglo en los arciprestazgos de las capitales ó en los más céntricos de aquéllas y en todos los que no haya fundada y prudente duda de si en la próxima división pasarán ó no á formar parte de otra diócesis.

4.º Que en los que la hubiere sobre todos, varios ó alguno de sus pueblos, pueden formarse de estos expedientes separados en que juntos los datos y noticias propias de cada uno, y oído el arcipreste respectivo, se suspenda la audiencia del cabildo y del fiscal eclesiástico, y no se provea en ellos auto definitivo hasta que hecha la nueva circunscripción de diócesis pueda dictarlo el ordinario á quien luego correspondiere el arciprestazgo, reuniendo en uno sus expedientes, si consistiere de varios.

5.º Que de los territorios, por cualquier título exentos, enclavados en algunas diócesis, cuya exención no se conserve expresamente en el Concordato, pueden los ordinarios actuales, en virtud del mismo, pedir datos y noticias, sólo para el efecto del arreglo parroquial, á los respectivos prelados exentos, de cualquiera calidad que fueren, bien sean inferiores ó que carezcan de jurisdicción *cuasi episcopal*, bien á los que la tengan, y aun propia y verdaderamente *nullius*, y con el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, oyen lo el dictámen de cada uno é instruyendo con todo expediente aparte, en el que tampoco oigan á sus cabildos ni fiscales eclesiásticos, ni menos dicten auto definitivo hasta que hubiere cesado la exención, conforme á lo dispuesto en Bula de Su Santidad de 5 de Setiembre de 1851 y al art. 1.º de mi decreto de 17 de Octubre siguiente.

6.º Que los expedientes de los territorios de las cuatro Ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa se instruyan en la misma forma por el Tribunal superior de ellas, hasta reunir los datos y noticias y oír á los arciprestes que hubiere establecidos y á los prelados de su jurisdicción; pero sin oír á su fiscal ni menos proceder á tomar providencia alguna ni consultármela, antes que en la nueva demarcación eclesiástica se forme el coto redondo que ha de titularse Priorato de las Ordenes militares, en ejecución del Concordato.

7.º Que al fijar vos los prelados ordinarios la dotación correspondiente á párrocos y conjutores con presencia de las bases insertas, miréis bien la diferencia establecida en la 21.ª, á favor de los antiguos colacionados y posesionados en sus beneficios sin condición alguna, y los distingáis al señalarles su dotación personal, de los que posteriormente los hubieren obtenido con la condición expresa ó tácita de estar y pasar por lo que se resolviera en el nuevo arreglo, aplicando la ventaja de la excepción contenida en dicha base única y exclusivamente á los primeros: que atendáis las consideraciones indicadas en la misma base para la definitiva dotación del personal de las parroquias, prescindiendo de sus antiguas clasificaciones en tiempo de la prestación decimal y de las provisionales posteriores.

8.º Que en los casos de la base 5.ª no ha de considerarse precisa la reducción á parroquial de toda colegiata que no se conserve por el Concordato, sino cuando las circunstancias locales lo permitan; ni han de suponerse colegiatas todas las que así se titulen, sin erección de tales ó sin que se pruebe la posesión de ello, solo porque sus antiguos beneficiados formaran cabildo ó colegio, ó los títulos canónicos de sus piezas eclesiásticas fueran semejantes á los de las verdaderas colegiatas: que en las del patronato particular declaréis, en virtud del Concordato, su supresión y reducción á iglesia de la clase que corresponda, siempre que, debiendo ser parroquial, no haya asegurado el patrono el exceso de gastos para conservarla como colegiata: que al reducir así á las parroquiales las que deban serlo en vista de las bases insertas y del contenido de las disposiciones que tuve á bien adoptar en orden que, con fecha 18 de Octubre de 1852, os fué comunicada por mi Ministro de Gracia y Justicia de acuerdo con el muy reverendo Nuncio apostólico, prescindáis ya de las disposiciones cuarta y quinta de la mis-

ma, como dictadas solo en el concepto de provisionales y hasta el definitivo arreglo del plan parroquial de estas iglesias que habéis de establecer ahora: que en él determináis el número de beneficiados que además del párroco y coadjutores, en su caso, se contemplen necesarios en ellas para el decoro del culto, y no deberá exceder del de seis, que para las colegiatas subsistentes designa el artículo 22 del Concordato: que á cada uno de éstos señaléis dotación proporcionada á su clase y cargo cuyo mínimo será de 2.000 rs. y el máximo los 3.000 que el Concordato señala para los beneficiados de las colegiatas, según expresaba la disposición cuarta de mi citada orden: que debiendo ser parroquial toda colegiata, que se conserve, la distingáis con el nombre de parroquia mayor, siempre que en el mismo pueblo hubiere otra ú otras, como dispone el Concordato.

9.º Que en ejecución del cap. XVI, sesión 23 de *reformat.* del santo Concilio de Trento, y del párrafo 2.º de la Bula *Apostolici ministerii*, podéis adscribir á las iglesias parroquiales á todos los eclesiásticos que no gocen de verdadero beneficio ó título especial, para que sirvan en ellas conforme al párrafo 7.º de la misma Bula, y según la base 18 auxilien en caso de necesidad á los párrocos en el desempeño de sus funciones, suspendiéndoles el uso de sus licencias ó el ejercicio de su orden á los que excusen la asistencia y servicio sin legítima y no afectada causa, ó imponiéndoles mayor pena, según la gravedad y circunstancias del caso.

10. Que al establecer el plan general de fábrica de vuestras respectivas diócesis, con las variaciones que juzgáreis oportunas en sus distintos arciprestazgos y parroquias indicadas en la base 22, notéis en el punto de dotación de cada una á que se refiere la base 21, que en los gastos necesarios para la de la iglesia matriz, incluso los de su reparación, deben comprenderse en el mismo sentido los de sus ayudas de parroquia, pues no han de tener por sí fábrica separada de aquélla; que si es posible y estable procuréis utilizar en favor del culto y fábricas de las parroquiales todos los medios y recursos que pueden proporcionaros las cofradías canónica y legítimamente establecidas en ellas, ó en iglesias que dependan de las mismas, celando no los inviertan en gastos profanos ni supérfluos.

11. Que forméis por separado arancel general de derechos parroquiales de vuestras diócesis y particulares de cada arciprestazgo, donde las circunstancias los hicieren precisos porque deban introducirse muchas excepciones en las partidas de aquél, anotando en los planes las propias de cada parroquia, ó refiriéndose al arancel del arciprestazgo ó al general donde no hubiere ninguna: que así para la formación del general como para la declaración de sus excepciones, oigáis á vuestro cabildo catedral y fiscal eclesiástico, y procedáis con arreglo á derecho á dictar vuestro auto, estableciéndolo de nuevo ó reformando los antiguos en las partidas cuya alteración aconsejen las circunstancias: que en las relativas á bautismos, matrimonios, entierros y exequias, desterréis todo abuso que fomenta la vanidad y pompa mundana, no tolerando ninguno que repugne á la santidad de las ceremonias y prácticas religiosas y del lugar en que deben celebrarse, por más que se

quiera mantener con especiosos pretextos: que refrenéis el que, especialmente en la corte y grandes poblaciones, se vá introduciendo en los cementerios por imitar costumbres no muy laudables ni conformes con la creencia y culto católico, en las costosas sepulturas y sus adornos y otras profanas demostraciones del lujo de las familias, más bien que de sincero dolor por sus difuntos y deseo del eterno descanso de sus almas: que en conformidad al párrafo último del art. 33 del Concordato, arregléis la distribución de derechos en cada partida del arancel respectivo, fijando la parte ó partes que correspondan á la fábrica, párroco, coadjutores y ministros inferiores: que dotadas suficientemente las fábricas y el clero parroquial, reduzáis á lo justo y preciso los crecidos derechos que por su indotación se permitan en países ó pueblos donde era nula ó muy escasa la participación de la parroquia en las rentas decimales: que al establecer ó reformar equitativamente los demás, impongáis severa prohibición de exigir otros fuera de los del arancel, cualquiera que sea la denominación con que se pretengan sostener ó introducir, á título de ofrendas voluntarias, donativos ó gratificaciones.

12. Que según la base 26.<sup>a</sup>, enumeréis en los planes los beneficios de todas clases existentes en cada parroquia que no sean de fundación particular, y cuyas asignaciones se satisfagan hoy por el presupuesto de dotación del clero, distinguiendo entre ellos los que tengan cargo de ayudar al párroco, de los residenciales, servidores y puramente simples: que debiendo dejar de existir todos á excepción de los de fundación particular sostenidos con sus bienes y rentas, á medida que fueren vacando, sin perjuicio alguno de los que actualmente los posean en propiedad, comprendáis los que tienen cargo de ayudar al párroco en el número de coadjutores que debe haber en cada población con arreglo á la base 19: que para los beneficios residenciales, servidores y puramente simples, vacantes á la sazón ó que en adelante vicaren, no nombréis económos sino por vía de excepción, y en caso de necesidad, atendidas las circunstancias de la población, no debiendo, cuando se terminen los planes respectivos y se extinga el actual personal, satisfacerse por el presupuesto de dotación del clero en las iglesias parroquiales más asignaciones que las de sus fábricas, párrocos y coadjutores, y las de los beneficiados necesarios para el mayor culto en las que habieran sido colegiadas, como en su lugar se advierte.

13. Que al expresar el número de capellanías y beneficios que sean de fundación y patronato particular en cada parroquia á que se refiere la misma base 26.<sup>a</sup>, distingáis igualmente los verdaderos beneficios eclesiásticos de las meras capellanías colativas, y éstas de las simples memorias de misas, en cuya celebración deba invertirse todo el producto líquido de sus bienes: que los verdaderos beneficios de patronato particular con cura de almas, cuyos bienes se conserven y basten para la respectiva dotación de párroco, los mantengáis en la clase de curatos, y los que en iguales términos tuvieren la calidad ó el concepto de ayudar á la cura de almas, los declaréis coadjutorías, reservando en unos y otros al patrono su derecho: que en los de ambas clases que no alcanzando el producto de sus bienes á cubrir las

asignaciones respectivas, hubieren de completarse por el presupuesto de dotación del clero, establezcáis la proporcional alternativa turnaria en el ejercicio del derecho de patronato entre mi Corona y el patrono, y, en su caso, entre éste y el ordinario: que en los residenciales ó simples servideros de patronato particular, entendáis no han de continuar sus poseedores percibiendo de dicho presupuesto asignación alguna ni parte de ella, luego que ocurran sus primeras próximas vacantes; en cuyo caso, quedando estos beneficios incongruos, procedáis á formar expediente, según derecho, para la integración de su cógrua por quien corresponda, ó á la reducción de los mismos, arreglando, en su consecuencia, el uso del derecho de sus patronos: que hagáis incompatible la posesión de tales beneficios, capellanías ó memorias de patronato particular con el cargo de párroco, de coadjutor ó de beneficiado de iglesia que antes fuera colegiata, siempre que sus rentas lleguen á la cógrua sinodal y basten para la dotación de un ministro más en la iglesia matriz ó dependientes de la misma, ó que su fundación exija en alguna de ellas servicio anejo á la cura de almas, ú otro tan importante como el de celebración de misas á hora fija y en iglesias á días determinados: que ninguno de estos beneficios de patronato particular dotados exclusivamente con bienes propios de las fundaciones, ha de tomarse en cuenta para fijar el número de coadjutores que á cada población corresponda por la citada base 19.

14. Y que así del recibo de ésta como de lo que en cada uno de sus puntos fueris adelantando, me déis aviso á manos del expresado mi Ministro de Gracia y Justicia; en lo que me serviréis.

Y por la presente, mando á todos los Tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, oficinas públicas y dependencias del Estado que os faciliten sin demora cuantos datos, noticias é informes les exigieréis para la formación de estos planes parroquiales; que así es mi voluntad.

R. D. DE 15 DE FEBRERO DE 1867.

Exposición á S. M.—Señora: Quince años han transcurrido desde que se ajustó el importante Concordato de 1851, y todavía no han podido ser ejecutadas algunas de sus principales determinaciones; como son, entre otras, el arreglo general del clero parroquial y la nueva circunscripción de diócesis.

Y no porque expedida la cédula de *urgo y encargo* de 3 de Enero de 1854, no respondiese en su mayor parte con plausible celo y empeño el episcopado, remitiéndose desde luego á este Ministerio de Gracia y Justicia el plan de arreglo de las diócesis más extensas y difíciles; no porque los ministerios sucesivos hayan dejado de aplicar al caso la posible atención y diligencia, sino á influjo de las circunstancias, y por la magnitud misma y dificultad del asunto, en que es preciso reunir y combinar infinitos datos y formalizar trabajos por demás prolijos, que es de necesidad todavía rectificar una y otra vez con el ilustrado y celoso concurso del Consejo de Estado y de los mismos prelados diocesanos.



Y con todo, Señora, y sin que sean más bonancibles las circunstancias presentes que las que precedieron; sin que sea menor la gravedad é implicación de los mencionados arreglos; el tiempo ya transcurrido, lo solemne de la obligación concordada, la no menos solemne reiteración de la misma en el Convenio adicional de 1859, por cuyo artículo 19 el Gobierno español prometió en nombre de V. M. «que cooperará por su parte *con toda eficacia* á fin de que se lleven á efecto *sin demora* las disposiciones del Concordato que aún se hallan pendientes de ejecución;» la necesidad, en fin, como asimismo la in disputable utilidad que han de reportar de ello la Iglesia y del Estado; exigen del actual y de los ulteriores Gobiernos un enérgico impulso, aun superior si fuese dable á lo que puedan permitir las difíciles circunstancias del Estado.

El Ministro que suscribe se lo ha propuesto así, con toda la decisión que impone un deber perentorio y sagrado. Desde su entrada en el poder ha dedicado á este propósito la justa atención que reclama, en cuya consecuencia hay trabajos fenecidos que se han sometido ya á la aprobación pontificia como el arreglo de capellanías colativas; y otros han recibido el conveniente impulso para llegar á su término y ver en breve la luz pública y los que no se hallan aún en ese estado lo recibirán; en cuya tarea el que suscribe espera verse auxiliado para el éxito apetecido por el respetable episcopado español, con el celo é ilustrado esfuerzo que nunca ha desmentido.

Viniendo ya á la cuestión, la opinión no es del todo unánime sobre el orden sucesivo del arreglo; estimando unos que debe preceder el de diócesis al parroquial, y otros á la inversa; sin duda lo primero es más lógico; lo segundo más perentorio por las clases y necesidades á que afecta.

Pero como quiera que sea, la cuestión no versa ya para los Gobiernos en el terreno teórico y de sistema, sino en el práctico y de resultado inmediato. Porque en efecto, á virtud de la Real cédula antes citada, los trabajos sobre arreglo parroquial se adelantaron considerablemente. Algunos lo están tanto, que, como queda insinuado, pueden, con pocas y fáciles modificaciones, ser desde luego utilizados y publicados; y á esto se decide, por razones obvias que no es necesario explicar, el Ministro que suscribe, sin dejar por eso de llevar á término los restantes, y de impulsar sin levantar mano los relativos á la nueva circunscripción de diócesis, y á cuanto concierna á la completa y debida ejecución del Concordato.

En cuanto al arreglo parroquial en sí, tres fueron y son aún los fundamentos cardinales de la determinación del Concordato; primero, mejorar en sus medios hoy en esta parte la distribución del pasto espiritual, que se resentía radicalmente en cuanto á la clasificación y calidad de los pastores, cargos y distritos parroquiales, de su remoto origen y vicisitudes históricas; segundo, normalizar y mejorar la suerte de los párrocos, lo cual fué de suprema necesidad después de la supresión de los diezmos; acervo común con que se ocurría á las atenciones del clero y del culto, y aunque ya no tan perentoria dicha necesidad, apremiante aún, no obstante las sucesivas medidas legislativas adoptadas á este propósito desde 1839

á 1845; y tercero y muy principal, la falta de las comunidades de religiosos, auxilio tan eficaz de las tareas parroquiales.

En cuanto al primer fundamento fácil es comprender las dificultades que habían de ocasionar, entre otras causas, los precedentes históricos y tradicionales; la clasificación de parroquias, aunque inadecuada, sancionada así por el tiempo, los patronitos de particulares; las circunstancias de población diseminada ó agrupada, y las tópicas ó locales, tan desventajosas é insuperables en terrenos quebrados y montañosos como lo es una gran parte de la superficie de España.

El segundo fundamento produjo desde luego la convicción, y en breve la evidencia de que había de agravar más ó menos, pero agravar de seguro, el presupuesto general del clero, cuya circunstancia ha venido influyendo no poco en el retardo del arreglo; y no porque con plena buena fé no se reconozca la obligación impuesta por el Concordato de mejorar las dotaciones respectivas de aquél, cuando las circunstancias del Estado lo permitan, y como ya, aunque en reducida escala, se ha practicado alguna vez, sino porque esa situación del Estado es aún de desear, si bien debe esperarse, en cuyo supuesto no es sino interino el estado de dotaciones que hoy se fija en el arreglo parroquial.

A moderar el mencionado gravamen, haciendo posible y aceptable el arreglo, se encamina el presente proyecto de decreto, modificando para ello algunas determinaciones de la antedicha cédula que á ello se prestan, y utilizando, como en el mismo se ve, diferentes medios á propósito con que en aquélla no se contó como los cabildos beneficiados de la antigua Corona de Aragón los beneficios patrimoniales y otros igualmente adecuados.

Ha sido también en parte motivo de retardo el propósito adecuado sin duda, y que ha preponderado en la apreciación de algunos, de publicar simultáneamente el arreglo parroquial de todas las diócesis. Pero en la proligidad y dificultad de los trabajos, ha sucedido y sucede, que los de unas diócesis se hallan hace tiempo terminados ó próximos á serlo; al paso que los de otras no han llegado todavía á ese estado, ni con mucho, resultando que, en detener la publicación de los primeros, las diócesis respectivas se ven privadas de ese beneficio, mientras las demás no reportan ventaja alguna de ello; cuando por el contrario, el publicarse los arreglos parciales concluidos, ó á proporción que vayan siéndolo, sobre la utilidad local que lleven en sí, puede influir como pauta y como estímulo para adelantar en los pendientes.

Por estas consideraciones, el Ministro que suscribe se decide, en el estado de las cosas, por el método de publicación parcial y para adelantarla, de acuerdo con el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el presente proyecto de decreto, que se reputará adicional á la mencionada cédula de *ruzo y encargo* de 3 de Enero de 1854 y al que habrá de seguirse la publicación sucesiva de arreglos modificados y terminados á su tenor.— Madrid 15 de Febrero de 1867.—Señora: A. L. R. P. de V. M.—Lorenzo Arrazola,

## REAL DECRETO.

Tomando en consideración lo que, de acuerdo con el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, me ha expuesto mi ministro de Gracia y Justicia, á fin de llevar á debida ejecución el arreglo del clero parroquial, al tenor de lo dispuesto en el artículo 24 del Concordato de 1851, como adición y modificación en sus casos de la Real cédula de *ruego y encargo* de 3 de Enero de 1854,

Vengo en decretar:

Artículo 1.º Los muy reverendos arzobispos y reverendos obispos formarán, y en su caso completarán el plan y arreglo parroquial: primero, en los pueblos sujetos hoy á su jurisdicción ordinaria, cualquiera que pueda ser el resultado de la demarcación de límites de las diócesis; segundo, con la autorización correspondiente en las parroquias enclavadas en su propio territorio, y dependientes hoy de otro prelado diocesano.

Art. 2.º En las diócesis que deban unirse á otra según el Concordato, y tengan administrador apostólico, hará éste el arreglo parroquial en concepto de delegado de la Santa Sede, y en su defecto el vicario capitular, *Sede vacante*; pero en este caso el Gobierno, antes de prestar su acuerdo, al tenor del artículo 24 del Concordato, oirá al prelado á cuya Silla se agrega dicha iglesia.

En los territorios pertenecientes á las jurisdicciones *vere ó quasi nullius* que suprime el Concordato, se hará el arreglo parroquial, en el concepto de delegado apostólico, por el prelado de la diócesis á quien esté encomendada ó se encomendare por el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, en uso de sus facultades, la administración apostólica, cualquiera que sea la diócesis á que en lo sucesivo pueden corresponder las parroquias.

Art. 3.º Los planes referentes á los pueblos ó parroquias que no correspondan á la jurisdicción ordinaria del actual prelado, se formarán por separado, comprendiendo todos con la debida separación en un solo auto, que se considerará adicional al plan general de la diócesis.

A fin de que se instruyan y terminen con la posible brevedad los expedientes sin perjuicio de continuar su curso los ya existentes en el Ministerio de Gracia y Justicia, se prescindirá de los trámites que no exige el Concordato ni la Real cédula de 3 de Enero de 1854, y que no se consideren necesarios para fijar y apreciar debidamente los hechos.

Terminada la instrucción del expediente general, se dictará auto definitivo en el del respectivo arciprestazgo, y se remitirá todo en la forma establecida al Ministerio de Gracia y Justicia, acompañando, dividido convenientemente por arciprestazgos, un cuadro sinóptico arreglado al modelo que acompaña á este decreto.

Art. 4.º No siendo inflexibles por la índole y naturaleza propias de la materia, según expresamente se establece en la última parte del preámbulo de la Real

célula de 3 de Enero de 1854, ninguna de las bases consignadas en ella, se declara que la excepción contenida en la base 25 no se refiere únicamente á la imposibilidad material de ejecutar la regla general, sino que basta para ello que intervenga causa ó razón poderosa de interés de la Iglesia y del Estado, ó el mejor servicio de una y otro; si bien deberá expresarse en el plan de este fundamento para que mi Gobierno pueda apreciarlo, y proceder debidamente en su caso antes de prestar su acuerdo para la ejecución del plan, como previene el mismo Concordato, y que á su virtud se expida la Real célula auxilioria.

Art. 5.<sup>o</sup> En cada parroquia habrá un solo cura propio, según el espíritu general del Concordato; y especialmente de su art. 25. El número que actualmente excediese pasará en la misma calidad de curas propios á las parroquias que en aquel territorio se erijan, ó bien á otras de igual categoría, con su anuencia á propuesta del ordinario.

Si no hubiere iglesia proporcionada en que pueda instalarse desde luego la nueva parroquia, y que por consiguiente sea necesario edificarla, ó hacer obras de consideración en la designada en el plan, las funciones parroquiales se verificarán en la contigua parroquia; pero en el territorio señalado á cada una de ellas ejercerá su jurisdicción el cura propio que designe el diocesano, quien dictará las medidas oportunas para que no se embaracen mutuamente los actos parroquiales hasta tanto que se efectúe la edificación de la iglesia, y en su caso dichas obras extraordinarias.

Art. 6.<sup>o</sup> Para establecer nuevas ayudas de parroquia, ó trasladar las que no estén convenientemente situadas, se procurará utilizar, en cuanto sea posible, las ermitas, oratorios públicos y santuarios. Si alguna de estas iglesias tuviere renta propia, cualquiera que sea su origen, se erigirá beneficio coadjutorial de libre nombramiento ó de patronato particular, según su respectivo caso, sin perjuicio del eclesiástico encargado actualmente de su servicio.

Art. 7.<sup>o</sup> Cuando el tipo del cuadro de la base 6.<sup>a</sup> no excediere de 500 almas en el primer grado de la escala, de 1 000 en el siguiente, y de 1 500 en los restantes, se designará el número de parroquias con arreglo al grado inferior inmediato, no debiendo bajar ninguna parroquia, á ser posible, de 2 000 almas en población aglomerada en que hubiere más de una.

Si en el cuadro de la base 19 que fija el número de coadjutores, no excediese el tipo de 50 almas en el primer grado de la escala en que no se da coadjutor, de 100 en los tres siguientes, y de 200 en los restantes grados allí especificados, se designará el número de coadjutores con arreglo al grado inferior inmediato.

Art. 8.<sup>o</sup> Las parroquias que por pertenecer alternativamente á diversas diócesis se llaman mixtas, no corresponderán en adelante más que á aquella en cuyo territorio estén situados los pueblos, y por consiguiente se comprenderán en el plan de esta última diócesis.

De la misma manera los habitantes habituales en el territorio de una parro-

quia serán necesariamente feligreses de ella, declarándose abolida la costumbre ó práctica de elegir parroquia los feligreses.

Art. 9.<sup>o</sup> Las capellanías residenciales, cualquiera que sea su patronato, que tengan inherente la obligación de asistir al confesonario, prestar otros servicios en la parroquia y auxiliar en su caso al párroco, se considerarán beneficios coadjutoriales.

Art. 10. Los beneficios simples ó residenciales, aunque sean de patronato particular y no tengan cargo de auxiliar al párroco, se considerarán coadjutorías de la parroquia en que estén erigidos, cualquiera que sea su número, aunque exceda éste del que correspondería á la parroquia, según la base 19.

Cuando los obtenedores de estos beneficios de patronato particular no formen corporación, ni exceda su número del que corresponda á la parroquia en que estén erigidos, y no sea suficiente la dote patrimonial, el Estado, si no fuese aplicable al caso la disposición del art. 14 del presente decreto, completará su dotación sin exceder del importe correspondiente al número de coadjutores que, según dichas reglas y base, toque á la parroquia.

Art. 11. Atendiendo á las especiales circunstancias que en ellos concurren, los beneficiados que componen las actuales comunidades de las diócesis de la antigua Corona de Aragón, cualquiera que sea su denominación y patronato, se considerarán coadjutores sin dotación alguna á cargo del presupuesto eclesiástico, y sin que estas corporaciones, que en adelante se titularán *Comunidades de beneficiados coadjutores*, coarten en lo más mínimo la autoridad y facultades del párroco.

Los diocesanos reorganizarán y reformarán, según lo estimen más conveniente para el mejor servicio de las iglesias parroquiales, estas comunidades, y les impondrán, además de las propiamente coadjutoriales, todas las otras obligaciones que se crean oportunas para el mayor esplendor del culto á que los pueblos estaban anteriormente acostumbrados, estableciendo por último los turnos que tal vez puedan corresponder á los patronos particulares y al prelado para la presentación ó nombramiento de estos coadjutores con todo lo demás que bajo cualquier concepto procediere ó fuere necesario, sin perjuicio de los actuales beneficiados en cuanto ser pueda.

Art. 12. Teniendo también presente que existen asimismo particulares circunstancias en las Provincias Vascongadas, la índole y naturaleza de los cabildos parroquiales y de sus beneficios, se instruirá el oportuno expediente á fin de acordar con el reverendo obispo de la diócesis de Vitoria las medidas conducentes al arreglo parroquial en la posible consonancia con la letra y espíritu del Concordato.

Art. 13. Los beneficiados que se designen para las parroquias que han sido verdaderas colegiadas, según los términos precisos del número 8 de las prevenciones de la Real cédula de 3 de Enero de 1854, que pueden tener beneficiados además de los coadjutores, se considerarán aquellos auxiliares del párroco; y por consiguiente para fijar el número de coadjutores y beneficiados, se atenderá,



no tanto al número de almas de la parroquia, cuanto á las respectivas circunstancias de la población.

Art. 14. Para que los patronos particulares que lo sean por dotación y fundación conserven el derecho á presentar, tanto los curatos como las coadjutorías, deberán hacer efectiva la dotación señalada en el plan á la respectiva pieza, entregando inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada del 3 por 100 por su valor nominal, en cuyo caso corresponderán en calidad de libres á los mismos patronos los bienes en que consista la dote patronal, tomándose en cuenta la parte ó cantidad que por razón de carga eclesiástica á favor de la parroquia se hubiese descontado en la indemnización hecha al partícipe lego en diezmos, y el importe de la renta anual de los bienes del beneficio, si de algunos se hubiese incautado el Estado.

Art. 15. Si el patrono no se conformase con la providencia gubernativa del diocesano, se interpondrá ante el Tribunal eclesiástico competente, por el fiscal de la diócesis, la oportuna demanda, á fin de que esto tenga debido efecto, ó caso contrario se declare la libertad y se reduzca el beneficio al derecho común, conservando en el ínterin al patrono el estado legal posesorio, conforme á lo dispuesto en el R. D. de 21 de Octubre de 1864, publicado en circular de 23 del propio mes y año.

Art. 16. En los expedientes que se incoaron en los Tribunales eclesiásticos para la provisión de curatos y beneficios con cura de almas de patronato laical, se presentarán por los interesados los documentos que acrediten la legitimidad y su derecho de presentar para que, teniendo el Tribunal en consideración lo dispuesto en el cap. IX sesión 25 *De reformatione* del Concilio de Trento, y otras disposiciones legales, determinen lo que proceda en justicia si los interesados no se aquietan con la decisión gubernativa dictada previamente por el diocesano.

Art. 17. Disponiendo, por regla general, el art. 26 del Concordato, que los curatos se provean por la Corona en la forma que allí se expresa, y considerando que la excepción á favor del patronato laical contenida en el pár. 2.º del propio artículo, es únicamente aplicable á las familias particulares fundadoras ó poseedoras del patronato, se declara que la presentación para los curatos y beneficios curados que pertenecían á los establecimientos de beneficencia é instrucción pública, Ayuntamientos y común de vecinos de los pueblos, corresponde en adelante á la Corona en la forma expresada.

Art. 18. Mediante no estar expresamente reservado por el Concordato á los patronos particulares el derecho de presentar para los beneficios coadjutoriales, y á que en el último párrafo del art. 26 del propio Concordato se determina que estos cargos parroquiales se provean por los ordinarios, previo examen sinodal; y siendo conveniente poner en armonía, en cuanto ser pueda, este punto importante con lo más fundamental, dispuesto en el propio art. 26 del Concordato, se declara: primero, que procede la celebración de exámenes periódicos en la época que estimen más conveniente los diocesanos; segundo, convocar por éstos, al intento, á

todos los que aspiren á dichos cargos; y tercero, nombrar libremente los ordinarios para aquellos beneficios que no pertenezcan al patronato particular, dirigiendo terna en otro caso á los patronos para que de ella elijan y presenten el que sea de su agrado.

Art. 19. En lo referente á la presentación de curatos de patronato laical, se observará la Real orden de 28 de Mayo de 1864, dictada con acuerdo del muy reverendo Nuncio apostólico, entendiéndose que dentro de los cuatro meses que prefija el Concordato el diocesano adoptará las medidas convenientes para el examen presentado, sin que en otro caso pueda perjudicarle el trascurso de dicho término, salvo siempre el derecho del mismo ordinario de examinarle si lo estima conveniente, con arreglo á lo dispuesto en el citado art. 26 del Concordato.

Art. 20. Para que pueda servir de regla y fundamento á los diocesanos, y á su vez á mi Gobierno, en la designación de las dotaciones personales de los párrocos y de los coadjutores, según la diversidad de los países y de los pueblos de cada diócesis, fijando de la manera menos vaga que sea posible la inteligencia y sistema de la base 21 de la Real cédula y lo dispuesto en el Concordato, se divide el territorio de las diócesis en dos secciones. Comprenderá la primera las diócesis sitas en las provincias de Andalucía, Extremadura, Valencia, Murcia, Cataluña y Aragón, excepto la parte de montaña y la menos fértil de su respectivo territorio; la segunda las diócesis de ambas Castillas, Galicia, Provincias Vascongadas y Navarra, islas Baleares y Canarias, con las demás diócesis contenidas en la excepción de la sección primera. Los tipos serán: para los curatos de término, el mínimum 6.000 rs., el máximium 10.000 y el término medio 8.000; para los de ascenso, mínimum 4.500 y 5.000 rs.: máximium 6.000 y término medio 5.500; para los de entrada mínimum 3.300, máximium 5.000 y término medio 4.000; para los rurales de primera clase, 3.000 y 3.300 mínimum, 4.000 máximium y término medio 3.600; y para los de segunda clase 2.500 y 3.300. Para los Coadjutores 2.000 el mínimum, 4.000 el máximium y 3.000 el término medio; pero sin embargo, dentro de los tipos de cada una de dichas clases podrá constituirse dotación en cifra redonda.

Las dotaciones que se señalen en el respectivo plan de arreglo se considerarán provisionales hasta tanto que, con arreglo á la mente del art. 36 del Concordato y del 18 del Convenio adicional de 25 de Agosto de 1859, puedan constituirse definitivamente. Esto no obstante, cuando la situación económica del país lo permita, los diocesanos podrán proponer al Gobierno, en casos dados, durante el período en esta parte provisional ó transitorio, el aumento individual que conceptúen conveniente dentro del límite establecido en el art. 33 del Concordato.

Los ecónomos tendrán las dotaciones siguientes: primero, los de curatos rurales de ambas clases y urbanos de entrada, el mínimum respectivo; segundo, los de ascenso y término, lo que al tiempo de hacer su nombramiento señale el diocesano, con tal que no exceda de las dos terceras partes del mínimum, ni baje tampoco de 3.300 reales, señalados á los ecónomos en curato de entrada; y tercero, los

de coadjutores y de beneficios, el *mínimum* ó término medio; según las circunstancias, á juicio del diocesano.

Art. 21. Cuando por sus padecimientos habituales ó por su avanzada edad se imposibilitare un párroco ó coadjutor con canónica institución para el ministerio parroquial, el diocesano instruirá el oportuno expediente canónico para su jubilación.

La pensión que se señale al jubilado en el expediente, que original ha de remitirse al Ministerio de Gracia y Justicia para obtener mi real asenso, no podrá exceder según las circunstancias y servicios del interesado, de la mitad del *máximum* en los curatos de término, de las tres quintas partes en los de ascenso, y de las dos terceras en los demás urbanos y rurales. El sucesor en el curato disfrutará provisionalmente, mientras subsista la pensión, el término medio señalado á la respectiva clase.

Los que á la expedición de la Real cédula auxiliaria para el arreglo de las parroquias estén ya jubilados, con arreglo á la circular de 13 de Octubre de 1864, continuarán en el uso y disfrute de lo que les esté asignado.

Art. 22. Las dotaciones para el culto y clero prefijadas en el arreglo parroquial se consignarán íntegramente en el presupuesto eclesiástico, entendiéndose el Ministerio respectivo con los Ayuntamientos acerca de las pensiones ó asignaciones que satisfacían anteriormente las mismas corporaciones á los párrocos ó fábricas.

Art. 23. Los Ayuntamientos de los pueblos podrán comprender entre sus gastos voluntarios la cantidad que estimen conveniente á favor de la fábrica de su parroquia respectiva para que el culto pueda darse con más esplendor que el que podría ser con la consignación del presupuesto, expidiéndose al intento por el Ministerio de la Gobernación las órdenes correspondientes.

Art. 24. Las cofradías y hermandades establecidas en las parroquias deberán contribuir con la cantidad anual que las mismas convengan con la respectiva Junta de fábrica á fin de aumentar la consignación presupuestada en el plan de arreglo parroquial para los gastos del culto.

Art. 25. A fin de que haya la conveniente homogeneidad en tan importante materia se establecerán bases generales para la organización de las hermandades y cofradías, dejando para el reglamento propio y peculiar del diocesano su aplicación y todo lo correspondiente á la localidad.

Art. 26. También se establecerán bases generales para la organización de las Juntas de fábrica, sus facultades y atribuciones, sin embarazar la acción propia del párroco, dejando igualmente para el reglamento peculiar del diocesano todo lo referente á su ejecución y á la localidad.

Art. 27. Hasta tanto que se publiquen las bases generales á que se refieren los dos artículos precedentes, se observarán; primero, las constituciones y estatutos de las cofradías y hermandades, y las medidas adoptadas por el diocesano y aprobadas por mí; segundo, los reglamentos é instrucciones que, en uso de sus facul-

tades y en observancia de la base 22 de la Real cédula de 3 de Enero de 1854, hayan adoptado ó adoptaren hasta entonces los ordinarios.

Art. 28. A fin de facilitar desde un principio la ejecución gradual y el tránsito del estado actual al definitivo normal que se crea por el plan parroquial, procurando conciliar todos los intereses, se observarán las siguientes disposiciones transitorias:

1.<sup>a</sup> Luego que el diocesano reciba la Real cédula auxiliatoria, dispondrá la publicación del plan parroquial en el modo y forma que estime más conveniente y oportuno.

2.<sup>a</sup> Señalará el día desde el cual han de tener efecto las segregaciones y agregaciones acordadas de feligreses de parroquia matriz ó filial á otras ya existentes.

3.<sup>a</sup> Erigidas debidamente las parroquias que se crearen de nuevo, prefijará el día de su instalación, dispondrá oportunamente todo lo necesario al intento cuando exista iglesia proporcionada; y si los gastos no fuesen considerables, formará el presupuesto correspondiente que remitirá al Ministerio para su aprobación, y que puedan facilitarse los fondos, no haciéndose novedad en el ínterin. Tampoco se hará novedad siempre que sea necesario construir iglesia ó hacer gasto considerable, para acomodar el templo existente á dicho objeto; y dictándose para el primer caso desde luego las medidas que se conceptúen conducentes, se suspenderá todo lo demás, continuando las cosas en su estado actual hasta tanto que se acuerden por el Gobierno, según se dirá más adelante, los medios de atender á esta sagrada obligación, y que pueda realizarse convenientemente la instalación de la nueva parroquia ó su ayuda.

4.<sup>a</sup> Los poseedores de los curatos cuya actual dotación se reduzca por el plan parroquial continuarán percibiendo aquella mientras sirvan los propios curatos ó otros menos dotados.

5.<sup>a</sup> De la misma manera los curas actuales no percibirán tampoco el aumento dado á su respectivo curato, ya haya sido elevada la categoría del curato, ó meramente la dotación del párroco.

6.<sup>a</sup> En los curatos que á la publicación de la Real cédula auxiliatoria hayan de proveerse, disfrutarán los párrocos desde el día en que se posesione la dotación consignada por el plan, y los prelados podrán anunciar desde luego los nuevos concursos sin necesidad de dar al Gobierno el previo conocimiento que dispone la R. O. de 10 de Agosto del año próximo pasado, y que es aplicable únicamente hasta dicha época para regularizar la contabilidad del Ministerio; y aun en este último caso la nota que debe acompañarse, sólo comprenderá los curatos no indicados en las dadas con posterioridad á la mencionada circular de 10 de Agosto. Por consiguiente, en los edictos convocatorios para concurso, fijará ya el diocesano la dotación y categoría prefijadas en el plan mandado ejecutar, y en su caso la establecida en la nota anteriormente remitida al Ministerio después de dicho día 10 de Agosto.

7.<sup>a</sup> Si el diocesano lo considerase justo ó conveniente, podrá proponer, sin ne-

cesidad de nuevo concurso, para curato de igual clase, á aquellos curas que desciendan en categoría por el plan parroquial.

8.º La consignación para gastos del culto tendrá efecto desde el año económico siguiente á la publicación del mismo plan parroquial en la respectiva diócesis.

9.º Luego que se publique el plan parroquial, el diocesano dictará las disposiciones convenientes para que por el respectivo arcipreste se noticie á los Ayuntamientos lo dispuesto en el art. 23 por si quieren hacer uso del derecho que allí se consigna.

10. También dispondrá el diocesano lo correspondiente para que por los propios arciprestes se déen las instrucciones debidas para que las cofradías y hermandades contribuyan á los gastos generales del culto de la respectiva parroquia.

11. El Ministerio de Gracia y Justicia procurará que por la ley de presupuestos, las cantidades á que por efecto de muerte ú otra causa se reduzca anualmente el crédito consignado en el art. 6.º, cap. XVI, para el clero benefical, y en el único del XVIII para el personal de religiosas en clausura, pasen íntegramente al presupuesto parroquial para establecer progresivamente los coadjutores, y aumentar la dotación de los curas rurales y urbanos de entrada, y por último, las demás dotaciones del clero parroquial en su respectiva clase y categoría, al tenor del nuevo plan parroquial.

Además en los presupuestos que se formen para el primer año económico siguiente á la expedición de la Real cédula auxilioria, para una diócesis no se hará en el art. 5.º del cap. XII la baja calculada por vacantes en la parte correspondiente á dicha diócesis, y la cantidad á que ascendieren las vacantes ingresará en el fondo de reserva, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2.º del art. 37 del Concordato; y se ruega y encarga á los prelados destinen de esta parte del fondo de reserva, mientras duren las actuales circunstancias, alguna cantidad para atender á las pensiones de los párrocos y coadjutores que desde aquella época se jubilaren, hasta tanto que por el Tesoro puedan satisfacerse íntegramente.

12. Además de esto se consignará también anualmente una cantidad en el presupuesto eclesiástico para establecer los coadjutores que urja aumentar hasta el completo número que se prefijare en el plan.

Art. 29. A medida que terminen los planes de un cierto número de diócesis, se formará un estado exacto y el cálculo de las cantidades necesarias: primero, para construir nuevas parroquias matrices ó filiales donde fueren indispensables; segundo, para acomodar á este mismo objeto las iglesias de otra clase existentes; y tercero, para atender á la reparación extraordinaria de iglesias y edificios de toda clase pertenecientes en las mismas diócesis al clero parroquial, cuya obligación pesa sobre el Estado. El Gobierno, con presencia del resultado de este cuadro, acordará los medios conducentes á fin de obtener el capital necesario para hacer gradualmente dichas obras, y satisfacer tan sagradas obligaciones con puntualidad y de manera que las obras se ejecuten sin interrupción y en el menor tiempo posible.



Art. 30. Se derogan todas las disposiciones de la Real cédula de 3 de Enero de 1854 que sean contrarias al presente decreto, quedando subsistentes todas las demás.

Se derogan igualmente, en cuanto se opongan á este mismo decreto, y en su caso á aquella Real cédula, las Rs. Ords. de 3 de Setiembre del propio año, de 12 de Abril, 6 de Agosto, 8 y 15 de Diciembre de 1855 y 3 de Mayo del siguiente, y cualquiera otra anterior ó posterior que pudiera embarazar el arreglo parroquial.

Art. 31. En inteligencia con el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, se darán las instrucciones necesarias, se resolverán las dudas, y se removerán los obstáculos que para la ejecución de las presentes disposiciones se ofrecieren.— Dado en Palacio á 15 de Febrero de 1867.—Está rubricado de la Real mano.— El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

## Colegiatas.

R. O. DE 18 DE OCTUBRE DE 1852.

S. M. la Reina, conformándose con lo que de acuerdo con el muy reverendo Nuncio apostólico, he tenido la honra de proponerle, se ha servido disponer lo siguiente:

1.º Los ordinarios, tomando los datos y noticias correspondientes, decidirán si existen ó no impedimentos locales para que las iglesias de las colegiatas, que dejan de existir como tales, continúen en concepto de parroquias si ya lo fueren, ó se erijan de nuevo en otro caso, sin perjuicio de lo que en el respectivo plan benefical se determine definitivamente.

2.º Si no procediere la continuación ó erección de la parroquia, se limitarán los ordinarios exclusivamente á dictar las medidas oportunas á fin de que se dé el culto conveniente, hasta tanto que en el plan benefical se decida canónicamente lo que corresponda, utilizando los diocesanos, en lo posible, los eclesiásticos, aptos de la misma iglesia que no hayan tenido colocación en el arreglo de las catedrales y colegiales, y respetando los derechos adquiridos.

3.º Caso de continuar la parroquia, permanecerá al frente de ella el párroco que tuviere el cargo, conservando sus actuales consideraciones. Los demás eclesiásticos existentes todavía en las mismas iglesias por no haber tenido colocación, desempeñarán, gozando sus actuales consideraciones, las funciones que respectivamente ejercen hoy. Estando vacante el cargo de párroco, haya ó nó el número de coadjutores y beneficiados que se determina en la regla quinta, se nombrarán ecónomos, poniéndose en noticia del Gobierno los nombramientos que hicieren los ordinarios, al efecto de comprenderlos en el presupuesto.

4.º Todos los eclesiásticos á quienes se refieren las dos disposiciones últimas disfrutarán la dotación que hoy les está señalada. Los curas ecónomos existentes

ó que se nombren á virtud de lo dispuesto en la regla anterior, disfrutarán 2.000 rs. en las parroquias rurales de segunda clase; 2.500 en las de primera; 3.000 en las urbanas de entrada y primer ascenso; 3.500 en las de segundo ascenso y 4.000 en las de término; pero si fuere menor la dotación señalada en el día, gozarán solamente este haber los ecónomos que se nombren. Para los ecónomos de los beneficios serán 2.000 rs. el mínimo, y el máximo los 3.000 que el Concordato señala para los beneficiados de las colegiats.

5.º El número de coadjutores no excederá de uno por cada 800 almas. Los beneficiados no excederán tampoco del número que para las colegiats designa el art. 22 del Concordato.

6.º Los ministros inferiores y los dependientes que tenían consignada su dotación sobre gastos del culto continuarán percibiendo aquella misma dotación hasta que fallezcan ó obtengan otra colocación, pero estarán obligados á prestar en la parroquia igual servicio que en la colegiata, si procediese.

7.º La consignación actual que para gastos del culto corresponda á la colegiata se reducirá á dos terceras partes á lo más cuando la iglesia haya de subsistir en adelante como parroquia. En otro caso el diocesano señalará la cantidad indispensable para que se atienda á los gastos de dicha clase, hasta tanto que en el plan parroquial se decida definitivamente la suerte de la iglesia.

8.º Los actuales presidentes de los cabildos colegiales, con la persona que designe el diocesano del territorio á qué pertenezca ó en que esté enclavada la colegiata, formarán inventario de los vasos sagrados, de los efectos de toda clase, y de las propiedades que correspondan á la colegiata, expresando el producto en renta, y las cargas civiles y eclesiásticas que pesen sobre los bienes.

9.º El producto de dichos bienes se aplicará preferentemente al pago de las dotaciones del clero y gastos del culto de la parroquia, pasando el sobrante á la masa común para atender á las obligaciones eclesiásticas de la respectiva diócesis, de lo que se dará conocimiento al diocesano.

10. Se reservarán á la parroquia los vasos sagrados, ornamentos y efectos que en ella puedan ser útiles, disponiéndose en su día por los ordinarios lo conveniente al intento.

11. Las cargas eclesiásticas de misas, aniversarios y festividades, fundadas en las colegiats, se cumplirán cuanto sea posible en las parroquias á que las mismas iglesias queden reducidas, disponiendo en todo caso los diocesanos lo que acerca de este particular proceda con arreglo á los cánones.

---

## Sobre jubilación de los párrocos.

CIRCULAR DE 20 DE FEBRERO DE 1889.

Habiendo notado este Ministerio la frecuencia con que se confunden, en los expedientes de jubilación de Párrocos, las disposiciones legales que deben tenerse presentes al dictar los autos definitivos, según procedan éstos de Párrocos que hayan realzado ya el arreglo parroquial de su diócesis, ó de los que aún no la han llevado á efecto; y deseando evitar en lo sucesivo dicha confusión, que origina dificultades para la aprobación de los mismos y entorpece su tramitación, que por su índole debe ser rápida y expedita, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se diga á V. S. I. que el Real decreto concordado de 15 de Febrero de 1867, cuyas prescripciones no son más que las bases que han de tener en cuenta los Diocesanos al formular el plan parroquial, sólo puede regir, por consiguiente, en las diócesis que han pasado por el mismo, habiéndolo además resuelto en este sentido la Real orden de 6 de Marzo de 1868, dictada con motivo de consulta sobre el particular del Reverendísimo Obispo de Pamplona. A las disposiciones del citado decreto deberán, por lo tanto, ajustarse los autos definitivos en las diócesis que han cumplido lo dispuesto en el art. 24 del Concordato vigente.

Respecto á los expedientes de jubilación de Párrocos que proceden de Diócesis en las que aún no ha tenido lugar el arreglo parroquial, deberán formarse con sujeción á lo dispuesto en las Reales órdenes de 30 de Abril de 1852 y 13 de Octubre de 1864; y en todos ellos, sea su origen de unas ó otras Diócesis de las expresadas, se consignará la categoría y dotación del Párroco solicitante y la cantidad que como pensión se le señale, sin dejar de expresar la parte que le corresponda en los derechos de estola y pie de altar y disfrute de casa rectoral y huerto, si lo hubiere, observándose análogo procedimiento y con igual detalle en cuanto á dotación y derechos que deben gozar, en su caso, el Coadjutor *ad nutum* que se nombre.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo digo á V. S. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. I. muchos años.—Madrid 20 de Febrero de 1889.—El Subsecretario, Diego Arias de Miranda.

R. O. DE 30 DE ABRIL DE 1852.

S. M... se ha servido acordar que... se observen las reglas siguientes:

1.<sup>a</sup> Los muy reverendos arzobispos, reverendos obispos y vicarios capitulares, Sede vacante, luego que llegue á su noticia hallarse imposibilitado habitualmente algún párroco de su respectiva diócesis, instruirán sobre ello el oportuno expe-

diente canónico; y resultando bastante, acreditada la imposibilidad, lo declararán así y elevarán el expediente al Ministerio de mi cargo á los efectos correspondientes, manifestando la necesidad del nombramiento de un coadjutor *ad nutum*.

2.<sup>a</sup> En estos expedientes designarán los diocesanos la dotación que conceptúen conveniente para los coadjutores con presencia de lo determinado en el pár. 2.<sup>o</sup>, artículo 33 del Concordato, y estimando comprendidos á los coadjutores de parroquia rural de segunda clase en lo que sobre dotación de los ecónomos de las mismas se dispone en el art. 5.<sup>o</sup> del R. D. de 29 de Noviembre último.

3.<sup>a</sup> También determinarán los ordinarios la parte de asignación que los párrocos deban conservar y la correspondiente en los derechos atribuidos á esta clase en el pár. 4.<sup>o</sup> del art. 33 del Concordato.

4.<sup>a</sup> Para el efecto prescrito en la disposición anterior, deberá considerarse como máximo en los curatos urbanos la mitad; en los rurales de primera clase las dos terceras partes, y en los de segunda las cuatro quintas partes de la asignación que á la fecha en que se declare la imposibilidad por los diocesanos corresponda respectivamente al curato, y esté disfrutando el párroco imposibilitado, conforme á los arts. 4.<sup>o</sup> y 5.<sup>o</sup> de la citada circular, ó según el Concordato, verificados los casos en aquéllos previstos.

5.<sup>a</sup> Resuelto por S. M. lo que corresponda, ó desde luego, si la urgencia del caso lo requiere, nombrarán los diocesanos el coadjutor, procurando dar preferencia á los presbíteros exclaustros en igualdad de circunstancias.

6.<sup>a</sup> A estas disposiciones se ajustarán y arreglarán para el percibo de sus asignaciones, todos los coadjutores *ad nutum* actualmente nombrados y los párrocos á quienes auxilian.

7.<sup>a</sup> La pensión que se consigne á los párrocos imposibilitados, se satisfará con cargo á la dotación correspondiente al curato, ingresando en el fondo de reserva la parte de aquella que deje de percibir. La consignación del coadjutor se satisfará con la parte de la renta del curato que ingrese en el fondo de reserva; y si ésta no bastare, se abonará lo que falte por cuenta del imprevisto general del culto y clero.

8.<sup>a</sup> Disfrutarán además los párrocos propietarios los huertos, casa ó heredades conocidos con el nombre de iglesias, mansos ú otros que no hayan sido enajenados.

9.<sup>a</sup> En lo sucesivo no se elevará á la aprobación Real, como hasta aquí, expediente alguno para conceder jubilación á los párrocos, debiendo practicarse únicamente las reglas contenidas en esta circular.

R. O. DE 13 DE OCTUBRE DE 1864.

Con esta fecha digo al ordenador general de pagos de este Ministerio lo siguiente:

«Deseando el Gobierno de S. M. conciliar los intereses del Tesoro con los del clero parroquial cuando algunos de sus ministros se imposibilitaran para el servicio, oída la Cámara eclesiástica, y de acuerdo con el muy reverendo Nuncio apostólico, expidió la R. O. de 30 de Abril de 1852, en la cual se establecieron varias disposiciones para la instrucción de los expedientes canónicos y señalamiento de las asignaciones que respectivamente deberían disfrutar los párrocos imposibilitados, según sus diversas categorías, y las que en su caso hubiesen de percibir los coadjutores *ad nutum* que en sustitución de aquéllos debían levantar las cargas anejas á sus respectivas feligresías. Esta disposición en bien de los párrocos ancianos é imposibilitados, fué cuanto por entonces pudo hacerse en beneficio de una clase tan benemérita, supuesta la escasez del Erario; pero no era suficiente á sacar de su situación precaria á los eclesiásticos que después de muchos años de servicios, é imposibilitados ya para prestarlos, carecían, cuando sus necesidades se aumentaban con la vejez y las enfermedades, de los recursos indispensables para su decorosa manutención. El Gobierno de S. M. lo conocía y lo deploraba, y ansiaba por lo mismo el momento en que, llevándose á ejecución el definitivo arreglo parroquial se fijara de una manera estable la categoría de las iglesias, y con arreglo á ella se mejorase también la situación de los párrocos imposibilitados. Por causas ajenas á la voluntad del Gobierno, no ha podido aún realizarse el propósito indicado; pero reconociendo las Cortes con la Corona que no debía prolongarse por más tiempo una reforma que sacase, por de pronto, de su angustiosa situación á los eclesiásticos referidos, consignaron en la ley de presupuestos, que está en ejercicio, la cantidad de 400.000 reales con destino al aumento de las dotaciones que vienen disfrutando los párrocos jubilados con anterioridad á la publicación del Concordato y los declarados posteriormente imposibilitados, conforme á las reglas establecidas en la R. O. de 30 de Abril de 1852. Solícita como siempre S. M. (Q. D. G.), y deseando no se dilate en manera alguna la ejecución de una medida que debe llevar el consuelo á gran número de eclesiásticos merecedores, por sus servicios, de toda consideración, se ha dignado resolver:

Artículo 1.º Los actuales curas párrocos jubilados y los imposibilitados física ó moralmente que hubiesen desempeñado en propiedad curatos de término y de segundo ascenso, disfrutarán en lo sucesivo y á contar desde esta fecha las dos terceras partes de sus respectivas dotaciones. Los párrocos de primer ascenso, entrada y rurales de primera y segunda clase, percibirán asimismo las cuatro quintas partes de los sueldos señalados á dichas categorías.

Art. 2.º Además de las dotaciones que se conceden á los párrocos en el artículo anterior, continuarán disfrutando de la parte que los prelados les hubiesen



señalado en los derechos eventuales de estola y pié de altar, y de las casas rectorales, huertos y heredades conocidas con el nombre de iglesarios, mansos ú otros donde los hubiese, según está prevenido en la R. O. de 30 de Abril de 1852.

Art. 3.º Queda vigente la citada Real orden en cuanto no se oponga á las anteriores disposiciones. Lo que de la propia Real orden, etc.—Madrid 13 de Octubre de 1864 — Arrazola.

## NÚMERO 9.º

### Sobre provisión de Curatos de patronato laical

R. O. DE 21 DE JUNIO DE 1852.

Artículo 1.º El art. 26 del Concordato en lo que dispone respecto á la provisión de curatos de patronato laical, no se llevará á efecto hasta 1.º de Julio de 1853, guardándose entre tanto lo prescrito con anterioridad á la época de su publicación.

Art. 2.º Desde dicha fecha en adelante deberán recaer las presentaciones de los patronos legos en individuos cuyos actos de oposición hayan sido aprobados en concurso abierto en la diócesis respectiva.

Art. 3.º Sin embargo, si los patronos legos presentan algún individuo que carezca de aquel requisito, se señalará al presentado el término de cuatro meses para que haga constar haber sido aprobados sus ejercicios, hechos en la forma indicada, en concurso particular, que el diocesano podrá convocar para todos los que quieran habilitarse á fin de aspirar á curatos de patronato laical, salvo siempre lo que dispone el Concordato respecto al derecho del ordinario, de examinar al presentado cuando lo estime conveniente.

Art. 4.º Para la provisión de los curatos de patronato mixto, desde el día 1.º de Julio de 1853 en adelante, se aplicará como más favorable al derecho de presentación lo que en dicho art. 26 del Concordato se establece respecto á los curatos de patronato laical, si la presentación corresponde simultáneamente á ambos patronatos.

Cuando ésta les pertenezca alternativamente, ó por turno, se considerará el patronato, ya como puramente eclesiástico, ya como puramente laical para la fijación de la regla que deba aplicarse en cada caso, según que el patrono á que toque la presentación aquella vez, sea eclesiástico ó lego.

R. O. DE 15 DE OCTUBRE DE 1862.

Por el Ministerio de la Gobernación se ha comunicado á este de Gracia y Justicia la Real orden siguiente:

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación dijo al Gobernador de Madrid, en 10 de Agosto del año pasado de 1860, lo siguiente:

En vista de la comunicación de V. E. de 12 de Noviembre último, manifestando la conveniencia de modificar el art. 1.º de la Real orden de 20 de Marzo de 1857, por la cual se determinó el modo de sustituir á los patronos de memorias y obras pías, cuando este cargo hubiese sido confiado á comunidades eclesiásticas, suprimidas en la actualidad, ó individuos de las mismas comunidades, la Reina (Q. D. G.) se ha dignado resolver: que cuando las fundaciones sean de carácter puramente civil, se cedan en el patronato de las mismas, á las comunidades y cargos eclesiásticos suprimidos, los gobernadores de las provincias como delegados del Gobierno; y que el propio patronato sea ejercido por los prelados de las diócesis respectivas cuando las expensas fundaciones tengan por objeto el cumplimiento de cargas espirituales.

R. O. DE 28 DE MAYO DE 1864.

Los términos en que está concebido el párrafo 2.º del art. 26 del Concordato vigente, al exigir las pruebas de suficiencia que debe acreditar el presentado para un beneficio curado de patronato laical, han dado lugar á interpretaciones distintas, que conviene uniformar por medio de la correspondiente aclaración.

A este fin S. M. la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, se ha servido declarar:

1.º Que la idoneidad del presentado debe haberse probado en concurso abierto, bien en la diócesis de su domicilio, bien en la del beneficio que ha de residir.

2.º Que no estando aprobado previamente en concurso abierto en una de las dos diócesis indicadas, se celebrará un concurso especial para que el presentado acredite su suficiencia, dentro de los cuatro meses que prefiija el Concordato, en la diócesis en que el curato esté constituido.

Y 3.º Que las anteriores aclaraciones se entienden siempre según establece el mismo Concordato, salvo el derecho del ordinario de examinar al presentado por el patrono si lo estima conveniente.—De Real orden, etc.—Madrid 28 de Mayo de 1864.—Mayans.—Sr. Obispo de....

R. D. DE 21 (23) DE OCTUBRE DE 1864.

Ilmo. Sr.: la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien expedir el Real decreto siguiente:

Conformándome con lo que, de acuerdo con el muy reverendo Nuncio de Su

Santidad, me ha propuesto mi Ministro de Gracia y Justicia, encaminado á remover los obstáculos á que haya podido dar ocasión lo dispuesto en la R. O. de 24 de Octubre de 1861; y á fin también de facilitar cuanto sea posible la pronta terminación de los expedientes para la provisión de los curatos y beneficios con cura de almas de patronato laical; reservándome acordar oportuna y convenientemente lo que proceda, tanto para la más exacta ejecución y cumplimiento de todo lo dispuesto en el Concordato de 1851, respecto del mencionado patronato y del eclesiástico, y acerca de materias conexas con ellos, como asimismo lo que corresponda á consecuencia de lo dispuesto en la base 26 de mi Real cédula de ruego y encargo de 3 de Enero de 1854 para el arreglo parroquial.

Vengo en decretar:

Artículo 1.º En los expedientes incoados hasta el día, y que en adelante se incoaren en los Tribunales eclesiásticos para la provisión de curatos y beneficios con cura de almas, *de patronato laical*, se hará constar en el modo y forma que se dirá y por quien corresponda si el patronato era partícipe en diezmos y primicias, con obligación de contribuir, en todo ó en parte, para la cóngrua del párroco y de otros encargados del ministerio parroquial ó para otras atenciones de la parroquia. De la misma manera se hará constar también si el todo ó parte de los bienes que fueron de la Iglesia se ha adjudicado al patronato.

Art. 2.º Si por los documentos que con tal propósito debe presentar el patrono constare haberle sido descontado el importe de dichas cargas al fijar su indemnización, ó en otro caso, que no estaba obligado á contribuir con cosa alguna á la parroquia, podrá darse desde luego al presentado la colación canónica, institución y posesión, siempre que concurren las demás circunstancias y requisitos prevenidos por el derecho.

Art. 3.º No acompañando dicho documento, ni constando en su caso no tener obligación el patrono á contribuir, se prevendrá á éste que en el término que el Tribunal estime suficiente presente la conveniente certificación, librada por la Dirección general de la Déuda pública, y que no haciéndolo así, le parará el perjuicio á que haya lugar. Concluido el término sin que el patrono haya cumplido con lo mandado, el Tribunal se dirigirá al Ministro de Gracia y Justicia para que exija de dicha dependencia certificación de lo que sobre e particular conste en el respectivo expediente de indemnización. Trascurrido el término de dos meses, á contar desde el día en que ingrese en el Ministerio la comunicación, cuyo recibo se acusará inmediatamente, sin que el Ministerio hubiere remitido la certificación reclamada de la Hacienda en virtud del estado posesorio del patrono, podrá darse sin más trámite, al presentado la colación canónica, institución y posesión si concurren todas las demás circunstancias y requisitos procedentes, pero sin perjuicio de continuar el expediente eclesiástico hasta decidir por sentencia y para en lo sucesivo sobre el derecho de presentación.

Art. 4.º Cuando conste que el patrono ha recibido íntegramente de la Hacienda la indemnización sin rebajarle el importe de la carga, se ordenará al mismo á

fin de que su presentación pueda surtir efecto, que en el plazo que se le pretijará afiance en forma de derecho, á completa satisfacción del propio Tribunal, pagar anualmente en la época debida y en metálico el importe de la expresada carga; obligándose además á satisfacer á la Hacienda en los términos que con ella convenga lo correspondiente á los años transcurridos desde la fecha en que recibió los efectos públicos para su indemnización, regulándose el valor de los frutos por el que sirvió de tipo para ésta. Al efecto expresado se comunicará á la Hacienda el allanamiento del patrono, con lo demás que sea conducente. La cantidad con que el patrono deberá contribuir anualmente se rebajará del presupuesto de la respectiva parroquia, ingresando los atrasos en el Tesoro. Cuando la obligación del patrono sea parcial é inferior á la cóngrua asignada al curato ó beneficio curado, se completará aquella por el Estado.

Art. 5.º No allanándose el patrono á lo expresado en el artículo anterior, y salvo el caso de excepción del art. 3.º, se declarará extinguido el derecho de presentación, y se procederá á la provisión del curato ó beneficio curado en el modo y forma que previene el párrafo 1.º del art. 26 del Concordato.

Art. 6.º Si no se hubiere resuelto todavía el expediente de indemnización, tal estado no será obstáculo para que en su día se dé al presentado la colación canónica, institución y posesión, con tal de que en el modo y forma prevenida en el artículo 4.º se obligue el patrono á satisfacer desde el día en que tenga efecto la entrega de los títulos de la Deuda en que consista la indemnización el importe á metálico de la carga, regulándose éste prudencialmente, mediante á no existir á la sazón el tipo regulador de los frutos designado en dicho artículo. El Tribunal lo pondrá todo en conocimiento del Ministro de Gracia y Justicia para que haga la prevención conveniente á la Dirección general de la Deuda pública y demás que corresponda, según queda prevenido en el mencionado art. 4.º

Art. 7.º Constando haberse adjudicado al patrono el todo ó parte de los derechos y bienes de la iglesia patronada, se mandará, con la prevención indicada en el art. 3.º, que aquél manifieste en el término que se le señale si se allana ó no á pagar anualmente una cantidad igual á la renta líquida que de adjudicado percibía la parroquia, como asimismo los atrasos, según queda dicho. Si el patrono no quisiere contribuir y afianzar, ó dejare pasar el término sin manifestar su voluntad, se declarará extinguido el derecho de presentación, y se proveerá la vacante según lo dispuesto para otro caso en el art. 5.º Estando pronto el patrono á afianzar el pago sucesivo de la renta anual, y allanándose al de los atrasos según concierto en este caso con la Hacienda pública desde que se incantó de los derechos y bienes hasta el día de la toma de posesión del presentado, se señalará prudencial y equitativamente, con acuerdo del mismo patrono, la cantidad anual y el tiempo y modo de verificar su pago. Cumplido todo lo cual debidamente, y concurriendo las demás circunstancias y requisitos necesarios, se dará al presentado la colación canónica, institución y posesión.

Art. 8.º Para la debida formalidad y defensa de todos los derechos, así como

la parte en su caso, el fiscal del Tribunal eclesiástico será oído siempre en dicho expediente canónico, como asimismo en los trámites é incidentes objeto del presente decreto.

Art. 9.º El Tribunal remitirá al Ministro de Gracia y Justicia testimonio de la providencia definitiva; noticiando asimismo el día en que se dé la posesión al presentado, á fin de que la ordenación general de pagos pueda hacer los asientos debidos y para los demás efectos correspondientes.

Art. 10. Se deroga en todas sus partes la citada R. O. de 23 de Octubre de 1861.

Art. 11. El Ministro de Gracia y Justicia dispondrá lo necesario para que el presente Real decreto, convenido entre una y otra potestad, sea cumplido en todas sus partes.

Dado en Palacio á 21 de Octubre de 1864.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.—De Real órden, etc.—Madrid 23 de Octubre de 1864.—Arrazola.—Sr. Obispo de....

## NÚMERO 10.

### Sobre Capellanías y fundaciones piadosas.

#### CONVENIO-LEY DE 24 DE JUNIO DE 1867.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y de la Constitución de la Monarquía, Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren, sabed:

Que para llevar á debido efecto cuanto en el Concordato de 1851, y Convenio de 1859 se dispone sobre capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole: y para poner un término, con utilidad de la Iglesia, del Estado y de las propias familias interesadas, á las dudas y perjudicial controversia, en esta parte sobrevenida, con ocasión de las leyes y disposiciones dictadas sobre el particular, por el M. R. Nuncio de Su Santidad en esta corte, D. Lorenzo Barili, arzobispo de Tiana, y mi Ministro de Gracia y Justicia, se formalizó un proyecto de arreglo definitivo, que había de someterse á la aprobación pontificia, como lo fué por mi embajador, cerca de la Santa Sede, D. Luís José Sartorius, conde de San Luís: y cuyo arreglo y Convenio, aprobado por el correspondiente cambio de notas, y explicadas por el muy reverendo Nuncio las prevenciones de la aprobación pontificia, es como sigue:

#### CONVENIO.

«Siendo ya de suma necesidad y conveniencia el arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la misma índole, al



tenor de las solemnes disposiciones concordadas, leyes y Reales determinaciones, que deban tenerse presentes, los abajo firmados, Nuncio de Su Santidad en esta corte, y Ministro de Gracia y Justicia, hemos convenido en el siguiente proyecto de arreglo, que ha de someterse á la aprobación pontificia:

Art. 1.º Las familias, á quienes se haya adjudicado ó se adjudiquen por Tribunal competente los bienes, derechos y acciones de capellanías colativas de patronato familiar, activo ó pasivo de *sangre*, reclamados antes del día 17 de Octubre de 1851, fecha de la publicación del Concordato, como ley del Estado, redimirán dentro del término, y en el modo y forma que se disponga en la instrucción para la ejecución del presente Convenio, al tenor del art. 23 del mismo, las cargas de carácter puramente eclesiástico, de cualquier clase, específicamente impuestas en la fundación, y á que en todo caso, y como carga real, son responsables los dichos bienes.

Art. 2.º Las familias asimismo, á quienes se hayan adjudicado, ó adjudicaren por estar pendiente su adjudicación ante los Tribunales, los mencionados bienes, derechos y acciones, reclamados con posterioridad al R. decreto de 30 de Abril de 1852, redimirán igualmente las cargas de la propia índole y naturaleza, considerándose para este solo efecto, como carga eclesiástica, la congrua de ordenación, establecida por las sinodales de la respectiva diócesis al tiempo de la fundación.

Art. 3.º Se consideran completamente extinguidas las capellanías, de cuyos bienes tratan los dos artículos precedentes, y que hayan sido ó fueren adjudicados por los Tribunales á las familias, cuyo patronato, desapareciendo á petición de las mismas la colectividad de bienes de que proceda, dejó de existir.

Art. 4.º Se declaran subsistentes, si bien con sujeción á las disposiciones del presente Convenio, las capellanías, cuyos bienes no hubiesen sido reclamados á la publicación del Real decreto de 28 de Noviembre de 1856, y sobre los cuales, por consiguiente, no pende juicio ante los Tribunales.

Art. 5.º Están obligados de la manera prevenida en los arts. 1.º y 2.º, á redimir las cargas eclesiásticas de la propia índole y naturaleza.

Primero. Las familias, á quienes se hubiere adjudicado, como procedentes de verdadera capellanía de sangre, los bienes de una pieza, que constituyen verdadero beneficio, aunque de patronato familiar, activo ó pasivo de *sangre*, cualquiera que fuere su título ó denominación.

Segundo. Los poseedores de bienes eclesiásticos, vendidos por el Estado con sus cargas eclesiásticas.

Tercero. Las familias á quienes se hayan adjudicado, ó adjudicaren, bajo cualquier concepto, bienes pertenecientes á obras pías, legados píos y patronatos laicales ó reales de legos, y otras fundaciones de la misma índole de patronato familiar, también activo ó pasivo, gravados con las mencionadas cargas.

Art. 6.º Sobre la antedicha obligación de redimir las cargas corrientes, estarán también obligadas á satisfacer el importe de las misas, sufragios y demás obligaciones vencidas y no cumplidas por culpa de los poseedores, las familias á

quienes se hubieren adjudicado, ó adjudicaren por haber litigio pendiente, bienes de los designados en los artículos precedentes, incluso los pertenecientes á las capellanías que se declaran subsistentes en el art. 4.º

Art. 7.º Los poseedores de bienes de dominio particular exclusivo, gravados con cargas eclesiásticas, podrán también redimirlos, si tal fuese su voluntad, bajo las propias reglas, que respecto de los bienes comprendidos en los artículos anteriores, se establecen; pero será en ellos obligatorio, en el modo y forma que para los otros casos se determina en el art. 6.º y demás referentes, satisfacer las obligaciones eclesiásticas vencidas y no cumplidas, toda vez que lo sea por culpa de los poseedores.

Art. 8.º La redención de cargas, la conmutación de rentas y el pago del importe de las obligaciones vencidas y no cumplidas todavía en los diversos casos que se expresan en los artículos precedentes, se verificará, entregando al respectivo diocesano títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, por todo su valor nominal, que se convertirán en inscripciones intransferibles de la misma Deuda.

Art. 9.º El importe de las cargas corrientes se apreciará por los diocesanos en la forma legal correspondiente, y conforme á lo que se dispondrá en la instrucción siempre que no esté determinado en la sentencia ejecutoria de adjudicación, dictada anteriormente, que deberá cumplirse.

Respecto de las obligaciones vencidas y no cumplidas, los mismos diocesanos después de oír benignamente á los interesados, determinarán equitativa, alzada y prudencialmente la cantidad, que por dicho concepto deba satisfacerse.

Art. 10. En los juicios pendientes en los Tribunales civiles, que deberán continuar según el estado que tenían al tiempo de la suspensión decretada en 28 de Noviembre de 1856, sobre adjudicación de bienes de capellanías, de obras pías y de otras fundaciones de su especie, gravadas con cargas eclesiásticas, se hará constar, con certificado del diocesano antes de dictar sentencia, el importe de las cargas corrientes y la cantidad que para el cumplimiento de obligaciones hasta aquí vencidas y no satisfechas, prefijare el mismo diocesano.

En el caso de que la familia no entregue al diocesano los títulos correspondientes en el término que por el juez se prefije, dispondrá éste, antes de pronunciar auto definitivo, la enajenación, con audiencia de los poseedores, de la parte indispensable de bienes, en pública licitación, á pagar en Deuda consolidada del 3 por 100, por todo su valor nominal, adjudicando únicamente á la familia, como de libre disposición, los demás bienes de la capellanía, obra pía ó fundación piadosa, aplicando, en su caso, la disposición del art. 14.

Art. 11. Cuando dentro del término que se prefije en la instrucción, las familias, á las cuales hayan sido ya adjudicados judicialmente los bienes, no realizaren por cualquier causa, la redención de las cargas, ó el importe del importe de las vencidas y no cumplidas por su culpa, el Gobierno adoptará las medidas conducentes para que ambos extremos tengan cumplido efecto sin demora, aplicándose al intento la parte necesaria de los bienes responsables, ya se encuentren éstos en

poder de la familia del fundador, ya estén, por cualquier título, en manos extrañas; sin perjuicio, en su caso, del derecho que pueda tener el poseedor actual de la finca contra su causadante.

Art. 12. La congrua de ordenación en las capellanías, á que se refiere el artículo 4.º, será al ménos, de 2.000 rs. Se declaran incongruas las que no produzcan esta renta anual líquida, la cual se fijará por el producto de los bienes en el último quinquenio, deduciendo la porción que el diocesano, á petición de las familias y consideradas con equidad todas las circunstancias, creyese reservar con benignidad apostólica, á las mismas, cuya porción en ningún caso podrá exceder de la cuarta parte de dicho producto.

Art. 13. Hecha esta deducción, las familias interesadas entregarán al diocesano los títulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100 por lo demás de dicha renta, cuyos títulos se convertirán en inscripciones intrasferibles de la propia Deuda del Estado. Verificada la entrega de aquellos, los bienes de la capellanía corresponderán, en calidad de libres, á la respectiva familia.

Art. 14. Del mismo modo, cuando las familias hayan entregado al diocesano los títulos del 3 por 100, que se convertirán después en títulos intransferibles de la Deuda, corresponderán á aquéllas en calidad de libres los bienes de las capellanías adjudicados, ó que se adjudicaren judicialmente, en virtud del presente Convenio, y todos los demás gravados con cargas eclesiásticas que se rediman, en conformidad á las disposiciones contenidas en los arts. 9.º y 10, entregando al diocesano los títulos necesarios al efecto.

Art. 15. Cuando los títulos del 3 por 100, entregados por la familia, produzcan al ménos una renta anual líquida de 2.000 rs., se constituirá sobre esta congrua nueva capellanía, en la iglesia en que anteriormente estuvo fundada la capellanía, de que procedan los títulos; y en su defecto, en otra iglesia del territorio, procurando el diocesano, en cuanto sea posible, que se cumpla la voluntad del fundador; pudiendo, esto no obstante, por fines del mejor servicio de la Iglesia, modificar ó conmutar, con autoridad apostólica, que al efecto se le confiere por el presente Convenio, tanto respecto de este punto, como de todo lo demás susceptible de mejora, lo establecido en la fundación.

Art. 16. Se formará en cada diócesis un *acervo pío* común con los títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, procedentes de la redención de cargas, del importe de las no cumplidas, ó de bienes de capellanías colativas incongruas, uniendo al intento dos ó más, segun sea necesario para constituir una congrua al ménos de 2.000 rs., haciendo los llamamientos para el disfrute de ellas entre las familias que por las respectivas fundaciones tuviesen derecho, y estableciendo para el ejercicio del patronato activo los correspondientes turnos, habida consideración en todo caso á la cantidad procedente de cada capellanía, y en la inteligencia de que ha de darse al diocesano el turno correspondiente en representación de corporaciones ó de cargas eclesiásticas no existentes.

Y atendiendo á que por el presente Convenio se dá nueva forma á las cape-

llanías colativas familiares, todavía existentes, y á las que de nuevo se establecen en subrogación de las que, por efecto de las pasadas vicisitudes, han dejado de existir, el patronato meramente activo se ejercerá, eligiendo el patrono entre los propuestos en terna por el ordinario diocesano; y respecto del patronato pasivo, usará éste de sus facultades, si el presentado no reuniese las circunstancias necesarias para cumplir lo dispuesto en el presente Convenio.

Art. 17. Estas capellanías se proveerán precisamente dentro del término canónico; serán incompatibles entre sí, y no podrán proveerse en menores de catorce años.

Los provistos en ellas deberán seguir la carrera eclesiástica en Seminario, ya sea en calidad de externos, ya de internos, ó como ordenase el diocesano, según la abundancia ó escasez de medios al intento; y también estarán obligados precisamente á ascender á orden sacro, teniendo la edad canónica, so pena, en otro caso, de declararse vacante la capellanía.

Los diocesanos determinarán las obligaciones, estudios y demás requisitos y cualidades, no expresadas en el presente Convenio, ó en la instrucción que ha de darse para su ejecución, usando, en su caso, los mismos de las facultades apostólicas consignadas en los arts. 15 y 21.

Art. 18. También se formará en cada diócesis otro *acervo pío* común, con los títulos de la Deuda consolidada, procedentes de las obligaciones consignadas en el art. 5.º, en la parte á ellas aplicable del 6.º, y en su caso también con lo correspondiente á virtud de lo dispuesto en el art. 7.º

Además harán parte de este *acervo pío* común las inscripciones, que el Gobierno debe entregar.

Primero: en compensación de los bienes de las capellanías colativas de patronato particular eclesiástico, ó de derecho común eclesiástico, y de que el Estado se incautó. Unas y otras capellanías quedan extinguidas, y de libre disposición del Estado de dichos bienes.

Segundo: en igual compensación de los bienes de capellanías patronadas, de que, estando á la sazón vigentes, se incautó el Estado, bajo cualquier título y concepto que sea.

Y tercero: por títulos de diversas clases de Deuda del Estado, procedentes de cargas eclesiásticas, de obras pías y otras fundaciones de su clase, establecidas en corporaciones eclesiásticas, hoy no existentes, cuyo patronato pertenece actualmente á los prelados en representación de dichas corporaciones.

Los diocesanos fundarán con dichas inscripciones el número de capellanías, título de ordenación, que sean posibles, no bajando de 2.000 rs. la cóngrua de cada una.

Estas capellanías serán provistas exclusivamente por los mismos diocesanos, observándose, en cuanto sean aplicables, las reglas establecidas en el art. 16, respecto de las nuevas capellanías familiares: pero dándose en todo caso preferencia

á los seminaristas adelantados en su carrera, y más sobresalientes en cualidades y costumbres que carezcan de otro título de ordenación para ascender al sacerdocio.

Art. 19. Los capellanes de las nuevas capellanías, tanto familiares, como de libre nombramiento de los diocesanos, estarán adscritos á una iglesia parroquial, y tendrán en cuanto sea compatible con las obligaciones especiales de la capellanía, la de auxiliar al párroco, sin perjuicio de que el diocesano pueda destinarlos al servicio que estime conducente, con tal que se puedan cumplir en la iglesia en que esté situada la capellanía, dichas obligaciones especiales.

Hasta tanto que el capellán pueda levantar por sí mismo las cargas de la capellanía, dispondrá el diocesano lo conveniente para que tenga cumplido efecto, designando el cumplidor con la parte de estipendio que ha de satisfacerseles, de la renta de la capellanía.

Art. 20. Los pleitos sobre adjudicación de capellanías, que pendían en los Tribunales eclesiásticos, y fueron suspendidos en 1856, continuarán su curso, según el estado que entónces tenían.

Art. 21. En todo aquello que, para la ejecución de este Convenio, no bastare el derecho propio de los diocesanos, obrarán éstos en concepto de delegados de la Santa Sede, á cuyo fin la misma les autoriza competentemente, y también para que, como sus encargados especiales, procedan á la ejecución de este Convenio en los territorios exentos, enclavados en sus diócesis.

Además de esto, Su Santidad, en todo lo que pueda ser necesario, extiende la benigna sanción, contenida en el art. 42 del Concordato de 1851, á los bienes á que se refiere el presente Convenio.

Art. 22. No son objeto de este Convenio, por su índole especial, las comunidades de beneficiados de la diócesis de la corona de Aragón, en las cuales, no se hará novedad hasta el arreglo parroquial, ó bien, que entre ambas potestades se celebre acerca de ellas otro convenio especial: pero los bienes, censos y demás derechos reales, que constituyen su dotación, se conmutarán en la forma que prescribe el Convenio de 25 de Agosto de 1855, adicional al Concordato de 1851, en inscripciones intrasferibles de la Deuda consolidada de 3 por 100, que se entregarán á la respectiva comunidad á que pertenecen los bienes.

No lo son tampoco las piezas de patronato familiar, activo ó pasivo de sangre, fundadas en otras diócesis, que, por la índole y naturaleza de sus cargos y obligaciones constituyen verdaderos beneficios parroquiales, hayan ó no formado sus obtentores título beneficiado; y aunque se hubieren denominado capellanías, y los beneficiados se hayan titulado capellanes, porque, en conformidad á la Real cédula de ruego y encargo de 3 de Enero de 1854, ha de disponerse lo conveniente sobre el particular en el plan parroquial de la respectiva diócesis.

Art. 23. Con intervención del Nuncio Apostólico cerca de Su Magestad católica, al cual la Santa Sede delega al efecto todas las facultades necesarias, se dictarán la correspondiente instrucción y disposiciones reglamentarias convenientes para el desenvolvimiento y ejecución del presente Convenio, se resolverán las du-



das, y se removerán los obstáculos, que impidieren que el mismo tenga, en todas sus partes, el más exacto y puntual cumplimiento.—Madrid 16 de Junio de 1867.—Lorenzo Arrazola.—Lorenzo, Arzobispo de Tiana.

Por tanto, en vista de las razones expuestas por mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, en uso de la autorización dada á mi Gobierno por las leyes de 4 de Noviembre de 1859 y 7 del presente mes con asentimiento también del M. R. Nuncio de Su Santidad.

Vengo en proveer el presente decreto con fuerza de ley, que como tal se observará en el Reino; y mando á todos los Tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que la guarden, cumplan y ejecuten, y la hagan guardar y ejecutar en todas sus partes.—Dado en Palacio á 24 de Junio de 1867.—Yo la Reina.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

## R. D. DE 25 DE JUNIO DE 1867.

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en aprobar la instrucción formada, con intervención del M. R. Nuncio Apostólico, para la ejecución del Convenio referente á capellanías colativas de *sangre*, y otras fundaciones piadosas de la propia índole, celebrado con la Santa Sede y publicado por mi Real decreto, con fuerza de ley, fecha de ayer.—Dado en Palacio á 23 de Junio de 1867.—Esta rubricada de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

*Instrucción* acordada en todo lo procedente, con el M. R. Nuncio Apostólico, y aprobada por S. M. la Reina (Q. D. G.), para la ejecución del Convenio celebrado con la Santa Sede y publicado como ley del Estado por Real decreto de 24 de Junio de 1867, sobre las capellanías colativas de patronato familiar, memorias, obras pías y otras fundaciones análogas, y puntos conexos con las mismas materias.

### CAPÍTULO PRIMERO.—*Disposiciones preliminares.*

Artículo 1.º A la mayor brevedad posible, no debiendo exceder de tres meses después de la publicación de la ley en la *Gaceta oficial*, los jueces de primera instancia remitirán de oficio á los prelados diocesanos, á que pertenezca el pueblo en que estén sitas las parroquias, ya sean de la jurisdicción ordinaria, ya exenta, los siguientes estados: primero, de las capellanías y beneficios de toda clase, de patronato familiar, activo ó pasivo de *sangre*, cuyos bienes hayan sido adjudicados á los parientes; en virtud de la ley de 19 de Agosto de 1841, ó de cualquiera otra, que deberá citarse; expresando la iglesia, título, clase, é índole de la fundación, las personas á quienes se hubiere hecho la adjudicación; la ve-

ciudad de ellas, y la fecha del auto definitivo: segundo, de las memorias, obras pías y toda clase de fundación piadosa y familiar, gravada con cargas eclesiásticas, y cuyos bienes hubieren sido adjudicados á los patronos, expresando donde radicaba la fundación, nombres y vecindad de las personas á quienes se hubiese hecho la adjudicación y fecha del auto definitivo: tercero, de los negocios pendientes de capellanías y beneficios con separación de los que existan todavía en el Juzgado, de los que se hallen en las Audiencias, fecha de la demanda y su estado actual: cuarto, y lo mismo respecto de los negocios pendientes sobre memorias y toda clase de fundaciones piadosas, á que se refiere el número segundo de este artículo.

Las Audiencias remitirán también á los diocesanos nota de los negocios expresados en los dos números precedentes, que penden en el Tribunal, con expresión del estado en que se encuentran.

Art. 2.º La Dirección general de la Deuda pública, previa la correspondiente instrucción del Ministro de Hacienda, formará igualmente y remitirá al respectivo diocesano, á la brevedad posible, nota de los créditos satisfechos: primero, á los patronos de capellanías y beneficios familiares, ó á sus causahabientes, por bienes que se hubieren adjudicado á los primeros: segundo, á los patronos, ó causahabientes, de memorias y fundaciones piadosas de toda clase, gravadas con cargas meramente eclesiásticas.

Art. 3.º Además, las Audiencias territoriales, los jueces de primera instancia, las autoridades y oficinas de todas clases, suministrarán de oficio y sin demora, á los diocesanos, las noticias y datos necesarios, que éstos reclamaren para llenar su cometido.

Art. 4.º Los diocesanos, siempre que lo estimen conveniente, podrán delegar sin causar gastos á los interesados, en una Comisión, ó en persona de su confianza, la instrucción de los expedientes de toda clase y naturaleza, reservándose la solución definitiva, ó su aprobación.

En el *Boletín oficial* de la provincia, y en el eclesiástico donde le hubiere, se publicarán estos nombramientos para noticia de los interesados, y á fin de que sea reconocida su personalidad en las oficinas de todas clases, cuando quiera que hiciesen alguna reclamación, ó pidieren datos y noticias para llenar su cometido.

Los diocesanos señalarán una módica retribución por su trabajo á sus delegados. Aquella, y los gastos de oficina indispensables, se satisfarán de los fondos de los *acervos pios* que crea el Convenio.

Art. 5.º Por cargas de carácter puramente eclesiástico, de que tratan el primero y otros varios artículos del Convenio, se entiende todo gravamen impuesto sobre bienes de cualquiera clase que sean, para la celebración de misas, aniversarios, festividades, y en general para actos religiosos ó de devoción en iglesia, santuario, capilla, oratorio ó en cualquiera otro puesto público.

Art. 6.º Los diocesanos, al tenor del art. 21 del Convenio, podrán reducir, como lo estimen más equitativo, las cargas meramente eclesiásticas, y también lo

correspondiente á lo congrua sinodal, título de ordenación que, según el art. 2.º del mismo Convenio, por la especialidad de los casos, tiene la consideración de carga eclesiástica.

Art. 7.º Siendo puramente prudencial y discrecional la reducción de cargas y de mera benignidad apostólica, atendidas las circunstancias de la respectiva familia, la apreciación de la parte de bienes dejados á ésta en su caso por el art. 12 del Convenio, los diocesanos procederán gubernativamente en esta materia sin que haya lugar á recurso en justicia, y si solo el de pura revisión ante el mismo prelado en la propia forma.

Art. 8.º Habiendo circunstancias especiales, obstáculos y dificultades para ejecutar cualquiera de las disposiciones contenidas en el Convenio y en esta instrucción, el diocesano lo hará presente al Ministro de Gracia y Justicia, para que en uso de la facultad que se concede por el art. 23 del Convenio, se resuelva lo más conveniente y equitativo con acuerdo del M. R. Nuncio de Su Santidad.

Art. 9.º Los diocesanos, bien sea por medida general, bien en casos particulares, habiendo circunstancias especiales que lo verifiquen, podrán prorrogar según lo estimen conveniente, los plazos que en esta instrucción se señalen, tanto para reclamar, como para hacer en su caso entrega de los créditos del Estado, y todo otro que se prefijase, cuyas resoluciones se publicarán en el *Boletín oficial* de la provincia y en el eclesiástico.

Art. 10. Las publicaciones que se hagan en los *Boletines oficiales* por disposiciones del diocesano ó de su delegado, se considerarán de oficio.

CAP. II. — *De las capellanías adjudicadas, ó cuya adjudicación se pidió por las familias antes del 28 de Noviembre de 1856.*

Art. 11. Los diocesanos dictarán y publicarán en el *Boletín oficial* de la provincia auto general, en la correspondiente forma canónica, declarando, en conformidad á lo dispuesto en el art. 3.º del Convenio, extinguidos los patronatos y capellanías á que se refieren los dos primeros artículos del propio Convenio.

Art. 12. Los Tribunales, así civiles como eclesiásticos, acordarán en su respectivo caso lo que proceda para terminar lo más pronto posible los pleitos pendientes.

En los primeros, el Ministerio fiscal, prescindiendo de todo lo que no sea pertinente, procurará se evite toda dilación innecesaria, y en cuanto de su acción dependa, el despacho de estos negocios con la preferencia que corresponda, pidiendo se declare desierta la demanda, apelación ó súplica, si no fuese promovido el curso del pleito por los interesados dentro del término legal correspondiente.

Los promotores fiscales no dejarán de apelar de la sentencia de adjudicación, dando inmediatamente conocimiento al fiscal de la Audiencia, para que resuelva lo conveniente.

El Ministerio fiscal cuidará también muy particularmente de que no se con-

fundan con las capellanías colativas familiares, á las cuales es solamente aplicable la ley de 19 de Agosto de 1841, los verdaderos beneficios de patronato familiar, activo ó pasivo, apelando en su caso los promotores fiscales y promoviendo recurso de casación en interés del Estado los fiscales de las Audiencias.

Art. 13. En el término de cuatro meses, contados desde la publicación de la ley en el *Boletín oficial* de la provincia de su domicilio, los parientes de los fundadores ó sus causahabientes á quienes han sido ya adjudicados los bienes de las capellanías ó beneficios, cuya posesión les fué dada en su tiempo, presentarán al diocesano copia auténtica del auto definitivo, y una nota bastante expresiva: 1.º, de las fincas, derechos y acciones que á cada interesado hubieren sido adjudicadas, con expresión de los títulos de la Deuda del Estado, que, á reclamación suya, le hubiese entregado la Dirección de la Deuda pública: 2.º, de las cargas impuestas sobre cada finca, incluidas las de los bienes que han sido subrogadas por Deuda pública; ó declaración de no haberse hecho específicamente, sino en globo, sobre los bienes de la fundación: 3.º, de las cargas vencidas y no satisfechas desde la toma de posesión de los bienes, ó recibo de dichos títulos de la Deuda, expresando las causas que hubiese habido para ello, y proponiendo la cantidad alzada que estén dispuestos á satisfacer para esta sagrada obligación.

Cada finca será exclusivamente responsable de la parte de cargas que sobre ella pesaba, y lo será con la generalidad de sus bienes; de las correspondientes á las fincas subrogadas en aquellos títulos la persona que lo recibió.

De los descubiertos por tiempos anteriores á la toma de posesión de los bienes, ó al recibo de los títulos de la Deuda del Estado, serán responsables los capellanes beneficiados que los hubiesen disfrutado, los administradores ó detentadores de los mismos bienes, y en su caso el Estado por el tiempo que hubiese estado incautado de ellos.

Los diocesanos acordarán lo que proceda respecto de dichas personas responsables.

Art. 14. Los que, aunque hayan sido patronos legítimos, tengan en su poder bienes, no adjudicados con arreglo á la legislación entonces vigente, deberán hacer manifestación de ellos en el término y modo expresados en el artículo precedente, para disfrutar de las ventajas concedidas á las familias, so pena en otro caso de lo que pueda corresponder con arreglo á las leyes.

Art. 15. Pasados los términos sin presentar á los diocesanos los datos y manifestaciones, á que se refieren los artículos precedentes, los mismos diocesanos formarán de oficio expediente instructivo, señalando nuevo plazo y citando á los interesados por el *Boletín oficial* de la provincia, con la prevención de que se procederá en su caso, sin su intervención, á determinar las cargas, bajo los conceptos de que cada uno de los interesados deba responder, después de hechas las deducciones, si así fuese equitativo, parándoles el perjuicio que hubiese lugar.

Art. 16. Cuando en la sentencia ya cumplida, no se hubiesen prefiado las cargas, ó su importe á metálico, correspondientes á cada finca, como tampoco el des-

cubierto por las atrasadas no cumplidas, de que los mismos bienes deban ser responsables, se hará lo que faltare en el expediente instructivo, con audiencia de los interesados, ó sin ella en su caso, según lo ya dispuesto.

Art. 17. De la apreciación de las cargas de la capellanía ó beneficio, hecha por el diocesano, podrá acudirse al Tribunal eclesiástico con las apelaciones correspondientes, salvo siempre lo dispuesto en el art. 7.º de esta instrucción.

Art. 18. Fijando definitivamente el importe anual de las cargas, y el de las atrasadas, no cumplidas, los interesados entregarán en los plazos que se fijan en el artículo siguiente, donde y como el diocesano dispusiere, los títulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100, para hacer una renta igual al importe de la carga anual y la cantidad á que ascendieren las otras cargas; ó en metálico, solo en los casos que se expresarán en el artículo siguiente.

Art. 19. La entrega de los títulos se verificará en cuatro plazos; el primero, de una cuarta parte en el término de dos meses, y los restantes de cuatro en cuatro meses cada uno; dándose respecto de estos últimos, pagarés si el diocesano lo prefiriese, ú otorgándole la correspondiente escritura á satisfacción del mismo.

A los que anticipasen los plazos, si á ello asintiese el diocesano, se les abonará un 3 por 100. Además se hará otro abono igual á los que, no existiendo la escritura de imposición del censo ó gravamen, se presten voluntariamente á su redención.

Quando la renta anual corriente, que debe redimir una misma persona, no pueda representarse por el título menor de la Deuda consolidada del 3 por 100, se pagará en metálico la cantidad necesaria para que, unida con otras, pueda constituirse la renta igual á la carga, en dicha Deuda consolidada. Lo mismo se verificará respecto de las cargas atrasadas no cumplidas.

Art. 20. No verificándose en su respectivo plazo la entrega de los títulos, el diocesano lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, á fin de que se ordene al promotor fiscal del Juzgado, que hubiese entendido en los autos, promueva la ejecución contra las fincas responsables, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 11 del Convenio, á fin de que se haga efectivo el pago, al tenor de lo prevenido en el artículo precedente.

Verificado el total pago de la redención, se librará á los interesados el correspondiente documento, para que se cancele la hipoteca sobre los bienes, y queden éstos libres de ella.

El modo de levantar las cargas, hasta que lo dicho tenga efecto, se acordará por el diocesano con audiencia de los interesados.

Art. 21. Hasta tanto que se cumplan las prescripciones de los artículos siguientes, que se refieren á los negocios pendientes ante los Tribunales civiles, se suspenderá el dar la posesión de los bienes adjudicados á los interesados, que todavía no hubiesen entrado en ella.

Art. 22. Tan luego como los autos pendientes se hallen en estado, el juez señalará á los interesados el término en que deban presentar los datos y hacer al



diocesano las manifestaciones que procediesen al tenor del art. 13; en la inteligencia que, de no verificarlo, el mismo diocesano procederá á formar de oficio el oportuno expediente instructivo, remitiendo al intento el juez al diocesano los autos, ó los datos que éste pidiese.

Art. 23. Presentada en autos la certificación del diocesano, de que trata el artículo 10 del Convenio, el juez procederá á lo que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en el propio artículo; suspendiéndose, sin embargo, la entrega de los bienes adjudicados á las familias, hasta tanto que se cumpla lo establecido en los arts. 18 y 19 que son aplicables al objeto del presente; debiendo otorgarse á satisfacción del juez, con las cláusulas correspondientes, la escritura, de que habla el último de dichos artículos, y consultando previamente al diocesano, por si prefiriere á la escritura de los pagarés.

Art. 24. Cuando haya de procederse á la venta de bienes en pública licitación, se tendrá presente, para fijar el tipo de la subasta, lo dispuesto en el art. 19.

Art. 25. Cualquiera que sea el importe de aquéllos, las escrituras y sus copias se extenderán en papel del sello noveno, y no se devengarán derechos de transmisión de propiedad, por substituirse en papel del Estado los bienes afectos á las cargas de que se trata: ni el Registro de la propiedad más derechos de inscripción que los establecidos para negocios de menor cuantía.

CAPÍTULO III.— *De los patronatos laicales ó reales de legos, memorias, obras pías y otras fundaciones de la misma índole, de patronato familiar, activo ó pasivo, gravados con cargas puramente eclesiásticas; y de las de esta misma índole que afectan á bienes de dominio particular exclusivo, ó vendidos por el Estado con este gravamen, de que tratan los arts. 5.º y 7.º del Convenio.*

Art. 26. Las familias que estén en posesión de los bienes adjudicados, ó sobre los que penda juicio, pertenecientes á memorias y fundaciones pías de todas ó á patronato laical ó real de legos, gravados con cargas meramente eclesiásticas, deberán hacer al diocesano las manifestaciones documentadas, que en su caso respectivo procedan, al tenor de los arts. 13 y 22 de la presente instrucción.

Art. 27. Los poseedores de bienes, que el Estado ha vendido, ó vendiere, con la obligación de levantar las cargas, puramente de carácter eclesiástico, á que están afectos, deberán hacer al diocesano, en el término de cuatro meses, con toda la especificación conveniente, declaración de aquéllas, su índole, naturaleza, objeto é iglesia en que debieran cumplirse; expresando al propio tiempo las vencidas y no satisfechas de de la toma de posesión de la finca, y la cantidad que están dispuestos á satisfacer para cumplir tan sagrada obligación.

Art. 28. Los poseedores de bienes de dominio particular exclusivo, que en uso de la facultad que les concede el art. 7.º del Convenio, quieran redimir las cargas ó gravámenes, de carácter puramente eclesiástico, deberán acudir al diocesano con los documentos correspondientes, en dicho término de cuatro meses, haciendo

igual manifestación á la indicada en el artículo anterior, respecto de las cargas atrasadas, cuya redención según el artículo citado del Convenio, es obligatoria.

Art. 29. Las disposiciones de los capítulos anteriores, referentes á la fijación, graduación y apreciación de las cargas y al modo, forma y plazos en que ha de verificarse el pago, son aplicables de la misma manera á los particulares del presente capítulo.

CAPÍTULO IV.—*De las capellanías declaradas subsistentes por el art. 4.º del Convenio y del acervo pío comitida de que tratan los arts. 16 al 18 del mismo Convenio.*

Art. 30. Se consideran comprendidas en las disposiciones del art. 4.º del Convenio si las familias no hubieren reclamado judicialmente los bienes, las capellanías cuyo disfrute se dejó á los capellanes que á la sazón las poseían, y en el cual han de continuar hasta que canónicamente vaguen.

Art. 31. Los capellanes, que actualmente están en posesión de las capellanías existentes, y los que las obtuvieren por consecuencia de los juicios pendientes en los Tribunales eclesiásticos, continuará también en el disfrute de su renta hasta la vacante; pero esto no será obstáculo para que, instruido el expediente oportuno, según más adelante se dirá, se determine lo que proceda, y que en el caso de ser incongrua, se decreta desde luego la unión á otra, aunque sin llevarlo á efecto hasta que se verifique la vacante canónicamente.

Art. 32. Si por la fundación ó disposiciones canónicas vigentes, el capellán, que disfrute las rentas de alguna capellanía extinguida ó existente, estuviese obligado á ascender á *orden sacro* y en su día al presbiterado, y no lo hubiese verificado, teniendo la respectiva edad para ello, el diocesano le presijará el término, dentro del cual deba verificarlo, declarando caso contrario la vacante en la correspondiente forma canónica.

También se instruirá expediente canónico, si existiesen otras causas legales, por las cuales el poseedor de la capellanía deba perderla con arreglo á derecho.

Art. 33. Se declaran en caso de excepción por su índole y naturaleza, formen ó no cuerpo sus individuos, y sean ó no colativas, las capellanías de patronato activo familiar, fundadas en capillas de iglesia metropolitana, sufragánea, colegial ó parroquial, en que yacen los restos mortales, existen sepulcros, ó porque convenga conservar la memoria de familias ilustres.

El diocesano, con audiencia instructiva de los mismos patronos, procederá á su arreglo para que, al propio tiempo que se perpetúe la memoria de los fundadores, presten á la iglesia, y sobre todo en su caso al ministerio parroquial, el mejor servicio posible. En todo caso estarán obligados los patronos á conmutar en títulos intransferibles del 3 por 100 consolidado la renta por todo su valor, que deben satisfacer, ó que anualmente produzcan los bienes pertenecientes á la capilla.

Art. 34. Los diocesanos, atendidas todas las circunstancias de su respectiva diócesis, formarán el oportuno expediente instructivo, con audiencia de los encargados

del patronato activo y de los interesados en el pasivo, señalando el plazo que estimen conveniente, dentro del cual los mismos patronos, capellanes y administradores de los bienes de las capellanías, fundadas en iglesia del territorio de la misma diócesis, cualquiera que sea la jurisdicción á que hubieren pertenecido ó actualmente pertenezcan, deban presentar las fundaciones y documentos necesarios para establecer el quinquenio, que previene el art. 12 del Convenio, y que será el del año de 1862 á 1866, ambos inclusive. Y para formar juicio en todo lo demás, en consonancia con los particulares que deben resolverse con arreglo á lo dispuesto en el mismo Convenio, los diocesanos tendrán muy presente lo que se previene en el artículo 13 de esta instrucción y especialmente al final del núm. 1.º y en el 2.º del propio artículo.

Art. 35. Terminado el expediente instructivo, el diocesano señalará: 1.º, la renta líquida deducidas las cargas que no sean de índole puramente eclesiástica, y demás que en tales casos procedan, durante el quinquenio prefijado; 2.º, declarará si la capellanía es congrua ó incongrua, según el tipo señalado en el art. 12 del Convenio, deducción hecha además de la expresada en el número anterior, de la porción del producto que, con arreglo á lo dispuesto en dicho art. 12, creyese equitativo el mismo diocesano deber dejar á la familia del fundador no excediendo nunca, según allí se dispone, de la cuarta parte de dicho producto.

Art. 36. Si los interesados no conviniere en extrajudicial y amigablemente en lo tocante á su derecho á los bienes, ó en la parte alícuota correspondiente á cada uno de ellos, podrán acudir al juzgado de primera instancia, á que pertenezca la parroquia en que esté fundada la capellanía, para que, con arreglo á la legislación observada antes del Concordato, se determine acerca del derecho de los interesados, y en su caso se fije la parte alícuota de la renta que deba convertirse en inscripciones intrasferibles.

Si la controversia promovida por los interesados se limitara á la renta del quinquenio, señalada gubernativamente por el diocesano, la acción se deducirá ante el Tribunal eclesiástico, según lo establecido en el art. 17 de esta instrucción.

Una vez fijado judicial ó extrajudicialmente el derecho, renta del quinquenio, y la parte alícuota correspondiente á cada interesado, verificarán éstos, en el tiempo, modo y forma establecidos en el cap. II de la presente instrucción, la entrega de los títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, que produzca la renta líquida prefijada para la capellanía.

Siendo la capellanía de mero patronato activo, ó en el caso de que no lo soliciten los interesados ó llamados al goce y disfrute de la misma, el patronato familiar, pues los compatronos que no fuesen de la familia no tienen derecho á los bienes, deberá verificar dicha entrega de los títulos de la Deuda del Estado, en el tiempo y según lo demás dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 37. Si el patrono, ó los llamados al disfrute en su caso, no efectuaren la commutación, se enajenarán, previa disposición del diocesano, en pública subasta

por el juez de primera instancia del partido, indicado en el párrafo 1.º del artículo precedente, los bienes necesarios para cubrir la cantidad, teniendo presente para la sustitución la renta señalada á los mismos bienes pero sin comprender la porción dejada á las familias por benignidad apostólica, con arreglo al art. 35 de este capítulo.

Art. 38. Si la capellanía fuese cóngrua, el diocesano, con audiencia del patrono, determinará la iglesia en que debe establecerse la capellanía, si no existiese la en que privativamente fué fundada, ó si por el mejor servicio de los fieles, ó más eficaz auxilio al ministerio parroquial, conviniese la traslación á otra parroquia, santuario, ó capilla, usando para ello de la delegación apostólica, consignada en los arts. 15 y 21 del Convenio. Además, en uso de las propias facultades, introducirán los diocesanos en la fundación, con audiencia instructiva de los patronos, todo lo que consideren provechoso al mejor servicio de la Iglesia, y para que las capellanías llenen cumplidamente los elevados objetos que las supremas potestades se han propuesto en el Convenio.

Procurará el diocesano que entre dichas obligaciones sea una de ellas siempre que ser pudiere, la celebración de misa de alba en los días de precepto en los pueblos agrícolas y de las llamadas de hora ó de punto, acomodado á los usos y costumbres de la generalidad de las gentes, en las poblaciones aglomeradas de otra clase; ya sea en la parroquia en que esté fundada la capellanía, ya en cualquiera otra, que conviniera más, dentro de la misma población.

El diocesano dictará ante notario y en papel de oficio, el correspondiente auto canónico, que á los efectos correspondientes se unirá á la primitiva fundación de la capellanía, debiendo extenderse en el propio sello la copia original, que ha de archiversarse en la parroquia del territorio en que se fundare.

Art. 39. Las rentas de las capellanías que se declaren incóngruas por auto dictado en la forma prevenida en el párrafo anterior, pertenecerán al *acervo pío* común de que trata el art. 16 del Convenio.

El diocesano, oyendo instructivamente á los patronos, procederá á decretar la unión de dos ó más de la propia clase, según sea necesario, para constituir una cóngrua anual de 2.000 reales, á lo ménos, llamando al disfrute de ella á los que por las respectivas fundaciones tuvieren derecho y estableciendo para el ejercicio del patronato activo, los turnos correspondientes, según lo dispuesto en dicho art. 16 del Convenio. La nueva capellanía se establecerá en la parroquia, santuario, ermita ó capilla, que los diocesanos crean más á propósito para la mayor comodidad y mejor servicio de los fieles.

Además de las mejoras que, en uso de la delegación apostólica, crean conveniente hacer en las fundaciones de las capellanías unidas, y de expresar en el auto lo terminantemente dispuesto en los arts. 17 y 19 del Convenio, se consignarán también los estudios y los demás requisitos, calidades y obligaciones, que los diocesanos estimen oportunas, teniendo presentes las indicaciones hechas en el artículo

precedente respecto de la celebración de misa de alba en las poblaciones agrícolas, y de las llamadas de hora ó de punto en las de otra clase.

Al auto que provean los diocesanos, se agregarán las fundaciones y demás documentos pertenecientes á las capellanías unidas, observándose lo que respecto de las declaradas cógruas, se dispone en el pár. 3.º del art. 38.

Art. 40. Hasta tanto que tenga cumplido efecto la conmutación de los bienes continuarán en la administración de los mismos los capellanes ó personas, á quienes por la fundación correspondiere.

No obstante lo dispuesto en la fundación, en uso de la delegación apostólica, los diocesanos podrán siempre que lo creyeren conveniente, nombrar con todas las garantías debidas un administrador general de los bienes de las capellanías actualmente vacantes, ó bien encargur con la misma garantía la de cada capellanía esté ó nó vacante, á persona de su confianza, habiendo justo fundamento para ello.

Art. 41. Las inscripciones intrasferibles se pondrán en cabeza de la capellanía, á que se le apliquen y estarán siempre á disposición del diocesano, quien determinará el punto, modo y forma de su conservación, haciendo entregar oportunamente para su cobranza á los capellanes el cupón que corresponda.

En caso de vacante, el excedente que hubiere, después de pagado al ecónomo, que el mismo diocesano nombrará para levantar las cargas, y el importe de los gastos abonables, se aplicará, parte á aumentar la cógrua de la capellanía adquiriendo nuevas inscripciones intrasferibles y asimismo la parte que estimen conveniente los diocesanos, al fondo de reserva.

Art. 42. Cuando el patronato sea meramente activo, el patrono presentará de entre los que el diocesano proponga libremente en ternia, por ahora, y de entre los aprobados en los exámenes periódicos, de que habla el art. 18 del R. D. de 15 de Febrero último, luego que lo allí establecido llegue á plantearse.

Art. 43. Si para fundar nueva capellanía, fuere necesario reunir el resíluo de muchas de tan corta vida, que sea difícil establecer turno en el patronato pasivo, el patrono á quien tocara la presentación, podrá hacer ésta en cualquiera de los llamados al disfrute por la nueva fundación.

Art. 44. En adelante se procederá instructivamente en los expedientes de presentación, caudándose á los interesados el menor gasto posible.

Art. 45. Los que se sintieren agraviados podrán deducir, dentro del término, que al intento prefijase el diocesano, el recurso correspondiente ante el Tribunal eclesiástico. Este decidirá sumariamente, con las apelaciones á que hubiere lugar hasta la decisión final por el Tribunal de la Rota, el cual también conocerá sumariamente, salvo el caso previsto en el art. 7.º de esta instrucción.

Art. 46. En adelante, toda fundación de capellanía colativa, de patronato activo y pasivo familiar, ha de hacerse con arreglo á las bases esenciales, consignadas en el Convenio para las actualmente existentes.



CAP. V.—*Del acervo pío común para fundar capellanías de libre nombramiento de los diocesanos.*

Art. 47. Además de los fondos que pertenecen á este *acervo pío común*, según el art. 18 del Convenio, los diocesanos agregarán á él la parte, todavía disponible, de los títulos de toda clase de Deuda del Estado, que en representación de corporaciones, que han dejado de existir, les han sido, ó fueren entregados por la Dirección de la Deuda pública para levantar las cargas, meramente eclesiásticas, á que estaban afectos los bienes de que dichos títulos procedían.

Art. 48. Siguiendo el espíritu de los arts. 39 y 45 del Concordato y lo establecido en el Convenio adicional de 25 de Agosto de 1859, se tratará amigablemente entre el Gobierno de S. M. y el M. R. Nuncio apostólico, para establecer prudencial y alzadamente lo que proceda, respecto de los particulares á que se refieren los diversos números del pár. 2.º, art. 18 del presente Convenio.

Una vez acordado el número de inscripciones intrasferibles, que por dichos conceptos ha de entregar el Gobierno de S. M., se destinará al *acervo pío* de que se trata, la parte correspondiente á cada diócesis.

Art. 49. De la misma manera se tratará con el Gobierno respecto de las cargas puramente eclesiásticas, que gravan los bienes de los establecimientos de Beneficencia ó Instrucción pública y otros análogos, á fin de que se ponga á disposición del respectivo diócesis el correspondiente número de inscripciones intrasferibles, que en representación de sus bienes se han entregado ó entregaren á los mismos establecimientos.

Art. 50. También corresponde á este *acervo pío*: primero, la mitad del importe, que por razón de cargas, puramente eclesiásticas, se hayan abonado por la Dirección de la Deuda á las familias, á quienes se hubiesen adjudicado los bienes, derechos y acciones de las capellanías ó beneficios, que no correspondían á las comunidades de beneficiados coadjutores de la Antigua corona de Aragón; segundo, todo el importe que por el mismo concepto de cargas puramente eclesiásticas, se hubiese abonado ó abonase á las familias, á quienes se han adjudicado ó adjudicaren los bienes, derechos y acciones de memorias, obras pías y cualquiera otra fundación piadosa familiar de toda clase y denominación; y tercero, la parte que el diocesano crea conveniente destinar de la cantidad alzada, que con arreglo á lo dispuesto en el art. 11 del Convenio adicional de 25 de Agosto de 1859, debe satisfacer el Gobierno en inscripciones intrasferibles, por razón de las cargas eclesiásticas, á que estaban afectos los bienes vendidos como libres, y los sujetos á conmutación según el mismo Convenio; siendo las cargas de aquellas que no deban cumplirse por los cabildos metropolitanos, sufragáneos, colegiales ó capillas Reales, en cuerpo, ó por los respectivos párrocos ó sus coadjutores.

Los diocesanos procurarán concertarse con los interesados, usando de toda la posible benignidad; y si ocurriesen dificultades, orillar éstas; conviniendo en una

cantidad alzada prudencial y equitativa, que se satisfará en títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100 por todo su valor nominal.

Art. 51. Tan luego como se reciba número suficiente de inscripciones intrasferibles, los diocesanos fundarán la correspondiente capellanía, dando la preferencia para establecerla á las iglesias ó parroquias, en que la necesidad fuese más apremiante; teniendo presentes las disposiciones análogas que le sean aplicables del capítulo precedente.

Art. 52. La erección se hará en la forma canónica correspondiente y con preferencia, en cuanto se pueda, en parroquia de más de 500 almas, que no le corresponda coadjutor, y que por circunstancias especiales necesite otro eclesiástico, además del párroco, según lo dispuesto en la base 19 de la Real cédula de ruego y encargo, de 3 de Enero de 1854, ó bien en santuario, ermita ó parroquia situada convenientemente para que el capellán pueda auxiliar, caso de necesidad, á los párrocos limítrofes.

Se expresarán en el auto, que se dictare, todas las circunstancias y requisitos que en los aspirantes deben concurrir, y las obligaciones que el Convenio exige en sus obtentores, con las demás que los diocesanos estimen convenientes, en uso de la facultad que el mismo Convenio les concede.

Art. 53. Este auto hará las veces de fundación, y de él se sacará copia para archivarla é insertarla en el correspondiente libro de la parroquia, reservándose en el Archivo episcopal el expediente original de cada fundación. El auto y las copias se extenderán en papel del sello de oficio.

Art. 54. Las inscripciones intrasferibles se pondrán en nombre de la fundación á que se aplicaren los títulos de la Deuda, observándose lo dispuesto en el artículo 41 del capítulo anterior para las capellanías de patronato familiar.

CAP. VI.—*De las comunidades de beneficiados coadjutores de las diócesis de la antigua corona de Aragón, de que trata el art. 22 del Convenio.*

Art. 55. Los prelados de las diócesis de la antigua corona de Aragón remitirán á la mayor brevedad posible al Ministerio de Gracia y Justicia, para el uso correspondiente, nota debidamente circunstanciada; primero, de los bienes, derechos y acciones, de que todavía se hallen en posesión las comunidades de beneficiados coadjutores; segundo, de los que se haya incautado el Estado de esta misma procedencia, y su fecha, expresando si existen ó no reclamaciones pendientes, fecha de ellas, y dependencia del Estado en que existan los expedientes de reclamación.

Art. 56. La entrega al Estado, á la cual deberá preceder la cesión canónica del diocesano, de los bienes existentes todavía en poder de las comunidades, no se verificará hasta tanto que se fije, con intervención y acuerdo de la correspondiente Administración de propiedades del Estado, la renta, que actualmente produce cada finca ó censo, y en su consecuencia se expidan á favor de las propias comunidades las correspondientes inscripciones intrasferibles de la Deuda consolidada del 3

por 100, para hacer una renta igual á la preñada, que se entregarán al mismo prelado.

Art. 57. Antes de anunciarse por el Estado la venta de los bienes de dichas comunidades, que todavía conserva el mismo Gobierno en su poder sin enajenar, se expedirán las inscripciones intrasferibles correspondientes.

Art. 58. Se expedirán también inscripciones de la propia clase para hacer una renta igual á la que producen al tiempo que el estado se incautó de los bienes, derechos y acciones, ya enajenados por el mismo Estado, fijándose prudencial y alzadamente en su caso aquella renta. A este fin harán los diocesanos, por conducto del Ministerio de Gracia y Justicia, la reclamación debida, háyase ó no hecho anteriormente, y exista ó no expediente en su razón.

Art. 59. Los mismos diocesanos harán directamente las reclamaciones oportunas á los patronos, á quienes se adjudicó parte de los bienes de la comunidad, ó los particulares del beneficio, si los hubiese tenido, caso de no cumplir ellos mismos lo dispuesto en el capítulo II, en la inteligencia de que por falta de tal cumplimiento, además de las cargas específicas meramente eclesiásticas, se han de considerar como tales para este solo efecto, en razón á sus diversas obligaciones, como miembros de la comunidad, el importe de la cóngrua sinodal de ordenación.

Art. 60. Verificada que sea la reorganización de las comunidades, ó cabildos de beneficiados coadjutores, con arreglo á lo dispuesto en el art. 11 del R. D. de 15 de Febrero último, los diocesanos ordenarán la traslación á otra parroquia de los ecónomos coadjutores, que actualmente perciben dotación del Estado, y que han de cesar en este cargo por deber desempeñarlo la comunidad de beneficiados coadjutores.

Art. 61. Hasta que tenga efecto la reorganización indicada, sólo se proveerán en economato las coadjutorías actualmente existentes, ó que se establezcan en el arreglo parroquial.

Art. 62. Las inscripciones intrasferibles en que se subrogan los bienes, derechos y acciones de las comunidades, se inscribirán á nombre de las mismas, y se entregarán á los diocesanos para que dispongan su custodia y conservación por las propias comunidades, ó de la manera que estimen más conveniente: en cuyo último caso deberán entregarse oportunamente á la respectiva comunidad los cupones para su cobro.

CAPÍTULO VII Y ÚLTIMO.— *De la expedición y custodia de las inscripciones intrasferibles.*

Art. 63. Reunidos los títulos de la Deuda pública, y antes de darse por terminada la fundación de la capellanía, dispondrá el diocesano la remisión de los mismos, con las formalidades debidas para evitar toda contingencia á la Dirección de la Deuda, si en ella no estuviesen ya depositados, expresando en todo caso, con los correspondientes detalles, la capellanía tanto de patronato familiar como de

libre fundación, á cuyo nombre hayan de formalizarse las inscripciones intrasferibles.

La Dirección de la Deuda remitirá dichas inscripciones al Ministerio de Gracia y Justicia, el cual las pasará al diocesano; y éste acordará el depósito y custodia de ellas en el punto que crea más seguro.—Madrid 25 de Junio de 1867.—Arrazola.

R. O. DE 7 DE ENERO DE 1868.

*Extracto.*—Resolvió que los adjudicatarios de los bienes de capellanías, de que habla el art. 2.º de la ley de 24 de Junio de 1867, están obligados á redimir, además de las cargas generales que sobre aquéllas gravan, la congrua íntegra de ordenación si el valor de los expresados bienes lo permite, y en caso de que no lo consienta hasta la cantidad á que ascienda el valor total de los mismos bienes.

R. O. DE 18 DE ABRIL DE 1868.

Enterada la Reina (Q. D. G.) de las consultas elevadas por V. S. al Ministerio de Gracia y Justicia respecto á la inteligencia de algunos puntos del Convenio de 24 de Junio de 1867 sobre capellanías con inteligencia del M. R. cardenal pro-nuncio de Su Santidad, se ha servido resolver lo siguiente:

1.º Que los bienes que constituyen la dotación de los patronatos laicales ó reales de legos con destino á obras pías y á fundaciones piadosas familiares no están sujetos á la conmutación.

2.º Que los censos ó pensiones conocidamente afectos á cargas eclesiásticas, como celebración de misas, de aniversarios y de otras funciones religiosas, están sujetos á la redención.

3.º Que no hay dificultad en conceder á los censatarios el derecho de redimir los censos que están destinados al pago de cargas eclesiásticas; y en el caso de que ellos no quieran usar de este derecho, podrá acudir al medio de la venta judicial.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.—Dios etc.—Madrid 18 de Abril de 1868.—Roncali.—Sr. Gobernador eclesiástico de Solsona.

R. O. DE 27 DE JULIO DE 1868.

Visto el expediente instruido con motivo de haber manifestado el obispo de Segovia la conveniencia de declarar que los documentos ó actas de conmutación que expidan los prelados á favor de las familias interesadas en los bienes de capellanías colativas son suficientes para inscribirlos en el Registro de la propiedad, y que puede hacerse desde luego la inscripción á nombre de aquellas familias, ó

del comprador en el caso de venta judicial, sin necesidad de que sean antes inscritos al de la capellanía ó fundación de que proceden:

Considerando que los bienes de las capellanías colativas declaradas extinguidas en el art. 3.º del Convenio de 24 de Junio último pertenecen á las familias desde que en tiempo oportuno los reclamaron judicialmente, en virtud del derecho que para ello les había dado la ley de 19 de Agosto de 1841, sin que en aquel Convenio se les haya impuesto otra obligación que la de redimir las cargas en la forma establecida en el mismo:

Considerando que esta redención debe acreditarse según nuestro derecho, en escritura pública, cuyo documento exige también el art. 82 de la ley hipotecaria para que pueda cancelarse la inscripción de la carga redimida:

Considerando que las capellanías colativas declaradas subsistentes en el artículo 4.º del citado Convenio no pertenecen á las familias, porque si bien la citada ley de 1841 les dió derecho á adquirirlos no llegó á consumarse la adquisición por no haberlos reclamado judicialmente:

Considerando que el Convenio de 24 de Junio ha respetado el referido derecho y establecido en su consecuencia que, realizada que sea por las familias la conmutación de rentas, ó vendidos judicialmente en su defecto los bienes para ello necesarios, corresponden á aquéllas en calidad de libres los de las capellanías de que se trata.

Considerando que el título de la adquisición de estos bienes no puede ser otro que el de la fundación de la capellanía, con la alteración introducida en la misma por la ley de 1841; y la conmutación de rentas sólo es el cumplimiento de la condición que, según el cumplimiento ya citado, suspende la eficacia de dicho título:

Considerando que la disposición contenida en el art. 20 de la ley hipotecaria no es aplicable á los referidos títulos por ser anteriores á dicha ley, pero sí lo es á las ventas judiciales que se verifiquen para realizar la conmutación de las rentas, la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con el muy reverendo Nuncio apostólico, se ha servido dictar las disposiciones siguientes:

1.ª Los bienes de las capellanías colativas declaradas extinguidas pueden inscribirse en el Registro de la propiedad á favor de los que hubiesen reclamado judicialmente, presentando la ejecutoria que hayan obtenido ú obtengan, la escritura de fundación, y además las de inventario y partición en los casos necesarios.

2.ª Las cargas á que estén afectos los referidos bienes deben inscribirse á favor de la capellanía presentándose los documentos correspondientes si se quiere escribir el dominio, ú observándose lo establecido en el R. D. de 11 de Noviembre de 1864 si sólo se inscribe la posesión. En el caso de que por no hallarse inscrito el dominio de los bienes no fuera posible inscribir las referidas cargas, podrá practicarse lo dispuesto en los arts. 317, 318 y 319 del reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria.

3.ª La redención de las expresadas cargas debe consignarse en escritura pública para que pueda ser inscrita.



4.<sup>a</sup> Los bienes de las capellanías colativas declaradas subsistentes, podrán inscribirse á favor de las familias, presentándose los documentos expresados en la disposición 1.<sup>a</sup> de esta Real órden, y además el documento ó acta librada por el respectivo diocesano, que acredite haberse realizado la conmutación de las rentas. Para verificarse dicha inscripción no es preciso que los bienes se inscriban previamente á favor de la capellanía de que proceden.

5.<sup>a</sup> Si se vendieren judicialmente bienes de la capellanía para realizarse la conmutación de las rentas, las escrituras de venta no podrán ser inscritas sin que antes se inscriban los bienes á favor de la capellanía, bien sea la inscripción de dominio, ó só o la de posesión, observándose en este segundo caso lo prevenido en el citado Real decreto de 11 de Noviembre de 1864.—De Real orden, etc.—San Ildefonso 27 de Julio de 1868.—Coronado.

## NÚMERO 11.

### Modo de proceder en el examen de las personas solicitadas *ad turpia*.

Non raro ad hanc Congregationem Sanctae Romanae et Universalis Inquisitionis transmittuntur ab Ordinariis vel a sacra Poenitentiaria denunciationes contra Confessarios sollicitantes poenitentes ad turpia: et saepe accidit, ut in denunciationibus ipsis inducantur aliae poenitentes vel uti certo ad turpia sollicitatae, vel tantum ex indiciis inductae, quae tamen obligationi de denuntiatione emitenda iuxta Sacros Canones satis non fecerint. Ne autem crimen tam infandum absque debitis animadversionibus maneat, Sacra Congregatio ad tramitem Apostolicarum Constitutionum indicit locorum Ordinariis, ut inductas poenitentes opportuno examini subiiciant, ut inde legales probationes in processualibus tabulis resultent.

Verum experientia compertum est huiusmodi examina non ita scite seu legaliter assumi a Iudicibus delegatis; ita ut saepius causas ipsas, alioquin graviores et in damnum ac scandalum fidelium vertentes, prosequi datum non sit.

Quapropter ne in posterum ex enunciatis defectibus in examinibus assumendis causae contra sollicitantes infectae remaneant, Sacra Suprema haec Congregatio opportunum, immo necessarium censet locorum Ordinariis instructionem iuxta decreta ac ordinationes alias editas exaratam transmittere, qua examina poenitentium per generalia rite et legaliter prosequi valeant.

Praenotandum quod nimia circumspectione utendum est in personis ad examen invitandis; etenim non semper opportunum erit eas ad publicum Cancellariae locum convenire, praesertim si examini subiiciendae sint vel puellae, vel uxoratae, aut famulatu addictae; tunc enim consultum erit eas vel in sacratio, vel alio iuxta prudentem Ordinarii seu Iudicis aestinationem caute convocare ad ea-

rum examen assumendum. Quod si examinandae vel in Monasteriis aut Nosocomiis seu in piis puellarum domibus existant, tunc magna cum diligentia et diversis diebus iuxta circumstantias peculiare vocandae erunt.

Insuper animadvertant Iudices ad examina assumenda deputati, quod in eorum et Cancellarii seu Notarii (qui semper Ecclesiastici esse debent) praesentia examinanda exclusive compareat absque socia, absque teste: etenim omnia sub inviolabili secreto perfici necesse est.

Tandem de actibus inde assumptis Ordinarii debent transmittere ad hanc Supremam Congregationem exemplar authenticum et cum suo originali collatum.

Hisc generatim praemonitis subnectitur norma examinis conficiendi.

Datum Romae die 20 Iulii 1890.—R. Card. MÓNACO.

#### NORMA EXAMINIS PER GENERALIA ASSUMENDI.

Vigore epistolae Sacrae supremae Congregationis datae sub die .... (vel vigore Decreti Illustrissimi ac Reverendissimi Domini Archiepiscopi, Ordinarii) vocata personaliter comparuit coram Illustrissimo ac Reverendissimo Domino N. N.istente in Cancellaria (vel in sacratio aut in collocutorio Monialium seu pia domus) in meique etc.

N. N. nubilis (vel uxorata) degens in hac Civitate N. N. in paroecia N. N., filia (vel uxor) N. N., aetatis suae..... conditionis civilis (aut agricolae aut famulae addictae) cui delato iuramento veritatis dicendae, quod praestitit tactis SS. Dei Evangelii, fuit.

*Inter.* An sciat vel imaginetur causam suae vocationis et praesentis examinis?

*Resp.* .....

*Inter.* A quot annis usa sit accedere ad Sacramentum poenitentiae?

*Resp.* .....

*Inter.* An semper apud unum eundemque Confessarium Sacramentum poenitentiae receperit vel apud plures Sacerdotes: insuper an in una, eademque, vel in pluribus Ecclesiis?

*Resp.* .....

*Inter.* An a singulis quibus confessa est Sacerdotibus exceperit sanctas admonitiones, et opportuna praecepta, quae ipsam examinatam edificarent, et a malo arcerent, et quatenus etc.

*Resp.* .....

*Notandum:* si responsio fuerit affirmativa, id est si dicat, se bene semper fuisse directam, tunc interrogatur sequenti modo:

*Inter.* An sciat vel meminerit aliquando dixisse vel audivisse, quod quidem Confessarius non ita sancte et honeste sese gesserit erga poenitentes; quin murmuraciones, seu verba contemptibilia contra ipsum Confessarium, prolata fuerint;

ex. gr. quod ipsa Examinata ab uno vel a pluribus poenitentibus, atque ab uno abhinc anno, vel a quatuor, aut tribus mensibus similia audierit?

*Notandum:* Si post hanc interrogationem et animadversionem examinata negare pergat, claudatur actus consueta forma, quae ad calcem huius instructionis prostat.

At si quidquam circa aliquem confessarium, iuxta ea de quibus interrogatur, aperuerit, ulterius interrogabitur prout sequitur:

*Inter.* Ut exponat nomen, cognomen, officium, aetatem Confessarii, et locum seu sedem confessionis: an sit presbyter Saecularis vel Regularis, et quatenus etc.

*Resp.* .....

*Inter.* Ut exponat seriatim, sincere et clare ea omnia, quae in Sacramentali confessione vel antea vel postea vel occasione confessionis audierit a Confessario praedicto minus honesta: vel an ab eodem aliquid cum ipsa inhoneste actum fuerit nutibus, tactibus seu opere, et quatenus etc.

*Notandum:* hoc loco iudex solerter curabit ut referantur iisdem verbis, quibus confessarius usus fuerit, sermones turpes, seductiones, invitamenta conveniendi in aliquem locum ad malum finem, aliaque omnia, quae crimen sollicitationis constituunt, adhibita vernacula lingua in qua responsiones sedulo et iuxta veritatem exarabuntur; animum addat examinatae, si animadvertat, eam nimio timore aut verecundia a veritate patefacienda praepediri, eidem suadens omnia inviolabili secreto premenda esse. Denique exquiret tempus a quo sollicitationes inceperint, quamdiu perduraverint, quoties repetitae, quibus verbis et actibus malum finem redolentibus expressae fuerint. Cavebit diligenter ab exquirendo consensu ipsius examinatae in sollicitationem, et a quacumque interrogatione, quae desiderium prodat cognoscendi eiusdem peccata.

*Inter.* An sciat vel dici audierit praedictum Confessarium alias poenitentes sollicitasse ad turpia; et quatenus eas nominet (atque hic iubebit nomen, cognomen et saltem indicia claria, quibus aliae personae sollicitatae detegi possint).

*Notandum:* Si forte inducantur aliae personae sollicitatae, erit ipsius iudicis eas prudenter advocare et singillatim examinare iuxta formam superius expositam.

*Resp.* .....

*Inter.* De fama praedicti Confessarii tam apud se quam apud alios?

*Resp.* .....

*Inter.* An praedicta deposuerit ex iustitiae et veritatis amore, vel potius ex aliquo inimicitiae vel odii affectu, et quatenus etc.

*Resp.* .....

Quibus habilis et acceptatis dimissa fuit iurata de silentio servando iterum tactis SS. Dei Evangelii, eique perlecto suo examine in confirmationem praemissorum se subscripsit (si fuerit illiterata dicatur) et cum scribere nesciret fecit signum Cru—cis.

(subscriptio personae examinatae)

Acta sunt haec per me N. N. Cancellarium vel Notarium ad hunc actum assumptum.

FIN DEL TOMO TERCERO Y ÚLTIMO DE ESTA OBRA.







# ÍNDICE.

Páginas

## CONTINUACIÓN DEL LIBRO TERCERO.

### TÍTULO SEGUNDO.—Días festivos, ayunos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CAPÍTULO I.—Celebración de las fiestas.—Etimología de la palabra feria y sus distintos nombres.—Significación dada por la Iglesia á la palabra feria.—Acepciones en que se toma aquí.—Sus especies.—Fin de su institución.—Existencia de los días festivos en todos los pueblos.—Días festivos entre los cristianos desde un principio.—Otras festividades antiquísimas.—Autoridad que puede establecerlas.—Quién la ejerce en la Iglesia.—Tiempo en que empieza y termina la festividad.—Obligaciones que impone.—Si se podrá trabajar en los días festivos mediante necesidad.—A quién corresponde la reducción ó supresión de fiestas sagradas.—Si los fieles tendrán también esta facultad.—Reducción de fiestas en España..... | 5  |
| CAPÍTULO II.—Ayunos.—Significado de la palabra ayuno y su definición.—Origen del ayuno.—Sus especies.—Ayuno eclesiástico y en qué consiste.—Su distinción de la abstinencia.—Fin del ayuno y deberes que impone.—Colación y hora en que ha de tomarse.—Días de ayuno.—Ayunos prescritos por ley general.—Vigilias y su origen.—Reducción de ayunos en España.—Obligaciones que impone el precepto del ayuno.—A quiénes se extiende.....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 |

### TÍTULO TERCERO.—Cosas sagradas y benditas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CAPÍTULO I.—De las Iglesias y su erección.—Artículo 1.º—De las Iglesias en general.—Iglesia y sus distintos nombres.—Sus especies.—Las Iglesias en un principio y en tiempos posteriores.—Su forma en la antigüedad.—Partes interiores de que se componían.—Forma del vestíbulo y quiénes se colocaban allí.—Nave y á quiénes se admitía en esta parte de la Iglesia.—Santuario y quiénes podían colocarse en este lugar.—Al- |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| tar y su materia.—Número de ellos en cada Iglesia y su ornato.—Imágenes y pinturas en las Iglesias.—Partes exteriores de las Iglesias.—Forma moderna de las iglesias.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De la licencia necesaria para la construcción de Iglesias.—Erección de Iglesias Catedrales.—Causas para su concesión.—Si será necesaria la licencia pontificia para la erección de colegiatas.—Causas en que ha de fundarse.—Quiénes pueden autorizar la erección de Iglesias regulares.—Licencia del Obispo para la erección de Iglesias parroquiales.—Causas necesarias para ello en la erección por creación.—Requisitos necesarios para erigirse por división.—Oratorios públicos.—Quién puede autorizar su erección y mediante qué causas.—Oratorios privados y quién puede erigirlos.—A quién corresponde dar su licencia para que pueda celebrarse en ellos el Santo Sacrificio.—Derecho de los Obispos á celebrar en sus oratorios y á usar altar portátil.—Dotación de las Iglesias y personas que tienen este deber.—Solemnidades en la erección de una Iglesia..... | 27 |
| <i>Artículo 3.º</i> —Reparación de las Iglesias.—A quién corresponde la reparación de Iglesias.—Disciplina particular de España.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 |
| CAPÍTULO II.—Consagración y bendición de Iglesias y otros objetos del culto.— <i>Artículo 1.º</i> —De la consagración ó bendición de las Iglesias y su profanación.—Consagración de Iglesias y su origen.—Su necesidad.—Cuándo puede celebrarse fuera de la Iglesia.—A quiénes compete la consagración de Iglesias.—Ministro ordinario de la consagración ó bendición de ellas.—Ministro extraordinario.—Diferencia entre la consagración y bendición de una Iglesia.—Ritualidades en la consagración de las Iglesias.—Si la consagración de una Iglesia puede reiterarse.—Casos en que tiene lugar la violación de las Iglesias.—Su reconciliación.....                                                                                                                                                                                                                                            | 36 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De la consagración ó bendición de los objetos del culto y su profanación.—Distintas clases de altares y su materia.—Su consagración y quién la hace.—Si podrá reiterarse.—Execración de altares.—Observaciones.—Materia empleada antiguamente en la construcción de cálices y patenas.—Cuál ha de ser su materia en la actualidad.—Su consagración y quién la hace.—Su execración.—Campanas en la Iglesia y su objeto.—Su consagración.—Si pueden colocarse en los oratorios privados.—Bendición de vasos y ornamentos sagrados.—Quién la hace...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 |
| CAPÍTULO III.—Cementerios.— <i>Artículo 1.º</i> —De los cementerios en general.—Etimología de la palabra cementerio y su definición.—Sus especies.—Especies de cementerio religioso.—Especies de cementerio particular.—Sitio en que se constrúan.—Enterramiento en las Iglesias.—Su causa ó motivo.—El cementerio entre los romanos.—Requisitos necesarios en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| el cementerio católico.—Violación del cementerio.—Sus efectos.—Reconciliación del cementerio violado.—Derecho en los fieles á elegir sepultura.—Quiénes no tienen este derecho.—Enterramiento en panteón ó sepulcro de familia.—Reglas que han de tenerse presentes.—Enterramiento en el cementerio de la parroquia.—Observaciones.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48 |
| <i>Artículo 2.º</i> —Derechos parroquiales con motivo del sepelio fuera de la parroquia.—Porción canónica parroquial.—A quién corresponde.—Su fundamento.—De qué cosas se ha de abonar.—Otros derechos del Párroco con este motivo.—Quién ha de abonarla.—Cosas excluidas de la porción canónica.—Cuándo no hay derecho á ella.—Si la porción canónica pertenece en su totalidad á la parroquia.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58 |
| <i>Artículo 3.º</i> —Privación de sepultura eclesiástica.—Fundamento de la privación de sepultura eclesiástica.—Los no bautizados están excluidos de sepultura eclesiástica.—Si se hallan en igual caso los herejes y cismáticos etc.—Usureros, ladrones y los que faltan al voto de pobreza.—Blasfemos y los que faltan al precepto pascual.—Pecadores públicos y los que mueren en torneos.—Suicidas, duelistas y públicos percuores de clérigos.—Legislación particular de España sobre cementerios.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62 |
| CAPÍTULO IV.—Inmunidad de las Iglesias y cementerios.— <i>Artículo 1.º</i> —De la inmunidad local.—Inmunidad eclesiástica y sus especies.—Inmunidad local y su fundamento.—La inmunidad local en los antiguos pueblos.—La inmunidad de las Iglesias entre los cristianos.—Procede de derecho natural.—Partes que comprende.—Especies de actos prohibidos en las Iglesias.—Actos judiciales prohibidos en las Iglesias.—Se prohíben los mercados y contratos.—Reuniones profanas y otros actos de igual índole.—Custodia de alhajas en las Iglesias.—Si las iglesias podrán destinarse para cuarteles.—Disciplina particular de España sobre este punto.....                                                                                                                                                                                                                                  | 65 |
| <i>Artículo 2.º</i> —Del asilo eclesiástico.— <i>Párrafo 1.º</i> —Del asilo eclesiástico en general y su extensión.—Etimología de la palabra asilo y su definición.—En qué consiste el asilo.—Su antigüedad.—Si procede de derecho natural.—Si es de derecho divino positivo.—El asilo procede de derecho eclesiástico y civil.—Disposiciones de la Iglesia acerca del asilo eclesiástico.—Su conveniencia.—Si fué útil en la extensión que llegó á dársele.—Si puede abolirse por la costumbre.—Si este privilegio es de estricta interpretación.—Razones en que se apoya la opinión contraria.—Lugares que gozan del derecho de asilo.—Si se extiende á las cruces colocadas en los caminos y lugares donde se hallan reliquias de santos.—Personas á quienes se extiende.—Si comprende á los infieles y herejes.—Sentido en que los clérigos gozan del asilo.—Su extensión á los esclavos |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| deudores y fugitivos.— <i>Párrafo 2.º</i> .—Delitos excluidos del asilo y efectos de este.—Delitos excluidos del derecho de asilo.—Efectos del asilo eclesiástico.—El asilo eclesiástico en España. . . . .                                                                                                                                               | 69 |
| CAPÍTULO V.—Veneración de los santos y de sus reliquias é imágenes.—                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| <i>Artículo 1.º</i> .—Del culto de los santos.—Culto y sus distintos nombres.—Sus especies.—Culto de los santos.—Utilidad de su invocación.—Quiénes llevan este título.—Autoridades que lo concedían en la antigüedad.—Su reserva á la Santa Sede.—Grados distintos entre los que mueren en opinión de Su Santidad.—Beatificación y canonización. . . . . | 82 |
| <i>Artículo 2.º</i> .—Reliquias de los Santos y sus especies.—Su veneración y clase de culto que se las tributa.—Condiciones necesarias al efecto.—Exposición de reliquias y si pueden venderse.—Su traslación y sustracción. . . . .                                                                                                                     | 86 |
| <i>Artículo 3.º</i> .—De las sagradas imágenes, lugares santos y Romerías.—Sagradas imágenes y culto debido á las mismas.—Lugares santos y su veneración.—Romerías y su origen.—Su forma y especies. . . . .                                                                                                                                              | 91 |

#### TÍTULO CUARTO.—Edificios destinados á la enseñanza y beneficencia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO I.—Escuelas destinadas á la enseñanza.— <i>Artículo 1.º</i> .—De las escuelas en general y de las elementales, secundarias y teológicas de las Iglesias en particular.—Escuelas y sus especies.—Escuelas primarias ó elementales.—Escuelas secundarias ó de segunda enseñanza.—Escuelas teológicas en las catedrales.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93  |
| <i>Artículo 2.º</i> .—De los seminarios.—Significado de la palabra seminario y su definición.—Sus especies.—Origen de los Seminarios.—Obligación de erigirlos y en qué Iglesias.—Fondos que habrán de utilizarse al efecto.—A quiénes se recibirá en los seminarios para su educación.—Disposiciones relativas á los que poseen beneficios con obligación de enseñar.—Instrucción y educación que ha de darse en el Seminario.—Otras disposiciones del Concilio de Trento sobre los Seminarios.—Cuentas de su administración temporal.—Régimen del seminario por religiosos regulares.—Legislación particular de España acerca de los Seminarios..... | 97  |
| <i>Artículo 3.º</i> .—De las Universidades.—Significado de la palabra universidad y sus distintos nombres.—Su definición y origen.—Fin y utilidad de las mismas.—Su erección y régimen.—Número de facultades.—Reglamentos especiales para los estudiantes de Bolonia y París.—Grados canónicos en las Universidades.—Requisitos para obtenerlos.—Privilegios de los doctores.....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 |
| CAPÍTULO II.—Establecimientos de beneficencia.—Significado de la pala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

bra hospital y su definición.—Sus distintos nombres.—Sus especies.—Especies de hospitales eclesiásticos.—Origen de los hospitales.—Su propagación.—Autoridad del Obispo en los Hospitales.—Disposiciones vigentes sobre esta materia.—Establecimientos de beneficencia en España... 110

# **TITULO QUINTO.—Bienes temporales de la Iglesia.**

CAPÍTULO I.—Bienes de la Iglesia en general.—*Artículo 1.º*—Derechos de la Iglesia para adquirir bienes temporales.—Bienes temporales y facultad en la Iglesia para adquirirlos según el derecho natural.—Su atribución en cuanto á esto por derecho divino positivo.—Leyes civiles que limitan este derecho de la Iglesia.—Si pueden justificarse.—Su condenación.—Disciplina particular de España sobre esta materia..... 116

*Artículo 2.º*—De la inviolabilidad de los bienes eclesiásticos.—Penas contra sus trasgresores.—A quiénes comprende.—Disciplina particular de España.—*Artículo 3.º*—De la inmunidad de los bienes eclesiásticos.—Inmunidad real y sus especies.—Bienes eclesiásticos y sus especies.—Su exención.—Inmunidad de los bienes que pertenecen á la fundación y dotación de las Iglesias.—Inmunidad de los bienes que pasaron al dominio de las Iglesias por otros títulos.—Si esta inmunidad se extiende á los bienes que antes de pasar al dominio de las Iglesias se hallaban gravados con cargas impuestas por el Estado.—Inmunidad en general de los bienes de los clérigos.—Si se extiende á los bienes procedentes de diezmos ó predios eclesiásticos.—Si dicha inmunidad tiene lugar en los bienes patrimoniales.—Si los clérigos habrán de contribuir á las necesidades municipales.—Condiciones necesarias para gravar los bienes de los clérigos en los casos citados.—Quiénes se hallan comprendidos en la inmunidad real.—Si la inmunidad real procede de derecho divino.—Si es de derecho natural.—Si es de derecho de gentes.—Si la expresada inmunidad será de derecho civil.—Origen de la inmunidad real según otros.—Penas contra los que quebrantan la inmunidad de dichos bienes.... 118

CAPÍTULO II.—Dominio, administración y enajenación de los bienes eclesiásticos.—*Artículo 1.º*—Del dominio de los bienes eclesiásticos.—Los clérigos son dueños de los bienes patrimoniales y cuasi patrimoniales.—Si tienen perfecto dominio en los frutos de sus beneficios.—En quién radica el dominio de los bienes eclesiásticos..... 130

*Artículo 2.º*—Administración de los bienes eclesiásticos.—A quién pertenece la administración de los bienes eclesiásticos.—Quiénes son los administradores de ellos.—Clasificación de las distintas cosas de la Iglesia.—Especies de cosas corporales.—Clases de cosas inmuebles.—Especies de cosas muebles.—Significado que tiene en este lugar la palabra iglesia... 132



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Artículo 3.º</i> —Enajenación de los bienes eclesiásticos.—Enajenación en su sentido estricto y lato.—Sentido en que aquí se toma.—Cosas que no pueden enajenarse libremente.—Actos y contratos á que se extiende la prohibición de enajenar los bienes eclesiásticos.—Si el prelado ó rector de una Iglesia podrá renunciar la herencia dejada á la misma.—Si los bienes de una Iglesia podrán hipotecarse, trasladarse á otra Iglesia ó sujetarse á servidumbre.—Cosas que pueden enajenarse sin las solemnidades de Derecho.—Causas necesarias para la enajenación de los bienes eclesiásticos.—Solemnidades que habrán de observarse.—Efectos de la enajenación de cosas eclesiásticas.—Penas antiguas contra los que enajenan indebidamente las cosas eclesiásticas.—Legislación vigente sobre esta materia.—Causas que excusan de incurrir en dichas penas.—Disciplina particular de España..... | 136 |
| CAPÍTULO III.—Oblaciones, primicias y diezmos.— <i>Artículo 1.º</i> —De las oblaciones.—Acepciones de la palabra oblación.—Su definición en este último sentido.—Su distinción de los diezmos, primicias y del sacrificio.—Sentido en que aquí se toma.—Su origen.—Carácter de las oblaciones.—Si se recibían de todos los cristianos.—A quién correspondía la administración de las oblaciones.—Especies de estas.—Oblaciones que han sucedido á las antiguas.—Si son obligatorias.—Oblaciones ú obvenciones que pertenecen á la Iglesia parroquial.—Cuáles corresponden al Párroco.—Oblaciones ú obvenciones propias de los demás clérigos.—A quién corresponden las oblaciones hechas á ciertas imágenes ó determinados santuarios.—Autoridad del obispo con respecto á esta materia.—Si podrá disponer de las oblaciones hechas á una Iglesia en favor de otra.....                                   | 148 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De las primicias.—Primicias y su origen.—Si los cristianos vienen obligados á satisfacerlas.—Disciplina particular de España.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 155 |
| <i>Artículo 3.º</i> —De los diezmos.—Diezmos y su origen.—Sus especies.—Especies de diezmos eclesiásticos.—Especies de diezmos espirituales.—Especies de diezmos prediales.—Si la obligación de pagar los diezmos procede de derecho divino ó eclesiástico.—De qué cosas se han de abonar y cómo.—A quiénes compete el derecho de percibir los diezmos.—Modo de eximirse de esta obligación.—Penas contra los defraudadores de los diezmos.—Disciplina particular de España.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156 |
| CAPÍTULO IV.—Otros bienes y rentas de la Iglesia en los tres primeros siglos.—Adquisición de bienes inmuebles por la Iglesia desde la paz de Constantino.—Medios legítimos utilizados en su adquisición.—Disposiciones dictadas por los emperadores en este sentido.—Donaciones <i>inter vivos</i> .—Donaciones <i>causa mortis</i> y con motivo del clericalto y monacato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| —Adquisiciones debidas á su economía é industria.—Significado de la palabra precaria y su definición.—Origen de las precarias.—Su materia, sujeto ó causa eficiente.—Tiempo y motivo para concederlas.—Causa y solemnidades necesarias.—Feudos y regalías.—Fundaciones y cosas que las constituyen.—Su aceptación y por quién.—Requisitos necesarios al efecto.—Cumplimiento de las cargas impuestas en la fundación.—Cuándo cesan aquellas.—Su reducción.—Quien la hace.—Formalidades en su ejecución.—Disciplina particular de España..... | 164 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## TITULO SEXTO.—Beneficios eclesiásticos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO I.—Beneficios y su erección.— <i>Artículo 1.º</i> —De los beneficios en general.—Origen de la palabra beneficio y su definición.—Sus requisitos esenciales.—En qué se distingue de las prebendas y capellanías.—Su diferencia de los legados píos y pensiones.—Origen de los beneficios en las Catedrales y Colegiatas.—Desde cuándo data en las demás Iglesias.—Clases de beneficios.—Sus especies por razón del oficio espiritual.—Beneficios mayores y cuáles se hallan en este caso.—Beneficios menores y sus especies.—Beneficios simples y sus especies.—Beneficios dobles.—Especies de beneficios por razón de las personas que los confieren.—Sus clases por razón de las personas á quienes se confieren.—Sus especies por el modo de conferirlos.—Sus especies por razón de su duración..... | 173 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De la erección de beneficios.—Creación ó erección de beneficios y requisitos necesarios al efecto.—Si la creación de obispados corresponde al poder civil.—Autoridad á quien compete la creación de beneficios mayores.—A quién corresponde la erección de beneficios menores.—Solemnidades con que ha de hacerse.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182 |
| CAPÍTULO II.—Innovación de los beneficios.—Innovación y cuándo tiene lugar.—Diversos modos de verificarse.— <i>Artículo 1.º</i> —De la unión de beneficios.—Unión de beneficios y sus especies.—Incorporación de beneficios y sus clases.—Autoridad á quien compete la unión de beneficios.—Causas legítimas para ello.—Solemnidades que han de observarse.—Casos en que procede la separación de los beneficios que se han unido.—Autoridad á quien compete.—Sus efectos.—Beneficios que no pueden unirse.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 186 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De la división de beneficios.—División de beneficios y causas en que ha de fundarse.—Autoridad á quien compete hacerla y reglas que han de tenerse presentes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 195 |
| <i>Artículo 3.º</i> —De la desmembración de beneficios.— <i>Párrafo 1.º</i> —Desmembración de beneficios en general.—Casos en que tiene lugar.—Causas justas para ello.—Autoridad competente y solemnidades necesarias.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Párrafo 2.º</i> —De las pensiones sobre los frutos de un beneficio.—Pensión y sus especies.—Pensión laical y á quién puede concederse.—Pensión eclesiástica y sus especies.—Si es beneficio.—Quiénes pueden imponerlas.—Causas para ello —Reglas que han de tenerse presentes.—Beneficios sobre los que pueden imponerse pensiones y sobre qué frutos.—Si pueden concederse á los legos.—A quiénes puede concederse pensión eclesiástica.—Obligaciones de los agraciados con pensión eclesiástica.—Si pueden venderse.—Modo de extinguirse las pensiones.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 197 |
| <i>Artículo 5.º</i> —De la supresión de beneficios.—Supresión de beneficios y modo de verificarse.—Causas para ello y si podrá hacerse por el Obispo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206 |
| <b>CAPÍTULO III.</b> —Pluralidad de beneficios.— <i>Artículo 1.º</i> —De la pluralidad de beneficios en general.—Pluralidad de beneficios y leyes de la Iglesia que la prohíben.—Causas justas para que una persona posea dos ó más beneficios.—Autoridad del Papa para conceder muchos beneficios á una persona.—Si se extiende á los obispos y otros prelados.—Casos en que pueden obtenerse muchos beneficios sin necesidad de dispensa.—Beneficios compatibles é incompatibles y su origen.—División de los beneficios incompatibles.—Beneficios <i>sub eodem vel diverso tecto, uniformes vel diformes</i> .—Razón de estas distinciones.—Breve reseña de los beneficios incompatibles.—Disciplina antigua sobre la vacante de uno de los beneficios obtenidos por una misma persona.—Disposiciones lateranenses sobre esta materia.—Decreto de Juan XXII acerca de este punto.—Legislación tridentina..... | 207 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De las encomiendas de beneficios.—Etimología de la palabra encomienda y su definición.—Origen de las encomiendas de beneficios.—Causas de su institución.—Si las encomiendas son beneficios.—Sus vicisitudes hasta Clemente V.—Disposiciones legales acerca de las encomiendas.—Quién puede concederlas.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215 |
| <b>CAPÍTULO IV.</b> —Provisión de beneficios en general.—Introducción.—Provisión de beneficios y actos que comprende.—Colación de beneficios y sus especies.— <i>Artículo 1.º</i> —De la elección y maneras de verificarse.—Elección y sus especies.—Elección por escrutinio y sus condiciones.—Elección por compromiso y sus reglas.—Elección por inspiración ó cuasi inspiración.—Postulación y sus especies.—En qué se distingue de la elección.—Sus requisitos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De la elección de Obispos hasta el derecho de Decretales —Elección del Sumo Pontífice.—Elección de obispos en los tiempos antiguos.—Elección de obispos por el Metropolitano y obispos comprovinciales.—Cuándo se nombraba por el Metropolitano un obispo visitador.—Exclusión del pueblo é intervención de los próceres en las elecciónes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| nes de obispos.—Disposiciones del concilio VIII general acerca de este punto.—Males que resultaron en Occidente de la intervención de los príncipes en la elección de Obispos.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 226 |
| <i>Artículo 3.º</i> —Del derecho de las decretales sobre la elección de obispos.—Elección de obispos por los cabildo; según el derecho de las decretales.—Requisitos en el que haya de elegirse y penas contra los electores que eligen á un indigno.—Solemnidades en la elección de obispos.—Aceptación del electo y su confirmación.—Tiempo dentro del cual habrá de consagrarse.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 229 |
| <i>Artículo 4.º</i> —De la elección de obispos desde el siglo XIV.—Elección de obispos reservada al Sumo Pontífice.—Motivos de esta reserva.— <i>Artículo 5.º</i> —De la elección de obispos en la actualidad.—Derecho vigente.—Países infieles.—América.—Inglaterra.—Prusia.—Oriente.—Otras naciones de Europa.—Juramento de fidelidad.—Provisión de Obispos en España.—Bulas que se expiden al electo.—Juramento de fidelidad...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232 |
| CAPÍTULO V.—Provisión de beneficios menores.—A quiénes compete la colación de beneficios.— <i>Artículo 1.º</i> —De la provisión de beneficios <i>jure plenario</i> .—Derecho del Papa á conferir los beneficios <i>jure plenario</i> .—Diversas formas en que usó de este derecho.—Mandatos de providendo y gracias expectativas.—Sus especies.—Si se seguía un orden gradual en su expedición.—Su abolición.—Derecho de concurso.—Afección y cuándo tiene lugar.—Devolución y su origen.—A quién corresponde la provisión de beneficios en este caso.—Reservas apostólicas y beneficios reservados.—En qué convienen con los beneficios afectos y su distinción.—Sus especies.—Reservas comprendidas en el cuerpo del derecho.—Beneficios reservados en las extravagantes.—Reservas contenidas en las reglas de cancelaría.—Modificaciones introducidas en esta materia por los Concordatos.—Anatas y sus clases.—Motivos de su institución.—Diversas letras pontificias en la provisión de beneficios..... | 236 |
| <i>Artículo 2.º</i> —De la provisión de beneficios <i>jure ordinario</i> .—Derecho de los Obispos á proveer los beneficios <i>jure ordinario</i> .— <i>Párrafo 1.º</i> —De la provisión de prebendas en las Catedrales y Colegiatas.—Provisión de dignidades, canonicatos y prebendas de las Catedrales y Colegiatas.—Provisión de las prebendas de oficio.—Legislación particular de España.— <i>Párrafo 2.º</i> —De la provisión de parroquias.—Provisión de parroquias con arreglo al Concilio de Trento.—Disposición de S. Pío V acerca de este punto.—Decreto de la Sagrada Congregación del Concilio de Trento acerca de la provisión de parroquias.—Qué se dispone para el caso de apelación interpuesta por el que se considera agraviado.—Recomendación á los ordinarios de la expresada forma de Concurso en la provi-                                                                                                                                                                             |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| sión de parroquias.—Constitución <i>cum illud</i> de Benedicto XIV sobre esta materia. —Disciplina particular de España.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247 |
| <i>Artículo 3.º</i> —De la provisión de beneficios por derecho delegado.—Derecho de otras personas á proveer los beneficios.—Si los canónigos pueden proveer beneficios.— <i>Artículo 4.º</i> —De las personas que pueden obtener beneficios y forma de provisión.—Quiénes pueden obtener beneficios.—Disposiciones relativas á España.—Forma que ha de observarse en su provisión.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257 |
| CAPÍTULO VI.—Derechos de patronato.—Acepciones de la palabra institución.—Su definición y especies.—Antigüedad de la palabra patronato y á quién se llamaba patrono.—Su definición.—Fundamento del derecho de patronato.—Su origen.—Causas de su concesión.—Especies de patronato y manera de distinguirlas.—Diferencias entre el patronato eclesiástico y laical.—Modos de adquirirse.—En qué consiste la fundación, construcción y dotación.—Cómo se adquiere por privilegio.—Requisitos necesarios para adquirir el patronato por prescripción.—Reglas que han de tenerse presentes.—Cómo se trasmite á otras personas.—Manera de probarse este derecho.—Personas que pueden adquirirlo.—Derechos y obligaciones de los patronos.—Presentación y forma de hacerla cuando corresponde á varias personas.—Obligación del patrono á presentar persona idónea.—Tiempo y forma en que el patrono eclesiástico ha de utilizar este derecho.—Tiempo y forma en que el patrono lego ha de usar de su derecho.—Razón de las diferencias que median entre una y otra presentación.—Cuándo el trascurso del tiempo no inhabilita al patrono para presentar.—Obligación del ordinario á nombrar el presentado.—Cesación en el patronato por delito.—Cesación en el patronato por otras causas.—Institución autorizable y á quién corresponde.—Examen que ha de preceder.—Si la jurisdicción autorizable podrá adquirirse por costumbre.—Institución corporal y si podrá tomarse por propia autoridad.—Quién ha de darla y en qué forma.—Observaciones.—Disciplina particular de España..... | 261 |
| CAPÍTULO VII.—Derechos y obligaciones de los beneficiados y cesación en los beneficios.— <i>Artículo 1.º</i> —Del peculio de los clérigos.—Significado de la palabra peculio.—Usos á que ha de destinarse el peculio de los clérigos.—De dónde procede esta obligación.—Reglas que han de tenerse presentes.—Si el clérigo podrá disponer por testamento de los bienes beneficiados.—Disciplina particular de España.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 283 |
| <i>Artículo 2.º</i> —Obligaciones de los beneficiados y modos de perderse los beneficios.— <i>Párrafo 1.º</i> —Renuncia de los beneficios.—Renuncia y sus especies.—Clases de renuncia expresa.—Diferentes nombres de la renun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| cia condicional y modos de verificarse.—Si los beneficiados pueden renunciar sus beneficios.—Beneficios que no pueden renunciarse.—Personas que no pueden renunciar sus beneficios.—Causas justas para la renuncia de obispados.—Si tienen lugar en la renuncia de otros beneficios.—Otras causas para la renuncia de los demás beneficios.—Forma en que ha de hacerse la renuncia.—Consentimiento del Superior.—Ante quien han de hacerse las renunciaciones de beneficios mayores y las condicionales con reserva ó en favor.—Efectos de la renuncia.—Disciplina particular de España..... | 286 |
| <i>Párrafo 2.º</i> —Permuta de beneficios y causas en que ha de fundarse.—Necesidad de que la autoridad eclesiástica intervenga en este acto.—En quién radica.—Observaciones.—Disciplina particular de España.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295 |
| <i>Párrafo 3.º</i> —Traslación y beneficios en que puede tener lugar.—Causas justas para la traslación.—Autoridad que ha de concederla.—Consentimiento de los interesados.—Efectos de la traslación de Obispos.—Disciplina particular de España acerca de este punto.—Efectos de la traslación en los demás beneficios.....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 298 |
| <i>Párrafo 4.º</i> —Cesación en los beneficios.—Diferentes modos de cesar en los beneficios.—Cesación en los beneficios <i>ipso jure</i> por causa necesaria.—Cesación en los beneficios por sentencia judicial.—Efectos distintos de la privación de beneficios <i>ipso facto</i> ó por sentencia judicial.—Reglas que han de observarse en los beneficios vacantes.—Disciplina particular de España.....                                                                                                                                                                                   | 302 |
| CAPÍTULO VIII.—Beneficios impropios.— <i>Artículo 1.º</i> —De los beneficios impropios en general.—Beneficios impropios y sus diversas clases.— <i>Artículo 2.º</i> —De las Capellanías.—Capellanías y razón de este nombre.—Su origen.—Sus especies.—Si se distinguen de los aniversarios ó legados píos.—Reglas para distinguir las capellanías eclesiásticas de las laicales.—Efectos distintos según la diversa naturaleza de las capellanías.—Disciplina particular de España.....                                                                                                      | 305 |

## LIBRO CUARTO.

### PENAS Y DELITOS.

#### TITULO PRIMERO.—Penas eclesiásticas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO I.—De las penas eclesiásticas en general.—Penas en su sentido lato y estricto.—Sus requisitos esenciales.—Causa motiva de la privación del bien.—Pena eclesiástica y en qué se distingue de la restitución.—Fin de la pena eclesiástica.—Sus distintos grados.—Si se designaron siempre con unas mismas palabras.—Uso indistinto de las palabras penitencia, censura y pena en los textos legales y su motivo.—Si convienen entre sí.—En qué se distinguen.—Conveniencia entre sí de la penitencia y censura y su distinción de la pena.—En qué convienen la censura y la pena y su distinción de la penitencia.—Conveniencia entre sí de la penitencia y pena y su diferencia de la censura.—Especies de penas en general.—Clases de penas vindicativas.—En qué se distinguen las penas <i>á jure</i> de las penas <i>ab homine</i> .—Autoridad de la Iglesia para imponer penas.—Personas á quienes compete este derecho.—Sujeto capaz de incurrir en penas eclesiásticas.—Objeto de la pena y proporción entre ella y el delito.—Deberes del Juez en su aplicación.—Obligación del delincuente al cumplimiento de las penas.—Disciplina particular de España. .... | 313 |
| CAPÍTULO II.—Penitencias.—Penitencia y sus especies.—Si puede imponerse penitencia solemne ó pública.—Diferencia entre la penitencia pública, solemne y no solemne.—A quién compete imponer penitencia pública. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 326 |
| CAPÍTULO III.—De las censuras eclesiásticas en general.— <i>Artículo 1.º</i> —De las censuras y sus distintas especies.—Etimología de la palabra censura y su significación.—Sus distintas acepciones.—Su definición.—Clases de bienes espirituales y de cuáles priva la censura.—Distinción entre la censura y el pecado.—Diferencia entre la censura y la irregularidad.—Sus especies.—Distinción entre la censura <i>á jure</i> y la censura <i>ab homine</i> .—Diferencia entre la censura <i>late</i> y <i>ferende sententie</i> .—Casos en que la censura será <i>late sententie</i> .—Cuando será <i>ferende sententie</i> .—Distinción entre las censuras reservadas y no reservadas. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 328 |
| <i>Artículo 2.º</i> —Autoridades que pueden imponer censuras.—Si el poder civil tiene también este derecho.—Personas en quienes existe esta facultad por derecho ordinario.—Si los párrocos pueden imponer censuras.—Casos en que los Obispos pueden imponer censuras á sus súbditos hallán-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| dose fuera de la diócesis.—Si podrán imponerse censuras á súbditos ajenos.—Si los que tienen jurisdicción ordinaria pueden delegarla.—Cualidades necesarias en el sujeto á quien se delegue.—Personas á quienes no puede delegarse.—Reglas que han de tenerse presentes.—Condiciones necesarias en la persona para imponer censuras.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335 |
| <i>Artículo 3.º</i> —Del sujeto de las censuras eclesiásticas.—Personas sujetas á las censuras de la Iglesia.—Hombre ó mujer.—Viador.—Bautizado.—Capaces de dolo.—Si los impúberes pueden incurrir en censuras.—Súbdito del que la impone.—Quiénes no pueden incurrir en censuras.—El Papa.—Los obispos.—Los emperadores y reyes.—Religiosos exentos.—Nuncios y oficiales de la Curia Romana.—Si los clérigos ó legos delinquentes en su diócesis, incurren en censuras hallándose fuera de ella.—Si el obispo puede castigar al súbdito que delinque fuera de su diócesis.—Si los extranjeros y peregrinos pueden incurrir en censuras.—Reglas que han de tenerse presentes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345 |
| <i>Artículo 4.º</i> —De las causas para imponer censuras.—Delitos por los que pueden imponerse las censuras.—Pecado mortal.—Doctrina de Benedicto XIV acerca de este punto.—Consumado y perfecto.—Externo.—Propio.—Contumacia.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 354 |
| <i>Artículo 5.º</i> —Solemnidades en la imposición de las censuras.—Monición previa.—Sus requisitos.—Si la monición previa es necesaria en las censuras <i>à jure lata sententie</i> .—Si será necesaria en las censuras <i>ab homine lata sententie</i> .—Necesidad de la monición en las censuras <i>ferende sententie</i> .—Requisitos para su validez según las Decretales.—Decretales de Alejandro III é Inocencio III acerca de este punto.—Requisitos para su licitud según el derecho de las Decretales.—Disposición del Concilio de Trento sobre esta materia.—Solemnidad que acompaña á las censuras.—Necesidad de que la sentencia se dicte en día no festivo.—Se ha de consignar por escrito.—Penas contra el Juez que dicta sentencia de palabra.—Se ha de pronunciar ante testigos.—A presencia del delincuente.—Disposición de la ley civil en el procedimiento criminal.—Solemnidad que sigue á las censuras.—Advertencia.—Si el poder civil podrá inmiscuirse en estas materias.—Efectos de las mismas censuras.—Efectos de su trasgresión..... | 358 |
| <i>Artículo 6.º</i> —De las causas que eximen de incurrir en censuras.—Causas que excusan de incurrir en las censuras.—Exención de culpa.—Ignorancia y sus especies.—La ignorancia invencible exime de las censuras.—Si la ignorancia crasa ó supina exime de las censuras.—Se incurre en las censuras con ignorancia aceptada.—Miedo grave.—Impotencia física ó moral.—Voluntad de la parte interesada.—Si el acto prohibido no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fué completo.—Nulidad de la censura.—Si se incurre en la censura cuando no se ha cumplido la condición aneja á ella ó se apela ántes de cumplir.—Condiciones necesarias en la apelación.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370 |
| <i>Artículo 7.º</i> —Cesación de las censuras.—Introducción.—Modos de cesar las censuras.—Absolución de censuras.—Absolución por razón del fuero.—Su forma.—En el fuero interno.—En el fuero externo.—Observaciones. Forma solemne en la absolución de censuras.—Casos en que tiene lugar.—Absolución de censuras por razón del modo.— <i>Al cautelam</i> .—Absolución <i>al cautelam</i> , que precede á la de pecados.—Absolución <i>ad cautelam</i> provisional.—Su origen y necesidad.—Otros casos en que tiene lugar la absolución <i>ad cautelam</i> —Absolución <i>ad reincidentiam</i> .—Absolución de censuras por razón de la persona á quien se concede.—Si el delincuente habrá de prestar juramento de no volver á incurrir en la censura.—Penas excluidas de esta obligación.—Reglas que han de tenerse presentes.—Absolución de las censuras por razón de la persona que la concede.—Quiénes tienen esa facultad en caso de necesidad.—Obligaciones respectivas del absuelto y del que absuelve en estos casos.—Absolución de las censuras <i>ab homine</i> .—Si el metropolitano puede absolver de las censuras impuestas por sus sufragáneos.—Decretal de Inocencio IV acerca de este punto.—Quién puede absolver de la censura <i>ab homine</i> impuesta por mandato general.—Si habrá necesidad de pedir la absolución de censuras en caso de duda.—Reglas que han de tenerse presentes.—Censuras <i>à jure</i> y sus especies.—Absolución de las censuras en su sentido impropio.—Absolución de las censuras <i>à jure</i> no reservadas.—Absolución de las censuras <i>à jure</i> reservadas.—Facultad concedida por la bula de la Cruzada.—Atribuciones de los obispos en cuanto á las censuras reservadas al Sumo Pontífice.—Decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio.—Decreto Tridentino.—Si el obispo podrá absolver en el fuero de la conciencia de la herejía mixta.—Su facultad para absolver de ella en el fuero judicial.—Derecho de los obispos para absolver en ambos fueros á los imposibilitados de acudir á Roma y bajo qué condiciones.—Decretales de Alejandro III sobre este punto.—Decretal « <i>eos qui à sententia</i> » de Bonifacio VIII.—Decretal « <i>Ei noscitur</i> » de Clemente III.—Decretal « <i>Quamvis incidens</i> » de Gregorio IX.—Reglas que han de tenerse presentes.—Si los imposibilitados de acudir á Roma, están obligados á pedir la absolución Pontificia por carta ó procurador.—Personas que tienen imposibilidad de acudir á Roma.—Observaciones.—Si los obispos podrán absolver de la herejía notoria con notoriedad de hecho.—Atribuciones de los vicarios en esta materia.—Advertencia..... | 376 |

CAPÍTULO IV.—De la excomunión.—La comunión entre los fieles.—Personas excluidas de la comunión cristiana.—Motivo de esta exclusión.—Significado de la palabra excomunión y sus distintas especies.—Su definición.—Sus especies.—Orígen de la excomunión *lata sententia*.—Excomunión mayor y sus especies.—Sus efectos.—Consecuencias que resultaron de esto.—Constitución *ad evitanda scandala* de Martino V.—Su reproducción.—En favor de quíenes se dió.—Casos que comprende.—Necesidad de la declaración judicial respecto á los públicos percursores de clérigos.—Reglas que han de tenerse presentes.—Comunicación con los herejes.—Por razón de la herejía.—Constitución *cum sicut*.—Por razón de la excomunión.—Si los católicos podrían comunicar *in divinis* con los herejes.—Prohibición de recibir los sacramentos de ministros herejes.—Cosas permitidas á los católicos en esta materia.—Su asistencia á los templos hereéticos.—Si podrían ser padrinos en el bautismo de los herejes.—Reglas que han de tenerse presentes.—Significado de la palabra anatema.—Efectos de la excomunión mayor en el excomulgado.—Privación de los bienes espirituales comunes entre los fieles.—Privación de oficios y beneficios eclesiásticos.—Si el excomulgado puede ejercer jurisdicción eclesiástica y desempeñar otros cargos.—Privación de comunicación forense y civil.—Causas que permiten al excomulgado ejercer actos prohibidos al mismo.—Prohibición á los fieles de comunicar con los excomulgados vitandos.—Censura impuesta al que traspasa este mandato.—Si incurrén en pecado.—Casos en que los fieles pueden comunicar con los excomulgados vitandos.—Facultad para comunicar con el excomulgado tolerado.—Si los excomulgados tolerados pueden comunicar con los fieles.—Excomunión menor y sus efectos. ....

403

CAPÍTULO V.—De la suspensión.—Artículo 1.º—De la suspensión como censura.—Suspensión y en qué se distingue de las otras censuras.—Distinción entre la suspensión penal y medicinal.—Si la censura de suspensión se distingue de la suspensión impuesta al penitente por el confesor.—Clasificación de esta censura.—Especies de suspensión por razón de las funciones que prohíben ejercer al clérigo.—Especies de suspensión por razón de su duración.—Sus especies por razón de su causa motiva.—Quiénes pueden imponer esta censura.—A quíenes se impone.—Causas para ello.—Forma que ha de observarse en su imposición.—Requisitos en la sentencia de suspensión.—Efecto de la suspensión.—Absolución de ello. ....

429

Artículo 2.º—De la suspensión *ex informata conscientia*.—Su suspensión *ex informata conscientia* y su origen.—Facultad concedida por ella á los Prelados.—Requisitos necesarios para proceder *ex informata conscientia*.—



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Casos en que tiene lugar.—Reglas que han de tenerse presentes.—Forma de proceder en estos casos.—Efectos de la suspensión <i>ex informata conscientia</i> .—Derechos del que se considere agraviado.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 435 |
| CAPÍTULO VI.—Entredicho y cesación <i>á divinis</i> .—Artículo 1.º—Del entredicho.—Entredicho y en qué se distingue de la excomunión y suspensión.—Origen del entredicho personal.—Origen del entredicho local.—Sus especies.—Extensión del entredicho local.—A quiénes comprende el entredicho personal.—Sus causas.—Quiénes pueden imponerlo y á quiénes.—Forma en la imposición del entredicho.—Sus efectos.—Condiciones necesarias para que obligue el entredicho.—Penas contras los que lo quebrantan.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 442 |
| Artículo 2.º—De la cesación <i>á divinis</i> .—Cesación <i>á divinis</i> y en qué se distingue del entredicho.—Sus especies y quién puede imponerla.—Causa para ello y forma en su imposición.—Efectos de la cesación <i>á divinis</i> .—Obligación de observarla y su abrogación.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 449 |
| CAPÍTULO VII.—De las penas vindicativas.—Penas que la Iglesia tiene establecidas.—Penas contra los clérigos.—Penas temporales.—Infamia y sus especies.—Sus causas y efectos.—Privación de bienes de fortuna.—Sus efectos.—En qué se distingue de la suspensión, deposición é inhabilidad para obtener beneficios.—Deposición y sus especies.—Si se distingue de la privación de beneficios.—En qué conviene con la suspensión.—Sus diferencias.—Causas por las que se impone la deposición.—Si el depuesto conserva los privilegios del canon y del fuero.—Degradación y sus especies.—Distinción entre la degradación verbal y real.—En qué se distingue de la deposición simple.—Causas justas para la degradación.—Por quién ha de hacerse la degradación solemne y ante quién.—Forma de la degradación verbal según la legislación antigua.—Derecho vigente sobre esta materia..... | 452 |

## TÍTULO SEGUNDO.—De los delitos eclesiásticos.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO I.—Delitos en general.—Definición del pecado.—Delito y su distinción del crimen.—Diferencias entre el pecado y delito.—Especies de delitos.—Condiciones necesarias en el delito.—Si los párvulos incurrén en responsabilidad criminal.—Responsabilidad en los impúberes y púberes.—Penalidad en los mayores de edad..... | 461 |
| CAPÍTULO II.—Delitos contra Dios.—Significado de la palabra apostasía y su definición.—Sus especies.—Apostasía de la fé y sus clases.—Especies de apóstatas que pasaban al judaismo.—Especies de apóstatas que pasaban al gentilismo.—Lapsos y sus distintos nombres.—Clases de libelá-                                           |     |

ticos.—Modos de incurrir en la apostasía de la fé.—Penas contra los apóstatas de la fé.—Penas contra los lapsos.—Abjuración de la infidelidad.—Apostasía de desobediencia y su penalidad.—Apostasía del instituto regular y cuándo tiene lugar.—Su penalidad.—Apostasía del orden y penas que lleva anejas.—Significado de la palabra herejía y su definición.—Sus especies.—En qué consiste la herejía formal.—Remedios y precauciones de la Iglesia contra la herejía.—Penas contra los herejes.—Jueces en estas causas.—Denuncia de los herejes.—Comunicación con ellos.—Significado de la palabra cisma y su definición.—Quiénes son cismáticos.—Requisitos necesarios al efecto.—Especies de cisma.—En qué se distingue de la sedición y herejía.—Penas contra los cismáticos.—Comunicación con ellos.—Blasfemia y casos en que tiene lugar.—Su penalidad.—Divinación y sus especies.—Divinación por pacto con el demonio.—Leyes que la prohíben.—Magia y sus especies.—Si se distinguen de la divinación.—Su penalidad.—Si la Iglesia condena el magnetismo, sonambulismo y espiritismo.—Perjurio y su penalidad.—Violación del voto y penas contra los que le quebrantan...

465

CAPÍTULO III.—Delitos contra las cosas consagradas á Dios.—Sacrilegio en su sentido lato y estricto.—Sus especies.—Sacrilegio personal y modos de verificarse.—Sacrilegio local y casos en que tiene lugar.—Sacrilegio real y cuándo se verifica.—Penas contra los reos de sacrilegio personal.—Penalidad en que incurren los reos de sacrilegio local.—Penas contra los que enagenan las cosas eclesiásticas.—Penalidad contra los reos de hurto sacrilego.—Observación.—Abuso en el culto de los santos.—Rebaptizantes y rebautizados y su penalidad.—Recepción furtiva de los órdenes y su penalidad.—Penas contra los ordenados *per saltum*.—Penas contra los clérigos que ejercen solemnemente un orden no recibido.—Ejercicio de los órdenes por el clérigo depuesto ó excomulgado...

486

CAPÍTULO IV.—Simonía.—Etimología de la palabra simonía y su definición.—Gravedad de este delito.—Sus especies.—Requisitos necesarios para la existencia de este delito.—Si este existe cuando se intenta por una de las partes ó es ficticio por parte de la otra.—Si el obsequio temporal prestado con la esperanza de obtener un dón espiritual puede considerarse como simoníaco.—Precio simoníaco y puntos que comprende.—Reglas que han de tenerse presentes.—Si habrá simonía en redimir por precio la injusta vejación.—Merced simoníaca ó cosa espiritual.—Cosas que son objeto de merced simoníaca.—Penas contra los simoníacos.—Penas contra los que ordenan mediante simonía.—Penalidad en que incurren los ordenados simoníacamente.—Penas contra los reos de simonía en la concesión ó recepción de beneficios.—Penalidad contra los reos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| de simonía confidencial.—Pena contra los reos de simonía por ingreso en religión.—Penalidad por la simonía cometida en otras materias.—Censuras <i>latae sententiae</i> contra los simoníacos según el derecho vigente.—Restitución de las cosas recibidas mediante simonía.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 493 |
| CAPÍTULO V.—Delitos comunes contra el prójimo.—Delitos comunes contra el prójimo y sus especies.—Delitos contra la vida.—Significado de la palabra parricidio y su definición.—A quiénes comprende.—Penas contra los parricidas—Aborto y su penalidad.—Exposición de párvulos y lánguidos.—Su penalidad.—Homicidio y sus especies.—Penas contra los homicidas.—Suicidio y su penalidad.—Torneos y su penalidad.—Corridos de toros y su penalidad—Duelo y su penalidad por el derecho antiguo.—Disciplina del Concilio de Trento acerca de este punto.—Penas impuestas á los duelistas por Pío IV y Gregorio XIII.—Constituciones de Clemente VIII y Benedicto XIV sobre la misma materia.—Penalidad del duelo con arreglo á la bula <i>Apostolica Sedis</i> .—Sagitarios y ballistarios.— <i>Delicta carnis</i> .—Rapto y su penalidad.—Estupro en su sentido lato y estricto.—Su penalidad.—Fornicación en su sentido lato y estricto.—Su penalidad.—Concubinato y su penalidad por derecho antiguo.—Legislación tridentina respecto á los clérigos concubenarios.—Penas que impone á los legos reos de este delito.—Incesto y su penalidad en los clérigos.—Penas contra los legos incestuosos.—Sacrilegio carnal.—Sodomía.—Adulterio y su penalidad en los legos.—Penas contra los clérigos, reos de este delito —Lenocinium.—Poligamia.—Delitos contra los bienes temporales del prójimo.—Rapiña y su penalidad.—Incendarios y su penalidad.—Violadores de las Iglesias y su penalidad —Etimología de la palabra hurto y su definición.—Su penalidad.—Plagio y su penalidad.—Peculado.—Abigeatus.—Significado de la palabra usura y su definición.—Explicación de los términos usados en este concepto.—Especies de usura.—Su prohibición y penalidad.—Causas que excusan de incurrir en ella.— <i>Damnum emergens</i> .— <i>Lucrum cessans</i> .—Pena convencional.—Peligro de perder el capital.—Crimen <i>falsi</i> y sus especies.—Su penalidad..... | 506 |
| CAPÍTULO VI.—Delitos propios de los clérigos.—Clérigos percuores y sus distintas clases.—Excepciones.—Excesos de los obispos.—Excesos de los prelados inferiores.—Excesos de los súbditos.—Vida y honestidad de los clérigos.—Cohabitación de los clérigos con mujeres.—Casos en que es lícita.—Observación.—Si dichas disposiciones se extienden á los obispos.—Penas contra los clérigos concubenarios.—Delitos por abuso en el Sacramento de la penitencia.—Sgilo sacramental y penas contra el confesor que lo quebranta.—Solicitud <i>ad turpia</i> y su penalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |

|                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| —Obligación de denunciar al reo de este delito.—Falsa denuncia de solici-<br>tación <i>ad turpia</i> y su penalidad.—Abolición del cómplice <i>in peccato</i><br><i>turpi</i> ..... | 526 |
| APÉNDICES —Número 1.º— <i>Reducción de fiestas en España</i> .—Breve de 2<br>de Mayo de 1867 y R. O. de 26 de Junio de 1867.....                                                    | 535 |
| Real Decreto de 13 de Agosto de 1877.....                                                                                                                                           | 538 |
| Núm. 2.º— <i>Sobre reparación de Templos y edificios eclesiásticos</i> .—R. D. de<br>13 de Agosto de 1876.....                                                                      | 538 |
| Inst ucción de 28 de Mayo de 1877.....                                                                                                                                              | 544 |
| Circular de 31 de Julio de 1877.....                                                                                                                                                | 552 |
| Id. de 5 de Mayo de 1880.....                                                                                                                                                       | 553 |
| Id. de 13 de Diciembre de 1880.....                                                                                                                                                 | 554 |
| <i>Sobre vasos y ornamentos sagrados</i> .—R. O. de 3 de Septiembre de 1862..                                                                                                       | 566 |
| Núm. 3.º— <i>Cementerios</i> .— <i>Enterramiento en las Iglesias</i> .—R. O. de 12 de<br>Mayo de 1849.....                                                                          | 567 |
| R. O. de 26 de Julio de 1883.....                                                                                                                                                   | 568 |
| R. O. de 30 de Octubre de 1835 .....                                                                                                                                                | 569 |
| <i>Construcción de cementerios</i> .—Real Cédula de 3 de Abril de 1787.....                                                                                                         | 570 |
| R. O. de 8 de Agosto de 1830. . . . .                                                                                                                                               | 571 |
| R. O. de 26 de Noviembre de 1857.. . . .                                                                                                                                            | 571 |
| R. O. de 19 de Abril de 1862. . . . .                                                                                                                                               | 572 |
| R. O. de 2 de Octubre de 1876. . . . .                                                                                                                                              | 572 |
| R. O. de 17 de Febrero de 1886.. . . .                                                                                                                                              | 572 |
| R. O. de 22 de Abril de 1887. . . . .                                                                                                                                               | 574 |
| R. O. de 16 de Julio de 1888.. . . .                                                                                                                                                | 576 |
| <i>Sobre propiedad de Cementerios</i> .—Decisiones de 8 y 12 de Enero de 1884..                                                                                                     | 579 |
| <i>Exhumaciones y traslación de cadáveres</i> .—R. O. de 19 de Marzo de 1848..                                                                                                      | 581 |
| R. O. de 30 de Enero de 1851. . . . .                                                                                                                                               | 582 |
| R. O. de 31 de Agosto de 1853.. . . .                                                                                                                                               | 583 |
| R. O. de 19 de Junio de 1857. . . . .                                                                                                                                               | 583 |
| R. O. de 1.º de Agosto de 1863.. . . .                                                                                                                                              | 583 |
| R. O. de 6 de Febrero de 1866. . . . .                                                                                                                                              | 584 |
| R. O. de 11 de Agosto de 1866. . . . .                                                                                                                                              | 584 |
| R. O. de 6 de Agosto y 19 de Noviembre de 1867. . . . .                                                                                                                             | 584 |
| R. O. de 10 de Enero de 1876. . . . .                                                                                                                                               | 584 |
| Circu'ar de 11 de Noviembre de 1886. . . . .                                                                                                                                        | 585 |
| R. O. de 5 de Abril de 1889.. . . .                                                                                                                                                 | 585 |
| <i>Panteones particulares</i> .—R. O. de 12 de Mayo de 1849. . . . .                                                                                                                | 586 |
| R. O. de 13 de Julio de 1860.. . . .                                                                                                                                                | 587 |
| R. O. de 26 de Julio de 1883 que queda trascrita en este apéndice. . . . .                                                                                                          | 587 |

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R. C. de 3 de Enero de 1854 y R. O. de 19 de Abril de 1859. . . . .                                                                  | 587 |
| Dictamen del Consejo de Estado aprobado por Real orden de 19 de Abril de 1859.. . . .                                                | 587 |
| R. O. de 10 de Junio de 1886. . . . .                                                                                                | 589 |
| R. O. de 18 de Julio de 1887.. . . .                                                                                                 | 591 |
| <i>Instalación de carros fúnebres.</i> —R. O. de 2 de Julio de 1867. . . . .                                                         | 592 |
| <i>Exéquias de cuerpo presente.</i> —R. O. de 20 de Septiembre de 1849.. . . .                                                       | 596 |
| R. O. de 28 de Agosto de 1855.. . . .                                                                                                | 596 |
| R. O. de 13 de Febrero de 1857.. . . .                                                                                               | 597 |
| R. O. de 8 de Septiembre de 1865.. . . .                                                                                             | 597 |
| R. O. de 18 de Enero de 1867. . . . .                                                                                                | 598 |
| Circular de 1.º de Abril de 1875.. . . .                                                                                             | 598 |
| Circular de 28 de Mayo de 1884.. . . .                                                                                               | 598 |
| <i>Requisitos para el entierro de cadáveres.</i> —R. O. de 12 de Diciembre de 1853.. . . .                                           | 599 |
| R. O. de 22 de Abril de 1857. . . . .                                                                                                | 599 |
| R. O. de 1.º de Agosto de 1857.. . . .                                                                                               | 599 |
| Ley de 17 de Junio de 1870. . . . .                                                                                                  | 600 |
| Sentencia de 28 de Mayo de 1883. . . . .                                                                                             | 600 |
| <i>Construcción de cementerios para los que mueren fuera de la comunión de la Iglesia.</i> —R. O. de 13 de Noviembre de 1831.. . . . | 601 |
| Ley de 29 de Abril de 1855. . . . .                                                                                                  | 601 |
| R. O. de 16 de Julio de 1871 y 28 de Febrero de 1872. . . . .                                                                        | 602 |
| R. O. de 2 de Abril de 1883.. . . .                                                                                                  | 603 |
| <i>Depósito de Cadáveres.</i> —R. O. de 11 de Abril de 1856. . . . .                                                                 | 604 |
| R. O. de 19 de Septiembre de 1865. . . . .                                                                                           | 604 |
| R. O. de 28 de Abril de 1875. . . . .                                                                                                | 604 |
| Disposiciones del código penal.—Sentencia de 20 de Mayo de 1884. . . .                                                               | 606 |
| <i>Denegación de sepultura eclesiástica.</i> —Dictamen del Consejo de Estado y R. O. de 9 de Febrero de 1860. . . . .                | 607 |
| R. O. de 29 de Octubre de 1861. . . . .                                                                                              | 609 |
| R. O. de 25 de Noviembre de 1871.. . . .                                                                                             | 610 |
| R. O. de 30 de Mayo de 1878. . . . .                                                                                                 | 612 |
| R. O. de 3 de Enero de 1879.. . . .                                                                                                  | 616 |
| <i>Enterramiento civil de párvulos.</i> —R. O. de 8 de Noviembre de 1890. . . .                                                      | 616 |
| <i>Llaves de los cementerios.</i> —R. O. de 18 de Marzo de 1861. . . . .                                                             | 622 |
| R. O. de 22 de Enero de 1883. . . . .                                                                                                | 625 |
| Núm. 4.º— <i>Sobre Seminarios.</i> —R. O. de 21 de Mayo de 1852.. . . .                                                              | 626 |
| R. C. de 28 de Septiembre de 1852. . . . .                                                                                           | 628 |
| Plan de estudios para los seminarios conciliares de España. . . . .                                                                  | 628 |



|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Núm. 5.º— <i>Sobre obligaciones eclesiásticas.</i> —R. D. de 15 de Enero de 1875.                                   | 629 |
| Decreto de 28 de Enero de 1875.                                                                                     | 630 |
| <i>Contribución territorial y sobresueldos.</i>                                                                     | 632 |
| <i>Repartimientos municipales.</i> —Real O. de 16 de Julio de 1879.                                                 | 633 |
| <i>Contribución de consumos.</i> —Reales órdenes de 4 de Marzo de 1878.                                             | 635 |
| R. O. de 17 de Febrero de 1879.                                                                                     | 635 |
| <i>Cédulas personales.</i>                                                                                          | 635 |
| Núm. 6.º— <i>Sobre devolución de propiedades del Clero exceptuadas de la venta.</i> —Decreto de 9 de Enero de 1875. | 636 |
| R. D. de 4 de Enero de 1867.                                                                                        | 637 |
| Circular de 19 de Enero de 1867.                                                                                    | 638 |
| Ley de 21 de Diciembre de 1876.                                                                                     | 639 |
| Sentencia del Tribunal supremo de 29 de Octubre de 1872.                                                            | 640 |
| R. O. de 22 de Agosto de 1876.                                                                                      | 640 |
| Núm. 7.º— <i>Sobre provisión de Dignidades y prebendas eclesiásticas.</i> —R. D. de 25 de Julio de 1851.            | 641 |
| R. O. de 30 de Junio de 1863.                                                                                       | 646 |
| R. O. de 27 de Junio de 1867.                                                                                       | 647 |
| R. O. de 16 de Mayo de 1852.                                                                                        | 648 |
| R. D. de 14 de Mayo de 1852.                                                                                        | 649 |
| Reales decretos de 5 de Noviembre de 1852.                                                                          | 649 |
| R. O. de 21 de Julio de 1852.                                                                                       | 650 |
| R. D. de 6 de Diciembre de 1888.                                                                                    | 650 |
| <i>Término concedido para sacar el título de presentación.</i> —R. D. de 6 de Noviembre de 1861.                    | 652 |
| R. O. de 19 de Febrero de 1889.                                                                                     | 653 |
| <i>Sobre publicación en la Gaceta de las provisiones eclesiásticas.</i> —R. O. de 2 de Octubre de 1889.             | 654 |
| <i>Sobre expedición de títulos.</i> —Circulares de 18 de Agosto y 19 de Septiembre de 1889.                         | 654 |
| Núm. 8.º— <i>Clasificación de parroquias.</i> —R. D. de 21 de Noviembre de 1851.                                    | 655 |
| R. O. de 10 de Agosto de 1866.                                                                                      | 656 |
| <i>Sobre demarcación y arreglo parroquial.</i> —R. C. de 3 de Enero de 1854.                                        | 657 |
| <i>Colegiatus.</i> —R. O. de 18 de Octubre de 1852.                                                                 | 678 |
| <i>Sobre jubilación de los Párrocos.</i> —Circular de 20 de Febrero de 1889.                                        | 680 |
| R. O. de 30 de Abril de 1852.                                                                                       | 680 |
| R. O. de 13 de Octubre de 1864.                                                                                     | 682 |
| Núm. 9.º— <i>Sobre provisión de curatos de patronato laical.</i> —R. O. de 21 de Junio de 1852.                     | 683 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| R. O. de 15 de Octubre de 1862. . . . .                                                                 | 684 |
| R. O. de 28 de Mayo de 1864. . . . .                                                                    | 684 |
| R. D. de 21 (23) de Octubre de 1864. . . . .                                                            | 684 |
| Num. 10.— <i>Sobre capellanías y fundaciones pías.</i> —Convenio-Ley de 24<br>de Junio de 1867. . . . . | 687 |
| R. D. de 25 de Junio de 1867. . . . .                                                                   | 693 |
| R. O. de 7 de Enero de 1863. . . . .                                                                    | 705 |
| R. O. de 18 de Abril de 1868. . . . .                                                                   | 706 |
| R. O. de 27 de Julio de 1863. . . . .                                                                   | 706 |
| Núm. 11.—Modo de proceder en el examen de las personas solicitadas<br><i>ad turpia.</i> . . . .         | 708 |





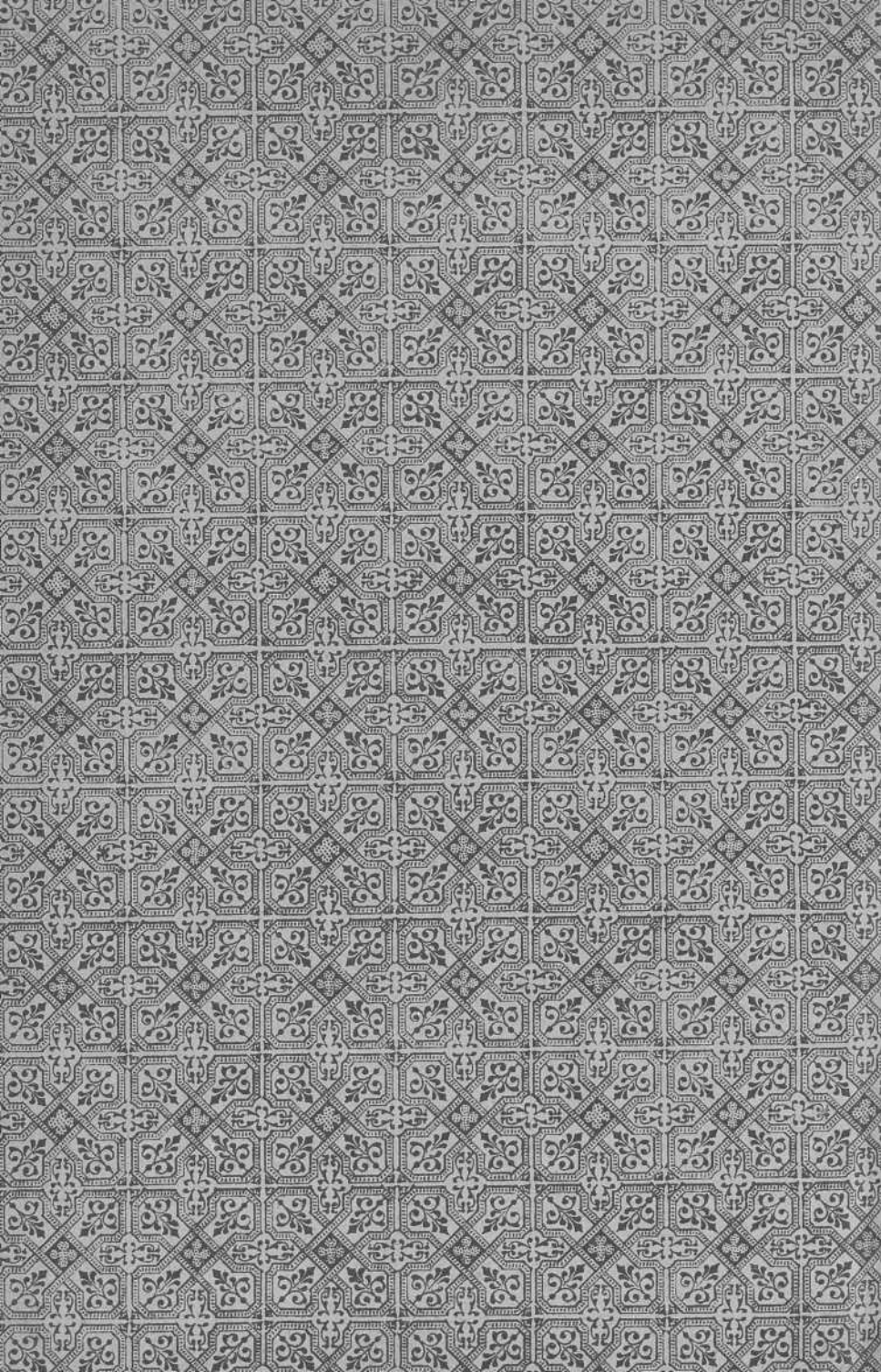


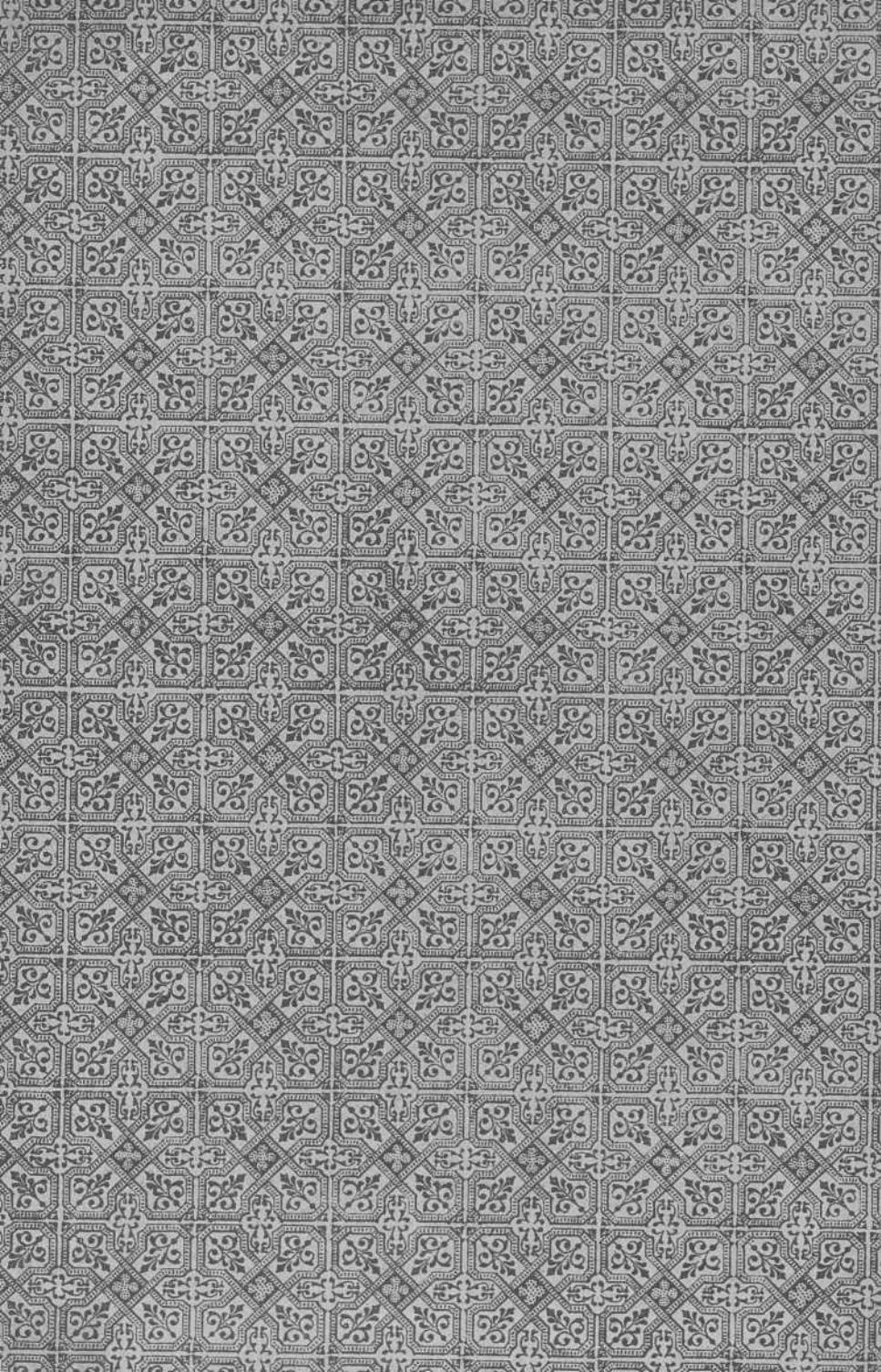


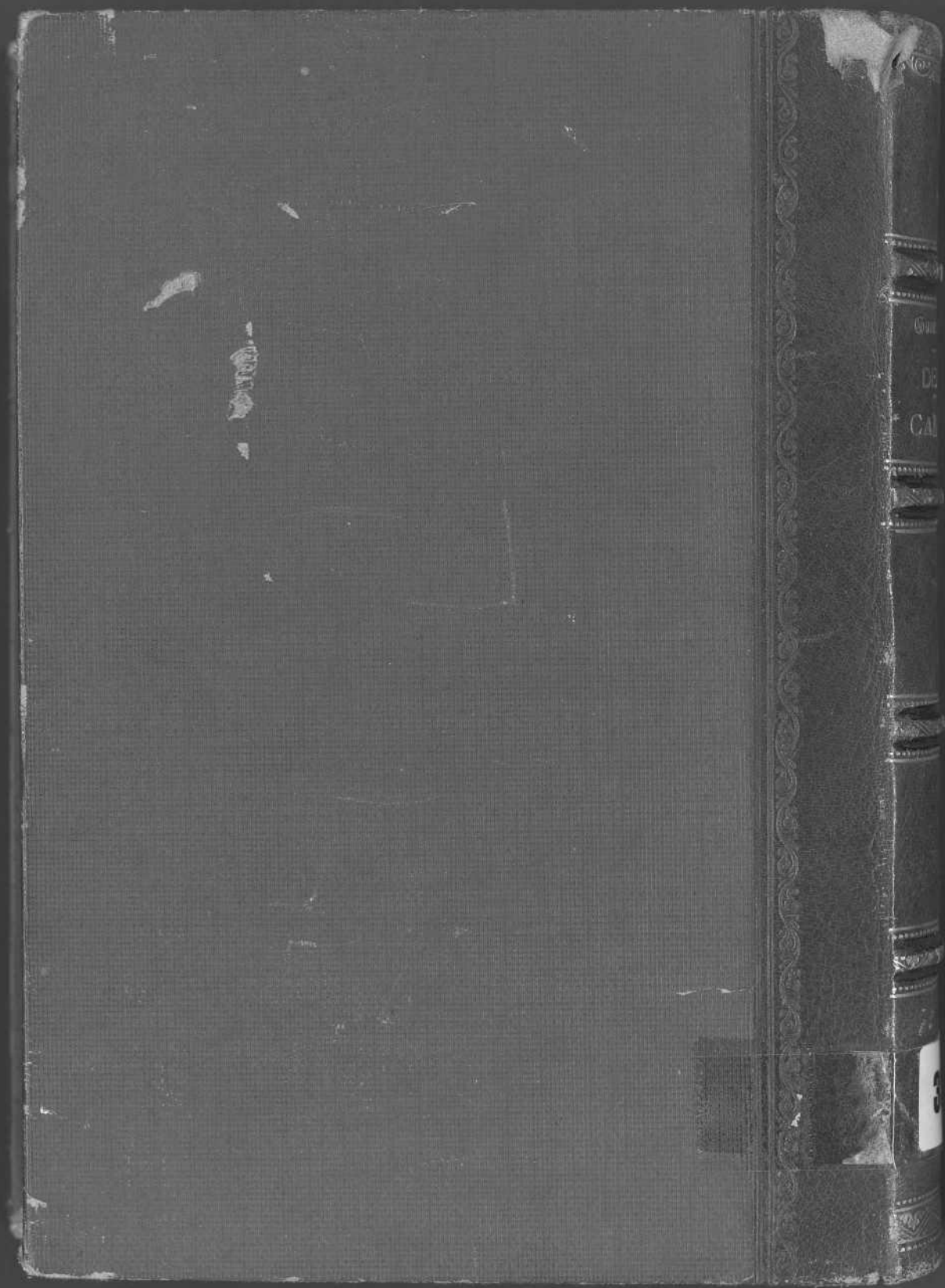














Gomez-Salazar  
DERECHO  
CANÔNICO

3

3568